EL AMPARO PENAL INDIRECTO

(SUSPENSIÓN)

RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ

DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. MAESTRO EN CIENCIAS JURÍDICAS PENALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. PROFESOR DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES, DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL Y DE OTRAS UNIVERSIDADES. JUEZ DE DISTRITO. MAGISTRADO DE CIRCUITO

EL AMPARO PENAL INDIRECTO

(SUSPENSIÓN)

SEXTA EDICIÓN ACTUALIZADA

EDITORIAL PORRÚA
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 15
MÉXICO, 2009

Primera edición, 1999

Derechos reservados © 2009, por
Ricardo OJEDA BOHÓRQUEZ
Aniceto Ortega núm. 1011
Col. Del Valle, Deleg. B. Juárez
03100 México, D. F.

Las características de esta edición son propiedad de
EDITORIAL PORRÚA, S. A. de C. V. — 8
Av. República Argentina, 15, 06020 México, D. F.

Queda hecho el depósito que marca la ley

ISBN 978–607–09–0313–7

IMPRESO EN MÉXICO
PRINTED IN MEXICO

A mis hijos EDGAR y JAVIER,
razón de mi existir.

A mi señor padre, Dn. Eusebio Ojeda
y a mis hermanos: Francisco, Víctor
y Felix Hugo, con el cariño de siempre.

PRESENTACIÓN A LA SEXTA EDICIÓN

Tener un libro es como tener un hijo. Pareciera un aforismo trillado; sin embargo, mucho hay de cierto, puesto que al hijo que no se le cuida y no se le educa acorde a su tiempo, es ignorado por la sociedad y nunca trasciende. Así el libro que no se vigila y no se actualiza, sin duda perderá interés y con el tiempo será un documento anacrónico.

Este libro es producto de las múltiples inquietudes que me causa mi labor como funcionario judicial y como catedrático de amparo. Está dirigido a todos los interesados en el amparo penal y especialmente a los alumnos de posgrado y cursos de especialización, a los abogados postulantes que día con día acuden en nombre de sus representados a los tribunales de amparo a solicitar la protección de la Justicia Federal por un asunto penal y a aquellos que inician su labor como secretarios de juzgados de Distrito y de tribunales de Circuito. No se abordan conceptos filosóficos de las instituciones jurídicas del juicio constitucional en general, sino aspectos angulares del juicio de amparo indirecto en materia penal que son de utilidad.

En la tercera edición de mi libro de Amparo Penal Indirecto. Suspensión, se revisó y se puso al día; se corrigieron errores mecanográficos y ortográficos, que las anteriores ediciones presentaban, pero lo más importante es que se actualiza con las últimas reformas a la Ley de Amparo de nueve de junio de dos mil y diecisiete de mayo de dos mil uno. También se ampliaron comentarios en temas importantes del amparo penal, como la procedencia del amparo pedido por el ofendido; el no ejercicio de la acción penal; el tercero perjudicado; la procedencia del juicio de amparo indirecto y la clasificación de los actos reclamables en nuestro juicio de garantías, la suspensión del acto reclamado en actos no privativos de la libertad personal; asimismo, después de comentar el tema correspondiente, se transcribieron las tesis por contradicción más actualizadas e importantes.

La quinta edición, contiene temas nuevos y actuales, como la suplencia de la queja tratándose del ofendido, los recursos de las autoridades judiciales, suspensión, entre otros, y desde luego se corrigieron errores advertidos en la edición anterior.

00_Presentación_01.p65 9 23/04/2013, 11:02

La sexta edición se actualiza comentando la supresión de la pena de muerte en México y poniendo algunas tesis novedosas.

No me extrañaría, que algunos se pregunten por qué se transcriben demasiadas tesis jurisprudenciales; sin embargo, consideré que habrá abogados lectores que tengan la facilidad de consultar el Internet o el disco compacto para localizar fácilmente tal o cual tema; pero, habrá otros lectores que por azares del destino aún no tienen las posibilidades económicas o de otra índole para consultar esos sofisticados sistemas de cómputo, por eso, en respeto a ellos me di a la tarea de seleccionar las tesis en cada tema concreto; pero además del comentario adicional de mi autoría respecto a determinadas cuestiones, encontraremos en esta obra los elementos necesarios para comentar un criterio y así aumentar la oportunidad de poder salir exitoso en un asunto, o bien en la realización de un proyecto de resolución o en la elaboración de un escrito de agravios, según la actividad del lector.

Reconozco que los razonamientos vertidos en las tesis no son propios, pero es necesario darlos a conocer, puesto que son derecho vigente que hay que observar, producto de la reflexión y desvelos constantes, aun cuando en algunos casos no compartamos el criterio que se vierte en ellas; por ende, al Poder Judicial de la Federación mi entrega y lealtad inquebrantables; a sus miembros, autores de los criterios vertidos en las tesis que muestro en mi libro, mi reconocimiento perenne y mi profunda admiración a su dedicación, honradez y entrega por la búsqueda de la justicia.

Mi agradecimiento a los lectores por la adquisición de este libro en sus anteriores ediciones, lo cual hizo posible esta nueva edición corregida y actualizada. La obra cuenta actualmente con un índice temático y de Tesis para su mejor manejo.

Sin egoísmos, intento aportar a todo abogado, lector de esta obra, mis experiencias en el Poder Judicial durante veinte años y los adquiridos en las aulas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto de Especialización Judicial, Instituto de la Defensoría Pública Federal y otras instituciones académicas, que me han permitido impartir la cátedra, precisamente de Amparo Penal.

Continuaré con mi esfuerzo, para que en la medida de lo posible esta obra continuamente se actualice y no caiga en desuso.

EL AUTOR

PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

> Los jueces federales no deben, pues, solamente, ser buenos ciudadanos, hombres instruidos y probos, cualidades necesarias a todos los magistrados, es preciso encontrar en ellos a verdaderos hombres de Estado; es necesario que sepan discernir el espíritu de su tiempo, afrontar los obstáculos que se pueden vencer, y apartarse de la corriente cuando el oleaje amenaza arrebatar junto con ellos la soberanía de la Unión y la obediencia debida a sus leyes.
>
> ALEXIS DE TOCQUEVILLE
> (La democracia en América)

Conocí al doctor Ricardo Ojeda Bohórquez durante la época en que fue Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuando colaboró conmigo en la ponencia de la que yo era titular. Pude advertir desde entonces que se trataba de una persona ávida de conocimiento, inquieta y siempre con la dinámica de la búsqueda constante para obtener su evolución, en los aspectos humano y profesional. Con base en la capacidad demostrada por el autor, se podía advertir que en un futuro no lejano tendría una actuación destacada en cualquier cargo que desempeñara dentro de la institución máxima de impartición de justicia, que es el Poder Judicial de la Federación.

Con una perseverancia permanente, Ricardo Ojeda Bohórquez conjuntó la preparación óptima en el desarrollo de su labor profesional y procuró la adquisición, desde el punto académico, hasta lograr el máximo grado que actual y merecidamente ostenta.

Ahora el doctor Ojeda Bohórquez me ha distinguido y encomendado la realización de un prólogo para la presente obra, labor que resulta honrosa pero a la vez llena de gran responsabilidad.

He leído con detenimiento la obra que acerca del amparo penal indirecto y de la suspensión en esta clase de juicio, se me encomienda prologar lo que me hace reflexionar que si bien la mayoría de los tra-

00_Prolo-Intro_02.p65 11 23/04/2013, 11:03

bajos jurídicos plantean la problemática de la norma legal, el presente libro se preocupa principalmente de señalar los medios de investigación y fijación de los hechos que posibilitarán la ulterior aplicación de la norma, tanto en la práctica de la impartición de justicia como en la forense; lo anterior sin dejar de examinar la dinámica y la cambiante realidad que el juicio de garantías ha tenido durante los últimos años en una etapa constante de evolución.

Con base en una preparación debida a una brillante trayectoria en la función jurisdiccional y en la investigación académica, que llevó al autor al grado de doctor en Derecho, se conjuntan y enlazan de manera congruente e inclusiva, los diversos temas que de una manera sistemática, ordenada y fácilmente comprensible, se desarrollan en la elaboración de este trabajo.

Es admirable la forma en que el actor nos traslada a los orígenes más remotos de la noble institución con la que contamos en México, que es el juicio de amparo y la técnica narrativa histórica resulta muy bien llevada a cabo, pues nos hace evocar aquellas figuras que se constituyeron como la piedra angular de esta gran construcción que es el juicio de garantías. Cómo olvidar a los grandes juristas que ha dado nuestro país: Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, Ignacio L. Vallarta y en términos generales, todos los que dignamente han portado la toga y el birrete en el desempeño de la delicada función de impartición de justicia.

Las diversas normas jurídicas que integran a la Ley de Amparo, son analizadas de manera brillante, clara y precisa por el autor, quien no sólo se contenta con el examen desde el punto de vista académico, sino que aúna a ello el ingrediente de la práctica profesional como impartidor de justicia, de la cual en una actitud libre de egoísmos, se convierte en factor de transmisión de esos conocimientos adquiridos a lo largo de su amplia y excelsa trayectoria profesional.

Qué más puede exigirse en los aspectos de objetividad, precisión y versatilidad en el desarrollo de esta obra, que lo que encontramos en su contenido, pues resulta patente que se convierta en una útil herramienta para los estudiantes, los profesionales en ejercicio forense y los impartidores de justicia, los que podrán ver con mayor claridad desde los pasos iniciales, requisitos y mejor presentación de una demanda de garantías, pasando por su admisión, desechamiento en su caso, trámite, apertura de incidente de suspensión, audiencias constitucional e incidental, recursos y diversos criterios para la resolución que determine el otorgamiento o bien, la negativa de la medida suspensional.

No conforme con presentar una obra que conjuga acertadamente los aspectos académico y de praxis jurisdiccional, el autor además de aportar los antecedentes legislativos, con esa dinámica inquietud que le

es característica, acude y procura su actualización hasta la etapa actual, en que incluye las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, correspondientes al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, mediante las cuales con sus adecuaciones se regresa al criterio tratado en el derecho penal relativo al cuerpo del delito; y las referentes al artículo 124 bis de la Ley de Amparo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero del mismo año, que busca mayor precisión en torno a la figura de la suspensión en el amparo indirecto penal, respecto de actos derivados de un procedimiento o causa de esa materia, e impone al juzgador la obligación de tomar en cuenta para la fijación del monto de la garantía con el fin de que surta efectos la medida suspensional, el advertir la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso, su situación económica y asegurarse de evitar la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia; disposiciones que son analizadas con una profundidad, metodología, concreción y objetividad por el autor, quien hace más comprensible su interpretación, cuando adiciona el elemento de objetividad al confrontar las normas nuevas con las que le precedieron.

La figura procesal del amparo indirecto, que se constituye en la suspensión, ha sido elevada justamente por la doctrina, por impartidores de justicia y en general, por todas las instituciones de un estado democrático, a una dimensión que realmente le corresponde, cuando desde la etapa inicial del siglo XX, se le consideró como un amparo provisional, entendido como aquel en que se otorga transitoriamente la protección federal a quien solicita el amparo, con la finalidad de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación para el quejoso, en caso de que una vez tramitado el juicio de garantías obtenga sentencia favorable a sus intereses; lo anterior, sin dejar de ponderar que debe haber el respeto primario al interés social o al orden público, para que proceda dicha medida suspensional.

Así entonces, una vez concluida la lectura de esta obra, puedo decir con satisfacción que me ha dejado una grata impresión y estoy seguro de que el autor, con la inquietud y dinámica que le es característica, seguirá en su afán de investigación, de evolución y de superación, para deleitarnos con nuevos trabajos de investigación, tanto o más brillantemente realizados como el presente.

HUMBERTO ROMÁN PALACIOS †
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

INTRODUCCIÓN

Retomando los pensamientos del maestro Arturo Serrano Robles, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteramos que el hombre es libre por naturaleza, tiene libertad de pensamiento, de trasladarse a donde él quiera, de tomar el destino que desee, de vestirse, comer, trabajar, ser como le convenga; sin embargo, esa libertad absoluta está restringida en virtud de que vive en sociedad, no se trata de un hombre solo como Robinson Crusoe, de ahí que su libertad termina donde empieza la de los demás. Por vivir en sociedad y existir esas restricciones que la misma impone, fue que nació el Estado y éste creó el Derecho, por medio del cual se regulan esas libertades. El Estado está representado por las autoridades que aplican el derecho para poder vivir en armonía y cuando éstas rebasan los límites que les señala la ley, y afectan la esfera de libertad que tiene el gobernado, es entonces cuando nace la necesidad de crear un procedimiento para proteger al gobernado de esos excesos de autoridad. En México a través del tiempo y de nuestras leyes fundamentales se creó el "juicio de amparo", y es al Poder Judicial de la Federación al que se le ha encomendado la noble tarea de vigilar que las autoridades actúen dentro del marco que la ley precisa. Nuestra Ley de Amparo contiene normas sui generis que rigen el procedimiento contra actos de las autoridades que quebrantan normas de naturaleza penal y conforman lo que se denomina Amparo en Materia Penal.

00_Prolo-Intro_02.p65 15 23/04/2013, 11:03

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL JUICIO DE AMPARO

SUMARIO: 1. Concepto de juicio de amparo en materia penal. 2. Principios fundamentales del juicio de amparo en materia penal. 2.1. Principio de instancia de parte agraviada. 2.2. Principio de agravio personal y directo. 2.3. Principio de relatividad de las sentencias de amparo. 2.4. Principio de definitividad. 2.5. Excepciones al principio de definitividad en materia penal. 2.6. Principio de estricto derecho. 2.7. Principio de suplencia de la queja deficiente. 3. Las partes en el juicio de amparo. 3.1. El agraviado. 3.2. La autoridad responsable. 3.3. Tercero perjudicado. 3.4. El Ministerio Público de la Federación. 3.4.1. Intervención del Ministerio Público como parte en el proceso penal y en el juicio de amparo. 4. Competencia en el amparo penal indirecto. 4.1. Competencia por territorio, materia, grado y turno. 4.1.1. Por territorio. 4.1.2. Por materia. 4.1.3. Por turno. 4.1.4. Por grado. 4.2. Competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito. 5. Principios que rigen en el juicio de amparo, relativos a la competencia.

1. CONCEPTO DE JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL

Expresar el concepto de "juicio de amparo" es reunir todos los elementos que lo componen en una proposición lógica; es necesario hacerlo, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma se hace precisamente a través de él.

Cabe citar algunas definiciones del juicio de garantías de distinguidos juristas, para posteriormente obtener una definición del amparo en materia penal.

El ilustre Vallarta definía al juicio de amparo, basado en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil ochocientos cincuenta y siete; él decía: "Es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para eximirse de la obediencia

01_Capítulo_01 Ojeda 2005.p65 1 23/04/2013, 11:36

de alguna ley o mandato de autoridad que ha invadido la esfera federal o local respectivamente." [1]

Para no abundar en el concepto de juicio de amparo en general y así entrar pronto en materia, considero que basta con transcribir la definición del maestro Alfonso Noriega; ésta exige verla con el comentario y crítica que al respecto de ella hace otro gran maestro, Ignacio Burgoa Orihuela.

Alfonso Noriega señala: "El Amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia, leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroactivos al momento de la violación." [2]

El maestro Burgoa critica a ese concepto textualmente: "Consideramos que la anterior concepción presenta cierta incongruencia pues en ella se sostiene, por una parte, que el Juicio de Amparo es un sistema de defensa de la Constitución y por la otra asienta que tiene como materia las leyes o actos de las autoridades que violen las garantías individuales, o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa. Dicha incongruencia estriba en que, si el Amparo sólo tuviese como finalidad la tutela de las garantías individuales y del sistema competencial entre las autoridades federales y las locales, no sería un medio de defensa de toda la Constitución sino de una porción de ella. Lo incongruente de la idea del maestro Noriega sobre la extensión de la procedencia y teleología del Amparo consiste en que este distinguido tratadista interpreta aisladamente el artículo 103 constitucional, sin vincularlo a la garantía de legalidad que estatuye el artículo 16 de nuestra Ley Suprema, a través de la cual, según lo hemos afirmado reiteradamente, se protege toda la Constitución contra todo acto de autoridad (lato sensu), que lesione la esfera jurídica de cualquier gobernado." [3]

De ahí que la definición del maestro Noriega se perfeccionaría si le agregamos "…que tiene como materia, normas o actos de la

[1] Burgoa Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 25ª ed., México, 1989, p. 178.

[2] Noriega, Alfonso, Lecciones de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1977, p. 56.

[3] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 181.

autoridad que contravengan la Constitución Federal, que violen las garantías individuales de los gobernados o implique una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa, en perjuicio de los propios gobernados…".

Ajustando esas definiciones respecto de los órganos competentes para conocer del medio de control constitucional, el concepto de normas en lugar de leyes, por ser estas últimas especie de aquéllas y refiriéndose a normas y actos de naturaleza penal, la definición correcta sería la siguiente:

El juicio de amparo en materia penal es un sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio sumario ante los órganos competentes conforme a la ley y que tiene como materia normas o actos de naturaleza penal de la autoridad, que contravengan la Constitución Federal, que violen las garantías individuales de los gobernados o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa, en perjuicio de los propios gobernados y que tiene como efectos la invalidez de los actos reclamados y la restitución del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroactivos al momento de la violación.

2. Principios fundamentales del juicio de amparo en materia penal

Nuestro juicio de amparo está regido por reglas generales que lo estructuran, algunas de las cuales sufren excepciones en atención a la naturaleza del acto reclamado, al quejoso y aun a los fines del propio juicio; a estas reglas generales se les denomina principios fundamentales del juicio de amparo.

Estos principios están establecidos en la Constitución Federal, de ahí que resulte difícil variarlos o modificarlos continuamente por el legislador ordinario, no obstante, no falta a quien le parezca fácil acabar con toda una tradición jurídica y proponer reformas no muy afortunadas.

Los principios fundamentales de referencia más destacados son los siguientes: I. El de iniciativa o instancia de parte; II. El de agravio personal y directo; III. El de relatividad de las sentencias; IV. El de definitividad del acto reclamado, y V. El de estricto derecho. En este capitulado comentaré brevemente cada uno de ellos con sus excepciones, sólo en materia penal.

2.1. Principio de instancia de parte agraviada

El juicio de amparo sólo puede promoverse y tramitarse a instancia de la parte a quien perjudique el acto o la norma, es decir, no opera de oficio, es necesario que lo solicite el agraviado.

Dicho principio está establecido básicamente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 4º de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:

> **Artículo 107 constitucional, fracción I.** "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."
>
> **Artículo 4º de la Ley de Amparo.** "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

Como se puede advertir de la lectura del artículo 4º, el juicio de garantías en materia penal lo puede promover el directamente agraviado; pero también su representante, su defensor tratándose de un acto criminal o, cualquier persona, aunque sea menor de edad, en tratándose de los actos señalados en el artículo 17; sin embargo, sólo puede seguirse por el agraviado, por el representante o el defensor (artículos 6º, 8º, 9º, 10, 15, 16 y 17 de la citada ley).

La regla general es que lo solicite el directamente agraviado; sin embargo, el amparo penal lo puede promover el defensor o el representante general para pleitos y cobranzas (incluyendo al apoderado), tratándose de una causa criminal, conforme al artículo 4º, o cualquier persona, inclusive un menor de edad, según se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

> **ARTÍCULO 17.—**"Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado…"

Como se puede advertir, en materia penal existe esta excepción a la regla, en los casos penales señalados en el artículo 17 citado. De esta manera cuando a un gobernado lo detienen ilegalmente, el amparo lo puede pedir en su favor cualquier persona, aún los menores de edad, sin la voluntad del agraviado y, el Juez de Distrito tiene la obligación de ordenar la suspensión del acto reclamado provisionalmente en el incidente de suspensión, por lo que hace a la privación ilegal de la libertad y de plano en los demás casos señalados en ese precepto; ordenando al actuario localice al detenido a fin de lograr su comparecencia para que ratifique la demanda dentro del término de tres días, a efecto de admitirla y tramitar el juicio. Si no la ratifica se tendrá por no presentada quedando sin efecto las providencias tomadas, como lo es la suspensión del acto. La tramitación del incidente en estos casos tiene su explicación en la interpretación a los artículos 18, 130, 123, fracción I, y 124.*

En este apartado, es pertinente establecer cuáles son esos actos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo.

En este apartado, es pertinente establecer cuáles son esos actos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo.

Peligro de privación de la vida. Obviamente que ahora sí se trata únicamente del acto arbitrario de una autoridad no judicial, no a la ordenada por algún tribunal, puesto que la Constitución Federal en su artículo 22 ya no permite la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y los reos por los delitos graves del orden militar. Si bien en la actualidad la Constitución y los Códigos Penales del orden común no establecen la pena de muerte, por circunstancias especiales podrían nuevamente establecerla, sin olvidar que el Código de Justicia Militar sí la contemplaba hasta el 18 de junio de 2008, en que se reformó el artículo 22 constitucional.

Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial. A lo que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, es al acto penal no judicial privativo de libertad, puede ser aquella que se está ejecutando, es decir, a lo presente, puesto que refiere a la imposibilidad del quejoso de solicitar el amparo, pero también puede ser la que se está por ejecutar, cuando la autoridad, sin orden judicial, pretenda detener a una persona escondida en su domicilio o en algún otro lugar al cual por razones legales no puede entrar y está en espera de que salga para su detención. Se trata pues de los ataques a la libertad personal (corporal, denominada anteriormente por la Constitución),

* En lo sucesivo, si no se menciona la ley, se entiende que es la ley de Amparo.

no se trata la libertad en sentido amplio (de expresión, de tránsito, etc.) sino aquella que es producto de una detención; tampoco es aquella que es consecuencia de una orden judicial, sino la que proviene de autoridades distintas a ella; Policía Judicial, Agente del Ministerio Público, Procurador General de Justicia, etcétera.

Deportación. Es la expulsión de un extranjero de determinado territorio. A lo que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo es a la expulsión de un extranjero del territorio mexicano.

El artículo 33 de la Constitución Federal establece que son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de esa propia Constitución. Este último precepto establece que son mexicanos por nacimiento, todas las personas que han nacido en territorio nacional y los hijos de padre o madre de nacionalidad mexicana, que nazcan en el extranjero; también son mexicanos los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas; los mexicanos por naturalización son los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización o los que contraigan matrimonio con mexicanos, siempre que su domicilio lo establezcan en territorio nacional.

Todo extranjero tiene derecho a las garantías que en su capítulo I otorga la Constitución Federal, así lo expresa el artículo 33 y obviamente el 1º también refiere a "todo individuo". De tal manera que todo extranjero en México puede pedir amparo.

Sin embargo, se presentan casos en que el extranjero está legalmente en el país o bien no lo está conforme a la Ley General de Población y sus reglamentos. En el primer caso el juicio de garantías es procedente y la suspensión también; en el segundo caso (art. 95 Ley General de Población), puede presentarse alguna causa de improcedencia por disposición legal o bien por cesación de efectos generada por la negativa de la suspensión atendiendo al orden público.

En ambos casos existe la siguiente excepción a la regla. La expulsión de extranjeros por motivos políticos cuya permanencia el Ejecutivo de la Unión juzgue inconveniente, conforme al artículo 33 constitucional, que elimina en estos casos el goce de las garantías individuales, al establecer que todo extranjero tiene derecho a las garantías constitucionales, haciendo una salvedad al señalar: "pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente". En este caso no procede el amparo, ya que la improcedencia del juicio de amparo emana de la propia Constitución y conforme al artículo 73, fracción XVIII, en relación con este dispositivo constitucional, la demanda de amparo debe desecharse por notoriamente

improcedente cuando así se advierta de la lectura de la demanda o bien, de no ser así, sobreseer en el juicio cuando durante el juicio aparezca la causal.

La deportación se ha considerado también como el envío de un sentenciado que compurga su condena de un Estado a otro; pero a este acto no es al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo.

El proyecto de la Ley de Amparo,[4] propuesto por la Comisión de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su artículo 14, contempla los mismos actos señalados en el actual precepto 17 de la Ley de Amparo, pero incluye otros, como la incomunicación, la extradición y la incorporación forzosa a las fuerzas armadas.

En los anteriores casos, un tercero podrá pedir el amparo a nombre de otro; pero será el juez quien debe determinar si procede o no admitir la demanda, si procede o no el amparo y la suspensión.

La extradición actualmente (2002) es un acto que sale de aquellos actos de excepción en materia penal y se rige por las reglas generales.

> SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto

[4] Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Coordinador General, Ministro Humberto Román Palacios, mayo de 2001.

en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo.

Precedentes: Contradicción de tesis 1/2006-PL. Entre las sustentadas por las anteriores Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 y 26 de marzo de 2007. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio A. Valls Hernández y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Enrique Luis Barraza Uribe y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 80/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Registro No. 170578

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Página: 15
Tesis: P./J. 80/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa

Destierro. Es la expulsión de un nacional de su territorio.

Se puede dar el caso de la extradición de un mexicano que haya cometido algún delito en otro país; pero este acto no es considerado como destierro a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es la expulsión arbitraria de un mexicano, pues aun cuando en el caso de extradición el gobernado se encuentra detenido no se encuentra imposibilitado para firmar una demanda de amparo, pues la privación de su libertad en todo caso obedece a un mandato judicial, la orden de detención con fines de extradición.

Por no ser la extradición un acto fuera del control judicial, opino que no debe considerarse como de aquellos de imposible reparación a que se refieren los artículos 17 y 123 de la actual Ley de Amparo; sin encontrar tampoco serio motivo para no incluirlo, pero, así todos los actos que contengan la privación de la libertad, aun la emanada de un acto judicial, ante la imposibilidad personal de pedir amparo, debieran estar considerados en esos preceptos, es que evidentemente no es lo que la norma pretende.

Actos prohibidos del artículo 22 constitucional. El precepto constitucional refiere "quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras

penas inusitadas y trascendentales". El artículo 17 de la Ley de Amparo refiere a "los actos" mas no a las penas formalmente impuestas por un tribunal, de tal manera que la mutilación, la infamia y los demás actos del artículo 22, pueden ser reclamados como actos emanados de autoridades distintas a los tribunales, como actos arbitrarios, inconstitucionales en sí mismos. Se entiende que las penas inusitadas y trascendentales necesariamente tienen que estar vinculadas a un acto formal de algún tribunal o procedimiento.

Mutilación. Consiste en cercenar algún miembro del cuerpo humano.

En algunos países islámicos, las mutilaciones, son experiencia vigente, como la de la mano en el ladrón; en México está estrictamente prohibida, sólo podría darse como un acto arbitrario de autoridad, que entraría al ámbito del delito.

La infamia. Debe consistir en la resolución de una autoridad, tendiente a imponer a un individuo, la deshonra, descrédito o la maldad ejercida en su contra.[5]

La marca. Es la imposición de una señal en el cuerpo humano. Pueden ser tatuajes, cicatrices o inclusive el corte de pelo para distinguir a un delincuente. En algunos pueblos oaxaqueños recuerdo que en las fiestas populares, hace algunos años, a los jóvenes o adolescentes que cometían algún robo, la autoridad municipal los rapaba para que "fueran identificados por la población y ésta tomara sus precauciones", además de los palos que les daban los "topiles" (policías) a los ebrios y escandalosos para hacer sentir su autoridad conferida por el agente municipal.

Azotes. Golpes dados con cualquier utensilio o con las extremidades del cuerpo humano.

Palos. Golpes dados a otro con un objeto contundente, palo, garrote o "bat"; como los propiciados por los mencionados "topiles".

Tormento de cualquier especie. Es el sufrimiento físico o moral causado a un individuo.

Puede considerarse como tormento la tortura. Este acto aún se da con frecuencia en México, como un acto arbitrario y de conocimiento general como hecho notorio, por parte de algunos policías del país.[6] La tortura era común para hacer confesar a los indiciados; la aplican de diferentes maneras, incluso le asignan un nombre, como "El tehuacanazo", consistente en agitar una botella de agua mineral

[5] Así lo definió el Magistrado Salvador Bravo Gómez, al resolver la queja 105/92, promovida por Alfredo Díaz Zavala, el 10 de febrero de 1993, en el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

[6] Ver el diario El Universal de 4 de abril de 2002. "Diseño oficial por la muerte de Vélez."

(Tehuacán) y aplicarlo en las fosas nasales; "El tamalito", envolver al indiciado en una cobija o lona y propiciarle patadas al bulto; "El buzo", meter la cabeza del indiciado en un recipiente de agua al grado de asfixia; etcétera.

Pena inusitada. La Suprema Corte ha interpretado que no solamente es la que no se usa, o ha dejado de usarse, sino como aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva, o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad.

INTERPRETACIÓN: La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido recientes criterios en relación a este tema y concretamente respecto a la "cadena perpetua".

> PENA INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL. Según el espíritu del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada. Así, por "pena inusitada", en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad.
>
> Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, J.126/2001, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 14.
>
> PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR. Según el artículo 22 de la Constitución General, el término inusitado, aplicado a una pena, no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo. En efecto, inusitado, gramaticalmente hablando, es lo no usado, y no podría concebirse que la Constitución hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enumera en el citado precepto, de todas aquellas que no se hubieran usado anteriormente, porque tal interpretación haría concluir que aquel precepto era una barrera para el progreso de la ciencia penal, ya que cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos, implicaría una aplicación de pena inusitada, lo cual no puede aceptarse. Por pena inusitada, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infame, excesiva; porque no corresponde

a los fines que persigue la penalidad; "porque no llena las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma 'ejemplar'; o bien aquellas penas que, aun cuando no hayan existido, sean de la misma naturaleza o índole de las citadas. En cuanto al concepto de trascendentales, no significa que las penas causen un mal más o menos grave en la persona del delincuente, sino que los efectos de la misma afecten a los parientes del condenado. Todo lo anterior se desprende en los términos expresos del concepto constitucional que se comenta, al establecer que quedan prohibidas las penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales".

Primera Wala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XL, pág. 2397.

DELINCUENCIA ORGANIZADA. ES INOPERANTE EL ARGUMENTO CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 4º, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA ESTABLECE UNA PENA INUSITADA Y TRASCENDENTAL Y, POR ENDE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Toda vez que el Juez, al dictar el auto de formal prisión, sólo debe tener en cuenta los elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, pero sin imponer pena alguna, se concluye que cuando en el juicio de amparo se reclama el auto de formal prisión en el que se cita, entre otros artículos, el artículo 4º, fracción I, inciso A), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la parte quejosa alega que éste viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por establecer una pena inusitada y trascendental, el concepto de violación relativo resulta inoperante porque en ese estado del proceso penal todavía no se da el supuesto de aplicación del mencionado precepto constitucional, en virtud de que no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no se sabe si el inculpado será declarado penalmente responsable de los delitos por los cuales se le acusó ni se le impondrá una pena, pues conforme a lo establecido en los artículos 20, apartado A, fracciones VI y VIII, y 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, las penas sólo pueden imponerse válidamente, por el Juez penal, precisamente en la sentencia con que culmine el proceso, de modo que como esta hipótesis de aplicación todavía no se presenta, resultan inoperantes los conceptos de violación respectivos.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judi-cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, P. XXX/2002, Página 9.

PENAS TRASCENDENTALES. CONCEPTO DE ELLAS. Se entiende por penas trascendentales aquellas que pueden afectar de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados, pero no las que derivan de posibles trastornos que puedan sufrir los familiares de los reos, con motivo de la reclusión de éstos, puesto que de adoptarse este criterio todas las penas resultarían trascendentales, porque es evidente que de una u otra forma, en mayor o menor grado, afectan a las personas allegadas a los sentenciados.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, 1a./J. 29/2002, Página 17.

PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Si por pena inusitada, en su acepción constitucional, se entiende aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines punitivos; ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel, infamante, excesiva y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, que es la readaptación social del delincuente. En efecto, la finalidad de la pena ha evolucionado a través del tiempo, pues ésta surgió en principio como una venganza privada en la que el ofendido aplicaba el castigo de acuerdo a la gravedad del daño causado; luego, como una venganza divina, pues el delito se consideraba como una ofensa a la divinidad; en el derecho griego, además, era intimidatoria; en el derecho romano constituyó una reacción pública, en razón de la ofensa; en el periodo científico, en Alemania, se estimó que el fin de la pena es una coacción psicológica, de donde surgió la teoría de la prevención general; para la escuela clásica la pena tiende a conservar el orden legal; para los positivistas la finalidad de la pena es un medio de defensa social; para la doctrina absolutista responde a la idea de justicia absoluta, esto es, que el bien merece el bien y que el mal merece el mal; para la doctrina relativa es el instrumento para asegurar la vida en sociedad; y la doctrina ecléctica propone que la pena pública puede tener los fines siguientes: reformar al delincuente, ser ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa. Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, segundo párrafo, después de analizar las iniciativas, dictámenes y discusiones de las reformas de que fue objeto, siempre ha sido como finalidad de la pena y garantía del sentenciado la readaptación social del delin-

cuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin; en consecuencia, si en la legislación mexicana no se encuentra prevista y sancionada como pena la cadena perpetua o prisión vitalicia, porque contraviene el fin último de la pena, que consiste en readaptar al delincuente para incorporarlo a la sociedad, es evidente que se trata de una pena inusitada, por tanto, es inconstitucional.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, P./J. 127/2001, Página 15. Contradicción de tesis 11/2001.

Esta tesis fue propuesta por el extraordinario Ministro Humberto Román Palacios; criterio que comparte el autor de este libro, ya que efectivamente la cadena perpetua es una pena que en México no se usa, precisamente por ilógica e inhumana. Sin embargo, fue superada por la que a continuación transcribo, por intereses de tipo político para nuestro país, con la que estoy en desacuerdo.

EXTRADICIÓN. LA PRISIÓN VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CUANDO AQUÉLLA SE SOLICITA ES INNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN. De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación. En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

Precedentes: Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora

Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 2/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, P./J.2/2006, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 5.

MULTA EXCESIVA Y CONFISCACIÓN DE BIENES. La Suprema Corte ha definido estos dos conceptos en las tesis que a continuación se transcriben.

MULTA EXCESIVA, CONCEPTO DE. Por multa excesiva debe considerarse, para que sea violatoria de garantías, aquella que supere el máximo del término que para la multa en un delito fije la ley, y además, que el acusado no sea considerado en la sentencia respectiva de una peligrosidad máxima.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 49, segunda parte, pág. 26.

MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL. Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, P./J. 7/95, Página 18.

CONFISCACIÓN. La pena de confiscación supone la condena de un delincuente, y como consecuencia de ella, la pérdida de todos sus bienes. No se considera confiscación, conforme a la Carta Federal, la aplicación completa o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de responsabilidad civil, resultante de la comisión de un delito o para el de impuestos y multas. No puede considerarse confiscación al gravamen pagadero con una pequeña parte de la producción.

Pleno, Quinta Época, Tomo II, parte HO, tesis 839, pág. 540.

CONFISCACIÓN Y DECOMISO. SUS DIFERENCIAS BÁSICAS. Confiscación y decomiso son dos figuras jurídicas afines, pero con características propias que las distinguen. Por la primera, debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional; en tanto que la última es aquella que se impone a título de sanción, por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que por sus características, representan un peligro para la sociedad.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, P. LXXIV/96, Página 55.

PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La acepción de pena inusitada a que se refiere el precepto constitucional citado se constriñe a tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar en el cuerpo del sentenciado un dolor o alteración física; b) Que sea excesiva en relación con el delito cometido; que no corresponda a la finalidad que persigue la pena, o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial o ejecutora su determinación al no estar prevista en la ley pena alguna exactamente aplicable al delito de que se trate; y, c) Que siendo utilizada en determinado lugar no lo sea ya en otros, por ser rechazada en la generalidad de los sistemas punitivos. En congruencia con lo anterior, se concluye que la pena de prisión vitalicia no se ubica en alguno de los referidos supuestos, ya que si bien inhibe la libertad locomotora del individuo, no tiene por objeto causar en su cuerpo un dolor o alteración física. En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se refiere a los casos concretos de punibilidad, en los que existe un parámetro para determinar si para ciertos delitos de igual categoría, el mismo sistema punitivo establece

penas diametralmente diferentes, por lo que la pena indicada en lo general no se ubica en tal hipótesis, al no poder existir en abstracto ese parámetro; además, la prisión corresponde a la finalidad de la pena, pues ha sido reconocida como adecuada para el restablecimiento del orden social, sin que la característica de vitalicia la haga perder esa correspondencia, pues dicho aspecto se relaciona con su aplicación, mas no con el tipo de pena de que se trata. Por otra parte, es importante señalar que el hecho de que la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad, dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada, toda vez que el Constituyente no estableció que la de prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado, ni que ese efecto tendría que alcanzarse con la aplicación de toda pena, pues de haber sido esa su intención lo habría plasmado expresamente.

Precedentes: Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2005-PL. Presidente Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio A. Valls Hernández, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 29 de noviembre de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Rafael Coello Cetina y Alberto Díaz Díaz.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 1/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Registro No. 175844

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Página: 6
Tesis: P./J. 1/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Penal

Ratificación de la demanda

Es necesario ratificar la demanda, con independencia de que se haya suscitado por escrito o por comparecencia, cuando la promovió un tercero, pues el artículo 17 citado así lo establece.

El juicio de amparo penal promovido por un tercero sólo es posible cuando el agraviado se encuentra imposibilitado para hacerlo, de ahí que de los casos señalados en el artículo 17 mencionado, la confiscación de bienes y la multa excesiva no deben reclamarse por un tercero por escrito o por comparecencia, salvo que se encuentre imposibilitado para hacerlo por estar privado de su libertad.

Además de los casos señalados en el artículo 17, el amparo penal lo puede promover el apoderado general para pleitos y cobranzas; así lo determinó la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis que se transcribe a continuación:

AMPARO PENAL, PUEDE PROMOVERLO EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. De una interpretación armónica de los artículos 4º, 16 y 17 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que conforme al texto del precepto primeramente citado, puede promover el juicio de garantías el propio agraviado o su representante, en favor de su poderdante, aun tratándose de actos que deriven de una causa criminal como lo puede ser una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial.

Primera Sala. Octava Época. Gaceta número 54, junio de 1992, pág. 13.

Este caso, no es una excepción al principio de instancia de parte agraviada, ya que la voluntad del agraviado se manifiesta a través del poder correspondiente. Sin embargo, cuando es el defensor quien lo pide sí constituye una excepción.

En efecto, cuando el defensor es el promovente hay que solicitar la certificación al juez de la causa (artículo 16) para los efectos del reconocimiento de su personalidad; para ello es necesario que conste fehacientemente su aceptación, expresa o tácita. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis por contradicción:

DEFENSOR. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE. PARA ELLO DEBE CONSTAR FEHACIENTEMENTE SU ACEPTACIÓN. YA SEA EXPRESA O TÁCITA. Entre la tesis registrada con el número TC011021-PEN del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito intitulada "DEFENSOR. ACEPTACIÓN DEL CARGO" y la tesis registrada con el número TC012083-PEN del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, intitulada "DEFENSOR. RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE. PARA ELLO ES NECESARIO ACEPTAR Y PROTESTAR DICHO CARGO", subyace una contradicción en el sentido de que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene que la aceptación del cargo del defensor no es un acto de tácito efecto en tanto el criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado es en el sentido de que si el defensor nombrado realiza actos de defensa, tales actos implican tácitamente aceptación del cargo. La contradicción debe resolverse en favor de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado, en virtud de que para que los actos de defensa en los juicios del orden criminal principien a tener vigencia, es indispensable que el defensor acepte el cargo, lo cual hará ante el órgano correspondiente tan pronto se le dé a conocer su designación. Esta aceptación deberá constar fehacientemente, ya sea de manera expresa o

> tácita para que surta sus efectos legales. Se llega a esta conclusión en virtud de que el defensor independientemente de tener la obligación de obrar por ministerio de ley, es el asesor técnico que presta sus servicios profesionales al acusado y como tal el artículo 2547 del Código Civil para el Distrito Federal, que contempla disposiciones relativas al contrato de mandato que se otorga para el ejercicio de una profesión, establece que su aceptación puede ser expresa (de palabra, por escrito o por signos inequívocos) o tácita, cuando el mandatario ejecuta los actos que le encomienda el mandante, sin que declare que acepta el mandato.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, agosto, tesis J/1a. 5/91, pág. 65.

Hay quienes opinan que el principio de instancia de parte agraviada no tiene excepciones; sin embargo, en mi concepto, en los casos ya señalados (amparo pedido por un tercero y el solicitado por el defensor), constituyen verdaderamente una excepción, pues en ambos casos la maquinaria judicial comienza su actividad sin la voluntad del quejoso, es decir, el juez de amparo dicta providencias diversas e incluso decreta la suspensión (provisional y definitiva o de oficio), conforme se establece en el artículo 18 de la Ley de la materia. En el caso del defensor, si se acredita su carácter de defensor, ni siquiera se necesita la ratificación de la demanda para continuar y concluir el juicio; en ambos casos, si la demanda es ratificada todas las providencias dictadas con anterioridad son válidas y respecto a ellas no existió la instancia de la parte agraviada, por eso es que resultan excepción a la regla.

Si un defensor promueve y no se acredita su personalidad como tal en el juicio de amparo, pero el quejoso ratifica la demanda, las actuaciones anteriores se convalidan y no se podrá sobreseer en el juicio aduciendo que el término de quince días (en los casos que así sea) corría a partir de que el quejoso ratificó la demanda, sino a partir de la presentación de la demanda por el defensor.[7]

2.2. Principio de agravio personal y directo

Este principio también se desprende de la fracción I del artículo 107 constitucional y del artículo 4º de la Ley de Amparo, antes transcritos. Atento al concepto del ilustre Ministro Juventino V. Castro, quien sostiene que el agravio es: "La causación de un perjuicio

[7] Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 21/2000, promovido por Alejandro Rafael Albrech, el 12 de junio de 2001.

a los derechos del quejoso";[8] debe entenderse que éste recae en la persona que se encuentre afectada por un acto de autoridad. Esa afectación debe ser real, objetiva y actual, no general, abstracta e incierta; además se puede concretizar en la persona o en su patrimonio. Si no existe agravio personal y directo en el titular de la acción del juicio constitucional, éste resulta improcedente (artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo).

En torno a este principio, es importante el interés jurídico del promovente. Cabe transcribir algunos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultan aplicables aun cuando el juicio sea en materia penal.

> DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 606, pág. 1042.

> FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acredita su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4º de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo.
>
> Informe de labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, pág. 136.

Estas tesis se refieren a la falta de firma del quejoso, cuya ausencia se advierte en el momento de dictar la sentencia. Se considera que en esta etapa, si no se convalidó esa omisión durante el proce-

[8] Castro, Juventino V., El Sistema del Derecho de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1979, p. 110.

dimiento, debe sobreseerse; pero, si la falta de firma se advierte al recibir la demanda, no debe desecharse por notoriamente improcedente (artículo 145), sino requerir para que se subsane la omisión conforme al precepto 146, pues el interés jurídico se advierte, pero por una omisión o descuido no aparece la firma; si no se cumple con el apercibimiento entonces sí sería notoria la falta de interés; sin embargo, en materia administrativa no se ha considerado así, lo que es muy discutible.

A este respecto se transcriben los siguientes criterios:

> DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia.
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, segunda parte-1, pág. 241.

> FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. NO QUEDA COMPRENDIDA EN LAS PREVENCIONES DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es verdad que el artículo 146 de la Ley de Amparo previene que cuando en la demanda de garantías hubiere alguna irregularidad; se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de dicha ley; no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado o no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia ley, el Juez de Distrito tiene la obligación de prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan o presente las copias, la falta de firma de la demanda no queda comprendida dentro de las prevenciones del citado artículo 146, por lo que no existe obligación del juez de otorgar al promovente el término de tres días para que subsane esa formalidad.
>
> TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 88, sexta parte, pág. 46.

DEMANDA DE AMPARO FIRMADA POR UN TERCERO, ADMITIDA, OBJETADA POSTERIORMENTE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA Y RATIFICADA POR LA INTERESADA. No obstante que la firma de una demanda de amparo resulte puesta por un tercero, si el Juez de Distrito del conocimiento la admite, aun cuando posteriormente se objete la autenticidad de la firma, no debe sobreseerse el juicio de garantías, si la quejosa indubitablemente la ratifica y el juez la tiene por ratificada, sin que se haya impugnado la resolución dictada a este último efecto, pues la firmeza del procedimiento es garantía de las partes que, con mayor razón, debe ser respetada por los tribunales de amparo.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 55, sexta parte, pág. 35.

Existen otras tesis respecto al interés jurídico:

INTERÉS JURÍDICO. QUÉ LO CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 4 º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma adjetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse en base a presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados.

Informe de labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, pág. 155.

INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4º, 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la

> sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados.
>
> Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, págs. 189-190.

En relación a esta última tesis, cabe hacer el comentario que a mi juicio es incorrecta, puesto que la falta de interés jurídico vulnera el principio de agravio personal y directo, mas no el de instancia de parte, dado que ésta se dio desde el momento en que se presentó la demanda, con independencia de que el promovente tenga o no interés jurídico en que el juicio prospere. Pero se advierte sin lugar a dudas que los tres principios (relatividad, instancia de parte y agravio personal y directo), están estrechamente relacionados y no pueden excluirse uno del otro.

2.3. Principio de relatividad de las sentencias de amparo

El principio de relatividad se encuentra establecido en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Federal, que a la letra dice:

> ARTÍCULO 107.—I. …
>
> II. "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare…"

Significa que la sentencia no afecta favorable o desfavorablemente más que a quienes fueron parte en el juicio y exclusivamente por lo que atañe a su relación con el acto reclamado y sólo con él.

De esta forma, se dice que la relatividad de la sentencia reviste dos aspectos, uno positivo y otro negativo:

1. Un aspecto positivo, por cuanto la sentencia sólo afectará a las partes en el juicio y al acto reclamado.

2. Un aspecto negativo, por cuanto la sentencia en nada afectará:

a) A quienes no hayan sido parte en el juicio de amparo, aun cuando su situación jurídica concreta sea igual a la de quienes sí tuvieron tal carácter, y

b) A leyes o actos de autoridad no reclamados en el juicio de amparo, aun cuando su naturaleza constitucional sea idéntica a la de los actos que sí fueron reclamados.

Cabe señalar que si bien, en una primera etapa, la jurisprudencia sustentó la tesis de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo no obligan a las autoridades que no hayan sido parte de ellos, "porque no se les ha pedido informes, ni se les ha dado la oportunidad de interponer recurso alguno", actualmente existe la tesis jurisprudencial que, además de atenuar el rigorismo del principio de relatividad, obedece al contenido del principio de congruencia. La tesis jurisprudencial indicada señala:

> EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, A ELLAS ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo.
>
> Semanario Judicial de la Federación. Apéndice 1917-1988, segunda parte, pág. 126.

El debate que suscita la inconveniencia del principio de relatividad no es novedoso, los efectos restrictivos de las sentencias de amparo ya eran motivo de polémica entre los estudiosos de la institución desde los albores de su nacimiento, tal como lo señalaba el maestro Emilio Rabasa cuando decía: "Lo que repugna a los intérpretes de la restricción es que, mientras el amparo contra actos sólo produce efecto en lo presente, porque anula un mandamiento aislado y especial, el amparo contra leyes surte efectos en el porvenir porque la ley sigue viviendo y obrando sobre la generalidad y queda sin valor sobre el

individuo amparado. No es, pues, la generalidad de la sentencia, sino la generalidad de sus efectos lo que se repugna, cuando precisamente el objeto y fin del juicio constitucional es que con la declaración particular, sus efectos sean todo lo general que sea dable, absolutamente generales si es posible; que un acto inconstitucional no vuelva a repetirse por ninguna autoridad en ningún tiempo; que una ley violatoria de la Constitución quede muerta para siempre y que los jueces, en acatamiento al artículo 126, no la vuelvan a aplicar nunca." (El artículo 126 es el correlativo del actual artículo 133 de la Constitución Federal).

Mas el problema no se apuntaba como ahora lo apreciamos, con anterioridad se tenía la firme convicción —según las invocaciones expresas de sus creadores— de que las leyes inconstitucionales caerían a golpes redoblados de la jurisprudencia. O como hacía tiempo afirmara en el mismo sentido Emilio Rabasa: "…en cualquier país en que haya respeto a la Ley Suprema y a los fallos del más alto Tribunal, en ambos casos el efecto de la sentencia habría sido el mismo: la muerte de la ley por desuso. Si el efecto de la sentencia contra leyes resulta general en favor del amparado, lejos de ser vicioso, cumple el objeto del juicio respecto a las personas, prepara su fin superior de mantener la constitución en respeto".[9]

Pero la realidad se contrapone a la intención expresada por Rabasa. En efecto, por más fuerza moral que pudiera contener la interpretación constitucional, producto de la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, las leyes declaradas inconstitucionales no han sido derogadas, ni mucho menos han caído en desuso y sí, en cambio, varios de sus preceptos se han reiterado en leyes creadas con posterioridad y que rigen situaciones similares.

No debemos pasar por alto las disposiciones contenidas en los artículos 22, 23 y 24 del Acta de Reformas de 1847, que literalmente expresaban:

> ARTÍCULO 22.—"Toda Ley de los Estados que ataquen la constitución a las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores."
>
> ARTÍCULO 23.—"Si dentro de un mes publicada una ley del Congreso General fuere reclamada como anticonstitucional, por el Presidente, de acuerdo con un Ministro, o por diez Diputados, o seis Senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que

[9] Rabasa, Emilio, El Artículo 14 y el Juicio Constitucional, 3ª ed., Ed. Porrúa, México, 1978, p. 205.

se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día darán su voto."

ARTÍCULO 24.—"En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertará la letra de la ley anulada y el de la constitución o la ley general a que se oponga."

El artículo 22 preveía una acción de nulidad de una ley que atacara a la Ley Fundamental. No se establecía un término para impugnar la inconstitucionalidad de una ley, lo que significaba que en cualquier momento que apareciera dicha irregularidad podía solicitarse la nulidad.

Cualquier persona que se percatara de la irregularidad constitucional, podía formular su petición al Congreso, pero su tramitación se iniciaría en la Cámara de Senadores, según lo disponía el artículo 22 citado.

La nulidad declarada por el Congreso respecto de una ley inconstitucional debería tener los mismos efectos que la propia ley, es decir, efectos generales, pues es un acto emitido por el órgano legislativo que anula una ley.

El artículo 23 concedía un mes, contado a partir de la publicación, para que los órganos mencionados en dicho precepto pudieran impugnar esa ley inconstitucional.

El conocimiento de dicho procedimiento se encomendaba a la Suprema Corte, la que sometía la ley al examen de las legislaturas para que, dentro de un término de tres meses y todas en un mismo día, emitieran su voto. En este caso, se encomienda la declaración de inconstitucionalidad a un órgano político constituido por las legislaturas de las entidades federativas.

De este modo, la Suprema Corte actuaba como órgano jurisdiccional; simplemente notificaría a las legislaturas que alguno de los órganos que señala el numeral citado había invocado la inconstitucionalidad de una ley y concedería un término para que las legislaturas, todas en un mismo día fijado también por la Suprema Corte, emitieran su voto, ésta entonces, publicaría el resultado y en caso de que se resolviera anular la ley, con su publicación quedaba anulada dicha disposición.

El caso previsto por el artículo 22 estaba sujeto a la misma tramitación y procedimiento para la creación de una ley, así que la intervención del particular era muy pobre, en tanto se limitaba a presentar

su solicitud al Congreso de la Unión y éste hacía suya la iniciativa para poder tramitarla y plantearla a la Cámara de Senadores.

En suma, Mariano Otero no consideraba prudente suprimir el principio de relatividad en tratándose de leyes, sin embargo, ideó una fórmula que incluía la derogación de leyes inconstitucionales, con los mismos efectos que la ley misma.

Desafortunadamente, lo único que pasó a disposiciones posteriores fue la parte última de la fórmula Otero que consagra la relatividad de la sentencia de amparo, es decir, el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, que textualmente disponía:

> "Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la Ley o del acto que la motivare." [10]

Así entonces, el juicio de amparo se nos presenta como un medio factible para lograr la invalidez de las leyes inconstitucionales.

Posibilidad que algunos doctrinarios condicionaban a la implantación de los efectos del amparo contra leyes, pues mientras subsista el principio de relatividad —como lo dice don Juventino V. Castro—, diremos que en nuestro medio jurídico en realidad "no hay amparo contra leyes inconstitucionales (sino) sólo hay amparo contra la aplicación de esas leyes a un caso concreto, planteado por un individuo que lo fue suficientemente vigilante para exigirlo a la justicia federal". [11]

Cabe hacer el comentario que se ha planteado la idea de que este principio debe suprimirse en el amparo contra normas; sin embargo, considero que aún en estos casos el principio debe subsistir, pues chocaría con los otros principios, el de instancia de parte y el de agravio personal y directo, además de que afectaría el principio de división de poderes. Tal vez lo más conveniente sería un procedimiento de anulación de la norma declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, vía ejecución de senten-

[10] Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 8ª ed., Ed. Porrúa, México, 1978, p. 475.

[11] Castro, Juventino V., Hacia el Amparo Evolucionado, p. 155.

cias, es decir, siguiendo el mismo procedimiento de ejecución que existe para los actos de aplicación.[12]

INTERPRETACIÓN

AMPARO, RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DEL. En el juicio de garantías sólo se resuelve lo concerniente a las personas que promueven el amparo, acordemente con el principio de relatividad de este medio de control de legalidad de los actos de las autoridades; y por ello, un motivo que beneficie a un inculpado, no puede favorecer a otro, si este otro no lo expresa formalmente en el juicio constitucional correspondiente.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación. 1917-1988, Segunda parte, Séptima Época, Primera Sala, pág. 13.

SENTENCIAS DE AMPARO, RELATIVIDAD DE LAS. El principio de relatividad de las sentencias de amparo, acogido por el artículo 76 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, evita que el Poder Judicial Federal invada funciones del Legislativo al declarar inconstitucional una ley, de esta manera, el principio en comento obliga al tribunal de amparo a emitir la declaración de inconstitucionalidad del acto en forma indirecta y en relación a los agravios que tal acto causa a un particular, sin ejercer una función que no le corresponde. En otras palabras, la ley que rige el acto reputado violatorio de garantías, no se anula por el órgano de control mediante una declaración general, sino que se invalida su aplicación en cada caso concreto, respecto de la autoridad que hubiese figurado como responsable y del individuo que haya solicitado la protección federal.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, segunda parte-2, Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 779.

AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio

[12] Este procedimiento lo propuse en mi tesis doctoral; titulada "Procedimiento para Declarar la Invalidez de las Normas Declaradas Inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Biblioteca de la UNAM. Ahora publicada por Ed. Porrúa, con el nombre de El Amparo Contra Normas con Efectos Generales.

no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, P./J. 112/99, Página 19.

LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, P./J. 89/97, Página 10.

El proyecto de la nueva Ley de Amparo, elaborado por la Comisión de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus artículos del 230 al 233, propone una fórmula por demás interesante para que una norma inconstitucional, declarada así por la jurisprudencia de la Corte, no siga aplicándose y tal declaración tenga efectos generales. Los preceptos textualmente establecen:

ARTÍCULO 230.—"Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo indirecto en revisión, establezca la jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se procederá a emitir la declaratoria general correspondiente."

ARTÍCULO 231.—"Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad o bien la de interpretación conforme."

ARTÍCULO 232.—"La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, y

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad o de interpretación conforme.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos, salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

ARTÍCULO 233.—"La declaratoria general de inconstitucionalidad o de la interpretación conforme se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiere publicado la norma respectiva para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles."

2.4. Principio de definitividad

El amparo es un juicio extraordinario, por tanto, resulta obvio que a él pueda acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. El principio de definitividad permite la procedencia del juicio de garantías únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, principio establecido en el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, al establecer que el amparo sólo procederá "…contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo…".

La Ley de Amparo reglamenta las disposiciones constitucionales y en el artículo 73 establece que el juicio de amparo es improcedente: "…XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley algún recurso

o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente…; XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado…; XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados…".

2.5. Excepciones al principio de definitividad en materia penal

El principio que se analiza tiene varias excepciones que hacen posible que a pesar de que carezca de definitividad el acto autoritario sea combatible en juicio constitucional. No hay obligación de agotar recurso alguno tratándose de materia penal, en los siguientes casos:

a) Cuando el acto reclamado "importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución" (mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). El artículo 22 Constitucional fue reformado por el D.O.F. el 18 de junio de 2008. Esta excepción al principio de definitividad está consagrada en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En tratándose de multas impuestas en sentencias de primera instancia deben agotarse los recursos, es decir, éstas no encuadran dentro del concepto de "multa excesiva" a que se refiere el artículo 22 constitucional. Al respecto se transcribe la siguiente tesis:

> RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL (SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA). La sentencia de primera instancia no constituye ninguno de los casos de excepción expresamente señalados en la segunda y última parte de la fracción XIII del artícu-lo 73, de la Ley de Amparo, la cual alude únicamente a los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, como son las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo CIII, pág. 2823.

OTRAS EXCEPCIONES

Las siguientes excepciones emanan de la jurisprudencia de la Suprema Corte, número 54, publicada en la página 30, del tomo II, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Apéndice de 1995, que data de la Quinta Época, que interpretó el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Federal y 37 de la Ley de Amparo, relativa a la jurisdicción concurrente, en el sentido de que si en estos casos los tribunales de apelación pueden conocer del amparo, por qué no evitar también el recurso y promover directamente el amparo.

> AUTO DE FORMAL PRISIÓN, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO. Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Primera Sala, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Tesis Jurisprudencial 54, pág. 30.

b) Auto de formal prisión

Cuando se reclama un auto de formal prisión tampoco es necesario agotar el recurso de apelación; sin embargo, si el quejoso ha optado por interponer tal recurso tendrá que esperar a que el mismo se resuelva y reclamar entonces en amparo la resolución que en él se pronuncie, si le es adversa, a menos que desista de ese recurso. Estas circunstancias que se contemplan en las siguientes tesis jurisprudenciales visibles con los números 49 y 47, de la Quinta Época, Primera Sala, del Apéndice 1917-1995, páginas 27 y 28, que respectivamente se transcriben.

> AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CUANDO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL. Es improcedente el amparo que se endereza contra el auto de formal prisión, si está pendiente de resolverse el recurso de apelación que contra de él se hizo valer.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Primera Sala, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Tesis Jurisprudencial 49, pág. 28.
>
> AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AMPARO CONTRA EL, CUANDO EL QUEJOSO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACIÓN. Si aparece que el acusado apeló del auto de formal prisión, y posteriormente desistió del recurso, esto no puede significar con-

formidad con dicha resolución, sino sólo quitar el obstáculo legal que haría improcedente el juicio de amparo, y por lo mismo, no hay razón alguna para considerar consentida la resolución reclamada, ni menos para, por este concepto, sobreseer en el juicio de garantías.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Primera Sala, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Tesis Jurisprudencial 47, pág. 27.

Tesis relacionadas a la citada jurisprudencia número 47 que a la letra dicen:

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AMPARO CONTRA EL. Si el quejoso acredita que presentó un escrito desistiéndose del recurso de apelación contra el auto de formal prisión, con anterioridad a la fecha en que promovió la demanda de amparo, aun cuando el auto mediante el cual se le tuvo por desistido se haya dictado cuando ya había sido promovido el amparo, debe considerarse que en el momento de presentar la demanda de garantías, ya no existía pendiente recurso alguno ante las autoridades del orden común que imposibilitaría entrar al estudio del fondo del asunto.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, septiembre de 1994, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tesis V.2o. 218 K, pág. 270.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AMPARO CONTRA EL. Si el quejoso se ha desistido del recurso de apelación que hizo valer contra el auto de formal prisión que reclama en amparo y tal desistimiento le fue admitido antes de que se celebrara en el amparo la audiencia de derecho, no procede sobreseer por improcedencia, sino que debe entrarse al estudio de la constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Octava Época, Primera Sala, pág. 2630.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CONTRA EL, CUANDO EL QUEJOSO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE INTERPUSO. Si antes de interponer el amparo contra el auto de formal prisión, el quejoso presentó un escrito desistiéndose del recurso de apelación que hizo valer contra dicho auto, es indudable que el acuerdo que debe recaer a lo solicitado por el agraviado, es el de tenerlo por desistido de la apelación, por lo que debe admitirse que en el caso no existe ya pendiente de resolución, ese recurso. Ahora bien, por el hecho de que el acusado haya desistido de la apelación interpuesta contra el auto de formal prisión, no puede considerarse que ha consentido totalmente dicho auto,

que atañe a la libertad individual; y en presencia de una manifestación positiva de la voluntad en sentido opuesto, al haberse promovido el amparo contra la misma resolución, debe concluirse que el quejoso estimó de mayor efectividad esta última vía, con relación al recurso ordinario de apelaciones, sin que tal cambio de criterio implique un consentimiento tácito del acto reclamado.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, Quinta Época, Primera Sala, pág. 2551.

No basta con la manifestación de apelar, sino debe admitirse el recurso. Al respecto existe la jurisprudencia por contradicción de tesis número 4/94, que puede consultarse en la página 13, de la Gaceta del Semanario, Octava Época, Primera Sala, que a la letra dice:

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la Ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la improcedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquellas que justifiquen su admisión para su trámite.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala Octava Época, Tomo 83, noviembre de 1994, tesis 1a./J.19/94, pág. 13.

c) Auto de sujeción a proceso

El auto de sujeción a proceso no es un acto privativo de la libertad personal, pues sólo constriñe al procesado a seguir un proceso en libertad, debido a que el delito cometido no merece pena privativa de libertad o bien es alternativa; en todo caso es un acto de molestia restrictivo de la libertad general, pero no privativo de la libertad

personal; por lo que la excepción no obedece a la privación de esa libertad, sino a que es un acto que admite la jurisdicción concurrente que generó la tesis de jurisprudencia 54, publicada en la página 30, tomo II, Primera Sala, del Apéndice 1995, transcrita en páginas anteriores, que señala que: "Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación."

Por esa razón, en cuanto al auto de sujeción a proceso, la Suprema Corte ha determinado en contradicción de tesis, que es un caso de excepción al principio que se comenta.

INTERPRETACIÓN

AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONGA EN SU CONTRA. A las excepciones al principio de definitividad específicamente previstas por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistentes en que no existe obligación de agotar recursos, dentro del procedimiento, tratándose de terceros extraños y de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o de cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución de la República, debe añadirse la diversa excepción que se desprende de la fracción XII del artículo 107 de la Carta Magna reproducida, en esencia, en el artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que "la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponda", pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeción a proceso no es necesario que se agote el recurso de apelación, pues tanto ese auto como el de formal prisión se encuentran regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no difieren, en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del proceso que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos señalados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para hacer probable la responsabilidad del inculpado. La única diferencia existente entre ambas determinaciones radica en que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización. Independientemente de ello, la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XII del artículo 107 de la Norma Fundamental, no supedita su procedencia al hecho de que el acto

reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la hace depender de cualquiera de las garantías tuteladas por los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia constitución.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, agosto de 1991, Octava Época, Primera Sala, tesis 1a./J.4/91, pág. 64.

Como la Jurisprudencia refiere a todas las garantías que otorga el artículo 19 constitucional, que a la letra dice:

ARTÍCULO 19.—"Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.

Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del interesado, en la forma que señala la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades."

Así, podemos afirmar que también se daría la excepción para los casos de negativa a la prórroga del plazo de setenta y dos horas para el dictado del auto de formal prisión y prolongación de la detención respecto al plazo constitucional.

El artículo 19 constitucional establece que si no se dicta el auto de formal prisión en el plazo constitucional de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas en su caso, el carcelero no deberá dejar en libertad al inculpado si no transcurren las tres horas conta-

das a partir del requerimiento de la resolución correspondiente y el juez de amparo al dictar el acuerdo de suspensión tendrá el cuidado de observar tal situación.

Hace algunos años, por mil novecientos ochenta, sin recordar exactamente los hechos, se dio un caso como éste. En el juzgado de Naucalpan (único en ese tiempo) estaba el Juez de Distrito de vacaciones y la encargada del despacho lo era la primera secretaria; en ese tiempo el que escribe era secretario encargado de la sección de proceso penal; la Procuraduría General de la República consignó a unas personas dueñas de una fábrica de aceite de automotores y, por razón del desahogo de pruebas ofrecidas por el defensor y las cargas de trabajo abundantes en ese juzgado, nos retrasamos en el dictado de la resolución de término constitucional, mismo que inició a las diez horas de un lunes (si no mal recuerdo), de tal manera que vencido el plazo, se presentó el abogado defensor en compañía de un fedatario a exigir que se le mostrara la resolución correspondiente; se le indicó que el expediente lo llevaba el actuario para notificar el auto de formal prisión al Director del reclusorio, en Barrientos (Municipio de Tlalnepantla, Estado de México), lugar distante del juzgado; el auto de formal prisión había sido dictado en tiempo; el abogado, maestro universitario de fama, notoriamente molesto manifestó que había promovido un amparo el día anterior en el Juzgado de Distrito de Nezahualcóyotl, Estado de México y que iban a dejar en libertad a sus clientes porque así estaba ordenado en el auto de suspensión; el notificador informó que el Director del reclusorio lo hizo esperar y que le recibió la copia del auto de formal prisión cuarenta minutos después de vencido el plazo y que le había manifestado "lo siento mucho, ya dejé en libertad a los procesados por no mandarme a tiempo la resolución". De inmediato se levantaron las actas correspondientes en el Juzgado y en la agencia del Ministerio Público Federal de ese lugar. Al día siguiente en un diario nacional de mayor circulación apareció en toda una plana un encabezado que decía: "La Constitución está de fiesta." Lo que se le olvidó al Juez de Distrito de Nezahualcóyotl que concedió la suspensión, al abogado que puso su empeño por obtener la libertad de sus clientes a costa de todo y al Director del Reclusorio, fue que tenían previamente que cumplir con el requerimiento al juez del proceso para que remitiera en un plazo de tres horas la copia del término constitucional para poder dejar en libertad a los procesados, tal como lo disponía en aquel entonces la última parte del artículo 107 constitucional, disposición que posteriormente, por reforma de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se trasladó al artículo 19. El proceso

se suspendió y debido a que la fábrica donde presumiblemente se adulteraban aceites se aseguró por órdenes del juez del proceso, los procesados decidieron cambiar de abogado y regresar por su propio pie al reclusorio, dándose cuenta que la Justicia podía ser burlada, pero nunca exterminada. Si hubiera tenido dinero para pagar una nota pequeña en un diario nacional, en aquel amargo momento para los que vivimos de cerca esa experiencia, hubiera pedido que se le pusiera el título: "Hoy triunfó la impunidad. La Constitución está lastimada."

d) Tratándose del artículo 16 constitucional, también constituyen excepciones a la regla los siguientes actos:

1. Orden de aprehensión.
2. Orden de reaprehensión.

La orden de aprehensión, por disposición de la tesis 54 ya comentada.

Tratándose de orden de reaprehensión, tampoco opera el principio en cuestión, pues así lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se transcribe:

> PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN. La orden de reaprehensión y su ejecución, independientemente de que sean resultado de la conducta contumaz del inculpado a cumplir con las obligaciones contraídas con el juez que le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución, afectan su libertad personal e integridad corporal, y si bien el artículo 303, fracción IV, del Código Penal del Estado de Veracruz, establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoquen la libertad provisional, no es necesario agotar ese medio de impugnación antes de acudir al amparo, porque como ese dispositivo admite la alzada sólo en el efecto devolutivo, no suspende la orden de recaptura, la cual puede ser ejecutada sin dar oportunidad a examinar su constitucionalidad. Por tanto, como esos casos restringen la libertad o pueden poner en peligro la integridad física del procesado, encuadran en los casos de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, previsto en el último párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de su ley reglamentaria, en concordancia con el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, por ser cuestiones afines a la garantía que se consagra en este precepto.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, tesis 1ª /J 27/97, pág. 81.

Entre los actos del artículo 16, también se comprende la orden de comparecencia. Sin embargo, nuestro más alto Tribunal había sostenido que no constituyera excepción a la regla, en el siguiente criterio:

> COMPARECENCIA. ORDEN DE, PARA SU IMPUGNACIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS. El principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Así encontramos que respecto de los actos de tribunales dicho principio se encuentra contenido en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de algún tribunal sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda; de lo anterior se desprende que si las leyes procesales establecen recursos ordinarios o medios ordinarios de defensa que pudieran proceder en contra de las órdenes de comparecencia libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial a fin de que rinda su declaración preparatoria tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien para los que se prevé pena alternativa, aquéllas deben ser agotadas antes de acudir al juicio constitucional. En cuanto a la posibilidad de que tales órdenes de comparecencia se guarden en sigilo, de tal suerte que al no ser notificadas se impida a su destinatario que se defienda en contra de ellas, simplemente es una apreciación subjetiva, ya que de conformidad con la técnica procesal adecuada el juez debe ordenar la comparecencia del inculpado y hacérsela saber personalmente con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante él a rendir su declaración preparatoria y solamente en caso de desobediencia podrá ordenarse a la policía judicial que haga acatar la determinación de dicho juez. En las relacionadas condiciones no puede afirmarse que las órdenes de comparecencia a las que se refieren las ejecutorias de los Tribunales Colegiados sean actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados; por otra parte, el principio de definitividad sólo puede eximirse en su cumplimiento cuando expresamente la Constitución Política, la Ley de Amparo o la Jurisprudencia así lo permitan, y si bien es cierto que tratándose de actos que necesariamente concluirán con la privación de la libertad de los particulares, como lo es la orden de aprehensión, la jurisprudencia ha permitido que proceda de inmediato el juicio de

garantías sin el previo agotamiento de los recursos ordinarios, la hipótesis analizada es diferente ya que se trata precisamente de casos en los cuales no opera la prisión preventiva por lo cual lo único que se pretende es atender a una diligencia fundamental del procedimiento penal como lo es la declaración preparatoria, garantizándose que el procesado no será afectado en su libertad dada la penalidad del delito que se le atribuye.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primera Sala, Tomo 54, junio de 1992, tesis J/1a. 2/92, pág. 11.

COMENTARIO: Por lógica jurídica, no deben agotarse los recursos en estos casos, pues cuando se dicta una orden de comparecencia o de aprehensión el procedimiento penal se suspende y por regla general los interesados no se enteran de su libramiento; los artículos 418, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y 367, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen que tales resoluciones no son apelables; y conforme al artículo 104 del Código Federal mencionado, tales resoluciones se notificarán únicamente al Ministerio Público para su ejecución. En suma, en mi concepto debería ser una excepción al principio de definitividad.

Sin embargo, esta tesis ha sido superada por disposición expresa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria pronunciada en la contradicción de tesis número 37/95, de la que emanó la diversa número 6/96 que a continuación se transcribe:

"…QUINTO.—Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que debe subsistir el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

En efecto, entre los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, se encuentra el de 'señalar el acto que de cada autoridad se reclame' —artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo.

El acto reclamado constituye el hecho que el accionante del juicio de amparo atribuye a la autoridad responsable tildándolo violatorio de las garantías individuales. Tal imputación contiene una afirmación de hecho y otra de derecho. La primera consiste en el acto que se reclama a la autoridad, el cual, de ser negado, corresponde al quejoso demostrar su existencia. La segunda son los razonamientos lógico jurídicos en los que se sostiene que el acto reclamado es violatorio de la Carta Magna.

Respecto del acto imputado, la autoridad responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, deberá rendir su informe

con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio.

El artículo 79 de la Ley de Amparo faculta al juzgador, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, a examinar en su conjunto conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes.

Los preceptos transcritos armonizan con la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, pues con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, facultan al juzgador para examinar en su conjunto la demanda de amparo a fin de atender preferentemente a lo que en ella se quiso decir.

Ahora bien, en los juicios de amparo materia de la contradicción se señaló en el apartado relativo de la demanda como acto reclamado la orden de aprehensión y, al emitir la autoridad responsable su informe justificado se demostró la existencia de una orden de comparecencia.

Lo anterior no es obstáculo para examinar la constitucionali-dad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial, si se tiene en cuenta que: a) Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b) Las dos son libradas por un juez, c) Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d) Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado.

En esa virtud, independientemente de la denominación que por error o ignorancia el peticionario de garantías le dé al acto con el cual se le pretenda molestar en su libertad, el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe anali-zar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para así obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo —que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar, pues sería contrario a los más elementales principios de éstos— de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda.

Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías.

Por las consideraciones anteriores, se estima que en el caso debe prevalecer el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis que sostiene, empero adecuada con las consideraciones de esta ejecutoria, por lo que debe quedar en los siguientes términos:

ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a) Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b) Las dos son libradas por un juez, c) Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d) Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la auto-ridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir a error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Dado que en el presente asunto se sostiene que aun cuando el quejoso señale erróneamente a la orden de comparecencia como de aprehensión, debe examinarse la constitucionalidad de aquélla, la actual integración de esta Primera Sala tiene por superado el criterio sostenido en la jurisprudencia 2/92, publicada en la página 11

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 54, correspondiente al mes de junio de 1992, cuyo tenor literal dice:

'COMPARECENCIA. ORDEN DE, PARA SU IMPUGNACIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS'…"

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, Página 196.

ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer,

acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social.

Contradicción de tesis 104/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 28 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa Rangel.

Registro No. 172458
Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 430
Tesis: 1a./J. 35/2007
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

Me parece un error lamentable el dejar sin efectos tesis de jurisprudencia en el cuerpo de una ejecutoria y no en la nueva tesis que se publica, emanada de esa ejecutoria. Además de que son temas distintos, uno de suplencia de la queja y otro de definitividad; pero desde luego la razón de lo anterior es otra, que ambos actos, aprehensión y comparecencia, son privativos de la libertad personal, cuando no es así, pues la primera puede afectar y privar de la libertad, en cambio la segunda no, pues ésta afectara y privará al gobernado de otras libertades, pero no de la personal.

e) Tampoco hay que agotar recursos, cuando se trata de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, a favor del reo, como lo es la negativa de la libertad provisional bajo caución, la tardanza en los procesos, etcétera.

Desde luego estas excepciones emanan de la jurisprudencia 57, antes transcrita, y no opera a favor del ofendido, aun cuando ya fue adicionado al inciso B) en ese artículo 20 constitucional.

f) Por falta de fundamentación en el acto reclamado, por parte de autoridades distintas de las judiciales (actos del Ministerio Público, por ejemplo). No resulta discutible la determinación de que no hay obligación de agotar recurso alguno si el acto reclamado carece de fundamentación, pues la fracción XV del artículo 73 fue objeto de una adición en las reformas que entraron en vigor el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en los siguientes términos:

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."

Se refiere a una total y absoluta falta de fundamentación, no a una indebida o mala fundamentación. De ahí que toda resolución de naturaleza penal deba contener su fundamento imprescindiblemente.

g) Si se reclama la ley penal en que se sustenta el acto de autoridad. Así lo establece el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, al expresar: "…cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el intere-sado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad."

h) Tratándose de la orden de arresto, conforme a la tesis de jurispudencia por contradicción 17/1998, que se transcribe:

> ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. No obsta para la procedencia del amparo el hecho de que no se agote el medio de defensa ordinario previsto en el ordenamiento respectivo, en contra del auto en el que se manda apercibir al quejoso con la imposición de un arresto específico como medida de apremio, porque siendo el auto que se reclama de carácter concreto e individualizado, el agraviado se halla en riesgo inminente de privación de su libertad personal, respecto de la cual opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; máxime que en ningún medio ordinario de defensa pueden plantearse cuestiones de constitucionalidad.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo VII, febrero de 1998, tesis P./J. 17/98, pág. 6.
>
> ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDENCIA DEL AMPARO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS. Aunque la ley procesal civil establezca algún recurso o medio de defensa legal para impugnar la resolución que manda hacer efectivo un arresto impuesto al quejoso, como medida de apremio, no procede sobreseer en el juicio de garantías en que se señala esta resolución como acto reclamado, aun cuando previamente a su interposición no se agoten tales recursos o medios de defensa, ya que en primer lugar, si bien es cierto que dicho acto no es de naturaleza penal, su efecto es la privación de la libertad,

garantía que tutela primordialmente el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en segundo término, a pesar de que el quejoso agote los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en la ley que rija el acto, antes de promover el juicio de garantías, el arresto se ejecuta privándolo de su libertad personal, pues tal actuación no suspende dicha ejecución. Por tanto, atendiendo a que donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de Derecho, queda a opción del quejoso, el de combatir el arresto decretado en su contra a tra-vés del juicio de amparo o de agotar previamente los recursos esta-blecidos por la ley.

Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 3a./J. 36/90, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Página 190.

A continuación, se transcriben las siguientes tesis por contradicción por su importancia:

DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal… que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley…" Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se

prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 3/2001, pág. 8.

IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías, y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no

implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 144/2000, pág. 15.

DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo: XII, Julio de 2000, Tesis: 2a. LVI/2000, pág. 156.

REENVÍO. EL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO, HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE SENTENCIAS PENALES DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCAN LAS DE PRIMER GRADO. El artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, dispone que cuando el tribunal de alzada modifique la resolución combatida, debe reenviar los autos al Juez de primer grado, para que éste dicte otra en sustitución de aquélla. En consecuencia, si el juicio de amparo directo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, establecido taxativamente en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 158 en relación con el 44 de la Ley de Amparo y, 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede en materia penal en contra de sentencias definitivas dictadas por los tribunales comunes y si, por otra parte, el artículo 46 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, dispone que son resoluciones definitivas las que deciden el juicio en lo principal o que, sin decidirlo, lo dan por concluido y en contra de las cuales no exista ningún recurso ordinario mediante el que puedan ser modificadas o revocadas, debe concluirse que en contra de las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia que modifican las resoluciones absolutorias de los Jueces de primer grado y, en cumplimiento del referido artículo 194 del código adjetivo penal para el Estado de Tabasco, reenvían los autos a los inferiores para que, con plenitud de jurisdicción emitan un nuevo fallo, resulta improcedente el juicio de amparo directo, en virtud de que no se ha cumplido con el principio de definitividad requerido, ya que la autoridad común no ha juzgado a cabalidad la acción planteada por el Ministerio Público, de manera que quede debidamente sentada la litis constitucional y sea ahora competencia de los tribunales federales el conocimiento del negocio; y, a mayor abundamiento, en contra del nuevo fallo que llegue a dictarse, queda expedita la impugnación ordinaria con la cual podrá ser confirmado, modificado o en su caso revocado.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Tesis: 1a./J. 74/2001, Página 20.

INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESTE ÚLTIMO CUANDO SE ENCUENTRE EN TRÁMITE DICHO INCIDENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE OAXACA, NUEVO LEÓN Y PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 294 del Código

de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, 482 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 378 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, el incidente de libertad por desvanecimiento de datos es un procedimiento encaminado a determinar ante los tribunales ordinarios si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión anulan o destruyen, de manera directa y plena, las pruebas que sirvieron de base para dictar dicho auto. Ahora bien, tal incidente se distingue del juicio de amparo indirecto que se promueve en contra del auto de formal prisión, porque en este último sólo se plantea un nuevo examen de las constancias procesales ya existentes y no de las allegadas con posterioridad, a fin de tener por acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de aquél, lo cual se traduce en un examen de legalidad del auto impugnado; sin embargo, aun cuando difieren respecto a la materia que en cada uno se examina, ambos medios de defensa podrán dejar sin efectos el auto de formal prisión, concediendo, en su caso, la inmediata libertad del reo, por lo que los efectos de la resolución recaída en ellos pueden ser idénticos, o bien, resultar plenamente contradictorios entre sí. En consecuencia, si se promueve el incidente de libertad por desvanecimiento de datos y con posterioridad el juicio de amparo, encontrándose sub júdice el primero, ya sea porque se encuentra en trámite la primera instancia, o bien, la apelación, podrá desecharse la demanda o sobre-seerse en el juicio, en términos de lo previsto en los artículos 145 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, respectivamente, ambos en relación con el artículo 73, fracción XIV, del propio ordenamiento legal, toda vez que este último prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto y se puedan producir los mismos efectos, o más grave aún, efectos contradictorios (en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en el último precepto citado); y en el supuesto de que se promueva el amparo indirecto y con posterioridad el aludido incidente, encontrándose sub júdice el primero, la causal de improcedencia será superveniente y procederá el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo; sin que obste a la anterior conclusión el hecho de que en materia penal no opere el principio de definitividad, pues dicha excepción no es aplicable tra-tándose precisamente de la tramitación simultánea de dos medios de defensa que se encuentran sub júdice y cuyas resoluciones, por tanto, podrían incluso dar lugar a sentencias contradictorias.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIII, Marzo de 2001, 1a./J. 4/2001, Página 65.

APELACIÓN IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA QUE INTERPONE EL INDICIADO EN CONTRA DEL ACUERDO QUE NEGÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SI CONTRA ÉSTE SE LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE CUMPLIMENTÓ. La admisión del recurso de apelación requiere de dos presupuestos: procedencia, la que en el Código de Procedimientos Penales para el Dis-trito Federal, por ser el ordenamiento aplicable, se establece en el artículo 418, al precisar cuáles son las resoluciones apelables; y legi-timación, ya que el precepto 415 exige que la segunda instancia sólo se abra a petición de parte legítima, reservándose tal derecho, en los términos del dispositivo 417, al Ministerio Público, al acusado y su defensor, así como al ofendido y sus legítimos representantes en lo que se refiere a la reparación del daño. No obstante lo ante-rior, en la específica hipótesis que se analiza, el recurso se inter-pone por el indiciado, en contra de quien se libró una orden de aprehensión que no se cumplimentó, para combatir la determinación del Juez de no tener por prescrita la acción penal, que previamente le había solicitado; y si bien la resolución es apelable de conformidad con la fracción III del artículo 418 invocado, no es de admitirse el recurso, por carecer de legitimación quien lo interpone, en virtud de que no se ha sujetado a la potestad jurisdiccional, sometiéndose a juicio, pues, por lo contrario, se encuentra eva-dido de la justicia, lo cual impide reconocerle la calidad de sujeto procesal y menos aún de parte, por surgir ésta hasta el momento en que es puesto a disposición del Juez como detenido, o presentado para que se le instruya la causa, y mientras esto no acontezca, se encuentra suspendido el procedimiento. Sin embargo, lo anterior no constituye óbice para que si estimase que la determinación judicial es violatoria de garantías en su contra, pueda impugnarla a través del juicio de amparo.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997. 1a./J. 42/97. Página 87.

Por último, es pertinente señalar que si se trata de la sentencia definitiva privativa de libertad o personal, necesariamente hay que agotar el recurso; es decir, si en contra de la sentencia de primera instancia no se agota el recurso de apelación y ésta causa ejecutoria, no procede el amparo directo contra la de primera instancia; pero por razón de que no constituye sentencia definitiva (art. 73, fracción XVIII, en relación con el 46 y 158 de la Ley de Amparo); mas no porque no se haya agotado el recurso, puesto que se trata de la privación de la libertad personal.

2.6. Principio de estricto derecho

Este principio consiste en que el juzgador del amparo debe de examinar la constitucionalidad del acto reclamado en base a los argumentos externados en los “conceptos de violación” expresados en la

demanda y si se trata del recurso interpuesto, en lo expuesto en los "agravios". El órgano de control constitucional no podrá realizar libremente el examen del acto reclamado en la primera instancia, si no se trata del reo, pues debe limitarse a establecer si los citados con-ceptos de violación y en su oportunidad los agravios son o no fundados; de manera que el juzgador no está legalmente en aptitud de determinar que el acto reclamado es contrario a la Carta Magna por un razonamiento no expresado en la demanda o que la sentencia o resolución recurrida se apartó de la ley por una consideración no aducida en los agravios respectivos. De ahí los agravios insuficientes del Ministerio Público, la autoridad responsable o el ofendido. Son insuficientes los agravios si no atacan todas las consideraciones de la resolución recurrida; inoperantes si no son capaces de revocar el fallo; y son inatendibles si controvierten cuestiones ajenas a la litis; pero todos ellos ineficaces.

2.7. Principio de suplencia de la queja deficiente

Se dice que la excepción al principio de estricto derecho es la suplencia de la queja deficiente; pero dada su evolución deben tratarse como dos principios autónomos, a partir de la reforma constitucional de 19 de febrero de 1951.

En esa reforma el artículo 107 de la Constitución Federal, fue adicionado con un segundo y tercer párrafos, en los que se estableció como base constitucional la posibilidad de poder suplir la queja deficiente.

> "Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
>
> "Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado, una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensas, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso."

Actualmente ya no es una posibilidad sino un deber del juzgador hacerlo, al establecer la Constitución en su artículo 107, fracción II, segundo párrafo, reformado el 7 de abril de 1986, lo siguiente:

> "En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución."

El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, establece varias excepciones al citado principio, atendiendo unas a la naturaleza del acto reclamado y otras a las circunstancias personales del quejoso y del recurrente, pero sólo tres interesan a la materia penal, las señaladas en las fracciones I, II y V.

"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia."

Esta fracción interesa para los efectos de la materia penal, puesto que no sólo beneficia al reo ya que se puede dar el caso de que se declare inconstitucional una norma penal por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta beneficie al ofendido (persona física o moral), en los casos en que éste pueda pedir el amparo, conforme al artículo 10 de la Ley de Amparo, o bien recurrir una sentencia cuando tenga el carácter de tercero perjudicado conforme al artículo 5º, fracción III, inciso b) de la misma ley.

II. "En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo."

Como se puede advertir, en materia penal, puede suplirse la queja deficiente en tratándose del reo, entendiéndose este término como correlativo de indiciado, inculpado, procesado, acusado, sentenciado o reo, aun en ausencia de conceptos de violación o de agravios.

No se puede suplir la queja deficiente a las demás partes en el juicio de amparo (autoridad responsable, tercero perjudicado o Ministerio Público de la Federación).

No se suple en favor del ofendido cuando tenga el carácter de quejoso.

Existen algunos Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia Penal (5º y 7º)[13] que opinan por mayoría, que la deficiencia de la queja sí opera tratándose del ofendido; sin embargo, considero que no debe ser así hasta en tanto no se reforme la propia Ley de Amparo o entre en vigor una nueva.

Lo anterior es así, puesto que de la exposición de motivos que dio origen a la actual fracción II, del artículo 76 bis, se concluye validamente que la suplencia de la queja en materia penal opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de que al vincularse al juzgador de amparo a ejercer esa institución, se otorgue seguridad al indiciado, procesado o sentenciado (persona a la cual se le imputa la comisión del delito), de que la resolución emitida en un procedimiento penal, es legal, con independencia de que le sea adversa o favorable.

En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 228/2002, sostuvo que, no obstante que por reforma de septiembre de dos mil, se haya

[13] Como fue resuelto en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de 8 de febrero de 2002, en el recurso de Queja 17/2002, interpuesto por Federico Doping Casar y coagraviados.

adicionado un apartado b, al artículo 20 de la Constitución Federal, reconociendo los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, entre otras: a recibir asesoría; a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, coadyuvar con el Ministerio Público, que se le preste atención médica de urgencia y a gozar de las prerrogativas que las leyes secundarias estatuyen a su favor; reforma que tuvo como objetivo introducir conceptos innovadores en la teoría procesal penal y los derechos que tenga en él, pero no instituyó en su favor la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, que es un juicio diverso, que se rige por una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, contemplado en la fracción II de su artículo 76 bis la institución de referencia, que tiene vigencia desde mil novecientos ochenta y seis y que hasta la fecha y, concretamente, con posterioridad a la reforma del artículo 20 constitucional, no ha sufrido modificación alguna, por lo que no puede estimarse que en la actualidad, la institución de la suplencia de la queja deficiente opere a favor de la víctima u ofendido, ya que para ello sería menester que el numeral de referencia así lo contemplara expresamente, en acatamiento al mandato contenido en diversa disposición constitucional, cuya tesis es del rubro y texto siguiente:

> OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª VIII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 267, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD", así como la exposición de motivos del decreto de reformas a la Ley de Amparo, el cual dio origen a la fracción II del artículo 76 bis, se desprende que la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de garantías por el reo en el proceso penal, con el objeto de que se otorgue seguridad al indiciado, procesado o sentenciado, de que la resolución privativa de la libertad, emitida dentro de un procedimiento penal, es legal, con independencia de que le sea adversa o favorable. En estas condiciones, cuando el recurrente sea el ofendido en el juicio penal, cuya sentencia constituyó el acto reclamado en el amparo directo, no se actualiza el supuesto para que se le supla la queja deficiente, en términos de lo previsto en la fracción II del citado artículo 76 bis. No obsta a lo anterior el hecho de que con la reforma al artículo 20 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil uno, se haya elevado a la categoría constitucional la protección de los derechos de la víctima o del ofendido, junto con los del inculpado, con el fin de identificarlo como sujeto de derecho con mayor presencia en el procedimiento penal, esto es, se hayan introducido conceptos innovadores en la teoría procesal penal, elevando al rango de garantía individual la incorporación de la víctima y del ofendido como sujetos del proceso penal y los derechos que tengan en el, pues dentro de ellos no se encuentra el de la suplencia de la queja deficiente en el juicio de garantías, que es un juicio diverso, que se rige por la Ley de Amparo, distinta a la que regula el proceso penal.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Noviembre de 2002, 2a. CXXXVII/2002, Página 449.

Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió la contracción de tesis 57/2002-PS existente respecto al tema, de donde surgieron dos tesis, mismas que transcribo:

OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El supuesto establecido en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no se actualiza a favor del ofendido o de la víctima del delito cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías en materia penal, toda vez que la exposición de motivos de la reforma que dio origen a esa fracción, evidencia claramente que la suplencia de la queja en la materia mencionada, opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que en éste se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable. Además, no resulta acertado equiparar al ofendido con el reo en el proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél, al ser quien resiente los efectos del hecho delictivo, representa la figura antagónica de la persona a que se refiere la citada fracción, esto es, del sujeto a quien se le imputa la comisión del delito. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, se haya adicionado un apartado B a su artículo 20, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que no se instituyo a favor de aquéllos dicha suplencia en el juicio de amparo, que se

rige por una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, la cual no ha sido modificada en la fracción II del referido artículo 76 bis, con posterioridad a la indicada reforma constitucional.

OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Al establecer el citado artículo que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos establecidos en esa ley, en "otras materias", cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, se refiere a las materias civil y administrativa, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis LIV/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 122, toda vez que en el resto de las fracciones que conforman dicho numeral quedan comprendidas de manera especial las materias penal, agraria y laboral. Ahora bien, si se toma en consideración que la fracción II del referido dispositivo delimita en términos claros y específicos los casos en que procede dicha suplencia en materia penal, pues de la exposición de motivos mediante la cual se adicionó el indicado numeral, se advierte que aquella figura opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguri-dad de que la resolución que se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable, es indudable que la fracción VI no puede servir de fundamento legal para suplir a favor del ofendido o de la víc-tima del delito la deficiencia de la queja cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías, ya que ese no fue el alcance que el legislador le dio, pues si hubiese querido que dicha fracción pudiera ser aplicada en materia penal, laboral o agraria, en lugar de señalar "en otras materias", hubiera establecido tal imperativo para todas las materias, ya que de esa manera, cualquiera que ella fuera, de advertir el juzgador de amparo la existencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso, tendría la obligación de suplir la deficiencia en su favor.

El proyecto de la nueva Ley de Amparo en su artículo 77, establece la suplencia a favor del ofendido. Considero que es aceptable esta postura en virtud de que la Constitución en su artículo 20, inciso b), le otorga garantías y, por ende, se encuentra en la misma posición de los demás gobernados y en especial del inculpado, además de otras razones de desigualdad procesal.

La fracción V, del artículo 76 Bis establece:

OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El supuesto establecido en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no se actualiza a favor del ofendido o de la víctima del delito cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías en materia penal, toda vez que la exposición de motivos de la reforma que dio origen a esa fracción, evidencia claramente que la suplencia de la queja en la materia mencionada, opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que en éste se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable. Además, no resulta acertado equiparar al ofendido con el reo en el proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél, al ser quien resiente los efectos del hecho delictivo, representa la figura antagónica de la persona a que se refiere la citada fracción, esto es, del sujeto a quien se le imputa la comisión del delito. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, se haya adicionado un apartado B a su artículo 20, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que no se instituyó a favor de aquéllos dicha suplencia en el juicio de amparo, que se rige por una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, la cual no ha sido modificada en la fracción II del referido artículo 76 bis, con posterioridad a la indicada reforma constitucional.

Contradicción de tesis 57/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primero, Quinto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 14 de mayo de 2003. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Registro No. 183484

Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVIII, Agosto de 2003
Página: 175
Tesis: 1a./J. 26/2003
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

V. "En favor de los menores de edad o incapaces."

El menor ofendido

Por último, cabe hacer la reflexión si, en tratándose del ofendido, como tercero perjudicado o quejoso, en términos de los artículos 5º, fracción III, inciso b), y 10 de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja, cuando éste sea un menor de edad o un incapaz, de conformidad con la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Considero que sí, puesto que no existe disposición en contrario.[14]

INTERPRETACIÓN

MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA. La adición a la fracción II del artículo 107 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo con-tra actos que afecten derechos de menores e incapaces (Decreto de 27 de febrero de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año), según la Exposición de Motivos de la iniciativa de reformas, tuvo como finalidad inicial la de tutelar los derechos de familia, pretendiéndose crear una institu-ción "cuya instrumentación jurídica adecuada haga posible la satisfacción de derechos mínimos (de los menores e incapaces), necesarios para un desarrollo físico, moral y espiritual armonioso". Sin embargo, en la propia iniciativa presentada por el Presidente de la República se expresa que la referida adición a la Constitución Federal "tenderá a lograr en favor de los menores e incapaces la derrama de la totalidad de los beneficios inherentes a la expresada insti-tución procesal, invistiendo al Poder Judicial de la Federación que conoce del amparo, además de la facultad de corrección del error en la cita del precepto o preceptos violados, la de intervenir de oficio en el análisis del amparo, haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzcan al esclarecimiento de la verdad". Tal intención de la

[14] Así lo resolvimos en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el 22 de marzo de 2002, en el Amparo Directo 487/2002, de Gilberto Javier Cortés, siendo ponente el Magistrado Miguel Ángel Aguilar López.

iniciativa fue desarrollada ampliamente por el Congreso de la Unión al aprobar el Decreto que la reglamentó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 1974, a través del cual se adicionaron los artículos 76, 78, 79, 91 y 161 de la Ley de Amparo; y al aprobar también el Decreto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de junio siguiente, que introdujo nuevas reformas a la Ley de Amparo, en vigor a partir del día 15 de julio de 1976. En efecto, la adición al artículo 76 (cuarto párrafo), dispone que "deberá suplir-se la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos", y la nueva fracción V del artículo 91 de la Ley de Amparo establece que "tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores o incapaces (los tribunales que conozcan del recurso de revisión), examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 76 y en el tercero del artículo 78". Como se ve, ninguno de esos dos preceptos limita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de familia, y sí, por el contrario, la segunda disposición transcrita remite expresamente el artículo 78 párrafo tercero, de la Ley de Amparo (también reformado por el segundo de los decretos que se mencionan), en el que se establece que: "en los amparos en que se controviertan derechos de menores e incapaces, el tribunal que conozca del juicio podrá aportar de oficio las pruebas que estime pertinentes"; es decir, la suplencia instituida en favor de los menores no solamente fue estructurada por el legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al estado de minoridad, sino también para ser aplicada en todos los amparos en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previó también la necesidad de que la autoridad que conozca del juicio recabe oficiosamente pruebas que los beneficien.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Segunda Sala, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 336, pág. 224.

SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La suplencia de la queja, autorizada en materia penal por la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal y por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede no sólo cuando son deficientes los conceptos de violación, sino también cuando no se expresa ninguno, lo cual se considera como la deficiencia máxima.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 1834, pág. 2961.

SUPLENCIA DE LA QUEJA, PROCEDE EJERCERLA AUN CUANDO SÓLO HUBIERA INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si el Juez de Distrito concede el amparo al quejoso y resultan fundados los agravios expresados por la autoridad responsable, a virtud de la cual se abrió la instancia del juicio de amparo en revisión, para que no quede sin estudio el planteamiento del quejoso, procede efectuarlo e inclusive suplir las deficiencias de los conceptos de violación, con fundamento en lo que dispone el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, concediendo la protección constitucional por motivo diverso.

Informe de Labores de 1989, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, págs. 21-22.

QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA ALTERACIÓN DEL ACTO RECLAMADO IMPUTÁNDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA SEÑALADA. Aun cuando en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta no opera para ser alterado el acto reclamado imputándosele a determinada autoridad, sino que tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación en su demanda de garantías, o incluso formularlos ante la ausencia de éstos, pero sujetándose estrictamente al señalamiento que aquél hubiera hecho de los actos y autoridades responsables.

Informe de Labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, págs. 204-205.

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, ALCANCES DE LA, DE ACUERDO CON LAS ÚLTIMAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE MAYO DE 1986, QUE ENTRARON EN VIGOR 15 DÍAS DESPUÉS. Una interpretación sistemática de los artículos 78, párrafo tercero y 149, mismo párrafo, de la Ley de Amparo, permite establecer que, si bien es cierto que genéricamente la carga de la prueba de los hechos determinantes de la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso; no menos verdadero resulta que en materia penal, para poder suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios del inconforme, que de acuerdo con el diverso 76 bis, fracción II de la citada ley, no es discrecional sino obligatoria, es menester que el juez de amparo tenga a la vista las constancias que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, pero se estimen necesarias para la resolución del asunto. Luego entonces, si en la especie el quejoso por virtud de

la orden de aprehensión librada en su contra, se vio imposibilitado para aportar las constancias necesarias para demostrar los argu-mentos vertidos en su demanda de garantías, y ante la omisión de la responsable de no acompañar a su informe con justificación las constancias respectivas, el juez de amparo dada la existencia del acto reclamado debió solicitar las pruebas en las que descansa el acto reclamado antes de celebrar la audiencia constitucional, para estar en aptitud de suplir las deficiencias de los conceptos de violación, pues de lo contrario tal suplencia sería letra muerta y se dejaría de cumplir con los ideales del legislador, plasmados en la ley, sobre todo por el artículo 78, párrafo tercero del referido ordenamiento que dispone: "El juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."

Informe de Labores de 1988, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, págs. 58-59.

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO PENAL. El uso de la facultad de suplir la deficiencia de la queja no puede ser arbitrario, sino que debe responder a necesidades sociales, como cuando el juez constitucional se abstiene de suplir la queja que no reclama la errónea clasificación de un delito que causa alarma a la sociedad y es sancionado con pena igual a la que merecía el delito realmente cometido.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Salas y Tesis Comunes, pág. 2963.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NO IMPLICA EL CAMBIO DE LA VÍA INTENTADA. Si con apoyo en los artículos 95, 97 y 99 de la Ley de Amparo, el quejoso promueve el recurso de queja, presentándolo directamente ante la Oficialía de Partes común de los Tribunales Colegiados correspondiente, no es dable cambiar o modificar la vía intentada, bajo la hipótesis de que es otro el medio de defensa el que procede en contra de la resolución motivo de impugnación, pues dicha modificación de vía implica una suplencia de queja que no se encuentra contemplada en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha suplencia sólo opera ante la ausencia o deficiencia de agravios, mas no llega al extremo de cambiar la vía intentada. Lo anterior conduce a determinar que, si el quejoso promueve recurso de queja ante el Tribunal Colegiado con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Amparo, dicho recurso debe ser tramitado como tal, independientemente de que el mismo sea o no procedente en contra del acto respecto del cual se duele.

ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gober-nados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, P./J. 16/98, Página 34.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades fede-rativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficien-cia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, 1a./J. 40/97, Página 224.

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.

Contradicción de tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.

Registro No. 175053

Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Mayo de 2006
Página: 167
Tesis: 1a./J. 191/2005
Jurisprudencia
Materia(s): Civil

MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O INCAPACES. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO. Conforme a la fracción V del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la deficiencia de la queja en favor de menores de edad, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen; para ese efecto, debe tomarse en consideración que el artículo 646 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, supletorio de la Ley de Amparo, establece que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, sin que obste para lo anterior que, de acuerdo con la legislación penal estatal aplicable, pueda considerarse que el menor que ya cumplió die-ciséis años sea sujeto imputable de un delito, porque ello no impide que el órgano jurisdiccional supla la deficiencia de la queja en el amparo, toda vez que esta última edad sólo sería para efectos de dicho ordenamiento estatal, disposición que el quejoso combate en su demanda de garantías.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, 2a. LIV/98, Página 253.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.

Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Registro No. 170008

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Marzo de 2008
Página: 242
Tesis: 2a./J. 26/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Común

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL REO EN CONTRA DE LA ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO (FICHA SIGNALÉTICA). De conformidad con el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar en la sentencia el error u omisión en que hayan incurrido el reo o su defensor. En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra, aun cuando sólo se reclame la orden de identificación administrativa del procesado -ficha signalética-, pues ésta es una consecuencia legal del auto de formal prisión o de sujeción a proceso que aun cuando es de naturaleza administrativa tiene por objeto la identificación y conocimiento de los antecedentes del procesado que aporten al Juez de la causa y de futuros procesos los elementos para personalizar o individualizar la pena.

Contradicción de tesis 69/2006-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Registro No. 172883

Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Página: 242
Tesis: 1a./J. 103/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad.

Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 4/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Registro No. 175752

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Página: 8
Tesis: P./J. 4/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Común

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que

las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951.

Contradicción de tesis 52/2004-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de octubre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Arroyo Soto e Israel Flores Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 6/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis.

Registro No. 175754

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Página: 7
Tesis: P./J. 6/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Común

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL REO EN CONTRA DE LA CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja constituye una excepción al rigorismo jurídico y al formalismo legal, cuyo fin es proteger los intereses del procesado, además de que se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar, en la sentencia, el error u omisión en que haya incurrido el reo o su defensor. En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el

proceso penal enderezado en su contra, aun cuando el acto reclamado sea la condena a la reparación del daño, pues ésta tiene el carácter de pena en términos de los artículos 24, inciso 6, 29 y 30 del Código Penal Federal.

Contradicción de tesis 137/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 24 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo.

Registro No. 181429
Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIX, Mayo de 2004
Página: 474
Tesis: 1a./J. 18/2004
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

COMENTARIO: La interpretación de este principio se ha dado únicamente respecto a la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues se ha considerado exclusiva la suplencia en tratándose del reo; sin embargo, la suplencia también se puede dar hipotéticamente en las fracciones I y V del artículo 76, como ya se comentó.

3. LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO

El concepto de "parte" en general, "es todo aquel sujeto que pueda ejercitar válidamente una acción, oponer una defensa o interponer un recurso cualquiera;[15] es decir, es toda persona que tiene interés en obtener una resolución favorable en un juicio. Hay quienes intervienen en el juicio pero no son parte, como son los peritos y testigos que carecen de interés, por el contrario, las partes defienden un derecho y actúan en beneficio propio.

El artículo 5º de la Ley de Amparo, señala quiénes son parte en el juicio de amparo y textualmente dice:

"Son partes en el juicio de amparo; I. El agraviado o agraviados; II. La autoridad o autoridades responsables; III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento; b) El ofendido

[15] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 328.

> o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales de orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; c) La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por auto-ridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado; IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de los tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta Ley señala."

3.1. El agraviado

El agraviado es el titular de la acción de amparo, el que solicita la protección de la Justicia Federal; los titulares de la acción de amparo, haciendo referencia al artículo 103 constitucional, del cual se desprende dicha titularidad, es toda persona física o moral, todo gobernado, sin importar sexo, nacionalidad, estado civil o edad, y puede promover por sí o por interpósita persona. El agraviado en la práctica judicial es también llamado "quejoso" y esta denominación la adopta el proyecto de la nueva Ley de Amparo de la comisión mencionada.

De las hipótesis establecidas en el precepto 1º de la Ley de Amparo, se advierte la titularidad de la acción de amparo en favor de todo gobernado, en la primera, cuando cualquier autoridad le ocasione un agravio personal y directo al violar una garantía individual a través de un acto o una ley; la segunda y tercera hipótesis le ocasionan un agravio como consecuencia de la invasión de la esfera competencial federal a las entidades federativas y de éstas hacia aquélla. Erróneamente, algunos consideran que es la Federación o las entidades federativas los titulares de la acción de amparo tratándose de estas dos últimas hipótesis; sin embargo, las consecuencias de esa invasión de competencias generalmente[16] recae en todo gobernado, quien al final es el que resiente el agravio, pero esto no impide que tales entes públicos puedan acudir a solicitar el amparo, cuando se encuentren afectados sus intereses patrimoniales, tal y como se desprende del artículo 9º de la Ley de Amparo, que dice:

[16] Digo "generalmente", porque existen las acciones previstas en el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Federal.

> "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las Leyes, cuando el acto o la Ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas."

En resumen, la idea de "todo gobernado" recae en personas físicas (individuos), personas morales privadas (asociaciones o sociedades), personas morales de derecho social (sindicatos y comunidades agrarias), en organismos descentralizados y personas morales de derecho público u oficiales, siempre y cuando, en estos dos últimos casos, sea con el carácter de entes privados.

En materia penal, el quejoso generalmente es la persona física afectada por un acto de autoridad administrativa (Ministerio Público, Secretaría de Gobernación, etc.), por actos privativos de la vida, de la libertad personal, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal o no privativos de libertad; en estos últimos casos (actos no privativos de libertad) puede ser agraviada una persona moral cuando es afectada en sus bienes por aseguramientos decretados por el Ministerio Público (artículo 9º de la Ley de Amparo).

Tratándose de actos dentro del proceso penal, el agraviado generalmente es el procesado (persona física) y excepcionalmente podría ser el ofendido o la víctima conforme al artículo 10 de la Ley de Amparo, reformado el nueve de junio de dos mil, que a la letra dice:

> ARTÍCULO 10.—"La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:
>
> I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;
>
> II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, y
>
> III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional."

El artículo 10 prevé quienes podrán promover el juicio de amparo contra actos que emanen del incidente de reparación del daño o responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito o contra cualquier otro acto surgido del proceso penal, relacionado inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito o bien en contra de la confirmación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

INTERPRETACIÓN

REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESTE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA. Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el derecho del ofendido o de la víctima de algún delito a obtener la reparación del daño, fue elevado a rango de garantía individual y toda vez que la protección de ésta debe ser inmediata, resulta incon-cuso que la autoridad jurisdiccional está obligada a respetarla y, por tanto, en contra de las resoluciones dictadas en segundo grado o en los incidentes de reparación o de responsabilidad civil que afecten aquel derecho, el ofendido o la víctima de algún delito que ten-gan la expectativa legal de dicha reparación están legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que al aspecto de la afectación se refiere y siempre que contra ellas no exista medio ordinario alguno de defensa. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que conforme al criterio de este Alto Tribunal conte-nido en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, diciembre de 1997, página 111, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO", el espíritu que impulsó el decreto de reformas al diverso artículo 21 de la citada Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estuvo inspirado en la necesidad de crear instrumentos regulados por normas y criterios objetivos, a fin de controlar la legalidad de los actos de autoridad sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, que afectaren los derechos del ofendido o de la víctima de algún delito, entre los que se encuentra el de obtener la reparación del daño.

Tesis por contradicción, número 103/2001, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno.

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDIC-

CIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso

indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, octubre de 2000, Tesis P./J. 114/2000, pág. 5.

JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de im-poner, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo XIII, mayo de 2001, Tesis 1a./J. 24/2001, pág. 142.

En este aspecto, cabe mencionar lo relativo al no ejercicio de la acción penal, si el amparo es procedente y quién es el competente para conocer de esos juicios.

El artículo 21 de la Constitución Federal fue reformado a partir del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en su tercer párrafo establece:

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnados por vía jurisdiccional en los términos que establece la ley;…"

Esto significa que quien podrá impugnar esas determinaciones es la parte ofendida. La interrogante que existió antes de la reforma

del artículo 10, fue en el sentido de que si era procedente el juicio de amparo ante las decisiones de no ejercicio de la acción o desistimiento de la acción penal.

La Suprema Corte y diversos Tribunales Colegiados habían establecido, con anterioridad a esta reforma, en diversos criterios, que el amparo contra el no ejercicio de la acción penal era improcedente; así se advierte de las tesis, que aparecen bajo los siguientes rubros:

> DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. RESULTA IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN CONTRA DE UNA.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, pág. 436.
>
> ACCIÓN PENAL. NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE LA, POR EL MINISTERIO PÚBLICO, AMPARO IMPROCEDENTE.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, pág. 448.
>
> ACCIÓN PENAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE LA, POR EL MINISTERIO PÚBLICO. ESTÁ SUJETO AL CONTROL DE LEGALIDAD Y EL AMPARO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA, AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, págs. 588 y 589.
>
> ACCIÓN PENAL, INEJERCICIO. ES IMPROCEDENTE EL JUI-CIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, págs. 393 y 394.

Sin embargo; debe decirse que atento a la reforma del artículo 21 constitucional, también se reforma en los artículos 10 y 114 de la Ley de Amparo y actualmente es procedente el amparo contra la confirmación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal, esto es contra la resolución final; por ende, deben agotarse todos los recursos o medios de defensa existentes en las normas.

Respecto a la competencia para conocer del juicio en tratándose del no ejercicio, una tesis definió la competencia para el juez de Distrito en materia penal, atendiendo la naturaleza del acto; sin embargo, cabe mencionar que al momento de resolverse, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponía en su artículo 52, frac-

ción II: "Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: …II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;" y el Ministerio Público es considerado como autoridad administrativa; de ahí que también diverso tribunal colegiado administrativo sostenía que la competencia era para los tribunales de esa materia.

La tesis por contradicción 9/96 del 26 de agosto de 1997, resolvió que es competente el juez penal y es del tenor siguiente:

> ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO DE LA. EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE JURISDICCIONAL O JUDICIAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. La fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone, entre otros supuestos, que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicio de garantías que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal. De conformidad con la doctrina de la dualidad en las funciones del Estado, la resolución del no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, una resolución formalmente administrativa, pero por la naturaleza intrínseca de la función, es una resolución materialmente jurisdiccional del orden penal, y atendiendo a las circunstancias de que los términos "judicial" y "jurisdiccional", son sinónimos, y de que la resolución de que se trata emana de un procedimiento penal, la competencia para conocer del juicio de amparo promovida en contra de dicha resolución, le corresponde al juez de distrito en materia penal, con fundamento en la citada fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una resolución judicial o jurisdiccional del orden penal. Este aserto tiene su justificación porque en el ámbito del derecho penal el ministerio público fundamentalmente realiza la función de investigación y la persecución de los delitos ante los tribunales de una manera exclusiva, por lo que todas sus actuaciones, durante la averiguación previa, son realizadas con carácter de autoridad y tiene la naturaleza intrínseca de ser jurisdiccionales, ya que no podía sostenerse que dichas actuaciones tengan el carácter de administrativas por sólo el órgano que las ejecuta, toda vez que con este criterio se pierde de vista la dualidad en las funciones del Estado. Además dicha resolución se funda

en normas adjetivas y sustantivas penales, con base en diligencias que tienden al esclarecimiento de elementos de un tipo penal y demostración de probable responsabilidad penal respecto del inculpado. Ciertamente, durante la averiguación previa el agente ministerial debe respetar garantías individuales de naturaleza penal, antes de decidir si ejercita o no la acción penal y las diligencias se desarrollan en un procedimiento reglado en normas adjetivas, que son las llamadas "normas procesales" o "procedimentales" en el cual hay desahogo de pruebas y valoración de las mismas, lo que se des-prende de los artículos 265 y 269 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Por otra parte con la interpretación de mérito se respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados; y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo de los asuntos, porque la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho, quienes, por este motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En las condiciones apuntadas, debe sostenerse que el acto reclamado se ubica en la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque la resolución de no ejercicio de la acción penal es de naturaleza materialmente jurisdiccional o judicial.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, P./J. 91/97, pág. 5.

COMENTARIO: No estoy de acuerdo con la interpretación; considero que si la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no se ha modificado al respecto, aun cuando el acto es de naturaleza penal, las normas aplicables a la competencia aún se encuentran vigentes y, por ende, primero debería modificarse la ley en los términos del criterio sustentado en la jurisprudencia. Sin embargo, la tesis jurisprudencial debe acatarse obligatoriamente en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Reforma constitucional

El veintiuno de septiembre de dos mil, se reformó la Constitución Federal, agregando el inciso B, al artículo 20, estableciendo derechos subjetivos públicos a favor de la víctima del delito u ofendido.

ART. 20.—"En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A) Del inculpado:

…

B) De la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley, y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio."

Con esta reforma, es evidente que la posibilidad del ofendido para pedir el amparo es más amplia y no se reduce a las hipótesis del artículo 10 y a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, conforme a la fracción II de este último precepto y a la legitimación que le otorgue cada uno de los derechos consignados en el inciso B) del citado artículo 20 Constitucional.

Es necesario conocer las siguientes tesis:

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, EN TANTO QUE NO AFECTA EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, la legitimación procesal para promover el juicio de garantías sólo la tienen las personas físicas o morales directamente agraviadas por la ley o el acto reclamado. Ahora bien, el hecho de que el ofendido o víctima del delito esté legitimado para reclamar las resoluciones del Ministerio

Público que al resultar injustificadas afectan su interés jurídico y lo privan del derecho a obtener la reparación del daño, no significa que también tenga legitimación para impugnar todas las resoluciones jurisdiccionales dentro del proceso. Así, en la resolución que dirime el recurso de apelación interpuesto contra el auto de término constitucional, debe verificarse la comprobación del cuerpo del delito, la probable responsabilidad y la existencia o no de alguna circunstancia que exima de responsabilidad o extinga la acción penal, sin pronunciarse respecto al derecho a la reparación del daño con que cuenta la víctima u ofendido del delito, pues dicha reparación es una pena pública, de manera que para que nazca el derecho a exigirla, es necesario que previamente se acredite la pretensión punitiva del proceso penal, es decir, la existencia de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal. En congruencia con lo anterior, y en virtud de que la resolución mencionada no se avoca a la legal o ilegal imposición de la reparación del daño como pena, no puede afectar el derecho de la víctima u ofendido a tal resarcimiento y, por ende, éste carece de legitimación activa para promover el juicio de garantías contra esa determinación. Lo anterior es así, pues un principio general de procedencia del amparo es el agravio personal y directo, es decir, que la ley o el acto afecte algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de las personas; por lo que si la resolución de segunda instancia que analiza el auto de término constitucional y concede la libertad al inculpado no afecta el derecho de la víctima u ofendido a la reparación del daño, se concluye que éste no se encuentra legitimado para promover juicio de amparo en su contra.

Contradicción de tesis 170/2007-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 23 de abril de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.

Registro No. 168612

Localización: Novena
Epoca Instancia:
Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Octubre de 2008
Página: 223
Tesis: 1a./J. 54/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Penal

ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al artículo 21

constitucional, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los dere-chos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en comento des-cuella, como elemento preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, Tesis P./J. 128/2000, pág. 5.

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros,

emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o ac-tos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, octubre de 2000, Tesis P./J. 114/2000, pág. 5.

Al respecto, debe decirse que una gran cantidad de tesis, incluso por contradicción relativas al no ejercicio de la acción penal ya fueron superadas; a continuación algunos rubros:

ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.

ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE RIGE EN GARANTÍAS DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA.

ACCIÓN PENAL. LA GARANTÍA QUE TUTELA EL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, NO SE ENCUENTRA SUJETA A QUE SE ESTABLEZCA EN LA LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA POR LO QUE, MIENTRAS ÉSTA NO SE EXPIDA, EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE EN FORMA INMEDIATA PARA RECLAMAR TALES RESOLUCIONES.

ACCIÓN PENAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR POR VÍA JURISDICCIONAL LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL, ENTRÓ EN VIGOR EL 1º DE ENERO DE 1995.

ACCIÓN PENAL, LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Los recursos deben contenerse en la ley no en el reglamento.

3.2. La autoridad responsable

El amparo procede únicamente contra actos de autoridad y no de particulares.

La autoridad responsable es la parte que emite el acto reclamado y en contra de la cual se solicita la protección federal; para los efectos legales del amparo, sólo podrá considerarse como autoridad a la que actúa con imperio como persona de derecho público.

El artículo 11 de la Ley de Amparo, señala lo que debemos entender por autoridad responsable, al establecer:

> "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado."

En reformas de mil novecientos ochenta y ocho, al precepto legal antes aludido se agregaron los vocablos promulgación y publi-

cación, que en esencia son sinónimos y que no son autónomos pues están ligados al dictado de la Ley.

Para que el órgano del Estado sea considerado como autoridad, el acto reclamado debe tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido qué se debe entender por "autoridades" en las tesis jurisprudenciales 75 y 76, visibles en las páginas 122 y 123 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, parte común al Pleno y a las Salas, que dice:

> "El término 'autoridades', para los efectos del amparo comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, y que tales autoridades lo son, no solamente la autoridad superior que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo."

Existen dos tipos de autoridades responsables, las ordenadoras y las ejecutoras; las primeras son las que ordenan, mandan, las que resuelven sobre algún acto y las segundas son las que obedecen, las que ejecutan o llevan a la práctica el mandato de aquéllas.

Al respecto existen las siguientes tesis:

> AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, tomo: XIV, noviembre de 2001, tesis: 2ª CCIV/2001, pág. 39.

> ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA. El procurador general de la República tiene la calidad de autoridad ejecutora de

las órdenes de aprehensión dictadas por los Jueces de Distrito, por ser el titular de la institución del Ministerio Público de la Federación y en virtud de que, de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha institución, presidida por el procurador, es la encargada de la persecución de los delitos, para lo cual tiene bajo su mando a la Policía Judicial Federal, de donde se sigue que dicho procurador está facul-tado para cumplimentar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial, siendo dicha ejecución reali-zada a través de la Policía Judicial Federal; lo que se traduce en una ejecución material del cuerpo policiaco y jurídica del titular del Ministerio Público de la Federación, máxime que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República encomienda a la mencionada policía la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero actuando siempre bajo la autoridad y mando in-mediato del Ministerio Público de la Federación.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. VII, enero de 1998, 1ª/J 49/97, pág. 107.

AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO OBJETO DE AMPARO. Lo son, no solamente la autoridad superior, que ordena el acto, sino también las subalternas que lo ejecuten o traten de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas procede el amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 301, pág. 520.

AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución admi-nistrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el solo hecho de serlo.

Jurisprudencia 3/88, que aparece en la publicación "Jurisprudencia por Contradicción de tesis", Tomo III, Segunda Sala, Editorial Themis, pág. 65.

AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 302, pág. 522.

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.

Contradicción de tesis 86/2003-SS. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 31 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Registro No. 182617

Localización:
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVIII, Diciembre de 2003
Página: 93
Tesis: 2a./J. 112/2003
Jurisprudencia
Materia(s): Común

AUTORIDADES EJECUTORAS, AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE LAS. Cuando el amparo se endereza contra una de las autoridades responsables, no se puede, conforme a las disposiciones del juicio de garantías, decidir sobre actos de la otra, pues equivaldría, no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a decidir una controversia sobre la responsabilidad constitucional sin oír a la parte afectada y sin conocer las razones que le sirvieron de apoyo. Por tanto, solicitada la protección federal contra la autoridad ejecutora, únicamente puede ocuparse el juzgador de los vicios propios de ejecución, salvo, naturalmente, que no esté apoyada en resolución de autoridad competente, es decir, notoriamente arbitraria.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, primera tesis relacionada con la jurisprudencia número 302, pág. 522.

AUTORIDADES RESPONSABLES, CONFUSIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE LAS. La simple confusión en el señalamiento de las autoridades responsables, no es motivo para sobreseer en el juicio de amparo, si a pesar del error, las propias autoridades, que lo advirtieron, estuvieron en posibilidad de rendir sus informes.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, segunda tesis relacionada con la jurisprudencia número 302, pág. 523.

AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS, SIN ESPECIFICACIÓN DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYEN. Es legal el sobreseimiento que se dicte respecto a determinada autoridad responsable, si de la lectura de la demanda respectiva, no se desprende cuales sean los actos que se reclamen de dicha autoridad, esto es, que solamente sea nombrada la autoridad responsable, sin especificar cual sea el acto reclamado que se le imputa.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tercera tesis relacionada con la jurisprudencia número 302, pág. 523.

AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende

a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 300, pág. 519.

AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 293, pág. 512.

AUTORIDAD RESPONSABLE, SUBSTITUCIÓN DE LA. Si aquella contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se aboca al conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución, materia de la demanda.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 292, pág. 511.

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 295, pág. 516.

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, jurisprudencia número 296, pág. 517.

AUTORIDAD RESPONSABLE. PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DEL RAMO PENAL NO TIENE EL CARÁCTER DE.

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Es inconcuso que el secretario de acuerdos del juzgado del ramo penal no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de garantías en razón de que carece de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, dado que el artículo 90 del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que establece las funciones propias de su encargo no le concede ese tipo de facultades.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X septiembre, pág. 240.

ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregurlaridades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno.

Jurisprudencia 29/94, que aparece en la publicación "Jurisprudencia por Contradicción de tesis", Tomo I, Editorial Themis, pág. 15.

AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS. SI DEL CONTEXTO DE LA DEMANDA SE ADVIERTE QUE SE IMPUTAN ACTOS DE ALGUNA AUTORIDAD, DEBE LLAMÁRSELE AL JUICIO DE AMPARO. Debe considerarse que si el juez de Distrito omite llamar a juicio a una autoridad responsable que el quejoso no precisó debidamente en el capítulo respectivo de su demanda, pero a la cual aludió expresamente en los conceptos de violación, imputándole violaciones a sus garantías constitucionales, es claro que el juez del conocimiento, con tal omisión, viola las reglas que rigen el procedimiento del juicio constitucional, toda vez que la demanda de amparo es un todo y que en tal forma debe ser analizada, por lo que es suficiente que se mencione a alguna autoridad en alguna parte de la demanda, imputándole la realización de uno o más de los actos reclamados, para que el juez de amparo esté obligado a llamar a tal autoridad a juicio, a fin de que a través de su informe justificado tenga oportunidad legal de defender la

constitucionalidad de los actos que se le atribuyen. Independientemente de lo anterior y en el caso de que el juez de Distrito estime que la demanda no reúne los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, por no señalarse con claridad el acto que se atribuye a la autoridad que se menciona en forma imprecisa, previamente a la admisión de la demanda tiene la obligación de requerir al quejoso para que la aclare, esto en términos del artículo 146 de la Ley en cita. De tal suerte que si el juez de Distrito no actúa en alguna de las dos formas aludidas y tramita la demanda planteada hasta culminar con la resolución definitiva, es claro que la sentencia impugnada debe revocarse y con apoyo en la fracción IV del artículo 91 de la ley de la materia, ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto de que se llame a juicio a la autoridad que dejó de ser emplazada y tenga la oportunidad de justificar y defender la constitucionalidad del acto que se le impute.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, septiembre de 1995, T. V.2º.9K, pág. 524.

AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS. FORMALIDADES. Si el juez de Distrito omite llamar a juicio a una de las autoridades señaladas como responsables, porque el quejoso la citó en los conceptos de violación y no en el capítulo respectivo, viola las reglas que rigen el procedimiento del juicio constitucional, ya que, siendo la demanda de amparo un todo que debe considerarse en su conjunto, basta el señalamiento de tal autoridad en alguna parte de la demanda, como responsable de uno o más de los actos reclamados, para que el juez del amparo esté obligado a llamarla al juicio para que por medio de su informe justificado tenga oportunidad de defender la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen, de tal suerte que si no es emplazada, debe revo-carse la sentencia impugnada, con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto señalado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Co-le-giados de Circuito, Tomo X. 1º. 4K, pág. 219.

ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque

en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, Tomo: VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, Tesis 3a./J. 33/90, pág. 186.

Por lo que hace a los organismos descentralizados, se considera que los mismos sí pueden actuar como autoridad, cuando la ley expresamente así lo permite; es decir, que se encuentren facultados para ordenar o ejecutar actos por sí solos o bien dispongan de la fuerza pública para cumplir con sus determinaciones, sólo así podrán ser consideradas como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la siguiente tesis, que se transcribe no obstante que surgió de un juicio que no es de materia penal:

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica

autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo, V, febrero de 1997, T. P. XXVIII/97, pág. 119.

AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en

posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA."

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judi-cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, P./J. 128/99. Página 21.

Cabe mencionar que las partes en todo juicio tienen el irrestricto derecho de interponer recursos; sin embargo se ha discutido ampliamente si los órganos judiciales y jurisdiccionales señalados como autoridades responsables pueden interponer los recursos establecidos en la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no en la tesis por contradicción número 44/98-PL. Sin embargo desde mi punto de vista todo órgano jurisdiccional o judicial que sean señalados como responsables tienen la facultad de defender la constitucionalidad de su acto, pues la Ley de Amparo en su artículo 149 establece textualmente: "Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes paras sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio…"; luego si el informe justificado constituye propiamente la contestación de la demanda de amparo y es con estos dos elementos que se establece la litis constitucional, no concibo por qué, si el Juez de Distrito en primera instancia declara la inconstitucionalidad del acto, la responsable no pueda solicitar la revisión de esa resolución, que de alguna manera le resultó desfavorable en relación a la litis, sin que esto implique un sesgo de parcialidad en el proceso ordinario.

A continuación trascribo la tesis de contradicción 44/98-PL que establece el criterio mayoritario del Pleno de la Suprema Corte y el voto particular de los ministros Don Humberto Román Palacios y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia que me parece de sumo interés:

REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tra-tándose del juez penal, puesto que conforme al artículo 102-A consti-tucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público —órgano administrativo— ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del juez pe-nal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un juez penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los jueces penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular —persona física— del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir.

Voto particular:

En contra de lo considerado en la sentencia mayoritaria, estimamos que el criterio que debe prevalecer es en el sentido de que

las autoridades judiciales del orden penal sí se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión; por las razones que a continuación se exponen.

El artículo 87 de la Ley de la Materia establece lo siguiente:

ARTÍCULO 87.—Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta Ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. ...Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.

De la disposición legal antes transcrita se advierte que tratándose del recurso de revisión que pueden interponer las autoridades responsables en su carácter de partes en el juicio de amparo indirecto se prevén dos hipótesis: La primera relativa a que el citado recurso sólo podrán hacerlo valer las autoridades responsables cuando las sentencias afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado y la segunda, relativa al recurso de revisión que pueden hacer valer las autoridades responsables que intervinieron en la promulgación de una ley.

Con relación al primer supuesto, se obtiene como aspecto sobresaliente la circunstancia relativa a que las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión cuando: "las sen-tencias dictadas en el juicio de amparo indirecto afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado".

La precisión anterior nos conduce a obtener una doble connotación del vocablo "afectación" a que se alude en la norma legal invocada: La primera, entendida como una vinculación entre la sentencia dictada en el amparo correspondiente y el acto reclamado de la o las autoridades responsables y; la segunda, como la incidencia o el trastocamiento que por virtud de dicho fallo sufre la autoridad responsable en sus intereses o derechos.

Así, para la materia del presente asunto, es dable abordar como primera conclusión que las autoridades responsables en general (administrativas, legislativas y judiciales), estarán legitimadas para inconformarse en contra de las sentencias respectivas, cuando éstas afecten en el contexto de sus facultades, directamente los actos a cada una imputados, de manera tal que dicha vinculación cause un perjuicio en el ámbito de competencia del órgano de gobierno y en su esfera jurídica como ente público.

Por lo que procede ahora establecer cuando deben considerarse afectados los intereses de las autoridades jurisdiccionales y/o judiciales.

La doctrina nos dice que la función jurisdiccional es la característica actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento

jurídico, esto es, dirigida a obtener en los casos concretos la declaración del derecho y la observación de la norma jurídica mediante la resolución, con base en la misma, de las controversias que surjan por conflictos de intereses, tanto entre particulares (regulados en su parte sustantiva por normas de derecho privado), como entre particulares y el poder público (relaciones reglamentadas por disposiciones legales de derecho público); mediante la ejecución coactiva de las sentencias.

Destacando como elemento fundamental de dicha actividad, la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales, tanto durante el procedimiento, como al dictar alguna resolución; ya sea ésta de trámite o la definitiva, a través de la cual se dirime la controversia ante ella planteada.

Así, tenemos que existen procedimientos contenciosos de naturaleza privada, en los que los intereses en conflicto atañen de manera individual y directa a los particulares; incidiendo los resultados del juicio en bienes eminentemente patrimoniales; así como en las relaciones comerciales y obrero patronales.

Naturaleza que comparten las sentencias civiles o de derecho privado, las cuales protegen los intereses particulares que se ven amenazados o que son desconocidos o lesionados, y tienden a mantener sobre ellos la vigencia del derecho, haciendo que se pague al acreedor, se indemnice al perjudicado y no se dé validez ni eficacia a lo que se ha realizado contra las exigencias legales.

Entre dichos procedimientos se encuentran los negocios de naturaleza civil, mercantil, agrarios y laborales; en los que la autoridad jurisdiccional no tiene otro interés, como órgano, que el de administrar justicia, diciendo el derecho entre las partes contendientes.

Por ello, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto lo constituye alguna determinación dictada por una autoridad judicial o jurisdiccional en un proceso de tal naturaleza, aquella, como parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en su carácter de autoridad responsable o demandada, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la resolución del Juez de Distrito que otorga la protección constitucional al quejoso, en tanto que ésta no afecta los intereses del órgano que representa.

En efecto, al ser la materia del juicio natural, del que emana el acto reclamado, el conflicto de intereses particulares tutelados por normas de derecho privado; es incuestionable que la concesión de amparo sólo afecta a las partes que litigan en el mismo, la cuales, además, comparecen al juicio de garantías ya sea como quejoso o tercero perjudicado (dependiendo quien de entre los litigantes en el juicio de origen haya obtenido resolución adversa o favorable a los intereses que defienden) y en tal evento únicamente ellos están

legalmente aptos para impugnar, vía recurso de revisión, la determinación del Juez de Distrito.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo respecto de las autoridades judiciales del orden penal, por las razones siguientes.

El derecho penal, como rama del derecho público, tiende a mantener el orden político-social de una comunidad, combatiendo por medio de penas y otras medidas adecuadas aquéllas conductas que le dañan o ponen en peligro; el cual, en sentido subjetivo, es el atributo de la soberanía por el cual a todo Estado corresponde reprimir los delitos por medio de las penas, en tanto que objetivamente se forma por el conjunto de normas y disposiciones que reglamentan el ejercicio de ese atributo: el Estado, como organización política de la sociedad, tiene como fines primordiales la creación y el mantenimiento del orden jurídico; por tanto, su esencia misma supone el uso de los medios adecuados para tal fin.

Así, la sanción de una conducta antijurídica, a través de la imposición de una pena, tiende a mantener el orden social y la posibilidad de una convivencia pacífica, independientemente de que en los casos concretos se logre o no impedir o reparar el daño inmediato que pueda causar el delito.

Así, la finalidad de la autoridad judicial del orden penal es no sólo la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho, con la pretensión inmediata de administrar Justicia, sino también la de garantizar los derechos de la sociedad y el interés público; siendo, precisamente la salvaguarda del citado interés público y en razón del mismo, que tiene interés legítimo en que su resolución subsista, trascendiendo tal interés al juicio de amparo, en tanto que será en éste en el que se cuestionará su legalidad y constitucionalidad.

En ese contexto, se actualizará el presupuesto de "afectación directa del acto reclamado" de dicha autoridad, cuando la sentencia respectiva se vincule con el acto de ella emanado y trastoque los intereses del órgano que representan; los que, atendiendo a su naturaleza de ente público, no son otra cosa que la consecución de sus fines.

Cabe destacar que, de negar la posibilidad a la autoridad judicial del orden penal de defender su acto a través del recurso de revisión, el juicio de amparo indirecto, siendo binstancial, se convierte, de hecho, en uninstancial, pues no hay parte en el juicio que lo haga valer en tanto que, la relación jurídico-procesal que se establece en la instancia ordinaria, en función de acusado, Ministerio Público y Juez, no se traslada realmente al juicio de amparo, pues en éste el acusado tiene el carácter de quejoso y el Juez de autoridad responsable o demandada, sin embargo tanto el Ministerio Público acusador como el ofendido no tienen participación en el juicio de amparo.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 20 constitucional, inicialmente otorgaba garantías sólo al procesado, sin embargo con el paso del tiempo también se introdujeron garantías a favor del ofendido, creándose dos apartados A) y el B); abriendo de esta manera campo para el efecto de que cada vez más el ofendido pueda tener oportunidades de defender los intereses que fueron lesionados por una conducta antijurídica, por lo que si bien, en estas condiciones el Juez Penal que está defendiendo su acto en realidad está, aparentemente, defendiendo al ofendido, de esta manera se satisface el equilibrio de los intereses opuestos. Siendo así las cosas, se advierte que en el juicio de amparo no existe tal equilibrio puesto que al mismo únicamente acuden como partes el acusado y la autoridad responsable y, al negarse a ésta la posibilidad de acudir al recurso de revisión, resulta que deja de ser parte en la segunda instancia.

Por ello, la autoridad jurisdiccional penal estará legitimada para interponer recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, cuando en ella se declare la inconstitucionalidad del acto emanado de aquélla, con la consecuente afectación de los intereses del órgano que representa; sin que pueda decirse que con ello se esté favoreciendo o perjudicando a alguna de las partes, pues en el juicio de amparo en materia penal, sólo son partes: el indiciado o procesado en su carácter de quejoso; la autoridad jurisdiccional que emitió el acto impugnado, como autoridad responsable y el agente del Ministerio Público de la Federación, como representante de los intereses de la sociedad; sin que en juicios de tal naturaleza exista tercero perjudicado, atento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu.

En esas condiciones, la sentencia que se dicte en el juicio, únicamente surte efecto respecto de las partes en el mismo; lo que indica que la resolución correspondiente no alcanza los intereses de quienes fueron parte en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, a saber: el Ministerio Público del Fuero Común como órgano acusador y el ofendido por la conducta antijurídica y como coadyuvante de aquél.

Tampoco es dable afirmar que con tal actuar la autoridad responsable se convierta en coadyuvante del Ministro Público acusador y de la parte ofendida en la causa penal, en virtud de que, el coadyuvante es aquél sujeto que sin ser parte en un procedimiento, interviene en el mismo junto al órgano de procuración de justicia, por tener un interés directo y común con aquél.

Ahora bien, es incuestionable que la autoridad responsable es parte en el juicio de amparo y que, como se señaló en párrafos precedentes, no tienen carácter de partes en dicho juicio, el Agente del Ministerio Público acusador y el ofendido; por lo que resulta un

contrasentido sostener que quien sí es parte en un juicio coadyuve con quien no lo es.

Consecuentemente, estimamos que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, que coincide, esencialmente, con el que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, es en el sentido de que las autoridades judiciales del orden penal sí se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión en amparo indirecto.

3.3. Tercero perjudicado

Es la parte que en términos generales resultó beneficiada con el acto reclamado por el quejoso, tiene interés en la subsistencia del mismo y en que se niegue la protección de la Justicia Federal; por ello debe ser llamado a juicio, para que tenga oportunidad de probar y alegar en su favor; al igual que la autoridad responsable, es verdadera contraparte del quejoso, no así el Ministerio Público Federal que representa los intereses de la sociedad.

La fracción III del artículo 5º antes transcrito, señala tres casos en que puede actuar como tercero perjudicado cualquier persona; para efectos de la materia penal que nos ocupa, sólo se puede dar esta figura en el supuesto señalado con el inciso b) de la fracción en comento, al referirse:

> El ofendido o las personas que, conforme a la Ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; es decir, el ofendido sólo tiene el derecho de comparecer en el juicio de amparo penal, como tercero perjudicado, en defensa de sus derechos patrimoniales vinculados con el delito, aquél que conforme a la Ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito.

Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido:

> TERCERO PERJUDICADO. EXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. La regla general en materia de amparos penales establece que no existe tercero perjudicado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, que dice: "Son partes en el juicio de amparo: …III. El tercero o terceros

perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea de orden penal…" Sin embargo, tratándose de la reparación del daño o la exigencia de responsabilidad civil en la comisión de un delito, con base en el inciso b) de la misma fracción y artículo, sí puede intervenir con dicho carácter la persona que conforme a la ley tenga derecho a ello, como en el caso cuando se trata de una orden de desalojo emitida por el agente del Ministerio Público, que se realiza con el objeto de restituir al ofendido en el goce de sus derechos provisionalmente, por tal motivo es procedente el recurso de revisión interpuesto.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala, Tomo IV, julio 1996, T. 1ª. XVII/96, pág. 155.

En este aspecto, la fracción III, del artículo 5º de la Ley de Amparo debe interpretarse atentos a las reformas de los artículos 10 de la Ley reglamentaria y el 20 Constitucional, pues es evidente que el legislador debió reformar el artículo 5º, lo relativo al tercero perjudicado en materia penal, cuando el quejoso es la víctima o el ofendido, en todos los casos en que sea procedente el juicio de garantías. De alguna manera la Suprema Corte así lo ha reflejado, en un caso concreto, en la tesis que a continuación se transcribe:

INDICIADO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SEA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, establecen como regla la no existencia de tercero perjudicado cuando el acto reclamado provenga de un juicio o controversia del orden penal; sin embargo, dicho precepto legal debe ser interpretado en la actualidad atendiendo a la reforma del artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley Funda-mental, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco y a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente a partir del diez de junio del año dos mil; debiendo, de esta reforma, considerarse como una excepción a la citada regla, el caso en el que un juicio de amparo se señale como acto reclamado la aprobación de la resolución de no ejercicio de la acción penal respecto de una denuncia, acusación o querella que se hace sobre determinada persona. Ello en virtud de que en este supuesto el quejoso es precisamente la parte ofendida, que considera que la conducta de los indiciados materia de la averiguación previa, es constitutiva de delito y, por tanto, la resolución reclamada, vulnera garantías en su perjuicio, pero como hasta antes de la reforma al artículo 21 constitucional vigente a partir del primero de

enero de mil novecientos noventa y cinco no se encontraba previsto el presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal y, por tanto, en la Ley Reglamentaria de los artículo 103 y 107 Constitucionales tampoco se había regulado la figura del tercero perjudicado en el juicio de amparo en que se reclame ese tipo de resoluciones, debe concluirse que, para el caso, tampoco resulta aplicable a lo dispuesto en el inciso c) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, ya que aun cuando en ese tipo de juicios de amparo, los indiciados tienen interés directo en que subsista el acto reclamado, la intención del legislador no pudo ser la de contemplarlos en tal disposición con el carácter de terceros perjudicados, por no encontrarse previsto en la época de la creación de la norma el presupuesto de procedencia del juicio de amparo que se ha mencionado. Consecuentemente, la figura del tercero perjudicado en los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal, aun cuando no se encuentra prevista en alguna de las fracciones del artículo 5º de la Ley de Amparo, debe entenderse integrada, a este precepto, en razón de las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIV, julio de 2001, Tesis 1ª J. 42/2001, pág. 200.

Nuestro más alto tribunal sostenía que el ofendido podía intervenir en el juicio de amparo con ese carácter cuando el procesado señalaba como acto reclamado el auto de formal prisión o la sentencia definitiva; sin embargo, una reciente tesis por contradicción número 350, que aparece publicada en la página 193 del Apéndice 1917-1995, tomo II, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el ofendido por un delito no debe ser considerado como tercero perjudicado en el juicio de amparo que se promueve contra el auto de formal prisión.

La referida tesis textualmente establece:

TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PENAL. EL OFENDIDO POR EL DELITO NO TIENE ESE CARÁCTER EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL PRESUNTO RESPONSABLE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. El auto de formal prisión sólo afecta la libertad personal del presunto responsable, puesto que en los términos del artículo 19 constitucional sólo a éste se conceden garantías y ellas son las de que no exceda la prisión preventiva por más de tres días sin que se justifique con un auto de

formal prisión; que ese auto tenga como base la plena comprobación del cuerpo del delito y demás datos que hagan probable la responsabilidad del acusado y que se consignen las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión en que se realizaron los hechos y establece además la obligación de seguir el proceso por el delito consignado en dicho auto. El artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio de amparo el tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad. Lo anterior lleva a la conclusión de que el derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil, solamente se afecta cuando el acto reclamado en el amparo, consiste en alguna resolución dictada a propósito de la reparación o responsabilidad civil mencionada, pero no cuando se trata del auto de formal prisión que no toca para nada tales materias, por lo tanto resulta evidente que no tiene el carácter de tercero perjudicado el ofendido por el delito, en el amparo promovido por el presunto responsable contra el auto de formal prisión.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Sala Auxiliar, Tomo II, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 350, pág. 193.

OFENDIDO. NO ES TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PENAL CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si, según jurisprudencia de esta Suprema Corte, el amparo es improcedente contra las sentencias absolutorias por falta de interés jurídico del ofendido, es evidente que tampoco pueda tener interés cuando se trata de resoluciones que, como el auto de formal prisión, sólo tienen por objeto definir la situación jurídica del presunto responsable. Solamente tiene el carácter de tercero perjudicado en el amparo penal el ofendido, cuando los actos afectan inmediata y directamente los intereses civiles del quejoso, pero en ningún caso cuando se trate de resoluciones judiciales que sólo atañen el presunto responsable. El auto de formal prisión sólo afecta la libertad personal del agraviado, y no los intereses patrimoniales del ofendido, puesto que en los términos del artículo 19 constitucional sólo se conceden garantías al presunto responsable y ellas son las de que no exceda la prisión preventiva más de tres días sin que se justifique con el auto de formal prisión; que ese auto tenga como base la plena comprobación del cuerpo del delito y además datos que hagan probable la responsabilidad del acusado y que se consignen las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión en que

se realizaron los hechos, y establece además la obligación de seguir el proceso por el delito consignado en dicho auto. Consecuentemente, sólo afecta al presunto responsable el auto de formal prisión, y en ningún modo a los intereses del ofendido, que de no prosperar el proceso penal, tiene expedito su derecho en la vía civil, para exigir la reparación del daño. Consecuentemente, debe rechazarse con el carácter de tercero perjudicado al ofendido en el amparo promovido por el presunto responsable, contra el auto de formal prisión.

Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 70 Séptima Parte, Página 21.

TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. El tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado al juicio de amparo indirecto, mediante ningún medio de defensa, podrá hacer valer la violación a la garantía de audiencia, a pesar de que la sentencia que se dicte en el mismo le prive de sus propiedades, posesiones o derechos, pues originándose la violación en un juicio constitucional y siendo éste la única vía para combatir actos de autoridad que transgredan garantías individuales, por su especial naturaleza extraordinaria no podría dar lugar a otro juicio de garantías, ya que de aceptarse así, se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución, cuya regulación se encuentra inmersa en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las fracciones I a IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Tampoco podría promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de dicha sentencia que ya causó ejecutoria, dado que éste no procede cuando ya existe auto de ejecutorización, lo que se desprende del artículo 32 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si bien el recurso de queja es procedente en contra del auto que declara ejecutoriada una sentencia, del numeral 96 de la ley de la materia, se advierte que sólo pueden interponerlo las partes que litigaron en el juicio, además de que este medio de defensa, suponiendo su procedencia, no sería la vía idónea para dejar insubsistente el fallo ejecutoriado como resultado del viciado procedimiento, y el recurso de queja por exceso o por defecto, no se estableció para combatir la sentencia en sí misma, sino sólo su ejecución excesiva o deficiente. En estas condiciones, al no poder hacer valer el tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado

en un juicio de amparo indirecto, la violación a la garantía de audiencia, mediante ningún medio de defensa ordinario ni extraordinario, ni del incidente de nulidad de notificaciones, ni del recurso de queja, por las razones antes apuntadas y atento al principio esencial que rige todo procedimiento judicial ordinario y extraordinario, consistente en que la sentencia pronunciada en un litigio no puede perjudicar a las personas que sean ajenas al mismo, debe aceptarse que el recurso de revisión sí es procedente en estos supuestos, porque es la única vía mediante la cual se puede dejar insubsistente una sentencia de amparo indirecto, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se emplace en forma debida al tercero perjudicado. Lo anterior no implica el abandono de la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "REVISIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, P./J. 29 3/89, página doscientos treinta y cinco), ya que la misma sólo es aplicable para las partes que fueron oídas en el juicio de donde emana, respecto de cuya situación jurídica se juzgó, debiendo las partes que litigaron en ese juicio estar a sus resultas, pero no la persona que no fue oída ni vencida, que no puede ser perjudicada por ella. Si se aceptara el criterio contrario se vulneraría el derecho a la jurisdicción establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los terceros perjudicados que se enteraran de un juicio de amparo seguido en su contra, hasta que la sentencia se está ejecutando o se pretende ejecutar en su perjuicio; e implicaría, además, premiar la conducta ilegal del quejoso, de no cumplir con lo ordenado en el artículo 116, fracción II de la Ley de Amparo, así como el incumplimiento del juzgador a su deber de emplazarlo. Por tanto, dado que el conocimiento del fallo debe ser directo, cuando el tercero perjudicado no intervino en el juicio y, por lo mismo, nunca se le notificó la sentencia, el término para interponer el recurso de revisión corre a partir del día siguiente al en que tiene conocimiento de la sentencia, aunque ésta, formalmente, tenga apariencia de ejecutoria.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, P./J. 41/98, Página 65.

3.4. El Ministerio Público de la Federación

La fracción XV del artículo 107 constitucional establece que el Ministerio Público de la Federación será parte en todos los juicios de amparo, pero que podrá abstenerse de intervenir en aquellos que carezcan, a su juicio, de interés público; el artículo 5º de la Ley de

Amparo lo establece de la misma forma y agrega que podrá interponer los recursos que la Ley señala, inclusive en los juicios de amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales comunes, con independencia de su intervención para la pronta y expedita administración de la justicia; a diferencia de las materias civil y mercantil, excluyendo la familiar, en que afecten intereses particulares, donde no podrá interponer recursos.

En principio, al Ministerio Público de la Federación se le consideraba únicamente como parte reguladora del juicio de amparo y no podía intervenir en todos los juicios ni interponer recursos, pero por decreto del veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y seis se le legitimó (artículo 5º Ley de Amparo) para interponer recursos e intervenir en los casos en que considere que se afecta el interés público.

Por reforma publicada el siete de enero de mil novecientos ochenta, se amplió la facultad de dicha institución para intervenir e interponer recursos así como promover la pronta y expedita administración de justicia; en la de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se le permitió intervenir e interponer recursos en todos los juicios; y en la última, de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se agregó lo relativo a su intervención en las resoluciones de tribunales penales locales y lo concerniente a la materia civil y mercantil, excepto la familiar. En materia de amparo penal, el Ministerio Público, además de las facultades antes señaladas, tiene el deber de cuidar que los juicios no queden paralizados, principalmente cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y en todas las materias en los casos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Corte, conforme al artículo 157 de la Ley de Amparo.

Así, el Ministerio Público de la Federación en el amparo penal tiene las mismas posibilidades de intervención que las demás partes, con motivo de las reformas muchas tesis fueron superadas.

INTERPRETACIÓN

NOTA: Las tesis cuyos rubros se transcriben a continuación han sido superadas por las reformas.

REVISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CUANDO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO Y PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PERO SÓLO CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA AFECTA SUS ATRIBUCIONES.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL, PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN EN AMPARO PENAL, SÓLO CUANDO LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL, POR AFECTAR SUS ATRIBUCIONES.[17]

Tesis no superadas:

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL, SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. La fracción IV, del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento ya sea manifestándolo expresamente, o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que si de las constancias de autos se advierte que la señalada institución no fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimiento, para el efecto de que se subsane esa omisión.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, octubre, pág. 377.

MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL. Al dictar sentencia, el juez de

[17] Esta tesis es contraria a la reforma del artículo 5º de la Ley de Amparo, y no es aplicable.

Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, segunda parte-1, pág. 326.

MINISTERIO PÚBLICO, PEDIMENTO DEL. DEBE EXAMINARSE PREFERENTEMENTE SI PLANTEA CUESTIONES DE ORDEN PÚBLICO. Si en el pedimento que formula el Ministerio Público Federal se plantean cuestiones de orden público que deben abordarse preferentemente, pues son de oficio, con mayor razón se impone su análisis cuando se plantean en forma expresa por una de las partes, calidad que tiene el representante social de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-febrero, tesis IX.1o.107 K, pág. 186, Clave TC091107 KOM.

REVISIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE INCONFORME CON EL FALLO PROTECTOR. La actual redacción del artículo 5º de la Ley de Amparo no admite más interpretación que la derivada de su propio tenor. En efecto, de acuerdo con el contenido de la norma en comento, el Ministerio Público Federal está facultado para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, incluyendo aquellas determinaciones recaídas a los juicios de amparo en materia penal, cuando se reclaman resoluciones de tribunales locales, con excepción de las dictadas en amparos en materia civil o mercantil, con exclusión de la familiar. Por tanto, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya recurrido la sentencia que concedió el amparo al quejoso, no es suficiente para considerar que el fiscal federal carezca de legitimación para interponer el recurso de revisión, por cuanto que, como parte en el juicio de amparo, está facultado para interponer los recursos que señala la expresada ley reglamentaria, incluso contra la sentencia dictada en un juicio de garantías en materia penal que, como en el caso, se reclama una resolución de un tribunal local.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, T. IV, 2º, 13 P, pág. 603.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. COMO PARTE ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN TODOS LOS JUICIOS E INTERPONER LOS RECURSOS EN LOS AMPAROS EN MATERIA PENAL. Conforme a las reformas a la Ley de Amparo, que modificaron el texto del artículo 5º, fracción IV, de dicha Ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, cuya vigencia inició el primero de febrero del referido año; el Ministerio Público Federal, como parte, está legitimado para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos en los amparos en materia penal, cuando se trate de resoluciones de tribunales federales, así como de los tribunales locales; ya sea que hubiere o no formulado pedimento o cualquier alegato dentro del juicio de garantías y solamente estará impedido para interponer los recursos que señala la ley en amparos indirectos, cuando se trate de asuntos de materia civil y mercantil, en que sólo se afectan intereses particulares con exclusión de los asuntos en materia familiar; por así desprenderse del texto del precepto legal citado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, T. XIX, 2º, 9K, pág. 576.

REVISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CUANDO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando conforme a la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo, dicha institución tiene el carácter de parte en el juicio de garantías, la facultad de hacer valer los recursos que esa ley establece, entre ellos el de revisión, sólo es posible ejercerla cuando la sentencia o resolución recurrida causa agravio o perjuicio a los intereses que como institución representa, y se entiende que puede darse esa posibilidad de afectación, cuando en el procedimiento en que se emite el acto reclamado la institución tiene facultades legales para intervenir, de manera que si la ley aplicada en la resolución reclamada no otorga facultad alguna a la institución, ésta no está legitimada para interponer el recurso de revisión que, por consiguiente, resulta improcedente y debe desecharse.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, T. XIII, 1º, 3K, pág. 534.

3.4.1. Intervención del Ministerio Público como parte en el proceso penal en el juicio de amparo

El agente del Ministerio Público que interviene como parte en el proceso penal de donde emanan los actos reclamados, no es propiamente parte en el juicio de amparo penal, pero sí tiene intervención, conforme a la reforma publicada el 9 de febrero de 1999, al artículo 155 de la Ley de Amparo, al que se le adicionó un párrafo que textualmente dice:

> "El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda."

Sólo podrá alegar por escrito pues los alegatos verbales no se hacen constar, excepto los del quejoso y en tratándose de los casos de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, conforme el citado precepto 155. El problema de interpretación consiste en saber si el agente que formule alegatos tendrá que acreditar que fue él quien actuó en el proceso o basta con notificar al que esté en funciones en ese momento. Recordemos que la notificación deberá ser por oficio dirigida al domicilio del Juzgado correspondiente y será el agente que esté en funciones en ese momento. Por otra parte puede suceder que la resolución reclamada sea la del tribunal de apelación, en ese caso el oficio de notificación se enviará al domicilio del propio tribunal.

También recordemos que la institución del Ministerio Público tiene como característica la unidad, de ahí que si otro agente diverso formula alegatos, a mi juicio es válido. Las Procuradurías de Justicia tendrán que reglamentar administrativamente esta situación, pues por lo mismo el juez de Distrito tendrá por hecha la notificación cuando aparezca en el oficio correspondiente el sello de recibido de la institución.

4. COMPETENCIA EN EL AMPARO PENAL INDIRECTO

La competencia es una atribución que la ley otorga a diversas autoridades estatales encargadas de desempeñar la función jurisdiccional para conocer de determinados juicios, es una condición presu-

puestal para que la actuación de una autoridad sea válida y eficaz, en materia de amparo se otorga a determinadas autoridades jurisdiccionales con el fin de establecer el control Constitucional; está determinada por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República, del 36 al 56, 114 y 158 de la Ley de Amparo; 10, 11, 14, 29, 37 y del 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esencia, los preceptos legales antes señalados otorgan la competencia para conocer del juicio de amparo a los tribunales federales. Pueden ser generalmente, los Tribunales Colegiados de Circuito que conocen del amparo directo o los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito que conocen del amparo indirecto en primera instancia. La Suprema Corte de Justicia sólo conoce de los juicios de amparo cuando se ejerce la facultad de atracción o se interpone el recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo que dicten los Jueces de Distrito en amparo indirecto, cuando se reclame determinado tipo de normas o las de Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, cuando en ellas se resuelva sobre la inconstitucionalidad de una ley o interprete una norma constitucional.

Jurisdicción concurrente y auxiliar

En materia penal existe una excepción a esta regla, las autoridades del fuero común pueden conocer del juicio de amparo, en términos de la fracción XII del artículo 107 Constitucional, que establece:

> "La violación de garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.
>
> Si el juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, no residiere en el mismo lugar que reside la autoridad responsable, la Ley determinará el juez o Tribunal ante el que se deberá presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca."

La Ley de Amparo estipula lo anterior en el artículo 37, que dice:

> "La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el juez de distrito que corresponda, o ante el superior del Tribunal que haya cometido la violación."

Este precepto secundario no está acorde con la constitución al contemplar únicamente tres fracciones del artículo 20 citado.

En la jurisdicción concurrente conocen los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados o del Distrito Federal, o bien los Tribunales Unitarios en el ámbito federal cuando no se quiere acudir al Juez de Distrito, porque es optativa la decisión de promover el mismo ante unos u otros.

Si el tribunal superior del juez responsable recibe y admite una demanda de amparo en materia penal, relativa a actos violatorios de los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, deberá tramitarla hasta dictar sentencia. Del recurso de revisión, conocerá el tribunal colegiado o la Suprema Corte según el caso. Si el tribunal superior se declara incompetente sin motivo legal alguno cuando ya la recibió, el juez de Distrito deberá regresarla, ya que el competente es el que previno. Es decir ambos están facultados para conocer del juicio y de la suspensión en esos casos.

En materia penal existe también la jurisdicción auxiliar prevista en los artículos 38, 39, 40, 41 y 144 de la Ley de Amparo que a la letra dicen:

> ARTÍCULO 38.—"En los lugares en que no resida juez de Distrito, los jueces de Primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado tendrán facultad para recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, atenta la distancia que haya a la residencia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes respectivos y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, el juez de Primera Instancia remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos."
>
> ARTÍCULO 39.—"La facultad que el artículo anterior reconoce a los jueces de primera instancia para suspender provisionalmente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal."
>
> ARTÍCULO 40.—"Cuando el amparo se promueva contra un juez de Primera Instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, o cuando reclamándose contra diversas autoridades, no resida en el lugar juez de Primera Instancia o no pudiere ser habido y siempre que se trate de alguno de los actos enunciados en el artículo anterior, la demanda de amparo podrá presentarse ante

cualquiera de las autoridades judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que en él reside la autoridad ejecutora. El juez recibirá la demanda y procederá conforme a los dos artículos precedentes."

ARTÍCULO 41.—"En los casos a que se refieren los artículos anteriores, si el promovente del amparo no justificare que la autoridad ejecutora señalada en la demanda reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien la haya presentado, el juez de Distrito impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso o a su apoderado, o a quien haya promovido en su nombre, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta hasta ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el artículo 17. Esta multa se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio por desistimiento del quejoso o por cualquier otro motivo legal."

ARTÍCULO 144.—"Las autoridades judiciales comunes, autorizadas por el artículo 38 de esta ley para recibir la demanda y suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán formar por separado un expediente en el que se consigne un extracto de la demanda de amparo, la resolución en que se mande suspender provisionalmente el acto reclamado, copias de los oficios o mensajes que hubiesen girado para el efecto y constancias de entrega, así como las determinaciones que dicten para hacer cumplir su resolución, cuya eficacia deben vigilar, en tanto el juez de Distrito les acusa recibo de la demanda y documentos que hubiesen remitido."

La facultad para el juez ordinario (juez de primera instancia, municipal, de paz, etc.) es únicamente para recibir la demanda de amparo en cualquier materia, y ordenar la suspensión del acto reclamado por el término de setenta y dos horas, que podrá ampliarse atento la distancia al juzgado de Distrito, cuando los actos sean de naturaleza penal en los casos del artículo 17 de la Ley de Amparo (aquí considero que no debe ser por setenta y dos horas sino por el tiempo necesario hasta que el Juez de Distrito resuelva sobre la suspensión definitiva en tratándose de la privación ilegal de la libertad y de manera indefinida hasta la resolución del juicio en lo principal; cuando proceda la suspensión de oficio por lo que hace a los demás actos enunciados en el artículo 17 en el mismo precepto; suspensión provisional que no debe de ser corregida por el Juez de Distrito de no darle los efectos correctos el juez auxiliar. En la actualidad existen numerosos juzgados de Distrito y vías de comunicación, y por ello no se actualizan los supuestos en la mayoría de los casos. Sin embargo, aún existen lugares, como por ejemplo, Huatulco, Oaxaca, en que no

existe juzgado de Distrito y en los que el juez ordinario ejerce esta facultad.[18]

En la jurisdicción auxiliar es requisito necesario que no exista juez de Distrito en el lugar, en la concurrente no.

La suspensión que dicte el juez auxiliar, tendrá que ser conforme a las reglas de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, en tratándose de actos privativos de libertad personal y en la de oficio conforme al numeral 123, pero no dejar las cosas en el estado en que se encuentran como lo señala el artículo 38 del citado ordenamiento legal.

> JUECES DEL ORDEN COMÚN EN AUXILIO DE LA JUSTICIA FEDERAL. Las resoluciones dictadas por los jueces del orden común, cuando obran en auxilio de la justicia federal, no pueden ser revocadas por los jueces de distrito, quienes carecen de facultad legal para hacerlo; por lo que si se da entrada por un juez del orden común a una demanda de amparo, y ordena la tramitación del incidente de suspensión, el juez federal respectivo sólo podrá resolver sobre la suspensión definitiva.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Tesis Jurisprudencial 1050, págs. 1683-1684.

4.1. Competencia por territorio, materia, grado y turno

La competencia en materia de amparo, igual que en otras materias, se da por diversas razones y las más importantes son las siguientes:

4.1.1. Por territorio

Será competente para conocer del juicio de garantías la autoridad que resida en el lugar en donde debe ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, según lo dispone el artículo 36 de la Ley de Amparo, además de que la autoridad ejecutora resida dentro de la jurisdicción del juez ante el cual se haya presentado la demanda o la relación de proximidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 12 del mismo ordenamiento. Para tales efectos, el territorio de la República Mexicana se ha dividido en Circuitos de Amparo, cuyo número, especialidad y límites territoriales se determinan por el Consejo de la Judicatura Federal, en acuerdos que se publican en el Diario Oficial de la Federación; por ejemplo el acuerdo general 16/1998 publicado en el citado Diario el veintiséis

[18] En este aspecto son aplicables todos los comentarios en relación al artículo 17 y 117 de la Ley de Amparo, que se hicieron al tratar el principio de instancia de parte.

de junio de mil novecientos noventa y ocho, al cual se denominó "Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito" (estos acuerdos son cambiantes de acuerdo a las necesidades del servicio). En algunos Estados de la República existen varios juzgados de Distrito con jurisdicción en determinados municipios de la Entidad Federativa.

Al respecto cabe transcribir los siguientes criterios:

> COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indiciada responsable resida en territorio de otro juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 719.
>
> ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL, PARA LOS EFECTOS DE LA COMPETENCIA EN AMPARO. Si la declaratoria de incompetencia se hace en la audiencia constitucional del juicio de am-paro, y contra el informe negativo de la autoridad responsable residente dentro de la jurisdicción del juez de Distrito, no se rinde prueba en contrario, debe inferirse que dentro de aquel territorio no trata de ejecutarse el acto reclamado y que es competente el otro juez competidor.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Tesis Jurisprudencial 54, pág. 91.
>
> COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN EL AMPARO. Si la demanda de amparo fue presentada después de haberse ejecutado los actos reclamados, debe estimarse que es competente para conocer de ella el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó la resolución reclamada, pues en tales casos debe aplicarse por analogía de razón, el párrafo tercero del artículo 36, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías, que establece que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 694.

COMPETENCIA, DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 719-720.

COMPETENCIA EN AMPARO. La competencia para conocer de un amparo, contra una orden de aprehensión, corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se dicta y ejecuta el acto reclamado, y si este funcionario está impedido, entre tanto no exista esa manifestación y la resolución de la Corte sobre el particular, no puede legalmente concluirse que el expresado juez carezca de competencia para conocer del amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 694.

COMPETENCIA EN AMPARO. Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 695.

COMPETENCIA EN AMPARO, TRATÁNDOSE DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Son competentes para conocer de los amparos promovidos contra órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar donde esas órdenes deben ejecutarse, aunque las autoridades que las dicten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 410, pág. 700.

JUECES DE DISTRITO, COMPETENCIA DE LOS. En los tér-minos del artículo 36, primer párrafo de la Ley de Amparo, es com-petente el juez federal en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y si la resolución que se impugna viola con su solo dictado garantías individuales, aunque la ejecución no produzca nuevas y diversas violaciones constitucionales, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 723.

JUEZ COMPETENTE EN AMPARO. El juez competente para conocer de un juicio de amparo, es el del lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trata de ejecutarse, y no es bastante para que declare su incompetencia, el que la autoridad responsable niegue los hechos que se le atribuyen, pues el quejoso, puede rendir en el juicio prueba en contrario.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 696.

ORDEN DE APREHENSIÓN. Cuando el amparo se endereza contra la orden de aprehensión, el juez competente es el del Distrito del lugar en donde la aprehensión se realice, pues es un contrasentido decidir que es competente el del lugar donde el proceso radica y no donde se ejecuta el acto que se reclama.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 696.

COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, T. 1ª/ J. 12/95, pág. 97.

COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano supe-rior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Septiembre de 2002, 1a./J. 47/2002, Página 49.

4.1.2. Por materia

Atiende a la naturaleza jurídica del acto reclamado lo que permite determinar la vía en los juicios Constitucionales, que son el amparo indirecto y directo. Para efectos de la competencia judicial existen cuatro materias: la administrativa, civil, penal y laboral; sin embargo, esta separación sólo se da en algunos Circuitos, por ejemplo, Distrito Federal, Guadalajara, Toluca, Veracruz, etcétera. En los lugares en que no existe la separación por especialidad las materias antes señaladas, los tribunales colegiados de Circuito y los juzgados de Distrito, conocen de todas las materias. La Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuyen la competencia por materia a las Salas de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, a los tribunales colegiados de Circuito y a los juzgados de Distrito.

Aquí cabe mencionar el conflicto competencial en tratándose del no ejercicio de la acción penal y que ya fue comentado en el apar-tado 3.1. relativo al agraviado. La Suprema Corte, decidió que la com-petencia en esos casos es para el juez penal.

Cuando se señalan como autoridades responsables todos los jueces de la misma materia, será competente otro del mismo circuito de la materia con mas cercanía a la penal.

> COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRI-TORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Cir-cuito al que pertenezca dicho juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el juez de garantías más cercano a ese circuito.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ins-tancia: Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, Tesis P./J. 44/2001, pág. 75.

> MENORES INFRACTORES, CONSEJO TUTELAR PARA, DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL CONOCER DE SUS ACTOS CUANDO AFEC-

TEN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. Una resolución pronunciada por alguna de las Salas del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, en la que se ordena la internación de un menor en las instituciones que correspondan, para su readaptación social, no obstante que no puede considerarse como la imposición de una pena, sí afecta la libertad personal del menor, por lo que, conforme a lo dispuesto por la segunda parte de la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, compete el conocimiento de la demanda de amparo interpuesta en contra de dicho acto al correspondiente juez de Distrito en materia penal.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 181-186, Primera Parte, pág. 129.

LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de Distrito en materia penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la

comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un juez de Distrito en materia penal, si los imputados al Secretario de Gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 217-228, Primera Parte, pág. 29.

COMPETENCIA EN AMPARO ENTRE TRIBUNALES UNITARIOS O JUECES DE DISTRITO. CÓMO DIRIMIR EL CONFLICTO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los conflictos de competencia que se susciten en los juicios de amparo, ya sea entre Tribunales Unitarios de Circuito o entre jueces de Distrito, debiéndose añadir que si los contendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen a distinta jurisdicción, conocerá el Tribunal Colegiado en turno que tenga la misma especialidad por materia del que previno, si son de la misma jurisdicción, o el Tribunal Colegiado en turno que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno, si son de distinta jurisdicción, independientemente de la materia de especialización de los órganos judiciales, conforme al sistema expresamente señalado en la nueva ley, sin que pueda interpretarse que esa decisión corresponde a la Suprema Corte, pues es clara intención del legislador desahogarla de un gran número de conflictos de carácter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden constitucional, independientemente de que el artículo 52, cuarto párrafo de la Ley de Amparo que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencio-nada en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica citada.

Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, T. P./J. 31/95, pág. 26.

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA. Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que

ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo II septiembre de 1995, T. 1ª XXXV/95, pág. 106.

4.1.3. También se da la competencia por turno

Cuando dentro de una misma jurisdicción territorial existen varios tribunales o juzgados que deban conocer de la misma materia, existe una oficina de correspondencia común que se encarga de turnar la demanda al tribunal que corresponda, tal y como acontece en el Distrito Federal en las materias penal, civil, administrativa y laboral; el turno también se da en tribunales mixtos. Si por alguna eventualidad (de distancia y circunstancias de hecho) se presenta una demanda penal (puede ser por comparecencia) ante un juez de Distrito que no está de turno, legalmente es incompetente por razón del turno, pero si se trata de algún caso previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo (privación ilegal de la libertad, por ejemplo), el juez de Distrito ante quien se presenta la demanda debe resolver sobre la suspensión del acto reclamado, y remitirla al juez de turno, que es en ese momento el competente, conforme lo establece el artículo 54, segundo párrafo. Es decir, el juez de Distrito no puede negarse a reci-bir una solicitud de amparo en esos casos y dejar de decretar la sus-pensión, argumentando que no está en turno.

COMPETENCIA. JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE AL QUE SIGA EN SU ORDEN AL QUE RECIBIÓ LA DEMANDA DE AMPARO Y RESULTÓ IMPEDIDO. Tomando en cuenta que de conformidad con el artículo 5º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y ante la falta de disposición en ese sentido por parte del Consejo de la Judicatura Federal, las reglas de

distribución de los asuntos de los doce Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, continúan regidas por el Acuerdo XI/90 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor a partir del dieciocho de julio de mil novecientos noventa, en el que se estatuye que desde el veinte de agosto del mismo año, los referidos Juzgados están en su orden y sucesivamente de turno una semana para recibir todos los asuntos que se presenten, habiéndose iniciado el turno con el primero de ellos, el órgano que debe continuar con el conocimiento de la demanda de amparo cuya competencia recae en los doce Juzgados y que fue recepcionada por el juez que se declaró impedido, atendiendo a los lineamientos establecidos en dicho Acuerdo, lo es aquel que seguía en su orden al que la recibió, dado que si éste resultó impedido, los principios de igualdad y equidad que impe-ran en las citadas reglas de distribución, conducen a considerar que, soslayando al impedido, a quien tocaba conocer de esa demanda lo era el siguiente en turno.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, T. I. 1 º P.14 P, pág. 616.

4.1.4. La competencia por grado

Es aquélla que se refiere a la jerarquía que guardan entre sí las autoridades que conocen del amparo, como el que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados para conocer del juicio de amparo en segunda instancia (revisión), o del amparo directo los segundos, así como los juzgados de Distrito que conocen del amparo indirecto, o los tribunales del fuero común, en la denominada jurisdicción concurrente. Se denomina tribunal de primer grado el que dicta la resolución o sentencia y tribunal de segundo grado o de revisión al que puede revocarla, modificarla o confirmarla. La facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rompe la regla.

REVISIÓN, RECURSO DE. TRATÁNDOSE DE REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES MUNICIPALES RECLAMADOS POR INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DE AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN O DE LOS ESTADOS, ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL MISMO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y NO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. De lo dispuesto por el artículo 103 de la Carta Magna, adminiculado con la información histórica acerca del origen y discu-

sión del mismo precepto en la Asamblea Constituyente de 1916, se arriba a la conclusión de que en sus fracciones II y III, sólo identifica las hipótesis de invasión de esferas de competencia entre la autoridad federal, los Estados o el Distrito Federal, pero no incluye a los Municipios y que no fue siquiera la intención del Constituyente Originario la de ahí comprenderlos. Esto no significa que lo tocante a la invasión de un Municipio en la competencia de una autoridad federal o de un Estado escape del control constitucional, ya que, por un lado, puede ser materia del procedimiento relativo a las controversias constitucionales previsto por el artículo 105, fracción I, del Pacto Federal, del que conoce la Suprema Corte de Justicia y en el que no son parte los particulares, sino respectivamente, como actores y demandados, únicamente los Poderes u órganos involucrados en el conflicto, según lo establecido por las fracciones I y II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, también es posible que un particular pueda reclamar en el juicio de amparo leyes o actos de autoridad que estime violatorios de sus garantías individuales por entrañar una invasión o limitación en la esfera de competencia de una autoridad federal o de un Estado por parte de un Municipio, o la invasión de aquéllas en el ámbito de competencia de éste, pero del recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada en un juicio de amparo de tal naturaleza no debe conocer la Suprema Corte, puesto que tratándose de invasión de esferas de competencia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 107, fracción VIII, inciso b), de la Constitución General de la República, su conocimiento se encuentra reservado a las hipótesis que prevén las fracciones II y III del artículo 103 del Pacto Federal, dentro de las que, ya se ha dicho, no se ubican los conflictos de invasión de competencia en el que alguna de las partes sea un Municipio, sino que de tal medio de impugnación compete resolver, por exclusión, a un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de lo establecido por los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, T. 2ª. /J. 25/97, pág. 246.

COMPETENCIA POR INHIBITORIA. EL AUTO QUE DESECHA ESA CUESTIÓN CONSTITUYE UN ACTO DENTRO DE JUICIO, QUE NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, Y QUE PUEDE SER COMBATIDO EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SEA DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA. La cuestión de competencia, planteada en su modalidad de inhibitoria, constituye un acto

> que necesariamente se presenta dentro de juicio, aun cuando se tramite ante Juez diverso del que recibió la demanda e inició el procedimiento, toda vez que conforme a las reglas procesales respectivas, por definición y en atención a la forma y a los términos en que se tramita, necesariamente se plantea después de que el demandado ha sido emplazado, por lo que si el juicio se inició con la presentación de la demanda, entonces no cabe duda de que se trata de un acto dentro de juicio, ya que no es lógico ni jurídico plantearla previamente a dicha presentación, es decir, antes de iniciado el juicio. Además, al constituir el desechamiento de esa cuestión un acto dentro del juicio, de naturaleza meramente procesal, que no afecta derechos sustantivos, sino que atiende a razones procedimentales, porque sólo produce efectos intraprocesales, en modo alguno es constitutivo de derechos, por lo que no es un acto de imposible reparación. En consecuencia, el promovente de la inhibitoria puede impugnar el auto que la desechó de plano, a través del recurso correspondiente, lo que generalmente produce la suspensión del procedimiento y contra la resolución que se dicte en ese recurso podrá acudir al juicio de amparo directo, conforme a las reglas que al efecto se desprenden de los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo.
>
> Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, 1a./J. 32/2002, Página 60.

En este apartado se aborda brevemente lo relativo al amparo directo ya que no constituye el objeto de estudio del presente libro. El juicio de amparo puede ejercitarse a través de dos vías, la directa y la indirecta, atento a la naturaleza del acto reclamado. De la vía indirecta corresponde conocer a los jueces de Distrito, conforme al artículo 114. Del amparo directo, también conocido como uniinstancial, conocen los tribunales colegiados de Circuito, tal y como se establece en la fracción V del artículo 107 constitucional, 158 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los casos excepcionales conoce del amparo directo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de la facultad de atracción, conforme al último párrafo de la fracción V del artículo 107 Constitucional y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En contra de la sentencia que se dicte en amparo directo, por regla general, no procede el recurso de revisión, salvo el caso previsto en la fracción V del artículo 83 de la Ley de la materia, cuando los tribunales colegiados decidan sobre la constitucionalidad de Leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos del Presidente de la República y los gobernadores

o cuando se establezca la interpretación directa de un precepto de la constitución, y conoce de este recurso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En contra de las resoluciones que emita la Corte, en amparo directo, no procede el recurso en comento.

Los actos contra los cuales procede el amparo directo se encuentran señalados en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que dice:

> "El juicio de Amparo Directo es competencia del Tribunal Cole-giado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 Constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
>
> Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la Ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los prin-cipios generales de derecho, a falta de Ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosa que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
>
> Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

Es decir, el amparo directo procede contra resoluciones que ponen fin al juicio y sentencias definitivas, por violaciones cometidas ya en el procedimiento, ya en la sentencia misma (violaciones de forma y fondo).

Las sentencias definitivas son aquéllas que resuelven el fondo del asunto y en contra de las cuales no procede recurso alguno, por tanto, las interlocutorias no están consideradas como tales. Las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin resolver el fondo del asunto lo dan por terminado y, de igual forma, no procede recurso alguno, por ejemplo la resolución que decreta el sobreseimiento de la causa penal. Desde luego que cause agravio a alguna de las par-tes, por ejemplo al ofendido.

Por lo que hace a las violaciones al procedimiento penal, la Ley de Amparo, en el artículo 160, señala los casos en que pueden constituir una violación y ser invocados como acto reclamado en la demanda de amparo; sin embargo, para poder ser declarados violatorios de garantías, los mismos deben dejar sin defensa al quejoso y trascender al resultado del fallo.

4.2. Competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito

En relación a los actos de los tribunales unitarios de Circuito debe decirse que existe una incompatibilidad de normas entre la Ley de Amparo (artículo 42, segundo párrafo) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 29); puesto que contra actos de un tribunal unitario reclamables en amparo indirecto, la Ley de Amparo le finca competencia al juez de Distrito del Circuito más cercano al tribunal unitario y la Ley Orgánica establece la competencia al tribunal unitario más cercano del mismo Circuito.

El problema no se resuelve bajo el argumento de jerarquía de normas, ya que ambas emanan del Congreso de la Unión, máxime que se advierte que la Ley Orgánica fue abrogada con posterioridad a la reforma del artículo 107, fracción XII, de la Constitución Federal (diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco), lo que a la fecha no ha acontecido con la Ley de Amparo, de ahí que considero que se debe estar al principio de especialidad y, en este aspecto, es la Ley Orgánica la que finca la competencia de los órganos encargados de conocer del Juicio de Amparo, amén de que su artículo segundo transitorio dice: "Los amparos indirectos promovidos en contra de actos de tribunales unitarios de circuito que a la fecha de entrada en vigor de esta ley se encuentren radicados en los juzgados de distrito, deberán seguir siendo tramitados y resueltos por éstos"; además, resulta ilógico que un juez de Distrito conozca de actos de un magistrado de Circuito.

INTERPRETACIÓN

COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los

juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "…En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VII, abril de 1998, P./J. 25/98, pág. 17.

TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LIMITA A LA MATERIA PENAL. La interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los antecedentes legislativos que motivaron la incorporación de los Tribunales Unitarios de Circuito al ámbito competencial del juicio de amparo indirecto, pone de manifiesto que esa facultad no

se limita a los casos previstos en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, sino que la intención del legislador fue la de concederla en sentido irrestricto a todos aquellos actos provenientes de un tribunal de esa naturaleza, respecto de los cuales procediere el juicio de amparo indirecto; por lo que debe atenderse al espíritu que inspiró su adición para darle el verdadero alcance que impide que un juez de Distrito, aún como juez de amparo, juzgue los actos de quien jerárquicamente es su superior.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, julio de 1998, P./J. 31/98, pág. 29.

5. Principios que rigen en el juicio de amparo, relativos a la competencia

A continuación señalaré algunos:

a) La presentación de una demanda de amparo ante un juez incompetente no nulifica la misma ni produce el efecto de que no se haya interpuesto en tiempo, sino que obliga al juez ante quien se presentó a remitir el expediente a la autoridad competente.

DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 116 Y 146 DE LA LEY DE AMPARO. Si el juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, instancia: Pleno, Tesis P./J. 51/95, pág. 110.

AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artícu-

lo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que: "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3º bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ins-tancia: Pleno, Tomo I, mayo de 1995, Tesis P./J. 1/95, pág. 43.

b) El juez o un Tribunal no pueden promover contienda de competencia contra su superior jerárquico (artículo 55 de la Ley de Amparo).

c) Iniciado el juicio, se suspende su tramitación mientras se resuelve su conflicto competencial, con excepción del incidente de suspensión, el cual no puede suspenderse sino que se continúa hasta

su resolución definitiva y debida ejecución (artículo 53 de la Ley de Amparo).

d) Una vez admitida la demanda de amparo ninguna autoridad podrá declararse incompetente, sino hasta que resuelva en definitiva el incidente de suspensión (artículo 54 de la Ley de Amparo).

En este sentido cabe aclarar que el único caso en el que se permite pronunciarse sobre la suspensión provisional o de oficio, aun cuando se advierta la notoria incompetencia, es en tratándose de materia penal, en los casos del artículo 17 de la Ley de Amparo (privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormentos de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, penas inusitadas y trascendentales).

e) La competencia para conocer de un juicio de amparo puede recaer en varios jueces o tribunales, el primero que tenga conocimiento es el que resuelve en definitiva el fondo del asunto.

f) En materia penal, tratándose de una orden de aprehensión, será competente el juez en cuyo lugar trate de ejecutarse dicha orden con independencia del lugar de residencia de la autoridad que la ordena.

> ORDEN DE APREHENSIÓN. Cuando el amparo se endereza contra la orden de aprehensión, el juez competente es el del Distrito del lugar en donde la aprehensión se realice, pues es un contrasentido decidir que es competente el del lugar donde el proceso radica y no donde se ejecuta el acto que se reclama.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 696.

> COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se des-

virtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la senten-cia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia cons-titucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, P./J. 8/2001, Página 5.

COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIII, enero de 2001, P./J. 9/2001, Página 5.

ACUMULACIÓN EN AMPARO. CUANDO SE TRATA DE JUICIOS TRAMITADOS ANTE DISTINTOS JUZGADOS DE DISTRITO SE CONSIDERA "JUEZ QUE PREVINO" AL QUE CONOZCA DE LA DEMANDA PRESENTADA EN PRIMER LUGAR, AUNQUE LA RECIBA POSTERIORMENTE. De lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Amparo se desprende que para conocer tanto del incidente de acumulación de juicios seguidos ante diversos órganos jurisdiccionales, como del fondo del asunto de aquellos que a la

postre fueran acumulados, será competente el Juez de Distrito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo. Ahora bien, si se toma en consideración que el incidente de acumulación en amparo constituye una institución procesal de finalidades prácticas en la cual será potestativo para el juzgador decretar la concentración de los procesos, se concluye que la expresión "Juez de Distrito que hubiere prevenido" significa que el juzgador federal que reciba la demanda de amparo (susceptible de acumulación) más antigua, será quien deba conocer tanto del referido incidente como del fondo de los juicios que a su potestad podrán ser acumulados; asimismo, por "demanda más antigua" se entiende aquella que con anterioridad a las demás relacionadas al procedimiento acumulativo provocó el comienzo formal del juicio de garantías a través del acto de su presentación en cualquiera de las formas admitidas por la ley aplicable y/o por la jurisprudencia.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002. 2a./J. 82/2002. Página 63.

Como corolario a lo anterior, podemos decir que los órganos encargados de conocer del juicio de amparo son los siguientes: a) La Suprema Corte de Justicia en Pleno o en Salas, b) Los tribunales colegiados de Circuito, c) tribunales unitarios de Circuito, d) Los juzgados de Distrito, e) Los tribunales superiores de Justicia del fuero común en los estados y del Distrito Federal (jurisdicción concurrente); y, autorizados únicamente para recibir la demanda de amparo y suspender algunos actos reclamados en materia penal, los jueces de primera instancia o cualquier otra autoridad judicial (en la jurisdicción auxiliar).

CAPÍTULO II

PROCEDENCIA, TRÁMITE Y SENTENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL

SUMARIO: 1. Actos contra los que procede el amparo indirecto. 2. Actos de naturaleza penal. 3. Trámite del amparo penal indirecto. 3.1. Demanda. 3.1.1. Contenido de la demanda. 3.1.1.1. El quejoso, el que promueve en su nombre y el autorizado para oír notificaciones. 3.1.1.2. Nombre y domicilio del tercer perjudicado. 3.1.1.3. Designación y emplazamiento de la autoridad responsable. 3.1.2. Términos para interponer la demanda. 3.1.2.1. Excepción a la regla de los plazos procesales en el amparo. 3.1.3. Presentación de la demanda. 3.1.4. Análisis de la demanda. 3.1.5. Ampliación de la demanda. 4. Informe justificado. 5. Audiencia constitucional. 5.1. De las pruebas (periodo probatorio). 5.1.1. La documental. 5.1.2. La testimonial y la pericial. 5.1.3. La inspección ocular. 5.1.4. La presuncional. 5.1.5. Carga de la prueba. 5.2. Alegatos. 6. Sentencia. 6.1. Análisis de forma y fondo. 6.2. Fundamentación y motivación. 6.3. Análisis del cuerpo del delito y probable responsabilidad. 6.4. Problemática de las agravantes y calificativas en la orden de aprehensión y auto de término constitucional. 6.5. Aclaración de sentencia. 6.6. Sentencia ejecutoriada.

1. ACTOS CONTRA LOS QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO

Por exclusión, pareciera que el amparo indirecto procede contra actos que no constituyen una sentencia definitiva en materia penal o una resolución que pone fin al proceso (sobreseimiento) y que esté ejecutoriada; sin embargo, no todos los actos excluidos del amparo directo son reclamables en el indirecto, pues hay algunos respecto de los cuales no procede el juicio constitucional por ninguna de las dos vías (ejemplo contra el ejercicio de la acción penal).

El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, al establecer textualmente lo siguiente:

02_Capítulo_02 Ojeda.p65 131 23/04/2013, 12:17

> "El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."

Dicho precepto está reglamentado en la Ley de Amparo, la que en forma específica, en su artículo 114, establece los actos en contra de los cuales procede el juicio de amparo bi-instancial.

A continuación se analiza cada una de las fracciones de dicho precepto.

Artículo 114 de la Ley de Amparo:

> "El Amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
>
> I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."

Respecto a esta fracción, los actos que encontramos en la materia que nos ocupa son, esencialmente, actos legislativos de naturaleza penal.

A manera de ejemplo podemos citar algunos casos que han sido materia de interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la inconstitucionalidad del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; artículos 193 y 195 del Código Penal Federal en materia de delitos contra la salud; artículo 334, fracción III del Código Penal para el Distrito Federal; artículos 2 º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y artículos relativos al arresto como medida de apremio, cuyos criterios quedaron plasmados en las tesis siguientes:

INTERPRETACIÓN

> LEYES HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO DEL DICTADO

DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. En la materia penal, la procedencia del amparo contra leyes heteroaplicativas presenta determinadas peculiaridades, en virtud de que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma legal que establece un tipo penal, puede plantearse con motivo de su acto de aplicación susceptible de ocurrir, para efectos del amparo, al dictarse la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y la sentencia definitiva, resoluciones que ostentan características particulares que condicionan y restringen la libertad personal en distintas fases del procedimiento, lo que propicia que quien se ubique en tales supuestos, esté en aptitud discrecional de impugnar la inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera de las mencionadas etapas, inclusive, con motivo del dictado de la sentencia definitiva, sin que en este último caso pueda estimarse consentida la aplicación de la ley, por tratarse de un segundo o ulterior acto de aplicación. Lo anterior es así, porque en este tipo de asuntos no rige para la presentación de la demanda de amparo contra leyes el término de quince días siguientes a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, o al diverso de treinta días contados desde que inicie la vigencia de la ley, a que alude el artículo 22, fracción I, de la propia ley, ya que su acto de aplicación involucra la libertad del agraviado y son atendibles los principios que en la materia recoge dicha ley, entre otros, en sus artículos 16, 17, 22, fracción II, 37, 73, fracción X, 76 bis, fracción II, 160 y 161.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, agosto de 2001, pág. 238.

SALUD, DELITOS CONTRA LA. SON CONSTITUCIONALES LOS ARTÍCULOS 193 Y 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN CUANTO EL PRIMERO REMITE A LA LEY GENERAL DE SALUD PARA DETERMINAR CUÁLES SON LOS NARCÓTICOS Y EL SEGUNDO TIPIFICA Y SANCIONA COMO DELITO LA POSESIÓN DE LOS MISMOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ALGUNA DE LAS CONDUCTAS PREVISTAS POR EL NUMERAL 194 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 193 del Código Penal Federal que considera como narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y los tratados internacionales de observancia obligatoria en México y las demás disposiciones aplicables en la materia, así como el numeral 195 del citado código que tipifica y sanciona su posesión, sin la autorización correspondiente, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el numeral 194 del propio código, son constitucionales. Lo anterior es así, porque el Congreso de la Unión,

en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está facultado para dictar leyes sobre la salubridad general de la nación, así como para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse y si bien la creación de ilícitos responde a la necesidad de que éstos sean un instrumento para la defensa de los valores fundamentales de la comunidad, que sólo debe emplearse contra ataques graves a esos valores (última ratio) y en una forma controlada y limitada por el imperio de la ley, de los aludidos preceptos se desprende que se estableció el delito de que se trata para proteger el bien jurídico de la salud de la población en general; luego, como la posesión clandestina de narcóticos con fines de comercio es catalogada como una conducta que pone en peligro ese bien jurídico, debe considerarse que los motivos, finalidades y espíritu son los de proteger a la sociedad contra su infracción. Con estas precisiones, queda confirmada la potestad punitiva del Congreso de la Unión para establecer tal ilícito, con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico que estimó vital, como es la salud de los gobernados, considerados en su generalidad, y que por su trascendencia se protegió con sanciones punitivas aplicables a quienes eventualmente la pongan en peligro, independientemente de que puedan existir otras sustancias que no se han prohibido y que también pudieran envilecer al individuo y degenerar la raza humana, como las bebidas alcohólicas, pues el legislador tiene la facultad exclusiva de decidir cuáles conductas antisociales que se presentan en las relaciones sociales y jurídicas merecen ser catalogadas como delitos, desde luego atendiendo a razones de política criminal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, agosto de 2001, pág. 248.

ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. Al establecer el citado precepto la posibilidad de que cuando se produzca la conducta delictiva (aborto) prohibida expresamente por el artículo 329 de aquel ordenamiento, pero se reúnan los requisitos consignados en aquella fracción, las sanciones previstas en los diversos numerales 330, 331 y 332, no podrán aplicarse, es indudable que no transgrede la garantía de igualdad contenida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha norma no dispone que a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida, lo que sí sería discriminatorio.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, Tomo XV, febrero de 2002, pág. 415.

IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. NO ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 298 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Este numeral establece que dictado el auto de formal prisión, el juez ordenará que se identifique al preso por el sistema administrativo adoptado para el caso, salvo cuando la ley disponga lo contrario. Por tanto, la identificación se autoriza después de dictado el auto de formal prisión, el que se sustenta en una serie de actos procedimentales que conduce a presumir la responsabilidad del inculpado; dicho auto se decreta, conforme a los artículos 19 constitucional y 297 del ordenamiento citado, una vez comprobada la existencia del cuerpo del delito, de tomada declaración preparatoria al procesado y a los testigos, y de la concurrencia de datos suficientes para suponer al inculpado responsable del ilícito, además de que no esté comprobada en su favor alguna circunstancia excluyente de responsabilidad o que extinga la acción penal. Por tanto, aun cuando el numeral 298 ordena la identificación administrativa del procesado antes de que exista sentencia ejecutoriada respecto de su culpabilidad, ello no implica que se autoricen actos que ocasionan molestias a un inocente sin fundamento ni motivo legal para ello, pues dicha identificación se ordena después de dictado el auto de formal prisión conforme a los datos arrojados por la averiguación previa, los que son bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, de tal suerte que el dispositivo en comento no quebranta las garantías individuales protegidas por los numerales 14, 16 y 19 de la Carta Magna.

Tesis de Jurisprudencia 35, Apéndice 1917-1985, primera parte, pág. 72.

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LOS ARTÍCULOS 2º Y 4 º DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA NO VIOLAN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El solo acuerdo de organización o la organización misma, que tenga como fin cometer alguno de los delitos precisados en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4º de la propia ley, con independencia de la comisión y la sanción de ellos; lo que implica la autonomía del tipo. Asimismo, de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, se advierte que se tomó en cuenta la necesidad de prever una ley especial que regulara la conducta consistente en la organización de tres o más personas encaminadas a cometer alguno de los delitos ahí señalados, pues se estimó que no obstante que se hacía mención a la “delincuencia organizada” en la legislación penal, la regu-

lación era aún insuficiente; consecuentemente, al preverse la delincuencia organizada se establece un delito autónomo y no una agravante. Ahora bien, no obstante que tanto los preceptos aludidos como los artículos 83 bis y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contemplan como bien jurídico protegido la seguridad pública o nacional, sin embargo éstos no tipifican los mismos hechos o conductas ilícitas. En efecto, de los artículos relativos al acopio de armas de fuego y explosivos, se advierte que los elementos del tipo son: a) La posesión de más de cinco armas de fuego; b) Que las armas sean de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea; c) Que la posesión sea sin el permiso correspondiente, y d) La posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia organizada son: 1) El acuerdo de tres o más personas para organizarse o que se organicen; 2) Que el acuerdo para organizarse o la organización sea en forma permanente o reiterada, y 3) Que el acuerdo o la organización tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el mencionado artículo 2.º Esto es, los elementos que integran el tipo de cada figura delictiva: "delincuencia organizada", "acopio de armas de fuego y explosivos" y "posesión de cartuchos" son totalmente diferentes, pues mientras el primero contempla dentro de sus elementos integrantes el acuerdo para organizarse o la organización, por sí solos, para cometer reiterada o permanentemente alguno de los delitos ahí señalados, con independencia de que se actualice la comisión de alguno de los delitos enlistados en el citado artículo 2º, el solo acuerdo de organización o la organización en sí constituye una figura delictiva, el segundo y el tercero aluden, respectivamente, a la reunión de armas de fuego reservadas al Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin el permiso correspondiente y a la posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas. Luego, los tipos penales de mérito contemplan figuras delictivas diferentes; de ahí que el auto de formal prisión con el cual inicia la prosecución del proceso en la hipótesis de que se trata no se sigue por dos tipos diferentes que sancionan la misma conducta, pues los elementos que los constituyen son diversos y, por ende, se sancionan conductas distintas. Por consiguiente los artículos 2º y 4º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no tipifican las mismas conductas que contemplan los artículos 83 bis y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, por tanto, no transgreden el artículo 23 de la Constitución Federal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIII, mayo de 2001, tesis 2a. XLIX/2001, pág. 446.

ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN TÉRMINO MAYOR

AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. De la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124, de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues si bien es cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es inconstitucional.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo II, septiembre de 1995, tesis P./J. 23/95, pág. 5.

Artículo 114, fracción II:

"II. Contra actos que no provengan de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia concede, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia."

Por lo que hace a esta fracción, los actos más comunes, entre otros, son: privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; retención, negativa a instaurar la averiguación previa, el aseguramiento de bienes y el arresto como medida de apremio, abstención de pronunciarse respecto al ejercicio de la acción

penal por parte del Ministerio Público, extradición, orden de traslado de autoridad administrativa, etcétera.

Anteriormente no procedía el amparo contra los actos del Ministerio Público; sin embargo a raíz de la última reforma al artículo 21 constitucional en vigor desde el 1º de enero de 1995, y la inclusión del inciso "B" del artículo 20 constitucional, se ha determinado que contra la confirmación del no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la misma (inexistente en materia federal) procede el juicio de garantías, así como contra otros actos del Ministerio Público que afecten la esfera jurídica del ofendido.

Desde luego contra el ejercicio de la acción penal es improcedente el amparo que interponga el indiciado, ya que el monopolio de la acción penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público, conforme a los artículos 21 y 102 constitucional y la improcedencia proviene de la propia ley, conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; además de que al inculpado no le afectaría la decisión puesto que será el juez quien califique si acepta o no el ejercicio de la acción penal al negar la orden de aprehensión o comparecencia solicitada o bien al no ratificar la detención, es decir, no le causa en ese momento un agravio personal y directo. Otras opiniones sostienen la improcedencia porque ya es parte en el juicio y no autoridad, lo que es muy discutible (no son causas notorias de improcedencia).

Sin embargo, contra la abstención de pronunciarse respecto al ejercicio o no ejercicio sí procede el amparo. En suma, el indiciado no puede pedir amparo contra los actos del Ministerio Público, salvo que se le afecte directamente en sus derechos subjetivos públicos contenidos en los artículos 16, 19 y 20 constitucionales; es decir, que se le afecte en sus propiedades, posesiones o derechos y en su libertad personal, dentro del periodo de la averiguación previa, de igual modo el ofendido podrá pedir amparo contra actos, que en esa etapa del procedimiento penal le afectan en sus derechos subjetivos públicos contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 21 constitucionales.

El Ministerio Público en su calidad de parte, no podrá pedir amparo contra actos fuera y dentro del juicio penal; esto es evidente porque no resiente directamente el agravio.

INTERPRETACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS CONSIGNACIONES QUE REALICE. El juicio de garantías resulta improcedente contra los actos del agente del ministerio consistentes en la consignación de una averiguación ante el Juzgado de lo Penal, toda vez que al haber concluido la averiguación

y ejercitado la acción penal, el primer acto de tal ejercicio, que es la consignación, ya no es de autoridad, sino de parte dentro del proceso, emergiendo así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el diverso 103 fracción I, ambos de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIV, julio de 1994, pág. 664.

ACCIÓN PENAL, CONTRA EL EJERCICIO DE LA, Y CONTRA LOS DEMÁS ACTOS SUBSECUENTES DEL PROCEDIMIENTO PENAL REALIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Tomando en consideración que el ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y solicita que éste se avoque al conocimiento del caso, aun cuando en la fase de averiguación previa el citado representante social puede violar garantías y procede el juicio de amparo en su contra, una vez concluida la averiguación y ejercitada la acción penal cuyo primer acto es la consignación, así como de todos los demás actos que realice durante el procedimiento y que terminan con las conclusiones acusatorias, ya no son actos de autoridad sino actuaciones de parte dentro de un proceso y no dan lugar al amparo. Consecuentemente, resulta impropio señalar como acto reclamado la determinación del Ministerio Público en la que decide ejercitar acción penal en contra del indiciado, pues al emitirla el órgano persecutor de los delitos obra como parte solicitando la incoación del procedimiento y no con facultades de decisión y de imperio que pueden ser cuestionadas a través del juicio de garantías.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VII, junio de 1991, pág. 176.

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, tesis I, 2ºP. J/11, pág. 689.

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de las determinaciones del Minis-terio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, mientras no se establezca el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional. Ahora bien, dicha procedencia debe hacerse extensiva en contra de la abstención del representante social de pronunciarse sobre los resultados que arroje la averiguación previa, en virtud de que tal omisión tiene los mismos o más graves efectos que los de una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento. Esto es así, porque el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la persecución de los presuntos delitos por él denunciados, situación que precisamente quiso evitar el Constituyente Permanente al propugnar por la reforma del cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. En consecuencia, para hacer efectivo el propósito del Constituyente Permanente, consistente en procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, resulta procedente otorgar a los particulares el derecho de recurrir la omisión de éste de emitir algún pronunciamiento como resultado de la averiguación previa, a través del juicio de amparo indirecto, hasta en tanto no se establezca el medio ordinario de impugnación; pues, de lo contrario, en nada beneficiaría al gobernado contar con el derecho de impugnar la resolución expresa de no ejercicio de la acción penal, si no cuenta con la facultad de exigir su emisión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIII, mayo de 2001, tesis por contradicción 1a./J. 16/2001, pág. 11.

MINISTERIO PÚBLICO. LA RESOLUCIÓN EN LA QUE DECLARA ENCONTRARSE IMPOSIBILITADO JURÍDICAMENTE PARA CONOCER DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN VIRTUD DE QUE OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y, ACORDÓ NO INICIAR NI INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA RESPECTIVA, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, fracciones I y II, 113 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8º, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la investiga-

ción y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y compete a éste iniciar la averiguación previa, practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes para determinar la existencia o probable existencia de los ilícitos que se desprendan de los hechos denunciados, así como recibir las denuncias y querellas o realizar acciones oficiosas cuando el caso lo amerita, sobre hechos determinados que la ley señala como delitos. Ahora bien, el hecho de que el Ministerio Público manifieste encontrarse imposibilitado jurídicamente para conocer de los hechos denunciados, en virtud de que operó la prescripción de la acción persecutora y, acuerde no iniciar ni integrar la averiguación previa respectiva, se traduce en una falta de fundamentación y motivación y, por tanto, transgrede, en perjuicio del quejoso, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues para resolver en ese sentido debió determinar, en primer término, el delito o delitos que se desprendan de los hechos puestos a su consideración, para lo cual debe iniciarse un procedimiento penal, que comienza con la apertura de la averiguación previa. Sostener lo contrario sería un error de técnica procesal, ya que si no se inicia la citada etapa, no es posible determinar si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial, son o no constitutivos de delitos, presupuesto necesario para estar en posibilidad de realizar el estudio de la prescripción de la acción.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Constitucional Penal, Novena Época, Primera Sala, Tomo XV, febrero de 2002, pág. 29.

ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES DECOMISO. El decomiso es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte de los bienes de una persona, por razones de interés, seguridad, moralidad o salud públicos y constituye una pena establecida en la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos con los cuales se comete un delito o de los bienes que son objeto o producto del mismo. Las medidas que dicta el Ministerio Público para el aseguramiento de los bienes producto del delito, no constituyen un decomiso, pena cuya aplicación compete sólo al órgano jurisdiccional. Los artículos 24 y 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los artículos 123 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales no facultan a la autoridad investigadora a aplicar penas.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Pleno, Tomo 61, enero de 1993, tesis P. XII/93, pág. 62.

EXTRADICIÓN. LA POSIBILIDAD DE QUE UN MEXICANO SEA JUZGADO EN LA REPÚBLICA CONFORME AL ARTÍCULO 4º DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO IMPIDE AL PODER

EJECUTIVO OBSEQUIARLA, EJERCIENDO LA FACULTAD DISCRECIONAL QUE LE CONCEDE EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Conforme al artículo 9.1 de dicho tratado: "Ninguna de las dos partes contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente." De ahí se infiere, en lo que concierne al Estado mexicano, que el Poder Ejecutivo goza de la facultad discrecional de entregar a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, a los mexicanos que hayan cometido delitos en aquel país "si no se lo impiden sus leyes". Esta expresión debe entenderse como una prohibición al Poder Ejecutivo de acceder a la extradición demandada, pero sólo en el caso de que así lo establecieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o cualquier ley federal. Ahora bien, el análisis gramatical y sistemático del artículo 4º del Código Penal Federal, lleva a concluir que no contiene ninguna prohibición o impedimento a la extradición, sino que sustancialmente establece una regla del derecho aplicable, en cuanto dispone: "serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales", lo que significa que en caso de que un mexicano fuere juzgado en la República por un delito cometido en el extranjero, será sancionado con las penas que establezcan las leyes federales mexicanas y no conforme a las leyes del Estado extran-jero donde se le atribuye que delinquió, mas no que esté prohibida su extradición.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 11/2001, pág. 9.

EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición podrá ser rehusada, a menos de que ésta parta de las seguridades suficientes de que no se impondrá la pena de muerte, o bien, de que si es impuesta, no será ejecutada. En estas condiciones, al ser la pena de prisión vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado artículo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consistente en la readaptación del delincuente para incor-

porarlo a la sociedad, resulta inconcuso que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisión perpetua, sino otra de menor gravedad.

Tesis de jurisprudencia por contradicción 125/2001, aprobada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública celebrada el dos de octubre de dos mil uno.

AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS. Para que el juicio de garantías proceda de manera inmediata contra una ley aplicada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, sin necesidad de esperar a que éste culmine, es menester analizar si el acto de aplicación tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos legales y materiales alcancen a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación. De lo contrario, si la parte quejosa únicamente alega que se afecta su posibilidad de defensa, implicando cuestiones meramente procesales, el juicio resulta improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues en este caso, atendiendo al principio de definitividad, la acción procede hasta que se dicte la resolución definitiva con la cual culmine el procedimiento, momento en que se podrán combatir tanto la ley, como el procedimiento mismo, y la resolución final.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, 1a./J. 29/98, Página 150.

PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artícu-

los 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, 2a./J. 22/2003, Página 196.

ASEGURAMIENTO DE BIENES. EL DECRETADO FORMALMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS QUE PREVIAMENTE HUBIESE SIDO DESPOSEÍDO EL QUEJOSO, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El hecho de que el agente del Ministerio Público decrete formalmente el aseguramiento de un bien mueble o inmueble, previa desposesión o desapoderamiento sufrido por la parte quejosa, como consecuencia de la investigación de un hecho delictivo, no puede ni debe considerarse como una actuación formal ministerial por la que opere la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esto, en razón de que la averiguación previa constituye un procedimiento único, por lo que el efecto lesivo producido por ella sigue siendo idéntico, al seguir ejerciendo la disponibilidad del bien controvertido que ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso al impedirle ejercer su derecho de disfrutar de dichos bienes, aunado a la circunstancia de que los actos mediante los cuales se ordena el desapoderamiento o desposeimiento, retención y posterior aseguramiento de bienes, generalmente obedecen a preservar las huellas o vestigios del delito, garantizar la reparación del daño del ofendido, o bien por tratarse de instrumentos u objetos del delito; por lo que si dichos actos responden al objetivo último de toda averiguación (acreditar los extremos de la acción penal), es inconcuso que no pueden ni deben ser con-siderados autónomos entre sí, ni consumados para los efectos de la procedencia del amparo. No es obstáculo a lo anterior, el que el sigilo y confidencialidad que deben imperar en las actuaciones ministeriales, impidan al particular conocer los

pormenores, formalidades y diligencias que en ella se practiquen, pues ello no significa que esté imposibilitado para acudir a la vía judicial para combatir legalmente los actos de una autoridad que actúa con imperio y que pueden ser violatorios de las garantías individuales consagradas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en tal supuesto, no constituyen actos consumados en forma irreparable que provengan de un cambio de situación jurídica, en virtud de que esta causal de improcedencia del juicio de garantías sólo puede actualizarse cuando el representante social resuelve consignar los hechos ante autoridad judicial competente, deja de ser autoridad para convertirse, de estar en el caso, en parte procesal, así como cuando determina darles a esos bienes un destino final autorizado por la ley.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, 1a./J. 5/2003, Página 5.

Artículo 114, fracción III:

III. "Contra actos de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiera dejado sin defensa al quejoso."

Es preciso establecer previamente qué se entiende por juicio penal para los efectos del amparo, puesto que el artículo 114 de la ley de la materia en sus fracciones III, IV y V, hace referencia al concepto de juicio en general, clasificando los actos dentro y fuera de juicio.

El concepto juicio penal tiene cuatro acepciones:

1. La primera considerada como la operación mental que realiza el juez para conocer previamente el asunto que va a fallar en cuanto al fondo, y que ha sido objeto del proceso. Tiene el mismo significado que el juicio lógico.

2. Por otra parte se considera que el juicio es una de las etapas del proceso penal, donde el Ministerio Público precisa su acusación y el procesado expresa sus argumentos de defensa, etapa que culmina con el dictado de una sentencia de primera instancia. A dicha etapa el artículo 1º, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Pena-les, lo denomina "procedimiento de primera instancia".

3. En otro contexto, hay autores que opinan que el juicio penal es sinónimo de proceso penal, entendido éste como el conjunto de actos jurídicos relacionados entre sí que se realizan ante o por un órgano jurisdiccional, con el fin de resolver un litigio.[19]

4. Otros autores, sostienen que el proceso penal mexicano comienza a partir del dictado del auto de término constitucional (auto de formal prisión o de sujeción a proceso) y concluye con el dictado de la sentencia ejecutoriada de segunda instancia. Lo anterior, en su concepto, con base en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo tercero, de la Constitución Federal que establece que: Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso...

Sin embargo, quienes sostienen esta última postura dejan fuera del juicio penal, la etapa denominada preinstrucción, desarrollada ante la autoridad judicial con la concurrencia de las partes. En dicha etapa se actualizan todas las reglas o principios que regulan todo proceso, como son entre otros el de igualdad, disposición, economía, probidad, publicidad, preclusión, etcétera; por todo ello, algunos autores como J. Zamora Pierce, le denominan a esta etapa de preinstrucción "mini proceso" y al procedimiento judicial que comienza con el dictado del auto de término constitucional le denomina proceso propiamente dicho;[20] distinguiendo uno del otro, en que el primero da origen a una detención preventiva y el segundo a una prisión preventiva.

En esa tesitura, el tratadista Díaz de León señala: De cómo se plantea la fracción II del artículo que se comenta (art. 1º del Código Federal de Procedimientos Penales), esto es, la relativa a la preinstrucción, resulta entonces que el proceso penal empieza y surte sus efectos a partir de este procedimiento, el que, a su vez, únicamente puede iniciarse con la consignación con detenido…[21]

La anterior concepción se recoge en nuestra legislación procesal penal federal en su artículo 4º, aun cuando lo considera como sinónimo de proceso, al establecer: Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las

[19] Dorantes Tamayo, Luis, Elementos de teoría general del proceso, Ed. Porrúa, 1993, pp. 178 y 180.

[20] Zamora Pierce, Garantías y proceso penal, Ed. Porrúa, S. A., 5ª ed., 1991, p. 93.

[21] Díaz de León, Marco Antonio, Código Federal de Procedimientos Penales Comentado, Ed. Porrúa, S. A., 1998, p. 4.

personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley.

Lo que debe concatenarse armónicamente con el contenido del artículo 1º, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales que establece: II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste.

Por tanto, para evitar confusiones debe concluirse que no es conveniente considerar al juicio penal como sinónimo de proceso, porque hay quienes opinan que conforme al artículo 19 constitucional, el proceso inicia con el dictado del auto de formal prisión o sujeción a proceso y, sin embargo, el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Penales, señala al proceso a partir de la preinstrucción.

De tal manera que el concepto de juicio penal para efectos del amparo, debe entenderse como el conjunto de actuaciones y diligencias practicadas por la autoridad judicial, con motivo de un litigio generado por la comisión de un delito ante la acusación del representante social y la defensa que presenta el inculpado, con presencia siempre de las partes bajo un plano de igualdad.

Así las cosas, el juicio penal comienza desde la etapa de preinstrucción que inicia a partir del momento en que las partes se encuentran en igualdad de circunstancias, esto es cuando el inculpado se encuentra a disposición del juez y puede defenderse en su primera declaración, llamada "preparatoria". Por tanto, en las consignaciones sin detenido, el juicio penal comenzará a partir de que se ejecuta la orden de aprehensión y se encuentre a disposición del juez de la causa, es decir, del auto que decreta la detención del inculpado; si la consignación es con detenido, comienza a partir del auto de la ratificación de la detención. En ambos casos el juicio terminará con la etapa de segunda instancia, con el dictado de la sentencia.

Si así concebimos al juicio penal, los actos más comunes reclamados a un juez, en materia de amparo penal, relativos a la fracción III del artículo que se analiza, son: fuera de juicio: la aprehensión, comparecencia, cateo, detención con fines de extradición, prohibición de abandonar una demarcación geográfica, arraigo domiciliario, intervención telefónica. Después de juicio: el reconocimiento de inocencia, orden judicial de traslado, negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridad judicial; ejecución de la orden de decomiso de bienes asegurados, etcétera.

AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.

Tesis de jurisprudencia por contradicción 30/2001, aprobada en sesión privada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinti-nueve de marzo del dos mil uno.

INTERPRETACIÓN

AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL. El derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contiene un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de la pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios de que se trata, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al consti-

tuir una especialización de la pena que favorece al reo. En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Por tanto, es indudable que la resolución en la que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa; por lo que es claro que ese tipo de resoluciones se ubican en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIV, noviembre de 2001, tesis de jurisprudencia 56/2001, pág. 7.

SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, un juicio puede terminar ya sea mediante sentencia definitiva, o bien, mediante resolución que le ponga fin, entendiendo por la primera aquella que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual pueda ser modificada o revocada y, por la segunda, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno, y que contra tales resoluciones procede el juicio de amparo directo, es inconcuso que el auto que declara ejecutoriada una sentencia, al ser un acto que se dicta después de concluido el juicio, no es susceptible de impugnarse a través de dicho medio de defensa extraordinario, sino por la vía de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracción III, de la ley de la materia que dispone que esta vía procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Lo anterior es así, porque si bien el citado auto dota a la sentencia de su carácter definitivo cuando informa a las partes contendientes que su plazo para interponer los

recursos ordinarios de defensa previstos por la ley ha fenecido, no constituye en sí una sentencia definitiva y tampoco puede ser considerado como una resolución que ponga fin al juicio, puesto que en dicho auto no se determina obstáculo alguno que haga imposible pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, esto es, se trata de un acto de naturaleza informativa que se dicta después de concluido el juicio, lo que se confirma con el hecho de que la terminación de éste no depende de la declaración de que la sentencia ha causado ejecutoria, sino de la circunstancia de que exista un pronunciamiento de fondo que haya puesto fin al litigio planteado por las partes, o una imposibilidad para ello.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, 1a./J. 83/2001, Página 21.

Artículo 114, fracción IV:

IV. "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

En esta fracción encontramos los siguientes actos judiciales: el auto de ratificación de la detención, acuerdo de negativa a la libertad provisional bajo caución o a la forma y monto de la garantía fijada, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, arresto como medida de apremio, auto que niega la libertad por desvanecimiento de datos, etcétera.

La multa como medida de apremio, es un acto en el juicio, respecto del cual se ha discutido si es de imposible reparación o no. En mi concepto sí lo es, toda vez que, con independencia que hay que agotar los recursos correspondientes, dicho acto no sería reparable en la sentencia definitiva, ni tampoco reclamable en el amparo directo y, por tanto, su impugnación resulta procedente en la vía indirecta.

INTERPRETACIÓN

LIBERTAD PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE SEÑALA LA FORMA Y MONTO DE LA CAUCIÓN QUE DEBE OTORGAR EL INCULPADO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Cualquier acto, en relación con la restricción o privación de la libertad personal se traduce en una lesión, de manera cierta e inmediata, a ese derecho sustantivo que tutela la Constitución General de la República. En tal virtud, la resolución que fije el monto y la forma de la caución para obtener la libertad provisional (artículo 20, fracción I), produce una afectación que no puede ser modificada, revocada o nulificada, ni siquiera a través del dictado de una sentencia

favorable. Por tanto, en contra de dicha resolución, por ser un acto dictado dentro del juicio que afecta directamente la libertad, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, por ser un acto cuya ejecución es de imposible reparación, de acuerdo a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo X, diciembre de 1999, tesis 1a./J. 85/99, pág. 79.

DETENCIÓN, RATIFICACIÓN DE LA. EL AUTO QUE LA DECRETA DEBE SER COMBATIDO A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN X, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. El auto que califica la detención de un acusado, en los casos de urgencia o flagrancia, a que se refiere la reforma del artículo 16 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, debe ser combatido a través del amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción X, último párrafo y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una violación que por afectar un derecho sustantivo como es la libertad, produce una ejecución de imposible reparación, lo cual constituye la definitividad requerida para la promoción del amparo en la vía bi-instancial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis VIII.2o. J/10, pág. 347.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO. Si de la sola lectura del texto de una ley ordinaria, y de su comparación con el vigente del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, al parecer, aquélla otorga mayores prerrogativas al inculpado al dictarse un auto de formal prisión, pues dicho texto, al no haber sido actualizado conforme a la reforma constitucional del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, aún exige para su dictado la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos que contenga la figura típica de que se trate, tal apreciación, a simple vista, no debe conducir a sostener jurídicamente que otorga mayores prerrogativas al indiciado

y que, por ende, resulta de aplicación preferente al referido artículo 19. Lo anterior es así, pues en atención al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Carta Magna, los Jueces deben acatar lo dispuesto en ésta, cuando la legislación local se oponga a ella, por lo que la circunstancia de que el ordenamiento legal respectivo no haya sido adecuado a la reforma constitucional citada, no implica ni conlleva a sostener válidamente que otorgue mayores prerrogativas al indiciado al dictarse un auto de formal prisión y, por ende, que resulte de aplicación preferente a las disposiciones de la Norma Fundamental, en virtud de que ésta constituye la Ley Suprema de toda la Unión, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, por el hecho de que no hayan sido adecuadas a su texto, entonces, deben predominar las disposiciones del Ordenamiento Supremo y no las de esas leyes ordinarias.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003. 1a./J. 86/2002, Página 47.

ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad

del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, 1a./J. 34/2001, Página 287.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO. La libertad provisional bajo caución establecida en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, es un derecho sustantivo o fundamental del gobernado, y no una cuestión meramente adjetiva o procesal, porque además de estar consagrada como tal en la Carta Magna, involucra uno de los derechos sustantivos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación que produce su negativa, no es susceptible de ser reparada, aunque el interesado obtuviera una sentencia absolutoria; y, por ende, le es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso, del indiciado, procesado o sentenciado; lo que significa que al resolver sobre el derecho de referencia se debe aplicar la ley más benéfica para aquél, ya sea la vigente al momento en que se cometió el ilícito, si ésta permitía que se otorgara dicho beneficio, o bien, la vigente en la época de emisión del acuerdo respectivo, si esta última le es más favorable.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, 1a./J. 10/2001, Página 333.

Artículo 114, fracción V:

V. “Contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería.”

El acto más común en amparo penal es el acuerdo por el cual el juez ordena el aseguramiento o decomiso de un bien ajeno al indiciado o sentenciado.

Otro acto podría ser la resolución judicial dictada en el incidente de reparación del daño exigible a terceros.

> EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.
>
> Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, P./J. 40/2001, Página 81.

> PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA

EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, P./J. 39/2001, Página 93.

Artículo 114, fracción VI:

VI. “Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones **II** y **III** del artículo 1º de esta ley.”

Un ejemplo de este acto, podrían ser las leyes penales de los Estados que prevean conductas que también se encuentran tipificadas en leyes penales especiales federales, y que consecuentemente otorgan competencia a los jueces comunes para conocer de esos delitos, siempre y cuando se afecte el interés jurídico de un gobernado, por existir invasión de esferas.

Artículo 114, fracción VII:

> VII. "Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."

Esta fracción fue adicionada por el artículo segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2000, en vigor al día siguiente, como producto de las interpretaciones que realizara nuestro más alto tribunal, al artículo 21 constitucional, reformado por decreto publicado en el mismo diario el 31 de diciembre de 1994; precepto que estableció la necesidad de impugnar vía jurisdiccional las decisiones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal; ya que anteriormente estos actos no eran reclamables en amparo. Establecida la fracción VII, comentada, las tesis anteriores han quedado superadas y actualmente contra dichas resoluciones procede el juicio de amparo siempre y cuando se trate de la última resolución, es decir, la confirmación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Los recursos o medios de defensa están regulados en las leyes orgánicas y reglamentos de las distintas Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como de la Procuraduría General de la República.

> ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a la iniciativa en comento descuella, como elemento preponderante, la determinación de hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones

respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, para lograr, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares obtengan una reparación del daño; por otro, que se abata la impunidad; y, además, que se impida que por actos de corrupción, la representación social no cumpla con sus funciones constitucionales. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, que dio paso a la aprobación con modificaciones de la citada iniciativa, pone de relieve el propósito legislativo de elevar al carácter de garantía individual el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a la seguridad jurídica. Esos antecedentes legislativos son reveladores del nacimiento de la garantía individual de impugnar las resoluciones de mérito, por lo que es factible lograr que, mediante el juicio de amparo, el Ministerio Público, por vía de consecuencia, ejerza la acción penal o retire el desistimiento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 128/2000, pág. 5.

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional

mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, octubre de 2000, tesis P./J. 114/2000, pág. 5.

En materia de amparo penal, los actos más comunes son los contemplados en las fracciones II, III y IV, del precepto legal antes transcrito. Por otra parte, los actos previstos en las fracciones I, V y VI no son tan comunes en esta materia, aunque sí llegan a actualizarse supuestos como los ejemplos apuntados. Los actos ejemplificados son los que tienen mayor trascendencia y los encontramos continuamente señalados como actos reclamados en las demandas de amparo penal.

En la página siguiente se grafica, con un cuadro, los actos penales por los que procede el amparo conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo.

I. Normas Penales.		Autoaplicativas Heteroaplicativas
II. Actos de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales.		Privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial. Deportación, destierro. Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Negativa a instaurar la averiguación previa. Multas. Retención. Detención. Aseguramiento de bienes por parte del Ministerio Público. Violación de garantías del ofendido. Extradición. Abstención de pronunciarse respecto al ejercicio de la acción penal. Orden de traslado por autoridad administrativa.
III. Actos fuera del juicio y después de concluido (Actos judiciales).	Antes.	Orden de aprehensión. Orden de comparecencia. Orden de cateo. Orden de arraigo. Orden de aseguramiento de bienes. Orden de detención con fines de extradición.
	Después	Ejecución de la orden de decomiso de bienes. Orden de traslado por autoridad judicial. Negativa al reconocimiento de inocencia. Negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridad judicial.
IV. Actos dentro del juicio de imposible reparación.		Ratificación de la detención. Negativa a la libertad provisional bajo caución. Auto de formal prisión. Negativa a la libertad por desvanecimiento de datos. Duración de procesos. Arresto como media de apremio. Multa como medida de apremio. Auto que señala forma y monto para el disfrute de la libertad provisional bajo caución.
V. Actos penales que afectan a personas extrañas a él.		Aseguramiento de un bien ajeno al inculpado, propiedad de un tercero. Resolución dictada en el incidente de reparación del daño exigible a tercero.
VI. Invasión de esferas.		Leyes penales locales que tipifiquen delitos del orden federal y que causen un agravio personal y directo
VII. Confirmación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal.		Confirmación del no ejercicio de la acción penal. Confirmación del desistimiento de la acción penal.

2. Actos de naturaleza penal

Hay doctrinarios que opinan que el acto penal es el privativo de libertad personal exclusivamente; sin embargo, hay actos penales que no afectan esa libertad personal, como por ejemplo, una multa impuesta, la orden de comparecencia o el auto de sujeción a proceso, el no ejercicio de la acción penal, etcétera, que desde luego son actos de naturaleza penal.

De lo que se ha visto hasta aquí, puedo establecer que los actos de naturaleza penal para efectos del juicio de amparo se pueden dividir en forma genérica en judiciales y no judiciales, éstos a su vez en privativos de libertad personal y no privativos de libertad personal.

Actos de autoridad	Judiciales	Privativos de libertad. No privativos de libertad.
	No Judiciales	Privativos de libertad. No privativos de libertad.

La anterior clasificación que me permito establecer es importante no sólo para la procedencia del juicio de garantías, sino para los efectos de la suspensión del acto reclamado.

Enseguida daré algunos ejemplos de la anterior clasificación, enfocada a los actos más comunes en materia de amparo penal.

Los actos judiciales privativos de libertad personal. Son aquellos que emanan de la autoridad judicial y que afectan la libertad personal.

Por privación de la libertad personal debe entenderse el acto tendiente a la detención física del gobernado, el impedirle que no salga de un determinado espacio territorial de poca dimensión; eliminarle su derecho a desplazarse libremente por su comunidad a realizar las actividades que normalmente realizan las personas para su desenvolvimiento en sociedad y su sobrevivencia (anteriormente la Constitución Federal hacía referencia a libertad corporal).

Ejemplos: la orden de aprehensión, detención con fines de extradición, auto de ratificación de la detención, auto de concesión de la libertad provisional bajo caución con garantía excesiva, auto de formal prisión, auto que niega la libertad provisional bajo caución y por desvanecimiento de datos, negativa al reconocimiento de inocencia,

penas inusitadas y trascendentales, negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridad judicial, etcétera.

El arraigo ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un acto privativo de libertad por afectar la libertad personal, como se puede ver en la siguiente tesis:

> ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo X, noviembre de 1999, tesis 1a./J. 78/99, pág. 55.

Los actos judiciales no privativos de libertad. Son aquellos actos penales que afectan la libertad general del gobernado (tránsito, educación, salud, de expresión, etc.), constituyendo solamente un acto de molestia, sin afectar la libertad personal; entre estos actos encontramos la orden de comparecencia, el auto de sujeción a proceso, la imposición de multa (multa excesiva), la orden de cateo, el sobreseimiento, orden de traslado, intervención de comunicaciones privadas, etcétera.

Existe la tesis por contradicción 37/95 bajo el rubro "Orden de comparecencia. Debe estudiarse su constitucionalidad aun y cuando el quejoso la designe erróneamente como orden de aprehensión", que en su texto afirma que la orden de comparecencia restringe la libertad personal. Sin embargo, la tesis emana de un tema distinto que consiste en el análisis del alcance de la suplencia de la queja cuando se señala como acto reclamado la comparecencia y resulta que se trata de una orden de aprehensión, que impide sobreseer por inexistencia del acto; de la lectura de la resolución de la contradicción mencionada no se advierte razonamiento alguno que sustente la

afirmación de que la orden de comparecencia restrinja la libertad personal.

Actos no judiciales privativos de libertad. Verbigracia: peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial (actos del Ministerio Público, Consejo de Menores Infractores y otras autoridades), orden de detención con fines de extradición, deportación por parte del Ejecutivo, destierro, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incomunicación; todos estos actos realizados por autoridades no judiciales.

Actos no judiciales no privativos de libertad. Confiscación de bienes, multas del Ministerio Público, orden de presentación del Ministerio Público, negativa a instaurar una averiguación, confirmación del no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal, ficha signalética, actos legislativos (amparo contra normas), aseguramiento de bienes por parte del Ministerio Público, abstención del Ministerio Público de pronunciarse respecto al ejercicio de la acción penal, etcétera.

3. Trámite del amparo penal indirecto

El trámite del juicio de amparo indirecto se encuentra regulado por el capítulo IV de la Ley de Amparo, en sus artículos del 145 al 157. Se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva. En el trámite se destacan las siguientes etapas:

I) Demanda;
II) Auto inicial;
III) Emplazamiento;
IV) Informe Justificado;
V) Audiencia Constitucional, y
VI) Sentencia.

3.1. Demanda

"La demanda es el acto procesal por virtud del cual se ejercita la acción respectiva por su titular, que es el agraviado y, quien mediante su presentación, se convierte en quejoso." [22]

En el juicio de amparo la demanda es el acto procesal por virtud del cual el quejoso ejerce la acción constitucional correspondiente para solicitar la protección de la justicia federal, al estimar que uno

[22] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 646.

o varios actos reclamados, de una o varias autoridades responsables, violan sus garantías individuales, la Constitución Federal o sus derechos derivados de la distribución competencial entre Federación y Estados.

La demanda de amparo indirecto, tendrá que presentarse, por regla general, en forma escrita, así se desprende del artículo 116, que dice:

> "La demanda de amparo deberá formularse por escrito…"

Sin embargo, en materia penal existen casos de excepción especificados en la propia ley, en los cuales se permite que la demanda de amparo se formule por comparecencia. Estos son: actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (penas de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, las penas inusitadas y trascendentales), la demanda podrá formularse verbalmente (optativo); se levanta acta de comparecencia de lo manifestado por el quejoso, tal y como se establece en el artículo 117, que dice:

> "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez."

Como se advierte del dispositivo reproducido, en la manifestación verbal del quejoso o de quien promueve en su nombre se exigen requisitos mínimos en la demanda; de ahí que, aun cuando ésta se presente por escrito, si se trata de esos casos previstos en el artículo 17 bastará señalar el acto reclamado, el lugar donde se encuentre el quejoso detenido, la autoridad ejecutora y de ser posible la autoridad ordenadora (requisito no indispensable), es decir, son tres los requisitos mínimos que exige la ley para poder recibir la demanda, de ahí que es inadmisible la prevención que se hace en algunos juzgados para que se subsanen las omisiones, consistentes en el señalamiento de los requisitos que marca el artículo 116, en los supuestos

de personas detenidas ilegalmente y que están siendo torturadas. Esta regla no opera en casos de multa excesiva; así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 8/95. Criterio que aunque fue sustentado por la Sala Administrativa, resulta oportuno citar por ser aplicable al tema que se comenta.

> MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. NO RIGEN PARA ELLAS LAS PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. El artículo 22 de la Carta Magna prohíbe penas inusitadas y trascendentales y, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva; por otra parte, la Ley de Amparo otorga ciertas prerrogativas procesales a quienes reclaman actos prohibidos por dicho precepto constitucional, y así, el artículo 22, fracción II, de la mencionada ley, prevé que la demanda de garantías puede promoverse en cualquier tiempo; igualmente, el artículo 123, fracción I, establece la suspensión de oficio. Estas y otras prerrogativas procesales dentro del juicio de garantías, rigen para todos los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pero no respecto de actos reclamados consistentes en multas fiscales o administrativas que se califiquen de excesivas, en virtud de que tales actos, por no poner en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física y la dignidad de las personas, no ameritan la misma tutela jurídica que los demás que sí afectan aquellos derechos fundamentales.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, julio de 1995, T. P./J. 8/95, pág. 20.

El amparo por comparecencia no sólo procede cuando el agraviado está privado de su libertad, sino basta que exista un ataque a su garantía de libertad personal fuera de procedimiento judicial; así, si el gobernado es perseguido materialmente por la policía para ser detenido sin que exista orden judicial, sin que medie la comisión de un delito, el Juez de Distrito tiene la obligación de recibir la comparecencia y decretar la suspensión provisional, tomando las medidas correspondientes. Es decir, en este caso el requisito consistente en señalar "el lugar donde se encuentre el agraviado" no es obstáculo para admitir la demanda, pues el mismo hecho lo hace innecesario.

Una segunda excepción a la regla de que la demanda de amparo indirecto debe presentarse por escrito, aun cuando no es exclusiva de la materia penal, se previene en el artículo 118, que establece la

posibilidad de que la demanda, en casos urgentes, se plantee por telégrafo, dicho precepto establece:

> ARTÍCULO 118.—"En casos que no admitan demora, la petición de amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al Juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo."

El artículo transcrito establece como requisito para que la demanda pueda presentarse por telégrafo, que el agraviado tenga algún inconveniente en la justicia local y que sea ratificada en tres días; esto obedece a que se le otorga una competencia auxiliar en el amparo a la autoridad judicial local y puede presentarse ante ella, de ahí que la demanda por telégrafo sólo procederá cuando en el lugar donde se ejecute el acto no exista Juez de Distrito y exista inconveniente por parte del juez común; asimismo, la ratificación deberá ser por escrito dentro de los tres días siguientes. El telegrama y escrito de ratificación deberán contener los requisitos señalados en el artículo 116 o 117 si se tratare de los casos del artículo 17. Si no se ratifica la demanda telegráfica se tendrá por no interpuesta, quedando sin efectos las providencias dictadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos penales del referido numeral 17 (otra excepción), en los cuales, si no se logra la comparecencia del agraviado se suspenderá el procedimiento en lo principal y se consignarán los hechos al Ministerio Público, y si transcurre un año sin localizar al directamente quejoso se tendrá por no interpuesta la demanda, puesto que así lo dispone el artículo 119.

La demanda por telégrafo no sólo opera en los casos de privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, sino en cualquier otro, basta con que sea urgente, no exista Juez de Distrito en el lugar y exista inconveniente en la justicia local (la sola manifestación basta); de ahí que se puede pedir amparo por telégrafo cuando se trate, por ejemplo, de un cateo, orden de aprehensión, de arresto o reaprehensión, debiendo observar únicamente los requisitos del 116.

3.1.1. Contenido de la demanda

En el amparo indirecto, el contenido de la demanda ha de apegarse a todas las exigencias expresadas en el artículo 116, que textualmente dice:

ARTÍCULO 116.—"La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trata de amparo contra leyes;

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones, que constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1º de esta ley, y

VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1º de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

3.1.1.1. El quejoso, el que promueve en su nombre y el autorizado para oír notificaciones

El quejoso es el directamente agraviado, el que solicita la protección federal, no así sus representantes o personas que promueven el juicio en su nombre. En cuanto al domicilio del quejoso, se refiere al personal, donde habita regularmente, que es muy distinto al señalado para oír y recibir notificaciones. Si son varios los quejosos se deberá señalar representante común, si no lo hacen, se les prevendrá que lo hagan dentro del término de tres días, y se les apercibirá que de no hacerlo el juez nombrará a cualquiera de los interesados (artículo 20).

El que promueve a nombre de otro, es la persona que en nombre y representación del directamente agraviado solicita el amparo; puede ser un tercero en los casos del artículo 17; el defensor o el apoderado legal, como ya se analizó en este rubro en la parte relativa al principio de instancia de parte agraviada.

El autorizado para recibir notificaciones en términos del artículo 27, en materia penal, a diferencia de las materias civil, mercantil

o administrativa, no requiere acreditar ser abogado, basta con que tenga capacidad legal; su actuación no sólo se reduce a oír notificaciones e imponerse de los autos, sino que además está facultado para interponer recursos, ofrecer o rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento de las mismas (audiencia constitucional o incidental), solicitar que se dicte sentencia para evitar la caducidad, o realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del quejoso; sin embargo, lo que no puede hacer es delegar esas facultades a un tercero.

Por otra parte, para hacer valer sus facultades tendrá que ser reconocido su carácter de autorizado por el Juez de Amparo, de otra manera no estará legitimado, es común que los jueces no acuerden esa autorización, por descuido o porque desechan la demanda, sin embargo, deberán hacerlo siempre para darles legitimación para interponer el recurso, de lo contrario el único legitimado será el quejoso.

INTERPRETACIÓN

REPRESENTANTE COMÚN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN POR LOS QUEJOSOS, SURTE EFECTOS SIN QUE SE REQUIERA PREVIO ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo, cuando en un juicio de garantías la demanda se interponga por dos o más personas, éstas deberán designar de entre ellas un representante común, previéndose que si no lo hacen, el juez mandará prevenirlas para que en un término de tres días designen uno, y si no lo hicieren, designará con ese carácter a cualquiera de los interesados; por lo que atento a lo previsto por ese precepto, se puede decir que el establecimiento de la figura jurídica del representante común en el juicio de amparo, tiene como propósito fundamental, evitar que ante la pluralidad de quejosos se entorpezca la adecuada prosecución del juicio de amparo, debiendo actuar el representante común como un mandatario con autorización para litigar en representación de los restantes quejosos, sin perder su carácter de parte en el procedimiento. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que del contenido del precepto en cita no se desprende que se condicione su designación o el ejercicio de sus funciones a ningún requisito, ni que se demanden mayores formalidades, es inconcuso que basta el nombramiento del representante común que se haga por parte de los peticionarios de garantías en la demanda de amparo, para que surta desde luego sus efectos, sin que sea necesario un reconocimiento previo por parte del juzgador de amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 124/2000, pág. 21.

AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL JUICIO, POR ÉL O POR SU AUTORIZANTE. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto, el autorizado en términos amplios goza de la capacidad procesal necesaria para realizar, a nombre del autorizante, cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de éste, por lo que a aquél corresponde valorar qué actuaciones procesales son factibles de permitir al autorizante obtener una resolución favorable a sus intereses, con independencia de que en un caso concreto pudieren ser desfavorables a este último, riesgo que asume el autorizante al conferir su representación a un tercero, profesional en derecho, cuando se trate de las materias administrativa, civil y mercantil. En esa medida, en ejercicio de la representación conferida, el autorizado puede válidamente desistir de una prueba ofrecida por él o por su autorizante, lo que se corrobora por la circunstancia de que tal actuación encuadra dentro de la relativa a utilizar en juicio los medios de prueba que se estimen pertinentes, la que no se limita a su aspecto positivo, el ofrecimiento y rendición de pruebas, pues también se expresa en su aspecto antagónico, la posibilidad de desistir de pruebas previamente ofrecidas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 26/2000, pág. 5.

AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. NO ESTÁ OBLIGADO A DEMOSTRAR SU CALIDAD DE ABOGADO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 párrafo segundo de la Ley de Amparo, y por exclusión, en tratándose en materia penal, la persona autorizada para recibir notificaciones en nombre del quejoso, no tiene la obligación de acreditar que se encuentra legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, I, junio de 1995, VI.2º 4K, pág. 404.

AUTORIZADO EN EL AMPARO PARA OÍR NOTIFICACIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 27 de la Ley de Amparo, establece la obligación de acreditar que la persona a quien se autoriza para oír notificaciones se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, para que así pueda realizar los actos precisados

en la primera parte del párrafo segundo del citado precepto, entre otros, interponer los recursos que procedan; sin embargo, dicha obligación se limita a las materias civil, mercantil y administrativa, quedando excluidas, en consecuencia, otras materias, como son la penal, agraria y laboral, en las que basta que la autoridad que conozca del juicio de amparo haya reconocido la designación del autorizado para oír notificaciones para que, con tal carácter, pueda ejercitar las facultades que concede aquel precepto de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, VII-marzo de 1991, pág. 121.

REVISION, RECURSO DE. DEBE INTERPONERLO EL DIRECTAMENTE QUEJOSO CUANDO SE DESECHE SU DEMANDA DE AMPARO Y EL JUEZ DE DISTRITO NO HACE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL AUTORIZADO. El artículo 27 de la Ley de Amparo faculta a los quejosos y a los terceros perjudicados, para que autoricen a una o más personas en la gestión de los actos procesales que les atañen; sin embargo, en los términos del numeral en cita, el autorizado sólo cuenta con una personalidad derivada, la que, como no puede darse mas que en el juicio constitucional, precisa el reconocimiento del juzgador para que ejercite los actos procesales favorables a sus representados (ofrecimiento de pruebas, alegatos e interposición de recursos) y, como el juicio sólo se estima instaurado con el auto admisorio de la demanda, es claro que a pesar de que la autorización dimana de la manifestación del quejoso o del tercero perjudicado, y su reconocimiento es un acto simplemente declarativo de los tribunales de amparo; tal autorización no es susceptible de operar en tanto no se admita la demanda y el Juez haga pronunciamiento alguno respecto de tal designación, por lo que el recurso de revisión que interponga el autorizado contra el desechamiento de la demanda es improcedente por no tener su personalidad reconocida.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo: IV, Septiembre de 1996, J/26, pág. 563.

3.1.1.2. Nombre y domicilio del tercero perjudicado

En la demanda se debe manifestar si existe dicho sujeto procesal y, en su caso, la dirección en que pueda recibir notificaciones. Si se omite, el Juez de Distrito ordenará la aclaración de la demanda de garantías. En materia penal, sólo existe la figura del tercero perjudicado cuando el acto reclamado se hace consistir en resoluciones concernientes a la reparación del daño o responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito y ahora con las reformas,

también lo puede ser el indicado en los casos en que el ofendido sea el quejoso.

En relación a cómo deben realizarse las notificaciones al tercero perjudicado, existe la siguiente tesis:

> NOTIFICACIONES AL TERCERO PERJUDICADO, CUANDO SE DESCONOCE SU DOMICILIO. La Ley de Amparo tiene un capítulo completo en materia de notificaciones, de acuerdo con el cual, cuando se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, puede emplazarse al mismo por lista, en los términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo en su parte final, que concretamente señala que cuando no conste en autos el domicilio del interesado, la notificación se hará en estos casos por lista; ya que el llamamiento a los terceros perjudicados por medio de edictos, carece de fundamento en el procedimiento de amparo. Es cierto que, de acuerdo con el artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de dicha ley, pero tal supletoriedad debe entenderse conforme al texto expreso de la disposición legal citada, y no debe aceptarse una aplicación ilimitada, ya que la interpretación legal, según lo determina el párrafo invocado, es que el Código Federal de Procedimientos Civiles solamente debe aplicarse "a falta de disposición expresa", de la Ley de Amparo. Ahora bien, el procedimiento de garantías tiene un sistema propio y peculiar, que se contiene en el capítulo de notificaciones que abarca los artículos 27 al 34 de la Ley de Amparo y que sustancialmente difiere del relativo al que mencionan los artículos 303 al 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tal diferencia se explica fácilmente, si se toma en cuenta que en el procedimiento civil normalmente actúan como únicas partes el actor y el demandado, y excepcionalmente los terceros o el Ministerio Público. En cambio, en el procedimiento constitucional siempre existen un quejoso y una autoridad responsable, que si bien pueden parangonarse bajo ciertos supuestos al actor y al demandado de referencia, en el juicio de amparo éste siempre es una autoridad, cosa que no sucede en el proceso civil; además, en el juicio de amparo, normalmente hay tercero o terceros perjudicados y sólo excepcionalmente no aparecen éstos. A mayor abundamiento, en todos los casos actúa como parte el Ministerio Público Federal. Así se desprende del artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, el juicio de amparo, como indiscutible control de constitucionalidad y por ser un juicio sui generis, tiene fórmulas especiales, que no pueden ser confundidas con aquellas que se establecen para una contención entre particulares, como son las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo anterior, cabe concluir que no puede tener aplicación supletoria el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que existe dispo-

sición expresa en la Ley de Amparo, precisamente en su artículo 30, fracción II; y, además, porque el sentido tanto general de los dos procedimientos, cuanto particular en sus sistemas de notificación, no se compaginan. Ahora bien ya dentro del sistema de la Ley de Amparo la fracción II anteriormente invocada, autoriza al juzgador para que provea lo necesario a efecto de que se notifique al interesado cuyo domicilio no conste en autos. Esta forma de actuar es perfectamente acorde con la obligación que el juez tiene, en mate-ria de amparo, de proveer de oficio a la dinámica del procedimiento, de acuerdo con lo que determina el artículo 157 de la ley de la materia. Según la propia fracción II, el juzgador constitucional puede oficiosamente ordenar al actuario que investigue el domicilio del tercero perjudicado. Esta investigación, es susceptible de realizarse usando cualesquiera de las vías lícitas posibles, según la faculta la propia fracción II. Como se ve, tal vez en casos peculiares y dentro de la amplitud de actuación que la Ley de Amparo concede al juzgador constitucional, sea conveniente que éste investigue el domicilio de algún interesado incluso por publicaciones, pero no está obligado en general a hacerlo así por disposición legal; sino, como se dijo, es potestativo para el juez hacer uso de este sistema, si lo considera necesario en ciertos casos especiales, pero lo común es que el emplazamiento al tercero perjudicado se haga por lista, siendo legal de conformidad con lo que determina la parte final de la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Novena Época, Tomo 91-96 primera parte, pág. 108.

3.1.1.3. Designación y emplazamiento de la autoridad responsable

Por lo que respecta a las autoridades responsables, el quejoso debe especificarlas con claridad, designándolas con su denominación correcta y evitando el señalamiento genérico de la unidad burocrática a la que se atribuyen los actos reclamados, ya que debe indicar los órganos específicos que la integran y de quiénes provengan los referidos actos; es decir, autoridad responsable es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la norma o el acto reclamado, según lo establece el artículo 11. También resulta conveniente señalar quiénes son autoridades ordenadoras y quiénes ejecutoras, más aún cuando se solicita la suspensión del acto reclamado.

INTERPRETACIÓN

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de

hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIV, noviembre de 2001, pág. 39.

En relación al emplazamiento y notificación de las autoridades responsables, cabe hacer mención de los artículos 28, fracción I, 29, fracción I, y 34, fracción I de la Ley de Amparo, que establecen que las notificaciones deberán ser por oficio o por correo en pieza certificada.

ARTÍCULO 28.—"Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán:

I. A las autoridades responsables y las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agregará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro talonario, se recabará el recibo correspondiente;…"

ARTÍCULO 29.—"Las notificaciones en los juicios de amparo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, y las que resultan de los procedimientos seguidos ante la misma Corte o dichos Tribunales, con motivo de la interposición de cualquier recurso, o de la tramitación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo, se harán en la siguiente forma:

I. A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, cuando se trate de notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la demanda; el que admita, deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso; el que declare la competencia o incompetencia de la Suprema Corte de Justicia o de un Tribunal Colegiado de Circuito; los autos de sobreseimiento; y la resolución definitiva pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado

de Circuito, en amparo del conocimiento de ellos. En todo caso, al oficio por el que se haga la notificación se acompañará el testimonio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá agregarse a los autos.

Los jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche o tenga por no interpuesto cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo promovidos ante dichos jueces, notificarán esas resoluciones a las autoridades responsables por medio de oficio remitido por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, acompañándoles copia certificada de la resolución que tenga que cumplirse. El acuse de recibo será agregado a los autos;…"

ARTÍCULO 34.—"Las notificaciones surtirán sus efectos:

I. Las que se hagan a las autoridades responsables, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas…"

Es oportuno señalar la siguiente tesis al respecto:

EMPLAZAMIENTO DE AUTORIDADES RESPONSABLES. ES ILEGAL SI SE PRACTICA SÓLO CON LA QUE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECEN LAS CITADAS AUTORIDADES. Cuando en la demanda de amparo se señala como autoridad responsable a la dependencia, entidad o municipio, así como a distintos funcionarios pertenecientes a dichas dependencias, es inexacto estimar que el emplazamiento practicado con el funcionario público que ejerce la representación legal de la dependencia comprende el emplazamiento de las demás autoridades responsables señaladas, pues en todo caso la representación legal aludida tiene efectos durante la tramitación del juicio de amparo, desde el momento en que las autoridades decidan intervenir en él, siendo evidente que dicha representación no puede incluir el emplazamiento citado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, T. VI. 2º, 47K, pág. 534.

AUTORIDADES RESPONSABLES, SEÑALAMIENTO DE LAS. Lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no implica que una vez señaladas determinadas autoridades responsables en el escrito de demanda, el Juez de Distrito tenga facultades para prevenir al promovente por un nuevo señalamiento de otras que posiblemente existan, dado que esto implicaría una ampliación de demanda, la cual nunca puede ser solicitada por el juez, ni puede ser hecha espontáneamente por el quejoso fuera del término de que dispone para promover el juicio de amparo, excepto

en los casos en que el informe justificado viene a evidenciar la intervención de otras autoridades.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, T. III.1o.C.5 K, pág. 634.

En cuanto a la ley o acto que de cada autoridad responsable se reclame, el quejoso debe señalar específicamente los actos que les impugne en su demanda de garantías, estableciendo entre aquéllas y éstos un nexo de atribuibilidad. Al respecto se ha sustentado el siguiente criterio:

ACTO RECLAMADO. EN LA REVISIÓN SÓLO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL EL QUE FUE MATERIA DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Teniendo en consideración lo establecido por la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, los quejosos tienen obligación de expresar en forma adecuada la ley o acto que de cada autoridad se reclama, de ahí que si los quejosos señalan de forma expresa un acto reclamado, y posteriormente en los conceptos de violación hacen valer otro diverso, se estima que el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, no puede tenerlo como tal; pues de hacerlo, se dejaría en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que el artículo 149, de la ley en cita, prevé en su párrafo tercero, que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio; amén de que los Tribunales Federales no están facultados por precepto alguno para examinar, al resolver un recurso de revisión, un acto que no fue reclamado en la demanda que dio inicio al juicio de amparo indirecto, aun cuando, como en el caso, el quejoso formule conceptos de violación sobre el mismo, pues debió el Juez de Distrito al advertir ésta, mandar aclarar la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo; pero si no se hizo y la autoridad responsable no rindió informe sobre el referido acto, es claro que al resolver el recurso de revisión no le es dable a este tribunal tener como acto reclamado el no señalado de manera expresa, máxime que la suplencia sólo opera en el caso, respecto de los agravios y de los errores que se adviertan en la cita de preceptos constitucionales y legales que se estiman violados, conforme a lo dispuesto por los artículos 76 bis y 79 de la Ley de Amparo; y extenderla a tener como acto reclamado un

acto no señalado como tal en la demanda inicial, resultaría a todas luces ilegal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, T. VIII, 1º 2K, pág. 330.

El quejoso debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, esto se hace con el fin de sujetar al quejoso a la responsabilidad penal que se encuentra estipulada en el artículo 211, para el caso de que al formular la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten o que designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, a sabiendas de que no lo es (fracciones I y III del 211). No se incurre en dicha responsabilidad cuando se trate de los actos previstos por el artículo 17, referentes a aquellos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tratándose de orden de aprehensión o cualquier otro acto judicial debe observarse al pie de la letra la protesta de decir verdad, por ello, no basta con la expresión "Protesto lo necesario".

INTERPRETACIÓN

PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que,

aún habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incu-rra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Am-paro. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, noviembre de 1999, tesis por contradicción 127/99, pág. 32.

En relación al señalamiento de los preceptos constitucionales que contengan las garantías violadas, basta que sean invocados y, en un capítulo separado, se expongan los razonamientos que se estimen pertinentes y que tiendan a demostrar que tales garantías resultan vulneradas por los actos reclamados, a estos se denominan "conceptos de violación".

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P. VII/2001, pág. 325.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 36/2001, pág. 79.

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, abril de 2000, tesis P./J. 40/2000, pág. 32.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 35/2001, pág. 79.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis

jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el juez de amparo deba estudiarlo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, agosto de 2000, tesis P./J. 68/2000, pág. 38.

DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA POR CORREO. CUANDO EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL QUEJOSO NO EXISTE OFICINA DE CORREOS (ACTUALMENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO), LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN LA DE LA POBLACIÓN MÁS CERCANA. El contenido del artículo 25 de la Ley de Amparo permite concluir que el legislador se propuso proteger, en esencia, el derecho de defensa de los habitantes de la República mexicana, al prever que los gobernados que no tienen su domicilio en el lugar en el que reside el juzgado o tribunal competentes para conocer del juicio de amparo, puedan tener el debido acceso a dicho medio de control constitucional, presentando la demanda ante una oficina de correos, señalando, como requisitos para la validez de su presentación, que el depósito se realice dentro de los términos señalados para ello por la propia Ley de Amparo y que se haga en la oficina de correos que corresponda al lugar de residencia del quejoso. Sin embargo, este último requisito no debe entenderse sólo en forma literal, porque puede darse la circunstancia de que en el lugar donde tenga su domicilio el quejoso no exista oficina de correos, caso en el cual la presentación de la demanda podrá hacerse en la oficina de correos de la población más cercana al lugar de su residencia.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, P./J. 12/2001, Página 5.

DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, P./J. 148/2000, Página 11.

DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. El artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en el que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, lo cual no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar, en lo que respecta a su domicilio, uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte

> más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Este criterio es congruente con el adoptado por el legislador en otros ordenamientos como, por ejemplo, en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 739 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se desprende que lo que la ley exige al interesado, en su primera comparecencia, no es el señalamiento de su domicilio particular, sino el de un lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueren necesarias dentro del juicio. Lo antes expuesto se robustece con la circunstancia de que cuando el peticionario de garantías se abstiene de señalar un domicilio, la ley de la materia prevé, en su artículo 30, fracción II, una solución tendiente a garantizar el desarrollo expedito del proceso, consistente en que cuando el agraviado no cumpla con la carga de designar domicilio ubicado en el lugar del juicio ni la casa o despacho para oír notificaciones, éstas se harán mediante lista, medida que es acertada, pues la garantía dispuesta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a aquélla, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido en los artículos 103 y 107 del Ordenamiento Fundamental, como el medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable sino sólo conveniente para éste, pues aun si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento.
>
> Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XV, Junio de 2002, 2a./J. 47/2002, Página 152.

Por lo que hace a la fracción VI del artículo 116, en la demanda deben expresarse las razones por las cuales el quejoso estima que existe una invasión o contravención en las atribuciones de la Federación y los Estados, así como los preceptos constitucionales que reserven a una y otros la invasión que se reclame.

3.1.2. Términos para interponer la demanda

Se ha discutido la diferencia que existe en los conceptos plazo y término, puesto que se han considerado sinónimos. Sin embargo, se ha dicho que plazo es un lapso entre un momento inicial y otro

final, que se computa por días hábiles, que establece la ley para la rea-lización de actos procesales o la producción de efectos jurídicos o el cumplimiento de obligaciones; por otro lado, se ha dicho que término es un plazo fatal que se computa de momento a momento, incluyendo días y horas inhábiles.

Sin embargo, la Ley de Amparo maneja el concepto único de término, para hacer referencia a plazos que se computan por días y de momento a momento.

El término para interponer una demanda de garantías se encuentra regulado por los artículos 21, 22 y 23 la Ley de Amparo, que textualmente dicen:

> ARTÍCULO 21.—"El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
>
> ARTÍCULO 22.—"Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
>
> I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.
>
> II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales."

En los casos de la fracción **II** la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.

> III. "Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiere fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días si residiere fuera de ella; contando en ambos casos desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término al que se refiere el artículo anterior.
>
> No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado."

De la lectura de tales artículos se advierte que el término para interponer el juicio de amparo en materia penal, es decir, para presentar la demanda, generalmente es de quince días; pero hay una excepción en tratándose de actos penales que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Nótese que el artículo 17 no contempla sólo a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, sino cualquier acto privativo de libertad emanado de autoridad judicial, al decir, "ataques a la libertad personal, orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia con pena privativa de libertad. En estos supuestos la demanda puede presentarse en cualquier tiempo.

Debe precisarse que la excepción es para actos que afecten la libertad personal y no para actos de molestia en la libertad general del gobernado.

Por lo que se refiere a las normas penales, el término es de quince días si se trata de normas heteroaplicativas (que necesitan de un acto de aplicación para causar un agravio) y de treinta días si se trata de autoaplicativas (las que desde su vigencia causan ese agravio al gobernado que se encuentra en la hipótesis normativa).

Al respecto se han sentado los siguientes criterios:

> ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. Si no existe en autos dato alguno que demuestre en forma evidente que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, con anterioridad mayor de quince días hábiles a la fecha en que presentó su demanda, el Juez de Distrito obró legalmente al considerarla interpuesta en tiempo y al no decretar el sobreseimiento por extemporaneidad.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, salas y Tesis Comunes, pág. 89.

> AMPARO ANTE JUEZ INCOMPETENTE. Ningún precepto legal autoriza a considerar como extemporáneo el amparo que por error fue interpuesto dentro del plazo legal, ante un Juez de Distrito incompetente, aun cuando en la fecha en que se avoque el conocimiento del asunto el juez competente, por virtud de la declaración de incompetencia del primero, haya transcurrido el plazo para la promoción del amparo.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y Tesis Comunes, pág. 273.

> AMPARO INDIRECTO QUE SE FORMULA COMO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SÍ PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS. Si la demanda de amparo se

presentó oportunamente ante la autoridad responsable, por estimar el quejoso que el acto reclamado es impugnable a través del juicio de amparo directo, aunque el Tribunal Colegiado haya remitido la demanda relativa al Juez de Distrito, por considerar que es éste el competente para conocer del asunto en amparo indirecto, su presentación interrumpe el término de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede considerarse que una demanda de amparo indirecto ha sido presentada extemporáneamente cuando se entrega a la autoridad responsable, si la demanda se elabora como amparo directo.

Informe de Labores de 1989, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis jurisprudencial 1, pág. 81.

AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda

de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3º bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, T. P./J 1/95, pág. 43.

AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. (VACACIONES). Si por haberse cerrado las oficinas del tribunal responsable, para disfrutar de vacaciones el personal del mismo, el quejoso se vio impedido de formular los conceptos de violación de su demanda de amparo, por no poder estudiar los elementos del juicio y la sentencia que reclama, durante los días que duraron esas vacaciones, tales días deben descontarse al hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda, ya que por causa de fuerza mayor, que no dependía de la voluntad del mismo quejoso, éste no estuvo, durante el indicado periodo de vacaciones, en aptitud de ejercer su derecho.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y Tesis Comunes, pág. 274.

NOTA: La anterior tesis no se puede aplicar para la materia penal cuando el acto reclamado emane de un juez penal, federal o del fuero común o de un tribunal unitario, en vista de que en éstos siempre existirán "guardias"; no así, cuando el acto lo haya pronunciado la sala penal de un tribunal superior de justicia de una entidad federativa, por que en ellas, por lo general, la totalidad del personal sí goza de vacaciones sin dejar guardia.

AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. DÍAS INHÁBILES POR SUSPENSIÓN DE LABORES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Los días en que la autoridad responsable deja de laborar, deben considerarse inhábiles y, por tanto, deben descontarse del término para la interposición de la demanda de amparo, toda vez que, de no hacerse así, se reduciría dicho término, en perjuicio del quejoso, quien debe disfrutarlo en toda su amplitud, no sólo en cuanto al factor tiempo que lo determina, sino en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento del mismo, pues resulta que en el caso de suspensión de labores en el órgano que dictó la resolución contra la cual se va a solicitar el amparo, los interesados se ven imposibilitados para consultar los autos, consulta ésta necesaria para que pueda preparar debidamente su demanda de garantías.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 172, pág. 305.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTESTATIO EN EL AMPARO. La Corte ha establecido el criterio de que la litis contestatio en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden su informe con justificación; por tanto, mientras tal informe no se rinda, el agraviado puede ampliar su demanda o modificarla en cuanto a sus derechos convengan, siempre que esté dentro del término legal para pedir amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 176, pág. 311.

DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA, CUANDO ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. Si desde la fecha en que tuvo lugar el primer acto de aplicación del ordenamiento combatido, a la fecha en que se presentó la ampliación de la demanda para impugnar la constitucionalidad del mismo, transcurrió con exceso el plazo a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, en lo que hace al aspecto de constitucionalidad de ley procede decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en la fracción XII, párrafos 1 º del artículo 73, de la Ley de Amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, pág. 648.

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNAR UNA LEY EN EL ESCRITO DE. Si en la demanda de amparo la quejosa impugnó exclusivamente actos de aplicación y posteriormente amplía su demanda para combatir la ley en que se fundamentan dichos actos, el plazo para la impugnación constitucional del ordenamiento legal a que se refiere el artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe computarse de la fecha en que aparezca que la quejosa tuvo conocimiento de que los actos de aplicación se fundamentan en la ley, a la fecha en que presentó su escrito de ampliación. Por tanto, si de la demanda inicial se desprende que la quejosa sabía que los actos reclamados se apoyaban en la ley que posteriormente impugnó en escrito de ampliación, el citado plazo debe computarse de la fecha de la demanda a la fecha de presentación del ocurso de ampliación.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, pág. 450.

LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA. COMIENZA A CORRER A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE EL QUEJOSO CONOCE, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. Cuando se pretende el examen de la inconstitucionalidad de la ley que se reclama en la demanda, basta que el quejoso conozca, por cualquier medio, del primer acto de aplicación de esa ley, para que esté en aptitud de acudir al amparo contra el ordenamiento relativo, aunque estime carente de validez la notificación que se le hizo del primer acto de aplicación de ese ordenamiento, porque tal cuestión sólo podrá ser preponderante en relación con los actos de aplicación de la ley, pero no para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un ordenamiento, si este problema no se hace valer por el interesado con la debida oportunidad, de conformidad con lo que dispone la Ley de Amparo sobre este aspecto.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, pág. 200.

LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, tesis jurisprudencial 106, pág. 199.

LEY AUTOAPLICATIVA. QUIENES PUEDAN IMPUGNARLA DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES AL DE SU ENTRADA EN VIGOR. Una ley autoaplicativa sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de los 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, por aquellas personas que, en el momento de su promulgación, queden automáticamente comprendidas dentro de la hipótesis de su aplicación. En consecuencia, las personas que por actos propios se coloquen dentro de la mencionada hipótesis legal con posterioridad al transcurso del referido término de 30 días, sólo estarán legitimadas para objetar la constitucionalidad de la ley en cuestión a partir del momento en que las autoridades ejecutoras correspondientes realicen el primer acto concreto de aplicación de dicho ordenamiento en relación con ellas.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, tesis jurisprudencial 107, pág. 199.

LEYES, AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS DE APLICACIÓN ATA-

CAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. Es indefinido el término para presentar la demanda de amparo en contra de una ley cuya aplicación ataca la libertad personal del quejoso, de acuerdo con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, independientemente de que lo combatido sea la ley y no específicamente los actos que ataquen la libertad, pues éstos pueden reclamarse por ser una consecuencia de la ley inconstitucional. El término para pedir amparo lo estableció el legislador para no afectar la seguridad de las situaciones jurídicas derivadas de un acto de autoridad, pero en el caso del artículo 22, fracción II, primera parte, de la Ley de Amparo, prefirió la protección de la libertad a la satisfacción del interés de seguridad jurídica; si la ley es violatoria de garantías, su aplicación es la concretización de la violación y por tal motivo es indefinido el término para atacar el fundamento que es la ley estimada inconstitucional.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 122.

En cuanto al auto de sujeción a proceso existe la tesis jurisprudencial en el sentido de que no hay término para la interposición de la demanda de amparo.

AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO. El auto de sujeción a proceso ataca la libertad del procesado al sujetarlo a determinadas obligaciones como son el comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional, el concurrir a las diligencias que se practiquen en el proceso relativo, el no poder hacer uso de su libertad de tránsito si no es con autorización del propio juzgador, bajo cuya jurisdicción se encuentra sometido, el que se le dicte en dado caso, el arraigo domiciliario, así como a todas aquellas circunstancias inherentes a las cuales queda sujeta una persona sometida a un proceso penal. Por lo tanto, dicho acto queda comprendido dentro de la excepción prevista en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, la cual permite el ejercicio de la acción constitucional sin limitación temporal alguna, cuando se trate de actos que lesionen, ataquen o trasgredan, valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad, o la integridad personal, toda vez que la expresión "ataque" a la que alude la fracción en comento, no debe entenderse limitada a una privación total de la libertad sino a una afectación de la misma, en función, precisamente, del alto valor que se protege y cuya defensa mediante el juicio de garantías, no debe quedar sujeta a requisitos de temporalidad.

Contradicción de tesis 67/96. Entre las sustentadas por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del primer Circuito. 19

de febrero de 1997. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.

COMENTARIO: El auto de sujeción a proceso en mi concepto y como ya se dijo, no implica una privación de la libertad personal, sino una restricción a la libertad general del gobernado, de ahí que el término para interponer el juicio de garantías debería ser de quince días; así también evitaríamos la multiplicación de juicios. Sin embargo, la jurisprudencia citada es obligatoria y hay que respetarla (ver comentario relativo a la privación de la libertad personal).

El artículo 23 de la Ley de Amparo establece cuáles son los días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución del juicio de amparo, en los siguientes términos:

> ARTÍCULO 23.—"Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1º de enero, 5 de febrero, 1º y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre."

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al respecto dice:

> ARTÍCULO 163.—"En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domin- º de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."

La Suprema Corte de Justicia, para dirimir el antagonismo, estableció el siguiente criterio:

> DÍAS INHÁBILES PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EN JUICIO DE AMPARO. DADA LA CONFUSIÓN QUE PRODUCEN LOS ARTÍCULOS 160, 163 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN TOMARSE COMO DÍAS INHÁBILES LOS SEÑALADOS EN DICHO ARTÍCULO 163 Y TAMBIÉN LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE AMPARO. Produce confusión la incongruencia existente entre los artículos noveno transitorio y 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente a partir del 27 de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pues mientras el primero de esos preceptos dispone que a partir de su entrada en vigor, los días inhábiles a que se refiere el primer

párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los que señala el numeral 160, este precepto nada dispone acerca de los días hábiles o inhábiles; en cambio el artículo 163 de la misma ley orgánica establece como días inhábiles los sábados y domingos, el primero de mayo, dieciséis de septiembre y veinte de noviembre, en los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, "…salvo en los casos expresamente consignados en la ley", remisión que incrementa la duda, pues el artículo 23 de la Ley de Amparo señala como días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, primero de enero, cinco de febrero, primero y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre y veinte de noviembre. Por tanto, dada esta situación confusa que induce a error, debe estarse a lo más favorable al promovente del amparo o de los recursos correspondientes y, en su caso, tomar como inhábiles los días que como tales señalan ambos artículos —163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 23 de la Ley de Amparo—, para efectos del cómputo a que este último precepto se refiere.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada de diez de febrero de 1997, aprobó, con el número XXV/97, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.

El segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo establece:

"Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército o armada nacional, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido."

Otra excepción a las reglas generales del amparo, es en cuanto a los días y horas hábiles para promoverlo; en materia penal a diferencia de otras materias, se puede promover en cualquier día y hora; de ahí que los juzgados de Distrito en materia penal que conocen del juicio de amparo deben estar pendientes siempre para recibir cualquier demanda que implique los actos ahí mencionados, incluyendo los privativos de libertad judiciales (órdenes de aprehensión, auto de formal prisión, etcétera). Sin embargo, en la práctica en los juzgados de Distrito no se acostumbra a proceder así, con el argumento de que

en días inhábiles sólo se reciben demandas de "incomunicados", refiriéndose a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, lo que es indebido.

El tercero y cuarto párrafos del artículo 23 establecen:

> "Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados y para el gobierno, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los casos enunciados, así como los mensajes y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de lo prevenido en éste párrafo se castigará con la sanción del Código Penal aplicable en materia federal señalada para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.
>
> La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante el secretario, y en casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párrafo del presente artículo."

El tercer párrafo establece la obligación para los encargados de correos y telégrafos de recibir y transmitir, sin costo alguno a los interesados y al gobierno, mensajes en que se demande amparo en los casos penales mencionados en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo (incluye actos privativos de libertad judiciales, orden de aprehensión, auto de formal prisión, etcétera, cuando exista inconveniente en la justicia local y no exista Juez de Distrito) y los oficios relativos a la suspensión aun fuera del horario de labores y en contra de disposición administrativa en contrario, bajo apercibimiento de ser consignado y sancionado con pena correspondiente al Delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares (artículo 178 del Código Penal Federal, con una sanción de quince a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad).

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA POR CORREO. CUANDO EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL QUEJOSO NO EXISTE OFICINA DE CORREOS (ACTUALMENTE SERVICIO POSTAL MEXICANO), LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN LA DE LA POBLACIÓN MÁS CERCANA.

El contenido del artículo 25 de la Ley de Amparo permite concluir que el legislador se propuso proteger, en esencia, el derecho de defensa de los habitantes de la República Mexicana, al prever que los gobernados que no tienen su domicilio en el lugar en el que reside el juzgado o tribunal competentes para conocer del juicio de amparo, puedan tener el debido acceso a dicho medio de control constitucional, presentando la demanda ante una oficina de correos, señalando, como requisitos para la validez de su presentación, que el depósito se realice dentro de los términos señalados para ello por la propia Ley de Amparo y que se haga en la oficina de correos que corresponda al lugar de residencia del quejoso. Sin embargo, este último requisito no debe entenderse sólo en forma literal, porque puede darse la circunstancia de que en el lugar donde tenga su domicilio el quejoso no exista oficina de correos, caso en el cual la presentación de la demanda podrá hacerse en la oficina de correos de la población más cercana al lugar de su residencia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, febrero de 2001, tesis P./J. 12/2001, pág. 5.

El cuarto párrafo del artículo 23 es el fundamento de las guardias de los secretarios del juzgado de Distrito, de ahí que en todos los juzgados de Distrito que conocen de amparo en materia penal y mixtos, debe fijarse en lugar visible al público el aviso del secretario de guardia.

INTERPRETACIÓN

DEMANDAS O PROMOCIONES PRESENTADAS EN HORAS INHÁBILES. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA RAZÓN QUE RESPECTO A SU RECEPCIÓN ASIENTE EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESPECTIVO. Si se toma en consideración que conforme a lo dispuesto en los artículos 23, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo y 61 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de lo previsto en el artículo 2º de ésta, la presentación de demandas o promociones de término puede hacerse el día en que el plazo relativo concluya, fuera del horario de labores del órgano jurisdiccional correspondiente, ante el secretario autorizado para recibirlas, quien tiene la obligación de autorizar con su firma todos los actos procesales de los que deba dejarse constancia y le estén encomendados, así como hacer constar la fecha (día, mes y año) y la hora en que se presente el escrito, dando cuenta con él al día siguiente, o bien, desde luego, cuando se trate de un asunto urgente,

es inconcuso que para que la razón que al respecto asiente el referido secretario sea válida, basta con que en ella se señalen la fecha y hora de recepción del escrito, que se asienten los anexos y copias que, en su caso, le sean entregadas, y que el citado funcionario firme al calce para debida constancia, sin que sea necesario asentar otros datos como el lugar de recepción, el nombre del funcionario que recibe, la clase de nombramiento que tiene y el órgano donde labora. Ello es así, porque si la finalidad que se persigue al permitir la presentación de demandas o promociones el día en que concluya el plazo legal para hacerlo, fuera del horario de labores, es la de dar oportunidad a las partes de ejercer con plenitud sus derechos, desde el primer momento en que nacen, hasta el último minuto del plazo que la ley les otorga para ello, es incuestionable que dicho ejercicio no puede quedar supeditado a la satisfacción de formalidades no previstas en la ley, que incluso pudieran ocasionar graves perjuicios al promovente, pues la negligencia, desconocimiento o actuación indebida del secretario autorizado para recibir promociones de término podría dejar a aquél en estado de indefensión, dando lugar a que la presentación se considere extemporánea por causas ajenas a su conducta procesal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 33/2001, pág. 80.

3.1.2.1. Excepción a la regla de los plazos procesales en el amparo

En relación a los plazos procesales en el juicio de amparo, que por regla general son de cinco a treinta días, en lo que atañe a la obligación de rendir el informe justificado por parte de la autoridad responsable y el señalamiento de la audiencia constitucional, existe la excepción prevista en el artículo 156, en el que en algunos casos penales se reducen a tres y diez días respectivamente; dichos supuesto son:

1. Leyes penales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Actos violatorios de garantías contenidas en el artículo 16 constitucional (orden de aprehensión, retención por parte del Ministerio Público, detención por parte de cualquier autoridad, orden de comparecencia, etcétera).
3. Actos violatorios de garantías contenidas en el artículo 19 constitucional (auto de formal prisión y de sujeción a proceso, la prolongación de la detención por más de setenta y dos horas por parte del juez; el maltratamiento en las prisiones, molestia sin motivo legal, gabela o contribución en las cárceles).
4. Actos violatorios de las garantías tuteladas en el artículo 20 constitucional en sus fracciones I (libertad provisional bajo caución);

VIII (duración excesiva de lo procesos) y X (prolongación de la aprehensión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o por algún otro motivo análogo).

Los tres últimos casos son los que señala el artículo 37, por disposición expresa del artículo 156 de la Ley de Amparo, que dice:

> ARTÍCULO 156.—"En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la sustanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda."

Así podemos exponer de manera gráfica el procedimiento genérico y la excepción.

Procedimiento genérico del juicio de amparo.

Treinta días.

Cinco días.

Auto de inicio.	Notificación a la autoridad responsable.	Informe Justificado.	Audiencia Constitucional.

Procedimiento de excepción en materia penal:

Diez días.

Tres días.

Auto de inicio.	Notificación a la autoridad responsable.	Informe Justificado.	Audiencia Constitucional.

3.1.3. Presentación de la demanda

Una vez presentada la demanda por escrito, con las copias correspondientes para emplazar a las partes, al agente del Ministerio Público que conoció del proceso, en su caso, y dos más para el incidente de suspensión si se solicitó (artículo 120), se levantará razón de la hora y día de su presentación, relación de los documentos que se acompañan, se registrará en el libro de gobierno y se turnará para el dictado del auto inicial.

3.1.4. Análisis de la demanda

Es preciso señalar que antes de dictar el auto inicial, el Juez de Distrito deberá analizar la demanda de amparo, primero para determinar si existe alguna causa de impedimento; después, en su orden analizará la competencia, la improcedencia manifiesta y, por último, si se cumple con los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo. Una vez que se advierte que el Juez Federal no está impedido para conocer de la misma, que es competente legalmente y no existe causa manifiesta de improcedencia y la demanda cumple con los requisitos de ley, se procede a su admisión; por tanto, el primer acuerdo que se dicte puede consistir en:

a) Auto que declara el impedimento del titular del Juzgado;
b) Auto en el que se declara la incompetencia del Juzgado;
c) Auto que desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente;
d) Auto que ordena aclarar la demanda de amparo, y
e) Auto que admite la demanda.

a) Auto que declara el impedimento del titular del juzgado

Los jueces de amparo no son recusables, pero deben declarase impedidos si así procede.

Si el juez de Distrito que recibe la demanda se encuentra en alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 66 de la Ley de Amparo (I. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes o de sus abogados o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en

el mismo asunto o en el juicio de amparo; IV. Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, si hubiesen aconsejado como asesores la resolución reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o jurisdicción la resolución impugnada; V. Si tuviesen pendiente algún juicio de amparo, semejante al de que se trata, en que figuren como partes, y VI. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes); deberá de oficio declararse impedido y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para la calificación de la causa de impedimento.

Existe el criterio de un Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en el sentido de que cuando el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda por estar de turno, es señalado como autoridad responsable, debe declararse incompetente legalmente y remitirla ante el juez que en número progresivo le siga; sin embargo, considero que en el caso se está ante una causal de impedimento (fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo) y no de competencia. En este caso se presenta el problema de que si el Juez de Distrito que está de turno se encuentra impedido por tener el carácter de autoridad responsable ¿ante quién se presentará la demanda?, la solución consiste en presentarla ante el tribunal unitario que actualmente también tiene competencia para conocer del amparo (artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

Los casos de impedimento no siempre son notorios como el caso de la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo y, por tanto, algunos se analizan dentro del procedimiento o al dictar la sentencia.

INTERPRETACIÓN

> IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal mani-festación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la referida Ley de

Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, 2a./J. 36/2002, Página 105.

EXCUSA POR ENEMISTAD. El artículo 66 de la Ley de Amparo, en su fracción VI, debe interpretarse en el sentido de que la enemistad manifiesta a que se refiere como causa de excusa para conocer de los juicios de amparo, no es el sentimiento de enemistad ocasional o pasajero que pudieran provocar en el ánimo del juzgador las palabras o escritos más o menos ofensivos que se le dirijan con motivo de los asuntos de su conocimiento, ni las frases más o menos injuriosas que pudieran constituir un simple ardid para excluirlo de ese conocimiento, posiblemente en perjuicio de las otras partes y con menoscabo de la pronta administración de justicia; por lo cual los funcionarios deben mantener un criterio de ponderación, no tomando en cuenta frases más o menos hirientes u ofensivas de los interesados, sin perjuicio de exigirles que les guarden el debido respeto, corrigiendo las faltas que cometan, mediante la imposición de las correcciones disciplinarias que establezca la ley, y aun haciendo la consignación respectiva cuando el caso lo amerite.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 826, pág. 1367.

IMPEDIMENTO. DEBE DECLARARSE FUNDADO SI LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA DEL MAGISTRADO FUERON ABOGADOS DE UNA DE LAS PARTES POR PRESUMIRSE AMISTAD ESTRECHA ENTRE ELLOS. Si se promueve un impedimento con fundamento en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, por la existencia de amistad estrecha entre el juzgador y los abogados de una de las partes, porque los secretarios de estudio y cuenta del magistrado contra el que se plantea el impedimento fueron abogados de la parte quejosa en el juicio de amparo, en la primera y segunda instancia del juicio ordinario civil que dio lugar al mismo, debe declararse fundado el impedimento ordinario aun cuando el juzgador niegue la existencia de dicha amistad ya que la misma debe presumirse por la comunicación y confianza que el tipo de trabajo requiere, y sin que obste para ello el hecho de que los secretarios ya no tengan el carácter de abogados en el juicio de amparo en que el magistrado debe resol-

ver, pues al haber tenido con anterioridad tal carácter ello puede influir en el ánimo del magistrado, afectando su imparcialidad.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, pág. 169.

IMPEDIMENTO EN JUICIO DE AMPARO, NO ES CAUSA DE, HABER INTERVENIDO EN EL TRÁMITE DE UN ASUNTO. Si un Magistrado de Circuito pretende encontrarse impedido para conocer del recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo porque intervino en su tramitación, sin haber llegado a dictar aquélla, debe considerarse infundada tal pretensión, pues si bien la fracción XVI del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en que se fundamenta la petición, señala como causa de impedimento "Haber sido juez o magistrado en otra instancia", dicho dispositivo resulta inaplicable tratándose de juicios de amparo, porque, por un lado, el último párrafo de ese artículo así lo determina, pues remite expresamente, en cuanto a impedimentos, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra parte, el artículo 66 de la Ley de Amparo señala, categóricamente, que en materia de amparo sólo podrán invocarse para no conocer de un juicio de garantías, las causas de impedimento que en forma limitativa enumera el propio precepto legal, entre las cuales no se halla comprendida la causa referida, además, es de observarse que la intervención del magistrado se limitó a actos de trámite pero no emitió la sentencia impugnada.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, págs. 141-142.

IMPEDIMENTO. LA CAUSAL DE AMISTAD ESTRECHA NO SE PRUEBA CON LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR NOTARIO PÚBLICO RESPECTO A QUE ANTE ÉL DOS PARTICULARES MANIFESTARON HABER ESCUCHADO AL ABOGADO DE LA CONTRAPARTE DEL ALEGANTE, JACTARSE DE LLEVAR BUENA AMISTAD CON EL MAGISTRADO. La causal de impedimento prevista por la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, no se prueba con la certificación emitida por notario público respecto a que ante él dos particulares ratificaron el escrito privado en que manifiestan haber escuchado al abogado de la contraparte del alegante en el juicio de amparo, jactarse de llevar buena amistad con el magistrado contra el que formula, pues tal certificación, conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, sólo prueba que ante el notario público se ratificaron las manifestaciones de referencia, mas no la verdad de las mismas.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, pág. 173.

IMPEDIMENTO. NO ES CAUSAL DEL MISMO EL QUE LA CONTRAPARTE DEL ALEGANTE HAYA DICHO QUE SE NEGARA EL AMPARO. El artículo 66 de la Ley de Amparo dispone que: "…sólo podrán invocarse, para conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera este artículo, las cuales determinan la excusa forzosa del funcionario…". De ello se deriva que en materia de amparo sólo podrán invocarse como causales de impedimento las que en forma expresa y limitativa se enumeran en el numeral citado. Por consiguiente, si el alegante plantea como impedimento el que, según rumores que ha escuchado, su contraparte ha dicho que se le negará al amparo, debe considerarse aquél infundado, en virtud de que ello no se encuentra contemplado en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo mencionado como causales de impedimento.

Informe de labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, pág. 144.

IMPEDIMENTO. NO ES CAUSA DEL MISMO QUE LOS MAGISTRADOS PRETENDAN SOSTENER UN MISMO CRITERIO QUE EN ASUNTOS ANTERIORES. Dentro de las causas de impedimento que especifica el artículo 66 de la Ley de Amparo no se encuentra la relativa a que los integrantes de un tribunal pretendan sostener en un juicio de amparo, igual criterio jurídico al sustentado en asuntos anteriores, por lo que debe considerarse infundado ese planteamiento, en especial cuando no se prueba la situación alegada.

Informe de labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, págs. 143-144.

IMPEDIMENTO PARA NO CONOCER DE IMPEDIMENTOS CONTRA JUECES DE DISTRITO PARA QUE, A SU VEZ, NO CONOZCAN DE JUICIOS DE AMPARO. LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN EN DETERMINADO SENTIDO EN UN IMPEDIMENTO DIVERSO NO ES CAUSAL DEL MISMO. El artículo 66 de la Ley de Amparo dispone que: "…podrán invocarse, para no conocer de un negocio, las causales de impedimento que enumera este artículo, las cuales determinan la excusa forzosa del funcionario…". De ello se deriva que en materia de amparo sólo podrán invocarse como causales de impedimento las que en forma expresa y limitativa se enumeran en el precepto citado. Por consiguiente, debe considerarse infundado el impedimento que se plantea para no conocer de un impedimento contra un Juez de Distrito para que, a su vez, no conozca de un juicio de amparo, si se alega como causal la existencia de una resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito que integran los magistrados contra los que se interpone el impedimento, en una excusa que planteó el propio juez, para abstenerse de conocer de dicho juicio, en virtud de que ello no se

encuentra contemplado en ninguna de las hipótesis que establece como causales de impedimento el numeral de la Ley de Amparo citado, máxime cuando la existencia de la resolución de referencia no puede influir en la decisión del segundo impedimento contra el juez, ya que los cuestionamientos propuestos en éste son diversos de los planteados en la excusa presentada por dicho funcionario.

Informe de labores de 1988, segunda parte, Tercera Sala, págs. 145-146.

JUEZ DE DISTRITO. NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO POR HABER DESEMPEÑADO CON ANTERIORIDAD EL CARGO DE SECRETARIO DEL JUZGADO CUYO TITULAR ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE. El capítulo VII, Título Primero, de la Ley de Amparo, no establece como causa de impedimento de un Juez de Distrito para conocer de un asunto, el hecho de que hubiera desempeñado con anterioridad el cargo de secretario del juzgado cuyo titular es señalado como autoridad responsable.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1366.

IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON ENUNCIATIVAS SINO LIMITATIVAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 7/90, publicada en la página 109 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, citada bajo el rubro: "IMPEDIMENTO. CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior obedece, a que de la correcta interpretación del numeral 66 del referido ordenamiento, se llega a la conclusión que las causas de impedimento ahí mencionadas, no son enunciativas sino limitativas; por tanto, si los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, alegan estar impedidos para conocer del amparo directo, en virtud de que con anterioridad conocieron del recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo indirecto contra el auto de formal prisión, tal causa de impedimento no debe calificarse de legal, ya que no se encuentra contemplada en la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de Amparo, es decir, los magistrados no habían tenido con anterioridad el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, no aconsejaron como asesores en el pronunciamiento de la resolución reclamada, ni emitieron ésta en otra instancia o jurisdicción.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, T. 1 ª/J.5/95, pág. 99.

IMPEDIMENTO SIN MATERIA SI FUE CAMBIADO DE ADSCRIPCIÓN EL TITULAR CONTRA EL QUE SE PLANTEA. Si se plantea impedimento contra cualquiera de los titulares a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo, a fin de que se abstengan de conocer de un asunto, y éstos son cambiados de adscripción, por esa sola circunstancia debe declararse sin materia el impedimento planteado, en virtud de que es claro que no intervendrán en el estudio y resolución del asunto.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, T. 1ª/J. 4/95, pág. 103.

IMPEDIMENTO. DEBE DECLARARSE LEGAL EL QUE FORMULA EL MAGISTRADO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA INTERVENIR EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE PARIENTES CONSANGUÍNEOS SUYOS PUEDEN RESULTAR TERCEROS PERJUDICADOS. Si bien es cierto que conforme al artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de parte tercero perjudicada la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal, cuyo supuesto actualiza la causal de impedimento prevista en la fracción II del artículo 66 de dicho ordenamiento, también lo es que para los efectos de esta última disposición, la calidad de contraparte no se limita exclusivamente a los titulares de intereses que hubieran guardado, respecto del quejoso, una posición procesal estrictamente contraria, sino que basta que en el juicio natural hubieran deducido pretensiones diferentes, pero susceptibles de ser afectadas por la sentencia que se dictare en el amparo, como sucede en los casos en que, por virtud de una resolución expedida por órganos de jurisdicción contencioso administrativa de la potestad común, se hubiera creado entre el quejoso y los terceros una situación de solidaridad pasiva, que resultaría evidentemente alterada por los efectos de la sentencia que en su caso amparara el quejoso.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, T. 2ª. XXXIX/95, pág. 233.

b) Auto en el que se declara la incompetencia del juzgado

Si el Juez de Distrito en materia penal considera que no es competente para conocer de la demanda de garantías, remitirá de plano la demanda con sus anexos al juez que considere competente por razón de la materia o territorio, sin resolver sobre la admisión o la suspensión del acto reclamado, tal como lo disponen los artículos 36 y 50, que dicen:

ARTÍCULO 36.—"Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material."

ARTÍCULO 50.—"Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito especializado por razón de materia, en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al Juez de Distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 54."

El segundo párrafo del artículo 54 señala:

ARTÍCULO 54.—…

"En los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el Juez de Distrito sin proveer sobre su admisión y sin sustanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos al Juez de Distrito que corresponda."

Como puede observarse, la regla general, ante la incompetencia del juez ante el cual se presenta la demanda, es la remisión del escrito, sin demora, con todos sus anexos y sin resolver sobre su admisión y la suspensión, pero existe la excepción a la regla, pues en los casos penales que prevé el artículo 17 hay que resolver sobre la suspensión. Si se trata de privación de la libertad dentro de procedimiento judicial, orden de aprehensión o auto de formal prisión, no constituyen esa excepción.

Si se trata de un amparo directo, la incompetencia se decretará de plano y el juez remitirá la demanda al tribunal colegiado que corresponda, sin resolver sobre la suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 49, que establece:

> ARTÍCULO 49.—"Cuando se presente ante un Juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos expresados en el artículo 44, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si confirma o revoca la resolución del juez. En el primer caso, podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para la presentación de las copias y del informe correspondiente; en caso de revocación, mandará devolver los autos al juzgado de su origen, y sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre los Jueces de Distrito.
>
> Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el Juez de Distrito se declarará incompetente conforme al párrafo anterior y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable, para los efectos de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 171 a 175 de esta ley." [23]

c) Auto que desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente

El desechamiento de la demanda de amparo está previsto en el artículo 145, que dice:

> El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

El precepto legal antes transcrito nos remite a las causas de improcedencia señaladas en el artículo 73, mismas que deben ser estudiadas de oficio, tal y como lo previene el último párrafo del artículo antes señalado.

Si en el examen de la demanda se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el Juez de Distrito desechará la demanda de amparo, pero si el motivo de improcedencia requiere de mayores elementos de juicio o es dudosa, no debe desecharse, sino que se admitirá, sin perjuicio de que posteriormente al resolver se sobresea en el juicio por acreditarse fehacientemente dicha causa de improcedencia.

El motivo manifiesto e indudable quiere decir que no se requiere prueba posterior que acredite la causa de improcedencia, sino que ésta se desprenda de la propia demanda de garantías, así como la cer-

[23] NOTA: ver capítulo I, Clasificación y Competencia en el Juicio de Amparo.

teza de que ese motivo de improcedencia no variará aun y cuando la demanda se admitiera y se aportaran pruebas. Por ejemplo, cuando se pide amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos consumados de un modo irreparable o actos respecto de los que el quejoso manifieste que ha habido consentimiento expreso, puesto que, en casos como estos, no existe duda acerca de la actualización del motivo de improcedencia ni de que éste no variará durante la tramitación del juicio, con independencia de las pruebas que se ofrezcan.

El desechamiento se produce de plano, es decir sin sustanciación de incidente alguno, sin que se le conceda al quejoso oportunidad de formular opinión; pero si el quejoso considera que es inadecuado el criterio del Juez de Distrito para desechar la demanda, podrá interponer el recurso de revisión, con base en la fracción I del artículo 83 de la Ley de Amparo.

Al desecharse la demanda no se decreta la suspensión del acto reclamado; sin embargo, en los casos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se decreta la suspensión aun cuando no se haya admitido la demanda, pues así se advierte de la lectura del precepto 18 de la Ley de Amparo que a la letra dice:

> ARTÍCULO 18.—"En el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca del juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento en lo principal y consignará los hechos al Ministerio Público."

En materia penal son notorias las causas de improcedencia previstas en las fracciones I, II, IX y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que aluden a la improcedencia contra actos de la Suprema Corte de Justicia; contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; contra actos consumados de modo irreparable y contra los que se consintieron expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA,

CON APOYO EN EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS SE EQUIPARA A UN TERCERO EXTRAÑO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de plano de la demanda de garantías, procede cuando la causal o motivo de improcedencia del juicio sea manifiesta e indudable, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito relativo. De ello se sigue que si la acción constitucional se ejercita por quien se equipara a un tercero extraño afirmando desconocimiento total del trámite del juicio del que deriva el acto reclamado, alegando violación a la garantía de audiencia, no es posible desechar de plano la demanda de garantías con los datos que se precisan en el escrito relativo, porque es evidente que en ese momento procesal no se cuenta con los elementos suficientes para advertir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73, de la Ley de Amparo, por no cumplir el principio de definitividad, sino que lo conveniente es esperar el resultado de la tramitación del juicio para evaluar dicha situación y estar en condiciones de sobreseer, en su caso, en la audiencia constitucional.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia: Pleno, Tomo 83, noviembre de 1994, tesis P./J. 31/94, pág. 11.

DUDA DEL JUEZ DE DISTRITO SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA EN LA DEMANDA DE AMPARO, NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHARLA. Al tenor del artículo 145 de la Ley de Amparo, la motivación para desechar la demanda en el auto inicial debe consistir en una causa notoria e indudable; por lo que este supuesto no puede surtirse cuando el juez duda de la autenticidad de la firma de la demanda.

Informe de Labores de 1989, Tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 469.

DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA. La existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión; sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo aparece realmente la existencia de alguna causa de improcedencia.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 603, pág. 1040.

DEMANDA DE AMPARO OSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de ley.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 604, pág. 1040.

DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA. La posible existencia de un recurso contra el acto que se reclama en un amparo no es bastante, por sí sola, para desechar la demanda constitucional respectiva, sino que es conveniente iniciar la tramitación de esta última, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de dictar el sobreseimiento que corresponda si del resultado de ese estudio apareciere realmente la existencia de una causa de improcedencia.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 12516.

DEMANDA DE AMPARO. ADMISIÓN. No es lógico fundarse para desechar una demanda de amparo, en las mismas razones que habría para negar la protección federal.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 597, pág. 1034.

DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación —cuando los haya— y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, números 8-9, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis jurisprudencial 4, pág. 31.

INTERÉS JURÍDICO. INDEBIDO DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO POR FALTA DE. La causal de falta de interés jurídico, prevista por el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, no puede considerarse como manifiesta e indudable para que dé lugar a que con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito, deseche de plano la demanda de garantías porque el quejoso está en aptitud de demostrarlo durante la sustanciación del juicio.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, tesis I.7o.T.3 K, pág. 564.

AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR. Si existe prueba plena en cuanto a que el acto de aplicación de la ley que se tilda de inconstitucional en la demanda de amparo, por su fecha de emisión, no fue el primero en el que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, es inconcuso que puede determinarse la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, para el desechamiento de la demanda respectiva el Juez de Distrito puede basar su determinación de que no se está en presencia del primer acto de aplicación en diversos medios de convicción, entre los que pueden encontrarse las propias manifestaciones que el quejoso haya realizado en su demanda o en los escritos aclaratorios, pues éstas constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que no reclama el primer acto de aplicación de la ley y que, por ende, se actualiza de manera manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos ya sea de las fracciones III, IV o XII, párrafo primero, del artículo 73 de la citada ley, según sea el caso; la primera, por ser la ley reclamada materia de otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolver; la segunda, por haber sido la norma general materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; o, la tercera, por no haberse reclamado la ley en el juicio constitucional con motivo de su primer acto de aplicación dentro del plazo que establece el artículo 21 de la legislación de la materia. En consecuencia, es dable desechar la demanda de garantías por cuanto hace a la ley, con independencia de que la demanda pueda admitirse por los actos de aplicación relativos, si éstos se combaten por vicios propios y no se esté en el caso de que la reclamación de la ley represente una hipótesis de excepción al principio de definitividad.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Julio de 2002, 2a./J. 50/2002, Página 64.

IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A ESE PRONUNCIAMIENTO. La existencia de la indicada jurisprudencia que establece la improcedencia del amparo promovido en contra del decreto presidencial del 31 de octubre de 1995 que exime del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique siempre el desechamiento de la demanda de garantías promovida en su contra, pues la aplicación de un criterio jurisprudencial supone un análisis cuidadoso que debe hacerse hasta la audiencia constitucional en el contexto del caso concreto; estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales federales, así como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos a un pronto y efectivo control constitucional, además de que existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, interrumpa o modifique el criterio establecido.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, 2a./J. 3/2003, Página 225.

d) Auto aclaratorio de la demanda de amparo

Si la demanda de amparo carece de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que ya fueron analizados en este capítulo, se procederá a prevenir al quejoso para que aclare su demanda, tal y como lo dispone el artículo 146 de la ley en cita, precepto que contiene los diversos supuestos en que procede que el Juez de Distrito ordene la aclaración respectiva, o bien, ordene se exhiban las copias que deben acompañarse a la demanda. Dicho precepto dice:

"Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o defi-

ciencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de las veinticuatro horas, según fuere procedente."

El auto aclaratorio se puede presentar por cuatro situaciones:

1. Por irregularidad en la demanda.
2. Por omisión en alguno de los requisitos del artículo 116.
3. Por imprecisión del acto reclamado.
4. Por falta de copias.

Como se puede ver, las hipótesis previstas aluden a: una irregularidad; esto es, a la oscuridad de los datos proporcionados que impidan ver con exactitud aspectos importantes relativos a competencia, a la oportunidad, a la procedencia de la vía, incluso al fondo del asunto, etcétera. El segundo supuesto incumbe al cumplimiento de las formalidades que contempla el artículo 116, que ya fueron analizadas en esta capítulo. La tercera concierne a la imprecisión de los actos reclamados, exigencia obvia si se estima que el juicio de garantías procede, precisamente, contra actos de autoridad y el cumplimiento sólo se verificara respecto a ellos. Finalmente, la cuarta hipótesis está relacionada con el emplazamiento a las partes a efecto de que no queden en estado de indefensión, el cual se realiza con las copias exhibidas; en este sentido, el juez federal debe precisar con toda exactitud el número de copias, tanto del escrito de demanda como del aclaratorio cuando requieran éstas para el trámite del juicio de garantías, por formar parte del mismo y, además, precisar, sin duda alguna, a qué documentos se está refiriendo; esto es, el acuerdo al respecto debe ser claro, categórico y específico, a fin de que no dé margen a dudas o interpretaciones y, así, lograr el cumplimiento adecuado, evitando que al quejoso se le coloque en estado de inseguridad.

Si se trata de los actos señalados en el artículo 17 no debe haber prevención. En tratándose de privación de la libertad la preven-

ción procede únicamente si ésta emana de un procedimiento judicial, por ejemplo, en la orden de aprehensión, auto de formal prisión, etcétera.

Se debe prevenir al quejoso para que dentro de un término de tres días llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan o presente las copias omitidas, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, siempre y cuando el acto reclamado sólo afecte los derechos patrimoniales del quejoso.

El tercer párrafo del artículo 146 antes transcrito, se refiere al supuesto en que el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales del quejoso, sino que se afectan otros derechos o intereses, como los actos que se reclaman en materia penal, ya sean privativos de libertad, por orden judicial (orden de aprehensión, auto de formal prisión, etcétera); transcurrido el término de tres días sin haberse dado cumplimiento a la prevención el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas y, en vista de lo que éste exponga, se admitirá o desechará la demanda de amparo dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Por ejemplo, puede darse el caso que se reclame el decomiso de un bien, en este supuesto al no cumplirse con la prevención lo que procede es tenerla por no interpuesta. Si se trata de una orden de aprehensión lo que procede es el desechamiento, previa vista al Ministerio Público de la Federación.

INTERPRETACIÓN

> DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley, dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente

de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P. VII/2001, pág. 325.

ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, T. XII. 2º.10 P, pág. 615.

COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRECISAR EL NÚMERO DE LAS QUE SE REQUIERAN. De la recta interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, se concluye que los jueces federales deben precisar con toda exactitud el número de copias, tanto del escrito de demanda como del aclaratorio cuando requieran éstas para el trámite del juicio de garantías, dado que es jurídicamente inaceptable que al efectuarse una prevención a ese respecto sólo se diga "con las copias de ley", "con las copias necesarias", o se emplee otra frase similar, en virtud de que esa clase de expresiones son confusas y por ende obligan al promovente a decidir por sí mismos cuántas son a su juicio las copias que han de exhibir, lo que genera que incurran en omisiones, por tanto si no se hace un requerimiento específico, sino se emplea uno por demás general, el mismo no puede servir de base

para hacer efectivo el apercibimiento que prevé el párrafo segundo del artículo en comento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca, Tomo 80, agosto de 1994, J/309, pág. 77.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno SCJN, Novena Época, Tomo: XIII, correspondiente a abril de dos mil uno, T. VII/2001.

e) Auto admisorio de la demanda de amparo

Si de la demanda de garantías no se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; además, reúne todos los requisitos de ley y el Juez de Distrito no está impedido y es competente para conocer de ella, se dictará el auto de admisión previsto en el artículo 147, cuyo texto literal prescribe:

"Si el Juez de Distrito no encontrare motivo de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, y hará saber dicha demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiere enviado al pedirle informe previo.

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio en el lugar en que éste se siga; y fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas."

El contenido del auto admisorio de la demanda es el siguiente:

Se manifiesta expresamente que se admite la demanda de amparo interpuesta; se ordena que se registre en el libro de gobierno; se señala día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, generalmente se llevará a cabo en un término que no debe exceder de treinta días (salvo en los casos de excepción en materia penal que es de diez días); se requiere a las autoridades responsables para que rindan el informe con justificación respectivo dentro del término de cinco días (o tres en los casos de excepción) y se ordena que se dé vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Además de los acuerdos antes señalados que debe contener el auto admisorio, podrá agregarse lo siguiente, dependiendo del caso: si hubiere tercero perjudicado, se determinará que se le haga saber la demanda y que se le entregue una copia de la misma por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga, y fuera de él por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas la constancia de entrega respec-tiva de la copia del escrito de demanda hecha al tercero perjudicado; también en el auto admisorio se debe tener por autorizadas a las personas que se señalen en la demanda en término del artículo 27 para oír y recibir notificaciones, así como el domicilio para ese efecto; si son varios los quejosos debe requerírseles para que nombren a un representante común; si procede la suspensión de plano en términos de la fracción II del artículo 123, se suspenderá de oficio el acto reclamado; si no se está en el supuesto anterior y se solicita la suspensión, se ordenará que se forme por duplicado el incidente correspondiente; tener por anunciadas y ofrecidas las pruebas en la demanda de garantías.

A continuación, a manera de ejemplo, se transcribe un formato de un auto de admisión:

En la ciudad de México, Distrito Federal, a …… de …….. de ....., la secretaría da cuenta al juez con la demanda de amparo interpuesta por ……- CONSTE.

En la ciudad de México, Distrito Federal, a ……de …… de ..... y …

Vista la demanda de amparo promovida por……, contra actos del juez …… y otras autoridades, con fundamento en los artículos 1º, 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, 4º, 36, 114, 116, 147, 148, 149 y 156 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, regístrese en el libro de gobierno, intégrese por duplicado y separado el incidente de suspensión y dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para la intervención que a su representación compete. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de CINCO DÍAS siguientes a la recepción del oficio notificatorio, requiriéndose de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Amparo, al juez responsable, a fin de que al rendir el informe de que se trata, envíe copia certificada de las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de diez días de salario, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del citado numeral 149. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las …….. HORAS DEL DÍA …….. DE …… PRÓXIMO.

(PARA EL SUPUESTO DE QUE LA DEMANDA SE INTERPONGA POR DOS O MÁS QUEJOSOS).

"De conformidad con el artículo 20 de la ley de la materia, requiérase a los promoventes, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación que se les haga de este proveído, designen representante común, apercibidos que de no cumplir con lo anterior dentro del término indicado, se tendrá con tal carácter al primero de los nombrados."

(PARA EL SUPUESTO DE QUE EXISTA TERCERO PERJUDICADO)

"Por conducto de la actuario procédase a emplazar con una copia simple de la demanda al tercero perjudicado ……, en el domicilio especificado en la demanda de garantías."

(PARA EL SUPUESTO DE QUE EL TERCERO PERJUDICADO RADIQUE FUERA DE LA RESIDENCIA O JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE AMPARO)

"Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, gírese exhorto (o requisitoria) al juez de ……., para que ordene a quien corresponda proceda a emplazar al tercero perjudicado ……,

corriéndole traslado con una copia simple de la demanda, en el domicilio que aparece en ésta, y lo requiera para que dentro del término de TRES DÍAS, siguiente a la notificación que se le haga de este proveído, señale uno en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes y aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; en el entendido que dentro del término de cuarenta y ocho horas deberá remitir la constancia de entrega respectiva hecha al tercero perjudicado.

(PARA EL SUPUESTO DE QUE SE TRATE DE ACTOS QUE DIRECTAMENTE PONGAN EN PELIGRO LA VIDA, PERMITAN LA DEPORTACIÓN O EL DESTIERRO DEL QUEJOSO O LA EJECUCIÓN DE ALGUNO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, SIN ORDENAR LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN).

"En atención a que el quejoso reclama …… (actos prohibidos), con fundamento en el artículo 123, fracción …….. **(I o II)** de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio, a fin de que: cesen los actos consistentes en …….. (actos prohibidos por el artículo 22 constitucional) o que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan.(Para el caso de la fracción **II** del artículo 123 de la Ley de Amparo)

Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda (o los estrados), y por autorizadas en términos amplios del artículo 27 de la ley de la materia, a las personas que refiere en la misma.

Notifíquese personalmente.

Lo proveyó y firma el licenciado ……., juez …….. de Distrito …….—DOY FE."

3.1.5. Ampliación de la demanda

A pesar de que la Ley de Amparo no prevea expresamente la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas tesis algunas reglas para su procedencia; el primer momento procesal para ello será cuando no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables, en la que se señalaran nuevos actos, autoridades y conceptos de violación, pero dentro del mismo término que rige para la presentación de la demanda; el segundo momento procesal, es cuando una vez rendidos los informes justificados, de ellos se desprende la existencia de un nuevo acto o la intervención de una autoridad distinta, por lo

que hace al nuevo acto podrán ampliarse los conceptos de violación, pero si los actos son posteriores a esa presentación, estaremos en presencia de una inexistencia de acto (pues no existía antes de la presentación de la demanda, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio respecto a ellos —artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo—) y, en esos casos lo que procede es presentar una demanda nueva, con independencia que después se acumulen los juicios respectivos; y en ninguno de los supuestos anteriores se haya celebrado la audiencia constitucional.

Hay quienes sostienen que los nuevos actos pueden ser posteriores a la presentación de la demanda y es válido admitir la ampliación, criterio que no comparto. Existe la contradicción de tesis 2/99, que aún no se ha resuelto.

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1ª Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2ª Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3ª Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo IX, abril de 1999, tesis 2a. XLI/99, pág. 209.

ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA

DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1º, fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo VII, junio de 1998, tesis 1a./J. 36/98, pág. 5.

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis P. LXXXV/98, pág. 220.

Contra el desechamiento de la ampliación procede el recurso de queja.

AMPLIACIÓN DE UNA DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN, CONTRA RESOLUCIONES QUE LA DESECHAN. El recurso de revisión no es el medio de defensa idóneo para impugnar el acuerdo que niega

la admisión de la ampliación de una demanda de amparo indirecto, ya que la interpretación del numeral 83, fracción I, de la ley de la materia, conduce a concluir que dicho recurso procede únicamente contra aquellas resoluciones que desechan la demanda de garantías en su totalidad y todos los casos en que procede tal recurso se refieren a resoluciones que dan por terminado el juicio de amparo o el incidente de suspensión. En efecto, el recurso de revisión sólo procede contra resoluciones señaladas, expresa y limitativamente, en el invocado artículo 83, por lo que no admite interpretación por analogía, similitud o mayoría de razón; de modo tal que su fracción I no es aplicable al caso porque entre la demanda inicial y su ampliación no existe una relación lógica de identidad, pues con la presentación de la primera se ejerce la acción de amparo, iniciándose así el proceso jurisdiccional, en tanto que con la ampliación se pretende introducir nuevos elementos al juicio para modificar o adicionar una litis en vías de integración; ante estas diferencias, tampoco pueden estimarse idénticos los autos que desechan una y otra, ya que el de la demanda primordial tiene como efecto la inapertura del juicio, mientras que la no admisión de la ampliación permite que continúe el procedimiento; de ahí que el recurso procedente contra tales determinaciones es el de queja, de conformidad con el artículo 95, fracción VI, de la citada ley, ya que se está en presencia de una resolución del Juez de Distrito, durante la tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión y, por su naturaleza, puede causar daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio; además, atendiendo al sistema de tramitación de ambos recursos, resulta más adecuado a la práctica el de queja, por ser breve y sencillo, dejando abierta la opción de suspender el procedimiento en determinados casos, como lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, lo que no sucede con el recurso de revisión, cuya sustanciación es más compleja y, por lo mismo, implica mayor dilación, y no prevé la suspensión del procedimiento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo V, marzo de 1997, tesis P./J. 21/97, pág. 32.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO VERSE SOBRE HECHOS CONOCIDOS DESDE SU PRESENTACIÓN INICIAL, AUN CUANDO SE ENCUENTRE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL. La posibilidad de ampliar la demanda de amparo está condicionada a la aparición de nuevos hechos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su libelo inicial y se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional. De ahí que por más que la solicitud se presente dentro del término

legal, si la ampliación no obedece al conocimiento de hechos contenidos en el informe con justificación, en la ampliación del mismo o cualquier otra circunstancia, sino a hechos conocidos desde la presentación inicial de la demanda, so pretexto de encontrarse dentro del término legal para su promoción, lo que redundaría en detrimento del principio de expeditez en la impartición de justicia contenida en el artículo 17 constitucional.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV, marzo de 2002, tesis XVIII.2º.11K, pág. 1288.

4. Informe justificado

"Las autoridades responsables, como parte demandada en el juicio de amparo, tienen el derecho procesal de contestar la demanda instaurada en su contra por el agraviado; a esto se le llama en el procedimiento constitucional de amparo 'informe justificado'." [24]

El artículo 149 de la Ley de Amparo prevé la naturaleza y el contenido del informe justificado, al establecer que:

> "…las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe."

Es decir, las autoridades responsables manifestarán si es cierto o no el acto reclamado, expondrán los hechos que estimen convenientes con las razones y fundamentos para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado, acompañando las constancias necesarias que apoyen su informe. De igual forma, en el informe justificado se pueden hacer valer cuestiones de incompetencia o impedimento del Juez de Distrito para conocer del juicio; solicitar su acumulación a otro que se tramita ante el mismo o diferente juzgado; así mismo, en su caso deberá comunicar la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y respecto de los mismos actos reclamados.

El informe justificado deberá rendirse dentro de los cinco días siguientes a partir del momento en que la autoridad quede debidamente notificada (regla general), pero el Juez de Distrito podrá

[24] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 638.

ampliarlo hasta por otros cinco días si la importancia del caso lo amerita. Conforme al artículo 156, el término relativo a la rendición del informe con justificación se reduce a tres días improrrogables cuando el acto reclamado consista en la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia o los actos violatorios de los artículos 16, 19 y 20 constitucionales.

La autoridad responsable deberá rendir su informe por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, para que permita su conocimiento al quejoso, en él debe exponer las razones y fundamentos legales que a su juicio determinen la improcedencia del juicio o la inconstitucionalidad del acto y acompañar copia certificada de las constancias necesarias para que el Juez de Distrito pueda conocer los antecedentes y circunstancias del caso.

Si el informe justificado se rinde fuera del término antes señalado, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, de oficio o a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado; dicha solicitud podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia (párrafo primero del artículo 149).

En estos casos, el Juez de Distrito debe dar vista personalmente al quejoso con el informe extemporáneo para que si lo estima conveniente pedirá razonadamente el diferimiento de la audiencia constitucional, de otro modo no podría hacerlo, si no se da vista y no se difiere la audiencia el procedimiento de amparo resulta irregular y deberá reponerse; si se da vista y si se pide justificadamente el diferimiento y no se acuerda favorablemente, también habrá que regularizar el procedimiento; si se da vista, se pide el diferimiento pero sin justificación, por no tener prueba idónea que ofrecer o resulta ocioso el diferimiento, no sería necesaria la reposición del procedimiento.

INTERPRETACIÓN

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada

y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo "…el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,…", sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto: "Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."; por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, abril de 2000, tesis por contradicción 54/2000, pág. 5.

La falta de informe justificado presupone, salvo prueba en contrario, la certeza de la existencia del acto reclamado, ello no implica una confesión o aceptación presuntiva acerca de las pretensiones del demandante, sino que solamente hace suponer la existencia del acto reclamado, pero el quejoso deberá probar los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependan de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto (párrafo tercero del artículo 149).

Si la autoridad responsable no rinde informe justificado o lo hace sin remitir la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo del artículo 149, se le sancionará en la sentencia respectiva con una multa de diez a ciento cincuenta días de salario, tal y como lo establece el párrafo cuarto de este precepto legal.

Cuando la autoridad responsable en su informe niega la existencia del acto reclamado, el quejoso tiene la obligación procesal de comprobar la certeza de éste y su inconstitucionalidad.

La jurisprudencia nos dice que: "el hecho de que en el informe justificado se niegue la existencia del acto que se reclama, no es motivo para sobreseer por improcedencia fuera de audiencia, por

que se le privaría al quejoso del derecho de probar en la audiencia del juicio, la existencia de los actos negados por la autoridad".[25]

Por tanto, si el quejoso no demuestra en la audiencia constitucional la existencia de los actos reclamados se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74.

La negativa de los actos reclamados debe ser expresa, ya que de lo contrario se presumen ciertos a pesar de que se haya rendido el informe justificado, pues las autoridades deben manifestar si existen o no, en la inteligencia de que cuando se reclamen varios actos la referencia debe hacerse respecto de cada uno.

El informe justificado puede ser objetado de falso y en esos casos conforme al artículo 153, se suspende la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes a la objeción, en la audiencia citada se presentarán pruebas y contrapruebas respecto a la autenticidad del documento únicamente, no respecto a su contenido.

> INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 5/2001, pág. 10.

Por último, una vez recibidos los informes justificados, se ordenará agregarlos y, si son extemporáneos dar vista con los mismos a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga de acuerdo a su contenido.

Sobre este tema existen las siguientes tesis:

[25] Tesis Jurisprudencial 1003, p. 1621, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1971-1985, segunda parte, Salas y Tesis Comunes.

INFORME JUSTIFICADO DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUYO DOMICILIO ESTÉ FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL JUZGADO DE DISTRITO. PARA ACREDITAR SU RENDICIÓN BASTA LA DEMOSTRACIÓN DE SU RECEPCIÓN EN LA OFICINA DE CORREOS O TELÉGRAFOS DEL LUGAR EN EL QUE RESIDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Amparo, para los efectos del cómputo de los términos en el juicio de garantías, cuyas reglas se consignan en el numeral 24 de la propia ley, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los términos legales en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. Atento lo anterior, se concluye que si la autoridad responsable reside fuera del lugar del juzgado o tribunal del conocimiento del juicio de garantías, puede acreditar la rendición oportuna de su informe justificado con el comprobante de su depósito dentro del plazo legal en las oficinas del correo o telégrafo.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 61/2002, Página 259.

INFORME DE LA AUTORIDAD. La autoridad responsable al informar, sólo está obligada a manifestar si es o no cierto el acto reclamado, y basta su afirmación para tener por demostrada, la existencia o inexistencia del acto, de suerte que si el quejoso no está conforme con lo manifestado en ese informe, tiene la obligación de probar que no se ajusta a la verdad, y sólo en ese concepto puede rechazarse tal manifestación; de manera que si el reclamante en amparo, no demuestra que continúa en la posesión de un bien, contra cuyo desposeimiento en favor de tercera persona, solicita la suspensión, es indudable que ésta no procede, porque la medida no tiene efectos restitutorios, que corresponden a la sentencia que se dicte en el fondo del amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y tesis Comunes, pág. 1622.

INFORME DE LA RESPONSABLE. HECHOS ASEVERADOS. PRUEBA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD. Si la autoridad responsable asevera en su informe justificado que el quejoso ha efectuado pagos en cumplimiento de los decretos que impugna en su demanda de amparo, está obligada a comprobar su afirmación: siendo inadmisible, por tanto, su pretensión de revertir la carga de la prueba en el propio quejoso, por la sola circunstancia de que éste conoció el contenido de su informe justificado.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1627.

INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Rendido sin la debida justificación, sólo tiene el valor que merece la aseveración de cualquiera de las partes.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 993, pág. 1611.

INFORME JUSTIFICADO. El artículo 149 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables no solamente la obligación de rendir el informe justificado, sino también el de acompañar las constancias que lo justifiquen, y para el legislador es de tal manera importante y necesaria la obligación que les impone, de adjuntar a su informe, las pruebas con que justifiquen sus actos, que sanciona su omisión con multa.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1612.

INFORME JUSTIFICADO. La omisión en que incurran las autoridades responsables, al no remitir con su informe, otras pruebas más, solamente da lugar a que se les imponga una multa, pero no faculta a poner sobre ellas la carga de determinada prueba, que según el artículo 149 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso, quien no puede excusarse alegando que no pudo rendirlas, por tratarse de un documento confidencial, ya que las autoridades responsables están obligadas a expedir con toda oportunidad a las partes en el juicio de amparo, las copias o documentos que soliciten.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1612.

INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 994, pág. 1613.

INFORME JUSTIFICADO. Si una de las autoridades, al rendir su informe con justificación, se concreta a manifestar que se remite al informe que rinde otra autoridad, y ésta, al hacerlo, expone que procede el sobreseimiento en el juicio, porque los quejosos no hicieron uso de determinado recurso, debe concluirse que las autoridades no justificaron la legalidad de los actos que se les imputan, los que deben presumirse ciertos, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1614.

INFORME JUSTIFICADO. Cuando el informe justificado llega después de la hora señalada para la celebración de la audiencia de derecho, no debe ser tomado en cuenta, pues es en la audiencia en donde el juez pronuncia su sentencia.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1614.

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO INCORPORA ELEMENTOS NUEVOS A LA LITIS PROCESAL PLANTEADA, SU INTEGRACIÓN EN AUTOS DEBE SER NOTIFICADA PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y NO POR LISTA. Si por virtud del informe justificado rendido en el juicio por las autoridades señaladas como responsables, se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que, se hagan de su conocimiento cuáles fueron los fundamentos y motivos del acto que impugna y que alega desconocer, el Juez de Distrito que conozca de una causa deberá, invariablemente y con apoyo en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, ordenar se haga del conocimiento de la parte quejosa, por notificación personal, la integración en autos de los referidos informes justificados, dada la trascendencia que tal cuestión importa por ser, precisamente, la materia con que se ha de formar la litis constitucional pues, de lo contrario, es decir, de no ser notificado o hacerlo simplemente por lista, no se estará absolutamente seguro de que el agraviado se ha enterado de la existencia de los indicados informes justificados, y por ello, de los nuevos elementos que éstos aportan, pudiendo suceder que contra ellos no se enderece concepto de violación alguno durante la tramitación del juicio en esa instancia, creándose un estado de indefensión al quejoso, ya que su combate no podría ser materia de agravios en la revisión.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, segunda parte-1, pág. 397.

PRECEDENTES

INFORME JUSTIFICADO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE EL. Aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el de amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso, pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, págs. 834-835.

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO NIEGA ACTOS DISTINTOS A LOS RECLAMADOS, OPERA PARA ÉSTOS LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Los informes con justificación deben ser coherentes con la demanda de amparo que origina el juicio de garantías en que se produzcan, y si en los términos en que se encuentran redactados aparece que se niega la certeza de actos distintos a los reclamados, propiamente se está en presencia de falta de informe respecto de los actos realmente combatidos, que deben presumirse ciertos conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, pág. 834.

INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO, Y MENOS AÚN OBLIGADO, A EXIGIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LO RINDA. El Juez de Distrito da a la omisión del informe justificado el alcance jurídico que le corresponde de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, al presumir la existencia de los actos reclamados; lo cual es independiente de la prueba sobre su inconstitucionalidad cuando los actos no son inconstitucionales en sí mismos. Debe advertirse que el Libro Segundo de la Ley de Amparo no contiene precepto alguno que obligue al juez a requerir a las autoridades para que rindan informe justificado.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 996, pág. 1616.

INFORME JUSTIFICADO. EN ÉL NO PUEDEN DARSE LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO, SI NO SE DIERON AL DICTARLO. No está permitido a las autoridades responsables corregir en su informe justificado la violación de la garantía constitucional en que hubieren incurrido, al no citar en el mandamiento o resolución reclamados las disposiciones legales en que pudieran fundarse, porque tal manera de proceder priva al afectado de la oportunidad de defenderse en forma adecuada.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 997, pág. 1617.

INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. NO LO SUPLE EL PREVIO. El Juez de Distrito que en la sentencia toma como válida la negativa de las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes previos, en los cuales manifestaron que no eran ciertos los actos que se les reclamaron, está supliendo la falta de informe justi-

ficado con el informe previo, y esa situación no está autorizada por ninguna disposición de la ley de la materia, sino, al contrario, pugna abiertamente con el artículo 149 de la Ley de Amparo, que en su tercer párrafo dispone que la falta de informe justificado de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1628.

INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORÁNEO. CUÁNDO DEBE SER CONSIDERADO EN LA SENTENCIA. Las disposiciones contenidas en los párrafos primero y último del artículo 149 de la Ley de Amparo establecen los casos en que el Juez de Distrito puede tomar en consideración, al momento de dictar la sentencia, un informe justificado que fue rendido extemporáneamente. El primero de ellos se da cuando existe solicitud del quejoso, acordada favorablemente, para que se difiera o suspenda la audiencia constitucional y el segundo cuando el juez, con apoyo en el último párrafo del referido precepto, dispone de elementos que le permitan advertir que las partes han tenido oportunidad de conocerlo; es decir, que se haya dado vista al quejoso con su contenido por lo menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional; de lo contrario, si el Juez de Distrito lo toma en cuenta, existe violación al último párrafo del artículo en comento, en virtud de que se priva de defensa a la parte quejosa.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Segunda Sala, pags. 34-35.

INFORME JUSTIFICADO, FORMA QUE DEBE TENER. Los informes justificados deben expresar categóricamente si son ciertos o no, los hechos atribuidos a las autoridades responsables, sin que valga decir que éstas puedan hacer en ellos, apreciaciones de las cuales pueda inferir que han confesado tácitamente la existencia de los actos reclamados.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1613.

INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 1002, pág. 1621.

INFORMES JUSTIFICADOS. NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ LOS ANALICE EN SU SENTENCIA. El artículo 149, párrafo II, de la Ley de Amparo, no señala que el Juez de Distrito, en las consideraciones de su sentencia, deba referirse expresamente a las argumentaciones que contengan los informes que rindan las autoridades señaladas como responsables.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 7, Tribunal Pleno, tesis jurisprudencial 18, pág. 5.

INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, pag. 184.

INFORMES JUSTIFICADOS. NO ES OBLIGATORIO PARA EL JUEZ DAR VISTA CON ELLOS AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables deberán rendir sus informes con justificación dentro del término de cinco días, término que puede ser ampliado por el Juez de Distrito si la importancia del caso lo amerita, pero en todo caso deberán ser presentados con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de este precepto no se deriva que los Jueces de Distrito tengan la obligación de dar vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sino tan solo el que éstos deben ser presentados con la anticipación que permita su conocimiento por parte del quejoso, pues debe entenderse que teniendo la quejosa conocimiento de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dichos informes están a su disposición en el expediente para que pueda conocerlos y, en su caso, preparar las pruebas que los desvirtúan con la debida oportunidad.

Informe de labores de 1989, segunda parte, Tercera Sala, págs. 149-150.

INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR VÍA TELEGRÁFICA. SU VALIDEZ. No priva de validez al informe justificado rendido por la autoridad agraria responsable, el hecho de que haya sido

rendido precisamente por la vía telegráfica, pues ni del artículo 149 de la Ley de Amparo, ni de las disposiciones especiales en materia agraria contenidas en el Libro Segundo de la misma ley, se infiere que el informe justificado debe, indefectiblemente, rendirse por oficio. Por otra parte, si tratándose del informe previo la Ley de Amparo no sólo admite que las autoridades lo rindan por la vía telegráfica, sino que en determinadas hipótesis las obliga a ello, no existe razón para concluir que no puede rendirse por este mismo medio el informe justificado, sobre todo cuando las autoridades responsables residen fuera del lugar del juicio.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 1629-1630.

INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EXTEMPORÁNEAMENTE. DEBE ADMITIRSE EN EL JUICIO. Aunque las responsables no hubieren producido sus informes dentro del término de cinco días, no implica que el juez obre incorrectamente al tomar en consideración tales informes, porque, si se acredita en el expediente que las autoridades presentaron sus respectivos informes con tiempo suficiente al en que se inicia la audiencia constitucional, el quejoso tiene oportunidad para desvirtuar la negativa expresa de los actos que reclama; consecuentemente, tampoco debe interpretarse el artículo 149 de la Ley de Amparo en el sentido de que si no se rinden los informes dentro del término indicado, ello traiga como efecto que se establezca la presunción de que son ciertos los actos imputados a las autoridades.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 1007, pág. 1626.

LEYES, AMPARO CONTRA. LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO IMPLICA SU INCONSTITUCIONALIDAD. El artículo 149 de la Ley de Amparo señala las consecuencias que se derivan de la omisión de rendir informes justificados y ellas se reducen, por razón de la naturaleza del juicio instaurado, a tener como ciertos los mismos actos, presuncionalmente, salvo prueba en contrario y la imposición de una multa a las autoridades omisas, pero de ninguna manera implica considerar que la ley reclamada sea inconstitucional, pues esa cuestión atañe al fondo del asunto y debe ser demostrada por el quejoso a la luz de los conceptos de violación que se expresan y las pruebas que en su caso llegare a ofrecer, mas no puede considerarse como una consecuencia establecida en la Ley de Amparo, derivada de la mencionada falta de informe.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, págs. 949-950.

MULTA POR NO RENDIR INFORME JUSTIFICADO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE Y NO SE RECIBE EN TIEMPO. La multa prevista en el párrafo cuarto del artículo 149 de la Ley de Amparo sólo es aplicable en los casos en que la autoridad responsable no rinda informe con justificación o lo hiciere sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, y como el presupuesto de la disposición invocada no se da en el caso de que la autoridad rinda su informe con justificación acompañándolo de las constancias conducentes, no procede imponérsele la sanción a que se refiere, aunque en el Juzgado de Distrito se reciba dicho informe con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1897.

INFORME JUSTIFICADO. FALTA DE RENDICIÓN. MULTA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. Si de autos se advierte que el Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado dentro del término de tres días siguientes a la fecha de la notificación de tal prevención, apercibiéndolas que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 149 de la Ley de Amparo se les impondría una multa; luego entonces es hasta la sentencia cuando el resolutor federal, con vista de las constancias de autos, debe determinar si hubo mala fe en la falta de rendición del informe y decretar, con base en argumentos, la imposición de la multa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, T. XIX.2o.14 K, pág. 403.

INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EXTEMPORÁNEAMENTE. CASO EN QUE DEBE ADMITIRSE. Aunque las responsables no hubieren rendido sus informes dentro del término de cinco días, esto no implica que el juzgador de amparo obre incorrectamente al tomar en consideración tales informes, porque, si se acredita en el expediente que las autoridades presentaron sus respectivos informes con tiempo suficiente al en que se inicia la audiencia constitucional, la parte quejosa tiene oportunidad para desvirtuar el contenido de esos informes; consecuentemente, el artículo 149 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en el sentido de que si no se rinden los informes dentro del término indicado, ello provoque necesariamente la indefensión de la parte quejosa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, T. VI. 2º J/34, pág. 380.

5. Audiencia constitucional

A decir del maestro Ignacio Burgoa, la Audiencia Constitucional: "Es un acto procesal, un momento que tiene lugar dentro del procedimiento, en el cual se ofrecen y desahogan las pruebas aducidas por las partes, se formularán por éstas los alegatos en apoyo de sus respectivas pretensiones, y se dicta el fallo correspondiente por el órgano de control que resuelve el juicio de amparo en el fondo, que soluciona la cuestión constitucional suscitada o que decreta el sobreseimiento del mismo." [26]

Se le llama constitucional porque en ella las partes aportan los elementos y ofrecen al juzgador datos para la solución de la cuestión constitucional o de la improcedencia de la acción de amparo, a diferencia de lo que sucede en la audiencia incidental, en la que únicamente se resuelve lo relativo a la suspensión del acto reclamado.

El artículo 154 señala que esta audiencia será pública, lo que quiere decir que se lleva a cabo a puerta abierta en el local del juzgado, al que pueda tener acceso cualquier persona.

Puede decirse que el expediente se encuentra debidamente integrado cuando todas las partes han sido debidamente emplazadas, cuando el quejoso y el tercero perjudicado, hayan tenido conocimiento oportuno de los informes justificados; cuando las autoridades responsables y el tercero perjudicado conocieron las pruebas aportadas por el quejoso y éste las de aquéllos; y cuando también obren en autos las pruebas que, en su caso, deban solicitarse de oficio; entonces, atento al artículo 155, el juez declarará abierta la audiencia; en caso contrario procederá a diferirla, de oficio o a petición de parte, según sea el caso.

Al respecto, existen las siguientes tesis de jurisprudencia:

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA. El artículo 149 de la Ley de Amparo, al establecer que el juez podrá diferir o suspender la audiencia a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, otorga al juez potestad decisoria al emplear la palabra "podrá", debiendo por ello quedar a su prudente arbitrio el conceder o negar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, según proceda;

[26] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 666.

por ende, aunque las partes así lo soliciten, no indefectiblemente procederá esa consecuencia.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Octava Época, Tomo VI primera parte, tesis 1a/J.5/90, pág. 107.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. HIPÓTESIS EN QUE PUEDE DIFERIRSE, CONFORME AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. El texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece como requisitos para que la audiencia constitucional pueda ser diferida o suspendida, los siguientes: 1. Que el informe justificado se rinda, cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional. 2. Que el quejoso o el tercero perjudicado solicite se difiera o suspenda la audiencia. 3. Que el juez, ejerciendo su potestad decisoria, acuerde diferirla o suspenderla. Estos requisitos se establecieron al presuponer que si el informe justificado se recibió en menos de ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, el quejoso no estaba en condiciones de conocerlo con la debida oportunidad, en cuya hipótesis podría pedir el diferimiento o la suspensión de la misma, esto último en el caso de que se lo hubiese solicitado, lo que, incluso, puede hacerse verbalmente en ese momento. Es claro que el espíritu de esa reforma tiende a evitar que los juicios de amparo se prolonguen innecesariamente y, por eso, quedó limitada a los casos en que la parte quejosa o el tercero perjudicado soliciten que se difiera o suspenda la audiencia constitucional, pues sólo a ellos podría perjudicar el arribo extemporáneo del informe justificado; por lo que, sabedores de que está pendiente su recepción, deberán estar atentos a ello para tener la oportunidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional. De esta manera, si las partes no se presentaron a la audiencia constitucional, para hacer valer su derecho, debe entenderse que tácitamente consintieron los términos en que se hubiere rendido el informe, o bien han demostrado desinterés en cuanto a las consecuencias que les pueda originar su ausencia, ya que la misma les reportará la pérdida de la oportunidad de combatir el contenido del informe justificado. En consecuencia no es al juez a quien corresponde tutelar ese derecho y, sustituyéndose a las partes, diferir oficiosamente la audiencia.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Octava Época, Tomo VIII-agosto, tesis 1a/J.3/91, pág. 63.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE INFORME NO PRODUCE POR SÍ SOLO EL DIFERIMIENTO DE LA.

No obstante que en un juicio de amparo se reclame una orden de aprehensión, en cuya materia procede la suplencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ésta no le confiere al juzgador la facultad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional y de requerir como imposición de multas a la autoridad omisa, porque ello implicaría, en primer lugar, desconocer las consecuencias procesales que estableció el legislador en la propia ley a la conducta omisiva de la autoridad, y en segundo lugar, sujetar la celebración de la audiencia constitucional y, por ende, la resolución del juicio, al cumplimiento de la autoridad omisa, lo que resulta inadecuado, si consideramos que precisamente la aplicación del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo al presumir la existencia del acto reclamado releva al quejoso de la carga de la prueba, relativa a la existencia del acto reclamado quedando a cargo de él sólo la demostración de que el mismo es inconstitucional.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Octava Época, tesis 1a/J.5/92, pág. 13.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO. Para solicitar al juez que opere el artículo 152 de la Ley de Amparo y que requiera a la autoridad que exhiba copias o documentos solicitados por las partes y difiera la audiencia, en principio la petición de esas copias o documentos debe hacerse a la autoridad por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Octava Época, tesis P./J.7/94, pág. 14.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU INVALIDEZ POR FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O DEL SECRETARIO. Cuando del acta relativa a la audiencia constitucional celebrada en un juicio de garantías, se advierta que carece de la firma del juez ante quien se celebró o del secretario que la llevó a cabo y la sentencia no se dictó en forma continuada, tal irregularidad invalida la audiencia constitucional respectiva y, desde luego, trasciende a la sentencia combatida, razón por la cual debe ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto de que se verifique nuevamente la audiencia constitucional de que se trata y se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia: Segunda Sala, Tomo 79, julio de 1994, tesis 2a./J. 4/94, pág. 15.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDE SU APLAZAMIENTO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE LA PARTE INTERESADA EXHIBA JUNTO CON SU SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, LA COPIA DEBIDAMENTE SELLADA DEL ESCRITO EN EL QUE SOLICITÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS O DOCUMENTOS RESPECTIVOS, O BIEN, CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE NEGÓ A RECIBIRLO. De conformidad con lo dispuesto en el precepto citado, para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de acordar el aplazamiento de la audiencia constitucional y de requerir a la autoridad omisa para que expida las copias o documentos que se le solicitaron, es requisito indispensable que la parte interesada exhiba, junto con su solicitud de diferimiento, la copia del escrito a través del cual solicitó la expedición de copias o documentos para presentarlos como pruebas en el juicio, la que debe ostentar el sello de recepción correspondiente o, en su defecto, constancia fehaciente de que la autoridad responsable se negó a recibirlo. Lo anterior en virtud de que si sólo bastare la manifestación del interesado en el sentido de que presentó su solicitud, sin demostrarlo, el diferimiento de la audiencia quedaría al arbitrio de las partes, lo que resulta inadmisible, pues si se pretende exigir el cumplimiento de una obligación, es necesario que previamente se demuestre que se cuenta con el derecho para exigirla y, en el caso, el requerimiento para que se cumpla la obligación que a los funcionarios o autoridades impone el referido precepto, solamente procederá en los términos indicados.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, P./J. 28/2001, Página 58.

Si el expediente se encuentra debidamente integrado, una vez que el juzgador declare abierta la audiencia, la secretaría hará constar la fecha y hora en que se actúa; la presencia o ausencia de las partes señalando el nombre y carácter con que intervienen; en seguida se dará lectura a las constancias que obran en el expediente; posteriormente se recibirán las pruebas que se ofrecieron, se escucharán los alegatos formulados y el pedimento del Ministerio Público; al término de la misma ordenará que se recaben las firmas de las partes que estuvieron presentes y, por último, se dictará la sentencia correspondiente.

La audiencia constitucional consta de tres periodos: 1. Probatorio; 2. Alegatos, y 3. Sentencia.

5.1. De las pruebas. (Periodo probatorio)

En términos generales, en el juicio de amparo indirecto son admisibles todas las pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran en contra de la moral o el derecho. La recepción de las pruebas se hará en audiencia pública (artículo 154). El periodo probatorio comprende tres fases: el de ofrecimiento, el de admisión y el de desahogo de pruebas.

El primer acto procesal que se efectúa durante el desenvolvimiento de la audiencia constitucional es el ofrecimiento de pruebas, imputable a la actividad de las partes; en él rige el principio de oralidad, aunque en la práctica judicial se ofrecen normalmente por escrito y antes de la audiencia constitucional, y con él se da cuenta en el momento en que se celebra esa diligencia; el ofrecimiento de pruebas es un acto que necesariamente debe tener lugar en la audiencia constitucional, según lo señala el artículo 151.

5.1.1. La documental

Los documentos pueden ser públicos o privados, el Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 129 y 133 determina cuáles documentos tienen el carácter de públicos y qué debe entenderse por documentos privados, preceptos legales que textualmente dicen:

> ARTÍCULO 129.—"Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
>
> La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."
>
> ARTÍCULO 133.—"Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129."

Los documentos pueden presentarse con anterioridad a la audiencia del juicio; esto es, desde el momento de la presentación de la demanda o en cualquier otro hasta antes de la audiencia o en la audiencia misma. Si se presentan con antelación a la celebración de ésta, el juez deberá hacer relación de ellos y los tendrá por recibidos en ese acto, aunque no haya gestión al respecto (artículo 151).

Conforme al precepto 152, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedir con oportunidad las copias o documentos que aquéllas les soliciten.

Si las autoridades no cumplen, el juez requerirá a los omisos a petición de la parte interesada y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días.

Para que el juez requiera a las autoridades omisas es menester que el oferente de la documental justifique que ha solicitado oportunamente la expedición de las copias y que la responsable, o cualquier otra autoridad, ha desatendido la petición. La solicitud debe demostrarse con la copia de la solicitud relativa en la que conste la certificación, anotación o sello oficial de la autoridad requerida con asentamiento de la fecha y hora; porque en estas condiciones el Juez de Distrito está en aptitud de verificar si la solicitud se hizo oportunamente y, consecuentemente, ha lugar a requerir a las autoridades en términos del artículo 152. De otra suerte, la sola petición de que se requiera a la autoridad y se difiera la audiencia, sin el justificante relativo, da lugar a negar la petición, no obstante el requerimiento que el juez haga a la autoridad; cuando no se expiden las copias, la audiencia puede diferirse hasta en tanto se expidan y el juzgador hará uso de los medios de apremio a efecto de que se acate el mandato.

El artículo 152, en su último párrafo, señala que cuando los documentos solicitados sean actuaciones concluidas, pueden pedirse los originales a petición de cualquiera de las partes.

> AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CASO EN QUE LA NEGATIVA AL DIFERIMIENTO DE ELLA NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. La negativa del Juez de Distrito a diferir la audiencia constitucional, no es violatoria del artículo 152 de la Ley de Amparo, pues este precepto establece que es factible el diferimiento de la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir copias o documentos para ser aportados como pruebas en el juicio de garantías, no cumplan oportunamente con esa obligación, siempre que se las hayan solicitado y que para ello la parte interesada pida al Juez de Distrito que requiera a los omisos; sin embargo, si al quejoso se le dio vista con los informes de las autoridades responsables, al momento de ser agregados al juicio de garantías, esto es, con la debida oportunidad, resulta improcedente la solicitud de diferimiento, precisamente el día de la celebración de la audiencia para el efecto de estar en posibilidad de impugnar aquéllos; en consecuencia, al no darse la hipótesis prevista por el precepto citado, resulta correcta la determinación del juez Federal del conocimiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, T. II.2o.C.T.16 K, pág. 603.

COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establecen la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho; el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las señaladas como responsables.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, T. P./J. 46/96, pág. 17.

OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE EXPEDIR COPIAS Y DOCUMENTOS QUE SOLICITEN LAS PARTES PARA EL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO DEBE SOLICITAR AL JUEZ DE DISTRITO QUE REQUIERA A LAS OMISAS PARA QUE CUMPLAN CON LA. De conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes puedan rendir pruebas en la audiencia constitucional las autoridades tienen la obligación de expedir copias y documentos que soliciten, en la inteligencia que si las autoridades no cumplieren con ello, el interesado solicitará al juez que requiera a las omisas; el juez hará el aplazamiento por un término que no exceda de diez días. De ahí, que una correcta interpretación de este precepto legal, nos conduce a la convicción de que, para que opere

la obligación del Juez de Distrito de requerir a las autoridades omisas, previamente debe mediar solicitud de parte interesada, por tanto, si el quejoso no hizo petición alguna, el juez a quo no está en aptitud de proveer sobre ese aspecto por no ajustarse a lo que la ley de la materia establece.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, T. XX.76 K, pág. 413.

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA EL AMPARO. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR A LAS AUTORIDADES QUE OMITEN EXPEDIR LAS. Los artículos 150 y 151, de la Ley de Amparo, establecen que en el amparo son admisibles toda clase de pruebas excepto la de posiciones y que en particular las documentales pueden ofrecerse con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Por su parte el artículo 152 del propio ordenamiento señala que con el fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas, las copias o documentos que soliciten; que si dichas autoridades no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito requerirá a los omisos; consecuentemente, es indebido el acuerdo del juez de primer grado en el que, previa comprobación del interesado de que pidió oportunamente la expedición de diversas actuaciones en procedimientos en que no fue parte, y su manifestación bajo protesta de decir verdad de que le denegaron las mismas, se niegue a requerir a las autoridades omisas para que expidan tales constancias, con el argumento de que no existe fundamento legal para ello, puesto que esta hipótesis está contemplada en el artículo 152 de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, T. I. 7□. T. 5 K, pág. 447.

COPIAS O DOCUMENTOS, SUSCEPTIBLES DE EXPEDIRSE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 152, DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es verdad que conforme a lo preceptuado por el artículo 152 de la Ley de Amparo, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a las partes en un juicio de garantías, las copias o documentos que soliciten a fin de rendirlas como pruebas en la audiencia del juicio; también lo es, que una interpretación correcta del dispositivo legal en comento, las copias o documentos susceptibles de expedir, son aquellos que se refieren a diligencias, actuaciones, oficios u otros similares que obren en los expedientes en trámite o archivados,

pero no copias relativas a constancias ajenas a éstas de las cuales no se levantó el acta respectiva.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, T. XX.18 K, pág. 493.

DOCUMENTOS PÚBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. Hacen fe respecto del acto o actos contenidos en ellos, y no de aquellos que como incidentales o accesorios aparecen en los mismos documentos.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 701, pág. 1168.

INSTRUMENTOS PÚBLICOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. La circunstancia de que una declaración se asiente en un instrumento público, no atribuye al contenido de aquélla el carácter de prueba plena, ya que lo único que hace fe, es que ante el funcionario que intervino en el documento, se asentó dicha declaración.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 1168-1169.

Si un interesado falsamente informa al juez que se le negó una copia o documento que no solicitó, o ya se le hubiese expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

Los documentos pueden ser objetados desde su ofrecimiento o hasta el momento de la audiencia.

La objeción del documento suspende la audiencia del juicio y se tramita en la vía incidental, en una audiencia en la que se presentan pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento (artículo 153). Además la obligación debe circunscribirse a la autenticidad del documento y no a su valor probatorio, atento al artículo 153, pues precisa que: "…en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento".

INTERPRETACIÓN

DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse

por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, tesis por contradicción 22/2000, pág. 24.

Asimismo, el juez debe calificar la procedencia de la objeción atento a las razones que para ello se den; esto es, que se encuentren encaminadas a demostrar la falsedad del documento y no su valor probatorio, pues si los argumentos tienden a justificar esto último, es improcedente, caso en el que puede aplicarse al promovente multa de diez a ciento ochenta días de salario.

DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO PUEDE PLANTEARSE COMO AGRAVIO EN LA REVISIÓN. Si las partes dejan de concurrir voluntariamente a la audiencia para la cual se les ha emplazado desde el auto de admisión de la demanda, con esa abstención están renunciando de antemano a toda posibilidad de objetar legal y oportunamente los documentos que la contraparte ofrezca y le sean admitidos por el juez en el momento de la verificación de la audiencia constitucional, pues el proceso en el juicio de amparo está dividido en diversos periodos claramente distintos los unos de los otros, de tal manera que no puede iniciarse uno sin que haya terminado el que lógica y legalmente deba precederlo; dicha división obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico, que, de no ser atendidas, producirán perjuicios evidentes y situaciones legales absurdas; para que esa división tenga eficacia jurídica y sea respetada, debe ser aplicado al proceso del juicio constitucional el principio de eventualidad, con la sanción correlativa de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo oportuno. Por virtud del primero, las partes deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los periodos los hechos y cuestiones sobre los que deseen una decisión judicial, para el evento de que más tarde les pueda ser útil, aunque por el momento no lo sea; por ello,

si no lo hacen, pierden el derecho de hacerlo más tarde. Esta imposibilidad es la que se establece mediante el sistema de las preclusiones, o sea, la pena de la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, que no fue ejercitada en tiempo oportuno. Es natural que si el quejoso no aprovechó la oportunidad para objetar los documentos presentados por las partes dentro de la audiencia constitucional, como lo dispone el artículo 153 de la Ley de Amparo, por efectos del principio de eventualidad procesal precluyó su derecho para formular cualquiera impugnación de esta índole, ya que el recurso de revisión no es el momento procesal oportuno para impugnar de falso un documento.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 72 primera parte, pág. 41.

La autenticidad del documento sólo se apreciará en relación a los efectos exclusivos del juicio de amparo en que se ofrecieron.

Si se desecha la objeción, el juez puede sancionar al objetante con una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

INTERPRETACIÓN

DOCUMENTOS, PRUEBA DE. EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. De acuerdo con el sistema que rige la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías, que regula la Ley de Amparo en los artículos 151, 153 y 155, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, con excepción de la prueba documental, que podrá presentarse con anterioridad. Es decir, tratándose de una prueba documental su presentación es perfectamente válida en el momento de la audiencia, sin que exista obligación de parte de quien la presenta para que lo haga con antelación a la audiencia constitucional, a fin de que la parte contraria tenga oportunidad de conocer y objetarla. Para el caso de objeción de una prueba documental, el artículo 153 de la Ley de Amparo señala un especial procedimiento para la sustanciación del incidente de objeción que se inicia en la propia audiencia, cuya suspensión debe ordenarse por el juez a efecto de que se rindan las pruebas relativas a la autenticidad del documento objetado. Siendo este el sistema previsto por la Ley de Amparo (forma y términos en que debe objetarse un documento presentado en un juicio de garantías), debe convenirse en que el procedimiento señalado por el artículo 205, penúltimo párrafo, en relación con el artículo 142, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es aplicable, máxime que en el juicio de garantías, el artículo 150 del último ordenamiento citado permite toda clase de pruebas excepto la de posiciones. En tal virtud, si una parte no está conforme con un

documento presentado por la contraria y no lo objeta en la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, el valor probatorio de esos documentos será el señalado por el artículo 179 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 205, parte conducente del mismo código, que dispone que un documento que no es objetado oportunamente se tendrá por reconocido. Debe tomarse en cuenta, además, que la falta de asistencia a la audiencia de la parte interesada en objetar un documento y con ello la pérdida de la oportunidad de objetar sólo le es imputable a la propia parte interesada.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, primera parte, Tribunal Pleno, págs. 682-683.

DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos privados deben ser presentados en original. Dentro de esa acepción deben entenderse comprendidas las copias certificadas por un notario público, dado que éstas, por las atribuciones concedidas a los fedatarios de que se trata, constituyen un fiel reflejo de los originales, siempre que no se demuestre lo contrario.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, 1a./J. 28/99, Página 19.

5.1.2. La testimonial y la pericial

Testigo. "Es toda persona que tiene conocimiento de los hechos controvertidos y que no es parte en el juicio respectivo." [27] Por su parte el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé: "Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos."

Perito. "Prácticos o versados en alguna ciencia, arte u oficio. Según Escriche, son auxiliares de la administración de justicia y su misión consiste en aportar al juzgador los conocimientos técnicos de que éste carece, cuando, para considerar y resolver determinado asunto, no bastan al citado juzgador los conocimientos jurídicos que posee, sino que le hace falta contar, además, con tales conocimientos de carácter técnico." [28] Por su parte, el artículo 144 del Código Fede-

[27] Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrúa, 18ª ed., México, 1988, p. 765.

[28] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del Juicio de Amparo, Ed. Themis, 2ª ed., México, 1994, p. 133.

ral de Procedimientos Civiles, dice: “Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer…”

Por lo que respecta a estas pruebas, se deben anunciar cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento y el de la audiencia.

Conforme al segundo párrafo del artículo 151, el juez designará un perito para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte señale uno, ya sea que rinda su dictamen por separado o que se asocie al que nombró el juez.

Se debe exhibir copia de los interrogatorios al tenor del cual se examinarán a los testigos o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al celebrarse la audiencia; no se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Así también se entregará una copia del cuestionario a los peritos, a efecto de que se sirvan contestarlo.

INTERPRETACIÓN

TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS. Una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, inspirada en los principios de seguridad, igualdad y certeza jurídica, en relación con lo previsto en los artículos 165, 167, 174, 176, 179 y 182, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella ley, en términos de su artículo 2□, conduce a evidenciar que si bien dichos preceptos no establecen la obligación de dar el nombre de los testigos, de su análisis se infiere que el juez deberá conocer el nombre de aquéllos, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha prueba, ya sea a virtud de los que deba citar, de sustanciar un exhorto, o bien, al protestarlos, por lo que el oferente de la prueba testimonial deberá, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, proporcionar el nombre de las personas que rendirán su testimonio, a fin de que las partes en el litigio constitucional, así como el Juez Federal, tengan conocimiento, con precisión, de las partes que lo presentarán y de esta manera estén en aptitud de determinar su idoneidad, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente, por escrito o verbalmente, las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a las partes la misma igualdad procesal para hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas, brin-

dándoles así certeza jurídica, circunstancia esta que no puede tenerse por satisfecha si la probanza se ofrece sin la indicación de los nombres de los testigos, por lo que en este supuesto deberá requerirse el oferente a efecto de que subsane tal omisión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, junio de 2001, pág. 47.

PRUEBA PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. El texto del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases de procedencia del amparo indirecto, induce a considerar el carácter sumario del procedimiento relativo tendiente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. Congruente con este precepto constitucional, la Ley de Amparo fija los plazos máximos y aquellos de excepción, para la celebración de la audiencia y las condiciones para su suspensión o diferimiento a fin de que, dentro de las eventualidades de orden práctico que pudieran surgir en el procedimiento, se garantice la defensa de las partes, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 147, 149, 152 y 156 de dicha ley. Por su parte, el artículo 151 de la propia ley establece el plazo mínimo de cinco días para que las partes en el juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial preparación, como son la pericial, la testimonial y la de inspección judicial, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debe observar siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas, supuesto en el cual deberá fijar la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo, teniendo en consideración, en su caso, los criterios de esta Suprema Corte, especialmente el contenido en la jurisprudencia número 7/1996, publicada en la página 53, Tomo III, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA", de tal manera que si no la hace así, el juez incurrirá en una violación del procedimiento en el juicio de amparo que ameritará su reposición. Sin embargo, en la hipótesis de que las partes no anuncien ninguna de estas pruebas que ameritan preparación, ha de concluirse que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, ordinariamente no constituye violación procesal.

Contradicción de tesis 18/96.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero del Sexto Circuito y Primero en Materias Civil y

del Trabajo del Segundo Circuito.—16 de enero de 1997.—Unanimidad de diez votos (ausente presidente José Vicente Aguinaco Alemán).—Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2 de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, pág. 157.

PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, segunda parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece “PRUEBAS

TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA. Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: en primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la

materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, tesis P/J.7/96, pág. 53.

PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL CUESTIONARIO O INTERROGATORIO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO, CUANDO EXISTA TIEMPO PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN SIN QUE SE AFECTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. De conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo las pruebas pericial y testimonial deberán ser ofrecidas cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia, exhibiendo copias, para las partes, de los interrogatorios para los testigos o del cuestionario para los peritos, a fin de que estén en posibilidad de formular repreguntas al verificarse la audiencia o puedan designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Por lo tanto, debe considerarse que dichas copias deben ser exhibidas en el término previsto en el artículo en comento, pues de lo contrario, se imposibilitaría a las partes para repreguntar a los testigos o para designar también un perito, a no ser que se difiera la audiencia, retrasándose el procedimiento. Consecuentemente, cuando se ha hecho el anuncio de las citadas pruebas exactamente cinco días antes del fijado para la audiencia, pero se ha omitido la exhibición de las copias, no procede requerir al oferente para que las exhiba, sino que se deben tener por no anunciadas, ya que no existe tiempo suficiente para subsanar la omisión sin que se cause perjuicio a las demás partes o a la celeridad del procedimiento. Sin embargo, como esta disposición está inspirada en el principio de igualdad procesal de las partes, no se deben desechar las pruebas por la falta del cumplimiento de este requisito, cuando han sido ofrecidas con mayor anticipación, de tal manera que es posible prevenir al oferente para que aporte las copias respectivas y el juez pueda ordenar su entrega a las demás partes contando éstas con tiempo suficiente para formular repreguntas, designar otro perito o formular otro cuestionario, sin que tenga que diferirse la audiencia. En esa virtud, la falta de aportación de las copias necesarias no da lugar al desechamiento de las pruebas, sino sólo a que se prevenga al oferente, cuando ello no ocasione perjuicio a las demás partes del juicio ni a la celeridad del procedimiento. Este criterio se funda, además, en la aplicación

analógica de los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo, pues si conforme a estos preceptos el juez no debe desechar la demanda cuando el quejoso no exhibe las copias para las demás partes, sino que debe prevenirlo para que las presente dentro del término de tres días, igualmente deberá darse oportunidad al oferente de las pruebas para que presente las copias de los interrogatorios o cuestionarios faltantes, con la condición de que no se vulnere al susodicho principio de igualdad procesal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 753.

PRUEBA PERICIAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO ES SUPLETORIO DE LA LEY DE AMPARO. Tratándose de la prueba pericial no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, en virtud de que del contenido del artículo 151 de este último ordenamiento legal, se advierte la existencia de reglas especiales relativas al ofrecimiento, admisión y deshogo de la prueba de que se trata, distintas de las que establecen otros ordenamientos, entre ellos el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues mientras que en el juicio de garantías queda a cargo del Juez de Distrito la designación del perito que debe emitir su dictamen con base en el cuestionario presentado por el oferente, en el procedimiento civil federal corresponde a las partes la integración de la prueba designando sus propios peritos, según lo disponen los artículos 145, 146 y 147 del aludido Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la prueba en comento se desahoga mediante el dictamen que rinda el perito designado por el Juez de Distrito, aun sin la concurrencia de los peritos nombrados por las partes y, en cambio, en el procedimiento civil federal deben rendir invariablemente su dictamen todos y cada uno de los peritos que intervengan, incluyendo el tercero en discordia que en su caso sea nombrado por el tribunal.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, pág. 708.

PERITOS, APRECIACIÓN DE SUS DICTÁMENES. Siendo los peritos órganos de prueba auxiliares del juzgador, como asesores técnicos en puntos que requieren conocimientos especiales, es natural que el juzgador pronuncie por la opinión de aquéllos que le merezcan mayor confianza. Es de explorado derecho que las opiniones periciales se deben apreciar de acuerdo con las constancias de autos y no aisladamente.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 2065.

PERICIAL. TÉRMINO PARA OFRECERLA EN EL JUICIO DE AMPARO. OPORTUNIDAD. Si entre el día señalado para efectuar la audiencia constitucional y el en que surte efectos la notificación del auto que admitió la demanda de garantías, no existen los suficientes para que el quejoso pueda ofrecer la prueba pericial con la debida oportunidad señalada en el artículo 151 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es evidente que al quejoso se le reduce el término de cinco días a que tiene derecho, al no concederle los necesarios para ofrecer la prueba, ocasionándole notorios perjuicios, por lo que es procedente reponer el procedimiento. Si se señala fecha para la audiencia constitucional, y se da la circunstancia aludida, el Juez de Distrito deberá tener por anunciada la prueba pericial, aun cuando a ello implique la necesidad de diferir la audiencia.

Informe de Labores de 1998, Tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, págs. 25-26.

PERITOS DESIGNADOS POR EL JUEZ O POR LAS PARTES. VALORACIÓN DE SUS DICTÁMENES. No es jurídicamente posible aceptar que sólo los peritos designados por el Juez de Distrito son dignos de crédito, ya que el artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial debe ser calificada por el juzgador según su prudente estimación, por lo que en uso de tal facultad se puede dar valor probatorio a uno o más de los dictámenes presentados en el juicio, si contienen razonamientos y datos que produzcan convicción sin importar que los peritos hayan sido designados por el juez o las partes.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 2351.

PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE. Los dictámenes periciales son meras opiniones de técnicos en alguna especialidad, orientadores del arbitrio judicial, que de ninguna manera constituyen imperativos para el órgano jurisdiccional.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 1279, pág. 2076

PRUEBA PERICIAL. CASOS EN QUE NO PUEDE ESTIMARSE QUE EL DICTAMEN EMITIDO POR EL PERITO DEL JUZGADO SEA UNA OPINIÓN IMPARCIAL. La prueba pericial no puede considerarse debidamente desahogada, si el Juez de Distrito designa como perito a un profesionista dependiente de una de las autoridades responsables, pues no puede estimarse que su dictamen sea una opinión imparcial sobre las cuestiones planteadas en el cuestionario respectivo; máxime si tal dictamen es el resultado de trabajos

técnicos encomendados por el perito a personal dependiente de la propia autoridad. En tales condiciones, debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías para el efecto de que el juez del conocimiento ordene nuevamente el desahogo de la prueba pericial, designando perito a persona idónea.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 2086.

PRUEBA PERICIAL. RATIFICACIÓN EN QUE NO APARECEN LAS FIRMAS DEL JUEZ Y SECRETARIO. NO INVALIDA LA PRUEBA, SINO MOTIVA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La constancia de ratificación de un dictamen pericial que no aparece firmada por el juez ni autorizada por el secretario del juzgado de Distrito, motivo que tuvo en cuenta el juzgador para estimar que no puede tener valor jurídico probatorio esa prueba, no trae la consecuencia de invalidarla, sino, en aplicación analógica de la tesis 44 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, sexta parte, pág. 103, la de subsanar debidamente la omisión, y, como resultado, revocar la sentencia y mandar reponer el procedimiento en el juicio de amparo para el efecto de que el Juez de Distrito ordene requerir al perito a fin de que manifieste ante la presencia judicial si ratifica el dictamen que presentó, y satisfecho tal requisito, el juez, disponiendo de plenitud de facultades para efectuar la valoración de la prueba pericial, previa celebración de la audiencia constitucional, deberá emitir sentencia en conforme a derecho.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, págs. 2087-2088.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que,

por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, 1a./J. 44/2002, Página 212.

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES ILEGAL EL APERCIBIMIENTO HECHO AL OFERENTE EN EL SENTIDO DE QUE DE RESULTAR FALSOS O INCORRECTOS LOS DOMICILIOS SEÑALADOS PARA CITAR A LOS TESTIGOS, AQUÉLLA SE DECLARARÁ DESIERTA. El apercibimiento puede emplearse como una advertencia o prevención que la autoridad hace a determinada persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización de ciertos actos u omisiones, o bien, como una sanción que el juzgador puede imponer a sus subordinados y también a quienes perturben o contraríen el normal desarrollo de las audiencias y demás actividades judiciales o falten al respeto y consideración debidos a la administración de justicia. De lo anterior deriva que no puede constituir propiamente un verdadero apercibimiento el que se realiza al oferente de la prueba testimonial, consistente en que, de no resultar ciertos los domicilios de los testigos propuestos, se declarará desierta tal prueba, en virtud de que no existe advertencia alguna previa al ofrecimiento de dicha probanza, en el que se señalaron los nombres y domicilios de los testigos a citar, que pueda acarrear la realización de ciertos actos u omisiones, sino que se efectúa después de que se hizo tal oferta. Lo antes expuesto es así, porque el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, interpretado en forma estricta, no autoriza a realizar apercibimiento alguno en tal sentido, y si las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es claro que no debe pre-

juzgarse si los domicilios señalados por el oferente de la prueba testimonial son o no ciertos. Además, la falta de apercibimiento previo no repercutiría en la celeridad del procedimiento, ya que la justicia debe obtenerse a través de un procedimiento que garantice una efectiva defensa que permita al juzgador conocer con mayor precisión la verdad legal, aspecto este que evidentemente redundaría en darle mayor seguridad y certeza jurídica a sus resoluciones, por lo que, si no resultan ciertos los domicilios de los testigos, el juzgador estará, hasta ese momento, en aptitud de realizar el apercibimiento adecuado, según el caso que se actualice, y ahora sí, en aras de la celeridad del procedimiento.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, 1a./J. 43/2002, Página 119.

Una vez hecho el ofrecimiento de pruebas por las partes en los términos de la Ley de Amparo y de las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y atendiendo a la naturaleza de cada uno de los medios probatorios, el juez dictará el auto o acuerdo de admisión de las mismas, siempre y cuando la promoción esté apegada a derecho, de lo contrario no las admitirá; es decir, cuando no existe legalidad en el ofrecimiento el juzgador acordará su desechamiento.

Admitidas las pruebas, se procede a su desahogo, el cual debe realizarse en la audiencia constitucional, conforme lo establece el artículo 155; habrá casos en que estas probanzas tengan que desahogarse fuera del local del juzgado, la pericial, cuando su naturaleza lo requiera y la testimonial, cuando por las condiciones propias de quien deba declarar no pueda ocurrir a la residencia del mismo, en estos casos el personal de dicho órgano jurisdiccional, tendrá que trasladarse al lugar en que se halle el testigo o en el que encuentre el objeto del examen.

Es pertinente precisar que el desahogo de estas probanzas se realiza conforme a lo previsto en los artículos 151 de la Ley de Amparo y, supletoriamente, del 147 al 150, 167, 169, 170 y del 175 al 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Conforme al penúltimo párrafo del artículo 151, los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 166, lo cual manifestará, bajo protesta de decir verdad, al momento de aceptar su nombramiento.

El valor de ambas pruebas queda al prudente arbitrio del tribunal, pero un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que no se oponga

con otros medios de convicción (artículos 151 de la Ley de Amparo y 215 y 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

La carga de la prueba corresponde tanto al quejoso como a la autoridad responsable.

5.1.3. La inspección ocular

"La inspección judicial es un acto jurisdiccional que tiene por objeto que el juez tenga un conocimiento directo o sensible de una cosa o persona, relacionadas con el litigio." [29] "La inspección judicial, …tiene por finalidad dejar constancia de todo aquello que pueda ser apreciado sensitivamente, es decir, mediante el ejercicio de cualquiera de los sentidos (de ahí que existan inspecciones oculares, auditivas, olfativas y gustativas y que sea incorrecto que la ley la denomine 'ocular', que es tan solo una de sus especies)." [30]

Esta probanza debe ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial, atento el artículo 151.

Este medio de convicción puede practicarse a petición de parte o por disposición del tribunal con oportuna citación, para que las partes concurran, si lo estiman pertinente y hagan las observaciones oportunas. A juicio del tribunal o a petición de parte se levantará plano o tomarán fotografías del lugar u objeto inspeccionados; de toda la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella concurran (artículos 161 a 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

Del último precepto mencionado puede advertirse que este medio de convicción, al igual que la testimonial y la pericial, puede llevarse a cabo en un sitio distinto al de la residencia del juzgado, sin que ello implique que se está practicando fuera de la audiencia constitucional, pues ésta continúa abierta y sólo se cerrará hasta el total desahogo de probanzas y prácticas legales pendientes.

INTERPRETACIÓN

INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO RESULTE IDÓNEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE CON LA DOCUMENTAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 a 155 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles,

[29] Pallares, Eduardo, op. cit., p. 423.
[30] Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 133 y 134.

estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2 de la citada ley, que establecen que en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que sea idóneo y esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho, así como el procedimiento para su ofrecimiento, preparación y desahogo, y la facultad del juzgador, para conocer la verdad, de valerse de cualquier medio de prueba reconocido por la ley, y que esté relacionado con los hechos controvertidos, además de la obligación de las partes de probar sus pretensiones; en relación con el criterio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis P./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 157, de rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL."; se concluye que cuando en el juicio de amparo es ofrecida la prueba de inspección ocular, la cual se estima idónea para acreditar el hecho pretendido, y sin que su ofrecimiento sea contrario a la moral o al derecho, no es válido legalmente negar su admisión, con el argumento de que los hechos son susceptibles de acreditarse con la documental o con alguna otra prueba, puesto que tal circunstancia no se encuentra prevista en la ley. Además, si bien es cierto que de acuerdo con la naturaleza de cada prueba, hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho que se pretende acreditar, lo que permite distinguir cuáles son aptas para generar mayor convicción en el juzgador, también lo es que las partes tienen la oportunidad de escoger y decidir con cuál de ellas pretenden demostrar el hecho concreto a conocer e, incluso, aportar distintos medios probatorios complementarios entre sí para dar mayor certidumbre legal, y sólo cuando de manera indubitable se advierta que la prueba ofrecida no es la idónea para acreditar el hecho pretendido, o bien, sea contraria a la moral o al derecho, entonces sí, conforme a la jurisprudencia citada, debe ser desechada.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, 1a./J. 41/2002, Página 179.

INSPECCIÓN OCULAR, PRUEBA DE. NO DEBE PROPONERSE EN FORMA INCONGRUENTE O QUE SE EFECTÚE EN FORMA INDEBIDA. Es cierto que el tribunal debe recibir las pruebas que le ofrezcan las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, según lo establece en su primera parte el artículo 87 del Código

Federal de Procedimientos Civiles, pero también lo es que sólo deberán de recibirse aquellas que conforme a la ley sean procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se contraviertan o se promuevan de modo indebido; por lo que tratándose de la prueba de inspección ocular, o sea, del examen o reconocimiento que hace el juez, de la cosa litigiosa, o bien de hechos que, como el mismo nombre de tal prueba insinúa, puedan ser apreciados a la simple vista de la cosa, no debe proponerse en forma incongruente, sobre hechos que no tengan relación con los actos reclamados o que se efectúe en forma indebida.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera parte, Tribunal Pleno, págs. 851-852.

INSPECCIÓN OCULAR EN CASO DE ACTOS DEMOSTRABLES MEDIANTE DOCUMENTOS. NO DEBE ADMITIRSE. Tratándose de actos cuya demostración pueda hacerse mediante documentos, en los términos de los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, las partes tienen derecho y están obligadas a solicitar oportunamente de las autoridades correspondientes, copias certificadas de los documentos respectivos; de admitir la prueba de inspección ocular, equivaldría a interpretar indebidamente los preceptos legales citados y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba, al ayudarlo a construirla mediante inspección ocular de los archivos en que se encuentren los documentos relativos.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera parte, Tribunal Pleno, pág. 851.

INSPECCIÓN OCULAR, PRUEBA DE. NO TIENE TAL CARÁCTER LA QUE PARECE UNA CERTIFICACIÓN NOTARIAL. Se considera que la certificación notarial de hechos; en relación con una inspección ocular practicada por un notario público, no es apta para demostrar lo que pretende el quejoso, ya que como pruebas como la de inspección ocular deben prepararse en tiempo y ser recibidas por el juez, dando a las partes la intervención que legalmente les corresponde, para que estén en condiciones de hacer las observaciones que estimen pertinentes durante la diligencia.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 1167.

5.1.4. La presuncional

Escriche, citado en el Manual del Juicio de Amparo, dice que: “Son deducciones que derivan del Juzgador, por razones lógicas, de las circunstancias probadas legalmente y de la naturaleza de los hechos

que se controvierten; apreciaciones de carácter subjetivo que desprende el juzgador, fundadamente, de los elementos de autos; constituyen conjetura o indicio que sacamos, ya del modo que generalmente tienen los hombres de conducirse, ya de las leyes ordinarias de naturaleza; o bien, la consecuencia que saca la ley o el magistrado de un hecho desconocido o incierto. Hay pues dos especies de presunción, a saber: una determinada por la ley, que se llama presunción legal o de derecho, y otra que forma el juez por las circunstancias antecedentes, concomitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina, y se llama presunción del hombre…"

El artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala:

> ARTÍCULO 191.—"Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa de la ley."

Como se puede advertir, señala dos tipos de presunciones, las legales y las humanas.

Las legales pueden ser absolutas, cuando no admitan prueba en contrario al existir disposición expresa de la ley.

Las legales también pueden ser relativas, cuando admiten prueba en contrario, al igual que las humanas (artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

Para que la presunción cobre eficacia es menester que se pruebe el supuesto en que descansa (artículo 192 del Código Federal de Procedimientos Civiles).

Un ejemplo de presunción legal relativa se encuentra en el artículo 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que dice:

> "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario,…"

INTERPRETACIÓN

> PRESUNCIONES HUMANAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. Las facultades que otorga a los jueces la ley procesal, para calificar el valor probatorio de las presunciones humanas, está limitada por la observancia de determinadas reglas, que se deducen del texto de la ley, entre las cuales pueden contarse desde luego, la que estatuye que los hechos de que las presunciones dimanen, deben estar probados; y si los jueces, al hacer la valoración respectiva, no se ajustan a las expresadas reglas, consuman una verdadera violación de la leyes reguladoras de la pruebas de que se trata.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 2358.

PRESUNCIONES LEGALES, SU ESTIMACIÓN DE OFICIO. Siendo la presunción un proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro desconocido, no hay duda de que el juez tiene amplia facultad para apreciar, de oficio, las presunciones que deriven de los hechos comprobados en autos.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, pág. 2358.

PRUEBA PRESUNCIONAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba presuncional, para que engendre prueba plena, debe integrarse por medio de las consecuencias que lógicamente se deduzcan de los hechos, derivada del enlace armónico de los indicios que se encuentran ligados íntimamente con el hecho que se pretende probar, y que proporcionen, no una probabilidad, sino una conclusión categórica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo V, enero de 1997. T. XXI.1o.34 P, pág. 525.

PRUEBA PRESUNCIONAL HUMANA. Si el análisis de las probanzas rendidas en un juicio se agotan en hacer referencia por separado a cada uno de los instrumentos y medios allegados al juzgador por las partes contendientes a fin de crearle una convicción favorable a sus intereses, parece fácil entender que escaparían de la decisión de los tribunales numerosos conflictos en los que los interesados han visto fracasar sus esfuerzos por concretizar la prueba plena de los hechos base de su acción, sobre todo en aquellos asuntos que por sus características y cualidades peculiares son refractarios a la demostración por medios directos. La imperiosa exigencia de descubrir la verdad explica que el legislador, al lado de medios de prueba de apreciación tasada o semitasada, consagrará la prueba presuncional humana, tal como sucedió con el autor de los artículos 93, fracción VIII, 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, la presuncional en su vertiente humana se distingue como el medio demostrativo artificial e indirecto que abreva, por excelencia, de los indicios arrojados por cualquier otro instrumento probatorio y de las consecuencias inferidas o deducidas de hechos plenamente acreditados en el juicio, gracias a los cuales mediante una operación lógica es posible el descubrimiento de un hecho hasta entonces ignorado. La íntima relación entre los hechos probados y los hechos que se investigan, y la presencia de los demás requisitos configurativos de una presunción humana, a saber, que

se encuentren probados los hechos de los cuales deriva y que entre la verdad conocida y la buscada exista un enlace natural más o menos necesario de modo que su interpretación no conduzca sino en una sola dirección, según lo ha resuelto en repetidas ocasiones la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinan que el juzgador aún oficiosamente está constreñido a examinar esta prueba y a valorarla en conciencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo II segunda parte-2, pág. 430.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE CONSIDERARSE ACREDITADA, AUN CON PRESUNCIONES, SI DEBIDAMENTE ADMINICULADAS ENTRE SÍ LA EVIDENCIAN PLENAMENTE. Si bien es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia número 160 publicada en la página 266 de la octava parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES", ha considerado que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben acreditarse plenamente y no inferirse a base de presunciones; dado que la prueba presuncional, por sí sola, únicamente constituye un principio de prueba, no es menos cierto que varias presunciones en conjunto, debidamente adminiculadas entre sí, integran una prueba completa con valor pleno; de tal manera que si existen varias presunciones acerca del conocimiento del acto reclamado por parte del quejoso, mismas que analizadas de manera conjunta y en lo individual, evidencian que la presentación de la demanda fue extemporánea, debe decretarse el sobreseimiento del juicio de garantías, sin que ello signifique desacato a la jurisprudencia a que se ha hecho referencia, por las razones antes indicadas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo I, segunda parte-1, pág. 335.

5.1.5. Carga de la prueba

Conforme al tercer párrafo del artículo 149 puede decirse que la autoridad responsable tiene la carga para demostrar la inexistencia del acto o su constitucionalidad y la parte quejosa, la existencia del acto y la inconstitucionalidad alegada, pues este precepto textualmente dice: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos

que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 78, el juez deberá recabar oficiosamente las pruebas que se rindieron ante la autoridad responsable, que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto. Al respecto existe jurisprudencia por contradicción de tesis, que dice:

> PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución de amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del juez, sino que de calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tomarse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diver-sa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.
>
> Contradicción de tesis 8/96.—Entre las sustentadas por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circui-

to.—16 de enero de 1997.—Unanimidad de votos (ausente presidente José Vicente Aguinaco Alemán).—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.

Las pruebas respecto al fondo del asunto deben exhibirse en el cuaderno principal para que sean tomadas en cuenta, las relativas a la suspensión definitiva en el incidente respectivo; las exhibidas en la demanda sí pueden ser tomadas en cuenta para resolver la suspensión provisional aun cuando correspondan al fondo del asunto.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO. De conformidad con los artículos 2□, 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, las reglas para el ofrecimiento de pruebas en el cuaderno principal del juicio de garantías difieren de las relativas al incidente de suspensión. Ello implica que las ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas en consideración en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva, o que se solicite la expedición de copias certificadas, y obtenidas éstas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus efectos. Esta regla trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento con la pretensión de que en un cuaderno "se tengan a la vista al momento de resolver", las existentes en el otro, porque, de actuar así, ello puede repercutir en la debida marcha del proceso, sea del juicio principal o en el incidente de suspensión, pues la circunstancia de que uno y otro se tramiten por cuerda separada, les incorpora autonomía e independencia por cuanto hace a sus elementos probatorios. Además, dada la naturaleza de ambos, pudiera no coincidir en un mismo estadio procesal, de modo tal que si uno de ellos se encontrara en revisión y el otro aún en primera instancia, en éste sería imposible resolver por la falta de elementos. De ahí que, indefectiblemente, deben ofrecerse y desahogarse en el cuaderno respectivo los medios de prueba cuya valoración se pretenda. Se hace la aclaración de que el único caso en que se puede tomar en cuenta el mismo elemento probatorio "para ambos cuadernos" es cuando se ordena proveer sobre la suspensión provisional en el auto admisorio de la demanda pues, en esa hipótesis, el juzgador está obligado a apreciar las pruebas que se acompañaron a aquélla y valorarlas, para determinar si es o no procedente la suspensión provisional solicitada. Esto último obedece a que es en dicho momento cuando el juzgador, además de las copias destinadas a integrar el incidente de suspensión, también tiene a la vista el original de la demanda y, en su caso, los documentos que se acompañan a esta última, razón por la que está en aptitud de valorar, de manera directa, el material probatorio aportado por el promovente del juicio y resolver lo conducente, tanto en el cuaderno principal como en los

incidentales, aunque con posterioridad a ese momento se haga la separación formal y material del original de la demanda de amparo y sus copias.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo VI, diciembre de 1997, tesis P./J. 92/97, pág. 20.

IMPROCEDENCIA. LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE DERECHO A OFRECER PRUEBAS PARA DEMOSTRARLA, AUNQUE HAYA NEGADO LOS ACTOS RECLAMADOS, SI DICHAS PRUEBAS ESTÁN DESVINCULADAS DE LA NEGATIVA. De acuerdo con el principio de congruencia que rige el procedimiento del juicio de garantías, la litis constitucional se integra con los planteamientos que formula el quejoso en su demanda, tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, frente al propio acto de autoridad y con los razonamientos que la autoridad responsable exprese para sostener su constitucionalidad, o la improcedencia del juicio. Asimismo, conforme a una de las formalidades esenciales del procedimiento, las partes tienen el derecho de ofrecer y desahogar pruebas; de lo cual se sigue, que la autoridad responsable que niega los actos reclamados y a su vez invoca la improcedencia del juicio de garantías, conforme al derecho que le otorga el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, está en posibilidad de ofrecer las pruebas relativas a acreditar tal supuesto por ser una cuestión de orden público.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 69/2002, Página 251.

5.2. Alegatos

Los alegatos pueden producirse por escrito o en forma verbal. En ambos casos se reciben en la audiencia constitucional, pero cuando la exposición sea verbal, no deberá exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. Sin embargo, en el amparo penal, podrá asentarse un estracto de las alegaciones, si quien las formula lo solicita, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

También podrá formular alegatos por escrito el Ministerio Público que actúe en el proceso penal (federal o local), en los juicios de amparo que se impugnen resoluciones jurisdiccionales; para esto el juzgado de Distrito o quien conozca del juicio de amparo indirecto, conforme a su competencia, deberá notificarle la demanda de garan-

tías. Esta situación es relativamente nueva y apareció en la reforma del 8 de febrero de 1999, concretamente en el artículo 155 de la Ley de Amparo, al que se le adicionó un párrafo en ese sentido.

El problema se presenta al notificar la demanda, pues surge la duda si se deberá hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público que actuó en el proceso en primera instancia, o al que actuó en segunda, puesto que en ocasiones se atacan resoluciones del juez de primera instancia y en otras la que confirma o revoca aquélla en segunda instancia. Al respecto, considero que aun cuando la ley señala que el que actúe en el proceso penal, debe ser el agente en turno adscrito al tribunal (juzgado o tribunal) que haya dictado la resolución reclamada, sin que sea necesario notificar a quien personalmente actuó en el proceso, sino al que se encuentre adscrito, pues es quien en ese momento representa a la institución.

El juzgador del amparo no está obligado a analizar en sentencia las argumentaciones que se contengan en los alegatos que presenten las partes, pues no integran la litis. Así lo ha establecido la Suprema Corte en la siguiente tesis:

> ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 134, pág. 222.

Una vez concluido el segundo periodo de la audiencia, que es el de alegatos, tiene lugar la tercera etapa, que es el fallo o sentencia. Cabe mencionar que en la práctica y por razones de carga de trabajo, en los asuntos de fondo es casi imposible dictar las sentencias en ese momento y las que se logren dictar así, muchas veces es en detrimento de la calidad de las resoluciones; de ahí que considero positiva una reforma, en donde se establezca un término prudente para el dictado de esas sentencias.

La situación que se da con frecuencia en la práctica, de que un juez celebra y firma la audiencia y otro es el que dicta la sentencia, ya se resolvió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no es causa para reponer el procedimiento.

INTERPRETACIÓN

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PORQUE NO SON ACTOS PROCESALES DISTINTOS, SINO UNO SOLO. El primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo dispone: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda." De lo expuesto se infiere que la audiencia constitucional comprende los periodos de pruebas, alegatos y sentencia; ahora bien, si un Juez de Distrito recibe las pruebas y alegatos, y la sentencia la dicta en diversa fecha el juez que legalmente lo sustituye, dicha sustitución no puede llevar a sostener que se trate de un diverso acto, pues conforme a la disposición transcrita se trata de un solo acto procesal, por lo que tal circunstancia no constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías que amerite su reposición, siempre y cuando el acta haya sido firmada.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis por contradicción 129/2000, pág. 7.

SECRETARIO AUTORIZADO COMO JUEZ PARA RESOLVER EN JUICIOS DE AMPARO. PUEDE VÁLIDAMENTE PRONUNCIAR SENTENCIAS SI PRESIDIÓ CON ESE CARÁCTER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y AÚN NO CONCLUYE EL PERIODO DE LA AUTORIZACIÓN. De acuerdo con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 155 de la Ley de Amparo, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, la que se integra, entre otros actos, con la sentencia, con la que culmina dicha audiencia. De esas disposiciones y principios, deriva que el secretario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para fallar los asuntos de amparo en los términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe dictar la sentencia el mismo día en que se celebre la audiencia constitucional; y por excepción, si el cúmulo de las labores y atenciones que demanda el juzgado impide al secretario, en funciones de Juez, dictar la sentencia el día de la audiencia, debe firmar el acta relativa junto con el funcionario judicial que funja como fedatario, a fin de cerrar formalmente el periodo de la audiencia ese mismo día. En esta última hipótesis, el secretario autorizado podrá, válidamente, dictar la

sentencia correspondiente con posterioridad, a condición de que se encuentre dentro del tiempo que comprende la autorización, pues si dicho periodo ya transcurrió y, por ende, ya está en funciones el Juez titular, sólo a éste corresponderá dictar la sentencia respectiva, en el caso de que el acta de la audiencia esté levantada y formalmente cerrada. En el supuesto de que el secretario autorizado, sin haber dictado la sentencia en los términos anteriores, tampoco firme con su fedatario el acta de la audiencia constitucional, ante la falta de constancia que pruebe su formal existencia, la audiencia deberá reponerse por el titular, independientemente de la responsabilidad que pueda resultar al secretario autorizado. El criterio que asume este Tribunal Pleno, además de que respeta los principios procesales que rigen la audiencia constitucional, circunscribe la actuación del secretario al tiempo estricto en que se le otorgó la autorización, con lo cual se acata el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal y se evita la inconveniencia jurídica de que en un momento dado existan dos Jueces en un mismo juzgado, si se permite que el secretario autorizado dicte la sentencia después de vencida su autorización, en asuntos en los que había presidido, con ese carácter, la audiencia.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, P./J. 36/99, Página 30.

6. SENTENCIA

El Manual del Juicio de Amparo la define como: "La culminación del proceso, la resolución con la que concluye el juicio, en la que el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes contendientes."[31]

Los artículos 77, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo prevén que los fallos que se pronuncien en los juicios de garantías sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado. Esto es, limita la materia y los efectos de la sentencia, pues no está permitido hacer una declaración general respecto de la ley o del acto reclamado, sino que la limita a proteger al solicitante, y la protección de la justicia federal se reduce a un caso concreto y particular en el que se demostró que el acto de autoridad infringió las garantías individuales del solicitante.

[31] Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 141.

Para el pronunciamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, previo el examen de los conceptos de violación y la consideración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, después de haber reflexionado en relación a las causas de impedimento y en relación a la competencia, debe analizar la cuestión relativa a las causas de sobreseimiento, incluyendo la improcedencia del juicio por ser de orden público y si alguna de las causas, generalmente alegadas por la autoridad responsable, el Ministerio Público o el tercero perjudicado, resulta fundada se decretará el sobreseimiento, en el entendido que tales causas deben analizarse oficiosamente por el órgano de control constitucional (último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo).[32]

6.1. Análisis de forma y fondo

Si no existe causa para sobreseer en el asunto, y si se trata de una resolución emanada del procedimiento penal, lo procedente es estudiar el fondo del asunto, entendido éste, como el análisis relativo a situaciones propias del juicio penal, como son los presupuestos procesales, violaciones al procedimiento y a normas adjetivas, falta de fundamentación y motivación, así como las cuestiones del fondo propiamente dicho, como son las cuestiones inherentes al cuerpo del delito y probable responsabilidad del indiciado; analizando los conceptos de violación para conceder o negar la protección federal.

En materia penal, el juez procederá a dictar sentencia y, en su caso, suplirá la deficiencia de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación de conformidad en lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis. Asimismo, deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrá analizar en su conjunto los conceptos de violación a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada (artículo 79).

INTERPRETACIÓN

> SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio,

[32] En el Capítulo III de este libro, se analiza el sobreseimiento e improcedencia.

la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador —como conocedor del derecho que es—, se pronuncie al respecto.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo IV, agosto de 1996, Tesis por Contradicción 49/96, pág. 58.

Es importante señalar que el juez observará en orden preferente los temas que advierta de oficio o bien porque lo hagan valer en los conceptos de violación.

En primer lugar atenderá las violaciones relativas a los presupuestos procesales, concretamente a los presupuestos previos al proceso.

El artículo 183 de la Ley de Amparo los refiere en cuanto al amparo directo, al señalar lo siguiente:

ARTÍCULO 183.—"Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones."

Dicho precepto se refiere a violaciones de fondo y confunde con esa expresión, pues pareciera que refiere únicamente a situaciones concernientes al delito (cuerpo del delito y probable responsabilidad); sin embargo, la no extinción de la acción penal es un presupuesto previo al proceso que nos señala la ley penal federal en sus artículos del 91 al 118, como son la muerte del delincuente, amnistía, perdón del ofendido, prescripción, vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable, existencia de una sentencia dictada en otro proceso seguido por los mismos hechos.

Tales temas son de orden preferente a cualquier otra violación por disposición expresa del citado artículo 183 de la Ley de Amparo,

lo cual es aplicable también en amparo indirecto, tal como lo establecen las siguientes tesis de jurisprudencia:

> PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo IX, mayo de 1999, tesis por contradicción 18/99, pág. 328.

> PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de compe-

tencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquéllas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo X, noviembre de 1999, tesis por contradicción 62/99, pág. 316.

Inclusive al resolver el recurso de revisión, si el amparo fue concedido por el Juez de Distrito por alguna otra razón (violación formal, procesal o falta de fundamentación), el Tribunal Colegiado tendrá que atender perfectamente el tema relativo a la extinción de la acción penal, sin que esto signifique que vaya en contra de la tesis por contradicción 71/98, que a continuación se transcribe, porque ésta se refiere a cuestiones de fondo estrictamente dichas relativas al delito, mas no a cuestiones previas al proceso.

ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado

se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la reformatio in beneficio, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo XII, noviembre de 2000, tesis por contradicción 15/2000, pág. 264.

En estos casos el amparo es liso y llano.

En segundo lugar se analizarán cuestiones relativas a las infracciones al procedimiento penal, previas a la resolución reclamada, como el hecho de dictar un auto de formal prisión sin declarar en preparatoria al quejoso, o bien que al extraditable no se le haya notificado alguna de las diferentes etapas del procedimiento de extradición, cuando se reclame ésta. En estos casos, el amparo de concederse sería para el efecto de reponer el procedimiento.

En tercer lugar, las violaciones de carácter formal, consistentes en infracciones a normas de carácter adjetivo al momento de pronunciarse el acto reclamado, es decir, vicios, omisiones o incongruencias en la resolución reclamada, como puede ser indebida suplencia de los agravios al Ministerio Público, cuando se reclaman resoluciones de segunda instancia; incongruencias de las resoluciones entre los argumentos o consideraciones y resolutivos; falta de firma del juez y del secretario de la resolución reclamada. El amparo se concedería para el efecto de que se subsanen esos vicios o incongruencias.

En cuarto lugar, se analizará la falta de fundamentación y motivación.

En quinto lugar las situaciones del fondo propiamente dicho, relativas a la comprobación del delito. En primer término el Juez de Distrito tendrá que atender las violaciones cometidas en la reso-

lución reclamada, relativas al cuerpo del delito (tipo penal, antes de la reforma de 3 de mayo de 1999) y la responsabilidad penal del inculpado (en grado probable en amparo indirecto por la naturaleza de los actos reclamados).

En todos los casos, en cuanto al fondo del asunto, de resultar fundados los conceptos de violación o advertirse de oficio la violación de garantías, se tendrá que concluir con la frase sacramental que tradicionalmente conocemos La Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso... de lo contrario se niega el amparo bajo la frase La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso...

Es pertinente mencionar que en amparo directo se analizará por último otra situación más, lo relativo a la individualización de la pena, lo cual trae como consecuencia un amparo para efectos, de resultar violatoria de garantías esta parte.

No debe olvidarse que el análisis del sobreseimiento es previo a las causas de extinción de la acción penal.

6.2. Fundamentación y motivación

Precisado el orden preferente de los temas, debe reiterarse que la falta de fundamentación y motivación es preferente a las cuestiones de fondo relativas a la acreditación del delito y responsabilidad penal del inculpado. Así se advierte de la tesis que a continuación se transcribe:

> CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO, SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele, a reiterarlo.
>
> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 75, marzo de 1994, pág. 55.

En relación a los alcances de la sentencia que concede el amparo por falta de fundamentación o motivación, la Suprema Corte ha deter-

minado que la protección que se otorgue debe ser lisa y llana y no para efectos; sin que ello implique que la autoridad responsable esté impedida para emitir un nuevo acto, subsanando los vicios advertidos, es decir, motivándolo y fundamentándolo, si lo estima prudente. Al respecto se transcriben las siguientes tesis de jurisprudencia:

> AUTO DE FORMAL PRISIÓN INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo al quejoso o agraviado es el de restituirlo en el uso o goce de la garantía individual que le fue violada o transgredida; es decir volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, lo que significa que esta sentencia nulifica el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; en consecuencia, la concesión del amparo respecto de un auto de formal prisión que contenga violaciones formales debe ser lisa y llana y no para efectos.
>
> Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primera Sala, Tomo 84, diciembre de 1994, tesis por contradicción 20/94, pág. 15.

> ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo IV, octubre de 1996, tesis por contradicción 59/96, pág. 74.

> REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE EN ÉL SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN,

NO OBSTANTE QUE SE HABÍA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI ESE AMPARO LO FUE SÓLO EN CUANTO A LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. Los incidentes de repetición del acto reclamado tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reiteración, por parte de la autoridad responsable, de los actos por los cuales la justicia federal otorgó la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, y la autoridad responsable dicta una nueva orden de aprehensión por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos del artículo 16 constitucional, no puede ser considerado como una repetición del acto reclamado, pues de acuerdo con los términos que fue concedido el amparo al quejoso, la responsable quedó facultada para emitir una nueva orden de captura satisfaciendo los requisitos legales.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, tesis 1□./J. 18/98, pág. 155.

6.3. Análisis del cuerpo del delito y probable responsabilidad

En materia penal, si la resolución que se combate está motivada y fundada, al dictar sentencia se analizará el "fondo del asunto propiamente dicho", es decir, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto; si existen conceptos de violación es fundamental atenderlos y contestarlos en orden preferente, con independencia que de su análisis pueda ser de oficio a falta de argumento; en primer lugar el Juez de Distrito tendrá que atender a las violaciones cometidas en la sentencia relativa al cuerpo del delito (tipo penal, antes de la reforma constitucional de 3 de mayo de 1999) y a la responsabilidad penal del inculpado (en grado probable en amparo indirecto por la naturaleza de los actos reclamados). A falta de conceptos de violación se suplirá la queja deficiente si se advierte alguna violación de garantías, en este caso, de oficio se concluye con la frase sacramental que tradicionalmente conocemos "la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso…", si es que resultaron fundados los conceptos de violación, de lo contrario, se niega el amparo expresando "la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso…".

INTERPRETACIÓN

SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO

IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implica la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el Tribunal de Amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas de aquéllas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja.

Contradicción de tesis 27/95.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.—2 de septiembre de 1997.—Unanimidad de votos (ausente José Vicente Aguinaco Alemán y Sergio Salvador Aguirre Anguiano).—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretario: Luis Ignacio Rosas González.

6.4. Problemática de las agravantes y calificativas en la orden de aprehensión y auto de término constitucional

En relación a los requisitos constitucionales que deben contener tanto las órdenes de aprehensión como los autos de término constitucional (auto de formal prisión y sujeción a proceso), para garantizar una debida fundamentación y motivación de conformidad con los artículos 16 y 19 constitucionales, cabe puntualizar lo siguiente.

En principio, debe señalarse que hasta antes de la reforma constitucional de septiembre de mil novecientos noventa y tres, para el dictado del auto de término constitucional, se exigían entre otros requisitos el acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable

responsabilidad del indiciado. En ese sentido, la jurisprudencia mexicana esclareció el aludido concepto de cuerpo del delito, a través del criterio siguiente:

> CUERPO DEL DELITO. CONCEPTO DE. Por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura descrita concretamente por la ley penal.
>
> Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Primera Sala, Jurisprudencia 93, pág. 201.

Asimismo, en esa época, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también sustentó, en relación a la demostración de las calificativas del delito, la tesis que a continuación se transcribe:

> AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL. Atento a los dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el auto de formal procesamiento sólo se precisará la materia de la causa a seguir, al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el ejercicio de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o varias disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por ello, todo juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su actividad al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, sin analizar modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, ya que estos extremos deben ser objeto del proceso penal correspondiente y de la sentencia respectiva. No es obstáculo a la conclusión anterior, lo preceptuado por el artículo 20, fracción I, constitucional, en el sentido de que al resolverse sobre la procedencia de la libertad provisional, deben tomarse en cuenta las calificativas o modificativas que para el delito materia del ejercicio de la acción penal se invoquen por el Ministerio Público, ya que esta última disposición no se refiere en concreto al auto de formal prisión, sino a la hipótesis de que el acusado solicite y se le conceda la libertad bajo caución; además de que al reformarse el último de los dispositivos legales citados, en los términos aludidos, no sufrió enmienda el artículo 19 de la Constitución General de la República.
>
> Semanario Judicial de la Federación Jurisprudencia, Primera Sala, Tomo 16-18, abril 1989, Tesis por contradicción 4/89, pág. 54.

Sin embargo, a través de la reforma constitucional a la que nos hemos venido refiriendo se sustituyó el concepto de “cuerpo del

delito" por el de "tipo penal", en el artículo 19, además de incorporar este último concepto también en el diverso numeral 16, es decir, se cambió de un concepto con una connotación reducida por otro de contenido distinto y más extenso que el sustituido, que en consecuencia resultaba más garantía para el inculpado.

Las aludidas reformas a nuestra Carta Magna fueron efectuadas de la siguiente manera:

Texto anterior	Texto reformado
ARTÍCULO 16.—No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con penal corporal, y sin que estén apoyado aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.	ARTÍCULO 16.—No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado.
ARTÍCULO 19.—Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado, los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado.	ARTÍCULO 19.—Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se imputa al detenido y hagan probable la responsabilidad de éste.

La reforma efectuada a los preceptos constitucionales antes transcritos se puede resumir de la siguiente manera: [33]

"1. En el artículo 16 de la Constitución Federal se adiciona textualmente como requisito para el libramiento de la orden de aprehensión la acreditación de los elementos del tipo penal del delito.

[33] Sosa Ortiz, Alejandro, Los elementos del tipo penal la problemática de su acreditación, Ed, Porrúa, 1999, p. 42.

"2. En el artículo 19 de la Constitución Federal se sustituye el concepto 'comprobación del cuerpo del delito', como requisito para el dictado de un auto de formal prisión, por el de 'acreditación de los elementos del tipo penal del delito'.

"3. Como consecuencia de lo anterior se uniformizan expresamente los requisitos estructurales de la orden de aprehensión: acreditación de los elementos del tipo penal y probable responsabilidad, a los del auto de formal prisión."

A fin de ajustar la nueva terminología utilizada por los artículos 16 y 19 constitucionales de "elementos del tipo penal" y "probable responsabilidad", en sustitución de los anteriores de "cuerpo del delito" y "presunta responsabilidad", las legislaciones de procedimientos penales del país también fueron reformadas; así el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto fechado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres que, entre otros ordenamientos, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, entre los cuales se modificó el texto del artículo 168 para quedar en los siguientes términos:

> ARTÍCULO 168.—"El Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes:
>
> I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su caso, el peligro al que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;
>
> II. La forma de intervención de los sujetos activos, y
>
> III. La realización dolosa o culposa de la acción u omisión.
>
> Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere:
>
> a) las calidades del sujeto activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los elementos normativos, y h) las demás circunstancias que la ley prevea.
>
> Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad deberá constatar si no existe acreditada a favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.
>
> Los elementos del tipo penal de que se trate y la probable responsabilidad se acreditará por cualquier medio probatorio que señale la ley."

Es decir, en el artículo 168 del Código Adjetivo Penal Federal se determinó cuáles eran los elementos que integraban el tipo penal, comprendiendo tanto los de carácter objetivo como los de índole subjetivo, y normativo. Asimismo se especificó cuáles eran comunes en todos los tipos penales (básicos o fundamentales, en las tres primeras fracciones), y cuáles eventualmente pudieran comprender algunas descripciones legales en particular (tipos especiales o complementados, privilegiados o agravados, previstos en el cuarto párrafo de dicho precepto). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las anteriores reformas, realizó la siguiente interpretación:

> ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBEN PRECISARSE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES DEL DELITO, DE ACUERDO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estatuye que: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado." Dentro de este contexto normativo, es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir una orden de aprehensión, determinar cuáles son, según el delito de que se trate, los datos que acreditan los elementos del tipo penal, a fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva básica, sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que el dictado de la orden de captura, como consecuencia del ejercicio de la acción penal realizada por el Ministerio Público, surte el efecto procesal de poner a disposición del juez al indiciado en relación con determinado delito; por tanto, deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la consignación.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Tomo VII, abril 1988, jurisprudencia por contradicción 18/97, pág. 155.

En este entendido, podemos concluir que a partir de la aludida reforma de septiembre de mil novecientos noventa y tres a los artículos 16 y 19 constitucionales, en el dictado de la orden de aprehensión y el auto de término constitucional, el estudio relativo no debía limitarse al análisis del cuerpo del delito (elementos objetivos), sino que debería referirse a todos los elementos del tipo (elementos objetivos, normativos y subjetivos). De igual manera, como consecuencia de lo anterior, en el dictado de dichas resoluciones debían precisarse las circunstancias agravantes o atenuantes, así como las calificativas o modalidades del delito por ser éstas parte del concepto "elementos del tipo".

A pesar del avance logrado en ciertos aspectos con la reforma anterior, en cuanto al concepto y a los derechos del gobernado, propiciada por el ilustre maestro don Moisés Moreno Hernández, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, hubo una contrarreforma, a través de la cual se volvieron a modificar los artículos 16 y 19 constitucionales, en donde se sustituyó de nueva cuenta el concepto de "elementos del tipo" por el de "cuerpo del delito"; al quedar de la siguiente manera:

> ARTÍCULO 16.—"…
>
> No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado."
>
> ARTÍCULO 19.—"Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado."

De la misma forma, las legislaciones procesales penales del país fueron reformadas; así, el dieciocho de mayo siguiente se reformó el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, contenido en el Capítulo I, del Título V, relativo a la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para ajustar la ley procesal penal vigente a la nueva terminología empleada en la Constitución. Dicho precepto a la letra señala:

> ARTÍCULO 168.—"El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
>
> Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.
>
> La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.
>
> El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley."

Cabe entonces cuestionarse si con la inclusión del concepto "cuerpo del delito" como requisito de las órdenes de aprehensión y autos de formal prisión en materia federal, resulta necesario para su acreditación la demostración de las modificativas o calificativas y en general de las atenuantes o agravantes del delito en dichas resoluciones. Al respecto debe decirse que tomando como base el contenido del artículo 168 del código adjetivo de la materia, que establece que el cuerpo del delito se constituye por el conjunto de elementos objetivos y normativos del tipo penal, sí deben analizarse e incluirse.

Ahora bien, la doctrina los ha clasificado a los tipos penales en básicos (v. gr. el del homicidio simple, art. 302 C.P.F.); tipos especiales, que se constituyen bajo una sola norma, que a su vez pueden ser agravados (v. gr. parricidio 323 C.P.F. y privación ilegal de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual 365 bis) o privilegiado (v. gr. homicidio cometido en estado de emoción violenta art. 310 C.P.F.); y tipos complementados que se constituyen con la norma del tipo básico y otra complementaria, que también pueden ser agravados (v. gr. robo con violencia arts. 367, 370 y 381 C.P.F.) o privilegiados (v. gr. homicidio en riña arts. 302 y 308 C.P.F.).

Asimismo, la doctrina ha sostenido que los elementos del tipo penal en forma abstracta, son los siguientes: la conducta (acción u omisión); el bien jurídico; la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido; sujeto o sujetos activo y pasivo; nexo causal; objeto material; los medios utilizados y las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión (modalidades de la conducta); voluntad dolosa y culposa.

Estos a su vez los clasifica en objetivos, normativos y subjetivos.

Ahora bien, los elementos objetivos son aquellos que pueden ser constatados con la sola aplicación de los sentidos (la vista, el gusto, el tacto y el olfato); de ahí que la conducta (acción u omisión), la lesión del bien jurídico, los sujetos, el objeto material, los medios utilizados y las circunstancias de ejecución (lugar, tiempo, modo y ocasión), son elementos que se pueden constatar con los sentidos y acreditar con los medios de prueba existentes en la ley.

Los elementos normativos requieren un determinado juicio de valoración. Por ejemplo cuando el tipo penal contiene expresiones como las siguientes en el Código Penal Federal (C.P.F.): "injustificadamente" art. 225, fracción X; "sin que proceda denuncia, acusación o querella", art. 225, fracción X; "hechos falsos o leyes inexistentes", art. 231, fracción I; "documentos de crédito público", art. 239; "funcionarios electorales y funcionarios partidistas", art. 401, 405 y 406, etcétera.[34]

Los elementos subjetivos son aquellos que no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento y, por ello, su comprobación resulta complicada; de tal manera que sólo con la confesión apoyada en otras pruebas se pueden acreditar o bien, cuando no exista ésta, con otras pruebas, aplicando la prueba circunstancial o indiciaria. Dentro de esos elementos encontramos al dolo y la culpa, es decir, a la intención y a la imprudencia, que si bien no se describen en el tipo penal, conforme a la Teoría Finalista son parte de la conducta (acción u omisión) y conforme a la causalista de la culpabilidad; sin embargo, también existen en los tipos penales, descritos en ellos, los elementos subjetivos específicos, que son los motivos particulares, intenciones, ánimos, tendencias o propósitos del activo del delito, como por ejemplo el "a sabiendas" en el delito de uso de documento falso, o el "con el propósito de" en el delito de privación ilegal de la libertad (art. 365 bis C.P.F.).

Así, las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (modalidades), son factores que también atenúan o agravan (atenuantes y agravantes) la responsabilidad del autor del delito incidiendo en la medición cuantitativa de la pena.[35] Es decir, en mi concepto, son las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión que califican la conducta las calificativas propiamente dichas.

[34] Moreno Hernández, Moisés, Política criminal y reforma penal, Ed. Ius Poenale, Centro de Política Criminal Ciencias Penales, A.C., 1ª ed., 1999, pp. 212 a 213.

[35] Muñoz Conde, Francisco, Teoría general del delito, Ed, Themis, S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1994, p. 182.

Hay ciertos tipos penales, especiales o complementados, agravados o privilegiados, que hacen referencia a circunstancias de lugar, por ejemplo: "en establecimientos comerciales" (art. 381, fracción V C.P.F.), "paraje solitario" (art. 286 C.P.F.). Otros hacen referencia a circunstancias de tiempo ("hacer proselitismo el día de la jornada electoral"; (art. 403, f. III C.P.F.); de modo ("en forma tumultuaria", art. 130; "públicamente", art. 209 C.P.F.); de ocasión ("con motivo o en virtud del empleo, cargo o comisión", art. 224, fracs. III, IV y V; 225, fracs. II y X y 220 C.P.F.).[36] Algunas de esas circunstancias tienen la función de agravar o atenuar la pena, y son a ellas a las que conocemos como calificativas.[37] En mi concepto, solamente a ellas.

Lo anterior es así, porque existen agravantes o atenuantes en razón de la calidad o pluralidad específica de los sujetos, activo y pasivo, por ejemplo la violación agravada en razón del parentesco (art. 266 bis C.P.F.); y otras en función de algún elemento normativo, por ejemplo la "extorsión realizada por una asociación delictuosa" (art. 390 C.P.F.); otras en función de un elemento subjetivo específico (art. 365 bis C.P.F. Privación ilegal de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual). Los dos primeros casos, por ser elementos objetivos y normativos, constituyen el cuerpo del delito conforme al artículo 168 de la legislación federal, luego también son incluyentes en la orden de aprehensión y auto de formal prisión.

En suma, para evitar las confusiones que se han presentado tanto en tesis de los tribunales colegiados, como en algunos libros, debe decirse que el concepto agravante y calificativa aunque parecieran sinónimos no lo son, pues tienen sus diferencias; las agravantes y atenuantes pueden darse, en función de las modificativas o calificativas (modalidades), que son las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión que califican la conducta del indiciado (ejem.: "robo calificado o agravado en lugar cerrado" art. 381 C.P.F.), pero también en función de algún elemento normativo (ejem.: extorsión agravada, "al servidor público…", "asociación delictuosa" art. 390 C.P.F.), en función de la calidad o pluralidad específica de los sujetos, activo y pasivo (ejem.: lesiones agravadas en función del parentesco, "pariente" art. 300 C.P.F.), o inclusive algún elemento subjetivo específico (ejem.: privación ilegal de la libertad agravada, art. 365 bis C.P.F. "al que prive ilegalmente a otro de su libertad con el propósito de realizar un acto sexual…").

[36] Ob. cit., Moreno Hernández, Moisés, p. 211.

[37] Díaz de León, Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, Ed. Porrúa, S. A., México, 1997, 3ª ed., tomo 1, p. 307.

Es decir, la agravante o atenuante son conceptos jurídicos que inciden en la penalidad en función de las particularidades de los elementos del tipo penal; ya que pueden darse en base a una calificativa; pero también la puede constituir la pluralidad o la calidad específica del sujeto pasivo o activo, los medios de comisión y algún elemento normativo o subjetivo específico. De tal manera que no toda agravante o atenuante constituye una calificativa, pero ésta sí puede constituir una agravante o atenuante; de ahí que en ocasiones hay quienes equivocadamente llaman delito calificado, cuando la penalidad se agrava o se privilegia en función de la calidad o pluralidad específica de los sujetos, activo o pasivo, debiéndose llamar solamente "delito agravado".

Así, es claro que si el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que el cuerpo del delito lo constituyen los elementos objetivos y subjetivos, y si las circunstancias de lugar, modo, tiempo y ocasión, son elementos susceptibles a los sentidos y, por ende, objetivos, las calificativas deben analizarse en la orden de aprehensión y auto de formal prisión, como parte del cuerpo del delito, sin que actualmente sea aplicable la vieja tesis de jurisprudencia 4/89, anterior a las reformas de 1994, ni tampoco la posterior, la número 23/97, anteriormente señaladas.

Debe hacerse la aclaración que existen legislaciones procesales que constituyen el cuerpo del delito con elementos objetivos y normativos, como el artículo 25 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, pero otros no, pues agregan los subjetivos específicos, como es el caso del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que a la letra dice:

> ARTÍCULO 122.—"El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
>
> El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito.
>
> En los casos en que la ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del cuerpo del delito.
>
> La probable responsabilidad del indiciado, se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes se deduzca su obrar doloso o culposo en el delito que se le imputa, y no exista acreditada en su favor alguna causa de exclusión del delito."

Sin embargo, aun en el caso del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, las calificativas deben incluirse en la orden de aprehensión y auto de formal prisión, por incluir elementos objetivos, y también deben incluirse las agravantes o atenuantes, derivadas de otros elementos objetivos como son las calidades en los sujetos y los medios de comisión, así como las derivadas de elementos normativos y subjetivos específicos.

Por tanto, el nuevo contenido del cuerpo del delito dependerá de la definición que cada una de las legislaciones locales le otorgue.

Algunos tribunales colegiados ya se han pronunciado al respecto en ese sentido, por lo que cabe hacer alusión al siguiente criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se interpretó el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que sufrió casi las mismas reformas que el 168 del código adjetivo federal de la materia a que se ha venido haciendo alusión.

> AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE DEBEN INCLUIR LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL, A LA LUZ DE LA REFORMA DEL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, AL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/97, publicada en la página 197 del tomo V, del mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL', QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES", estableció el criterio de que en el auto de formal prisión deben quedar determinados con precisión los elementos constitutivos del tipo penal incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador. Por otra parte, el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal sufrió reformas el tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, estableciendo de nueva cuenta la comprobación del "cuerpo del delito", abandonando el concepto de "elementos que integran el tipo". Sin embargo, la connotación actual del cuerpo del delito difiere de la que estuvo vigente antes de la reforma de 1993, pues entonces la Suprema Corte de Justicia de

la Nación estableció que por cuerpo del delito debía entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos integradores del tipo penal respectivo, y disponía que el cuerpo del delito se tendría por comprobado cuando se acreditara la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, pero en la actualidad es diferente, toda vez que el artículo 19 constitucional establece que en el auto de formal prisión deberán expresarse "… el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución …", y el artículo 122 del precepto antes citado establece que "… El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito. …"; de ello es dable concluir que es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir un auto de formal prisión, demostrar todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como las circunstancias de ejecución del mismo, incluyendo en éstas las calificativas o modificativas del delito, pues en el caso, éstas también forman parte de la conducta. Por tal razón es obligatorio observar lo establecido en la jurisprudencia de la Primera Sala citada con anterioridad, pues lo dispuesto en la misma no se contrapone a las reformas establecidas en el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que, derivado de un análisis integral del precepto antes citado con el artículo 19 de la Constitución, se debe concluir que el juzgador al emitir el auto de formal prisión debe abarcar lo establecido en ambos preceptos con el fin de respetar la garantía de seguridad jurídica del gobernado en el proceso penal".

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, tesis I. 6□. P. 18 P, pág. 1091.

Comparto este criterio que sustenta la tesis antes transcrita; sin embargo, considero que la jurisprudencia de la Primera Sala que se indica con el número 1□/J. 6/97 ya no es obligatoria, pues ha quedado superada con las reformas constitucionales y contiene diversas razones para concluir que deben incluirse las calificativas en el auto de formal prisión.

En torno a las agravantes, en las que incluimos a las calificativas, se ha discutido si en los tipos complementados y especiales, al no acreditarse todos los elementos del tipo penal debe absolverse al acusado en razón de los principios de legalidad y seguridad jurídica, o bien condenar por el delito básico si sus elementos se demuestran. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, por política criminal y para evitar la impunidad la segunda postura, al resolver el problema suscitado con el tipo especial del robo espe-

cífico, establecido en el artículo 371 del Código Penal Federal, cuyo criterio se transcribe:

> ROBO, ARTÍCULO 371, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. LA NO INTEGRACIÓN DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS SÓLO ORIGINA LA TRASLACIÓN DE TIPO AL BÁSICO Y NO LA ATIPICIDAD. Al margen de la clasificación doctrinaria que pudiera tener el delito establecido en el artículo 371, párrafo tercero, del Código Penal del Distrito Federal, es de considerarse que éste se constituye por el básico o fundamental de robo establecido en el artículo 367 del señalado ordenamiento, por tanto, la no integración de alguno de los elementos del tipo de que se trata, esto es, de la conducta establecida y sancionada en el mencionado párrafo del artículo 371, sólo genera una traslación de tipo al básico, no así la atipicidad, sin que ello pueda considerarse como una reclasificación, pues simplemente se trata de una cuestión de grado.
>
> Contradicción de tesis 7/98. Entre las sustentadas por el Primero, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
>
> (Tesis de jurisprudencia 5/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, JuaN N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas).

6.5. Aclaración de sentencia

En primera instancia la sentencia dictada en amparo indirecto no puede ser materia de aclaración por parte del juez, para ello está el recurso de revisión, cuya sentencia sí puede ser objeto de esa aclaración, por errores materiales en la misma.

INTERPRETACIÓN

> ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo

necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la constitución y en la Jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, Compilación de 1995, tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 4/96.—Entre las sustentadas por la anterior Tercera Sala y la actual Segunda Sala.—26 de agosto de 1997.—Unanimidad de once votos.—Ponente: Olga María de Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: Carlos Mena Adame.

6.6. Sentencia ejecutoriada

Una vez que se declara ejecutoriada la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ya sea porque no se interpuso el recurso de revisión o porque, habiéndose interpuesto el tribunal colegiado confirmó la sentencia recurrida, se debe requerir a las autoridades responsables para que la cumplan observando lo señalado en los artículos del 104 al 113. En materia penal, cuando se concede el amparo al quejoso privado de su libertad, la autoridad responsable debe dejarlo en libertad de inmediato; el Juez de Distrito, la autoridad que conoció del juicio o el tribunal colegiado, en su caso, deben tomar las medidas necesarias para que se acate, inclusive ordenar se ponga en libertad al agraviado si la auto-

ridad responsable se niega a hacerlo en un término que no exceda de tres días. Si se ordena la libertad del quejoso sin que la sentencia de amparo haya causado ejecutoria, el Juez de Distrito incurre en responsabilidad (artículo 104 de la Ley de Amparo).

El artículo 105 de la Ley de Amparo fue reformado el 17 de mayo de 2001, estableciendo el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso.

En materia penal, por la naturaleza de los actos, sólo operaría el cumplimiento sustituto cuando se reclamen actos no privativos de la libertad personal. La reforma textualmente dice:

> ARTÍCULO 105.—"…
>
> Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso.
>
> Una vez que el Pleno determine el cumplimiento sustituto, remitirá los autos al Juez de Distrito o al tribunal de circuito que haya conocido del amparo, el cumplimiento sustituto de la ejecutoria, quien resolverá de manera incidental lo conducente y, en su caso, el modo o cuantía de la restitución."

INTERPRETACIÓN

> CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberán abrir el incidente de inejecución de

sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el funcionario judicial dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decida si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirá el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelve que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A) Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obvia-

mente, el acuerdo del juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B) Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C) Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D) Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIII, febrero de 2001, tesis por contradicción 9/2001, pág. 203.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS PARA CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. El incidente de daños y perjuicios previsto en el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, en cuanto constituye un procedimiento a través del cual se logra el cumplimiento sustituto de la sentencia, no concede al quejoso más que el derecho de obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución, como si ésta se hubiera realizado puntualmente, sin que incluya conceptos o prestaciones distintas de las comprendidas en la sentencia, como sería el pago de las ganancias lícitas que el quejoso dejó de percibir con motivo del acto reclamado (perjuicios), pues la creación de esta vía incidental no obedeció a la intención legislativa de conferir al quejoso

una acción de responsabilidad civil por naturaleza distinta de la acción de amparo, sino la de permitir a quienes no han podido lograr la ejecución de la sentencia de amparo, acceder a una situación de reparación equiparable a la de quienes han logrado el acatamiento ordinario del fallo, razón por la cual la cuantificación del pago en esta vía debe efectuarse analizando cuidadosamente la naturaleza del acto reclamado y de la prestación debida por la autoridad, ya que en ocasiones no es fácil distinguir entre el valor económico de esta última y de otras prestaciones como sería el lucro dejado de obtener, considerando, por ejemplo, que no es lo mismo acatar una sentencia de amparo concedida en contra de un acto de apoderamiento o destrucción de una cosa, en que la prestación debida es la devolución de la cosa o, en vía sustituta, el pago de su valor al momento de ejecutarse el fallo, que cumplir una sentencia que otorga el amparo en contra del cese de un servidor público, en el que la prestación debida es su restitución en el cargo con el pago de sus haberes que debió devengar o, en vía sustituta, el pago de tales haberes y de una cantidad adicional que represente el valor económico que para el quejoso ocasione ser separado del cargo.

Contradicción de tesis 23/97.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.—21 de agosto de 1997.—Unanimidad de once votos.—Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretaria.—Adriana Campuzano Gallegos.

INCONFORMIDAD PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 105 Y 108 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. Si bien el cumplimiento de las ejecutorias es de orden público, ello no legitima a cualquier sujeto para que pueda exigir su acatamiento, pues en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo, que implica el que la protección federal que se otorgue proteja sólo a quien o quienes hayan promovido el juicio de garantías, a su vez produce legitimación, principalmente del quejoso, para exigir el cumplimiento de las ejecutorias de amparo o para denunciar la repetición del acto reclamado; de aquí que, cuando los artículo 105 y 108 de la Ley de Amparo se refieren "a la parte interesada", debe entenderse esta referencia como correspondiente a la parte beneficiada con la protección federal, que es quien tiene interés en que se cumpla cabalmente la ejecutoria y a quien pueda afectarle la resolución que decida sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, o bien la que declare infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; incluso, podría tener este carácter la autoridad responsable cuando el Juez de Distrito declare fundada la denuncia de repetición del acto reclamado. Por tanto, el depositario e interventor con cargo a la caja negociación propiedad de la quejosa, quien es tercero interesado en

el procedimiento de huelga reclamado, al carecer de carácter de administrador o gerente de la negociación quejosa, pues sólo tiene facultades de cobro, y al ser ajeno al juicio de garantías, carece de legitimación pera exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Incidente de inconformidad 165/96.—Lucía Leticia Anaya Saavedra.—9 de septiembre de 1997.—Unanimidad de diez votos (ausente Sergio Salvador Aguierre Anguiano).—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

CAPÍTULO III

SOBRESEIMIENTO E IMPROCEDENCIA

SUMARIO: 1. Sobreseimiento. 2. Improcedencia (artículo 73 de la Ley de Amparo.) 2.1. Fracción I. 2.2. Fracción II. 2.3. Fracción III. 2.4. Fracción IV. 2.5. Fracción V. 2.6. Fracción VI. 2.7. Fracción VII. 2.8. Fracción VIII. 2.9. Fracción IX. 2.10. Fracción X. 2.11. Fracción XI. 2.12. Fracción XII. 2.13. Fracción XIII. 2.14. Fracción XIV. 2.15. Fracción XV. 2.16. Fracción XVI. 2.17. Fracción XVII. 2.18. Fracción XVIII.

1. SOBRESEIMIENTO

El sobreseimiento, a decir del maestro Ignacio Burgoa, "es un acto procesal proveniente de la potestad jurisdiccional que concluye una instancia judicial en el amparo, sin decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, que atiende causas que impiden el estudio del fondo del asunto".[38]

Las causas por las cuales procede el sobreseimiento en materia penal están establecidas en el artículo 74 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

> ARTÍCULO 74.—"Procede el sobreseimiento:
>
> I. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;
>
> II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona;
>
> III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior;
>
> IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.
>
> Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa

[38] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 496.

03_Capítulo_03 Ojeda.p65 291 23/04/2013, 12:19

y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso.

V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.

Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia."

A continuación procederemos a analizar cada uno de estos casos:

a) El desistimiento. Éste se puede realizar por escrito, siempre y cuando se ratifique; en cualquier momento del procedimiento y hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia, es decir, aún ante el tribunal colegiado que conozca del recurso de revisión contra la sentencia de primera instancia se puede promover el desistimiento y resulta procedente.

Hay casos en que materialmente no es posible obtener la ratificación del escrito de desistimiento conforme el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo y por ende, en ellos, de manera excepcional procede sobreseer en el juicio sin necesidad de la ratificación.

Como ejemplo podemos hacer referencia a un caso conocido en los tribunales y los medios de comunicación, que consistió en que varios inmigrantes de nacionalidad china fueron detenidos a bordo de un buque en aguas nacionales y solicitaron el amparo contra la deportación por parte de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, obtuvieron resolución desfavorable en primera instancia y por ello interpusieron el recurso de revisión, al ver que por las cargas de trabajo se retardaba el dictado de la resolución correspondiente, desistieron del recurso solicitando que los regresaran a su país; por un error del Secretario de Acuerdos, aquel escrito de desistimiento sola-

mente se agregó al expediente sin mayor acuerdo; semanas más tarde el Secretario de Estudio y Cuenta al elaborar el proyecto de resolución se percató del error, por lo que se ordenó regularizar el procedimiento a fin de que se ratificara el escrito; sin embargo, cuando el Actuario se presentó a la estación migratoria donde supuestamente se encontraban aquellos quejosos, le informaron que los chinos ya habían sido enviados a su país por los desmanes cometidos durante su detención, en los que inclusive provocaron un incendio, por lo anterior el Pleno del Tribunal correspondiente consideró que en ese caso no era necesaria la ratificación del escrito de desistimiento dando origen al criterio que a continuación se transcribe.

INTERPRETACIÓN

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. CASO EN QUE SURTE PLENOS EFECTOS, AUN CUANDO EL ESCRITO RESPECTIVO NO SEA RATIFICADO. De la lectura de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, se advierte la obligación que tiene el quejoso de ratificar personalmente el escrito de desistimiento de la acción constitucional, a fin de que tal manifestación de voluntad produzca todos sus efectos legales; sin embargo, si los impetrantes de garantías, extranjeros, con posterioridad a la presentación del escrito de desistimiento fueron expulsados del país con motivo de su estancia ilegal, y no existen datos de identificación que permitan localizarlos en su lugar de origen, es inconcuso que ante tales circunstancias especiales, el referido ocurso surte sus efectos, aún y cuando no haya sido ratificado, al constatarse la imposibilidad material de confirmar tal acto de renuncia, puesto que la expresión de la voluntad de desistirse hace prueba plena al encontrarse contenida en los escritos de traducción respectivos, que fueron elaborados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, llenando todos los requisitos legales y que, por tanto, tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por lo que, consecuentemente, debe sobreseerse en el juicio en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 977/99.— Alejandro Carrillo Castro, Comisionado Nacional de Migración. 13 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, pág. 1288.

Si el quejoso desiste del primer juicio de amparo, los demás serán improcedentes por consentimiento expreso; así lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis por contradicción:

> DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento —que es la consecuencia del desistimiento del quejoso— no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la segunda parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, febrero de 1996, tesis P./J. 3/96, pág. 22.

Asimismo en relación al desistimiento, cabe hacer referencia a los siguientes criterios.

INTERPRETACIÓN

> EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGER-

LOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 64/2002, Página 211.

SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de

improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, 2a./J. 10/2003, Página 386.

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.

Apéndice 1988, Tercera Sala, Parte II, tesis 1800, pág. 2902.

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE AUN CUANDO SE ENCUENTRE EN REVISIÓN LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento de la demanda de garantías con fundamento en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el hecho de que ya se haya dictado sentencia de amparo por el juez constitucional, porque dicha sentencia se encuentra sub júdice, a virtud del recurso de revisión.

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIII-febrero, pág. 313.

DESISTIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, EN REVISIÓN. No obstante que el juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de cuya inconformidad dio cuenta la responsable al interponer el recurso de revisión, el quejoso puede desistirse del juicio de garantías, por estar subjúdice la litis constitucional; empero, debe elevar su petición ante el tribunal colegiado que conozca del recurso, merced a que la jurisdicción del juez de Distrito la asume el órgano jurisdiccional citado, una vez interpuesto el medio de defensa aludido; por lo que, ratificado el desistimiento en la forma que corresponda, compete, en congruencia

jurídica con ello, a un tribunal de esa índole, proveer sobre el particular y decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X-octubre, pág. 320.

b) Por muerte del quejoso, cuando la garantía reclamada sea personal. En este caso el sobreseimiento puede decretarse fuera de la audiencia constitucional.

INTERPRETACIÓN

SOBRESEIMIENTO POR FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO EN MATERIA PENAL. Si el quejoso falleció durante la tramitación del amparo directo que promovió contra sentencia en materia penal que lo condenó a cierta pena de prisión y al pago de una sanción pecuniaria y de la reparación del daño, sobrevino una causal de improcedencia que ameritó el sobreseimiento del juicio de garantías, pero no conforme a lo ordenado por la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, porque la garantía reclamada no solamente afectó a su persona, sino también derechos patrimoniales del agraviado que después de su muerte trascendieron a su sucesión, al imponérseles además de la prisión la sanción pecuniaria y la reparación del daño que no quedó legalmente extinguida de acuerdo con lo establecido por el artículo 91 del Código Penal, pues el resto quedó sin materia. Resulta claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso y su sucesión debió continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional en contra de la parte del acto reclamado que permanece viva y no se ha extinguido por la muerte del agraviado, o sea la obligación de reparar el daño. Esta previsión no opera, sin embargo, si nunca compareció la sucesión del quejoso para legitimarse como nueva parte quejosa a continuar el juicio, y si, inclusive, los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio tuvieron resultados negativos. Si por su parte, además, el tercer perjudicado no reclamó en el juicio acto alguno, y no se aportó por ello ningún elemento sobre el particular, ni volvió a promover en el mismo, no es el caso de prorrogar la representación del quejoso y, en esa virtud, resulta que en el juicio de garantías a partir de la muerte del agraviado, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y por lo tanto no existe la parte

agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En conclusión, el juicio de garantías al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar hace sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y que resulta de la interpretación y aplicación de los artículos 107 constitucional, 4° y 15 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción **III** del artículo 74 del mismo ordenamiento.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sala Auxiliar, Tomo 163-168, séptima parte, pág. 140.

c) Porque durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo; en este caso debe decretarse en la audiencia constitucional, salvo que se trate de cesación de efectos (artículo 73, fracción XVII, precepto que se analiza en capítulo específico), o alguna otra causa notoria e indudable en que podrá decretarse antes de la celebración de ésta.

INTERPRETACIÓN

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Es de explorado derecho que el sobreseimiento en el juicio de garantías, no puede decretarse antes de la audiencia constitucional, salvo el caso del desistimiento, muerte del quejoso o bien cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, porque precisamente es en esta audiencia en la que las partes tienen el derecho de rendir pruebas sobre la certeza del acto que se reclama, por lo que el sobreseimiento decretado fuera de esa etapa procesal, priva al quejoso de poder probar los hechos que afirma.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época., Tomo IX-abril, pág. 638.

IMPROCEDENCIA EN AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN **III** DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción **III** del artículo 74 de la Ley de Amparo, sostiene que procede el sobreseimiento: "cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el

capítulo anterior". Con esta expresión el legislador ha dispuesto que una vez sustanciado el juicio si existe algún motivo de improcedencia debe decretarse el sobreseimiento; y ha enfatizado que esta consecuencia se produce tanto en los casos en que la improcedencia sea anterior a la iniciación del juicio como cuando sobreviene durante la tramitación de éste, pues el verbo aparecer no se emplea en el precepto legal para denotar el surgimiento súbito o repentino de algo, sino que alude a su apreciación por el juzgador. Una interpretación en sentido diverso conduciría a estimar que las expresiones "apareciere" o "sobreviniere" se utilizaron como sinónimos, siendo que es inusual el empleo de éstos en los textos legales, además de que no concuerda con la finalidad pretendida al instituirse en el artículo 73 de la ley de la materia las causas de improcedencia, que pueden ser o no anteriores al juicio de garantías, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 145 de la propia ley, que faculta al juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías cuando advierta que es notoria e indudablemente improcedente.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, segunda parte-1, pág. 177.

SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aún celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, pág. 1235.

d) Cuando esté demostrado en autos la inexistencia del acto reclamado; esto se advertirá después de que se rinda el informe justi-

ficado y se decretará el sobreseimiento en la audiencia mencionada. Esta causal y la anterior son las más comunes en amparo indirecto en materia penal.

INTERPRETACIÓN

ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Octava Época, tesis 53, pág. 90.

e) El sobreseimiento por inactividad procesal, previsto en la fracción V del artículo 74 no opera en materia penal, como tampoco la caducidad de la instancia, si el recurrente es el quejoso; en cambio si el Ministerio Público o la autoridad responsable son los que recurren sí opera esta figura procesal y, en consecuencia, el sobreseimiento.

INTERPRETACIÓN

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES FACTIBLE LA OPERANCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE ALGUNOS ACTOS DE NATURALEZA PENAL. En los artículos 107, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo se establece que opera la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en revisión en que el acto o los actos que se reclaman sean de orden civil, administrativo o laboral cuando el recurrente sea el patrón y que haya transcurrido un término de trescientos días sin que el recurrente haya presentado promoción alguna o bien que no se haya realizado acto procesal. Ahora bien, de los preceptos mencionados se advierte que se excluye a la materia penal de la institución de la caducidad. En la Exposición de Motivos del Decreto de Reformas a diversos artículos de la Constitución Federal de la República de 30 de diciembre de 1950, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, por cuanto hace al artículo 107 de la constitución, no se incluye la materia penal porque la vida y la libertad son derechos imprescriptibles de la persona humana y no puede jamás permitir el legislador que se consientan violaciones a garantías tan preciadas. De donde se advierte que la proscripción de caducidad de la materia penal obedece a la razón de conceder la máxima protección a la vida y a la libertad personal del agraviado. Así las cosas, si la exclusión de la caducidad de la instancia en materia penal tiene un campo específico y limitado por cuanto que tiende

a proteger preponderantemente los altos valores como son la vida y la libertad humana, en los casos en que no están en juego tales garantías, como puede ser el asunto en que se conozca de la restitución de un bien inmueble, aun cuando se trate de un juicio de amparo de naturaleza penal, debe entenderse que sí opera la caducidad de la instancia; y más aún, cuando el juicio de amparo ha sido promovido por un indiciado y la declaratoria de firmeza de la sentencia recurrida le beneficia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo IV, octubre de 1996, pág. 223.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN AMPARO PENAL EN REVISIÓN OPERA CUANDO BENEFICIE AL INCULPADO. De conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción II, párrafo cuarto, y fracción XIV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y 74, fracción V de la Ley de Amparo, no opera la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en materia agraria, excepto cuando beneficie a núcleos ejidales o comunales o a ejidatarios o comuneros; asimismo, tampoco se incluye la figura de la caducidad de la instancia en materia penal, en razón de que la vida y la libertad son derechos imprescriptibles de la persona humana, por lo que a fin de concederles la máxima protección, el legislador consideró que el derecho a reclamar violaciones a tan preciadas garantías, no debe fenecer. Así, con el mismo criterio protector que en materia agraria debe interpretarse la disposición constitucional, si se toma en cuenta que la exclusión de la caducidad de la instancia en materia penal tiene un campo específico y limitado por cuanto que tiende a proteger preponderantemente los altos valores como son la vida y la libertad humana; por tanto, en los casos en que no están en juego esas garantías, o bien, cuando tal figura jurídica no vaya en detrimento de esos valores protegidos por la constitución, sino por el contrario, beneficie al inculpado, es innegable que debe resultar operante.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo VIII, agosto de 1998, tesis 42/98, pág. 113.

La autoridad responsable y el quejoso están obligados a manifestar al juzgado de Distrito las causas notorias de sobreseimiento; de no cumplir, se hacen acreedores a una multa de diez a ciento ochenta días de salario (artículo 74, fracción IV, segundo párrafo).

Por último, el artículo 81 establece la sanción de multa de 10 a 180 días de salario cuando se dicte sobreseimiento o se niegue el amparo, si se advierte que se promovió con el propósito de retrasar el asunto o entorpecer la ejecución del acto reclamado; sin embargo,

esta sanción no procede en materia penal si el acto reclamado es privativo de libertad, conforme a la siguiente tesis:

> LIBERTAD PERSONAL, DEFENSA DE LA. MULTA NO IMPONIBLE POR AMPARO IMPROCEDENTE. La defensa de la libertad personal autoriza el empleo de todos los medios que la ley pone al alcance del hombre para conservarla y, por tanto, no cabe imponer multa a quien en defensa de esa libertad interpone un amparo notoriamente improcedente.
>
> Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 1112, pág. 1787.

2. Improcedencia (artículo 73 de la Ley de Amparo.)[39]

El artículo 73 contempla los supuestos que impiden el estudio del fondo del asunto, al decir "el juicio de amparo es improcedente"; entendiendo por improcedencia el motivo o causa que imposibilita que el juicio alcance su objetivo de analizar y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; esto es, existe un obstáculo que no permite al juzgador llegar al final de su juicio, que lo deja a la mitad del camino, cuando la traba es insuperable.

En este capítulo trataremos cada una de las fracciones con su interpretación constitucional y en algunos casos haré algunos comentarios.

Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

2.1. Fracción I

"Contra actos de la Suprema Corte de Justicia."

Lo anterior es entendible, si se parte de la hipótesis de que este alto tribunal es el que conoce de los juicios de amparo en última instancia, ya sea que por la materia de la revisión le competa conocer de él o que se allegue el expediente por la facultad de atracción. Contra las resoluciones que dicte la Suprema Corte no cabe recurso alguno; esto es, sus decisiones son inatacables, de tal suerte pues, que este tribunal decide sin ulterior recurso; consecuentemente al ser sus actos inatacables a través del juicio de amparo, en última instancia conocería del juicio de amparo contra sus propios actos, lo que no puede ser, dado que sería juez y parte en ese conocimiento.

[39] Se transcriben las tesis más importantes en materia penal y únicamente se comentan las fracciones X, XVI, XVII, y XVIII.

INTERPRETACIÓN

PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE EN SU CONTRA. Si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición, previsto por el artículo 8° de la Constitución General de la República debe ser respetado por todo funcionario público, también lo es que el juicio constitucional no es el medio para reclamar el desconocimiento de ese derecho que se imputa al Presidente de la Suprema Corte pues, siendo éste el representante del máximo Tribunal Federal, el amparo que se entabla contra sus actos resulta improcedente, de conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo, disposición que finca la no procedencia del juicio de garantías en la naturaleza y categoría de la autoridad a quien se pretende señalar como responsable de los actos conculcatorios de derechos públicos subjetivos del particular, de acuerdo con lo cual, la actividad de la Suprema Corte de Justicia, así como de su Presidente queda sustraída de la finalidad tuteladora de la acción de amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV-julio, segunda parte, pág. 723.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DESECHAMIENTO FUNDADO INDEBIDAMENTE DE LA, EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El desechamiento de una demanda de amparo indirecto en la que se reclaman actos de un juez de Distrito, fundado en los artículos 73, fracción I, de la Ley de Amparo y 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es indebido, porque los actos de los jueces de Distrito no pueden considerarse provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la estructura del Poder Judicial de la Federación que señala el artículo 1° de la Ley Orgánica invocada.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Parte Sexta, pág. 64.

JUECES COMUNES EN AUXILIO DE LA SUPREMA CORTE, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Si al dictar la responsable, como autoridad ordenadora, la resolución reclamada, lo hace con apoyo en el artículo 172 de la Ley de Amparo, como auxiliar de la Suprema Corte, dado que de acuerdo con el artículo 73, fracción I, de la citada Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos del Alto Tribunal, el amparo contra ese acto debe desecharse.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, tomo: LXXXIV, pág. 2429.

AMPARO. PROCEDE CONTRA ACTOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE CUESTIONES AJENAS A ELLA. Las causales de improcedencia del juicio de amparo establecidas en el artículo 73, fracciones I y II, de la Ley de Amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, no se actualizan cuando en el juicio de garantías se reclama un acto de autoridad realizado en cumplimiento de una resolución dictada por el Pleno de este tribunal en una controversia constitucional, respecto de cuestiones ajenas a ella, puesto que además de referirse a temas no decididos en esa resolución, no constituye un acto dictado por la Suprema Corte de Justicia, sino por la autoridad correspondiente en acatamiento a una resolución recaída a un medio de control constitucional diverso al juicio de amparo, tanto en lo que se refiere al objeto propio de tutela jurídica como a los titulares de los derechos controvertidos. En efecto, la tutela jurídica de la controversia constitucional es la preservación del orden constitucional, en especial de los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a saber: salvaguardar el federalismo y la supremacía constitucional, dando unidad y cohesión a los órdenes jurídicos parciales citados en las relaciones de las entidades u órganos de poder que los conforman, siendo los órganos originarios del Estado los titulares de los derechos controvertidos en esta acción y, por ello, las resoluciones que dirimen este tipo de controversias, si bien afectan a los particulares como habitantes de los diversos niveles de gobierno al resentir las consecuencias jurídicas de una decisión o acto de connotación política a cargo de las entidades de poder, no los agravian directamente en sus derechos individuales, al ser ajenos a la materia de análisis de constitucionalidad propia de este tipo de controversias, lo que permite concluir que la improcedencia de un juicio de amparo no puede derivarse del hecho de que en él se reclame un acto de autoridad realizado formalmente en acatamiento de una resolución recaída a una controversia constitucional, por un lado, porque debe atenderse al alcance de esa resolución y si ésta es completamente ajena a lo reclamado en el amparo no puede afectar la procedencia de éste y, por el otro, porque es diversa la materia propia de tutela jurídica en cada uno de estos medios de defensa constitucional y diferentes los titulares de los derechos controvertidos, sin que obste a lo anterior los efectos generales que pudiere tener el fallo pronunciado en la controversia constitucional en los casos previstos en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Carta Magna y su obligatoriedad para los órganos jurisdiccio-

nales establecida en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, pues los resolutivos de la controversia se encuentran regidos por los considerandos que las fundan y aquélla no comprende, de modo directo, el análisis de derechos individuales de los particulares gobernados, sino que sólo preserva el orden jurídico constitucional, por lo que no impide a los gobernados por regla general promover el juicio de amparo para la restauración de los derechos que estimen les fueron transgredidos al llevarse a cabo el acto relativo en acata-miento de la resolución recaída a la controversia, al cuestionarse en su constitucionalidad por aspectos que no fueron analizados en tal resolución.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XII, octubre de 2000, tesis P./J. 99/2000, pág. 6.

2.2. Fracción II

"Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas."

La explicación de esta fracción encuentra su origen en un principio de seguridad jurídica para los propios gobernados, pues de aceptar que contra las sentencias en los juicios de amparo o su ejecución procediera otro juicio de amparo, implicaría restarle la firmeza que aquéllos adquieren con la ejecutoriedad y, además, tales juicios se harían interminables sin que pudieran hacerse tangibles a través de su ejecución; esto es, la decisión en ellos tomada nunca se acataría. Cabe resaltar que el propio juicio de amparo contiene recursos para atacar las sentencias, que son el de revisión el de queja y el de reclamación.

INTERPTRETACIÓN

AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS O EN EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo previsto en los artículos 163, 164 y 167 de la Ley de Amparo, se colige que las autoridades responsables se convierten en auxiliares de los tribunales federales para la recepción y remisión de las demandas de amparo que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales del orden común, tanto de primera como de segunda instancia, por lo que si una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dicta una resolución en el sentido de negar a dar trámite a la demanda de amparo, ésta en realidad se pronuncia dentro del juicio de garantías, razón por la cual debe impugnarse esta decisión mediante los recursos inherentes al juicio de amparo, y no mediante juicio de amparo indirecto, porque de ser así, el amparo indirecto es improcedente acorde

con lo que dispone la fracción II del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y lo que procede en cambio, es combatirse al través del recurso idóneo que establece en su capítulo XI de Ley de Amparo mencionada.

Amparo en revisión 787/89. Jesús Rascón Martínez, Albacea de la Sucesión de Francisca Martínez Bracamontes. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: Víctor Urquieta Jiménez, Informe 1989, pág. 237.

AMPARO, PROCEDENCIA DEL, Y NO DEL RECURSO DE QUEJA. La segunda sentencia que la autoridad responsable pronuncia al cumplir con la ejecutoria de amparo, puede tener vinculación total, parcial, o ninguna vinculación. En este último caso, la autoridad responsable, al dictar la sentencia de reenvío, reasume plenamente su jurisdicción y cualesquiera violaciones que cometiere, no serán en defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino tendrán carácter autónomo de lo juzgado por dicha ejecutoria y, por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo y no por el recurso de queja, que en esas circunstancias resultaría improcedente.

Apéndice de jurisprudencia de 1917-1975, Cuarta parte, Tercera Sala, tesis núm. 47, pág. 150.

ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, tesis XX. J/3, pág. 251.

JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de

la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, tesis XII.1o.4 K, pág. 305.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS PRONUNCIADOS EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y LOS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE LE PONGA FIN. El juicio de garantías en que se reclaman actos pronunciados en un juicio de amparo y los de ejecución en cumplimiento a la sentencia que se dicte en el mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta improcedente, sin que para ello obste que el promovente alegue se le haya señalado como tercero perjudicado y no se le emplazó, pues tal circunstancia no la excluye el precepto legal invocado para la procedencia del juicio.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II febrero, tesis VI.1o.153 K, pág. 354.

IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su ratio legis y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una

resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable; sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia en comento, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la ratio legis como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 50, tesis de jurisprudencia 50, pág. 85.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII-junio, pág. 585.

AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITE SIN LIBERTAD JURISDICCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE ANTERIOR EJECUTORIA. Si una ejecutoria de amparo ordena a la responsable a emitir un nuevo y distinto acto sin reservarle libertad jurisdiccional, el posterior juicio de amparo que contra éste se promueva es improcedente en términos del artículo 73, fracción II, y, sin examinarse los conceptos de violación, ha de sobreseerse en él, con arreglo al artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-diciembre, pág. 796.

IMPROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, QUE AMPARÓ ÚNICAMENTE POR VIOLACIONES FORMALES Y SE ATACA DE NUEVA CUENTA POR OTROS VICIOS. No se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando se reclama una resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria, que amparó por considerar infringidas

disposiciones de carácter formal pues no se puede privar del derecho de defensa a la quejosa, si el nuevo acto lo impugna por otras violaciones formales cometidas con posterioridad o por violaciones de fondo, estimar lo contrario sería tanto como que el asunto sometido a la potestad de la justicia federal quedará sin resolver.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X-septiembre, pág. 286.

PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Si el acto reclamado deriva del cumplimiento de dos ejecutorias de amparo en las que se concedió la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación jurídicas del acto reclamado, las que no impidieron a la autoridad responsable el pronunciamiento de un nuevo acto en el que purgara los vicios formales del anterior y decidiera con plena jurisdicción, esa nueva resolución es susceptible de atacarse en amparo, ahora sí por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación, puesto que la sentencia de amparo tendrá por objeto dictaminar sobre su legalidad o ilegalidad a la luz de los conceptos de violación de fondo que haga valer el peticionario de garantías. En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, y, por ello, debe admitirse la demanda de garantías promovida por el quejoso.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-marzo, pág. 262.

SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACTOS EMITIDOS EN PARTE PARA CUMPLIMENTARLAS. El artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La citada causa de improcedencia opera en sus términos cuando un acto de autoridad obedece totalmente al cumplimiento de una resolución proveniente de un juicio de amparo, y conduce al desechamiento de la demanda, si se advierte de modo manifiesto e indudable inicialmente, o a decretar el sobreseimiento cuando se emita la sentencia. No obstante, existen actos de autoridad en los cuales sólo una parte se emite como cumplimiento de una resolución dictada en un juicio de amparo, y la otra se produce por la responsable de propia autoridad, obedeciendo a lo que el órgano considera correspondiente a sus facultades o incluso fuera de ellas, pero motu proprio. En esta hipótesis no opera la causa de improcedencia en comento, en tanto que se trata de un

acto de autoridad unitario, es decir, realizado en una unidad que no se puede dividir para desechar la demanda, por lo que toca a una de sus partes y admitirla respecto a la otra; de manera que basta la existencia de la parte del acto no vinculada al cumplimiento de lo decidido en un juicio constitucional, para proceder a la admisión de la demanda, desde luego, si se cumplen los demás requisitos fijados en la ley. Ahora bien, la situación apuntada no se traduce en hacer nugatoria la prohibición implícita contenida en la disposición en comento, de examinar en un mismo juicio de garantías lo resuelto en otro juicio de la misma clase, sino únicamente en ajustar su aplicación a la peculiaridad del caso concreto, esto es, a que al dictar la sentencia sólo se decida en ella sobre las cuestiones atinentes a la parte del acto reclamado que no se encuentra emitido en acatamiento de la resolución de amparo, y se rechacen las demás cuestiones planteadas en los conceptos de violación, sin hacer ningún pronunciamiento sobre su validez legal.

NOTA: Aparece publicada en la Gaceta 49, pág. 111.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-enero, tesis I.4o.C. J/49, pág. 113.

2.3. Fracción III

"Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas."

En esta fracción se evidencia la litispendencia en el juicio de amparo, esto es, el estado del juicio del que está conociendo un juez de Distrito o que se encuentra en revisión ante la Suprema Corte o ante un tribunal colegiado y aún no se decide en definitiva el derecho, de tal suerte que no es dable iniciar un nuevo procedimiento contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado y por el mismo quejoso, aunque los argumentos que se den como conceptos de violación sean diversos y enfoquen la violación desde un ángulo distinto, toda vez que cuando el juicio se ha iniciado y la litis se ha fijado, ya no es posible intentar un nuevo juicio, sino que lo que corresponde es esperar el fallo, pues de otra suerte se correría el riesgo de que se dictaran sentencias contradictorias o cambiar lo que se vaya a resolver. La ley de amparo prevé, para el caso de que esto sucediera, la acumulación de juicios que sean coincidentes en el acto reclamado, las autoridades responsables y el promovente, precisamente para evitar el dictado de las sentencias contradictorias.

INTERPRETACIÓN

SOBRESEIMIENTO. PROCEDE EL, SI LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA SE ENCUENTRA SUBJÚDICE EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS. Si de autos consta que la sentencia cuya indebida ejecución se impugna en el juicio que se revisa, es también materia de reclamo por parte de uno de los recurrentes en un diverso juicio de garantías, en el que incluso se formó el correspondiente incidente de suspensión para que aquélla no fuera cumplimentada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que previa la revocación de la resolución recurrida, se impone sobreseer en el juicio en términos del numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento legal. Es así, porque estando pendiente de resolverse en el otro juicio de garantías lo referente a la legalidad de la citada sentencia, al igual que lo relativo a su ejecución no es posible verter pronunciamiento alguno acerca de la debida o indebida cumplimentación de la propia resolución que se reclama en la controversia constitucional que se revisa, porque con ello se correría el riesgo de emitir un fallo contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver o esté resuelto ya, en el otro amparo.

Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, tesis XI.2o. 10 A, pág. 947.

LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, tesis XIX.2o.12 K, pág. 312.

LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o

en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-enero, tesis VII.P. 83 K, pág. 260.

DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO POR EL JUEZ DE DISTRITO. SI EL QUEJOSO PRESENTA UNA DEMANDA DE GARANTÍAS Y DESISTE DE ELLA, POSTERIORMENTE PRESENTA OTRA POR EL MISMO ACTO RECLAMADO, ES ILEGAL EL. Si se presenta una demanda de garantías y ésta no es admitida a trámite porque después de un auto preventivo, la parte quejosa desistió de la reclamación y el juez de Distrito tuvo por no interpuesta la demanda de referencia, y posteriormente la misma parte quejosa presenta una nueva demanda de garantías por el mismo acto reclamado y es desechada con apoyo en la fracción III, del artículo 73, de la Ley de Amparo, tal proceder es contrario a derecho supuesto que al tener por no interpuesta la primera demanda de garantías, excluye la operancia de la causal que se invoca para desechar la demanda de amparo en comento.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-agosto, pág. 412.

IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-julio, pág.: 226.

LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, inde-

pendientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia.

Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Séptima Época, Tomo 205-216, primera parte, pág. 142.

2.4. Fracción IV

"Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior."

Al igual que la fracción anterior, no es dable que el mismo quejoso interponga un juicio de amparo respecto de actos y autoridades que ya fueron materia de otro juicio, pues ello restaría seguridad y eficacia a lo que se decidió en el primero.

INTERPRETACIÓN

AUTORIDADES EJECUTORAS DIVERSAS. SU SEÑALAMIENTO NO IMPIDE LA IMPROCEDENCIA DE UN SEGUNDO AMPARO. No es obstáculo para considerar que se da la causal de improcedencia de cosa juzgada prevista por el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, el hecho de que en el segundo amparo se señalen diversas autoridades ejecutoras a las mencionadas en el primer juicio, si el acto reclamado de la ordenadora es básicamente el mismo o una consecuencia del ya estudiado, y sólo difieren las autoridades ejecutoras, porque se está en presencia de distintas etapas procesales en las que éstas tienen injerencia siempre y cuando la ejecución no se impugne por vicios propios.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 109-114, Parte Sexta, pág. 36.

ORDEN DE APREHENSIÓN, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTRA LA, QUE FUE MATERIA DE OTRO AMPARO PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y EL PROPIO ACTO RECLAMADO. Si el primer juicio culminó con la declaración de negar el Amparo al quejoso, opera la causa de improcedencia relativa, por más que el juez haya manifestado en el mismo fallo que no examinaba la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expresa el recurrente que es ilegal el sobreseimiento cuya resolución impugna, porque si el juez que conoció del juicio anterior expresó en su fallo que no abordaba la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, tienen aplicación al caso específico las tesis sustentadas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las cuales, si no se entra al estudio de la constitucionalidad o inconstitucio-

nalidad de los actos reclamados, el quejoso puede solicitar nuevamente la protección federal, ya que no puede decirse que en los términos de la ley de Amparo, los actos reclamados en el segundo juicio han sido materia de una ejecutoria. No son admisibles los argumentos que expone el recurrente, puesto que las tesis que invoca se refieren a casos en que el primer juicio de amparo se ha dictado el sobreseimiento, y consecuentemente, no se ha hecho un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Más en el caso a estudio, el juez que conoció del primer juicio de amparo, aún cuando con notoria falta de técnica jurídica e incurriendo en contradicción afirma en su sentencia que no esta en condiciones de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, por no haberse aportado al juicio constancia de la orden de aprehensión, con tal aseveración únicamente quiso significar no poder determinar si los conceptos de violación son o no justificados, puesto que la ausencia de la constancia aludida lo imposibilitaba para calificar a través de ellos la legalidad de los fundamentos del acto que desconocía. Sin embargo, considerando que la orden de aprehensión reclamada fue dictada por autoridad competente y no aparece que se trate de un acto inconstitucional en sí mismo, determinó que la orden de aprehensión no es violatoria de garantías individuales y negó al quejoso la protección constitucional. Por ende, al existir una declaración de constitucionalidad del acto reclamado, resulta improcedente el segundo juicio de amparo, promovido contra el mismo acto, las mismas autoridades y el propio quejoso.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 133-138, Parte Sexta, pág. 119.

AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-septiembre, tesis V. 2o. 215 K, pág. 256.

AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. INTRASCENDEN-

CIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO. Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 423.

SOBRESEIMIENTO INCORRECTO CON APOYO EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. SI SE PROMUEVE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DEL MISMO ACTO QUE SE RECLAMA Y ES SOBRESEIDO, Y POSTERIORMENTE EL MISMO QUEJOSO PROMUEVE NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS POR EL MISMO ACTO RECLAMADO, RESULTA CONTRARIO A DERECHO SI DECRETA EL. Si el recurrente promovió un diverso juicio de garantías en contra del mismo acto que reclama nuevamente y en el cual se sobreseyó por haberse desistido de la demanda, determinación que causó estado; es inconcuso que si posteriormente el mismo quejoso promovió nuevo juicio de garantías por el mismo acto reclamado y es sobreseído con apoyo en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, tal proceder es contrario a derecho, ya que la causa de improcedencia que establece dicha fracción no puede referirse sino a juicios completamente terminados, lo que no es aplicable al caso concreto, supuesto que al no haberse entrado al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado el quejoso puede solicitar nuevamente la protección de la justicia federal, y por ello, el Juez de Distrito atendiendo a las circunstancias aducidas en la demanda debe entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y no sobreseer el juicio.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII-marzo, pág. 457.

COSA JUZGADA. EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CONFESIÓN EXPRESA ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR PLENAMENTE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA. La confesión expresa de la parte quejosa, hecha en cualquier estado del juicio de garantías, sobre la existencia de una ejecutoria que le haya concedido o negado la protección constitucional, forma prueba plena en su contra respecto de la causal de

improcedencia de cosa juzgada, prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo y afecta, en su totalidad, el posterior juicio constitucional.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-octubre, pág. 411.

2.5. Fracción V

"Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

La jurisprudencia ha señalado que el interés jurídico consiste en que la acción, en este caso constitucional, sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad, esto es, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal y que además lo acredita en el juicio. Por su parte, el maestro Ignacio Burgoa señala que: "Si la ley prevé y protege determinadas situaciones abstractas, todos los sujetos cuya situación particular encuadre dentro de ellas, tendrá un interés jurídico como elemento básico de la procedencia del amparo."

INTERPRETACIÓN

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO PUEDE ESTIMARSE ACREDITADO CON LA SIMPLE ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La circunstancia de que el juez federal haya admitido la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, por haber apreciado que reunía los requisitos del artículo 116 del propio ordenamiento, no es obstáculo para que, una vez agotadas las fases del procedimiento constitucional, al emitirse el fallo correspondiente, pudiera considerarse que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, del citado cuerpo legal, toda vez que las causas de improcedencia entre ellas la falta de interés jurídico deben examinarse previamente al estudio de la inconstitucionalidad planteada. Además, el desechamiento de la demanda de garantías sólo es procedente cuando, al ser presentada, se advierta una causa de improcedencia indudable y notoria, y si en el caso se dio dicha hipótesis, la parte quejosa, durante la tramitación del juicio de garantías y aún en la audiencia constitucional, estuvo en aptitud de aportar pruebas idóneas para demostrar su interés jurídico y al no hacerlo, dio lugar a que sobreseyera en el juicio respectivo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primera Sala, Tomo III, primera parte, pág. 252.

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA

EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, Tomo 84, diciembre de 1994, tesis 2a./J. 23/94, pág. 20.

LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, Tomo II, primera parte, pág. 230.

LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CUANDO LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN RELACIÓN A LOS ACTOS DE APLICACIÓN HA QUEDADO FIRME. La acción de amparo y, en general, cualquier acción, tiene como presupuesto el interés del actor como justificación de su ejercicio; por consiguiente, si no existe ese interés debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo de conformidad con los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, debe considerarse que se actualiza, como superviniente, esta causal de improcedencia del juicio de amparo, cuando habiéndose promovido el amparo contra una ley con motivo del primer acto de aplicación de la misma, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión en relación a los actos de aplicación y dicha concesión queda firme en virtud del desechamiento del recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables en contra de la sentencia respectiva. En efecto, en esta hipótesis ya no existe interés de parte del quejoso en impugnar la ley o en obtener el pronunciamiento de una sentencia de amparo contra la ley, pues si el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal tendría como efecto el de obligar a las autoridades aplicadoras a dejar sin efecto los actos de aplicación de la misma ley, sería imposible que la sentencia que otorgara el amparo contra la ley produjera estos efectos restitutorios que le son inherentes al ya encontrarse firme

la concesión del amparo, precisamente, respecto de dichos actos de aplicación. Consecuentemente, cuando la concesión del amparo en relación a los actos de aplicación ha quedado firme por haberse desechado el recurso de revisión interpuesto por las autoridades recurrentes, debe sobreseerse en el juicio de amparo promovido por el quejoso en relación a la inconstitucionalidad de la ley reclamada.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, Tomo I primera parte-1, pág. 319.

INTERÉS JURÍDICO. SU EXISTENCIA NO IMPLICA QUE EL ACTO DE AUTORIDAD VULNERE GARANTÍAS INDIVIDUALES. El interés jurídico que alude la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, constituye un requisito sine qua non de procedencia del juicio constitucional, y refiere la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, es decir, aquél debe guardar relación inmediata y directa con este último, por lo que la circunstancia de que las impugnantes hayan tenido el carácter de parte demandada en un litigio, en su caso, sólo las legitimaría para que en un momento dado interpusieran el amparo, sin que de ello pueda inferirse que los actos de autoridad efectivamente les causen algún perjuicio o agravio en sus derechos subjetivos públicos.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II febrero, tesis IV.3o.103 K, pág. 380.

PRUEBA. TÉRMINO SUPLETORIO PARA SU DESAHOGO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII de la Constitución General de la República, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro de juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que concede un término supletorio para que se desahoguen las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí sólo y desde luego, ningún perjuicio al quejoso o a su contraparte; éste, podrá actualizarse, en su caso, hasta que el tribunal efectúe la valorización de esas probanzas, lo que sólo tiene lugar al dictarse la sentencia definitiva que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la recepción de dichas probanzas, motivada por la concesión de ese término supletorio, agravió a una de las partes, esto es, si la viola-

ción trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el fallo definitivo, podrá alegarse la violación cometida durante el procedimiento, siendo en consecuencia improcedente el amparo indirecto para combatir el acto de mérito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII en relación con el 114, fracción IV, interpretado este último a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 740.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII enero, pág. 272.

ORDEN DE APREHENSIÓN. ANTE LA IMPRECISA IDENTIFICACIÓN DEL INDICIADO EN LA MISMA, Y ESTANDO DEMOSTRADO EN AUTOS LA EXISTENCIA DE HOMOLOGÍA, A EFECTO DE ACREDITAR EL QUEJOSO SU INTERÉS JURÍDICO DEBE PROBAR PLENAMENTE QUE ES LA PERSONA EN CONTRA DE QUIEN SE LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA O QUE SIN SERLO CON MOTIVO DE LA MISMA SE LE PRETENDE APREHENDER. Tomando en consideración que al establecer los artículos 4°, 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en el juicio de garantías que concede el amparo en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe existir para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente. Luego, si en la emisión de la orden de aprehensión combatida, existe imprecisión de datos de identificación del supuesto indiciado, puesto que sólo se indica su nombre y primer apellido, así como el poblado en que reside, que por otra parte el quejoso acreditó que en dicho poblado existen cinco personas incluyéndolo a él con el mismo nombre y primer apellido al del acusado, por tanto a efecto de acreditar su interés jurídico debió demostrar que él es la persona en contra de quien se libró la orden de captura o que sin serlo con motivo de la misma se le pretende aprehender, amén de que ésta no se impugna por vicios propios, sino por una supuesta homología, de nombre y primer apellido de personas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, tesis XXI.2o.2 P, pág. 571.

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora, de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada

como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4° y 5° de la citada ley.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, tesis VI. P. 5 P, pág. 999.

AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL QUE SE PROMUEVE CONTRA LA ORDEN JUDICIAL QUE RESTITUYE AL OFENDIDO EN LA POSESIÓN DEL PREDIO EJIDAL MATERIA DEL DELITO DE DESPOJO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 429 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, en lo conducente, establece que cuando esté ple-namente comprobado en autos el delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias para restituir al ofendido en el goce de sus derechos que estén legalmente justificados. Si con apoyo en esta disposición legal el ofendido por el ilícito de despojo, después de pronunciarse el auto de formal prisión en contra del acusado, solicita del juez de la causa que se le ponga en posesión de la parcela ejidal materia de su querella, y ello se acuerda de conformidad, el inculpado, en lugar de acudir directamente al juicio de amparo, debe impugnar la medida mediante el recurso de apelación que cabe en el efecto devolutivo, porque este medio ordinario de defensa es el adecuado para obtener su modificación, revocación o nulificación según lo disponen los artículos 316, 319 y 321 fracción V del propio ordenamiento. Por tanto, si no se hace valer la impugnación de mérito el juicio de garantías resulta improcedente al no acatarse el principio de definitividad, conforme con los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV segunda parte-2, pág. 681.

IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR ABSOLUCIÓN DEL PROCESADO EN SEGUNDA INSTANCIA. Es improcedente el juicio de garantías, si la quejosa fue absuelta en segunda instancia de la acusación formulada por el Ministerio Público, por la comisión de un delito, en virtud de que, de conformidad con el artículo 4° de la Ley de Amparo, el juicio aludido únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto y en ese caso la sentencia absolutoria no causa agravio, surtiéndose la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II segunda parte-1, pág. 286.

ORDEN DE APREHENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO. No procede sobreseer el juicio de garantías por falta de interés jurídico, sólo porque la demanda de amparo es promovida por una persona que tiene dos nombres propios y en la orden de aprehensión aparece únicamente con uno de ellos, ya que en el caso particular, se estima que la presentación de la demanda y la interposición del recurso de revisión bastan para que el quejoso acredite el interés que tienen en demostrar su inconformidad con la orden de aprehensión, pues si no le afectara la misma, se conformaría con el sobreseimiento, toda vez que con dicha resolución tendría impunidad contra los actos de las autoridades responsables, quienes no lo podrían privar de su libertad por tratarse de diversa persona. Debe tomarse en cuenta además, que no se advierte causa alguna que motivara al quejoso para ostentarse como agraviado sin serlo.

Informe de 1985, pág. 351.

ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA CONTRA EL REO EVADIDO. AFECTA SUS INTERESES JURÍDICOS. La orden de reaprehensión sí afecta los intereses jurídicos del reo evadido, en cuanto a que, con total independencia de su carácter de prófugo, por su condición de ser humano goza del derecho a la libertad, otorgado constitucionalmente y, tan es así, que el Estado puede restringir, limitar o suprimir este derecho, pero el hombre recluído en prisión en todo momento puede intentar recobrar la libertad perdida que forma parte de su ser y si se evade del reclusorio, sin ejercicio de violencia física o moral, su conducta no es constitutiva de delito. Lo anterior nos revela que el gobernado, aún en la condición de prófugo, no abdica de su condición de hombre, ni renuncia a su potestad libertaria y, por ello, todo acto autoritario, cuyo fin sea ponerlo de nueva cuenta en la condición de reo, para la compurgación de su sanción, sí afecta los intereses jurídicos del reo prófugo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 75, Parte Sexta, pág. 44.

ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE Y FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL. Si en el procedimiento penal de primera instancia se dicta sentencia absolutoria y ésta se declara ejecutoriada, y los actos reclamados en el juicio de garantías consisten en las resoluciones pronunciadas por las autoridades responsables calificando una excusa hecha valer así como el ordenamiento en que dicha calificación se apoyó, es evidente que los actos de aplicación se consumaron de modo irreparable,

por lo que operan las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y IX del artículo 73 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es innecesario el estudio de la constitucionalidad del ordenamiento también impugnado, porque su examen sería oportuno y válido si aún subsistieran los actos de aplicación, como sería si se hubiera dictado sentencia condenatoria y no absolutoria.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, instancia Pleno, Tomo 61, primera parte, pág. 13.

INTERÉS JURÍDICO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Por interés jurídico, presupuesto de la acción de amparo, de acuerdo con la doctrina y con la jurisprudencia, debe entenderse que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, público o privado, que resulte lesionado por el acto de autoridad que se reclame. El derecho subjetivo requiere de la reunión de tres elementos: la existencia de un interés exclusivo, actual y directo; que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley, y que esa protección se resuelva en la aptitud de su titular de exigir del obligado la satisfacción de ese interés, mediante la prestación debida. Para que el interés sea exclusivo, actual y directo, es preciso que sea personal, que exista al momento de promover el juicio constitucional y que el bien que se persiga conduzca a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando exista una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) —que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados, o un órgano estatal tratándose de derechos subjetivos públicos— tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. Desde luego, para que sea efectiva la tutela del interés, el orden jurídico debe conceder a su titular los medios para su satisfacción, que pueden consistir en recursos o en acciones judiciales. En este sentido, y en lo que respecta a los derechos subjetivos en el ámbito público, como los que se producen en las relaciones administrativas, no habrá derecho subjetivo si la norma no fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas particulares frente al poder público, porque entonces no existirá un interés individual tutelado por el orden jurídico, sino un interés de hecho o simple. Así sucede con las normas que rigen la actuación de la autoridad en beneficio único de la colectividad, en cuyo caso la norma tutela el interés general

sin reconocer ni proteger un interés particular o individual distinto de aquél. Lo anterior no implica negar a cada particular su interés en que el funcionamiento de la actividad estatal se desarrollo conforme a la ley, lo que sucede es que dicho particular tiene un interés que, derivado de su condición de integrante de la comunidad, se confunde con el interés general, y como tal es semejante al de cualquier otro miembro del grupo social, de manera que no recibe una protección jurídica individualizada que permite exigir el cumplimiento de la norma, por lo que ese interés vago e impreciso sólo puede manifestarse a través de la acción popular, pues uno de sus principios es que el promovente tenga titularidad de un derecho subjetivo, por lo que es obvio que los intereses simples del quejoso no bastan para tener por acreditado el interés jurídico.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 sexta parte, pág. 271.

COACUSADO, SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO POR APELACIÓN DEL, QUE NO AFECTA AL ACUSADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Si el tribunal de alzada no modificó la situación jurídica del inculpado determinada en el fallo de primer grado, en atención a que no habiendo apelado de ese fallo, el tribunal sólo se ocupó de las cuestiones que originaron el recurso interpuesto por su coacusado, la sentencia dictada con motivo de la apelación que este último hizo valer, no causó perjuicio alguno a dicho quejoso, ya que el no ser parte en tal recurso, no pudo resultar, como no resultó, afectado en sus intereses jurídicos. La circunstancia de que el tribunal de apelación haya expresado en el segundo punto resolutivo de su sentencia que "se confirma en todas sus partes los puntos segundo a quinto de los resolutivos de la sentencia que se revisa", no entraña afectación de ningún genero en perjuicio del quejoso, porque las palabras confirmar y sentencia que se revisa, las cuales suponen el estudio de la cuestión, fueron empleadas con evidente error de técnica, pues seguramente el pensamiento correcto del sentenciador fue el dejar firme la resolución recurrida en lo tocante al referido quejoso por no haber apelado; de modo que resulta operante la causa de improcedencia del juicio de garantías previsto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Primera Sala, Tomo CXXXV, segunda parte, pág. 21.

ORDEN DE APREHENSIÓN. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL AMPARO DE DIRECTIVOS SOCIALES A NOMBRE DE SOCIOS. Los integrantes del consejo de administración de una sociedad cooperativa no están legitimados como tales, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para promover

el amparo en nombre y representación de los socios, contra los que se pudieran haber dictado órdenes que afecten su libertad personal, pues no se está en el caso de gestión oficiosa, por estar impedidos los directamente agraviados; consecuentemente, el amparo que los directivos de la referida cooperativa soliciten por tales actos a nombre de otros socios, resulta improcedente y debe sobreseerse, con apoyo en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Parte Sexta, pág. 143.

2.6. Fracción VI

"Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."

La jurisprudencia ha establecido que la interpretación de esta fracción debe concatenarse a la XII del precepto en comento y de ambas se colige que tratándose de leyes heteroaplicativas el juicio de amparo debe ejercitarse con motivo del primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores. La finalidad del sistema que adopta la ley de amparo radica precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas como actos de aplicación existan, pues aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada, evita la contradicción de sentencias sobre el particular. Cabe distinguir que, cuando se reclame una ley autoaplicativa no se actualiza la hipótesis que se analiza, pues ésta supone la afectación del derecho con la sola vigencia de la ley y para ello bastará con que el quejoso justifique que se encuentra en el supuesto que contempla la norma combatida.

INTERPRETACIÓN

LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO. Para que proceda el amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, no sólo se necesita demostrar la existencia de éste, sino también que tal aplicación sea en perjuicio del quejoso; por tanto, si en una solicitud que eleva como peticionario a la autoridad administrativa respectiva, invoca y se aplica el artículo cuestionado, resulta evidente que dicha autoaplicación es en su beneficio; de manera que será hasta que dicha autoridad conteste negándole lo solicitado cuando el particular sufra el perjuicio, y es a partir de la notificación de la negativa, que se dan las con-

diciones para promover el amparo conforme a los requisitos que establece el artículo 73, fracción VI de la ley de la materia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, abril de 1996, tesis P. LVII/96, pág. 124.

LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4° de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, noviembre de 1995, tesis P. XCVII/95, pág. 92.

AMPARO CONTRA LEYES. LAS CIRCULARES CONSTITUYEN ACTOS DE APLICACIÓN APTOS PARA PROMOVERLO, SI ÉSTAS NO SÓLO REÚNEN CARACTERÍSTICAS DE GENERALIDAD Y ABSTRACCIÓN, SINO ELEMENTOS QUE PERMITAN INDIVIDUALIZAR LA AFECTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN LEGAL. Aunque es cierto que, de ordinario, las circulares constituyen instructivos que contienen reglas generales internas sobre los procedimientos para cumplir con las disposiciones legales, ha de reconocerse que son actos concretos e individualizados de aplicación de dichas disposiciones para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando, aunque aparezcan con la denominación de circulares, ya señalan a los obligados por la ley reclamada el término dentro del cual deben pagar el derecho fiscal, la caja donde deben hacerlo, el lugar en que se ubica dicha caja, la suma de dinero que han de pagar y la documentación que al efecto deben presentar, creando una situación jurídica individual en su perjuicio que lo ubican de manera real, actual y efectiva en la aplicación de las disposiciones impugnadas, ya que para la procedencia del amparo contra leyes cuando es con motivo del primer acto de aplicación en los términos del artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, no es forzoso que aquél sea coactivo, sino que basta con que de cualquier forma se produzca una afectación jurídica individualizada.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo I, mayo de 1995, tesis P. XI/95, pág. 79.

LEYES AUTO APLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, que distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación, relacionado a su vez con los criterios que ha sustentado este Tribunal Pleno en las tesis bajo los rubros: "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY" Y "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL COMPUTO DEL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN", publicadas respectivamente con los números 64 y 26, en las páginas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos veintisiete y novecientos dieciocho, primera parte, de los informes de labores correspondientes a los años de mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos ochenta y siete, cabe inferir que por primer acto concreto de aplicación de la ley se entiende no ineludiblemente el que proviene de autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir ya de un particular que actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso, cuando del orden legal establecido aparece que la norma combatida debe ser cumplida imperativamente por dicho quejoso, a efecto de evitarse la imposición de sanciones o medidas coercitivas en su contra.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Pleno, Tomo III primera parte, tesis V/89, pág. 161.

LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción

constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Pleno, Tomo III primera parte, tesis VI/89, pág. 162.

LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La referencia que el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley. En estos casos el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. Basta, pues, que el acto de aplicación se produzca y cause perjuicio al gobernado, para que éste esté en posibilidad de intentar el juicio de amparo, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación al que ejecuta un particular, es sólo para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley impugnada, aunque tal aplicación no provenga de una autoridad; sostener lo contrario implicaría que en esos casos no podría promoverse el juicio de amparo, a pesar de que se había dado el

acto de aplicación de la ley, sino que tuviera que esperarse, en el caso de incumplimiento del obligado, a que la autoridad, por medio de procedimientos coercitivos, tratara de obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias y perjuicios inherentes a ello. En consecuencia, sólo para efectos de la procedencia del amparo en contra de la ley, se atenderá a la fecha de aplicación de ésta cuando corresponda efectuarla a particulares, sin que sea necesario llamarlos a juicio como autoridades.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Primera Sala, Tomo I primera parte-1, pág. 195.

Véase: Séptima Época, Volúmenes 193-198, primera parte, pág. 126.

REGLAMENTOS HETEROAPLICATIVOS, REQUISITOS DE PROCEDENCIA EN AMPARO CONTRA LOS. Los artículos 4° y 73 fracciones V y VI de la Ley de Amparo, respectivamente establecen: "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama…" "El juicio de amparo es improcedente: V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; VI. Contra leyes que, por su sola expedición, no causen perjuicio al quejoso sino que se necesite un acto posterior de autoridad que se origine". De lo anterior, se desprende que tratándose de leyes y por analogía de reglamentos, que no se reclaman como autoaplicativos, para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesaria la existencia de un acto de aplicación, y que ese acto reúna los siguientes requisitos: a) Que en él se invoquen preceptos de la ley o reglamento de que se trate y b) Que dicha invocación cause un perjuicio o agravio jurídico al quejoso. Por tanto, la circunstancia de que en una acta de vista se citen los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona, no es suficiente para la procedencia del amparo en contra de determinado reglamento, toda vez que se requiere, además, que la referida aplicación cause un perjuicio inmediato y directo al quejoso, lo que no acontece con la simple opinión que los inspectores emiten en las actas de visita, que no tienen el carácter de resolución que cause agravio a los intereses jurídicos de los particulares. En todo caso, el acto que permitiría reclamar el reglamento se produciría con la calificación del acta y la imposición de las sanciones correspondientes.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 187-192, sexta parte, pág. 140.

2.7. Fracción VII

"Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral."

Esta fracción encuentra su razón de ser en los artículos 99 y 105 constitucionales, que dicen respectivamente: "El Tribunal Electoral

será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.—Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable… III. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos o firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, …V. Las impugnaciones de actos o resoluciones que violen los derechos políticos o electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país,… " y el 105; "La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá,… II. De las acciones de inconstitucionalidad… Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:… f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro.—La única vía para plantear la no conformidad de la leyes electorales a la constitución es la prevista en este artículo."

De lo transcrito se observa que contra las resoluciones o declaraciones de los organismos o autoridades en materia electoral conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable el Tribunal Federal Electoral y contra las leyes electorales federales o locales conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la acción de inconstitucionalidad prevista en la fracción II del artículo 105 constitucional; de tal suerte, que contra los actos citados no procede el juicio de amparo por mandato constitucional.

INTERPRETACIÓN

DERECHOS POLÍTICOS. CONTRA LA PROMULGACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL DECRETO RELATIVO A LA SUSTITUCIÓN DE DIPUTADOS Y SUS CONSECUENCIAS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Si de las constancias de autos se advierte que los quejosos recurrentes reclamaron del gobernador del Estado de Chiapas y secretario general de Gobierno del Estado, la promulgación y circulación del decreto relativo a la sustitución como diputados de

representación proporcional por el partido a que pertenecen como propietario y suplente, respectivamente, y sus consecuencias de hecho y de derecho, la promulgación y vigencia del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial, el dictamen respecto de la solicitud de sustitución y sus consecuencias, particularmente el desafuero, su displicencia para ejercer sus atribuciones y funciones constitucionales, fundamentalmente, el dictamen de sustitución emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, los puntos resolutivos del dictamen y sus consecuencias, así como que el resolutor nada dice respecto de las violaciones a las garantías alegadas, es incuestionable que, sin perjuicio de que en la demanda de amparo se aduzcan violaciones formales y a las garantías individuales, los actos reclamados se relacionan con los derechos políticos que les corresponden a los recurrentes y no con las garantías individuales, atento lo dispuesto por los artículos 35, fracción II y 36, fracción IV, de la Constitución General de la República, supuesto que estos preceptos establecen claramente que el poder ser votados y el desempeñar los cargos aludidos es una prerrogativa y obligación del ciudadano; por tanto, como el juicio constitucional no se instituyó para reparar violaciones a los derechos políticos, cualquier infracción que pudiera existir, debe impugnarse en la vía política y no constitucional, en virtud de que el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, es claro al precisar que contra esta clase de actos no procede el juicio de garantías.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo VI, agosto de 1997, tesis XX.1o.34 A, pág. 708.

IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE. De la interpretación jurídica y no simplemente literal del artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de garantías es improcedente sólo cuando el acto reclamado, además de emanar de un organismo o autoridad electoral, dicho acto participe de su misma naturaleza, es decir, que el acto implique una determinación en materia electoral. Porque si el acto que se combate no es de dicha naturaleza política y, por otro lado puede resultar violatorio de garantías, porque respecto a él se aduzca que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento o que carece de la debida motivación y fundamentación, la obligada consecuencia es que contra el mismo, sí procede el juicio de amparo, por más que emane de autoridades electorales, ya que es la materia misma sobre la cual versa o puede versar el acto reclamado, lo que no origina la improcedencia del juicio constitucional conforme al artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo. Así, si el acto combatido se traduce prácticamente en la negativa de

admitir una denuncia por responsabilidad administrativa formulada por el Partido Revolucionario Institucional, ello no implica una resolución en materia electoral, aun cuando emane del Pleno de la Comisión Estatal Electoral en el Estado de Nuevo León, en virtud de que ese acto no se encuentra asociado con la selección o nombramiento de personas cuya pretensión sería fungir como titulares de órganos de poder y representativos del pueblo. Y si a esto aunamos la circunstancia de que el impetrante del amparo la reclamó ante el juez de Distrito, porque según lo expuesto en la propia demanda constitucional, la autoridad responsable indebidamente desechó de plano la denuncia sin acatar previamente lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que constriñe a dicha autoridad a mandar citar al denunciante para que ratifique su denuncia apercibiéndolo que en caso contrario y de no presentar en un término de cinco días elementos de prueba que hagan presumir la existencia de los hechos referidos en la promoción relativa se desechará la queja o denuncia correspondiente, lo que en concepto del impetrante del amparo resulta violatorio de las garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, es innegable que por las razones expuestas, en el caso no puede establecerse que se actualice "de un modo manifiesto e indudable" la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC, Tomo IX, abril de 1999, tesis IV.2o.A.T.32 A, pág. 552.

2.8. Fracción VIII

"Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente."

INTERPRETACIÓN

DERECHOS POLÍTICOS, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE ACTOS QUE AFECTAN LOS. Por disposición legal, el juicio de amparo es improcedente respecto de los derechos políticos, ya que el artículo 103, fracción I, de la constitución, establece claramente la procedencia del juicio de garantías contra actos que vulneren garantías individuales, que son diversas de los derechos políticos y, por otra parte, el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del

juicio de garantías contra actos como el que se reclama en la especie; cabe señalar además, que si la constitución hubiera querido que quedaran involucrados los derechos políticos entre los actos por los que procediera el amparo, así lo hubiera determinado expresamente y, no como pudiera pretenderse, en el sentido de que por no estar excluidos, deben considerarse incluidos, dado que ninguna razón lógica hay para estimarlo de esta forma, pues es sabido que para que pueda hacerse uso de una vía legal, el caso que pretenda someterse a su resolución debe estar expresamente previsto para ser resuelto por esa vía.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 175-180, Parte Sexta, pág. 79.

2.9. Fracción IX

"Contra actos consumados de un modo irreparable."

La propia Ley de Amparo establece en su artículo 80 que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consecuentemente, si el acto se ejecuta de manera tal que ya no se pueden restablecer las cosas al estado que guardaban antes del quebrantamiento, es evidente que el juicio que se pudiera seguir resultaría inútil.

INTERPRETACIÓN

AMPARO PROCEDENTE AUN CUANDO LA CONDENA ESTÉ CUMPLIDA. Aun cuando conste que el quejoso haya sido puesto en absoluta libertad por haber cumplido la pena de prisión y la multa que le hayan sido impuestas en la causa relativa, como responsable de la comisión de un delito, sin embargo, no puede decirse que el amparo sea improcedente por haberse consumado irreparablemente el acto reclamado o por haber cesado sus efectos (fracciones IX y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo), ya que la sentencia de amparo podría tener, de todos modos, el efecto de liberarlo de antecedentes penales, aunque no tuviera otro, y el no tener indebidamente antecedentes penales es un derecho tutelado en términos de los artículos 103, fracción I, constitucional, y 4° de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Parte Séptima, pág. 107.

ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Deben entenderse así, para los efectos de la improcedencia del amparo, los actos que materialmente no pueden ser restituidos, pero no las

actuaciones judiciales que establecen una situación legal que por no ser definitiva, puede desaparecer por la concesión del amparo.

T. XCIII, Tercera Sala, pág. 968.—Herrera José G. y Coags.—25 de julio de 1947.

ACTOS CONSUMADOS. El amparo es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, por haber cesado ya. Y tiene este carácter el hecho de que un juez del orden común no se inhiba, sino hasta después de haber transcurrido mucho tiempo, del conocimiento de un proceso por un delito del orden federal, y no obstante haberse promovido la correspondiente incompetencia, pues los efectos de este acto han cesado ya, y de concederse la protección constitucional, está no tendría más efecto jurídico que el de que el juez del fuero común dejara de conocer del proceso, lo que ya ocurrió pues en definitiva fue fallado por los tribunales federales; y sin que lo actuado por dicho juez común dejara de ser valido según dispone el artículo 102 del Código Federal de Procedimientos Penales.

T. XXIII, pág. 190.—Martín Treneo L.—18 de mayo de 1928.

ACTOS CONSUMADOS. CAREOS. Si el testigo de cargo con quien el reo no fue careado, falleció, esta circunstancia da lugar a que resulte definitivamente irreparable en el amparo, cualquier violación de garantías al respecto, ya que la misma sólo puede cometerse cuando durante la secuela del procedimiento, se omite la práctica de careos constitucionales, entendiéndose por éstos los que se encuentran establecidos por la fracción IV del artículo 20 del Pacto Federal que difieren esencialmente de aquellos que tienen el carácter de puramente procesales, como lo son los supletorios únicos que, a virtud del fallecimiento del testigo, podrían desahogarse careos en el caso.

T. XCVII, Primera Sala, pág. 2214.—Huesca Heledoro M.—13 de septiembre de 1948.

LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser

reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.

Apéndice 1985, instancia Pleno, Parte I, Sección AMP LEYES FED, tesis 73, página 152.

LIBERTAD CAUCIONAL, REVOCACIÓN DE. ACTO CONSUMADO. La libertad caucional durante el proceso surte efectos hasta que éste concluye con sentencia ejecutoria, y por ésta se entiende la de primer grado que no es recurrida en apelación, o la de segunda instancia que confirma la recurrida (hipótesis esta última que en la especie aconteció) de tal manera que obtenida sentencia ejecutoria, la revocación de libertad que se reclama pasa a tener el carácter de acto consumado, por dejar el quejoso de tener la calidad de procesado que le permitió disfrutar la libertad caucional en términos del artículo 20 constitucional, motivándose por ello que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Informe de 1989, pág. 1094.

LIBERTAD PROVISIONAL. BENEFICIO POSIBLE SÓLO DENTRO DEL PROCESO. Cuando se impugnan en el amparo el auto por el cual se niega al quejoso la libertad caucional solicitada en segunda instancia, se estima que dicho acto ha quedado consumado irreparablemente al dictarse sentencia definitiva que declara responsable al quejoso del delito de que se trata, de tal manera que ya no podrán examinarse las posibles violaciones en que hubiere incurrido el Tribunal responsable al negar el citado beneficio, porque con ello se afectaría la nueva situación jurídica creada por la sentencia que resolvió el recurso de apelación; esto es, que lo relativo a la libertad bajo caución regulado por la fracción I del artículo 20 constitucional, por su naturaleza, es una incidencia que surge dentro del proceso, de tal manera que estando acreditado que el proceso dentro del cual surgió aquélla, terminó con una sentencia definitiva, debe sobreseerse el juicio de garantías, ya que la incidencia no puede tener mayor vida que el proceso.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 109-114, Parte Sexta, pág. 124.

LIBERTAD CAUCIONAL, REVOCACIÓN DE LA (ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE). Si el acto reclamado se hizo consistir en el auto por el cual se revocó la libertad caucional concedida a la quejosa, resulta que dicho acto ha sido consumado irreparablemente al dictarse, en contra de la quejosa, sentencia ejecutoria que la declaró responsable del delito, y dejar, por lo mismo, de tener la calidad de procesada, misma que le permitió disfrutar de libertad caucional, en términos del artículo 20 constitucional, motivándose de ello que surja la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Quinta Época, tomo CVI, pág. 1828.

2.10. Fracción X

"Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica."

"Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."

El último párrafo fue adicionado por decreto publicado el diez de enero de 1994, en vigor el primero de febrero del mismo año reformando los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales; la reforma no resultó afortunada, pues causó un sin número de problemas jurídicos a los jueces de distrito y la Suprema Corte sentó jurisprudencia interpretando ese párrafo. Sin embargo, la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1999, en vigor desde el día nueve, modificó el último párrafo, suprimiendo únicamente el artículo 16 Constitucional.

Únicamente se suprimió el artículo 16 constitucional (orden de aprehensión), sin embargo, sus consecuencias son enormes, puesto que procederá el sobreseimiento por cambio de situación jurídica cuando se reclame orden de aprehensión, puesto que con motivo

de la medida suspensional obligatoria de que el quejoso comparez-ca ante el juez de la causa (artículo 138 reformado en 1999), traerá como consecuencia necesaria que se resuelva su situación jurídica en el término de setenta y dos horas, decretándose la formal prisión o libertad por falta de elementos para procesar. Resultan así inaplicables las tesis sustentadas por la Suprema Corte en interpretación del párrafo mencionado, en vigor desde el primero de febrero de 1994 al 8 de febrero de 1999.

La última parte del párrafo que nos ocupa, es un imperativo para el juez ordinario de suspender el procedimiento penal respecto al quejoso, una vez cerrada la instrucción y esperar hasta que se le notifique la ejecutoria de amparo. El mismo párrafo refiere a amparos promovidos por violaciones al artículo 20 de la carta magna; pero, ¿que pasa si la violación se hace consistir en que la tramitación del proceso rebasó el plazo para concluirse, de cuatro meses o un año, según el caso, (artículo 20, fracción VIII), y el juez ordinario aún no dicta sentencia?; de cerrarse la instrucción sin estar resuelto aún el juicio de garantías ¿se suspenderá el procedimiento?, si lo que se quiere es precisamente que se dicte la sentencia en el proceso. Considero que en este caso no.

Por otra parte, al suprimirse el artículo 16 de la Constitución, del párrafo reformado al 73, fracción X, de la ley de la materia y adicionarse un párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, que obliga al juez de Distrito, si es que se pide suspensión, en esos casos, tomar como medida para concederla el que se presente necesariamente ante el juez de la causa en un plazo de tres días, trae como consecuencia invariablemente que todos los juicios de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión, terminen sobreseyéndose.

INTERPRETACIÓN

IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actua-

liza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, TCC., Tomo XI, marzo de 2000, tesis VII.1o.P. J/42, pág. 875.

FORMAL PRISIÓN. CASO EN QUE EL AMPARO ES IMPROCEDENTE POR HABERSE DICTADO SENTENCIA EN LA CAUSA PENAL. Cuando tramitándose un juicio de amparo indirecto seguido en contra de un auto de formal prisión, el juez responsable dicta sentencia en la causa de origen, el juicio de garantías debe sobreseerse en los términos de la fracción X, del artículo 73, de la Ley de Amparo (adicionado por Decreto de 10 de enero de 1994), toda vez que este dispositivo expresamente dispone que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en tal precepto, con total independencia de que al promoverse el amparo ya se hubiere cerrado la instrucción y el juez responsable no suspendiera el proceso penal como lo ordena la citada reforma, porque tal incumplimiento sólo puede traer como consecuencia que dicho órgano jurisdiccional pudiera incurrir en uno de los llamados delitos contra la administración de justicia, pero no hace procedente el amparo, ya que la invocada norma no hace distinción a caso de excepción alguno.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, tesis XIV.2o.28 P, pág. 542.

NOTA: El no suspender el procedimiento como lo marca la ley, puede concluir en un sobreseimiento en el amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa del juez ordinario que no suspendió el procedimiento.

DETENCIÓN ILEGAL. CONSUMACIÓN IRREPARABLE DE LA. La omisión del juez del proceso de calificar la legalidad o ilegalidad de la detención, como lo dispone el párrafo sexto del artículo 16

constitucional, no constituye una violación al procedimiento de las que por afectar las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo pueden reclamarse a través del amparo directo, conforme a los artículos 158, 160 y 161 de la Ley de Amparo y dar lugar a la anulación y reposición del proceso, sino que se trata de una violación que debió reclamarse por la vía de amparo indirecto y que al no haber sido impugnada oportunamente durante el proceso, quedó consumada en forma irreparable al dictarse la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 73, fracción X, reformado, de la citada Ley.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, tesis III.1o.P.10 P, pág. 523.

DESVANECIMIENTO DE DATOS, LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE, NO CAMBIA LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que la resolución que declara infundado un incidente de desvanecimiento de datos substituya procesalmente al auto de formal prisión y que por esto resulte improcedente el juicio de amparo que se instaura en contra del mandamiento de bien preso. Lo anterior, porque el auto de formal prisión y el incidente de desvanecimiento de datos son instituciones jurídicas totalmente distintas, que tienen por finalidad analizar problemas diversos, lo que impide catalogarlos como meras instancias o grados establecidos para resolver un mismo punto de derecho. Es patente lo afirmado, porque mientras que en el auto de formal prisión se debe determinar si los datos del sumario aportados hasta esos momentos son bastantes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, en el incidente de desvanecimiento de datos se va a calificar si las diversas constancias rendidas con posterioridad al auto que decidió la situación jurídica, son suficientes para desvanecer los datos que sirvieron para dictarlo. Por consiguiente, en el incidente de desvanecimiento de datos, a diferencia de un recurso, como pudiera ser el de apelación, no se va a resolver si la declaratoria de formal prisión se pronunció en forma ilegal, pues estaría vedado al juez natural ocuparse de ello, sino que se va a determinar una cuestión de diversa índole; entonces, al dictarse la resolución que declara infundado el incidente de referencia, no opera una substitución procesal semejante a la que se genera cuando se falla un recurso interpuesto en contra del auto de formal prisión.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 103-108, Parte Sexta, pág. 83.

NOTA: Es muy discutible el criterio, pues la resolución definitiva de libertad por desvanecimiento de datos sí produce un cambio en

la situación jurídica del quejoso, aun cuando exista la disposición prohibitiva de la fracción X; en este caso la improcedencia se daría por cesar los efectos del acto reclamado (fracción XVI).

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aún cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-abril, pág. 521.

SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-septiembre, pág. 199.
Informe de 1987, tercera parte, pág. 142.

FIANZAS. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si bien el cambio de la situación jurídica del reo hace que resulte improcedente el amparo hecho valer contra la resolución que había determinado la situación anterior, conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, ello no quiere decir que la obligación de pagar la fianza por no haber presentado al reo en el plazo que se le dio a la fiadora, con motivo de la libertad provisional de aquél, se extinga al dictarse la sentencia en el proceso, pues una vez satisfecha la condición que hace exigible la fianza, la obligación de pagar ésta no queda sin materia con motivo de la sentencia dictada contra el fiado, pues el exigir tal obligación en nada afecta la nueva situación jurídica del procedimiento. Es decir, dictada la sentencia, ya no se puede examinar la legalidad del auto de formal prisión sin afectar la situación creada por la sentencia, pero el que se cobre la fianza que se causó por la libertad provisional en nada afecta la nueva situación establecida en la sentencia.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 70 sexta parte, pág. 39.

No obstante que la presente obra aborda únicamente el amparo indirecto, considero que dado lo interesante de la siguiente tesis, es oportuno citarla.

SOBRESEIMIENTO. DEBE DECRETARSE EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SI EL FALLO DEFINITIVO QUE SE RECLAMA, FUE DECLARADO EJECUTORIADO MEDIANTE UN AUTO POSTERIOR CONSENTIDO POR EL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. De acuerdo con lo anterior, para que un tribunal de amparo pueda analizar la constitucionalidad de una sentencia definitiva dictada en un juicio, en la que ésta fue declarada ejecutoriada, resulta indispensable que el solicitante del amparo haya combatido el auto respectivo por medio del juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la ley de la materia y que en dicho juicio de garantías, se le haya otorgado la protección constitucional; ya que de lo contrario, si se resolviera en el juicio de amparo directo, es obvio que se afectaría la nueva situación jurídica en que se encuentra el procedimiento del que emana el acto reclamado, y que se creó al pronunciarse el auto que lo declaró ejecutoriado. Por tanto, si el susodicho auto quedó firme, debe estimarse que se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo invocado y por este motivo, lo procedente

es sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-febrero, pág. 268.

ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994. La adición del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, pone de manifiesto la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas con los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; por tanto, el auto de formal prisión no da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiere hecho valer en contra de la orden de aprehensión.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: IV, Octubre de 1996, P./J. 56/96, Página 72.

2.11. Fracción XI

"Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."

Las manifestaciones de la voluntad deben estar probadas en autos de manera fehaciente; esto es, no debe existir duda de que el quejoso estuvo conforme con el acto que reclama en el juicio de garantías.

INTERPRETACIÓN

DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y,

por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento —que es la consecuencia del desistimiento del quejoso— no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la segunda parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo III, febrero de 1996, tesis P./J. 3/96, pág. 22.

ORDEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE QUE LA FORMAL PRISIÓN YA HA SIDO IMPUGNADA EN OTRO JUICIO CONSTITUCIONAL. Cuando solamente se reclama el auto de formal prisión y no la orden de aprehensión que lo precedió, debe entenderse expresamente consentida dicha orden, puesto que no se impugna en la demanda, pudiendo haberlo hecho el afectado, lo cual da cabida, en el nuevo amparo que posteriormente se haga valer contra la orden de aprehensión, a la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo IV, octubre de 1996, tesis P./J. 58/96, pág. 31.

ARRESTO ADMINISTRATIVO. MULTA. Cuando el acto reclamado consiste en el pago de una multa que le fue impuesta a la quejosa para dejarla en libertad con motivo de un arresto administrativo, es manifiesto que si para algo ha de servir el juicio de amparo, en defensa de las garantías individuales que atañen a la libertad personal, no se puede exigir a dicha quejosa que permanezca privada de la libertad para poder impugnar la multa en amparo, pues ello equivaldría a anular la eficacia de la defensa

constitucional, especialmente si a la persona arrestada no se le ha permitido la asistencia de un defensor desde el momento mismo del arresto, o no se le ha nombrado uno de oficio, pues las garantías del artículo 20 constitucional son aplicables a cualquier privación de la libertad, ya que ésta es uno de los bienes más preciados entre aquellos que tutelen las garantías individuales. Luego es en esta forma como debe interpretarse el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, sin que se pueda extrapolar el contenido de un precepto, en la manera en que su aplicación ha sido interpretado en otros casos, a aquellos especialísimos que ahora se contemplan, por lo que la multa pagada para obtener la libertad no es un acto consentido.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Parte Sexta, pág. 36.

LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN SITUACIONES JURÍDICAS IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUÉLLOS. Aun en el supuesto de que la nueva ley sometiera a las quejosas a iguales situaciones que las que hubieran consentido bajo la ley abrogada, la circunstancia de que tales preceptos formen parte de un nuevo ordenamiento legal hace indispensable que los órganos del Estado que lo formaron sean llamados a juicio y oídos, no pudiendo aceptarse el argumento de que por contemplar situaciones jurídicas semejantes a las de una ley anterior que se dice fue consentida, la nueva ley también lo sea, ya que se trata desde un punto de vista formal y material, de un acto legislativo distinto al que se dice fue consentido y es aplicada una ley diversa a la que también se dice consentida.

Tesis jurisprudencial 124, Apéndice 88, Pleno, 228.

SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DEL AMPARO SI SÓLO INTERPUSO APELACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMÓ EL FALLO. Si la sentencia de primer grado condenó al sentenciado y éste no interpuso recurso de apelación, sino solamente el Ministerio Público, dicho fallo tiene el carácter de acto consentido por el inculpado. Ahora bien, la sentencia de segunda instancia, al confirmar la de primer grado por desestimar los agravios del Ministerio Público, es consecuencia legal, necesaria y forzosa del acto consentido, pues el Tribunal de apelación no estaba en aptitud de analizar la existencia del delito, la responsabilidad del acusado, ni disminuir la sanción, por no ser nada de ello materia de la apelación. Por tanto, se impone el sobreseimiento del

juicio de amparo directo promovido por el sentenciado en contra de la sentencia de segunda instancia, ya que se está en presencia de un acto derivado de otro consentido.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen: 121-126, Parte Sexta, pág. 269.

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, tesis III.1o.A.11 K, pág. 582.

ACTOS CONSENTIDOS. AMPARO IMPROCEDENTE. Como el juicio de garantías se rige por el principio de instancia de parte agraviada que tutela la fracción I del artículo 107 constitucional en relación con el 4º de la Ley de Amparo, resulta jurídicamente legal, de acuerdo con tal principio, que el gobernado desista en su perjuicio del juicio de amparo; sin embargo, el referido desistimiento del titular de la acción de amparo, implica una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado que hace improcedente un nuevo juicio de garantías en el que una vez más se pretenda impugnar el mismo acto en aquél en el que antes el propio gobernado había desistido, al actualizarse la causa prevista por la fracción XI del artículo 73 de la precitada ley en su hipótesis de "manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento"; considerar lo contrario, no sólo contravendría el principio de seguridad jurídica de las sentencias definitivas que permite actuar en concordancia con lo resuelto (ejecución) e impide que se discutan con posterioridad los razonamientos de la misma, pues el fundamento de una ejecutoria, por necesidad social de la referida certeza jurídica, impone el cumplimiento de lo fallado; de no ser así, lo que se resolviera sería inejecutable, dado que la secuela de nuevas demandas de amparo en que se reclamara el mismo acto, haría nugatorio el principio de seguridad y provocaría fenómenos ajurídicos, pues si cuando conforme a los autos del juicio constitucional, estuvieran aptos para dictarse la sentencia, el quejoso desis-

tiera del mismo en su perjuicio, cabría la posibilidad de que, se reiniciara uno nuevo en el que se decretara una vez más la suspensión de plano del acto reclamado, lo que provocaría la presentación de demandas sucesivas a discreción con el propósito de impedir o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva, lo cual traería como consecuencia, la preclusión, alargamiento o retardo, y haría factible el sustraerse de la acción de la justicia o del pago al importe de la reparación del daño, o simplemente del traslado del lugar de prisión preventiva a aquél en que debiera compurgar la condena.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 75, marzo de 1994, tesis I.2o.P. J/53, pág. 27.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III-febrero de 1996, pág. 22, tesis por contradicción P./J.3/96.

SUSPENSIÓN A PRUEBA DEL PROCEDIMIENTO. IMPLICA CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL ACOGERSE AL BENEFICIO DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Si el quejoso solicitó y obtuvo el beneficio de suspensión a prueba del procedimiento, previsto por los artículos 127 y 128 del Código Penal para el Estado de Coahuila, debe entenderse como consentido el auto de formal procesamiento decretado en su contra; por lo que es incuestionable que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio constitucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII-febrero, pág. 427.

ACTOS CONSENTIDOS. HIPÓTESIS EN QUE SE DA EL CASO DE. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si en la demanda de amparo se reclama un oficio mediante el cual se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante las autoridades responsables para la expedición de diversos documentos y aquélla lo cumple, es obvio que al haberlo desahogado, tácitamente consintió el referido acto, y por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X-septiembre, pág. 224.

También resultan interesantes los criterios jurisprudenciales, que en relación a la fracción en comento, se han sustentado en amparo directo.

CONSENTIMIENTO DE LA SENTENCIA RECLAMADA EN AMPARO DIRECTO. Si el quejoso comparece ante el juez de la causa a acogerse expresamente al beneficio de la suspensión de la pena, que se le concedió en la sentencia reclamada, y exhibe cartas de buena conducta, solicitando además que se le fije el monto de la fianza que debe otorgar y que se le otorgue un plazo para cubrir la reparación del daño, tales manifestaciones entrañan el consentimiento de dicha sentencia, ya que el promovente se acoge a la misma y acepta los efectos que les son propios, por lo que el juicio de garantías en que tal sentencia se reclama es improcedente y debe sobreseerse conforme a los artículos 73, fracción XI y 74, fracción III de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII-mayo, pág. 420.

PENA, CONMUTACIÓN DE LA. EL HECHO DE ACOGERSE A LA MISMA IMPLICA CONSENTIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. Si el quejoso se acoge al beneficio de la conmutación de la pena decretada en la sentencia que reclama en amparo debe entenderse consentida dicha sentencia y, en tal virtud se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la propia ley.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 67, julio de 1993, tesis VI. 3o. J/40, pág. 54.

CONDENA CONDICIONAL. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO EL SENTENCIADO SE ACOGE A LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El que el acusado se haya acogido al beneficio de la condena condicional concedido en sentencia, implica su consentimiento total con el fallo de la que el mismo emana, puesto que para que el juzgador esté en aptitud de suspender las penas restrictivas de libertad y de multa (artículo 90 fracción III del Código Penal aplicable), es menester que el fallo emitido cause ejecutoria y adquiera el carácter de ejecutable y de cosa juzgada (artículo 443 fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) para todos los efectos legales a que hubiera lugar; pues en forma alguna se podría dividir ese fallo para

que, por una parte tuviera el carácter de ejecutoria a fin de que el sentenciado se acogiera al beneficio, y por otra, que careciera de esos efectos para que al mismo tiempo acudiera al juicio de amparo y se examinara su constitucionalidad, no obstante que por lógica, aquélla sentencia que impone penas, éstas sólo son suspendibles cuando son ejecutables, no antes; por lo que el quejoso, al manifestar expresamente su anuencia con la resolución definitiva, resulta improcedente el juicio de amparo contra la misma, acorde a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y por tanto debe sobreseerse, conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 74 del preindicado ordenamiento legal.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-abril, tesis I.2o.P. J/23, pág. 87.

NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 40, abril de 1991, página 88.

ACTOS CONSENTIDOS. NO SE ENTIENDEN ASÍ PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, LOS ACTOS QUE SE COMBATIERON OPORTUNAMENTE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL SIN PROMOVERSE LA SUSPENSIÓN. Es inexacto que por no solicitarse la suspensión de los actos reclamados en un juicio de garantías, ello entrañe su consentimiento, habida cuenta que la solicitud de esa medida, cuando procede a solicitud del agraviado, no es obligatoria para éste. El objeto de la suspensión es simplemente el de mantener viva la materia del amparo evitando la consumación irreparable de esos actos, de suerte que si el promovente de un juicio de garantías omite solicitar la suspensión quedará expuesto a que la autoridad responsable pueda llevar a cabo la ejecución de los actos combatidos, y si la misma produce que se consumen irreparablemente entonces el amparo se tornará improcedente con base en la causal prevista en la fracción IX del numeral 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, mas no en la diversa fracción XI del mismo precepto.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, tesis III.3o.C.12 K, pág. 325.

SENTENCIA PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA, SI SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO, IMPUGNANDO LA PENA Y EL TRIBUNAL DE ALZADA CONFIRMÓ EL FALLO. Es improcedente el juicio de amparo directo, que se promueve en contra de una sentencia penal de segunda instancia, si el quejoso no apeló el fallo de primer grado, sino que sólo la recurrió el Ministerio Público, inconformándose con la pena impuesta, y el órgano de alzada

confirmó el fallo impugnado, resultando operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 70, compilación 1917-1988, toda vez que la sentencia de primera instancia, al no ser apelada por el quejoso, es un acto consentido, mientras que la de segundo grado, en virtud de que no modifica la situación del ocursante, tiene el carácter de acto derivado de otro consentido.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995. tesis IX.1o.4 P., pág. 604.

PENA, CONMUTACIÓN DE LA. DEBE ENTENDERSE CONSENTIDA LA SENTENCIA SI EL QUEJOSO SE ACOGE A DICHO BENEFICIO. Si el quejoso se acoge al beneficio de la conmutación de la pena decretada en la sentencia que reclama en amparo y, en tal virtud, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la propia ley.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II febrero, Tesis VI.1o.146 P, pág. 438.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 67, julio de 1993, Tesis de Jurisprudencia 40, pág. 54.

BENEFICIOS PENALES. ACOGERSE A ELLOS IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. La sentencia condenatoria se entiende consentida expresamente, cuando el quejoso realiza actos que así lo evidencian, como acogerse al beneficio de la condena condicional o a la sustitución de las sanciones que le fueron concedidas, cumpliendo con los requisitos señalados; en tal virtud, procede sobreseer el juicio de amparo promovido, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 85, enero de 1995, tesis I.4o.P. J/6, pág. 56.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA, CUANDO SE PROMUEVE INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN DE SANCIONES. Al promoverse el incidente de sustitución de sanciones, el sentenciado en forma implícita acata el fallo condenatorio, así como también acepta la pena privativa de libertad impuesta, consecuentemente, al promoverse juicio de garantías contra dicho fallo, se actualiza la causal prevista en el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, que establece la impro-

cedencia del juicio contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-agosto, pág. 451.

2.12. Fracción XII

"Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218."

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso."

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad."

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONER-LA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III

del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo III, junio de 1996, tesis P./J. 27/96, pág. 57.

AMPARO EN MATERIA PENAL. DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN INCIDENTE SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. Para reclamar en amparo la resolución negatoria recaída en un incidente sobre otorgamiento del beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad por una medida de seguridad, el quejoso tiene el término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, por no actualizarse ninguna de las excepciones previstas en el artículo 22 de la misma Ley, en las que en cualquier tiempo se puede intentar la acción constitucional, toda vez que la citada resolución reclamada sólo decide la procedencia del beneficio de la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad, mas no impone pena privativa de libertad alguna, la cual tiene su origen en la sentencia ejecutoria dictada en la causa penal que se instruyó al quejoso, de manera que si la demanda de amparo se presenta después de quince días de que se le notificó la resolución combatida, el juicio de garantías es extemporáneo y por ello debe ser sobreseído por improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, tesis IV.2o.12 P, pág. 776.

Las siguientes tesis, aunque fueron pronunciadas con motivo de un amparo directo, ejemplifican la hipótesis de improcedencia en comento.

DEMANDA DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORÁNEA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Cuando con motivo de una sentencia definitiva dictada en materia penal, se promueva un juicio de amparo, la presentación de la demanda debe llevarse a cabo dentro del término de quince días, si únicamente se reclama, la parte de ésta, en la que se condenó al quejoso a pagar la reparación del daño, pues aun cuando tal acto, importe una condena en materia penal; empero, al no afectarse con la misma, la libertad personal del quejoso, ni encuadrar en ninguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, la presentación de la demanda fuera del término de quince días, que para tal fin establece el artículo 21 de la misma, obliga al sobreseimiento del juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 73, de la Ley en cita.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 69, septiembre de 1993, tesis V.1o. J/22, pág. 37.

AMPARO PENAL EXTEMPORÁNEO. Si en la sentencia reclamada únicamente se condenó al quejoso a pagar una sanción pecuniaria consistente en multa, así como la reparación del daño, la demanda de amparo relativa debe interponerse dentro del término de quince días fijado por el artículo 21 de la Ley de Amparo, por cuanto que el acto reclamado no constituye alguno de los casos de excepción a que alude el artículo 22 fracción II de la misma ley, dado que, en primer término, la condena no es restrictiva de la libertad, y en segundo, la multa impuesta no se combate como violación directa del artículo 22 Constitucional, sino a través de la garantía de legalidad relativa a la individualización de la pena que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, por lo que cuando no se hace así, el acto reclamado debe tenerse como consentido tácitamente, y consecuentemente debe decretarse el sobreseimiento del juicio, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XII del artículo 73 del mismo Ordenamiento.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, sexta parte, pág. 74.

2.13. Fracción XIII

"Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños."

"Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución."

Lo anterior, en vista del juicio de amparo constituye un "recurso extraordinario", y mientras el particular tenga a su alcance un medio de defensa por medio del cual puede obtener el derecho que se reclama, debe agotarlo antes de la audiencia el juicio constitucional, atento el principio de definitividad, que se abordó en el tema 2.4., del capítulo primero.

NOTA: La libertad personal no se incluye en el último párrafo como excepción; pero la jurisprudencia sí lo contempla como tal.

INTERPRETACIÓN

RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO EN MATERIA PENAL. REPARACIÓN DEL DAÑO. Tratándose de resoluciones dictadas en un proceso, que no sean restrictivas de la libertad personal, como las que se refieren a la reparación del daño, el quejoso previamente al juicio de garantías debe de acatar el principio de definitividad, mediante la interposición de los recursos ordinarios dentro del procedimiento, por virtud de los cuales pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, pues de no hacerse así, el juicio constitucional es improcedente, en términos de la fracción XIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, debe sobreseerse, de acuerdo con el diverso numeral 74, fracción III, de dicho ordenamiento legal.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 97-102, sexta parte, pág. 220.

LIBERTAD CAUCIONAL. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE RECURSOS ORDINARIOS. La Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 40, correspondiente al Apéndice de 1965, Primera Sala (número 43, del Apéndice de 1975), ha establecido que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente se acuda al recurso de apelación. Según se advierte de las ejecutorias que formaron la tesis, el criterio deriva de la anterior fracción IX (actualmente XII) del artículo 107 de la Carta Magna, conforme a la cual, la violación de las citadas garantías se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa, o ante el juez de Distrito que corresponda; casos estos en que no es indispensable agotar recursos, a pesar de lo dis-puesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por constituir una excepción al principio de la definitividad, ya que resultaría absurdo que si el afectado puede acudir indistintamente ante el superior de la responsable o ante el juez de Distrito, pudiera hacerlo en el primer caso sin agotar medios de impugnación y en cambio que tuviera que satisfacerlos al dirigirse al juez Federal. Como es evidente que la garantía de obtener el inculpado el beneficio de la libertad caucional cuando se cumplan los requisitos respectivos, se encuentra expresamente comprendida en la fracción I del artículo 20 del Pacto Federal, la negativa de ese derecho encuadra claramente en lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, así como en la tesis jurisprudencial apuntada, por lo que no es improcedente el juicio de amparo contra el auto denegatorio del beneficiario, aun cuando el quejoso haya omitido interponer el recurso de apelación establecido en la ley secundaria.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 77, Parte Sexta, pág. 39.

LIBERTAD PROVISIONAL. EL AUTO QUE FIJA EL MONTO Y FORMA DE LA GARANTÍA PARA DISFRUTARLA CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO. Si se reclama un auto que fija el monto y forma de la garantía para gozar del beneficio de la libertad caucional, solicitada con fundamento en la fracción I del artículo 20 constitucional, dicho acto constituye una excepción al principio de definitividad que se deriva de lo establecido en la fracción XII del artículo 107 de la Constitución General de la República y en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que puede implicar una violación directa a la fracción I del artículo 20 de la Carta Magna; en tales condiciones, no es necesario agotar los recursos que las leyes ordinarias establecen, antes de acudir al juicio de garantías.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo X, diciembre de 1999, tesis 1a./J. 82/99, pág. 92.

2.14. Fracción XIV

"Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado."

Está fracción también encuentra su fundamento en el principio de definitividad. En tratándose de la libertad personal es optativo acudir al recurso o medio de defensa ordinario (libertad por desvanecimiento de datos) o al juicio de amparo; sin embargo, iniciados los primeros no se pueden acudir al segundo si no se concluyen por alguna causa, como lo es el desistimiento expreso.

INTERPRETACIÓN

IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión

del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia Pleno, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 144/2000, pág. 15.

DESISTIMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO, ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. HACE DESAPARECER LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Si el quejoso desiste del recurso ordinario que interpuso y este desistimiento es acordado favorablemente antes de la audiencia constitucional en el juicio de amparo y tales circunstancias están probadas en autos, debe concluirse que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo y que, en consecuencia, no procede el sobreseimiento.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Pleno, Tomo 61, enero de 1993, tesis P. IV/93, pág. 57.

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XIV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, establece la causal de improcedencia del juicio de amparo, en la hipótesis de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; por otra parte, la jurisprudencia número 942, visible a fojas 1541 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, establece que tal causal debe estar plenamente demostrada y no inferirse a base de presunciones; en esas condiciones, si al notificarse al procesado y luego quejoso, el auto de formal prisión, manifiesta escuetamente "APELO", sin existir ninguna otra constancia de que se admitió o esté en trámite tal recurso ordinario, resulta incuestionable que esta causal no está acreditada plenamente; con mayor razón, si de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, debió acompañar las constancias necesarias para apoyar la impro-

cedencia del juicio, ya que el trámite del recurso no debe justificarse sólo con la constancia de que se interpuso el mismo, sino con todas aquéllas que justifiquen su admisión para su trámite.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia Primera Sala, Tomo 83, noviembre de 1994, tesis 1a./J. 19/94, pág. 13.

APELACIÓN, RECURSO DE. ES NECESARIO ACREDITAR LA ADMISIÓN O TRÁMITE, PARA QUE SE PUEDA SURTIR LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones; por lo tanto, no basta con que de autos se desprenda que el quejoso y su defensor al notificarles alguna determinación jurídica hayan expresado que apelaban la misma, sino que es necesario que exista alguna constancia que acredite que dicho recurso se haya admitido o que está en trámite, para que pueda acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, tesis IV.3o.20 K., pág. 494.

ARRESTO, ORDEN DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN ALGÚN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO. Si bien la orden de arresto atenta contra la libertad personal, la interposición de un recurso ordinario contra dicho acuerdo que se encuentre pendiente de resolver, es suficiente para que se actualice la hipótesis contenida en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con independencia del efecto en que se admita el medio de defensa, puesto que la causal de improcedencia en comento, no establece condición alguna al respecto, sino únicamente que el medio de impugnación pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, atento al principio de definitividad que debe observarse en el juicio de amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, tesis XIX.2o.19 K, pág. 630.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL. El artículo 73, fracción XIV de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que pueda modificar o revocar el acto reclamado. Ahora bien, dicha causal se configura si el quejoso interpuso recurso de apelación en

contra del auto de formal prisión reclamado, aún y cuando acredite haber desistido del mismo ante el juez de la causa, habida cuenta que ello no basta para establecer que ahí concluyó el recurso, sino es menester que ese desistimiento se hubiere acordado favorablemente por el tribunal de alzada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, tesis IV.2o. J/10, pág. 324.

APELACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU DESISTIMIENTO ANTE EL JUEZ NATURAL, IMPIDE QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Una vez admitido un recurso de apelación y ordenado su trámite, el juez natural debe cesar en su jurisdicción para proveer en cuanto a la apelación interpuesta, siendo únicamente el Tribunal de alzada el facultado para resolver cualquier providencia que se dicte en segunda instancia, inclusive su desistimiento; pero cuando a pesar de tal impedimento, el juez de la causa dictó un auto en el que tuvo por desistido al recurrente de su apelación admitida con anterioridad, el mismo causó estado y dejó sin efecto el referido recurso, es lógico y jurídico concluir que el recurso dejó de existir, aún siendo improcedente el acuerdo por emanar de una autoridad incompetente; por lo que en el caso de que la parte que había apelado acuda al juicio de garantías señalando como acto reclamado la misma actuación que había sido materia de la apelación, de ninguna manera se puede decir que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, puesto que con tal desistimiento y su correspondiente acuerdo que causó estado, ya no se tramitará ante los Tribunales ordinarios recurso alguno que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado, que es el requisito que la aludida fracción XIV exige para que se genere la causal de improcedencia que contiene, además de que a la autoridad de amparo no le compete resolver sobre tal falta de jurisdicción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-enero, tesis XVII.2o. 36 K, pág. 188.

APELACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL INTERPONERLA ES SUFICIENTE PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA HIPÓTESIS QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO. Si en el caso se probó que el quejoso apeló del auto de formal prisión al notificársele éste; lo que es permitido conforme lo señala el artículo 277 del Código de Procedi-

mientos Penales del Estado, ello es suficiente para estimar que se encuentre en trámite el recurso respectivo, puesto que la substanciación del mismo principia necesariamente con el acto en que se externa la voluntad de impugnar esa resolución, máxime que se trata del medio de defensa idónea conforme a la ley (artículo 216 del Código invocado); de ahí que, cuando en el juicio de garantías se actualiza esa hipótesis, es evidente que emerge la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento con base en lo dispuesto por el diverso artículo 74, fracción III de la propia ley. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 5/91 publicada en la página 27, Gaceta número 47 de noviembre de mil novecientos noventa y uno del Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA", en la que se sostiene que para los efectos de la controversia constitucional, se entiende que existe juicio con la simple promoción de la demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 83, pág. 13, tesis por contradicción 1a./J.19/94.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-noviembre, pág. 296.

AMPARO PROMOVIDO ESTANDO PENDIENTE UN RECURSO CONTRA ACTO DIFERENTE DEL RECLAMADO. La causal de improcedencia que establece el artículo 73 fracción XIV de la Ley de Amparo, es aplicable cuando el recurso ordinario que se encuentra en trámite ante la autoridad responsable, tiende a examinar la legalidad del acto reclamado, pues de lo contrario implicaría que se trata de actos diferentes y por consecuencia la resolución que llegara a pronunciarse dentro de ese recurso, en nada se ocuparía del acto reclamado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-marzo, pág. 216.

PROCEDENCIA DEL AMPARO, POR DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN AUN CUANDO SE HAYA ACORDADO ANTE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. Es procedente el juicio de garantías promovida en contra del auto de formal prisión, por no operar en el caso la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XIV de la Ley de Amparo, porque aun cuando el quejoso había interpuesto en contra del mandamiento de bien preso, recurso de apelación, posteriormente se desistió del mismo y el desistimiento se acordó de conformidad, encontrándose firme

el acuerdo respectivo; sin que obste que el desistimiento lo haya proveído el juez de primera instancia y que éste pudiera no tener jurisdicción para acordar el ocurso de desistimiento por corresponderle al Tribunal de Apelación; en virtud de que, por una parte, a la autoridad de amparo no le compete resolver sobre tal falta de jurisdicción; y por la otra, porque como quiera que sea, ya no se dará trámite al recurso de apelación, y lo que se traduce en que no se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que pueda tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado, que es precisamente el requisito, que la aludida fracción XIV exige para que se genere la causal de improcedencia que contiene.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-abril, pág. 216.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CUANDO TAMBIÉN SE INTERPONE INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. El artículo 73 de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente… XIV.—Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Como puede advertirse, en dicha fracción se manifiesta el principio de definitividad del juicio de amparo. El mencionado principio instituye como causa de improcedencia la existencia y promoción del recurso o medio ordinario y la acción de amparo. Así es, mientras que en las fracciones XIII y XV del referido precepto, tal principio se traduce en la obligación que tiene el peticionario de garantías de agotar previamente los medios de impugnación del acto reclamado, en la fracción XIV ya no implica dicha obligación, sino que se alude a las circunstancias de que la promoción del recurso o medio de defensa ordinario contra el acto combatido y que esté pendiente de resolución, excluye la procedencia del juicio de garantías. En este orden de ideas, las consecuencias que se derivan de las dos maneras de realización contra el principio en mención, en cuanto a las excepciones legales y jurisprudenciales, son también distintas; pues si bien es cierto que en materia penal, en los casos previstos por la ley, la exigencia de la previa promoción del recurso ordinario del acto reclamado no opera, tratándose de la existencia legal procesal simultánea de algún medio de defensa y la acción de amparo, tal excepción no existe. Por consiguiente, si después de emitida la sentencia sujeta a revisión, en donde se analizó la constitucionalidad del auto de formal prisión decretado a los amparistas, éstos ejercieron el incidente de libertad por desvanecimiento de datos ante el juez del proceso, es indudable que

se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, aun cuando el referido incidente no entraña examen sobre la legalidad del auto de formal prisión en sí mismo y, por ende, no son materia de análisis los requisitos de fondo y de forma que debe satisfacer ese mandamiento judicial, puesto que la finalidad de dicho procedimiento estriba en establecer si nuevos datos constituyen prueba plena indubitable capaz de desvanecer los que sirvieron como fundamento a la resolución que decretó el auto de formal prisión, cabe señalar que, el incidente en cuestión constituye un medio de defensa legal que de resultar procedente dejaría insubsistente el acto reclamado, lo que es suficiente para estimar que se acredita la causal de improcedencia de mérito; además, de resolverse en el juicio constitucional que nos ocupa, podrían presentarse sentencias contradictorias, situación que pretende evitar el principio de definitividad del juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, segunda parte-2, pág. 549.

AMPARO IMPROCEDENTE, SOBRESEIMIENTO EN EL, POR DESISTIMIENTO DE LA SEGUNDA INSTANCIA NO ACREDITADO. Incumbe al Tribunal de Segunda Instancia conocer del escrito de desistimiento del recurso de apelación que tramita, puesto que a él corresponde resolver el citado recurso; por lo que si el escrito de desistimiento se presenta ante el juez de primera instancia, quien admitió dicho recurso, con ese acto cesó su jurisdicción para conocer del desistimiento y, por ende, el recurso está pendiente de resolución y al no existir prueba fehaciente, que demuestre que el Tribunal de Alzada tuvo por desistido al recurrente, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en dicho juicio de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, segunda parte-1, pág. 87.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE POR ESTAR PENDIENTE DE RESOLVERSE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO ORDINARIO. El juicio de amparo resulta improcedente por operar la causal prevista por la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si el defensor del quejoso interpuso recurso de apelación en contra del auto de formal prisión reclamado en el

mencionado juicio de garantías, y si bien es cierto que el hoy recurrente adjuntó a su demanda de amparo copia al carbón de un escrito presentado en la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual se desiste del recurso de apelación que afirma haber interpuesto, como se ignora si se tuvo por desistido a él o a su defensor, dado que no existe constancia alguna que demuestre que a tal escrito haya recaído acuerdo favorable, debe estimarse que se encuentra en trámite dicho medio de impugnación que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, ya que para que desaparezca la causal de improcedencia, es necesario que se compruebe que al escrito de desistimiento del recurso, recayó acuerdo por parte de la autoridad competente, por lo que, resulta operante dicha causal.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo 217-228, sexta parte, pág. 116.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPARO PROCEDENTE CONTRA EL, AUN CUANDO ESTÉ TRAMITÁNDOSE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS PROMOVIDO POR EL QUEJOSO. Aunque de autos aparezca que se está tramitando el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución incidental que no tuvo por desvanecidos los datos que sirvieron de base para decretar el auto de formal prisión, como lo que se resuelva en definitiva en esa apelación, relativa al incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido, no entraña examen sobre la legalidad o ilegalidad, en su caso del auto de formal prisión, en tanto que, lo que se decida en esa apelación tendrá como finalidad establecer si nuevos datos desvanecen los que sirvieron de fundamento para dictar la formal prisión, de ello resulta que respecto al auto de bien preso que se reclame, no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la resolución que se dicte al decidirse la apuntada apelación, no puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los fundamentos que sirvieron de base para decretar la formal prisión combatida.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 145-150, sexta parte, pág. 314.

DENEGADA APELACIÓN, RECURSO DE. La interposición del recurso de denegada apelación, en trámite, constituye un medio de defensa que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en el juicio de garantías, por lo que es claro que concurre en el caso la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV

del artículo 73 de la Ley de Amparo y la consecuencia de sobreseimiento, a que alude la fracción III del artículo 74 de la propia ley.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo LXXXII, pág. 3334.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS PENDIENTES Y PROCEDENCIA DE AMPARO EN TAL CASO. Si bien la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece una causal de sobreseimiento, cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso que pueda modificar o revocar el acto reclamado, no puede decirse que exista esa causal, cuando el quejoso antes de pronunciarse la sentencia en el juicio constitucional, presente como prueba, una copia certificada que demuestra que se desistió del recurso de apelación interpuesta contra el auto de formal prisión dictado en su contra y que se le tuvo por desistido; por lo que es incuestionable que en el momento de fallar, ya no existía el recurso pendiente, debiendo interpretarse la fracción citada con bastante amplitud y en beneficio de la parte quejosa, por tratarse de un asunto de orden penal, y, por tanto, debe entrarse al estudio del fondo del amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo LXXXI, pág. 525.

RECURSOS ORDINARIOS, CASO EN QUE EL AMPARO QUE LO SOLICITE, ESTANDO AQUÉLLOS EN TRAMITACIÓN, ES IMPROCEDENTE AUNQUE NO SEAN PROMOVIDOS POR LOS QUEJOSOS. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente, cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o modificar el acto reclamado; pero conforme a la fracción XV del mismo artículo, no es de todo punto indispensable que sea la parte quejosa la que haya promovido el recurso que tenga por objeto modificar la resolución que se impugne en el juicio de garantías, ya que dicha fracción establece la improcedencia contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deben ser revisadas de oficio, conforme a la ley que los rija; etc., y si el recurso fue interpuesto por aquel a quien el acto reclamado afectaba directamente al quejoso, el amparo es improcedente mientras el recurso no se resuelva.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXXI, pág. 1342.

RECURSOS ORDINARIOS. Las situaciones previstas por las fracciones XIII y XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, son enteramente diversas. En efecto, en la hipótesis a que se refiere la frac-

ción primeramente citada, compete al juez de Distrito calificar si la ley común concede alguna defensa o recurso contra el acto reclamado, y en la situación que regula la otra fracción, el propio juez sólo puede calificar la prueba de la existencia del hecho de que se ha interpuesto un recurso o defensa, contra el acto que se reclama en el amparo, y es a la autoridad común a la que la ley da competencia para calificar si ese recurso es o no procedente. Por tanto, basta la comprobación plena de que el quejoso interpuso un recurso ordinario contra el acto reclamado, para que el juez de distrito pueda estimar legalmente, que el caso se encuentra comprendido en la fracción XIV de artículo 73 citado, sin que incumba a dicho juez la calificación de la procedencia del recurso.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo LXXXI, pág. 2486.

RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES. La causa de improcedencia especificada en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, un recurso que pueda traer consigo la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, no desaparece ni queda purgada por el hecho de que dicho recurso haya sido resuelto desfavorablemente al quejoso, mientras estuvo en tramitación el juicio de garantías.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, Tomo LXXI, pág. 4185.

APELACIÓN EXTRAORDINARIA, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL RECHAZAMIENTO DE LA. Si se reclama en amparo una sentencia interlocutoria que declara infundada una queja interpuesta contra el auto que desechó una apelación extraordinaria, no existiendo contra la misma ningún recurso o algún otro medio de defensa que pueda tener como efecto el modificarla, revocarla o nulificarla, resulta inconducente la aplicación de la Fracción XIV, del Artículo 73 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, que establece la improcedencia del amparo, cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal, propuesta por el quejoso y que puede tener por efecto la modificación del acto reclamado.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, pág. 102.

2.15. Fracción XV

"Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, con-

forme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."

Al igual que las dos fracciones anteriores, este supuesto se rige por el principio de definitividad.

Comentario: Uno de los medios de defensa en contra del no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante autoridad distinta de los tribunales judiciales en materia penal, es el establecido en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, que debe de agotarse previamente a la interposición del amparo, aun cuando pareciera optativo porque contiene la palabra "podrán", según se lee:

> ARTÍCULO 133.—"Cuando en la vista de la averiguación previa, el agente del Ministerio a quien la ley reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieran denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante por el ofendido podrán ocurrir al Procurador General de la República dentro del término de quince días contados desde que se le haya hecho saber esa determinación, para que este funcionario oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal.
>
> Contra la resolución del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad."

Lo anterior debe ser así, pues si no se agota en el término el medio de defensa se estará ante un acto consentido conforme a la fracción XI.

INTERPRETACIÓN

> DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene

que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal …que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley…". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia Pleno, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 3/2001, pág. 8.

RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, V y VII, de la Constitución General de la República, se

desprende que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños al mismo, pues en relación a éstos, dicho precepto constitucional no establece restricción alguna para la promoción del amparo. En esa virtud, si se toma en consideración que una ley secundaria no puede ir más allá del precepto constitucional que reglamenta, resulta incuestionable que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, no debe estimarse como una limitación para que el tercero extraño al procedimiento del que emana el acto reclamado acuda al juicio de garantías, sino como una excepción más al principio de definitividad en favor de las partes de dicho procedimiento; por tanto, cuando se reclama un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el tercero extraño al procedimiento respectivo, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tomo XII, julio de 2000, tesis 2a./J. 57/2000, pág. 106.

RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los con-sagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia Segunda Sala, Tomo X, octubre de 1999, tesis 2a./J. 116/99, pág. 447.

PETICIÓN. DERECHO DE. SU PROTECCIÓN DIRECTA POR LA CONSTITUCIÓN EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8º constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, tesis X.1o.18 K, pág. 707.

RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en

la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, tesis XX. J/1, pág. 94.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 1995, tesis XIX.1o.1 K, pág. 177.

VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN. NO HAY OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO O MEDIO DEFENSIVO LEGAL. CUANDO SE RECLAMA. Es incorrecto sobreseer en el juicio de garantías, por considerar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del artículo 74, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad, cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa de la constitución, y específicamente respecto de las garantías contenidas en sus artículos 14 y 16; pues en el caso se adujo el quebranto de la garantía de audiencia por no haber sido oído previamente, conminándole la autoridad responsable a reubicar su negocio. Mediante orden carente de la fundamentación y motivación legal, al no contener los razonamientos, que en relación con los artículos legales que se invocan, llevaron a la autoridad responsable a concluir en la determinación que se le reclamó; cuestiones éstas, contra las cuales resulta procedente su reclamo en forma directa, mediante la acción constitucional, sin necesidad de agotar recurso o medio defensivo legal anticipadamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I febrero, tesis VIII.1o.28 K, pág. 285.

ACTO DE AUTORIDAD DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. AMPARO CONTRA EL. DEBE OBSERVARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Es improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo cuando el quejoso previamente a la interposición del juicio de garantías no agote los recursos ordinarios que establezcan las leyes contra los actos que combata en el amparo, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; aun cuando el acto de autoridad haya sido deficientemente fundado y motivado, pues sólo cuando dicho acto carezca absolutamente de esos requisitos el gobernado no tendrá obligación de hacer valer previamente a la presentación del juicio constitucional los medios de defensa ordinarios por desconocer en qué ordenamientos legales se apoya el acto y por consiguiente en dónde se encuentran los medios de reparación contra los actos de autoridad que le afecten.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, agosto de 1994, tesis XVI.1o. J/16, pág. 99.

RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-junio, pág. 299.

RECURSO ORDINARIO. DEBE AGOTARSE, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÉ DEFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. Conforme al artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo y al principio de definitividad rector en el juicio constitucional, contra el acto reclamado deben agotarse los medios de defensa ordinarios que establezcan las leyes, siempre que aquéllas suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso; y ello no es obligado cuando éstos carecen de fundamentación, pero si el motivo del reclamo se apoya en algún precepto, esto basta

para que se exija la interposición del recurso, pues el acto no carecería de fundamento, sino que en su caso estaría deficientemente fundado y debe ser revisado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-marzo, pág. 355.

NOTA. Es diferente la falta de fundamentación a la deficiente o indebida fundamentación.

CONSTITUCIÓN, ATAQUES DIRECTOS A LA. CUANDO NO EXISTEN. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional exige la satisfacción de dos requisitos: uno de forma y otro de fondo. El primero queda satisfecho cuando en el acto reclamado se citan las disposiciones legales que se consideran aplicables al caso y se expresan los motivos que precedieron a su emisión. El segundo elemento o de fondo, requiere que los motivos invocados sean ciertos o reales y que conforme a los preceptos invocados, sean bastantes para provocar el acto de autoridad. La ausencia de los requisitos formales produce un ataque directo a la constitución, porque el acto de autoridad carece de tal fundamentación y motivación; en tanto que, si faltan los requisitos de fondo, no existe tal ataque, pues el acto no carece de una total fundamentación y motivación, sino que, en todo caso, se estará ante un acto indebidamente fundado y motivado. De ahí que faltando en el acto reclamado los requisitos formales a que se alude, el agraviado no está obligado a agotar, previamente al amparo, ningún recurso, juicio o medio de defensa legal, pues el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo exime de esa carga. Por el contrario, si el acto carece de los requisitos de fondo, cuyos motivos y fundamentos no son ignorados por el quejoso recurrente, deberá impugnar tal acto con el recurso, juicio o medio de defensa legal que le concede la ley que rige dicho acto, desde luego, siempre que en la ley secundaria se contemple la suspensión de la ejecución, mediante la satisfacción de requisitos que no sean superiores a los que exige la Ley de Amparo para conceder la medida provisoria.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X-noviembre, pág. 244.

INVASIÓN DE ESFERAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Cuando se trata de invasión de esferas, no existe obligación de acudir ante las autoridades de la entidad invasora, interponiendo

recursos ordinarios, con el propósito de que se modifique o revoque el acto que invade la esfera competencial de otra entidad. La Ley de Amparo y la constitución, únicamente otorgan el juicio de garantías para corregir una violación de esferas, por tratarse de actos de autoridad que directamente violan la constitución, y las autoridades invasoras no tienen competencia, en estos casos, para dirimir controversias por violaciones constitucionales, siendo el Poder Judicial Federal el único órgano con facultades de resolver esas cuestiones, ya que se supone que la autoridad invasora viola disposiciones que rigen en una jurisdicción distinta a la que pertenece, y lesionan la esfera de aquella entidad, por lo que no existe razón para que en un conflicto de esa especie sea una autoridad superior de la invasora la que determine si se lesionan o no las atribuciones de una entidad no sujeta a su soberanía. Además, las fracciones XIII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo limitan el principio de definitividad de la sentencia a cuando se está en presencia de resoluciones judiciales y de actos de autoridades distintas a las judiciales, si existe el sistema de recursos ordinarios para combatir los actos de autoridad desarrollados dentro de la jurisdicción legal de las distintas entidades, ya sea de la Federación o de los estados.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 103-108, primera parte, pág. 163.

RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la constitu-

ción, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura un excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 127-132, sexta parte, pág. 201.

AMPARO, RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE HACEN IMPROCEDENTE EL. DEBEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEY. Si se afirma que el propio acuerdo reclamado dio al quejoso un medio de defensa, y que ello hizo improcedente el amparo, debe decirse que para que la existencia de un medio de defensa haga impro-

cedente el juicio de amparo, dicho medio debe estar claramente previsto en la ley, pues ésta es la interpretación correcta de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que no deja a la voluntad de las autoridades la procedencia del juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 28, sexta parte, pág. 18.

MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDERAL, CONSEJO TUTELAR PARA. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTES DE RECURRIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR UNA DE LAS SALAS. La resolución definitiva que dicte una de las salas del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, debe impugnarse mediante el recurso de inconformidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 de la ley que crea los consejos tutelares para menores infractores del Distrito Federal, con la excepción que el mismo señala, del que corresponde conocer al pleno del consejo, y de no agotarse dicho recurso, el juicio de amparo que se promueva contra la mencionada resolución, resulta improcedente conforme al artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad que impera en el Juicio de Garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Informe 1986, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo Parte III, pág. 30.

2.16. Fracción XVI

"Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

El juicio de amparo carece de razón si su objetivo desapareció y, dictar una sentencia que analice la constitucionalidad del acto reclamado es inútil, si no va a tener aplicación práctica. Sin embargo, el juzgador debe cerciorarse de que efectivamente el acto reclamado ya no produce efectos, pues con uno solo que subsista, existe razón para analizarlo.

Con motivo de las reformas de 8 enero de 1999, algunas de las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a la cesación de efectos, han quedado en desuso, pues fueron consecuencia de la interpretación de la fracción X del artículo 73.[40]

[40] Nota: Ver comentario de la fracción X del artículo 73.

INTERPRETACIÓN

ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO).

Contradicción de tesis 20/95. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretarios: Manuel Rojas Fonseca y Angelina Hernández Hernández.

(Inaplicable con motivo de la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, de 1999.)

AMPARO CONTRA LEYES. SU IMPROCEDENCIA, CUANDO HAN CESADO LOS EFECTOS DE SU APLICACIÓN. La circunstancia de que se reclame una ley con motivo de su aplicación en una orden provisional de detención y que posteriormente, por cesación de los efectos del acto de aplicación reclamado, se declare improcedente el juicio de amparo promovido en su contra, es una decisión legal que se determina en atención a la naturaleza y los efectos del acto reclamado, que no busca hacer nugatorio el derecho a impugnar una ley, sino actuar de acuerdo a las nuevas circunstancias legales que determinan y regulan la actual situación jurídica del quejoso, de conformidad con el numeral 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo II, octubre de 1995, tesis 1a. XL/95, pág. 199.

EXTRADICIÓN. ORDEN PROVISIONAL DE DETENCIÓN. CESACIÓN DE EFECTO DEL ACTO. Cuando la orden provisional de detención ordenada con fines de extradición ha quedado superada, porque además de que se admitió a trámite la petición formal de extradición del quejoso, ya se ha emitido la resolución que pone fin al procedimiento de extradición por parte del Estado requerido, es claro que dicha orden provisional de detención ha dejado de surtir sus efectos y consecuencias jurídicas, por lo que las violaciones que en su caso se hubieran cometido al ejecutarla han quedado irreparablemente extinguidas, pues los efectos de tal acto reclamado han cesado; en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional promovido en su contra, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el numeral 73, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo II, octubre de 1995, tesis 1a. XLI/95, pág. 200.

SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO EN AMPARO. Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, tesis VI.2o.53 K, pág. 616.

MEDIDA DE APREMIO, CESACIÓN DE EFECTOS. CASO EN QUE NO SE CONFIGURA. Si al inconforme se le apercibe con una medida de apremio (orden de arresto) y ésta se hace efectiva, no puede considerarse que el acto reclamado haya cesado en sus efectos por haber sido substituido procesalmente por un diverso proveído, ya que es una consecuencia lógica y natural de aquél, es decir, se trata precisamente de los efectos que el mismo produjo, lo que al materializarse afecta directamente los derechos fundamentales del amparista, que no podrán repararse en forma alguna, dada la propia naturaleza del procedimiento en que se emitió el auto reclamado; pues la sentencia respectiva con la que culmine el juicio no se ocupará del proveído reclamado ni de sus consecuencias; por lo que es inconcuso que en la especie no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, tesis VI.2o.27 C, pág. 539.

ACTO RECLAMADO, CESAN LOS EFECTOS DEL, CUANDO SE TRATA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE DECRETA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR EN FAVOR DEL INCULPADO. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando cumplimentada una orden de aprehensión, se decreta auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del inculpado, ya que al decretarse dicha libertad, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que dio motivo al amparo, como lo es la orden de captura reclamada, pues con esta nueva situación se repuso al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, y siendo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, tesis X.1o.4 P, pág. 449.

DESISTIMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. SUS EFECTOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El desistimiento presentado en el juicio ordinario del que deriva el acto reclamado, tiene como consecuencia retirar la acción intentada, por tanto, todas las actuaciones de ese juicio quedan insubsistentes, debiendo sobreseerse en el amparo con apoyo en la fracción XVI del artículo 73, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haber cesado los efectos del acto reclamado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, tesis XIX.2o.4 K, pág. 504.

AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. Al declararse fundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido por el procesado en la causa penal que se le instruye, se genera como consecuencia que el auto de formal prisión que reclama en el amparo cese en sus efectos legales, actualizándose así la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que importe que la resolución del incidente la haya apelado el Ministerio Público, puesto que esa impugnación debe admitirse en el efecto devolutivo, y por otra parte, en caso de una eventual revocación de dicha resolución, que provocaría la reanudación de los efectos jurídicos del auto de formal prisión combatido, el quejoso estaría en aptitud de volver a intentar la acción constitucional contra ese proveído.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I febrero, tesis IV.2o.60 P, pág. 143.

ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA POR UN JUEZ DEL FUERO COMÚN. HIPÓTESIS EN QUE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CESA SUS EFECTOS LA. Si de las constancias que integran el juicio constitucional se advierte que el juez natural, libró orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable de un delito, pero también aparece que el citado juez decretó auto de libertad por falta de méritos para procesar; tal circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, porque eviden-

temente cesó en sus efectos la orden de aprehensión reclamada, ya que sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y bajo ningún aspecto pueden ser analizadas por tratarse de un estadio procesal diferente y no puede decidirse la situación jurídica anterior por haber quedado legalmente substituida con el auto de libertad en comento.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-enero, tesis XX. 283 P, pág. 267.

INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-octubre, tesis II,. 1o. C. T. 217 K, pág. 313.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE RECLAMA CON LA DICTADA EN APELACIÓN. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse en el juicio de garantías por lo que respecta de esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha Ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Véase: Jurisprudencia número 24, Apéndice 1917-1985, segunda parte, pág. 61.
Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, segunda parte-2, pág. 549.

ORDEN DE DETENCIÓN. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO DIRECTO. En el amparo directo, la orden de

detención librada por el agente del Ministerio Público, sin existir flagrancia, no constituye una violación al procedimiento penal, por no quedar comprendida en ninguna de las fracciones del artículo 160 de la Ley de Amparo, pero sí constituye una causal de improcedencia, la prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la misma ley, en virtud de que la ilegalidad de esa orden ha cesado en sus efectos, primeramente por el auto de formal prisión dictado en su contra, en segundo lugar por la sentencia de primer grado y en tercer término por la sentencia constitutiva del acto reclamado; por lo que es procedente el sobreseimiento en relación a tales actos de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, segunda parte-2, pág. 370.

PENA COMPURGADA. CESAN LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Cesan los efectos del acto reclamado, respecto del juez de primera instancia y director del reclusorio, señalados como autoridades responsables ejecutoras, en el momento en que se tuvo por compurgada la pena de prisión impuesta por el tribunal de segunda instancia, lo que motiva opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo y consecuentemente el sobreseimiento del juicio, respecto a esas autoridades, en términos del artículo 74, fracción III de la citada Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tmo II, segunda parte-2, pág. 378.

LEYES, REVOCACIÓN DEL ACTO DE APLICACIÓN EN AMPARO CONTRA. Cuando la autoridad ejecutora que realizó el acto de aplicación, lo revoca en todas y cada una de sus partes, es evidente que cesan los efectos del acto reclamado y se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por otra parte, aun cuando subsisten los preceptos legales impugnados de inconstitucionalidad, porque la revocación del acto de aplicación no puede legalmente dejarlos sin efecto, esa subsistencia no ocasiona perjuicio a la parte quejosa, por no existir acto de aplicación, y en tal virtud se surte la hipótesis normativa prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Con-secuentemente, al operar las causas de improcedencia citadas, el juicio de amparo debe sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 103-108, primera parte, pág. 203.

ACTO RECLAMADO, SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, CUANDO SE DEROGA LA LEY COMBATIDA, AUN SI EXISTEN COMPROBADOS ACTOS DE APLICACIÓN, POR NO HABER RENDIDO INFORME AUTORIDADES RESPONSABLES, Y SI SE COMBATIÓ LA LEY POR SER AUTO-APLICATIVA. Aun cuando el juez de Distrito estime que se surte la presunción legal de certeza de los actos de aplicación reclamados por falta de informe de las autoridades responsables si se advierte que en la demanda de amparo sólo se reclamó en general la aplicación de las disposiciones combatidas, sin que se señalen actos concretos de aplicación, pues aparentemente no existían los mismos, lo cual se confirma porque en la demanda presentada, en la relación de antecedentes, se indica que las disposiciones por su sola expedición constituyen violaciones a las garantías constitucionales, se deriva que no hay actos concretos de aplicación y que sólo se reclamaron los posibles actos específicos de aplicación que a algunas autoridades les correspondería efectuar, mas no se señalaron en forma concreta los mismos, sino la aplicación genérica de la ley, y si sus disposiciones han sido derogadas, es aplicable la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados, consistentes en la expedición de los artículos impugnados a consecuencia de dicha abrogación.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 75, primera parte, pág. 13.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SEÑALADA COMO ACTO RECLAMADO Y COMO RESPONSABLE EL JUEZ. SOBRESEIMIENTO. Si aún tratándose de interpretar la voluntad del quejoso al señalar la autoridad responsable, sólo queda concluir que la que señaló es el juez que dictó la sentencia de primera instancia, y como acto reclamado a ésta, como la suplencia de la deficiencia de la queja consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que estima violados con el acto reclamado, tal suplencia de la queja no autoriza para cambiar los elementos del juicio de amparo que los quejosos señalan, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable; en esa virtud, en el amparo solicitado en esas condiciones, debe tenerse como autoridad responsable a la que el quejoso señaló y como acto reclamado a la sentencia que pronunció dicha autoridad, esto es, la sentencia de primera instancia. Así pues, si el acto que el quejoso reclamó ya cesó jurídicamente en sus efectos, siendo substituido por la sentencia de segunda instancia, consecuentemente operó la causa de improcedencia establecida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse de conformidad con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Sala, Tomo 51, segunda parte, pág. 32.

ACCIÓN PENAL, DESISTIMIENTO DE LA. (SOBRESEIMIENTO). Si por el auto del Tribunal de Alzada que tuvo al Ministerio Público por desistido de la acción penal que intentó, se dejó sin efecto la sentencia de segunda instancia, materia del juicio de garantías, debe estimarse que cesaron los efectos del acto reclamado, si en cumplimiento de aquel auto se ordenó la inmediata libertad del quejoso, lo que motiva el sobreseimiento, con apoyo en los artículos 73, fracción XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo LXXXVIII, pág. 2096.

APREHENSIÓN LEGAL. Si el quejoso confiesa que ha recobrado su libertad, existe la causa de improcedencia contra la orden de aprehensión, que señala la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo LXXIV, pág. 194.

EXTRADICIÓN, PROCEDIMIENTO DE FASES PROCESALES. Existen tres periodos perfectamente definidos en los que se encuentra dividido el citado procedimiento: a) el que se inicia con la manifestación de intención de presentar formal petición de extradición, en la que el Estado solicitante expresa el delito por el cual pedirá la extradición y que existe en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente; o en su caso, a falta de tal manifestación de intención, el que inicia con la solicitud formal de extradición, la cual debe contener todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional a los establecidos en el Tratado respectivo; b) el que comienza con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de admitir la petición, por estar satisfechos los requisitos legales correspondientes, etapa dentro de la cual interviene el juez de Distrito competente y emite su opinión; y c) aquél en el que esta dependencia del Ejecutivo Federal resuelve si concede o rehusa la extradición, sin estar vinculado jurídicamente a la opinión que dictó el juez de Distrito. Luego entonces, las violaciones que en su caso se cometan en una etapa concluida quedan consumadas irreparablemente por cesación de efectos del acto y no pueden afectar ni trascender a la otra.

Amparo en revisión 1752/94. Mario Fernando Zablah o Carlos Bendek o Jorge Samur. 4 de agosto de 1995. 5 votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.

EXTRADICIÓN, AMPARO CONTRA LEY O TRATADO DE, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una Ley o Tratado con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la Ley o Tratado del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por si solos tales ordenamientos generales considerados en abstracto, ya que la estrecha vinculación entre una Ley o Extradición Internacional o de un Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y otro Estado, el acto concreto de su aplicación impide examinar al uno prescindiendo del otro, y como la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la Ley o Tratado, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a los actos de expedición, promulgación, firma, aprobación y publicación de dichos ordenamientos generales, cuando éstos se reclamaron con motivo de su aplicación, consistente en la orden de detención provisional del quejoso con fines de extradición, si ésta ha cesado en sus efectos.

Amparo en revisión 1752/94. Mario Fernando Zablah o Carlos Bendeck o Jorge Samur. 4 de agosto de 1995. 5 votos.

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.

2.17. Fracción XVII

"Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo."

Por igual razón que en la fracción anterior, resultaría inútil resolver sobre un acto, que aunque materialmente existe ya no podrá surtir efectos.

Un ejemplo de esta fracción, es la orden de aprehensión que deja de surtir efecto material, por haber dejado de existir el objeto de la misma. Cuando el juez de la causa ante quien se presenta el inculpado bajo los efectos de una suspensión, gira oficio al Director de la Policía Judicial para que se abstenga de ejecutarla pues ya se presentó en esas condiciones.

Si en el caso específico que se analiza, la orden de aprehensión ha tenido por objeto, en primer término, la detención material del quejoso y la incoación de un procedimiento penal en su contra, es evidente que dichos objetivos quedan extintos y satisfechos, ya que al comparecer ante el órgano jurisdiccional ordinario a declarar preparatoriamente, el gestionante del amparo, satisfizo el objeto de la

detención, que ya no puede ejecutarse, a no ser que se conculquen garantías contra la propia impetrante; y, de otra parte, la resolución de orden de aprehensión ha satisfecho sus fines procesales, en tanto que, con posterioridad a su emisión, ya se ha dictado auto de formal prisión en contra de la amparista, iniciándose así el proceso penal correspondiente, con lo que se cumple con el objetivo legal de la orden de captura.

Así, la orden de aprehensión no puede surtir efecto legal, porque ha dejado de existir el objetivo correspondiente, que es el presentarlo para la apertura del procedimiento penal relativo ante la autoridad judicial; el objetivo material de la orden de captura también ha quedado extinto, en tanto que se consumió al momento en que la gestionante del amparo compareció ante este órgano jurisdiccional recurrente a declarar preparatoriamente, sin que haya habido la necesidad de ser conducida coactivamente, ya que la detención que sufrió, tuvo carácter virtual.

Lo anterior es acorde con la naturaleza jurídica de la causal de improcedencia que se analiza, si se toma en consideración que la privación de libertad constituye materia y objeto de la orden de aprehensión reclamada y que en la especie dicho mandamiento de captura ya no es ejecutable, en tanto que ya se dio aviso a la autoridad ejecutora y ha iniciado el procedimiento penal judicial correspondiente, es dable sostener, la improcedencia de la acción constitucional.

Desde luego que con la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, será preferente utilizar la causal de cambio de situación jurídica, cuando se dicte necesariamente el auto de formal prisión o cesación de efectos si se declara la libertad por falta de elementos para procesar.

INTERPRETACIÓN

LEYES, AMPARO CONTRA. CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si la ley se reclama en el juicio de garantías con motivo de un acto de aplicación consistente en el auto que admite la apelación en el efecto devolutivo y, al resolver, aparece que dicho recurso ya fue resuelto por el Tribunal de alzada y confirmada su resolución al haberse negado el amparo que en su contra se tramitó, debe concluirse que la sentencia emitida dentro del juicio ordinario tiene el carácter de ejecutoriada y, consecuentemente, ya no se puede analizar la constitucionalidad del acuerdo en el que se admite la apelación, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se surte respecto del acto de aplicación de la ley, y de ésta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo VII-febrero, tesis 4a. III/91, pág. 65.

SENTENCIADO PRÓFUGO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. Si queda acreditado que el sentenciado se fugó de la cárcel pública, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece la imposibilidad de que se realicen o se continúen realizando los efectos del acto reclamado por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, ya que el acto privativo de la libertad reclamado, además de que puede violar las garantías individuales correspondientes, recae en el quejoso y afecta su libertad, pues la persona y su libertad son la materia y objeto real del acto reclamado, por lo que lógicamente si el quejoso se encuentra prófugo, sustraído de la acción de la justicia, el acto reclamado ya no puede seguir teniendo repercusión sobre aquéllos, por lo que el amparo es improcedente de acuerdo con la citada disposición legal, por no poder reparar una garantía a alguien que se encuentra sustraído a la acción de la justicia.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, segunda parte-2, pág. 539.

LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Cuando subsistiendo la ley ésta se deja de aplicar al quejoso y los actos de aplicación realizados en su contra ya han dejado de surtir efectos, se actualizan las causales de improcedencia previstas por las fracciones XVI y XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 133-138, primera parte, pág. 124.

2.18. Fracción XVIII

"En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

Esta fracción deja ver que el listado del artículo 73 no es limitativo sino enunciativo; esto es, deja la puerta abierta para encuadrar cualquier acto que no pueda reclamarse en amparo por disposición expresa de la ley. Por ejemplo entre otros, los actos emanados de los Tribunales Colegiados de Circuito; los del Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Federal Electoral; artículos 100, párrafo octavo y 99, párrafo cuarto, de la Constitución Federal y 122 y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, la Suprema Corte en una primera resolución, determinó por mayoría de seis votos contra cuatro (puesto que el

Ministro Presidente estaba impedido para conocer del asunto dada su investidura como Presidente del Consejo de la Judicatura Federal), que en contra de las resoluciones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que afecten las garantías laborales de los servidores públicos de nivel medio (Secretario, actuarios) procede el juicio de amparo.

La resolución mayoritaria del once de agosto de 1998 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio en el amparo en revisión 3263/97, promovido por la quejosa Maribel García García, encargándose del engrose el Ministro Humberto Román Palacios. El voto mino-ritario lo dieron los señores ministros Sergio Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y en él se dan las razones por las cuales consideran la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.

Los ministros que consideran procedente el amparo en estos casos fueron Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juventino Cas-tro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios y Juan Silva Meza; el Presidente José Vicente Aguinaco Alemán se declaró impedido.

No obstante lo anterior, cabe aclarar que el Constituyente Permanente, precisó la procedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual reformó el párrafo noveno del artículo 100 de la Constitución Federal, reforma que fue publicada el 11 de junio de 1999, en la que señaló:

> "Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y por tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva."

A mayor abundamiento, en la exposición de motivos que dio origen a esa reforma, se dijo:

> "…Respecto del citado sistema de impugnación de las resoluciones del Consejo, resulta conveniente clarificar, conforme al principio de definitividad vigente, la regla general según la cual en contra de las resoluciones del Consejo no procede recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia procede en los casos expresamente indicados en el propio texto…"

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el siguiente criterio:

> CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN SUS COMISIONES EN LOS ASUNTOS CUYO CONOCIMIENTO ORIGINALMENTE CORRESPONDE A DICHO ÓRGANO, SON DEFINITIVAS E INATACABLES, AUN EN AM-PARO. Si se toma en consideración que las Comisiones Unidas, de Receso, Administración, Carrera Judicial, Disciplina, Creación de Nuevos Órganos y Adscripción fueron creadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con la tarea de que lo auxilien en el deshogo de los asuntos que se les encomiendan, para que éste pueda centrar su atención en la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 24 del Acuerdo General 48/1998 del propio Pleno, que regula la organización y funcionamiento del referido consejo, éste ejercerá sus atri-buciones, entre otras, a través de dichas comisiones, lo que significa que éstas no tienen una competencia distinta de aquél, resulta inconcuso que las resoluciones que tales comisiones emitan, revisten similares características y naturaleza que las que pronunciaría el indicado consejo al resolver los mismo asuntos, cuyo conocimiento originalmente le corresponde y, por tanto, se consideran como definitivas e inatacables, de ahí que no pueden ser combatidas por medio de impugnación alguno, ni siquiera a través del juicio de am-paro, tal y como lo dispone el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual se entiende que tanto las resoluciones dictadas por el consejo de mérito, en los asuntos o recursos respectivos, como cualquier otro acto que ocurra durante su trámite o sustanciación, que incluso se atribuya a su presidente, no admitirán juicio ni recurso alguno.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XIC, agosto de 2001, pág. 213.

De donde resulta inconcuso, la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.

En materia penal existen demasiados casos en que se aplica esta fracción XVIII, como se refleja en las múltiples tesis que se han elaborado al respecto.

INTERPRETACIÓN

> IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON LIMITATIVAS SINO ENUNCIATIVAS. Las causales de improce-

dencia en cuanto a su configuración no se limitan a las XVII hipótesis referidas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, dado que de la fracción XVIII de ese numeral aparece que esas causales no sólo dimanan de la ley, cuanto a la vez de la constitución y de la jurisprudencia. Tal es el caso en que se impugna la ejecución de una orden de reaprehensión (no por vicios propios) por parte de un juez de Distrito, pero omitiendo combatir en sí mismo el mandato de recaptura emitido en realidad por el Tribunal Unitario. Así planteada la cuestión, al reclamarse un acto que es consecuencia legal necesaria de otro no combatido, resultaría improcedente el juicio de garantías en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción III, de la ley de la materia y el criterio jurisprudencial sostenido por el máximo tribunal bajo la voz "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA" (Jurisprudencia número 70, página 116, segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988).

Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX-abril, pág. 515.

ORDEN DE APREHENSIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO YA SE DICTÓ FORMAL PRISIÓN Y LUEGO SE RECLAMA AQUÉLLA EN FORMA AISLADA. Cuando el amparo se promueve después de dictada la formal prisión, y no se reclama ésta sino solamente la orden de aprehensión, resulta improcedente el juicio, no por haber operado el cambio de situación jurídica, ni por haber cesado sus efectos, sino porque resulta inadmisible que, en esa hipótesis, se divida la continencia de la causa y se reclame solamente uno de los actos procesales que afectan al promovente (orden de aprehensión) y el otro no (formal prisión). Tal proceder, además de ilógico, resulta contrario a los principios de concentración y de economía procesal que inspiran al juicio de amparo, e inconveniente a todas luces, pues daría lugar a la promoción de demandas mal intencionadas, contrarias a la naturaleza del juicio constitucional, que tiene como propósito fundamental la defensa de las garantías individuales y no erigirse en un mecanismo procesal para entorpecer la administración de la justicia. Estas razones justifican, en tal supuesto, el sobreseimiento del juicio con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual se relaciona aquí con los principios generales de derecho antes indicados, que son consubstanciales al juicio de garantías y cuya aplicación autoriza el artículo 14 constitucional.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo IV, octubre de 1996, tesis P./J. 57/96, pág. 72 (inusual con la reforma de 1999).

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO CUANDO NO SE REQUIRIÓ AL QUEJOSO SUBSANARA EN SU DEMANDA LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS, Y SE PUEDAN INFERIR DEL ESTUDIO INTEGRAL DE AQUÉLLA. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 166 de la Ley de Amparo, en la demanda de garantías deben expresarse los preceptos constitucionales que el quejoso estime violados y los conceptos de la misma violación, de manera que cuando no cumple con el primero de dichos requisitos, por regla general debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII de la legislación de la materia, porque la susodicha demanda no satisface aquel requisito; pero si el órgano jurisdiccional no requiere al quejoso, como debe hacerlo, en términos del artículo 178 de la citada Ley, para que subsane la omisión de que se trata, sino que se admite la demanda y de su análisis integral se infiere cuál es la garantía constitucional violada, debe entrarse al estudio de fondo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo III, febrero de 1996, tesis P./J. 2/96, pág. 107.

DEMANDA DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS EMANADOS DE DIVERSOS JUICIOS, NO DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo esa potestad no es ilimitada, ni depende del criterio puramente subjetivo del juzgador, sino que para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas reguladas en el artículo 73 de la ley invocada, u otra prevista en un precepto legal relacionado con la fracción XVIII de esa norma. Ahora bien, si se presenta el evento de que en una demanda de amparo se reclaman actos derivados de diversos juicios, tal circunstancia no da lugar a su desechamiento, puesto que la ley no establece que de darse esa hipótesis, se actualice una causa de improcedencia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo I, mayo de 1995, tesis P./J. 4/95, pág. 57.

TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO. El incumplimiento del quejoso en cuanto a proporcionar el domicilio correcto

del tercero perjudicado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional que deriva de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 5º y 116, fracción II, de la legislación invocada, ni por ende motiva que se decrete el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, de la legislación de la materia, a pesar de que sobre el particular se haya apercibido al promovente del amparo, dado que en primer lugar, en la ley de la materia no existe semejante disposición; y en segundo, porque el mismo ordenamiento legal, en su artículo 30, fracción II, establece el procedimiento que en estos casos debe agotar el juzgador de garantías para lograr el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado, aunque no conste en autos su domicilio ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones y esta omisión sea atribuible al quejoso.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis 2a. CI/96, pág. 246.

AMPARO, SENTENCIAS DE, NO TIENEN EL ALCANCE JURÍDICO DE TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA RELATIVA. Del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se infiere que las sentencias de amparo únicamente pueden sobreseer en el juicio, conceder o negar el amparo, mas no pueden, por imperativo de dicho precepto, tener por no interpuesta una demanda de amparo, porque ese tratamiento opera exclusivamente respecto a la hipótesis que refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero de ninguna manera puede hacerse extensivo para aquellas demandas que hayan sido previamente admitidas, ya que una vez pronunciado dicho status jurídico, necesariamente habrá de culminarse el juicio por alguno de los supuestos que enuncia el precepto primeramente citado. Así, si en un juicio de amparo el juez de Distrito estima que en el curso del mismo se demuestra que la firma que calza la demanda relativa no proviene del puño y letra de la quejosa, necesariamente deberá sobreseerse en el juicio por estar ante la presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 4º de la Ley de Amparo, por no activarse el juicio de garantías a través de la suscripción idónea y legítima de la demanda, por parte de a quien perjudique el acto reclamado, pero de ninguna manera culminar el juicio teniendo por no interpuesta la correspondiente demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis IV.1o.4 K, pág. 400.

VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos éstos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, tesis XXI.1o.28 K, pág. 768.

DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se des-

prende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo IX, enero de 1999, tesis 2a. CLXIV/98, pág. 113.

TERCEROS EXTRAÑOS, CASO EN QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO O INDIRECTO. Se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con los diversos artículos 10 y 4º de la propia Ley, toda vez que de la interpretación relacionada de los artículos 103 fracción I y 107 fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 158 de la Ley de Amparo, permite concluir que para obtener la declaración de que la totalidad o parte de una sentencia definitiva dictada en materia penal es violatoria de garantías, es menester, en primer término, que alguien tenga la correspondiente legitimación activa, en esa hipótesis el encausado y excepcionalmente el ofendido o la persona que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, y en segundo, que esa persona promueva el juicio de amparo directo ante el órgano jurisdiccional a quien compete conocer del asunto. En ese orden de ideas, claro resulta que no procede ni el juicio de amparo indirecto ni el directo promovido por quien se ostenta tercero extraño a la causa penal, en contra de la sentencia definitiva que puso fin a la misma, pues además no debe perderse de vista que en todo proceso penal las partes únicamente son el procesado y el fiscal, porque ni aun la persona ofendida por un delito tiene el carácter de parte en el proceso penal de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimientos Penales de la entidad y en esas condiciones no puede dárseles intervención ni considerárseles terceros extraños en la referida causa penal a aquellas personas que estiman que se les afectó sus derechos de posesión, con la citada sentencia.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, tesis VII.P.32 P, pág. 961.

ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, ES IMPROCEDENTE COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, RESPECTO DE LA GARANTÍA

CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL. No se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues al momento de presentarse la demanda de garantías, no han transcurrido cuatro meses para que la autoridad señalada como responsable conteste la promoción ante ella presentada, ya que no significa de manera alguna que tal situación pueda considerarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que el juez de Distrito en su tesis transcrita, señala que si transcurren cuatro meses, sin que se conteste la petición, se estima violada la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional, no quiere decir que deba necesariamente transcurrir el término señalado para promoverse el juicio de amparo porque ello es propiamente materia del fondo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, tesis II.2o.P.A.12 K, pág. 259.

ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL. Si el quejoso interpone una demanda de amparo, señalando como autoridad responsable ordenadora a una que no emitió el acto reclamado y sin que conste que ésta tuviese jurisdicción alguna en el asunto por impedimento, excusa o cualquier otra causa, es evidente que ante tal circunstancia opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio constitucional, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, tesis XX.31 K, pag. 512.

DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la cau-

sal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4º el mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-noviembre, tesis VI. 2o. 692 K, pág. 435.

REVOCACIÓN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA. Es improcedente el juicio de amparo que se hace valer en contra de la resolución que admite un recurso de revocación, ya que dicho acto por sí mismo no trae consigo una ejecución que sea de imposible reparación, pues no lesiona de una manera real y efectiva los derechos y la persona del quejoso, ni mucho menos lo deja sin defensa, en razón de que al contestar los agravios que se planteen en ese recurso puede ser oído en defensa de sus intereses; de ahí que en el caso resulte aplicable a contrario sensu lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 73, fracción XVIII, de la propia Ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 791.

REVOCACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. Cuando en la demanda de garantías se aprecia que una resolución se impugna en cuanto decreta la admisión de los recursos de revocación, interpuestos por los señalados como terceros perjudicados, no se está en el supuesto de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto impugnado, por sí mismo, no trae consigo una ejecución que sea de imposible reparación, pues no lesiona de una manera real o efectiva los derechos y las personas de los quejosos, como tampoco los deja sin defensa en razón de que, al contestar los agravios que se planteen en el recurso de revocación, pueden ser oídos en defensa de sus intereses, y además de que la resolución que llegare a dictarse con motivo de dicho recurso, puede serles favorable; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista en

la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la citada fracción IV del artículo 114 a contrario sensu de la ley de la materia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 791.

AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 74, febrero de 1994, tesis VI. 3o. J/44, pág. 67.

RECURSO ORDINARIO. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LO ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite un recurso ordinario, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 constitucional, ni en lo previsto por la fracción IV del diverso 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiere irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la resolución definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII, en relación con el artículo 114 fracción IV de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías en estos casos conforme a la fracción III del artículo 74 del ordenamiento legal en cita.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV-julio, pág. 768.

RECUSACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, HASTA QUE SE RESUELVA EN DEFINITIVA EL JUICIO EN DONDE SE INTERPONE LA. La resolución que declara improcedente la recusación interpuesta por la impetrante

del amparo, no debe ser considerada como un acto dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fun-damental contenido en las garantías individuales, ya que con dicha resolución no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos, que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y bien puede ocurrir, que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la aludida resolución que declara improcedente la recusación que se interpone. Por consiguiente, debe sobreseerse en el juicio de amparo directo que se promueve en contra de la señalada resolución, con base en lo que previene la fracción XVIII del artículo 73, relacionada con el numeral 114, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por ser reclamable hasta que el fallo se dicte en forma definitiva en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional; y 158, 159 y 161 de la ley invocada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-mayo, pág. 385.

SECRETARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO. Es improcedente el amparo si se reclaman actos de los secretarios de un juzgado de Distrito y Tribunal Unitario. En efecto, estos funcionarios carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, puesto que sus funciones se constriñen únicamente a dar fe y autorizar los actos de los jueces y magistrados de su adscripción. Por lo tanto, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11 de la Ley de Amparo y debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del numeral 74 de la ley en cita.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, tesis XVI.1o. J/13, pág. 75.

MEDIDAS PROVISIONALES. RESTITUCIÓN DE INMUEBLES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN CONTRA DE LAS. El artículo 429 del Código Adjetivo del Estado, prevé que cuando esté plenamente comprobado en autos el delito de que se trate, el funcionario que conozca del asunto dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente

justificados. Por su parte el artículo 430 del propio ordenamiento señala que las providencias que se dicten conforme a las reglas anteriores, serán provisionales y podrán ser modificadas o revocadas por causa "superveniente" o en la sentencia definitiva. Ahora bien, de autos aparece que el ad quem confirmó el auto de formal prisión decretado en contra del procesado, hoy quejoso, por el delito de despojo; y, que a petición del ofendido, el juez de la causa, de conformidad con los preceptos señalados, ordenó se le restituyera la posesión del predio materia del delito; tal determinación no es combatible a través del amparo indirecto, por tratarse de una medida provisional, toda vez que existe la posibilidad de que pudiera ser modificada o revocada por alguna causa superveniente, como sería en el caso de que se concediera al inculpado la protección constitucional contra la resolución de la sala que confirmó el auto de formal prisión decretado al quejoso; de prosperar algún incidente de desvanecimiento de datos; de ser absuelto en sentencia definitiva; o bien de concedérsele el amparo directo en caso de serle adverso los fallos de primera y segunda instancia. En tales condiciones como el acto reclamado no es definitivo ni causa un perjuicio irreparable al inconforme, se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 114 fracción IV ambos de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 58, octubre de 1992, tesis III.2o.P. J/4, pág. 47.

AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL FALLO QUE DECLINA LA COMPETENCIA. La ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en su artículo 114, establece en forma enunciativa y limitativa los casos y actos que son impugnables mediante el juicio de garantías biinstancial, y específicamente la fracción IV del numeral de en cita señala: "Art. 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:… IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación". Ahora bien, cuando la resolución que constituye el acto reclamado se refiere a la incompetencia por declinatoria, si ésta se dicta durante la tramitación de un procedimiento judicial, no tiene sobre las cosas o personas una ejecución que sea de imposible reparación como lo requiere el dispositivo aludido puesto que estaría pendiente que el juez declinado aceptara o no la competencia propuesta a su favor; no obstante y según lo que este último resolviera, sólo surgiría, en el caso específico de que la rechazara, un conflicto competencial que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 106 constitucional y 24 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación, le correspondería conocer y resolver a la primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; en cambio, si acordara aceptar la competencia, la parte inconforme, en tal caso, sí puede hacer valer el medio de impugnación ordinario que la ley establece, pero si la ley aplicable no lo prevé sí debe promoverse el juicio de amparo. Por tanto, encontrándose el caso en la hipótesis primera, o sea que el juez aún no aparece que hubiera aceptado la competencia, lo procedente es que se decrete, con base en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el diverso nume-ral 114 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX-mayo, pág. 392.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN LOS CASOS QUE RESULTA DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA LEY. La fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no previene en sí misma una causal específica de improcedencia, sino que remite a alguna que resulte de una disposición de la ley. Por tal motivo, cuando se invoca la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, es necesario que se señale además el precepto o la jurisprudencia en la cual se apoye ésta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-septiembre, pág. 144.

SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-enero, tesis VI. 3o. J/16, pág. 88.

NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 37 enero de 1991, página 101.

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMO-

VERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4º de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4º, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-enero, pág. 272.

DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4º de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a

través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4º del propio ordenamiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, segunda parte-2, pág. 508.

IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. La fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el propio artículo 73; en esas condiciones para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Ahora bien, la referida fracción puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Es decir, en este supuesto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se aplica porque se relaciona con los diversos artículos 192 y 193 de la propia Ley, que como se dijo establecen la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados. Sin embargo, tal causal de improcedencia no puede relacionarse con una tesis aislada pues en tal supuesto no hay forma de vincularla con ningún precepto legal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, segunda parte-1, pág. 288.

IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que

este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 175-180 primera parte, pág. 75.

FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acredita su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4º de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Pleno, Tomo 38 primera parte, pág. 27.

MINISTERIO PÚBLICO, LEGITIMACIÓN PROCESAL INEXISTENTE DEL AGENTE DEL, PARA PROMOVER DEMANDA DE AMPARO, COMO PARTE EN UN PROCESO PENAL. Si el quejoso se encuentra adscrito a un juzgado de Distrito como Agente del Ministerio Público Federal, carece de legitimación procesal para impugnar en la vía de amparo, actuaciones que dicte la autoridad judicial en un proceso penal, por no darse la hipótesis a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Amparo; por tanto, el juicio de garantías debe sobreseerse, con fundamento en el artículo 74 fracción III, en relación con los diversos 1º, 4º y 73 fracción XVIII de la citada Ley Reglamentaria.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, sexta parte, pág. 393.

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO, DENUNCIA DE. La denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, en ninguna forma da lugar a una resolución que modifique, revoque o nulifique, el acto cuestionado, puesto que tal denuncia, únicamente puede tener como resultado, declarar la existencia o inexistencia de la repetición del mismo, mas nunca efectos restitutorios, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la IV del diverso 114, ambos de la invocada ley, en que se apoyó el juez federal para desechar la demanda.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, sexta parte, pág. 552.

DEMANDA DE AMPARO PENAL. DEBE DESECHARSE CUANDO SE PROMUEVE EN NOMBRE DE OTRO SIN QUE ESTÉ DETENIDO. Si del texto de la demanda de amparo promovida por una persona en favor de otra mediante la cual combate, además de la orden de aprehensión, la incomunicación, azotes y torturas, sin que aparezca que esté imposibilitado el directo agraviado para ejercitar la acción constitucional, por sí mismo, único caso en que se puede solicitar protección de la Justicia Federal en favor de otro, al desecharla el juez de Distrito, por notoriamente improcedente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 145, en concordancia con los artículos 17 y 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, aplicó correctamente estas disposiciones legales y, por lo mismo, no se irrogan agravios al recurrente, pues aún cuando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, corresponde a los Jueces de Distrito controlar la constitucionalidad de los actos reclamados, ello tiene que solicitarse conforme a los requisitos exigidos en la Ley de Amparo.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 28, sexta parte, pág. 29.

DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA. La demanda de amparo no tiene más efecto que el de sujetar al juez de Distrito a resolver la contienda con vista de ella y de los informes que rindan las responsables; y si con posterioridad se formula ampliación de la demanda, en ésta deben precisarse los requisitos que la ley exige para la demanda inicial, en lo que toca a la materia de la ampliación, y si no se hace así, hay que sobreseer el juicio en cuanto a la parte ampliada, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, y 74

fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 116 del mismo ordenamiento.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 22, sexta parte, pág. 20.
(Esta tesis no es aplicable a los casos penales establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo)

Las siguientes tesis de jurisprudencia, aunque tuvieron su origen en juicios de amparo directo, resultan interesantes y ejemplificativas, por lo que se estima oportuno citarlas.

EJECUTORA, JUICIO DE AMPARO IMPROCEDENTE, POR NO TENER EN ESE MOMENTO INTERVENCIÓN LEGAL EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO. Respecto al acto de ejecución que reclama el quejoso del Director de la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla del Distrito Federal, como autoridad ejecutora de la sentencia definitiva reclamada, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que dicha autoridad, no tiene por el momento ninguna intervención legal en la ejecución de esa sentencia, porque todavía no se sabe si será en ese centro penitenciario que el quejoso de que se trata deba compurgar la pena de prisión que le fue impuesta, en el supuesto de que se le niegue el amparo, al no estar detenido en ese lugar; por tanto, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo relativo, surgiendo así respecto de tal autoridad, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 11, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, es procedente sobreseer en el juicio de garantías, respecto de los actos atribuidos a esa autoridad, con apoyo en el artículo 74 fracción III, de la mencionada Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, segunda parte-1, pág. 281.

AUTORIDAD EJECUTORA. PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, NO LO ES EL DIRECTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. El Director General de la Policía Judicial del Distrito Federal, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, carece del carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo directo, promovido contra actos de un Tribunal Unitario, que pertenece a fuero diferente, pues ninguna intervención tendrá en la ejecución del fallo de segunda instancia impugnado; por lo que de acuerdo con el precepto en cita, en relación

con el 73 fracción XVIII, es improcedente el juicio de garantías y debe decretarse el sobreseimiento respecto a dicha autoridad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, segunda parte-2, tesis I. 2o. P. J/4, pág. 897.

NOTA: Jurisprudencia publicada también en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 13-15, pág. 76.

RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DIRECTOR GENERAL DE. NO ES AUTORIDAD EJECUTORA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO. El Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal no es autoridad para los efectos del amparo directo, en virtud de que dicha autoridad únicamente realiza funciones administrativas consistentes, entre otras, en vigilar el buen funcionamiento y la administración de los reclusorios del Distrito Federal, sin tener intervención en la ejecución de las sentencias penales; por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con el 11, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, es procedente sobreseerse en el juicio de garantías, respecto de los actos reclamados a esa autoridad, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la mencionada Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAL PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, tesis I. 1o P. J/3, pág. 82.

SOBRESEIMIENTO EN AMPARO DIRECTO PENAL. PROCEDE EL, CUANDO LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO NO ES APELADA, Y LA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE ALZADA SE DICTÓ EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGARAN LOS ARTÍCULOS 338 Y 339 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. Si la sentencia que se reclama de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha sido dictada en el ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Penales, sin que exista apelación del sentenciado o Ministerio Público; entonces cuando aquella sentencia confirmó la de primer grado, resulta improcedente el amparo directo, porque, la materia del recurso se constriñó al examen de legalidad por la aplicación de los beneficios que a favor del procesado estatuyen los artículos 60 y 84 del Código Penal; y si tal beneficio otorgado por el juez de la causa fue confirmado, esto no perjudica al quejoso, por lo que se está en el supuesto previsto por el artículo 40 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 73 frac-

ción XVIII del mismo ordenamiento. Y como la sentencia de primer grado no fue apelada, entonces la Sala no pudo jurídicamente examinar la legalidad de aquella, ni por ende es procedente el amparo directo, porque no se agotó el principio de definitividad, actualizándose la causal de improcedencia a que alude la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por lo que con tales fundamentos y el previsto en el artículo 74 fracción III de la ley citada, lo procedente es sobreseer el juicio de garantías.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X-diciembre, pág. 371.

ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA EL LIBRAMIENTO. Si bien es cierto que con la reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció el derecho de querellante o denunciante, de la víctima del delito, de los familiares de ésta o de los interesados legalmente, de impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal y que en concordancia con tal reforma se incluyó dentro del artículo 10 de la Ley de Amparo la procedencia del juicio de amparo contra dichas determinaciones, también lo es que de ello no puede colegirse que la resolución jurisdiccional que niegue el libramiento de la orden de aprehensión pueda ser materia del juicio de garantías. Lo anterior es así, porque al ser ésta un acto de autoridad jurisdiccional, no responde a los motivos que dieron origen a la citada reforma, consistentes en erradicar el monopolio del ejercicio de la acción penal a cargo del referido representante social, sujetando su actuar a la revisión de una autoridad jurisdiccional, a fin de otorgar mayor certeza jurídica al gobernado dentro de un proceso penal, evitando la impunidad. Además, pretender lo contrario, no sólo implicaría atentar contra lo dispuesto en el mencionado artículo 10 y contradecir el criterio ya definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga la posibilidad al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo únicamente contra actos que emanan del incidente de reparación del daño a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo únicamente contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes

afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, sino también autorizar al ofendido o a los sujetos legitimados por extensión para hacer uso de una instancia vedada para ellos.

Tesis de jurisprudencia por contradicción 85/2001, misma que fue aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de agosto de dos mil uno.

IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO. Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, y acorde con el criterio firme sustentado por este Alto Tribunal, el acto reclamado debe apreciarse tal y como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, en los juicios de garantías en la vía directa o en revisión no pueden ser admitidas ni valoradas pruebas que no se hayan aportado ante esa autoridad, puesto que las situaciones concretas que le fueron planteadas como acto reclamado podrían ser modificadas o cambiadas, también lo es que esta restricción únicamente debe tener aplicación cuando se trata de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no puede ni debe hacerse extensiva a aquellos medios de convicción tendientes a acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio, toda vez que su estudio, además de ser de oficio, según lo prevé el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, impide que al actualizarse se examine el fondo del asunto, lo que ocasiona que no se vierta pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En este sentido, se concluye que en esas vías judiciales (amparo directo o en revisión), es factible que se admitan y valoren pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello signifique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que, al no sufrir variación alguna la materia del acto reclamado, existe impedimento técnico jurídico para poder emitir pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, salvo en los casos en que la causal de que se trate haya sido motivo de pronunciamiento en la resolución de primera instancia del juicio de garantías y no se hubiere combatido ese aspecto en la revisión.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, 1a./J. 40/2002, Pág. 126.

CAPÍTULO IV

LA SUSPENSIÓN (HISTORIA Y NATURALEZA DE LOS ACTOS)

SUMARIO: 1. Aspecto histórico. 2. Concepto de suspensión. 3. Naturaleza del acto reclamado en materia penal. 3.1. Actos de particulares. 3.2. Actos pasados o consumados. 3.3. Actos presentes. 3.4. Actos futuros inminentes y futuros probables. 3.5. Actos instantáneos, permanentes y de tracto sucesivo. 3.6. Actos reparables e irreparables. 3.7. Actos positivos, negativos y negativos con efectos positivos. 3.8. Actos prohibitivos. 3.9. Actos declarativos. 3.10. Actos legislativos. 3.11. Actos privativos de libertad personal. 3.12. Actos no privativos de libertad personal.

1. ASPECTO HISTÓRICO

El juicio de amparo por primera vez se instaura en la legislación federal en las actas de reformas a la Constitución de 1824 del 18 de mayo de 1847, concretamente en su artículo 25, en las que Mariano Otero tuvo significativa participación (en la legislación del Estado de Yucatán, Rejón ya lo había hecho). El artículo 25 textualmente decía:

> Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare.

Sin embargo, la falta de reglamentación del artículo 25, impedía que los casos presentados fueran resueltos adecuada y satisfactoriamente.

En efecto, la Suprema Corte evadía de alguna manera la solución de los casos presentados, su reacción fue de recelo pues los

04_Capítulo_04 Ojeda.p65 407 23/04/2013, 12:19

ministros pensaban que no se trataba simplemente de administrar justicia humana a la que estaban acostumbrados, sino de fincar responsabilidad a las autoridades que conformaban el Supremo Gobierno.[41]

Así, como en muchos otros casos, el 2 de septiembre de 1848, la Suprema Corte se dirigió al Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos con motivo del amparo promovido por Roque Miranda, de la siguiente manera:

> Por el artículo 25 del Acta de Reformas se previene que los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede la Constitución y las Leyes Constitucionales… Fundados en este artículo algunos individuos han ocurrido a este Tribunal, quejándose de ciertas providencias de ese Supremo Gobierno que dicen atacar su libertad y sus derechos naturales, y exigiendo que se les imparta la protección prevenida en el artículo. Pero la Suprema Corte se ha abstenido de tomar providencia alguna sobre estas quejas, estimando que el citado artículo constitucional, por la misma generalidad propia de su clase, hace indispensable que una ley secundaria fije los casos y circunstancias en que deba tener lugar, determine los medios y maneras con que deban proceder los tribunales para impartir esta protección, con todo lo demás que es indispensable para hacerla real y efectiva en el caso particular que se presente. Y a fin de recabar del Soberano Congreso de la ley correspondiente, se ha acordado por esta Suprema Corte, formar un expediente de todas esas quejas, cuyo resultado será hacer una exposición que oportunamente será dirigida a las manos de V. E. Casi no hay ley, y casi no hay providencia alguna gubernativa, que más o menos directamente, deje de afectar intereses creados o derechos adquiridos por los ciudadanos; y si ha virtud de la generalidad del artículo referido, hubiera la Suprema Corte de recibir y atender las reclamaciones de los quejosos e impartirles su protección, resultaría necesariamente que el Poder Judicial vendría a erigirse en censor o juez supremo de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero, ¡lejos de esta Suprema Corte tan gran despropósito! y, ¡lejos también de su circunspección y mesura atenerse a tales generalidades, para eludir, desprestigiar, o murmurar a lo menos, los actos de estos Poderes que está acostumbrada a respetar!… Pues lo mismo, por la misma razón, entiende esta Suprema Corte que debe decidirse de aquel artículo constitucional que atribuye al Supremo Gobierno el cuidar de la pronta y cumplida administración de justicia. Mientras que las leyes secundarias no fijen y determinen, de conformidad con las bases constitucionales, los medios o modos de ejercer ese

[41] La Suprema Corte de Justicia en el Siglo XIX, 1ª ed., 1997, Tomo I, p. 153.

> cuidado, el Ejecutivo no puede hacer otra cosa que lo que está establecido en las leyes vigentes, sin dirigir ni forzar la opinión de los jueces, respetando su independencia y la libertad de sus juicios, y denunciando y acusando debidamente sus infracciones ante la autoridad que puede calificarlas y castigarlas…[42]

Sin embargo, durante esta etapa (1847 a 1861 en que se publicó la ley reglamentaria) hubo dos proyectos de leyes reglamentarias del juicio de amparo que no prosperaron, el primero, del 3 de febrero de 1849 del diputado Vicente Romero y el presentado por José Urbano Fonseca en febrero de 1852.

A decir del ilustre maestro Ignacio Burgoa Orihuela, los primeros antecedentes de la suspensión del acto reclamado se encuentran en el proyecto de Ley Orgánica de Amparo, formulado por don José Urbano Fonseca, durante la vigencia del Acta de Reformas de 1847, en el que se otorgó competencia a los Magistrados de Circuito para "suspender temporalmente" el acto combatido.[43]

En este proyecto ya se pretendía separar del juicio de amparo la cuestión relativa a la suspensión del acto reclamado.

No obstante la ausencia de la ley reglamentaria, atribuida a las convulsiones sociales del país y a la Dictadura santanista, en el periodo de 1847-1861, en base al artículo 25 de las reformas de 1847, dos Jueces de Distrito tramitaron juicios de amparo, el de San Luis Potosí y el de Saltillo; así el suplente del juez de San Luis Potosí, don Pedro Zámano, el 13 de agosto de 1848, dicta, lo que Santiago Oñate (padre) considera la primera sentencia de amparo, concediendo la protección solicitada al agraviado Manuel Verástegui contra actos del gobernador Julián de los Reyes, consistentes en la orden de destierro.

La inconformidad no se hizo esperar y lamentablemente el 13 de diciembre de ese año la Suprema Corte designó a Julián Romero como nuevo Juez de Distrito. Lo anterior está calificado por nuestro más Alto Tribunal como un hecho cierto.[44]

La primera Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo fue posterior a la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857. La que establecía los seis derechos fundamentales del hombre; de igualdad, de libertad personal, la seguridad personal, de libertades de los grupos sociales, de libertad política y de seguridad jurídica.[45] Esta

[42] La Suprema Corte de Justicia en el Siglo XIX, 1ª ed., 1997, Tomo I, p. 163.

[43] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 708.

[44] La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, op. cit., p. 166, Tomo I.

[45] Lara Ponte, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, Ed. Porrúa, 1ª ed., 1993, p. 120.

es la de 26 de noviembre de 1861, en la que influyeron cinco proyectos:

1. El de Pérez Fernández del 16 de noviembre de 1857.
2. El de Manuel Dublán del 9 de julio de 1861.
3. El de la comisión especial creada para el objeto de elaborar la Ley de Amparo, integrada por Riva Palacio, Linares e Ignacio Mariscal, del 27 de julio de 1861.
4. El proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales de Distrito y de Circuito, elaborado por la Comisión de Justicia, de 30 de julio de 1861, que incluía un reglamento del artículo 101 de la Constitución Federal de 1857 (correlativo del ahora 103 de la Constitución de 1917).
5. El proyecto de José Ramón Pacheco del 31 de julio de 1861, elaborado por encargo del Ejecutivo Federal.[46]

Todos los proyectos influyeron de alguna manera en la ley reglamentaria, pero dominó, desde el punto de vista formal, el de la comisión (Palacio - Linares - Mariscal), que a su vez dijo estar apoyado en el de Manuel Dublán.

El proyecto de Pérez Fernández sobresalía por su gran técnica jurídica, pues establecía la competencia de la Suprema Corte para conocer de los juicios de amparo en los que las autoridades responsables fueran de mayor jerarquía, el congreso o los altos funcionarios, y dejó a los juzgados de Distrito en primera instancia a los de menor nivel y en apelación a los tribunales de Circuito. Sin embargo, respecto del acto reclamado no se admitía la suspensión, en cambio en los demás proyectos sí.

Manuel Dublán nació en la ciudad de Oaxaca, donde realizó sus estudios de Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, fue designado por Benito Juárez, Ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1861, junto con su ilustre paisano Ignacio Mariscal. En 1863 decidió abandonar la causa liberal y abrazó la del imperio, por tal motivo, en 1867 el general Porfirio Díaz lo aprehendió y ordenó su fusilamiento, pero no se ejecutó ya que fue perdonado a ruego de otro oaxaqueño, Justo Benítez, secretario del general Díaz; posteriormente, regresó al servicio de la República y contribuyó a la nueva Ley de Amparo de 1869.[47]

Dublán opinó, y así quedó en la ley de 1861, que primeramente conocieran del juicio de amparo los Jueces de Distrito, en apelación los de Circuito y en súplica la Suprema Corte; se estableció la respon-

[46] La Suprema Corte..., op. cit., p. 270.
[47] Ibidem, p. 419.

sabilidad de las autoridades que fueran contumaces y se velaba por el cumplimiento de las sentencias.[48] Por primera vez se estableció la suspensión del acto reclamado en la ley. La comisión (Riva Palacio, Linares y Mariscal) impuso su proyecto en la ley de 1861, pero influenciados en gran medida por el proyecto de Dublán.

El artículo 4º de la citada ley reglamentaria de 1861, establecía:

> El Juez de Distrito correrá traslado por tres días a lo más al promotor fiscal, y con su audiencia declarará, dentro del tercer día, si debe o no abrirse el juicio conforme al artículo 101 de la Constitución; excepto el caso en que sea de urgencia notoria la suspensión del acto o providencia que motiva la queja, pues entonces lo declarará desde luego bajo su responsabilidad.

El anterior precepto, otorgaba al Juez de Distrito amplio arbitrio para conceder de plano al quejoso la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con las circunstancias que hubiese apreciado, bajo su responsabilidad, y la concesión o la negación del acto reclamado no se declaraba en un incidente contencioso suscitado dentro del Juicio de Amparo, sino conforme a la apreciación judicial unilateral.[49]

Restaurada la República, después de la retirada de los franceses, se pensó en la urgencia de realizar una nueva legislación de amparo, pues la administración de justicia era lenta, embarazosa y el amparo la hacía aún más, ya que conforme a la ley de 1861 se convertía en una cuarta instancia —así se decía en la exposición de motivos—.[50] Nuevamente, Ignacio Mariscal, cuando fue ministro de Justicia e influenciado por el derecho estadounidense, —de donde fue tomado el amparo— pues había estado en ese país durante la Intervención, presentó la iniciativa el 30 de octubre de 1868.

Proponía que sólo la Suprema Corte conociera de la suspensión y no los Jueces de Distrito, salvo que el acto reclamado consistiera en la privación de la vida pues el mal es irreparable argumentando que fuera de ese acto privativo, los demás son reparables, como los pecuniarios, pues puede indemnizarse al agraviado, en cambio —decía— los males propiciados por la suspensión son incalculables "al ser concedida por Jueces de Distrito con criterios anárquicos".[51]

Su postura fue objetada por León Guzmán, Procurador General de la República y por Manuel Dublán, quien en 1866 fungió como

[48] Ibidem, p. 271.
[49] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 707.
[50] La Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, Tomo I, p. 429.
[51] Ibidem, p. 430.

Abogado General del Tribunal Supremo del Imperio y conocía muy bien el sistema jurídico europeo. Él era de la opinión de que los jueces tuvieran la facultad de suspender los actos reclamados, pues con frecuencia eran irreparables o de difícil reparación; además, contrariamente a lo que decía Mariscal, opinaba que la autoridad no tenía a su favor la presunción de legalidad de sus actos. Las réplicas y contrarréplicas las hacían en los diarios El Siglo XIX, El Globo, y en la revista El Derecho.

Finalmente se impuso la postura de Dublán: los Jueces de Distrito conocerían de la suspensión.

En el año de 1869, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, contempló la concesión o negación de la suspensión sin que constituyera una decisión judicial unilateral y subjetiva, pues se dictaba en una resolución jurisdiccional recaída en un incidente contencioso, de contenido diverso del de la cuestión constitucional fundamental debatida en el amparo.

Lo anterior se advierte de la lectura del artículo 5º de la ley en cita, el cual señalaba:

> Cuando el actor pidiere que se suspenda desde luego la ley o acto que lo agravia, el juez, previo informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, que rendirá dentro de veinticuatro horas, correrá traslado sobre este punto al promotor fiscal, que tiene obligación de evacuarlo dentro de igual término.

Además, en la reglamentación a comento ya se establecía, aunque de manera tácita, una distinción entre la suspensión provisional y la definitiva. Esta última se negaba o concedía una vez que el Juez de Distrito hubiera oído al quejoso, a la autoridad responsable y al promotor fiscal en los términos de la disposición transcrita. La otra, se otorgaba o negaba al agraviado sin oír previamente a dichos sujetos procesales; pues el segundo párrafo del artículo 5º del cuerpo legal de referencia, señalaba:

> Si hubiere urgencia notoria, el juez resolverá sobre dicha suspensión, a la mayor brevedad posible, y con sólo el escrito del actor.[52]

Asimismo, en el artículo 6º se establecía que la suspensión del acto reclamado se otorgaría siempre que éste estuviera comprendido en alguno de los casos del artículo primero de esa ley (por leyes o

[52] Documentos Constitucionales y legales relativos a la función judicial, 1810-1917, Ed. SCJN, 1ª ed., 1917, Tomo II, p. 251.

actos que violen las garantías individuales; por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y por leyes o actos de los Estados que invadan la esfera de la autoridad federal).

El mismo numeral 6º señalaba que contra las resoluciones dictadas en materia de suspensión del acto reclamado no procedía otro recurso que el de responsabilidad.

A su vez, el artículo 7º establecía la responsabilidad de las autoridades responsables cuando no acataran la resolución judicial que concedía la suspensión del acto reclamado al quejoso, responsabilidad que estribaba en su enjuiciamiento. Además se disponía que el "recurso" de amparo no era admisible en negocios judiciales (art. 8º).

Durante el Porfiriato, en 1882, Ignacio Vallarta pensó en reformar la Ley de Amparo de 1869 para hacer un juicio más eficaz y rápido en la protección de la libertad física o personal. Él pugnaba por evitar la protección a los delincuentes, "ya que no debe ponerse en libertad al preso", pues en ese sentido, decía, era superior el Habeas Corpus que el juicio de amparo y ninguno de los dos procedimientos se han establecido para proteger la impunidad de los criminales, sino para evitar los abusos del poder contra la libertad personal.

Estas ideas de Vallarta quedaron plasmadas en el artículo 14 de la nueva Ley de Amparo de 1882, lo que motivó fuertes críticas del abogado Fernando de la Vega en su obra "Nueva Ley de Amparo de Garantías Individuales", al calificar el precepto como "el más grave de todos los que han sido adoptados en la nueva ley."

El artículo 14, decía:

> Cuando el amparo se pida por violación de la garantía de la libertad personal, el preso, detenido o arrestado, no quedará en libertad por sólo el hecho de suspender el acto reclamado pero sí a disposición del Juez Federal respectivo, quien tomará todas las providencias necesarias al aseguramiento del quejoso, para prevenir que pueda impedirse la ejecución de la sentencia ejecutoria. Concedido el amparo por dicha ejecutoria de la Suprema Corte, el preso detenido o arrestado quedará en absoluta libertad; y negado el amparo, será devuelto a la autoridad cuyo acto se reclamó. En caso de que se trate de individuos pertenecientes al ejército nacional, el auto de suspensión será notificado al jefe u oficial encargado de ejecutar el acto, y por la vía más violenta y por conducto del Ministerio de Justicia se comunicará también al Ministerio de Guerra, a fin de que éste ordene que el promovente permanezca en el mismo lugar en que pidió amparo, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva.

Se dice que el texto no es idéntico al del proyecto de Vallarta del 15 de agosto de 1881; sin embargo, Vega le criticó y expuso que hubiera sido mejor negar la suspensión que concederla y no practicarla. Se decía que era una ley poco protectora de la libertad personal. El diputado Linares defendió el artículo 14 en los debates y expuso que nuestro sistema era más liberal que el inglés "pues arma a nuestros jueces con el poder supremo de excarcelación, prudencialmente, bajo la responsabilidad oficial y personal de los funcionarios." [53]

Este precepto 14 se generó ante la inseguridad pública que se tenía en ese tiempo, como en la actualidad la vivimos, en donde encontramos una sociedad que reclama castigo a los delincuentes como Daniel Arizméndi López, el más cruel secuestrador de los últimos tiempos y aquéllos otros que han cometido delitos de cuello blanco. Así, en esa época, existían asaltantes que aterraban a la sociedad. Esa disposición pasó a nuestra actual Ley de Amparo (artículo 136), pero ahora depende de la gravedad del delito para que el efecto de la suspensión sea el de quedar recluido a disposición del Juez Federal, pues los no graves tienen otro efecto, el de que no se les detenga, pero tomándose medidas para que no se sustraiga a la acción de la justicia.

Entre las aportaciones a la Ley de Amparo de 1882, se encuentra la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones del Juez de Distrito, que negaran o concedieran la suspensión, éste se tramitaba ante la Suprema Corte de Justicia. Además, se establecieron reglas relativas a la fianza, a los efectos de la suspensión contra el pago de impuestos y multas y a la suspensión por causa superveniente.

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, estableció que la suspensión no procedía contra actos de carácter negativo, entendiéndose por tales, aquéllos en que la autoridad se niegue a hacer alguna cosa.

La clasificación de la suspensión del acto reclamado en la de oficio o a petición de parte, fue establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, en la parte relativa al juicio de amparo.

El incidente de suspensión se tramitaba de acuerdo con los siguientes numerales: [54]

> ARTÍCULO 716.—"Promovida la suspensión que no deba decretarse de oficio, el juez, previo informe que la autoridad

[53] Op. cit., p. 321.
[54] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 708.

ejecutora habrá de rendir dentro de veinticuatro horas, oirá dentro de igual término al agente del Ministerio Público, y dentro de las veinticuatro horas siguientes resolverá lo que corresponda. La falta de este informe establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión."

ARTÍCULO 721.—"Mientras no se pronuncie sentencia definitiva, puede revocarse el auto de suspensión o dictarse durante el curso del juicio, cuando ocurra algún motivo superveniente que sirva de fundamento a la resolución."

La Ley de Amparo de 1919, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución de 1917, contemplaba la audiencia incidental en el amparo indirecto, en la que se recibía el informe previo de la autoridad responsable, se daba audiencia al quejoso, al agente del Ministerio Público y al colitigante o parte civil o tercero perjudicado, si era el caso que se presentaran a la audiencia. Concluida la audiencia, el Juez de Distrito resolvía si procedía o no la suspensión. Contra esa resolución existía el recurso de revisión ante la Suprema Corte.

La actual Ley de Amparo fue promulgada el 10 de enero de 1936, ha tenido a la fecha (agosto de 2005), veintiún reformas; éstas fueron publicadas el 30 de diciembre de 1939, 20 de enero de 1943, 29 de diciembre de 1949, 19 de febrero de 1951, 31 de diciembre de 1957, 4 de febrero de 1963, 30 de abril de 1968, 4 de diciembre de 1974, 23 de diciembre de 1974, 29 de diciembre de 1975, 29 de junio de 1976, 31 de diciembre de 1976, 7 de enero de 1980, 30 de noviembre de 1982, 16 de enero de 1984, 20 de mayo de 1986, 5 de enero de 1988, 10 de enero de 1994, 8 de febrero de 1999, 9 de junio de 2000 y 17 de mayo de 2001; respecto de las cuales se han publicado seis fes de erratas, 27 de enero de 1940, 14 de marzo de 1951, 22 de julio de 1976, 6 de febrero de 1984, 1º de febrero de 1988 y 22 de febrero de 1988.

El artículo 130 de la Ley de Amparo ha tenido dos reformas y el 136, en su última reforma, la de 1994, contiene aspectos muy novedosos tratándose de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, en el sentido de que si la detención no se justifica conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional, por no tratarse de los casos de flagrancia, urgencia u orden judicial, el quejoso debe quedar en inmediata libertad en veinticuatro horas.

La reforma del 8 de febrero de 1999, contempló modificaciones al artículo 138, en el sentido de que fuera obligatorio para los jueces tomar como medida precautoria la comparecencia del quejoso ante el juez de la causa o el Ministerio Público y en caso de no hacerlo no surte efectos la suspensión, además se adicionó el artículo 124 bis,

que establece específicamente los elementos para fijar garantía en caso de reclamar actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal. Esto derivado de las cantidades mínimas que los jueces de amparo fijaban como garantía en estos casos, adoptando criterios generales. Los preceptos quedaron de la siguiente manera:

> ARTÍCULO 124 Bis.—"Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.
>
> El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:
>
> I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
>
> II. La situación económica del quejoso, y
>
> III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia."
>
> ARTÍCULO 138.—…
>
> "Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida."

La reforma es más inquisidora que liberal, atiende más al interés social que a las garantías del individuo; con estas reformas todos los juicios de amparo promovidos contra la orden de aprehensión, con motivo de los efectos de la suspensión, terminarán sobreseyéndose, pues es inevitable el auto de término constitucional con esa medida a que se refiere el artículo 138 y, consecuentemente el cambio de situación jurídica.

Es visible que en la actualidad, como a finales del siglo XIX, se ha estado abusando del amparo por las bondades de la suspensión, la delincuencia se ha escudado en esa noble institución jurídica, algunas veces por falta de capacidad o descuido de quienes administran justicia; ante ello es necesario reformas legales que precisen más los alcances de la suspensión en tratándose de la libertad personal, pues ese abuso es palpable y se pagará con creces. José María Lozano, en su tiempo, a fines del siglo antepasado, señaló que el juicio de amparo se acabaría por el abuso que de él se había hecho, dijo: "Una institución de que se abusa es una institución que se enferma y es ley de la naturaleza que todo lo que se enferma está condenado

a morir".[55] Esto no ha sucedido gracias a las afortunadas reformas a nuestra ley, medidas que debemos tomar en cuenta en la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, las reformas deben de realizarse en forma equilibarada, es decir, atendiendo los derechos y garantías de todo gobernado, pero también al interés social.

2. Concepto de suspensión

La suspensión del acto reclamado, se encuentra regulada en el artículo 107 constitucional, fracciones X y XI, que establecen:

> "Fracción X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
>
> Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efectos si la otra parte da contra fianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes.
>
> Fracción XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto; en todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y uno para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los juzgados de distrito."

Se puede advertir que la primera parte de la fracción X consagra el derecho del gobernado a la suspensión del acto reclamado; asimismo, da al legislador secundario libertad para fijar los casos y condiciones para otorgar y que surte efectos la suspensión, basándose en la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de la reparación

[55] El Faro, Gaceta Jurídica de la Comisón Federal de Electricidad, edición en honor a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, número especial, p. 112.

de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado; los daños y perjuicios que pueda sufrir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión del acto, los que deben garantizarse con una fianza; que no exista interés público en que no subsista el acto reclamado, pues su paralización puede dañar a la sociedad.

El segundo párrafo de la fracción en comento contempla que la suspensión en materia penal debe otorgarse sin requisitos, con la sola comunicación de que se ha interpuesto el amparo. Asimismo, prevé la obligación de otorgar la fianza para la suspensión en una sentencia definitiva en materia civil, pero también establece la posibilidad de una contrafianza para que se realice el acto reclamado.

De la fracción XI se advierte que la autoridad competente para conocer de la suspensión es diferente en el amparo directo que en el indirecto, pues en el primero la suspensión se solicita ante la propia autoridad responsable y es ésta la que resuelve sobre la suspensión solicitada; asimismo, la demanda debe presentarse con copias para las demás partes, incluyendo al Ministerio Público y una copia más para el expediente. A los Jueces de Distrito toca conocer de la suspensión en amparo indirecto.

Por otra parte, la Ley de Amparo, en su Título Segundo, Capítulo III, regula la suspensión del acto reclamado, concretamente en los artículos del 122 al 144, cuyo comentario es materia del siguiente capítulo.

Es importante establecer qué se entiende por suspensión en general.

El doctor Ignacio Burgoa Orihuela, dice: "La suspensión en el juicio de amparo es aquel proveído judicial (auto o resolución que concede la suspensión de plano u oficiosa, provisional o definitiva) creador de una situación de paralización o cesación, temporalmente limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que se invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiese provocado." [56]

Por su parte, el doctor Carlos Arellano García, expresa que "la suspensión se puede definir como la institución jurídica en cuya virtud, la autoridad competente para ello, ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado en el juicio de amparo hasta

[56] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 710.

que legalmente se pueda continuar tal acto o hasta que se decrete la inconstitucionalidad del acto reclamado en sentencia ejecutoriada".[57]

De lo anterior, se concluye que la suspensión del acto reclamado se caracteriza por los siguientes elementos:

a) Es una institución jurídica, porque crea relaciones jurídicas entre la parte que solicita la suspensión, el órgano que la decreta, la autoridad responsable que debe acatarla y el tercero perjudicado que puede oponerse a ella.

b) La suspensión debe ser decretada por una autoridad competente, que ordenará que se detenga la ejecución del acto reclamado.

c) La paralización de la ejecución del acto reclamado es temporal, tiene límites de duración, no puede ir más allá del momento en que causa ejecutoria la sentencia de amparo y se notifique a la responsable; con independencia que la sentencia de amparo puede producir una paralización definitiva del acto reclamado cuando éste se declara inconstitucional.

d) La suspensión se produce durante la tramitación del juicio de amparo, nunca antes de la presentación de la demanda o después de concluido el juicio de garantías.

e) Para que el acto reclamado pueda suspenderse, debe ser positivo, es decir, ser un pronunciamiento, una orden o una ejecución, pues materialmente no puede paralizarse una abstención o un no hacer de la autoridad responsable; pero sí puede concederse la suspensión contra los efectos positivos de un acto negativo. Si el acto que se reclama es de tracto sucesivo, lo que se suspende son los efectos que aún no se realizan, pues no es dable respecto de los ya realizados. De igual manera, no se suspenden los actos reclamados que se han realizado totalmente y permanecen en ese estado hasta que se resuelve el fondo del amparo, cuya sentencia sí es restitutoria, como lo determina el artículo 80 de la Ley de Amparo.

f) El acto reclamado se paraliza desde que se decreta la medida provisionalmente o en la definitiva.

Puede darse el caso que la suspensión provisional se negare pero la definitiva se conceda y desde entonces se detiene el acto reclamado.

Esta medida continúa surtiendo sus efectos, aun cuando se encuentre en revisión la sentencia de fondo y hasta que se declare ejecutoriada la sentencia definitiva.

g) El acto reclamado se puede ejecutar si se niega la suspensión definitiva.

[57] Arellano García, Carlos, Práctica Forense del Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 6ª ed., México, 1991, p. 544.

h) Si se concede la protección constitucional en la resolución de fondo, el acto reclamado queda paralizado definitivamente hasta que se cumpla con la sentencia de amparo. En cambio, si se sobresee en el juicio de amparo o se niega la protección constitucional al quejoso, la autoridad responsable recupera su imperio para llevar a cabo la ejecución del acto reclamado, una vez que cause ejecutoria la sentencia.

i) La suspensión del acto reclamado, generalmente no tiene efectos restitutorios. Salvo que se trate de la privación ilegal de la libertad previsto en el tercer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo; es decir, únicamente paraliza o cesa temporalmente el comienzo, desarrollo o consecuencias del acto reclamado, pero no destruye los efectos ya producidos.

De todos estos elementos podemos sacar nuestra propia definición de suspensión en materia de amparo penal indirecto:

La suspensión en materia penal es una institución jurídica creada para que en el juicio de amparo indirecto, el juez competente ordene a la autoridad señalada como responsable, la paralización temporal de la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto por sentencia ejecutoriada, otorgándole efectos restitutorios cuando se trate de privación ilegal de la libertad personal fuera de procedimiento judicial.

3. La naturaleza del acto reclamado en materia penal

Como premisa fundamental de este apartado es necesario asentar qué se entiende por acto reclamado.

Gramaticalmente, el acto reclamado es una conducta de autoridad representate del Estado contra la que el gobernado externa una inconformidad, verbal o escrita, por considerar que le causa un agravio.

De acuerdo a lo sostenido por el doctor en Derecho Carlos Arellano García, "el acto reclamado es la conducta imperativa, positiva u omisiva, de una autoridad estatal, nacional, federal, local o municipal, presuntamente violatoria de garantías individuales o de la distribución competencial establecida entre Federación y Estados de la República, a la que se opone el quejoso".[58]

[58] Arellano García, Carlos, El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, 2ª ed., México, 1983, p. 538.

Consecuentemente, las características esenciales del acto reclamado son las siguientes:

a) Es una conducta imperativa, porque la autoridad estatal crea una regla obligatoria que impone a los gobernados.

b) La conducta del Estado puede ser positiva u omisiva, es decir, puede consistir en un hacer o en una abstención de la autoridad.

c) Al señalarse a una autoridad estatal, se deduce que el amparo sólo procede contra actos de autoridades nacionales y éstas, a su vez, pueden ser federales, locales o municipales.

De lo anterior, podemos afirmar que no todos los hechos jurídicos son susceptibles de suspensión.

Los hechos jurídicos conforme al civilista francés Bonnecase se dividen en dos grandes grupos:

1. Hechos jurídicos en sentido estricto (hechos de la naturaleza), en el que están comprendidos los fenómenos naturales o accidentales que siendo ajenos a la voluntad humana, provocan consecuencias de derecho; por ejemplo: el nacimiento y muerte de una persona, la salida del sol, la lluvia, etcétera; también en esta clasificación introducen los hechos del hombre, pero en los que los efectos jurídicos se producen independientemente y aun contra la voluntad del autor o autores; estos últimos pueden ser, conforme al doctrinario mencionado, en lícitos e ilícitos, por ejemplo, la gestión de negocios de los artículos 1896 y 1909 del Código Civil y el delito de homicidio previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, respectivamente.

2. Los actos jurídicos que están integrados por los hechos efectuados voluntariamente por el hombre con la intención manifiesta de producir consecuencias jurídicas, por ejemplo: el contrato de compraventa entre particulares.[59]

Sin embargo, los actos del hombre, que traen consecuencias de derecho voluntariamente, no solamente son los actos de particulares, sino también los actos de autoridad, que son aquellos que ejecutan las autoridades representantes del Estado, actuando en forma individualizada, por medio de las facultades decisorias y el uso de la fuerza pública y que con base en disposiciones legales o de facto pretenden imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares.[60]

[59] Bonecase, Julien, Introducción á l´etude da droit, 3ª ed., París, 1939.

[60] Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, XIII ed., México, 1999, p. 77.

Esos actos de autoridad, deben ser de autoridades mexicanas, pues las facultades jurisdiccionales tienen un límite territorial; los actos de autoridades extranjeras no son suspendibles, por razón de que las facultades del juez que conoce del amparo tienen un límite jurisdiccional dentro del territorio nacional exclusivamente. Permitir que nuestra Ley de Amparo, establezca un principio de extraterritorialidad, sería atentar contra la soberanía de las naciones, como lo hace la Ley Orgánica del Poder Judicial Español en su artículo veintitrés.

Además los actos de autoridad pueden ser divididos por materia: Penal, Laboral, Civil, Administrativa, Fiscal, Agraria, etcétera. Todos ellos, encuadran en la clasificación de actos de autoridad que clásicamente conocemos.

El destacado amparista mexicano, Eduardo Pallares, mencionaba que desde el punto de vista del tiempo en que se ejecutan, existen los actos pasados, presentes y futuros de inminente ejecución así como futuros probables y los de tracto sucesivo; desde el punto de vista de la situación jurídica, se refería a los actos dentro de juicio y fuera de juicio; desde el punto de vista de la autoridad de la que procede el acto, alude a tribunales federales o a tribunales del orden común; por la conformidad del quejoso, clasificaba los actos en consentidos, no consentidos y actos derivados de actos consentidos; en cuanto a la reparación del daño causado mencionaba los actos reclamados reparables y los no reparables.

Me permito hacer una clasificación de actos para los efectos de la suspensión:

1. Por el momento de ejecución de los actos: pasados o consumados, presentes y futuros. Estos últimos se subdividen en inciertos e inminentes.
2. Por el tiempo de duración del acto: en instantáneos, permanentes o continuos y continuados o de tracto sucesivo.
3. Por sus efectos: en positivos, negativos y negativos con efectos positivos.
4. En cuanto a la reparación del daño causado al gobernado: actos reparables e irreparables.
5. Conforme a su imperatividad: prohibitivos y declarativos.
6. En cuanto a la autoridad que los realiza: actos judiciales y no judiciales; éstos a su vez los clasifico en privativos de libertad personal y no privativos de la libertad personal. Los privativos de libertad personal no judiciales, a su vez, los subdivido en justificados y no justificados por la Constitución Federal. Por último, los actos no judiciales no privativos de libertad personal, los divido en administrativos y legislativos.

GRÁFICA DE HECHOS JURÍDICOS Y ACTOS DE AUTORIDAD

HECHOS JURÍDICOS

I. Hechos de la Naturaleza	Con consecuencias de derecho.	
	Sin consecuencias de derecho.	
II. Hechos del Hombre	Actos sin voluntad en cuanto a los efectos.	
	Actos con voluntad en cuanto a los efectos del acto;	Actos de particulares.
		Actos de autoridades.

ACTOS DE AUTORIDAD

(Penales, Civiles, Administrativos, Laborales, Fiscales, Agrarios, etcétera...)

I. Por el momento de ejecución de los actos	Pasados (Consumados)	
	Presentes	
	Futuros	Inciertos
		Inminentes
II. Por el tiempo de duración del acto.	Instantáneos	
	Permanentes o Continuos	
	Continuados o de Tracto Sucesivo	
III. Por sus efectos.	Positivos	
	Negativos	
	Negativos con Efectos Positivos	
IV. En cuanto a la reparación del daño causado al gobernado.	Actos Reparables	
	Actos Irreparables	

V. Conforme a su imperatividad.	Prohibitivos		
	Declarativos		
VI. En cuanto a la autoridad que lo realiza.	Actos Judiciales	Privativos de Libertad Personal	
		No Privativos de Libertad Personal	
	Actos No Judiciales	Privativos de Libertad Personal	Justificados por la Constitución
			No Justificados por la Constitución
		No Privativos de Libertad Personal	Administrativos
			Legislativos

A continuación se hace un breve análisis de diversos actos reclamados, para los efectos de la suspensión (si son o no suspendibles), algunos de los cuales se clasifican en razón de su naturaleza. Asimismo, citaremos algunas tesis jurisprudenciales relativas a ellos, puesto que ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diferentes épocas quien ha determinado, aplicando la lógica y el sentido común, que actos son suspendibles y cuales no:

3.1. Actos de particulares

Son aquellos que provienen de personas físicas o morales que no integran la estructura del Estado en México; contra estos actos de particulares el juicio de amparo no procede, como se desprende del artículo 103 constitucional y 1º de la Ley de Amparo y consecuentemente, tampoco la suspensión. Esto es, si la suspensión es una medida cautelar o una institución accesoria del juicio de amparo, los actos de particulares no son objeto de suspensión, pues sólo los actos de autoridad pueden serlo, atento a la premisa que obliga a ésta a hacer únicamente lo que la norma le mande, salvo que actúe en su carácter de particular, caso en el que, como todos los particulares podrá realizar todo lo que la ley no les prohíba.

Al respecto se transcribe la tesis de precedente de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX-enero, página 261, bajo el rubro:

SUSPENSIÓN DEL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. Tanto la suspensión provisional como la definitiva, sólo proceden contra actos de autoridades, y no contra actos de particulares; de lo que se sigue que ésta es improcedente cuando tiene por objeto impedir la realización de peticiones o solicitudes que pueda llevar a cabo la contraparte del quejoso, dentro del juicio natural.

Asimismo, existen las siguientes tesis jurisprudenciales, mencionadas por don Genaro Góngora Pimentel y doña María Guadalupe Saucedo Zavala, en su tratado relativo a "La Suspensión del Acto Reclamado": [61]

PERSONA DE DERECHO PÚBLICO Y PERSONA DE DERECHO PRIVADO. CUANDO ACTÚAN COMO ESTA ÚLTIMA, NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE LOS ACTOS. La autoridad, cualquiera que sea, ejerce dos diferentes funciones, a las que corresponden dos aspectos de su personalidad jurídica: la de autoridad propiamente tal, o persona de derecho público, y la de representante de los derechos patrimoniales del Estado, como entidad de derecho privado. En el primer caso legisla, juzga o ejecuta lo legislado o juzgado, y tales actos son susceptibles de suspenderse, porque son de autoridad propiamente tal. En el segundo caso, cuando ejercita derechos patrimoniales, esto es, cuando adquiere o transmite el dominio, contrata, demanda o se excepciona, según le convenga, sus actos se equiparan a los de un particular, por cuanto actúa como persona de derecho civil, y no son susceptibles de suspenderse, porque se reputan actos de igual naturaleza jurídica que si los ejecutara un particular.

SUSPENSIÓN. INVERSIÓN EXTRANJERA. ACTOS DE PARTICULARES. Es cierto que los actos de los particulares no pueden ser objeto de suspensión en amparo, pero sí pueden serlo los actos de autoridad que condicionan o convalidan esos actos de los particulares. De donde se sigue que no podría concederse la suspensión contra los actos de una empresa extranjera que intenta constituir en México una empresa de capital extranjero, pero sí pueden ser objeto de suspensión en amparo los actos de las autoridades pertinentes que autorizan o convalidan esa inversión, de manera que la concesión de la medida haría que los actos de la empresa extranjera, de realizarse, fuesen actos particulares de facto, sin el apoyo ni la convalidación de las autoridades pertinentes; es decir,

[61] Góngora Pimentel, Genaro y Saucedo Zavala, María Guadalupe, La Suspensión del Acto Reclamado, Ed. Porrúa, México 1990, pp. 34 y 35.

no podrían producir los efectos legales que producirían aprobados o convalidados por dichas autoridades.

3.2. Actos pasados o consumados

Se entiende por acto consumado o acto pasado aquél que se ha realizado totalmente, esto es, que ha alcanzado plenamente el objeto para el que fue dictado o ejecutado. Hay actos consumados reparables y otros irreparables. De esta manera, cuando se reclama un acto de autoridad que ya se ha agotado en su integridad, es evidente que la suspensión contra él es improcedente, en ambos casos, puesto que ya no hay materia en la que surta sus efectos; es decir, ya no hay consecuencias que detener. Por ello, es lógico concluir que la suspensión es improcedente tratándose de actos consumados, los cuales sólo pueden invalidarse si son reparables, mediante la sentencia constitucional que restituirá al quejoso en el goce y disfrute de los derechos objeto de las violaciones cometidas en su detrimento por la autoridad responsable. (En materia penal, la ejecución de la privación de la vida y de la mutilación, son ejemplos clásicos de actos consumados irreparables).

ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., 60, diciembre de 1992, II.3º. J/37, pág. 51.

ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.

Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., V segunda parte-2, VI. 2º. J/75, pág. 660.

SUSPENSIÓN. CASO EN QUE PROCEDE CONTRA EFECTOS DE LOS ACTOS CONSUMADOS. Aun cuando se trate de hechos consumados, la suspensión debe concederse respecto de los efectos o actos de ejecución que de ellos se deriven, cuando de no concederla en esos términos, se dejaría sin materia el juicio de garantías.

3.3. Actos presentes

Son aquellos que están sucediendo al momento de la presentación de la demanda. Tratándose de la privación de la libertad, ésta puede ser consumada o pasada, cuando al gobernado ya se le dejó en libertad y posteriormente pide la suspensión; presente, cuando ésta se está ejecutando y futura, cuando existe la posibilidad de que se ejecute esa privación, siendo inminente cuando obedece a un mandato judicial o alguna orden de detención del Ministerio Público en caso urgente, pues existe la plena certeza de que se le va a detener; la certidumbre en la suspensión provisional, también se infiere de la protesta de decir verdad que expresa el quejoso en su demanda (art. 116, fracción IV).

Cuando la privación de la libertad personal es presente, estamos ante un acto permanente o continuo, puesto que esa consumación se prolonga en el tiempo en un solo acto, causando un agravio irreparable.

La suspensión en los actos permanentes o continuos es susceptible de suspensión, por lo que hace al tiempo que falta ejecutarse; atendiendo, desde luego, el interés público y tomando las medidas adecuadas para evitar que se causen perjuicios a terceros o a la sociedad en el caso de la libertad personal (más adelante lo explicamos).

3.4. Actos futuros inminentes y futuros probables

Los actos futuros inminentes, son aquellos cuyo mandamiento ya se ha dictado y su ejecución puede realizarse de un momento a otro, esto es, existe la certeza por realización inmediata o próxima, sin lugar a dudas.

El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que "es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado"; el último supuesto refiere a un acto futuro y, por ende, al encontrarse pendiente su ejecución es procedente la suspensión.

Ejemplo de este tipo de actos en materia penal es la privación de la libertad como consecuencia de un mandato judicial; también cuando la autoridad administrativa, fundada o infundadamente, pretende privar de la libertad al gobernado, advertible por las actitudes de los policías al rondar su domicilio o por la búsqueda que se hace de él; en estos casos como ya se dijo el Juez de Distrito debe

atenerse a la protesta de verdad que exige la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo (si se miente existe una sanción penal por la comisión de un delito, declaraciones falsas ante autoridad judicial, lo que no es aplicable en materia penal en virtud de tratarse de la defensa de un bien jurídico de primer orden, la libertad personal).

También existen actos futuros inciertos o probables. Son aquellos que pueden o no suceder, es decir, son de remota realización, pues no se tiene una certeza fundada y clara de su acontecimiento próximo, verbigracia: "la posibilidad de que la autoridad administrativa expropie un terreno", sin tener prueba alguna; por lo que no procede el amparo en contra de actos futuros inciertos y en consecuencia, tampoco es procedente la suspensión de esos actos. Sin embargo, la orden de detención por parte de autoridades distintas de la judicial, es un acto futuro incierto, si no se prueba lo contrario, pero por disposición expresa del artículo 130, último párrafo, de la Ley de Amparo, siempre se concederá la suspensión.

3.5. Actos instantáneos, permanentes y de tracto sucesivo

Los instantáneos, son aquellos cuya ejecución se agota en un solo momento. La generalidad de los actos se ejecuta de esa manera.

Los permanentes o continuos, son aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, es decir, sus efectos perduran en un lapso de tiempo; por ejemplo la privación de la libertad personal.

La privación de la libertad personal, puede ser ilegal (injustificada) o legal (justificada). Respecto a la primera procede la suspensión, incluso con efectos restitutorios (tercer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo); en los segundos, procede bajo ciertas condiciones y para determinados efectos.

Por actos de tracto sucesivo, se entiende al conjunto de aquellos actos que contienen una unidad de propósito, cuya realización no se agota con la terminación de uno de ellos sino que el agravio continúa momento a momento. También se les llama continuados, pues también se prolongan en el tiempo y, por razón de su naturaleza, difieren de los instantáneos o momentáneos. Si la suspensión se solicita después de que se han ejecutado todos esos actos unitarios, la suspensión es improcedente, por estar en presencia de actos consumados. En cambio, si la suspensión se pide antes de que se ejecuten todos esos actos o hechos que deban realizarse para obtener el fin último, no obstante que ya hayan tenido ejecución otros anteriores, la suspensión respecto de los que no se han ejecutado es procedente, pues sus efectos consisten en evitar o impedir la continuación de la serie o

sucesión. Un ejemplo de éstos es el embargo con intervención a la caja de una negociación, pues se embarga lo que ingresa diariamente hasta garantizar la deuda.

En mi tesis de maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales, titulada "La Suspensión del acto reclamado en el Amparo Indirecto en Materia Penal", expresé que la privación ilegal de la libertad era un acto de tracto sucesivo, sin embargo, reflexionando, me percaté que éste, aun cuando se prolonga en el tiempo, no se actualiza a través de varios actos, sino en uno solo que se prolonga en el tiempo, por lo que en mi concepto, es un acto permanente o continuo.

3.6. Actos reparables e irreparables

Los actos reparables, son aquellos que con dificultad o sin ella pueden restituirse al estado que originalmente guardaban. Respecto a ellos la suspensión es procedente bajo determinadas condiciones y circunstancias.

Los irreparables, son aquellos que de ninguna manera pueden restituirse, es decir, volver al estado que guardaban.

Respecto de ellos, procede la suspensión siempre y cuando el acto no se haya consumado. De ahí la exigencia que en estos casos la suspensión proceda de oficio y de plano, conforme al artículo 123 de la Ley de Amparo.

3.7. Actos positivos, negativos y negativos con efectos positivos

Los actos positivos, consisten en la actividad autoritaria que se traduce en la decisión de un hacer o en la ejecución de esa determinación, y que el quejoso considera violatorio de sus garantías individuales, ya porque a través de él se le haya impuesto una obligación de hacer o de no hacer, se le haya privado de un derecho o se le haya causado una molestia. La suspensión sólo opera contra los actos de autoridad que sean de carácter positivo y se concede para el efecto de que no se realicen, que se mantengan las cosas en el estado que guardan o para que no se produzcan nuevas consecuencias jurídicas (salvo que se trate de privación de la libertad personal).

Actos negativos

Son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a conceder al gobernado su petición. También se consideran actos negativos aquellos en los que la autoridad responsable no resuel-

ve, es decir, adopta una conducta de omisión o abstención. Respecto de los actos negativos no procede la suspensión, porque no es susceptible detener o frenar lo que no tiene un principio de ejecución. La omisión, la abstención o la negación, aunque son conductas que se actualizan en la realidad jurídica, se traducen en un no querer o no aceptar, esto es, en abstenerse de hacer algo, de tal suerte que la suspensión de esa omisión sólo podrá traducirse en ordenar que se acepte o que ejecute algo en relación a la petición del particular; sin embargo, con tal proceder se estaría restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que es propio de la sentencia que decide el fondo del asunto.

Al respecto, el artículo 80 señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

En relación con los actos negativos, citaremos las siguientes tesis jurisprudenciales que don Genaro Góngora Pimentel y doña María Guadalupe Saucedo Zavala, comentan en su tratado "La Suspensión del Acto Reclamado".[62]

> **LICENCIAS, NEGATIVAS DE**. Si el acto reclamado se hace consistir en la negativa de la autoridad administrativa correspondiente, para extender licencia para que los quejosos abran sus comercios, debe negarse la suspensión por tratarse de un acto negativo, que aun cuando tiene efectos positivos consistentes en impedirle esa apertura, no puede suspenderse por virtud de que a través de esta medida no puede autorizarse la apertura sin licencia respectiva, por no ser esa, atribución de la autoridad judicial.
>
> Informe 1937. Primera Sala, Jurisprudencia, pág. 108.

> **SUSPENSIÓN. ACTOS QUE NO SE PRETENDEN EJECUTAR**. Si las autoridades responsables afirman que no van a ejecutar los actos reclamados de desposeimiento, o que no les corresponde hacerlo, no se ve qué perjuicio legal les pueda causar el otorgamiento de la suspensión, ni se ve qué urgencia pueda tener el interés público en que se ejecuten actos que las autoridades dicen que no pretenden ejecutar.
>
> Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Séptima Época, Volumen 88, sexta parte, pág. 81.

[62] Góngora Pimentel, Genaro y Saucedo Zavala, María Guadalupe, ibidem, p. 21.

Actos negativos con efectos positivos

Existen actos negativos, pero con efectos positivos, es decir, son aparentemente negativos, pero con efectos de actos positivos porque sus efectos sí imponen obligaciones o privan de un derecho al particular. En estos casos sí opera la suspensión.

> **ACTOS NEGATIVOS. CASOS EN QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CONTRA LOS.** Continuando vivas las obligaciones del demandado de ministrar alimentos a sus familiares antes dichos, mientras no se resuelva el juicio constitucional, obligación que se traduce en un pago que constituye un hecho positivo y que es susceptible de suspensión, la sentencia reclamada de efectos negativos aparentes, los produce en la realidad positivos con la continuación de la secuela procesal determinada por la promoción del amparo, y así procede conceder la suspensión para que tal pensión alimenticia pueda seguirse suministrando a la quejosa y a sus menores hijos.[63]
>
> Informe 1963. Tercera Sala. Quejas. Pág. 53.

Por lo que hace a los actos negativos con efectos positivos, existe la tesis de Jurisprudencia número 25, de la Primera Sala, Apéndice 1985, Parte VIII, Sección Común, página 47, bajo el rubro:

> **ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN.** Si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la Ley de Amparo.

Asimismo, tiene relación con los actos positivos, la tesis de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LIII, visible en la página 205, bajo el rubro:

> **ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS.** La prohibición de una autoridad administrativa, para que el poseedor de una finca de campo extraiga de ella determinadas cosas, tiene la apariencia de acto negativo, pero produce efectos positivos, y la suspensión debe concederse, si se ignora si existe motivo de interés general que funde la orden de la autoridad responsable, en virtud de no haber rendido el informe previo.

[63] Góngora Pimentel, Genaro y Saucedo Zavala, María Guadalupe, ibidem, p. 21.

Desde luego, hay que cuidar que la concesión de la suspensión conserve la materia del amparo.

Un ejemplo en materia penal es la negativa a la libertad provisional bajo caución; sin embargo, en este caso, de concederse la medida se dejaría sin materia al amparo, de ahí que algunos consideran que no debe concederse la suspensión; pero otros opinan que con fundamento en el artículo 130, párrafo segundo y 136, párrafo primero de la Ley de Amparo, debe concederse para el efecto de que quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar donde se encuentre por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez de la causa, por lo que hace a la continuación del procedimiento, efecto que no dejaría sin materia al amparo.

> **LIBERTAD PERSONAL, SUSPENSIÓN DE SU RESTRICCIÓN (LIBERTAD CAUCIONAL).** No se trata de concederle al quejoso el beneficio a que se refiere la fracción I del artículo 20 constitucional, es decir, el de la libertad caucional, si se está dentro de lo previsto por el artículo 136 de la Ley de Amparo que dispone que: si el acto reclamado afecta a la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en "lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal, por lo que hace a la continuación de éste", pero como esta Sala lo ha resuelto en varias ejecutorias, al concederse la orden de suspensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable, si no se le concediera el amparo, entre las que se encuentran el otorgamiento de fianza: la obligación del quejoso de presentarse ante el juez de la causa cuantas veces lo estime conveniente, y hacerlo vigilar por la policía.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Quinta Época, Tomo XCIX, visible en la pág. 575.

Tampoco procede la libertad bajo caución solicitada al juez de amparo, si el ordinario ya se pronunció, conforme lo establece el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo.

> **LIBERTAD PROVISIONAL, NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL AMPARO SI LA NEGATIVA DE LA MISMA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.** Si el beneficio de la libertad provisional bajo caución le fue negado al quejoso por la autoridad judicial responsable y constituye uno de los actos reclamados en la acción constitucional, el Juez Federal no puede en el incidente de suspensión conceder el mencionado beneficio pues ello implicaría

pronunciarse en relación a cuestiones que son materia de examen en el fondo del juicio de garantías.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., XV-II febrero, VI 1. 55P, pág. 400.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. SI EL QUEJOSO NO LA HA SOLICITADO ANTE EL JUEZ NATURAL. EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA CONCEDER LA. El Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto, del artículo 136, de la Ley de Amparo, tiene facultad para otorgar al quejoso el beneficio de libertad provisional bajo caución dentro del incidente de suspensión, pero el ejercicio de esta facultad sólo procede cuando el órgano jurisdiccional responsable no se ha pronunciado sobre el particular, porque no se le solicitó ese beneficio, pues de lo contrario los jueces de amparo invadirían una función que compete al juez natural por mandato expreso de la Constitución.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., XI-febrero, pág. 276.

LIBERTAD CAUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, NO PROCEDE OTORGARLA AL JUEZ DE DISTRITO, SI FUE NEGADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). La facultad reservada a los Jueces de Distrito por el artículo 136, párrafo cuarto de la Ley Normativa del Juicio de Garantías, para conceder la libertad bajo caución en los incidentes de suspensión, está sujeta a las condiciones que para tales casos señalan las leyes federales o locales aplicables al delito imputado al quejoso. En términos del artículo 121, del Código Penal del Estado de Querétaro, dicho beneficio no es procedente otorgarlo en el juicio de amparo, ya que el precepto legal en comento del código local, en su último párrafo, establece claramente que la libertad provisional bajo caución, en los casos en que el delito exceda de cinco años de prisión en su término medio aritmético, no constituye un derecho del reo, sino una facultad potestativa del órgano jurisdiccional; de manera que en este caso, la libertad provisional bajo caución, al estar reservada al órgano jurisdiccional instructor del proceso, por ser una facultad potestativa de éste y no un derecho del reo, no es factible que el juez de amparo encargado del control constitucional, conceda tal beneficio, porque de hacerlo se sustituiría en una facultad exclusiva del juez de instancia, con lo que atentaría contra la técnica del juicio de garantías.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., XI- marzo, pág. 310.

3.8. Actos prohibitivos

Se entiende por actos prohibitivos aquellos que establecen una obligación negativa para los particulares o una limitación a su conducta. Sin embargo, no se debe confundir a los actos negativos con los prohibitivos, pues los primeros implican una abstención, un no hacer, una negativa de la autoridad recaída a la petición o solicitud de una persona; los segundos son un hacer positivo consistente en imponer obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados por parte de las autoridades. Es procedente la suspensión de actos de la autoridad responsable que tienen carácter prohibitivo y el efecto de la suspensión consiste en que el gobernado pueda realizar la conducta prohibida.

Tienen relación con estos actos, los precedentes de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCI, página 2501, bajo el rubro:

> **ACTOS PROHIBITIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LOS**. Aunque en la Ley de Amparo no se encuentra disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio de la Suprema Corte ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque la misma paraliza y detiene, mientras se tramita el amparo, la acción de la autoridad responsable, y si se concediera la suspensión contra actos prohibitivos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban antes de dictarse la prohibición, lo cual sólo es propio de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo de amparo.

De igual forma, existen los precedentes de Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 75, Parte Sexta, página 60, bajo el rubro:

> **SUSPENSIÓN. ACTOS PROHIBITIVOS**. Aunque es cierto que la suspensión no procede contra actos negativos ni contra abstenciones, porque ello equivaldría a darle efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función es únicamente la de conservar la materia de amparo, también es cierto que no se deben confundir los actos negativos con los actos prohibitivos. El acto prohibitivo implica una orden o conducta positiva de la autoridad, tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Ahora bien, respecto de los actos prohibitivos, la procedencia de la suspensión debe

examinarse en cada caso particular, sopesando cuidadosamente, por una parte, el interés del particular en realizar la conducta prohibida y por otra, el interés de la autoridad en impedirla, así como las con-secuencias o perjuicios que a cada uno de esos intereses se puede seguir de la concesión o negativa de la suspensión. Así, cuando se trata de una conducta permanente o reiterada del particular, la sus-pensión en principio es procedente, si el perjuicio que puede sufrir con la prohibición es legalmente mayor que el perjuicio que puede seguirse al interés de las autoridades con la realización temporal de la conducta prohibida. Y cuando se trata de una conducta que pue-de quedar consumada en forma más o menos breve o instantánea, habrá que determinar, de la misma forma y sopesando los elementos que se tienen a mano en el incidente, cuál es el daño mayor a un interés legítimo. En estos casos, hay situaciones en las que al conceder la suspensión, lo mismo que al negarla, se dejará sin mate-ria el amparo en cuanto al fondo, y cuando el juzgador se enfrenta a esta situación no puede aplicar la regla de que en el incidente no se debe prejuzgar sobre cuestiones de fondo, pues ello será lógicamente y legalmente imposible (ya que de una manera o de otra ya sea que niegue o conceda la suspensión, dejará sin materia el fondo del negocio). Así, en el ejemplo de la prohibición para celebrar un acto en una fecha y hora determinadas, si se niega la suspensión, el amparo puede quedar sin materia, lo mismo que si se concede la suspensión. En tales casos, el juzgador tendrá que prejuzgar en el incidente, con los elementos que tenga a mano, sobre el fondo de la pretensión y sobre la constitucionalidad de los actos, así como sobre los daños que puede sufrir el interés particular legítimo y su irreparabilidad, y sobre el diverso interés legítimo de las autori-dades, en relación con el interés social, para conceder o negar la suspensión solicitada.

3.9. Actos declarativos

Son aquellos actos de autoridad que sólo se concretan a reconocer una situación preexistente, sin introducir ninguna modificación o alteración; en ellos la autoridad se concreta a manifestar la existencia de derechos u obligaciones, sin extinguirlos, sin modificarlos y sin transmitirlos. Contra ellos la suspensión no procede. En cambio, cuando el acto trae aparejada una consecuencia jurídica positiva sí opera la suspensión.

Tienen relación con los actos declarativos, las siguientes tesis de jurisprudencia:

SUSPENSIÓN, PROCEDENCIA DE LA, CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DECLARATIVOS. Aun cuando la reso-

> lución reclamada tenga el carácter de declarativa, lo que haría improcedente la concesión de la medida suspensional, lo cierto es que ello ocurre cuando el acto declarativo se agota con su emisión; lo que no ocurre cuando produce consecuencias jurídicas, como puede ser, entre otras, un acto desposesorio, y la suspensión procede respecto de estas consecuencias.[64]

Asimismo, existen los precedentes del Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXII, página 283, y de la Primera Sala, Apéndice 1985, Parte VIII, Sección común, tesis 17, página 36, bajo los rubros:

> **ACTOS DECLARATIVOS**. Los actos meramente declarativos no pueden causar perjuicio alguno, mientras no se traduzcan en hechos positivos, y, por tanto, contra los mismos, es improcedente conceder la suspensión.

> **ACTOS DECLARATIVOS.** Cuando los actos declarativos llevan en sí mismos un principio de ejecución, procede contra ellos la suspensión en los términos de la ley.

3.10. Actos legislativos

El artículo 103 constitucional se refiere a "leyes" o "actos". A su vez, el artículo 1º de la Ley de Amparo reproduce a aquél.

La ley es un acto jurídico, pues entraña una manifestación de voluntad, que se hace con el fin lícito de producir efectos de derecho.

Un acto es legislativo desde el punto de vista formal cuando procede del Poder Legislativo. Desde el punto de vista material es legislativo cuando crea, transmite, modifica o extingue situaciones jurídicas generales, abstractas, e impersonales, independientemente de que emane de cualquiera de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Respecto a estos actos, procede la suspensión contra los efectos de las leyes, ya sean autoaplicativas o heteroaplicativas. Los primeros son aquéllos que con su sola expedición originan la infracción prevista en el precepto constitucional en perjuicio de una persona o de varias determinadas, sin que sea necesario la comisión de un acto concreto que la aplique para afectar una situación particular; las heteroaplicativas, sólo producen afectación a través del acto concreto de aplicación correspondiente. En ambos casos lo único que puede suspenderse es el acto concreto de aplicación que simultáneamente se

[64] Góngora Pimentel, Genaro y Saucedo Zavala, María Guadalupe, ibidem, p. 44.

combata en amparo, si de acuerdo con su naturaleza es susceptible de paralizarse. La distinción entre unas y otras, consiste en que las autoaplicativas son impugnables en amparo a partir de su vigencia sin que se requiera de un acto de aplicación, ya que la persona que la impugna tiene interés jurídico, porque con la sola iniciación de vigencia de la norma jurídica, ve la afectación a sus derechos; en cambio, las heteroaplicativas no son impugnables hasta que se realiza el acto de aplicación correspondiente, pues hasta ese momento, el quejoso adquiere el interés jurídico exigido para la procedencia del amparo.

Desde luego, la ley es una especie de la norma y, por tanto, debe de hablarse de amparo contra normas y no "contra leyes".

El ministro, don Genaro Góngora Pimentel en su libro La suspensión en materia Administrativa,[65] señala: Por ejemplo, en un juicio de amparo entablado contra una ley, por estimarla violatoria de garantías, se solicita la suspensión de los actos reclamados. Si la ley ya fue publicada y entró en vigor, contra los actos de formación de una ley no procederá conceder la suspensión por ser actos consumados, pero si respecto de sus efectos, que serán la aplicación que se haga de la misma al quejoso. Esto es así, porque la suspensión en materia de amparo, tiene por objeto, en principio impedir la ejecución del acto reclamado, en aquellos casos en que de efectuarse dicha ejecución, se ocasionen al quejoso perjuicios de difícil reparación o bien el acto se consuma, de manera irreparable, haciendo nugatoria la protección constitucional, en el caso de que el quejoso obtuviera sentencia favorable, en cuanto al fondo, en el expediente principal; en consecuencia, cuando los actos formadores de la ley, expedición y publicación, ya se llevaron a cabo, son indudablemente actos formadores de la ley, expedición y publicación. Son indudablemente actos consumados y la suspensión que de ellos se solicite debe negarse, porque carece de objeto, pues no puede impedirse que se ejecute lo que ya está ejecutado, ya que la suspensión, en principio, no tiene efectos restitutorios. Pero, los actos reclamados: expedición, refrendo y publicación de la ley así como de la aplicación que de ella hagan las responsables, no pueden considerarse consumadas en su totalidad, pues la ley no se aplica todavía a quien solicitó el amparo, o bien el amparo se ha solicitado dentro del plazo de quince días contados a partir del primer acto de aplicación y estos son los efectos o consecuencias de la ley susceptibles de

[65] Góngora Pimentel, Genaro, La Suspensión en Materia Administrativa., Ed. Porrúa, México, 1996, pp. 37 y 38.

paralizarse, pues es indudable que si aceptara el criterio, todas las resoluciones que se reclamaran en la vía de amparo, por el sólo hecho de dictarse, se deberían estimar como actos consumados, lo que impediría en todos los casos obtener la suspensión, pues en realidad, lo que se reclama, son las consecuencias o efectos que producen esas disposiciones legales, que es lo que debe entenderse reclamado aun cuando no se diga expresamente.

3.11. Actos privativos de libertad personal

Son aquellos que afectan la libertad personal del gobernado; entendiéndose la privación de la libertad personal, como aquella que causa un agravio a la libertad física o corporal del individuo. La que limita a las personas a no salir de un espacio territorial específico y que no les permite realizar las actividades normales de todo individuo en su comunidad para su interrelación y sobrevivencia.

La libertad en general del hombre se extiende a todo tipo de libertad, la de tránsito, de audiencia, la política, de asociación, etcétera, incluyendo la personal, la que protege el artículo 14 segundo párrafo y 16, en sus seis primeros párrafos, ambas de la Constitución Federal, al establecer respectivamente: "Nadie podrá ser privado de… la libertad…; nadie puede ser molestado en su persona…"

> ARTÍCULO 14.—…
>
> "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…"
>
> ARTÍCULO 16.—"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
>
> No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
>
> La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

> En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
>
> Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
>
> En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
>
> Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal…"

Para ilustrar al lector lo que significa la privación de la libertad personal hago la siguiente narración:

Mario Moreno "Cantinflas" en la película "Patrullero 777" al tratar de resolver como policía el robo de una cartera del anfitrión de una fiesta de amigos, cierra la puerta del salón y les dice a los invitados que alguno de ellos es el ladrón y que apagaría la luz para que quién tuviera la cartera la dejara en el piano y así no enfrentaría cargos con la justicia… un invitado de oficio periodista se indigna y le grita al policía (Cantinflas) "¡oígame! ¿Que se está creyendo?… ¡Usted no sabe con quien está tratando!… ¿No sabe lo que es el cuarto poder?… —Cantinflas le responde— ¿Y usted no sabe lo que es no poder salir del cuarto?

Eso es la privación de la libertad personal, no poder salir de un espacio territorial determinado, que impida realizar sus actividades sociales y de todo tipo, normalmente, y no como desafortunadamente se considera en la tesis por contradicción bajo el rubro "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE DE ESTUDIARSE AUN CUANDO EL PETICIONARIO DE GARANTÍAS LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN."

Las libertades del hombre, incluyendo la personal, puede ser privada, es decir, menoscabada, reducida, suprimida (cuando se está ejecutando el acto), o bien afectada, cuando existe la amenaza latente o inminente de ser menoscabada, reducida o suprimida (un acto futuro inminente.—La orden de aprehensión por ejemplo).

La orden de comparecencia y el auto de sujeción a proceso en mi concepto no afecta ni priva la libertad personal, la orden de aprehensión y el auto de formal prisión sí.

3.12. Actos no privativos de libertad personal

Son aquéllos que afectan cualquiera de las libertades, pero no la personal o corporal.

Los efectos de la suspensión en los actos no privativos de la libertad personal, sean judiciales o no judiciales, deben decretarse conforme lo establece la Ley de Amparo como regla general: "que las cosas se mantengan en el estado que guardan".

Así podemos elaborar una clasificación de los actos penales objeto de la suspensión. Aquellos en los que procede la suspensión de oficio y otros de los que procede la suspensión a petición de parte.

Procede la suspensión de oficio contra actos de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como actos que de consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada.

La suspensión a petición de parte, por exclusión, procede respecto a los demás actos, que en lo particular las clasifico en judiciales y éstos a su vez en privativos de libertad personal (los que ordenan la aprehensión de una persona por mandato judicial) y no privativos de libertad personal. Los no judiciales privativos de libertad, los clasifico en justificados e injustificados por la Constitución Federal; los primeros son aquellos ejecutados por autoridades distintas a las judiciales, con motivo de la comisión de un delito en flagrancia o urgencia; los segundos, son aquéllos que se encuentran fuera de esos casos.

		Privación de la vida Deportación y destierro.			
	Suspesión de oficio.	Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.	Mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormentos, confiscación de bienes, multa excesiva, penas inusitadas y trascendentales.		
		Otros actos de imposible reparación.			
ACTOS PENALES		Actos judiciales	Privativos de libertad personal.		Pasados. Presentes. Futuros.
			No privativos de libertad personal.		Pasados. Presentes. Futuros.
	Suspesión a petición de parte.	Actos no judiciales o de autoridades distintas a las judiciales	Privativos de libertad personal.	justificados. injustificados.	Pasados. Presentes. Futuros.
			No privativos de libertad personal.	Pasados. Presentes. Futuros.	

CAPÍTULO V

PROCEDENCIA, TRÁMITE Y EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL

SUMARIO: 1. La suspensión conforme a la Ley de Amparo. 2. La suspensión de oficio. 3. La suspensión a petición de parte. 3.1. Trámite y requisitos. 3.2. Efectos de la suspensión. 3.3. Suspensión por hecho superveniente. 4. Suspensión provisional. 5. La suspensión definitiva. 6. La suspensión del acto reclamado privativo de libertad. 7. Suspensión de la privación de la libertad fuera del procedimiento judicial. 8. La suspensión tratándose de privación de la libertad dentro de un procedimiento judicial (acto futuro). 8.1. Auto de radicación normal (principal). 8.2. Suspensión provisional de la orden de detención de autoridades administrativas (acuerdo incidente). 8.3. Incomunicación. Suspensión de plano cuando se reclama además la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial (expediente principal auxiliar). 8.4. Acuerdo de suspensión provisional en el incidente de suspensión, cuando además de la incomunicación se reclama la privación de la libertad no judicial. 8.5. Auto de radicación. Orden de detención consumada por parte de autoridades no judiciales, sin que se reclamen los otros actos del artículo 17 de la Ley de Amparo (expediente principal). 8.6. Suspensión provisional de orden de aprehensión de juez no consumada (incidente). 9. Consideraciones personales, en torno a la suspensión en materia penal.

1. LA SUSPENSIÓN CONFORME A LA LEY DE AMPARO

Antes de entrar al tema, conviene recordar que aunque el juicio de amparo indirecto se tramita ante un Juez de Distrito, en casos excepcionales también puede tramitarse ante los jueces de instancia o el superior del Tribunal responsable, cuando se está en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se aleguen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 16, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal.

05_Capítulo_05 Ojeda.p65 443 23/04/2013, 12:19

En consecuencia, el Juez de Distrito o el superior del juez de primera instancia que comete la violación, dentro del límite de sus facultades, pueden conceder la suspensión de los actos reclamados o negarla.

Asimismo, existe la jurisdicción auxiliar, que se deposita en los jueces de primera instancia si no existe Juez de Distrito en el lugar, o cualquier autoridad judicial que ejerza jurisdicción en el lugar, si en él no existe juez de primera instancia; en este caso, el juez común está facultado para recibir la demanda de amparo y suspender el acto reclamado por el término de 72 horas, el cual podrá ampliarse en razón a la distancia que exista entre el lugar de la ejecución del acto y la residencia del Juez de Distrito, atento el artículo 38.[66]

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 122 la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto procede decretarse de oficio o a petición de la parte agraviada. Dicho artículo expresa:

> ARTÍCULO 122.—"En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo."

2. LA SUSPENSIÓN DE OFICIO

La suspensión de oficio es aquélla que concede el juez de amparo, sin que previamente exista ninguna gestión del quejoso solicitando su otorgamiento.[67]

El numeral 123 de la ley de la materia, señala los casos en los que procede la suspensión de oficio y son los siguientes:

a) Cuando se reclamen actos que impliquen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal: mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormentos, multa excesiva, confiscación de bienes, penas inusitadas y trascendentales (nótese que se trata de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, con excepción de la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial), y

b) Cuando se reclamen actos que de consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía indi-

[66] Efraín Polo, Bernal, Los Incidentes en el Amparo, Limusa Noriega Editores, México, 1994, p. 25.

[67] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 720.

vidual reclamada. En esta hipótesis no se encuentra la privación de la libertad personal, pues los efectos de la suspensión en ese caso los señala específicamente el artículo 136 de la Ley de Amparo, además de que lo establecido en los artículos 18, 38 y 130 revelan que debe formarse incidente, ya que aluden a la suspensión definitiva.

Un ejemplo de un acto de imposible reparación físicamente que soporte los efectos de que las cosas se mantengan en el estado que guardan conforme a la fracción II del citado artículo 123, es la destrucción de una obra de arte o la orden de ejecución de un animal por parte de la autoridad sanitaria.

Por tanto, para la procedencia de la suspensión de oficio el Juez de Distrito debe atender dos circunstancias:

a) La naturaleza del acto reclamado, la cual debe ser tal que implique gravedad en los efectos de su ejecución para el quejoso, y

b) La necesidad de conservar la materia del amparo. Debe evitarse la ejecución del acto, para que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada.

Se advierte que el elemento que determina la procedencia de la suspensión de oficio es la imposibilidad material o física de reparar la violación a la garantía individual en que incurra la autoridad responsable; dejando al arbitrio del juzgador apreciar cuándo se trata de actos cuya ejecución, de consumarse, haría imposible la restitución al agraviado del goce y disfrute de la garantía individual violada.

Asimismo, el citado artículo 123 en su fracción II, párrafo segundo, señala que la suspensión de oficio se decretará de plano en el mismo auto admisorio de la demanda o que la tenga por recibida y debe comunicarse de inmediato a la autoridad responsable para su cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica.

Como se puede advertir, de acuerdo a esta disposición no se forma incidente por separado del expediente relativo al fondo del amparo y, por ende, en la suspensión de oficio no existe suspensión provisional ni definitiva. Se formará incidente si además de los actos irreparables se reclaman otros reparables.

Por otra parte, el artículo 123 en comento, en su último párrafo señala que los efectos de la suspensión de oficio o de plano, consisten en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, que permitan la deportación o el destierro del quejoso, o bien la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y respecto a los actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía

individual violada, la suspensión surtirá los efectos de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Por tanto, aun cuando en mi concepto la privación de la libertad personal sea un acto de imposible reparación, no podemos considerarlo en la segunda hipótesis por los efectos señalados, que las cosas se mantengan igual, cuando la propia Ley de Amparo en su artículo 136 señala específicamente los efectos de la suspensión tratándose de actos privativos de la libertad personal.

De los actos señalados en el artículo 123 es necesario reflexionar en relación a la deportación, destierro, multa excesiva y confiscación de bienes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados han hecho interpretaciones al respecto.

La antigua Suprema Corte de Justicia interpretó que en contra de las disposiciones de la Ley de Migración la suspensión es improcedente. Estableció los siguientes criterios:

> MIGRACIÓN. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. La sociedad está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones de la Ley de Migración, por lo que contra la aplicación de tales disposiciones no procede la suspensión.
>
> Pleno, Quinta Época, Tomo III, parte HO, tesis 1224, pág. 964.
>
> MIGRACIÓN. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN EN CASO DE APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Si el acto reclamado se basa en los artículos 49 de la Ley de Migración y relativos del acuerdo restrictivo de la materia, que tienen como finalidad proteger, en condiciones iguales a los nacionales sobre los extranjeros, procede, de acuerdo con la fracción I interpretada contrario sensu, del artículo 55 de la Ley de Amparo, negar la suspensión definitiva de dicho acto, porque de otorgarse, la sociedad y el Estado sufrirían perjuicios, por el interés que tienen en la aplicación, sin demora, de las leyes de migración y, por tanto, no se cumpliría una de las condiciones que para la legal procedencia de la suspensión, establece el precepto legal invocado.
>
> Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, pág. 3196.
>
> MIGRACIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE APLICACIÓN DE LA LEY DE. La sociedad está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones de la Ley de Migración, hoy de población, y, por tanto, contra la aplicación de tales disposiciones, no procede la suspensión, en consecuencia, esto debe de negarse contra la resolución de la Secretaría de Gobernación sobre nulidad de la declaración de inmigrado del quejoso que se le reconoció

anteriormente otorgándosele la tarjeta correspondiente, puesto que de concederse, se seguirán perjuicios al interés general, por tratarse del cumplimiento de leyes que regulan la permanencia de los extranjeros en el país, y fijan entre otras condiciones, las necesarias para adquirir el carácter de inmigrado; sin que los perjuicios que se puedan seguir al quejoso con la ejecución del acto recla-mado, sean de difícil reparación, supuesto que si obtiene el amparo, quedará sin efecto la revocación de la declaración de inmigrado; de manera que la anotación que se lleva a cabo en los documentos de aquél, por el departamento demográfico de la dirección general de población, no le eroga perjuicio alguno.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, pág. 3240.

Las anteriores tesis, desde mi punto de vista son discutibles, pues son contrarias a la Ley de Amparo, ya que ésta es categórica y ordena al juez federal suspender de plano y de oficio el acto de deportación (artículo 123); sin embargo, revelan que en la práctica resulta inconveniente pronunciarse de plano, en la misma pieza de autos, cuando se reclama la deportación, puesto que pueden resultar actos diversos de las autoridades de migración y, por ende, lo conveniente es abrir el incidente de suspensión, pedir los informes previos y resolver conforme a ellos.

Por otro lado, si bien el interés público está de por medio, cada caso concreto debe analizarse e interpretarse en torno a ese interés. Es muy común que los jueces de Distrito apoyados en la tesis de rubro "MIGRACIÓN, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE" nieguen la suspensión cuando se reclama deportación; sin embargo, como ya se dijo, considero que es correcto que proceda la suspensión de oficio, pero no decretarla de plano, ya que en estos casos debería tramitarse en la vía incidental, para cerciorarse si en verdad se trata de una deportación o de otra medida administrativa. Existe una tesis cuyo criterio comparto, que reza:

EXTRANJEROS. SUSPENSIÓN. LA JURISPRUDENCIA QUE SE IDENTIFICA CON EL RUBRO DE MIGRACIÓN SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE, NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE QUIENES HAN ESTADO RESIDIENDO ILEGALMENTE EN EL PAÍS, SI NO SE DEMUESTRA QUE SU ACTIVIDAD LESIONA LOS INTERESES DE LOS NACIONALES O DE LA SOCIEDAD. Del estudio de los precedentes que forman la jurisprudencia número 136 visible en la página 193 de la novena parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985 con el rubro de "MIGRACIÓN. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE", se viene al conocimiento que los

actos que se reclamaron en dichos precedentes fueron la detención del quejoso en el hospital para ser reembarcado por no traer sus pasaportes en regla y el impedir a los quejosos entrar en el puerto de Ensenada manifestándose en los considerandos de las respectivas ejecutorias el evitar que entren a la República personas que pueden ser prófugas de la acción de la justicia en otros países y en general malos elementos transtornadores del orden público, toda vez que la sociedad está interesada en que se cumplan con toda exactitud de las prevenciones legales de la Ley de Migración que tiendan a evitar que penetren al país personas que puedan entrañar algún perjuicio para la colectividad por lo que contra la aplicación de tales disposiciones no procede la suspensión. En tal virtud el a quo evidentemente negó apoyándose en esta jurisprudencia la suspensión provisional solicitada por el quejoso, si en primer lugar, éste no pretende penetrar al país, pues ha estado residiendo legalmente en él en calidad de inmigrante, y el acto reclamado por el cual se le niega el cambio de calidad migratoria de inmigrante a inmigrado, lo constriñe a un plazo de 90 días para solicitar nueva permanencia en el país como inmigrante o en su defecto abandonarlo en el mismo plazo. En consecuencia, si de la situación que prevalece en el incidente no se desprende dato alguno por el que se advierta por la actividad a que se dedica el propio quejoso (inmigrante con el carácter de rentista) de alguna manera se lesione con su permanencia en el país los intereses económicos de los nacionales o se perjudique a la sociedad con su propia estancia, se colige que en forma contraria a lo estimado por el juez de amparo, sí se satisfacen los requisitos exigidos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión provisional por los efectos y consecuencias del acto combatido.

Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 sexta parte, pág. 224.

Por otra parte, cuando el acto reclamado se hace consistir en multa excesiva o confiscación de bienes no debe concederse la suspensión de plano con el solo dicho del quejoso, sino que es necesario alguna prueba documental que indique que efectivamente se trata de esos actos, puesto que puede tratarse de una simple multa o de algún embargo o expropiación de bienes.

A continuación se transcriben las siguientes tesis que afirman lo anterior (los conceptos de pena inusitada y trascendental, multa excesiva y confiscación de bienes, ya fueron tratados en el capítulo I).

SUSPENSIÓN DE OFICIO. No basta para decretarla, que el quejoso afirme que se trate de un caso prohibido por el artículo 22

de la Constitución, sino que es preciso examinar si, efectivamente, el caso está comprendido o no, en dicho precepto constitucional.

Pleno, Quinta Época, Tomo II, parte HO, tesis 1006, pág. 630.

MULTA EXCESIVA. No puede decirse que una autoridad haya impuesto una multa excesiva y violado el artículo 22 constitucional, si no existe base para conceptuar así dicha multa.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, pág. 1077.

COMENTARIO: Tanto la deportación, el destierro, la multa excesiva como la confiscación de bienes, por sus características (actos de difícil reparación) deberían tramitarse incidentalmente, a petición de parte, por las mismas razones que se dan respecto a la deportación, con independencia de que proceda de oficio. Habría que modificar la ley.

Los tribunales deberán analizar la demanda de amparo y si no existe prueba fehaciente que acredite que efectivamente se trata de una deportación, confiscación o multa excesiva, no tienen por qué conceder la suspensión de plano, es decir, en la misma pieza de autos; lo prudente será ordenar abrir el incidente de suspensión para su trámite, exista o no solicitud de suspensión.

3. LA SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE

Cuando no se trate de alguno de los casos a que se refiere el artículo 123, el quejoso debe solicitar la suspensión, como lo dispone el precepto 124, fracción I, que establece:

ARTÍCULO 124.—"Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que lo solicite el agraviado…"

Por su parte, el numeral 130 menciona dos tipos de suspensión cuando se tramita a petición de parte agraviada y en vía incidental, la provisional y la definitiva, mismas que serán objeto de estudio en apartados subsecuentes.

Tratándose de la privación de la libertad personal debe solicitarse la suspensión, puesto que, como ya se explicó, no se contempla en la de oficio y por tanto debe tramitarse el incidente. Algunos opinan que la privación de la libertad personal que se está realizando encuadra en la fracción II del artículo 123, porque de consumarse

haría físicamente imposible restituir al quejoso en su garantía violada; sin embargo, no es aceptable que los efectos para este caso sean el de dejar las cosas en el estado que guardan, como lo establece el propio precepto; por tanto, esa hipótesis no se legisló pensando en la privación de la libertad personal. El artículo 18 de la Ley de Amparo lo corrobora, al señalar que cuando se trata de actos a que se refiere el artículo 17, si no se logra la comparecencia del agraviado, se suspenderá el procedimiento en lo principal después de resolver en definitiva sobre la medida cautelar. Uno de esos actos, es la libertad personal fuera de procedimiento judicial.

3.1. Trámite y requisitos

Conforme al artículo 142 de la Ley de Amparo, el expediente relativo al incidente de suspensión se lleva siempre por separado y duplicado, en virtud de que en el caso de que se interponga recurso contra la resolución dictada en el incidente, el Juez de Distrito remitirá el expediente original a la autoridad judicial que debe conocer de la revisión y dejará el duplicado en el juzgado de Distrito para continuar actuando.[68]

Los requisitos que debe cumplir el quejoso para que proceda la medida suspensional se encuentran señalados en el artículo 124 y son los siguientes:

La solicitud del agraviado; que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto.

Por su parte, el artículo 131 establece que una vez recibida la solicitud de suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito ordenará que se forme el expediente relativo al incidente de suspensión por duplicado y pedirá el informe previo a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro del término de veinticuatro horas; en el mismo proveído, se fijará fecha y hora para celebrar la audiencia incidental y se señala para qué efectos se concede la suspensión provisional.

INTERPRETACIÓN

DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCI-

[68] Arellano García, Carlos, Práctica Forense del Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1991, p. 896.

DENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Agosto de 2002, 2a./J. 86/2002, Página 245.

Requisitos:

a) Que la solicite el agraviado. Generalmente su petición debe ser por escrito, ya sea en la misma demanda de amparo o por separado, puede ser con posterioridad a la presentación del escrito de demanda, siempre y cuando se pida antes de que cause ejecutoria la sentencia de amparo, como lo mencionamos anteriormente. En materia penal existe una excepción a la regla; los artículos 17 y 117 de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente, que cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre aunque sea menor de edad y que la petición puede formularse por comparecencia ante el juez.

b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El artículo 124 de la Ley de Amparo, señala en su fracción II, un requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que consiste en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Esta misma fracción, en su segundo párrafo, da la pauta para determinar casuísticamente cuándo se surte el requisito que establece, al estatuir que sí se siguen esos perjuicios si se realizan contravenciones, entre otros casos, cuando de concederse la suspensión: a) se continúe: el funcionamiento de los centros de vicios o de lenocinios o la producción y el comercio de drogas enervantes; b) se permita: la consumación o continuación de delitos o de sus efectos o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario o el incumplimiento de las órdenes militares; c) se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenena al individuo o degeneren la raza.

Sin que el legislador de amparo haya sido exhaustivo, es claro que fijó criterios para que el intérprete de la ley, el juez de amparo, establezca cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito establecido en el citado artículo 124, fracción II.[69]

En materia penal el juez deberá estar atento a dos de los casos señalados: La consumación o continuación de delitos o de sus efectos y la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza.

[69] Góngora Pimentel, Genaro, op. cit., p. 65.

Sobre este punto, también resulta importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efectos del amparo, el concepto "perjuicio" no debe tomarse como la privación de cualquier ganancia lícita o el menoscabo en el patrimonio, como se entiende en materia civil, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona.[70]

El Ministro don Genaro D. Góngora Pimentel, en su obra La Suspensión en Materia Administrativa, al respecto señala:

"Es verdad que gran número de la leyes que rigen en este país tienen la pretensión de decir que son de orden público, algún autor menciona los primeros artículos de diversos ordenamientos legales en que se dice, enfáticamente, que: 'esta, es de orden público'. La enumeración, pensamos, es totalmente inútil, todas las leyes son, en mayor o menor medida, de orden público, eso no nos habrá de ayudar a explicar el concepto. El interés social y el orden público no se encuentran en el respeto a las leyes, sino en el respeto de las garantías individuales, sin embargo, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto.

El interés social y el orden público se refieren a los bienes de la colectividad tutelados por las leyes.

El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presente las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad."[71]

A continuación se transcribe un criterio que define el orden público y otro que lo ejemplifica:

> SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que

[70] Ibidem, p. 885.
[71] Góngora Pimentel, Genaro, op. cit., p. 55.

proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se le sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señalan esta Suprema Corte en su Jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Séptima Época, tesis 1863, pág. 3009.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL IMPROCEDENTE, CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO DE JUEZ. Es improcedente la suspensión provisional contra los actos consistentes en la suspensión temporal del cargo de juez y de la ejecución de la orden de suspensión de dicho cargo, porque de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, en virtud de que a la sociedad le interesa que las personas que desempeñen puestos públicos y concretamente las que son distinguidas con el cargo de juez, tengan una conducta intachable y realicen su función en los términos prescritos en la ley, en aras de una buena administración de justicia, de tal manera que cuando no se cumpla con tal deber se impongan de inmediato las sanciones respectivas. Por tanto, no debe concederse la suspensión solicitada a quienes por su actuación desmerecen la confianza de la institución en la que laboran. Además, si la sanción combatida es legal o no, es cuestión de fondo del asunto y los perjuicios que se causarían a la quejosa serían reparables en el juicio de garantías, contrariamente a lo alegado por la promovente, pues en el caso de concederse el amparo, los salarios dejados de percibir serían restituidos, sin haber laborado en ese lapso, y el desprestigio como persona, profesionista y juez, que pudiera ocasionarse, desaparecería con la protección de la Justicia Federal al reponerse al quejoso en el goce de la garantía individual violada.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, pág. 534.

La Suprema Corte ha determinado en contradicción de tesis que la suspensión contra el aseguramiento de bienes es procedente siempre y cuando no se afecte el interés social y el orden público, y que es improcedente la suspensión cuando se reclame la resolución que recae a la excepción de incompetencia, porque paralizaría el procedimiento y, consecuentemente, afecta el orden público.

INTERPRETACIÓN

SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL INTERÉS SOCIAL NI EL ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y ALGUNA OTRA LEY. Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es un acto consumado porque éste se realiza en un solo momento, también lo es que sus efectos se prolongan en el tiempo sin poderse precisar cuándo quedan definitivamente ejecutados. Por tanto, al existir un derecho que necesita protección provisional y urgente, por el daño producido por el aseguramiento, cuando éste se refiera a bienes inmuebles, procede otorgar la suspensión, siempre que no se afecte el interés social ni el orden público. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, para conceder la suspensión del acto reclamado debe tomarse en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la violación alegada; por ello, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, el Juez de Distrito puede otorgar, excepcionalmente, la medida suspensional sobre el estado de aseguramiento de inmuebles, en virtud de que siendo la finalidad del mismo, entre otras, impedir que desaparezca el objeto del delito, para evitar que se dificulte la comprobación de aquél; proteger la eventual aplicación de la pena de decomiso; garantizar el pago de un crédito reclamado con base en el documento correspondiente e impedir que el demandado eluda el cumplimiento de sus obligaciones, cuando tal aseguramiento se refiere a bienes inmuebles, que por su naturaleza no son de fácil ocultación, no se lesiona el orden público, debiéndose exigir fianza si existe tercero a quien puede perjudicar la suspensión. Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble continúa en su carácter de asegurado a disposición del juez de la causa mientras se resuelve el fondo del asunto. Por tanto, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar

al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, lo que se traduce en que podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 30/2001, pág. 218.

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SEA FACTIBLE APLICAR OTRO ORDENAMIENTO LEGAL. Si en un juicio de amparo se reclama la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria que resolvió la excepción de incompetencia, debe considerarse que no procede otorgar la suspensión del acto reclamado, por no reunirse los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que el otorgamiento de dicha providencia cautelar ocasionaría la paralización del procedimiento en lo principal, contraviniéndose con ello disposiciones de orden público, así como el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no debe otorgarse la suspensión del acto reclamado en el amparo cuando ella tienda a detener el procedimiento judicial, sin que sea por ello factible la aplicación de otras disposiciones legales diferentes a la Ley de Amparo. No obsta a la anterior conclusión el hecho de que en la legislación procesal civil de diversas entidades federativas se prevea la excepción de incompetencia como una excepción de previo y especial pronunciamiento que suspende el procedimiento en el principal hasta su resolución, pues independientemente de lo que de dicha legislación pudiera derivar, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, que no es una instancia procesal más, ni una prolongación del juicio ordinario, sino que es un medio extraordinario para impugnar jurídicamente los actos de las autoridades de un Estado cuando se estime que contravienen a la Constitución Federal en los casos previstos en el artículo 103 de la misma, se rige por lo que dispone la Ley de Amparo. Además, considerar lo contrario, es decir, que de la mencionada legislación procesal debe derivarse la procedencia de la suspensión del acto reclamado y, por ende, del procedimiento en el juicio, sería otorgarle indebidamente a aquélla un ámbito de aplicación mayor al que realmente tiene.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo XIII, abril de 2001, tesis 1a./J. 2/2001, pág. 452.

ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA

SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 52/2002, Página 296.

c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El Juez de Distrito cuenta con facultad discrecional para determinar cuándo son de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con la ejecución del acto reclamado. Debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio tiene fines restitutorios y, por tanto, debe proveer la subsistencia de la materia del amparo para que en caso de que se conceda, el quejoso goce nuevamente de sus derechos conculcados.

Si los actos son de imposible reparación y se consuman no es procedente la suspensión y tampoco el amparo; como por ejemplo, la privación de la vida, la mutilación, incluso la privación de la libertad personal.

Considero que la ley debe cambiar aquí el término "que sean de difícil reparación los daños", por el de "que no sean de imposible reparación" puesto que se podría pensar que los de fácil reparación no son susceptibles de suspensión, ni de oficio ni a petición de parte, la de oficio deberá proceder solo por los actos de imposible reparación, con independencia de que se tramite de plano (en la misma pieza de autos) o en incidente.

Trámite

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132, el informe previo que rinda la autoridad responsable debe expresar si es cierto o no el acto que se reclama y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado. También puede agregar las razones que estime convenientes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.

Dicho numeral también establece que en situación de urgencia, el juez de amparo puede ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe previo por la vía telegráfica, si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente.

Asimismo, dispone que a falta de informe previo debe presumir cierto el acto que se reclama y conceder la suspensión. En este supuesto, la autoridad responsable se hace acreedora a una corrección disciplinaria que le puede imponer el juez de amparo.

Respecto al término de veinticuatro horas en que las autoridades responsables deben rendir su informe previo existe una excepción cuando se trata de autoridades foráneas. Dicha excepción se encuentra regulada en el artículo 133 de la Ley de Amparo que establece que cuando la autoridad responsable resida en lugar distinto en que se encuentre el juez de amparo y no rinda su informe previo en el término señalado por no haber hecho uso de la vía telegráfica, la audiencia se celebrará por lo que hace a las autoridades que sí residen en ese lugar y se reservará celebrar la correspondiente a las autoridades foráneas, en la inteligencia de que la resolución interlocutoria que se dicte, puede ser modificada o revocarse con motivo de los nuevos informes.

Ahora bien, es importante asentar que el artículo 131 señala que las pruebas que pueden ofrecerse en el incidente de suspensión, son la documental o de inspección ocular y sólo en los casos en que se reclamen actos de los señalados en el artículo 17 (peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, destierro, etc.), se recibirá la prueba testimonial.

La Ley de Amparo no es muy clara al referirse al ofrecimiento de pruebas en el incidente de suspensión, pero las reglas son distintas a las del juicio principal pues las ofrecidas y desahogadas en éste no deben tomarse en cuenta para resolver sobre la suspensión; al respecto se ha sentado el siguiente criterio jurisprudencial, visible en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, tomo común, página 522, bajo el rubro:

> SUSPENSIÓN, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE. Debiendo tramitarse el incidente de suspensión por cuerda separada, si el quejoso necesita comprobar algún hecho en dicho incidente con documentos exhibidos en el juicio principal, le es necesario solicitar la compulsa de dichos documentos.

Una vez que se han recibido las pruebas que en su caso hayan ofrecido las partes, se pasa al periodo de alegatos, en el que pueden alegar tanto el quejoso como el Ministerio Público y el tercero per-

judicado, si lo hay. En la misma audiencia se resolverá si se concede o se niega la suspensión definitiva, o bien declarar sin materia el incidente cuando al celebrarse la audiencia, se encontrara probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades; en este último caso, se podrá imponer al quejoso, a su representante o a ambos una multa (artículo 134 de la Ley de Amparo).

Puede acontecer que las autoridades responsables al rendir sus informes previos, nieguen la existencia del acto reclamado y es el quejoso quien tiene la carga procesal de probar su existencia en la audiencia incidental a que se refiere el artículo 131 de la Ley de Amparo, toda vez que a diferencia del informe justificado, la autoridad no tiene la obligación de probar su dicho, y su informe tiene una presunción de veracidad sobre la existencia formal o material del acto reclamado; por lo que si las autoridades responsables niegan el acto reclamado y el quejoso no demuestra su existencia, el juez de amparo necesariamente debe negar la suspensión definitiva, por falta de materia sobre cual decretarla. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de jurisprudencia publicado en la página doscientos treinta y siete, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, 1917-2000, cuyo rubro y texto son:

> **INFORME PREVIO.** Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.

3.2. Efectos de la suspensión

En relación a los efectos de la suspensión, es preciso puntualizar las siguientes observaciones:

El artículo 138 señala que la suspensión no impedirá la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, con la salvedad de que no continuará el procedimiento si deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Sin embargo, con la reforma del 9 de febrero de 1999, que trajo la adición de un segundo párrafo en materia penal, no opera la regla, ya que al establecerse como medida obligatoria la comparecencia del quejoso ante el juez de la causa o el Ministerio Público, el procedimiento no se

paraliza. Por tanto, la tesis bajo el rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ORDEN DE APREHENSIÓN. NO ES OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO EL QUE SE PRESENTE ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, PARA OTORGAR LA", quedó superada con la reforma.

La reforma se justifica, porque con motivo de la suspensión el quejoso se presentará ante el juez de la causa para la continuación del procedimiento, pero sin ser privado de la libertad personal, desde luego, siempre y cuando se trate de delito no grave y proceda la suspensión conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo.

Por otra parte, la resolución que conceda la suspensión producirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, pues así lo dispone el artículo 139. Este mismo numeral también señala que la suspensión deja de producir efectos si el quejoso no cumple con los requisitos que se le han fijado para suspender el acto reclamado. Asimismo establece que si se niega la suspensión definitiva la autoridad responsable puede ejecutar el acto reclamado, aun cuando se haya interpuesto el recurso de revisión; sin embargo, si la resolución es revocada y se concede la suspensión, los efectos de la ejecutoria de segunda instancia, serán para retrotraer las cosas al estado en que se encontraban a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto en la definitiva, si la naturaleza del acto lo permite.

El precepto 139 establece la hipótesis en que el Juez de Distrito niega la suspensión definitiva y ésta se recurre; pero no contempla el caso en que la suspensión se conceda previo al otorgamiento de una garantía gravosa para el quejoso y sea precisamente, esa parte la que se impugne mediante el recurso de revisión. Si el quejoso no exhibe la garantía solicitada en el término requerido, el juez puede decretar que se deje sin efectos la suspensión y el acto se pueda ejecutar antes de resolverse el recurso; si éste revoca en esa parte, los efectos también deben retrotraerse a la fecha de la notificación de la suspensión definitiva, aun cuando el juez la haya dejado sin efectos. Tendrá que hacer otro acuerdo en el que conceda la suspensión con la garantía adecuada.

El hecho de que el Juez de Distrito haya dejado sin efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso, bajo el argumento de que este último no dio cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria; es decir, no exhibió la garantía exigida, aunque tal proceder deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se haya interpuesto el recurso de revisión, esto no implica que el mismo quede sin materia, ya que el párrafo segundo del artículo 139 de la Ley de Amparo, interpretado

en forma analógica, conlleva a establecer que los términos deben retrotraerse a la fecha en que fue otorgada esa medida cautelar, en virtud de que la naturaleza del acto lo permite; sin que pueda concluirse que en el caso se ha dejado sin materia el recurso de revisión intentado; pues eso equivale a una total denegación de justicia, al permitir que se revoque el otorgamiento de esa suspensión, cuando el quejoso se duele de que se le exige una elevada garantía para que continúe surtiendo efectos la medida suspensional otorgada, la que el Tribunal Colegiado puede llegar a estimar ilegal; ello en términos del segundo párrafo del artículo 139 de la ley de la materia que establece:

> ARTÍCULO 139.—"…
> El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución que concediere, la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita."

Tal precepto se refiere al supuesto en el que se niega la suspensión definitiva, pero de una interpretación armónica y analógica, es posible establecer que si en ese caso procede que se retrotraigan los efectos de la medida preventiva al momento en que fue resuelto respecto a la definitiva, por mayoría de razón habrá de aplicarse en el mismo sentido cuando la medida cautelar fue otorgada desde su inicio y sólo estuvo en entredicho uno de los requisitos fijados por el Juez de Distrito, y calificado de ilegal; es evidente que estamos en presencia de un acto cuya naturaleza lo permite y además resulta favorable al recurrente.

INTERPRETACIÓN

> SUSPENSIÓN DEFINITIVA DECRETADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO. SUS EFECTOS DEBEN RETROTRAERSE AUN CUANDO EL A QUO HAYA ORDENADO DEJAR SIN EFECTOS LA DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. El artículo 139, párrafo segundo de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la reso-lución del Tribunal Colegiado que revoca la interlocutoria del Juez de Distrito que niega la suspensión definitiva, deben retrotraerse al momento en que se notificó la mencionada interlocutoria; por tanto, al interpretar dicho precepto en forma analógica, no debe decla-

rarse sin materia el recurso interpuesto contra aquélla que concede la suspensión definitiva y fija una garantía excesiva, por la circunstancia de que el a quo haya determinado dejarla sin efectos, pues ello equivale a una denegación de justicia, ya que el quejoso se duele precisamente de que se le exigió una garantía excesiva, a efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión; en consecuencia, al resultar favorable al recurrente la ejecutoria del Tribunal Colegiado que consideró ilegal el monto de la garantía fijada, sus efectos deben retrotraerse al momento de la notificación de la resolución recurrida si la naturaleza del acto lo permite y no debe declararse sin materia el recurso interpuesto.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

IRP 97/2002. Roberto Silva Martínez. 14 de febrero de 2002. Mayoría de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Carlos López Cruz.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Novena Época, tesis: I.7o.P.6 P, página: 1285.

En otros aspectos relativos a la suspensión, debemos señalar que sus efectos no pueden abarcar actos distintos de los que fueron materia de ella, además no comprende únicamente el acto mismo, sino también sus efectos; el juez de amparo debe precisar claramente en sus resoluciones el acto reclamado por el cual se concede la suspensión. La resolución de suspensión debe motivarse y fundarse suficientemente en cuanto a fijación de garantías y tomar en cuenta si existe aseguramiento de bienes para fijarla.

No procede la suspensión contra sentencias ejecutorias, contra la admisión de recursos ordinarios, ni la solicitada por extraños a un procedimiento, salvo que acrediten un interés jurídico.

Se transcriben los criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte en torno a la suspensión ha sustentado.

SUSPENSIÓN. ALCANCE. Sus efectos no pueden abarcar actos distintos de los que fueron materia de ella.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1846, pág. 2993.

SUSPENSIÓN, ACTO RECLAMADO Y EJECUCIÓN CAEN EN LA. Al concederla, no debe hacerse distinción entre el fallo y su ejecución, pues al otorgarse contra aquél, se entiende concedida en cuanto a sus efectos, pues de no ser así, la suspensión sería imposible.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1845, pág. 2991.

SUSPENSIÓN, RECURSO CONTRA LA. La ilegalidad de la suspensión y la de los requisitos con los cuales se concede, no son materia de queja, puesto que el auto relativo es reversible.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1911, pág. 3077.

SUSPENSIÓN, AUTO DE, DEBE DETERMINAR EL ACTO. El auto que la decreta debe fijar concreta y claramente el acto que haya de suspenderse, y debe corregirse disciplinariamente al juez que, al decretarla, no concrete el acto a que se refiere.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1847, pág. 2994.

SUSPENSIÓN, AUTO DE. EJECUCIÓN. El auto que decrete o niegue la suspensión se ejecutará desde luego, sin perjuicio de ser revisado en los casos en que se proceda.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1848, pág. 2994.

SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es procedente la que se pide contra una ley cuyos preceptos, al promulgarse, adquieren el carácter de inmediatamente obligatorios, que se ejecutarán sin ningún trámite y serán el punto de partida para que se consumen, posteriormente, otras violaciones de garantías.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Quinta Época, tesis 1862, pág. 3009.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO IMPROCEDENTE. No procede concederla en los casos en que se trate de la aplicación inmediata y directa de un precepto constitucional.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1864, pág. 3010.

SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1871, pág. 3016.

SUSPENSIÓN, FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA FIANZA EN LA. Adolece de falta de motivación la fijación de la fianza mediante la cual se concede la suspensión, si no expresa las razones en que se apoya para señalar su cuantía y las operaciones aritméticas conforme a las cuales se determinó.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, segunda parte 1917-1988, Sexta Época, tesis 1876, pág. 3036.

SUSPENSIÓN IMPROCEDENCIA CONTRA LA ADMISIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS. Es improcedente conceder la suspensión contra el auto que admite el recurso, porque la parte quejosa no sufre perjuicio alguno, ya que conserva expeditos sus derechos para hacerlos valer durante la sustanciación de la alzada.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Quinta Época, tesis 1894, pág. 3060.

SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS EJECUTORIAS. Contra los actos que tiendan a cumplir una sentencia ejecutoria es improcedente conceder la suspensión, porque la sociedad está interesada en que no se entorpezca la observancia de los fallos que establecen la verdad legal.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1895, pág. 3061.

SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE, ANTE JUEZ DE DISTRITO. La jurisdicción del Juez de Distrito no cesa por lo que se refiere a todo lo relativo al auto de suspensión, sino cuando se pronuncie sentencia definitiva en el juicio, puesto que la Suprema Corte no es la competente para dictar dichos autos, y si llega a resolver sobre ellos, es en caso especial en que se sujeta a revisión la providencia dictada por el juez, contra la que haya expresado inconformidad alguna de las partes.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1896, pág. 3062.

SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, tesis 1900, pág. 3067.

SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Los extraños a un juicio deben probar, aun cuando sea de una manera presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado, y si no lo hace así, la suspensión debe negarse.

Apéndice de Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1904, pág. 3096.

SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO. El artículo 83 de la Ley de Amparo establece

limitativamente las hipótesis de procedencia del recurso de revisión. Por lo que toca a aquellas que se dictan en el incidente de suspensión, es claro que el legislador delimitó su procedencia para los casos previstos en la fracción II, que se refiere a las resoluciones que: "a) concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y c) nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior". Ahora bien, toda vez que los anteriores supuestos se originan del análisis fundamental efectuado por el órgano jurisdiccional, para arribar a la concesión o negativa de la suspensión definitiva, cuyos motivos ameritarán el consecuente estudio exhaustivo de los agravios esgrimidos por la parte inconforme en términos de lo dispuesto por el numeral 89, párrafo segundo, de la ley de la materia, resulta claro que el supuesto relativo a las determinaciones que declaran sin materia el incidente en cita, se ubican dentro de la hipótesis general a que se refiere el artículo 95, fracción VI, del propio ordenamiento federal el que, en lo conducente, señala que el recurso de queja es procedente "en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva". En consecuencia, por virtud de la falta de inclusión expresa en los casos previstos por el artículo 83 para la procedencia del recurso de revisión, es válido concluir, que en contra de la resolución que declara sin materia el incidente de suspensión, es procedente el recurso de queja previsto en el numeral 95, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, P./J. 42/99, Página 6.

3.3. Suspensión por hecho superveniente

El Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre y cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento (artículo 140 de la Ley de Amparo) y no se haya dictado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

Esta determinación de revocar o modificar la suspensión, considero puede realizarse de plano, es decir, en la misma pieza de autos

y sin sustanciar incidente, puesto que sería absurdo multiplicar los incidentes y en donde la ley no distingue el intérprete no tiene por qué hacerlo. De tal manera que no comparto la tesis de rubro "SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. INCIDENTE PREVIO."

La Suprema Corte ya definió en contradicción de tesis que la revocación o modificación por causa superveniente procede tanto en la provisional como en la definitiva. En mi concepto también puede proceder en la de oficio, cuando se advierta de los informes que el acto reclamado no es el que se mencionó en la demanda o por alguna otra razón que se pueda presentar.

INTERPRETACIÓN

SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE TANTO EN LA PROVISIONAL COMO EN LA DEFINITIVA. Es verdad que el artículo 140 de la Ley de Amparo, al establecer que: "Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." Presenta, entre otras, la inquietud de no precisar expresamente qué tipo de suspensión es la que puede ser modificada o revocada por un hecho superveniente, es decir, si se trata de la suspensión provisional o de la suspensión definitiva. Sin embargo, no menos cierto es que al señalar dicho numeral que la revocación o modificación puede solicitarse en cualquier momento mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada, el cual abarca todo el procedimiento del juicio desde la presentación de la demanda de garantías y hasta antes de que sea declarada firme la sentencia ejecutoriada, resulta claro que la citada modificación o revocación por hechos supervenientes procede tanto en la suspensión provisional (siempre que no se haya resuelto la definitiva) como en la definitiva, por estar inmersas ambas dentro del lapso que establece el citado artículo 140. Opinar lo contrario, ya sea considerando que sólo procede dicha revocación o modificación respecto de una u otra, no haría posible alcanzar íntegramente la finalidad que persigue la figura de la suspensión que es la de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso o, en su caso, el de los terceros perjudicados.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 31/2001, pág. 236.

SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. INCIDENTE PREVIO. La facultad que tienen los jueces de distrito para revocar el auto de suspensión que decreta ésta, cuando ocurra un motivo superveniente, no implica la de que puedan resolver de plano sobre la suspensión, sino que deben sujetarse a la regla general de sustanciar el incidente respectivo, con audiencia de las partes, pues las disposiciones de la ley reglamentaria no establecen distinción alguna que autorice que, en tales casos, la suspensión debe revocarse o decretarse de plano.

Apéndice de Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, quinte Época, tesis 1906, pág. 3072.

SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE SE FUNDA EN HECHOS POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN. Por hechos supervenientes sólo deben entenderse los que tienen lugar con posterioridad a la resolución dictada en el incidente de suspensión, y que modifican la situación jurídica existente cuando se pronunció esa resolución.

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, Quinta Época, tesis 1907, pág. 3073.

4. Suspensión provisional

La suspensión provisional se tramita en amparo indirecto normalmente ante el Juez de Distrito, a solicitud del quejoso, ya sea que lo haga en el escrito de su demanda o bien en forma separada, pero antes de que se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 141, que a la letra dice:

> Artículo 141.—"Cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria."

Para la concesión de la suspensión provisional el juez debe en primer lugar tener por cierto el acto reclamado, puesto que aún no hay informe previo y se atiende a la protesta de decir verdad del quejoso. En materia penal y tratándose de los casos del artículo 17 no es exigible esta protesta de decir verdad y también deben tenerse por ciertos los actos. En segundo lugar debe analizarse si son suspendibles los actos reclamados, conforme a su naturaleza, para después analizar los requisitos legales a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Como premisa fundamental del artículo mencio-

nado se desprende que para la concesión de la suspensión provisional se requiere que haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y que esa ejecución pueda producir notorios perjuicios al quejoso (la privación de la libertad causa perjuicios de imposible reparación, sin embargo no se le da este tratamiento).

Por otra parte, el artículo 130 refiere a la suspensión provisional y textualmente dice:

> ARTÍCULO 130.—"En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.
>
> En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.
>
> El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."

El citado precepto señala para los casos no privativos de libertad personal, que su efecto es mantener las cosas en el estado que guardan, por tanto, no tiene efectos restitutorios; asimismo, que su tiempo de duración es desde que se notifique a la autoridad responsable o al quejoso la suspensión provisional hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible.

Si se tratare de la libertad personal judicial, esto es, la detención de una persona por órdenes de un juez, cualquiera que sea, la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido (Tribunal Unitario,

Juez de Distrito, o en su caso el superior del juez que cometió la violación, o el juez común en jurisdicción auxiliar), bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora (la señalada como responsable) y sin perjuicio que pueda ser puesto en libertad caucional si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien deberá tomar las medidas procedentes para el aseguramiento del quejoso.

Obviamente que el segundo párrafo del artículo 130 se refiere a la privación de la libertad personal que se está ejecutando; sin embargo, ordenar en ese momento la libertad caucional sin pruebas que acrediten que se tiene ese derecho y nos revelen las características o naturaleza del delito; ya sea que se trate de la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, el Juez de Distrito sólo teniendo copia certificada de los autos o de la resolución reclamada podría hacerlo siempre y cuando el juez de la causa no se hubiere pronunciado al respecto, por lo que habría de tener una comunicación directa con el juez responsable.

Lo confuso se presenta si el acto reclamado es la orden de aprehensión como acto futuro e inminente; el precepto 130 no es claro en cuanto a los efectos de la suspensión, normalmente en las demandas de amparo se señala como acto reclamado la orden de aprehensión pero no se dice por qué delito; si se dijera, el efecto podría precisarse desde esa etapa. Por ende, los juzgados de Distrito desde ese momento conceden la suspensión con dos efectos como medida de aseguramiento, uno, si se tratare de delito no grave (que alcance el beneficio de la libertad provisional bajo caución) y otro si se trata de delito grave.

En el primer caso, el efecto es para que no se le detenga, pero se toman medidas para el aseguramiento del quejoso, como lo es la garantía que obviamente no será impuesta atendiendo a los lineamientos establecidos en el artículo 124 bis, ya que esto sólo sería posible hasta la resolución de la suspensión definitiva; asimismo, se ordena la presentación del quejoso conforme al segundo párrafo del artículo 138 para la continuación del procedimiento, de lo contrario dejará de surtir efectos la suspensión si en tres días no se presenta; sin embargo, cabe preguntarse que caso tiene esta última medida si en tres días también, ordena la ley, debe resolverse sobre la suspensión definitiva, la cual debe concederse aun cuando no se presente, conforme a la tesis por contradicción 75/2001 que a continuación se transcribe; por tanto, en mi concepto, la suspensión debe concederse en estos casos, para que no se ejecute la orden de aprehensión, con medidas como la garantía al arbitrio del juzgador de amparo, la

prohibición de no salir del territorio estatal o del Distrito Federal sin autorización del juzgador de amparo. La presentación ante el juez de la causa y la garantía conforme al artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en mi concepto, son medidas que el juez debería tomar al decretar la suspensión definitiva.

Esto es así, puesto que la medida contenida en el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, acaba con la eficacia de la suspensión y ésta debería ser optativa, dependiendo del posible sentido del fondo del asunto, es decir, asomándose al fondo del asunto, si se inclina por la concesión del amparo, pues no ordenar la medida. Así lo hacíamos los jueces antes de la reforma.

INTERPRETACIÓN

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SU OTORGAMIENTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL, NO DEPENDE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA PROVISIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que establecen lo relativo a la suspensión del acto reclamado en sus dos formas, provisional y definitiva, tratándose de aquéllos restrictivos de la libertad personal, se advierte que aun cuando tienen como finalidad paralizar el acto reclamado para que no se ejecute por la autoridad responsable, exigen la satisfacción de diversos requisitos para su otorgamiento, aunado a que de lo previsto en el primero de dichos preceptos y en el diverso 131 de la propia ley, se desprende que su dictado se realiza en dos estadios procesales diferentes y, por lo mismo, las condiciones para ese fin, en una y otra, son independientes. En razón de lo anterior, debe estimarse que el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, no depende del incumplimiento del quejoso respecto de las medidas de aseguramiento dictadas para la provisional, pues, por un lado, si en ésta última no se cumplen las medidas señaladas, lo decretado en ella quedará sin efecto y podrá la responsable ejecutar el acto, en tanto no se dicte la suspensión definitiva y, por el otro, por que el Juez de Distrito para normar su criterio y resolver sobre ella cuenta con el informe de las autoridades responsables y con las pruebas que conforme a la ley puedan ofrecerse y desahogarse, elementos que no tenía al resolver sobre la suspensión provisional, por lo que podrá, si lo estima conveniente, decretar estas medidas, o bien, otras diferentes.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, diciembre de 2001, Tesis de jurisprudencia 75/2001, Novena Época, pág. 141.

En el segundo caso, cuando el delito es grave por no permitir el derecho a la libertad provisional bajo caución, conforme al párrafo quinto del artículo 136, el efecto será que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad en el lugar que señale (normalmente señalan el lugar en que la autoridad responsable ejecutora lo determine) y a disposición del juez responsable por lo que hace a la continuación del procedimiento penal.

Serán las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras quienes tendrán que determinar si es grave o no el delito bajo su responsabilidad, para el acatamiento de la suspensión provisional.

Por último, en relación a la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, el precepto 130, nos indica que cuando ésta se restrinja, siempre se concederá la suspensión provisional, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior, del mismo precepto, no obstante que se trate de un acto futuro incierto en ese momento.

Debemos precisar que la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial es aquella que no proviene de mandato judicial y que puede ser: justificada e injustificada cuando con motivo de la comisión de un delito se detiene a una persona en flagrancia o urgencia, conforme al artículo 16 constitucional y es injustificada si no es así y entonces la detención es arbitraria.

Este acto de restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, se puede presentar como un acto consumado o pasado y en este caso no procede la suspensión; como futuro inminente y en este caso sí procede la suspensión provisional para el efecto de que no se detenga, siempre y cuando no haya cometido delito alguno.

Si es un acto presente, es decir que la persona está detenida en el momento de la presentación de la demanda, la suspensión será para el efecto de que si no ha cometido delito alguno se le deje en libertad de inmediato, pero con la salvedad (medidas) de que si se cometió algún delito el efecto será el correspondiente que señala en cada caso el artículo 136 de la Ley de Amparo, lo que se analiza más adelante con más detalle.

A continuación se transcriben las siguientes tesis por contradicción que son obligatorias y que hay que observar en la suspensión provisional.

> SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. De la interpretación armó-

nica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aun cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 43/2001, pág. 268.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menes-

ter que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo V, mayo de 1997, tesis 1a./J. 16/97, pág. 226.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA. El análisis sistemático de los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que respectivamente determinan la naturaleza de la suspensión provisional de los actos reclamados, así como las reglas de procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja contra el acuerdo en que se concede o niega esa medida, permiten establecer que la omisión de fundar y motivar el acuerdo que resuelve la suspensión provisional de los actos reclamados, alegada como agravio, debe ser reparada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el trámite del recurso de queja correspondiente. Esto es así, porque

la omisión apuntada se constriñe a una violación procesal cometida en el dictado del acuerdo impugnado, que lo nulifica, permitiendo al tribunal de alzada asumir plenitud de jurisdicción para resolver de plano lo que proceda, esto es, sin mayor sustanciación, de inmediato e integralmente, si niega o concede la medida suspensional, al contar con las constancias pertinentes, es decir, toda pieza de autos relacionada con esa medida, que el Juez de Distrito tiene obligación de enviarle junto con el escrito de queja, para fundar y motivar su determinación y así cumplir con la finalidad de decidir con celeridad y urgencia la medida suspensional, para evitar que quede sin materia y sobre todo que los actos reclamados se ejecuten o se sigan ejecutando causando al quejoso notorios daños y perjuicios de difícil reparación, en caso de obtener la concesión del amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XIII, enero de 2001, tesis P./J. 10/2001, pág. 13.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo

de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, P./J. 143/2000, Página 23.

Por otra parte, al conceder la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe establecer las condiciones necesarias para salvaguardar derechos de terceros, mediante una fianza que se fije al quejoso para que surta efectos la medida cautelar, de conformidad a lo que establece el artículo 125, y esta garantía debe ser suficiente para garantizar los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado e indemnizarlo de los posibles perjuicios que se le causaran.

En relación con lo anterior, cabe mencionar que el artículo 128 de la misma ley establece el régimen jurídico de la contragarantía, cuyo objeto es dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado, permitir que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías, si se concede el amparo y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso por la realización del acto reclamado, si se concede el amparo. Quien otorga la contragarantía es el tercero perjudicado y su monto es fijado por el juez, quien goza de criterio discrecional, con la salvedad de que el tercero perjudicado cubra el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso. Sin embargo, no se admite la contrafianza si ejecutado el acto reclamado quedara sin materia el amparo. Cabe señalar que, por lo general, la contrafianza no opera en materia penal, pues en la mayoría de los juicios de amparo en esa materia, por su naturaleza, no existe tercero perjudicado; pero cuando se da el caso de que existe un daño patrimonial y existe un ofendido que espera la reparación de su daño, hay que tomar en cuenta esta situación, desde luego. El precepto 124 bis, no establece que habrá que garantizar el monto total del daño, sino sólo que hay que tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito y la situación económica del quejoso, por tanto, la garantía que exige la totalidad del daño es una garantía excesiva, ya que se pretende asegurar la permanencia del quejoso en el juicio de amparo y la no evasión a la justicia, y no se trata de aquélla que se fija para la libertad provisional bajo caución que es distinta.

Por lo que hace a la materia penal, generalmente los jueces de Distrito fijaban como medidas de aseguramiento la presentación

periódica del quejoso ante el juzgado y/o ante las autoridades responsables y una garantía en billete de depósito o de cualquier otra forma. La medida de presentación ante el juez de la causa fue muy criticada; sin embargo, se justificaba por la razón de que los procedimientos son de orden público y no deben paralizarse, por otra parte, el objetivo de solicitar la suspensión contra la orden de aprehensión es que no se les detenga al presentarse ante el juez cuando alcancen el beneficio de la libertad provisional bajo caución; además, como lo dijera Vallarta, el amparo y la suspensión no son instrumentos jurídicos para evadir la acción de la justicia, sino para evitar actos arbitrarios e injustos, de ahí que si alguien solicita la protección de la Justicia Federal debe ser con el ánimo de demostrar su inocencia; de ser así el juez de la causa, lo dejará en libertad por falta de elementos para procesar, una vez que dé sus argumentos y ofrezca pruebas.

Con la reforma del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por la que se adicionó un párrafo al artículo 138, ya no es optativo para el juez decretar la medida, ahora es una obligación, tratándose de actos que afecten la libertad personal.

Sería mejor que la medida fuera optativa y dejar a discreción del juez de amparo aplicarla o no, asomándose un poco al fondo del asunto, ya que no es lo mismo advertir de autos que se trata de un asunto en el que la sociedad está interesada en que no se suspenda el procedimiento a otro en el que solamente tienen interés las partes. Por ejemplo, un fraude o un peculado a un delito de amenazas o lesiones leves. Así se venía haciendo cuando la medida no era obligatoria, de ahí que la teoría aplicable a la materia administrativa, de la apariencia del buen derecho, de alguna manera, en cuanto a sus efectos, ya se realizaba en materia penal antes de la adición del segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, de tal manera que si se advierte que se negará el amparo al quejoso, se impone la medida, de lo contrario, no se le obliga a que se presente.

La tesis de la apariencia del buen derecho dice:

> SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la **apariencia del buen derecho** y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad

respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según su cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, parte III, abril de 1996, tesis P./J. 15/96, pág. 16.

Sin embargo, considero que cuando se trata de la orden de comparecencia, con motivo de la comisión de un delito que no contiene pena de prisión, sino pena no privativa de libertad o alternativa, la medida contenida en el artículo 138 de la Ley de Amparo no debe aplicarse en razón del texto de esta norma, que dice lo siguiente:

ARTÍCULO 138.—"En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del

> procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjucio que pueda ocasionarse al quejoso.
>
> Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida."

Ahora bien, la orden de comparecencia al igual que el auto de sujeción a proceso, son resoluciones que solamente perturban la libertad general de los gobernados, pues ellas obligan al inculpado a comparecer ante el juez instructor, comparecer periódicamente y no salir de su jurisdicción. Por el contrario, la orden de aprehensión tiene como objetivo restringir la libertad general y privar de la libertad personal al gobernado, entendiéndose esta última, como la detención física de una persona.

Lo anterior se puede deducir de la siguiente tesis por contradicción:

> AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA. A las excepciones al principio de definitividad específicamente previstas por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistentes en que no existe obligación de agotar recursos, dentro del procedimiento, tratándose de terceros extraños y de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o de cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución de la República, debe añadirse la diversa excepción que se desprende de la fracción XII del artículo 107 de la Carta Magna reproducida, en esencia, en el artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que: "la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponda", pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeción a proceso no es necesario que se agote el recurso de apelación, pues tanto ese auto como el de formal prisión se encuentran regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no difieren, en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del proceso, que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos señalados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para

hacer probable la responsabilidad del inculpado. La única diferencia existente entre ambas determinaciones radica en que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización. Independientemente de ello, la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XII del artículo 107 de la Norma Fundamental, no supedita su procedencia al hecho de que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, sino que la hace depender de la naturaleza de la jurisdicción concurrente, cuando existe violación de cualquiera de las garantías tuteladas por los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia constitución.

Semanario Judicial de la Federación, parte: VIII-agosto, instancia: Primera Sala, tesis: 1a./J. 4/91, pág. 64.

De tal manera, que si el segundo párrafo del artículo 138 citado establece la medida para los actos derivados de un proceso penal que afecten la libertad personal, quiere decir que se refiere a aquellos actos judiciales por los cuales se ordena la detención de una persona por el solo hecho de referirse a la "libertad personal", mas no simplemente a la "libertad" (libertad general).

Por otra parte, debemos atender al primer párrafo del artículo 138 en su última parte, que textualmente dice: "A no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso."

El objeto de la orden de aprehensión no sólo es sujetar al inculpado a un proceso penal, sino además que sea privado de su libertad, sin embargo, el objeto de la orden de comparecencia es sólo sujetarlo al proceso penal. De tal manera que en tratándose de la orden de aprehensión en delitos no graves, no se dejarían irreparablemente consumadas las garantías violadas, porque conforme a la ley, el efecto de la suspensión es que no se le detenga, en cambio, sí se dejarían irreparablemente consumadas las garantías que genera la orden de comparecencia, al presentarse el inculpado a iniciar el proceso; por tanto, este último es el caso de excepción señalado en la última parte del primer párrafo del mencionado artículo 138.

En la exposición de motivos de las reformas de 1994, concretamente al artículo 136, de la Ley de Amparo, se dijo: "Se proponen las siguientes reformas:… Al artículo 136, para ajustarlo a las nuevas disposiciones del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional y del párrafo primero de la fracción I del artículo 20 de la propia constitución, así como para darle mayor efectividad a la suspensión provi-

sional en amparos penales indirectos." El párrafo séptimo del artículo 16 constitucional refiere a la retención por parte del Ministerio Público, en los casos de flagrancia y urgencia, es decir, a la privación de la libertad personal, al decir: "…Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal."

Por último, tomando en cuenta que en la exposición de motivos de la reforma de 1998, al artículo 138 citado, se dijo textualmente: "…de esta manera se evitará que los inculpados, haciendo uso abusivo de la suspensión, se sustraigan a la acción de la justicia…", considero que dicha reforma va encaminada exclusivamente a los delitos con pena privativa de libertad, mas no en aquellos casos de delitos intrascendentes en los que ni siquiera tendrán como consecuencia una privación de la libertad personal.

En consecuencia, en mi concepto no debe decretarse la medida tratándose de la orden de comparecencia, cuando sea librada por delito que tenga pena no privativa de libertad o alternativa. Es diverso el caso de la orden de presentación en que la penalidad es privativa de libertad, puesto que de concederse la suspensión se afectaría el orden público al paralizar el procedimiento penal.

De aplicarse la medida en el caso de orden de comparecencia, sería ineficaz la suspensión e incluso propiamente el juez federal estaría ordenando la comparecencia del gobernado, cuando precisamente es lo que se está reclamando en el juicio de garantías.

Por tanto, el efecto de la suspensión no debe ser conforme al primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo que dice: "…Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste", sino el de que las cosas se mantengan en el estado que guardan.

Sin que deba ser obstáculo la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 6/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, del tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIG-

NE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN", misma que resolvió la contradicción de tesis 37/95, toda vez que de una interpretación correcta de dicha jurisprudencia, debe decirse que se trata de la suplencia de la deficiencia de la queja y no se habla propiamente de la restricción de la libertad personal, de ahí que no debe tomarse en cuenta que en su texto exprese que: "restringe la libertad personal".

En suma, en mi criterio, no debe ser aplicable la medida de presentación ante el juez de la causa, prevista en el artículo 138 de la Ley de Amparo, tratándose de orden de comparecencia; aun cuando sea contrario a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual en mi concepto es inconstitucional.

INTERPRETACIÓN

SUSPENSIÓN. ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. De acuerdo con el contenido de los artículos 124 fracción II, 136 y 138 de la Ley de Amparo, los jueces de Distrito tienen amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que juzguen convenientes a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia ni se suspenda el procedimiento de tipo judicial, cuando se reclame una orden de aprehensión o cualquier acto que restrinja la libertad personal, por lo cual el juez federal al conceder la suspensión proveerá que el quejoso quede a su disposición en cuanto se refiere a su citada libertad, de la cual no puede ser privado, pero como medida de aseguramiento, para garanti-zarla, al conceder ésta se condiciona al otorgamiento adicional de una caución y a que comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo respectivo a fin de sujetarse al procedimiento, pues la sociedad está interesada en que no se entorpezca.

Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., XI. mayo, pág. 408.

SUSPENSIÓN. MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTO A LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN. El artículo 136 de la Ley de Amparo es la disposición que expresamente reglamenta lo relativo a la suspensión tratándose de las órdenes de aprehensión, y contempla la facultad discrecional de los Jueces de Distrito para decretar las medidas de aseguramiento que le permitan devolver al quejoso a la autoridad que lo reclama, entre las que se encuentra la de señalar una garantía. Ahora bien, la fijación de ésta queda al prudente arbitrio del juzgador, sin sujetarse a los lineamientos del artículo 125 de la ley de la materia, pues este precepto sólo es aplicable en los casos que no tienen una regulación especial, lo que no acontece con los mandamientos de captura, por ser el artículo 136

en comento el que específicamente prevé las normas que deben seguirse respecto a esa índole de actos. Tampoco la repetida garantía tiene forzosamente que ceñirse a la fracción I del artículo 20 constitucional, pues lo prescrito en este precepto sólo puede observarse en las hipótesis en que el impetrante se halle detenido y la medida cautelar tenga por efecto ponerlo en libertad bajo caución, como sucede tratándose del auto de formal prisión.

Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., III, junio de 1996, VI.1º. 2P, 956.
(Tesis superada con la reforma de 1999).

CAUCIÓN, MONTO DE LA. MEDIOS PARA OTORGAR EL (DELITOS FISCALES). El hecho de que el Juez de Distrito decida que para conceder el beneficio de la libertad bajo caución el recurrente tenía que depositar la garantía en efectivo o en billete de depósito y no otorgarse por cualquiera de los medios establecidos por la ley, ningún perjuicio causa al recurrente, pues por analogía debe garantizar la libertad caucional en la misma forma que en los amparos sobre materia fiscal, cuyos requisitos de efectividad se establecen en razón de la índole misma del acto reclamado, o sea, que éste entrañe el cobro de contribuciones, según se desprende del artículo 135 de la Ley de Amparo, conforme al cual, para que surta efectos la suspensión concedida contra el cobro de contribuciones, es necesario previamente constituir depósito por la suma reclamada en los casos en que se pide el beneficio cautelar contra dicho cobro. En las demás hipótesis debe aplicarse la regla general contenida en el artículo 125 del propio ordenamiento, de la que se infiere que es optativo para el interesado la forma en que otorgue la garantía; pero en el caso de delitos fiscales como el de defraudación fiscal debe estarse a lo inicialmente indicado.

Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., XV-enero, IV. 3º 117 P, pág. 195.
(Tesis superada con la reforma de 1999).

ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE IMPONERLE AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE EL JUEZ RESPONSABLE A QUE SE LE TOME SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, EN LOS CASOS DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE AMPARO. La determinación del Juez de Distrito en el sentido de ordenar al promovente del amparo de acudir ante el juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, para que surta efectos la suspensión provisional, no se ajusta a lo dispuesto en el párrafo cuarto del ar-

tículo 136 de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que en él no se especifican las medidas que habrán de tomarse en tratándose de órdenes de aprehensión que se decreten por delitos que admitan la libertad provisional bajo caución y, por ende, el resolutor federal tiene facultades discrecionales al respecto, ello no significa que tal atribución sea omnímoda, pues su límite se desprende de la redacción del propio párrafo en comentario, esto es, que el que-joso pueda ser devuelto al órgano judicial en caso de que se le nega-ra el amparo solicitado; por lo tanto, el Juez de Distrito, no debe tomar medidas tan inocuas que permitan que el reo pueda sustraerse con facilidad de la acción de las autoridades que habrán de devolverlo ante la responsable, en caso de negarse el amparo, sino que éstas deben ser suficientes y eficaces para poder cumplir con el objetivo de la devolución antes citada; sin embargo en el otro extremo, tales medidas no deben llegar al grado de rigidez tal, que obliguen a acudir ante el juez de la causa a declarar, pues ello haría nugatoria la providencia suspensional y su teleología y significa un exceso a los límites que dispone el párrafo antes invocado, porque éste sólo prevé, que las medidas de aseguramiento se tomen, para que sea devuelto el quejoso a la responsable hasta que después de seguido el juicio de amparo en toda su secuela, se le negara al que-joso la protección constitucional.

Semanario Judicial de la Federación, T.C.C., II-diciembre de 1995, XIV 2ª 6P, 546.
(Tesis superada por la reforma de 1998).

Finalmente, debe decirse que en contra del auto que niegue o conceda la suspensión provisional no cabe el recurso de revisión sino el de queja (artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo) y, al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido la siguiente tesis jurisprudencial:

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO CABE CONTRA ELLA EL RECURSO DE REVISIÓN. Contra el auto que la decrete o niegue no cabe el recurso de revisión.[72]

5. La suspensión definitiva

La suspensión definitiva se distingue de la provisional en razón del mandamiento por medio del cual se decreta, así como en el tiempo de su duración, ya que la provisional se decreta en un auto que surte efectos hasta en tanto no se dicte la definitiva y ésta se resuelve

[72] Arellano García, Carlos, op. cit., p. 895.

en una resolución interlocutoria que tiene vigencia hasta que se notifica la sentencia ejecutoriada de amparo, acto en el cual sí se analiza la certeza del acto reclamado, si son suspendibles o no los requisitos del artículo 124 citado y los requisitos de efectividad, conforme a la tesis administrativa aplicable a todas las materias, que se transcribe a continuación:

> SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A) Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa), B) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales), C) Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la ley de amparo (requisitos legales), y D) Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad).[73]
>
> Informe de labores de 1989, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis jurisprudencial 6, pág. 62.

A pesar de estas diferencias, la suspensión definitiva, al igual que la provisional, está sujeta a los requisitos que señala el artículo 124, los que ya analizamos en el apartado anterior, por lo cual, únicamente los enunciaremos:

a) Que la solicite el agraviado (cabe mencionar que generalmente el quejoso solicita en la demanda de garantías tanto la suspensión provisional, como la definitiva. Basta que solicite la suspensión del acto para conceder ambas);

b) Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y

c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.

Aunados a estos requisitos, para la concesión de la suspensión definitiva, debe existir la certeza del acto reclamado y la posibilidad de suspenderlo conforme a su naturaleza.

Las facultades que le confiere la Ley de Amparo al Juez de Distrito para conceder la suspensión se encuentran en el artículo 124, parte final, que establece: "El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

[73] Pérez Dayán, Alberto, Ley de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1991, p. 131.

Estas facultades autorizan legalmente al Juez de Distrito para establecer en la interlocutoria las modalidades a que debe quedar sujeta la suspensión definitiva, tanto frente al quejoso como a las autoridades responsables, ya que éstas no pueden ejecutar el acto reclamado que se paralizó o está detenido y pensar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la suspensión y por lo que hace al peticionario del amparo también puede fijarle requisitos, como es una garantía, que se presente periódicamente ante el juzgado de amparo o ante la autoridad responsable, que no se ausentare del lugar en que reside, etcétera.

Por tanto, el juez debe negar la suspensión definitiva si el acto reclamado no es cierto o bien, si a pesar de que existe no es susceptible de paralizarse, por ejemplo: porque se trata de un acto negativo o totalmente consumado.

Además, si la suspensión afecta el interés social o viola disposiciones de orden público o si con motivo de la ejecución del acto no se causan al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación. Un ejemplo de la afectación del interés social en materia penal, lo encontramos en los precedentes de la Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXIVII, visible en la página 2198, bajo el rubro siguiente:

> ORDEN DE APREHENSIÓN, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA. Es improcedente conceder la suspensión contra el auto que ordena la aprehensión de un individuo que ha sido condenado por sentencia ejecutoria, orden que tiende a cumplir con la sentencia en que se establece la verdad legal, porque de concederla, se afectaría el orden público, que está vinculado estrechamente en que no se estorbe en forma alguna el cum-plimiento de las sentencias de la índole señalada.

Por otra parte, la interlocutoria que niega la medida cautelar suspensional deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado y deje insubsistente la suspensión provisional si ésta se hubiese concedido, de conformidad con el numeral 139, último párrafo, que ya fue comentado y que a la letra dice:

> ARTÍCULO 139.—"...El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de éste se retrotraerán a la fecha en que fue

> notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita."

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley de Am-paro, la interlocutoria suspensional no sólo puede conceder o negar la suspensión definitiva al quejoso, sino también puede declarar que el incidente ha quedado sin materia cuando aparezca debidamente probado que ya se resolvió la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades.

Por su parte, el artículo 140 establece que:

> ARTÍCULO 140.—"Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento."

A este respecto, resulta útil mencionar que el doctor Ignacio Burgoa estima que: "el hecho o causa superveniente es aquella circunstancia, acaecida con posterioridad a la interlocutoria suspensional, que viene a cambiar algunas de dichas tres condiciones genéricas en cuya satisfacción o no satisfacción se hubiere basado, respectivamente, la concesión o la denegación de la suspensión definitiva".[74]

De lo anterior, es posible concluir que la Ley de Amparo consigna la posibilidad de que la resolución dictada en la suspensión definitiva pueda ser revocada si con posterioridad a esta interlocutoria y dentro del procedimiento surgen circunstancias que hacen improcedente la suspensión otorgada o bien, circunstancias que demuestran la existencia de las condiciones de procedencia para conceder la suspensión definitiva y que antes estaban ausentes. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito argumentó que "es posteriormente a la celebración de la audiencia relativa (la incidental) cuando el a quo (Juez de Distrito) se encuentra en la hipótesis prevista por el aludido artículo 140; y es lógico que así sea, dado que la suspensión provisional está legalmente prevista para que sea decretada sin que cuente el juzgador con más elementos que los proporcionados por la parte quejosa y su duración es transitoria, ya que será en la audiencia a que se refiere el artículo 131 de la ley de la materia, cuando el juzgador, contando con mayores elementos, incluso con los que proporcionen las responsables y los terceros per-

[74] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 801.

judicados, si los hay, esté en aptitud de resolver acerca de la suspensión definitiva".[75]

La modificación o revocación de la resolución suspensional a que nos hemos referido, se tramita en forma incidental, ya que así lo ha determinado la jurisprudencia de la Suprema Corte y prohibe a los jueces de Distrito que decidan de plano si la interlocutoria suspensional debe ser modificada o revocada por hechos supervenientes.[76]

En relación a lo anterior, la resolución que se dicte en el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva es recurrible en revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, de conformidad con el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 83.—Procede el recurso de revisión: I. … II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva; b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva;…"

En relación a la modificación o revocación de la suspensión de oficio nada se ha dicho, sin embargo, considero que sí es posible en tratándose de casos en los que se presta a confusiones como cuando se reclama la deportación, multa excesiva o confiscación de bienes.

INTERPRETACIÓN

> COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye

[75] Ibidem., p. 401.
[76] Burgoa Orihuela, Ignacio, op. cit., p. 801.

que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Enero de 2003, 1a./J. 71/2002, Página 33.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 81/2002, Página 357.

6. La suspensión del acto reclamado privativo de libertad

La privación de la libertad como acto reclamado la debemos analizar tomando en cuenta si la detención se está realizando, es decir, si el acto es presente o bien, si se trata de un acto futuro inminente (orden de aprehensión no ejecutada) y si la detención es justificada por tratarse de la comisión de un delito o si es ilegal o injustificada totalmente por no estarse en los casos en que la Constitución Federal, en su artículo 16, permite la detención del gobernado. El artículo 16 constitucional reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 8 de marzo de 1999, en lo conducente establece:

> Artículo 16.—"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
>
> No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable responsabilidad del indiciado.
>
> La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal.
>
> En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndole sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
>
> Sólo en casos urgente cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder."
>
> …"

Si se reclama un acto consistente en la privación de la libertad y éste es presente, esto es, si el peticionario del amparo se encuentra detenido ante autoridades administrativas distintas del Ministerio

Público y no sea por la comisión de un delito, la privación no se justifica y es ilegal totalmente; en este caso el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad y tomar las providencias necesarias para que no se deje en libertad a alguien que cometió un delito y que en su demanda miente.

En el acuerdo que provea sobre las medidas necesarias deben contar los efectos de la suspensión para el caso de que se trate de la comisión de un delito (esto más adelante se explica); lo anterior tiene su fundamento en el párrafo último del artículo 130 y en el sexto del artículo 136 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:

> ARTÍCULO 130.—"…
>
> El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."
>
> ARTÍCULO 136.—Párrafo Sexto.—"Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior."

De la anterior transcripción podemos precisar que aun cuando el artículo señala que esta medida cautelar se concederá "si procediera", la suspensión debe otorgarse, ya que la propia ley en el artículo 130, último párrafo, se refiere a la concesión de la suspensión cuando el acto reclamado consista en la detención fuera de procedimiento judicial; igualmente el numeral 136, párrafos tercero y sexto, reitera que el efecto de la suspensión, tratándose de este tipo de actos, será la libertad del quejoso, a menos que se refiera a un supuesto de flagrancia, situación en la cual deberá ser remitido inmediatamente al Ministerio Público. No será ese el efecto (dejarlo en libertad) si la detención se realiza por parte del Ministerio Público.

> ARTÍCULO 136.—"…
>
> Párrafo tercero.—De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá el Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en liber-

tad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención."

A su vez, consideramos útil mencionar el referido párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, que a la letra dice:

> ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.—"...Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal."

Sin embargo, si esta detención la efectuaron porque el quejoso cometió un delito en flagrancia o mediante una orden decretada por el Ministerio Público en uso de las facultades que le confiere el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional a que nos referimos en líneas anteriores, la medida suspensional se concede para efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediera o su detención de cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, como lo dispone el párrafo séptimo del citado artículo 16 de nuestra Carta Magna, plazo en que el Ministerio Público debe ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Ahora bien, si la detención obedece al cumplimiento de una orden del juez, la suspensión se concede para el efecto de que se ponga de inmediato a su disposición para la continuación del procedimiento penal. La autoridad responsable deberá, en estos casos, indicar en su informe previo la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público o autoridad judicial.

Por otra parte, si el quejoso se encuentra detenido ante el Ministerio Público al ejercitar este último las facultades que le confieren el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, o por haber sido detenido por dicha autoridad en flagrancia, la suspensión provisional se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre detenido y a disposición del Agente del Ministerio Público, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin

perjuicio de que se consigne al quejoso dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según el caso, contados a partir de su detención, o bien ordene su libertad si procediere. Si del informe se advierte que no se trata de flagrancia o urgencia el quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la averiguación previa.

Así lo dispone el párrafo tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:

> ARTÍCULO 136.—"…De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención."

7. SUSPENSIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Este tipo de suspensión es aquélla que se concede cuando el peticionario del amparo reclama una orden de detención que pretenden realizar autoridades administrativas. En estos casos, si el acto es futuro, el Juez de Distrito siempre debe otorgar la suspensión, tanto provisional como definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, para que no se le prive de su libertad personal hasta en tanto se notifique la interlocutoria que se dicte acerca de la suspensión definitiva.

Como medidas de aseguramiento, el Juez de Distrito puede imponerle que se presente ante el Ministerio Público cuantas veces sea requerido para ello, con el objeto de la investigación de algún delito, la garantía, el arraigo, etcétera, haciendo la salvedad de que la suspensión no surte efectos si la detención obedece a la comisión de un delito.

Lo anterior, atento a lo dispuesto en los artículos 130, párrafo final y 136, párrafo segundo de la Ley de Amparo, los cuales se deben de interpretar en forma armónica, con independencia de que uno se refiere a la provisional y el otro a la definitiva, estableciendo lo siguiente:

> ARTÍCULO 130.—"...El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."
>
> ARTÍCULO 136.—"...Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación."

El párrafo transcrito del artículo 136 se refiere a la privación de la libertad presente, la que se está realizando, caso en el que el juez deberá tomar sus medidas y procurar que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia si la detención obedece a la comisión de un delito; de ahí que los jueces concedan la suspensión para el efecto de que el quejoso quede en libertad, salvo que haya cometido un delito, caso en el que el efecto será ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público.

Considero que en los casos de privación de la libertad fuera del procedimiento judicial (acto futuro) no debe fijarse como medida una garantía, porque se trata del bien jurídico más preciado, la libertad personal y si esta se afecta injustificadamente el estado tiene la obligación de protegerla, sin ningún obstáculo para el agraviado; la garantía sí es admisible en tratándose de orden de aprehensión; sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que debe fijarse la garantía en orden de detención, en la siguiente tesis por contradicción.

> SUSPENSIÓN PROVISIONAL, CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se pro-

> mueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que: "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad.
>
> Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIV, septiembre de 2001, tesis de jurisprudencia 66/2001, pág. 434.

En todo caso, si la detención obedece a la comisión de un delito, la suspensión deberá concederse para el efecto de que una vez que se le capture quede a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal, en el lugar donde se encuentre y se consigne ante el juez de la causa en el término de 48 horas o el doble en caso de delincuencia organizada o bien se le deje en libertad si procediere.

La tesis Vallarta en el sentido de que el amparo y en consecuencia la suspensión no es para proteger a criminales, aún está vigente.

8. La suspensión tratándose de privación de la libertad dentro de un procedimiento judicial (acto futuro)

En este tipo de suspensión existen dos supuestos.

El primero de ellos, cuando se reclama un acto consistente en una orden de aprehensión, detención o retención decretada por un juez y el delito que se le imputa al quejoso alcanza el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal en vigor; esto es, que no sea un delito de aquéllos considerados como graves por la ley. En este caso, la suspensión surtirá efectos para que el quejoso no sea privado de su libertad personal, quedando a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado. Para que surta efectos esta suspensión, el Juez de Distrito debe fijar una garantía en billete de depósito o en efectivo que deberá exhibirse ante el propio juez de amparo, dentro de un término establecido y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 125 bis, es decir, atender a la naturaleza de la conducta delictiva. Asimismo, obligatoriamente se presente ante el juez responsable a rendir su declaración preparatoria correspondiente, y cuantas veces sea requerido por dicho juez para la continuación de su proceso; que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso del tribunal federal; que informe de inmediato al Juez de Distrito cualquier situación jurídica en relación con su proceso, etcétera. Estas medidas han sido criticadas por algunos juristas; sin embargo, no hay que olvidar que las mismas son discrecionales, que el procedimiento penal es de orden público y que la sociedad está interesada en que se cumplan los trámites respectivos; sin embargo, habría que analizar que la medida de obligar al quejoso a que se presente a declarar en preparatoria ante el juez responsable trae como consecuencia la continuación de un procedimiento con términos fatales, como lo es el de 72 horas para resolver la situación jurídica del inculpado, lo cual estriba en un cambio de situación jurídica que concluye con un sobreseimiento.

Ahora bien, respecto a las citadas medidas de aseguramiento resulta conveniente asentar, que si bien es cierto que el artículo 139 de la Ley de Amparo establece que el auto en que un Juez de Distri-

to concede la suspensión deja de surtir sus efectos si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación los requisitos que se le fijaron para suspender el acto reclamado; dicho numeral no debe entenderse en el sentido de que el Juez de Distrito puede negar la suspensión definitiva a falta de cumplimiento de alguna de estas medidas impuestas en la provisional. Al respecto, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que podrán incrementarse las medidas, pero no negar la suspensión.

> SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SU OTORGAMIENTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL, NO DEPENDE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DECRETADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA PROVISIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que establecen lo relativo a la suspensión del acto reclamado en sus dos formas, provisional y definitiva, tratándose de aquéllos restrictivos de la libertad personal, se advierte que aun cuando tienen como finalidad paralizar el acto reclamado para que no se ejecute por la autoridad responsable, exigen la satisfacción de diversos requisitos para su otorgamiento, aunado a que de lo previsto en el primero de dichos preceptos y en el diverso 131 de la propia ley, se desprende que su dictado se realiza en dos estadios procesales y, por lo mismo, las condiciones para ese fin, en una y otra, son independientes. En razón de lo anterior, debe estimarse que el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, no depende del incumplimiento del quejoso respecto de las medidas de aseguramiento dictadas para la provisional, pues, por un lado, si en esta última no se cumplen las medidas señaladas, lo decretado en ella quedará sin efecto y podrá la responsable ejecutar el acto, en tanto no se dicte la suspensión definitiva y, por el otro, porque el Juez de Distrito para normar su criterio y resolver sobre ella cuenta con el informe de las autoridades responsables y con las pruebas que conforme a la ley pueden ofrecerse y desahogarse, elementos que no tenía al resolver sobre la suspensión provisional, por lo que podrá, si lo estima conveniente, decretar estas medidas, o bien, otras diferentes.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 1a./J. 75/2001, pág. 141.

> SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCU-

LO 136 DE LA LEY DE AMPARO, PUEDEN INCREMENTARSE AL OTORGARSE AQUÉLLA, SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON ALGUNA DE LAS DECRETADAS EN LA PROVISIONAL, COMO LA DE PRESENTARSE ANTE EL JUEZ NATURAL A RENDIR DECLARACIÓN PREPARATORIA. En los casos en que el quejoso no cumpla con alguna de las medidas de aseguramiento decretadas en la suspensión provisional, como la de comparecer ante el juez de la causa para el efecto de rendir declaración preparatoria, no es contrario a los preceptos que rigen el incidente relativo, el que al otorgarse la suspensión definitiva se incrementen las medidas de aseguramiento del peticionario de garantías para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el supuesto de que no se le conceda el amparo, porque ante el desacato referido, existe la presunción fundada de que el promovente pretende evadirse de la acción de la justicia. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas a fin de cumplir el cometido legal de efectuar la devolución respectiva; sin que esto implique la exigencia de requisitos mayores a los consignados por el precepto 124 de la ley de la materia para la procedencia de la medida cautelar, pues en realidad se trata sólo del ejercicio de facultades de parte del juzgador para cumplir eficazmente el cometido indicado, así como evitar que el quejoso, dada su contumacia, se sustraiga de la acción de la justicia y se suspenda el procedimiento penal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo XIII, abril de 2001, tesis 1a./J. 6/2001, pág. 428.

SUSPENSIÓN, EFECTOS. ORDEN DE APREHENSIÓN, SI ESTÁ ARRAIGADO EL QUEJOSO. Si bien es cierto que de la interpretación, a contrario sensu, del párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo se desprende que cuando la orden de aprehensión se refiera a delito que conforme a la ley permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión respectiva deberá tener el efecto de que no se cumpla mientras tanto se resuelve el juicio de amparo sin perjuicio, de que el Juez de Distrito dicte las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, con la finalidad de que pueda ser entregado a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo; dicha regla no tiene aplicación cuando el quejoso ya se encuentra limitado en su libertad de tránsito en virtud de un arraigo decretado por la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público, de conformidad con la legislación secundaria. Lo anterior, en virtud de que al tener la institución del arraigo la doble finalidad de facilitar tanto la integración de la ave-

> riguación previa respectiva como, llegado el caso, el evitar que se imposibilite el cumplimiento de la orden de aprehensión que llegue a dictarse y el hacer efectiva la sanción privativa de la libertad, funciones que tiene encomendadas constitucionalmente el Ministerio Público, es indudable que la suspensión que se llegara a otorgar contra la respectiva orden de aprehensión, para que no sea cumplimentada (a pesar de que pudiera tratarse de un delito no grave y que por tal circunstancia permitiere la libertad provisional bajo caución), frustraría la culminación de un proceso que ya se inició y que está autorizado por la propia ley, sin ninguna justificación, contrariando el espíritu con el que, tanto la jurisprudencia como la doctrina, han concebido la medida cautelar de la suspensión en el juicio de amparo, esto es, el simple mantenimiento de las cosas en el estado que guardan; pero bajo ningún concepto, el frustrar de manera definitiva el objetivo de una medida cautelar legalmente establecida, cuyo inicio ya tuvo verificativo.
>
> Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis I.1o.P.51 P, pág. 1093.

Las medidas que deben de tomarse en la suspensión provisional en estos casos, deben ser mínimas, pues aún no se tienen los informes previos.

El segundo de los supuestos tratándose de la suspensión contra un acto futuro inminente de autoridad judicial, es aquél en el que los hechos delictuosos que se atribuyen al quejoso no permiten que éste disfrute del beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a la fracción I del precepto 20 constitucional en vigor, esto es, cuando el delito que se le imputa al acusado es considerado como grave por la ley, caso en el que la suspensión provisional sólo surte efectos para que una vez detenido el quejoso, quede a disposición del Juez de Distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, debiendo la autoridad responsable informar al Juez de Distrito cualquier situación jurídica relacionada con el asunto, esto en observancia a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Si se trata de la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial se concede con la salvedad de que dicha medida cautelar no surtirá sus efectos si con posterioridad a la concesión de la medida suspensional el quejoso es sorprendido en flagrante delito o la detención la decreta el Ministerio Público con base en la facultad que le confiere el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal vigente.

En estos dos supuestos es necesario que la autoridad responsable manifieste al juez de Amparo en su informe previo que rinda, cuáles son los hechos delictuosos que se imputan al quejoso, la penalidad aplicable, la cuantía de los daños causados o del beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial.

Los anteriores supuestos se encuentran previstos en los párrafos primero, cuarto y quinto del multireferido artículo 136 de la ley de la materia, que, respectivamente, a la letra dicen:

> ARTÍCULO 136.—"Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
>
> …Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.
>
> …Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiere a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación."

A este respecto, se puede considerar que esta disposición tiene como propósito proteger la integridad física del quejoso, lo cual no impide que éste pueda ser aprehendido, precisamente porque su único efecto es que quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que se encuentre detenido o recluido, del cual no podrá ser trasladado. El efecto es de importancia puesto que concluido el amparo el Juez de Distrito en cualquier momento puede ordenar la libertad del quejoso, sin necesidad de acudir al procedimiento de ejecución de sentencia que es más tardado.

Ahora bien, si el quejoso reclama un auto de formal prisión, y se encuentra privado de su libertad a disposición del juez de la causa, cuando tiene derecho a la libertad caucional por tratarse de un delito no grave, se le podrá otorgar el beneficio de su libertad provisional, pues así lo determina el segundo párrafo del artículo 130, cuando señala:

"…sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, sin perjuicio de que además pueda tomar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes."

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo numeral 136, establecido en la reforma del 10 de enero de 1994, textualmente dice:

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 Constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.

La reforma de 1994, acogió los criterios de improcedencia de la suspensión cuando la negativa a conceder la libertad caucional constituye el acto reclamado sustentados por tribunales colegiados, pues anteriormente la libertad provisional bajo caución en el amparo no procedía si el juez responsable no se había pronunciado al respecto, por no haberse solicitado.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CUANDO SU NEGATIVA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. El artículo 124 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, dispone que el Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; por lo que, si dicho juez concede al quejoso en el incidente de suspensión la libertad provisional bajo caución, que le había sido negada por la autoridad responsable y que constituye el acto reclamado en la demanda de garantías, procede incorrectamente, pues tal concesión deja sin materia el amparo en cuanto al fondo.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Sexta parte, pág. 103.

La caución no debe fijarse de la misma forma en que se fija la garantía como requisito de efectividad para la suspensión. Así aquélla debe sujetarse preferentemente a la fracción I del artículo 20 constitucional, y no a la ley ordinaria, una vez que se tengan los elementos necesarios para fijarla, como lo es el informe del juez y las copias de los autos y constancias necesarias para tal efecto y desde luego, esta

libertad caucional procede siempre y cuando el quejoso esté privado de su libertad y no la haya solicitado ante el juez ordinario. Se necesita un informe previamente a la concesión de tal beneficio.

INTERPRETACIÓN

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. CUANDO LA CONCEDE UN JUEZ DE DISTRITO EN EL CUADERNO DE SUSPENSIÓN DEBE HACERLO PREFERENTEMENTE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL Y NO CONFORME A LA LEY LOCAL. Para conceder al quejoso la libertad provisional bajo caución en el cuaderno de suspensión el juez de amparo debe sujetarse a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 constitucional y no al 493 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, pues al exigir este último precepto que el inculpado deberá caucionar, además de otros conceptos, el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso, va más allá de lo requerido por la norma constitucional, y aunque el séptimo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para otorgar aquel beneficio conforme a las leyes aplicables al caso, la misma disposición ordena que en primer término se esté a lo previsto en el artículo 20 constitucional, fracción I, el cual condiciona el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución a garantizar exclusivamente el monto de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse al inculpado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tribunales Colegiados de Circuito, III, mayo de 1996, IV.2o.6 P, pág. 653.

LIBERTAD BAJO CAUCIÓN, SÓLO OPERA EN FAVOR DE PERSONAS QUE SE ENCUENTREN PRIVADAS DE SU LIBERTAD. Si al dictarse auto de formal prisión en contra de una persona como presunta responsable de un delito castigado con pena privativa de la libertad, la misma no se encuentra sujeta a prisión preventiva, y en caso de que no esté subjúdice un juicio de garantías promovido contra tal auto, en el que se le haya concedido al procesado la suspensión para que no sea privado de su libertad, o una vez que cause ejecutoria la sentencia en la que se sobresea en el juicio o se niegue al quejoso el amparo solicitado, el juez de la causa debe ordenar la reaprehensión del procesado, y una vez ejecutada tal orden, si lo solicita esta persona y procede legalmente, podrá concedérsele su libertad bajo caución; de no ser así, resulta ilegal e ilógico requerir al procesado que no está privado de su libertad, exhiba una deter-

minada cantidad para poder gozar de su libertad caucional, ya que no puede otorgarse la libertad bajo caución a una persona que se encuentra en libertad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, febrero de 1996, T.VI.3o.14 P., pág. 443.

LIBERTAD CAUCIONAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. QUEJA SIN MATERIA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA. Tomando en cuenta que el beneficio de la libertad bajo caución solicitado en el incidente de suspensión del juicio constitucional, al igual que la propia medida cautelar, sólo tiene vida jurídica durante el juicio de garantías; por lo tanto cuando el recurso de queja se interpone contra la resolución que negó esa libertad y el juicio ha sido fallado y causado ejecutoria, ello trae como consecuencia el quedar sin materia la queja, pues el fin buscado por el promovente del recurso carece ya de objeto y no existe ya razón para ocuparse de si es o no legal aquella negativa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, XIV-agosto, T. VI. 2o. 232 P, pág. 631.

CAUCIÓN, VARIACIÓN DE LA; DESPUÉS DE OTORGADA, IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REVOQUE SU PROPIA DECISIÓN. El Juez de Distrito, al variar el tipo de caución otorgada por el recurrente para obtener su libertad en el incidente de suspensión, interpretó incorrectamente los preceptos legales en que fundó su decisión, pues inicialmente establece que para conceder tal beneficio debía otorgarse una garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, lo cual fue cumplido por el quejoso, y posteriormente en diverso auto so pretexto de la facultad que le confiere el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previene al quejoso para que otorgara un billete de depósito por el monto del fraude materia de la formal prisión, de acuerdo con el artículo 493 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, apercibiéndolo que de no hacerlo revocaría la medida cautelar en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; situación que se estima ilegal, pues la anterior determinación judicial no encuadra dentro de alguna de las hipótesis inmersas en el último precepto legal citado, amén de que el juez federal no estaba facultado para variar el tipo de caución otorgada, pues ello implica que de motu proprio revoque sus propias determinaciones.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, X-diciembre, pág. 262.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL, ACUERDO QUE RESUELVE ACERCA DE LA. ES DISTINTO DEL AUTO QUE NIEGA LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN. El proveído en que el Juez de Distrito conceda la suspensión provisional y niega la libertad bajo caución, se refiere a dos puntos de derecho, y si bien es verdad que el acuerdo en que se niegue al quejoso el beneficio de la libertad bajo caución que establece el artículo 136, de la Ley de Amparo, se debe considerar que por su naturaleza trascendental, pueda causar daños y perjuicios graves al peticionario de amparo; sin embargo, no por ello debe considerarse, que contra tal proveído procede el recurso de queja, que establece la fracción XI del artículo 95, de la ley en comento, porque acorde con tal disposición legal, el recurso de queja ahí previsto, procede exclusivamente contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional, e incluso la finalidad del acuerdo que niega o conceda la medida cautelar mencionada, es distinta e independiente de la que se persigue con la obtención, del beneficio de libertad bajo caución; puesto que mientras el efecto de la suspensión provisional estriba en mantener las cosas en el estado que guarden cuando se promueve el amparo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 de la ley en cita; con el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, se pretende evitar continuar privado de la libertad, lo que nada tiene que ver con la suspensión provisional, porque tal medida cautelar se puede conceder o negar independientemente de que se conceda o no la libertad bajo caución, cuando ésta es solicitada, como sucedió en la especie.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación, XI-enero, pág. 345.

La Suprema Corte en diversas ejecutorias ha establecido criterios aclaratorios respecto de la diferencia entre la suspensión y la libertad caucional, una de ellas es la emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCIX, visible en la página 575, bajo el rubro:

LIBERTAD PERSONAL, SUSPENSIÓN DE SU RESTRICCIÓN. (LIBERTAD CAUCIONAL). No se trata de concederle al quejoso el beneficio a que se refiere la fracción I del artículo 20 Constitucional, es decir, el de la libertad caucional, si se está dentro de lo previsto por el artículo 136 de la Ley de Amparo que dispone que: si el acto reclamado afecta a la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en "lo que se refiere a su libertad personal,

quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal, por lo que hace a la continuación de éste", pero como esta Sala lo ha resuelto en varias ejecutorias, al concederse la orden de suspensión, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable, si no se le concediere el amparo, entre las que se encuentran el otorgamiento de fianza: la obligación del quejoso de presentarse ante el juez de la causa cuantas veces lo estime conveniente, y hacerlo vigilar por la policía.

Asimismo, considero importante citar la jurisprudencia número 73, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, tomo 9, visible en la página 112, emitida en torno a la libertad caucional, bajo el rubro:

LIBERTAD CAUCIONAL. Para que pueda concederse la suspensión en los términos de la Ley de Amparo, en los casos en que se trate de la garantía de la libertad personal, es indispensable que el quejoso pueda quedar a disposición de la autoridad federal, requisito que no puede llenarse si el que pide el amparo está sustraído a la acción de las autoridades, y no se pueden tomar las medidas de aseguramiento que procedan.

LIBERTAD PROVISIONAL. REVOCACIÓN DE LA. EN LOS CASOS DE GRAVE INCUMPLIMIENTO O DESACATO A UNA ORDEN DEL JUEZ, NO ES INDISPENSABLE OÍR PREVIAMENTE AL PROCESADO PARA DECRETAR LA REVOCACIÓN DE LA. Una vez ejercitado, el derecho a la obtención de la libertad provisional, previsto en la fracción I del artículo 20 de la Ley Fundamental, se convierte en un beneficio cuya permanencia o vigencia está regulada por la ley adjetiva, dependiendo fundamentalmente de la conducta que observa el procesado, vinculada al proceso. Dados los fines de celeridad y continuidad (que se traducen en la satisfacción de ideal de pronta y eficaz impartición de la justicia), que la sociedad, el Estado y el propio inculpado persiguen en el proceso, el legislador ordinario ha establecido causas de revocación del beneficio, entre las cuales, figura el incumplimiento por parte del procesado a una orden legítima del juez que le ha sido legal y oportunamente notificada. Pero no cualquier incumplimiento puede originar la revocación de la libertad provisional, sino sólo aquellos que sean de tal manera graves que lleven al juez a la convicción de que el procesado intenta evadir la acción de la Justicia, sustrayéndose a la autoridad del órgano jurisdiccional; u otros que, por su frecuencia y reiteración, afecten severamente la marcha normal del proceso, retardándolo. Como ejemplo del primero,

puede citarse el caso del procesado que no acude al juzgado a firmar el libro de control de reos en libertad provisional durante un lapso prolongado, sin que el juez tenga noticia de su paradero; o el del fiador que es requerido para la presentación del procesado dentro del plazo que para ello se le concede e informa al juez que no obstante haber tratado de localizarlo en reiteradas ocasiones y de haberle dejado recados, no tuvo éxito. Para ilustrar el segundo, sirve el caso del procesado que acude a firmar el mencionado libro, pero que con frecuencia incumple otros mandatos legítimos del juez sin intentar justificar su proceder; por ejemplo, no acude a los careos legalmente decretados. Unicamente causas de esta naturaleza darían lugar a la revocación del beneficio sin audiencia previa del procesado, bastando para fundar y motivar el proveído respectivo que obrara constancia fehaciente en el expediente de los hechos que se estimaron graves y que dieron origen a tal determinación, satisfaciéndose con ello la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 de la Constitución General de la República.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia: Primera Sala, Tomo 75, marzo de 1994, tesis 1ª./J. 2/94, pág. 121.

Arresto

En relación a la privación de la libertad personal por orden de arresto administrativo o judicial, cabe hacer mención que el artículo 136 de la Ley de Amparo, nada menciona específicamente; sin embargo, por tratarse de un acto que ocasiona perjuicios de imposible reparación, ya que momento a momento agravia al gobernado, la suspensión debe concederse para el efecto que no se siga ejecutando el acto y se deje en libertad al quejoso, tomando las medidas necesarias para que su cumplimiento no se frustre, hasta en tanto se resuelva el amparo; así, de negarse la protección constitucional, se obligaría al quejoso a cumplir el tiempo de arresto faltante. En materia penal el arresto es hasta por treinta y seis horas, de ahí que el actuar del juez debe ser ágil y tomando las medidas adecuadas de aseguramiento, para devolverlo para el caso de que se le niegue la protección federal, pero no aquéllas a las que se refieren los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo. Así lo han establecido los criterios de los tribunales federales, los cuales a continuación se transcriben:

INTERPRETACIÓN

ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVIS-

TAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obte-ner su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Pleno, Tomo XII, agosto de 2000, tesis P./J. 75/2000, pág. 18.

ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A EFECTO, EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO. Es infundado el argumento de inconformidad que formula el recurrente acerca de no haber considerado el juez Federal al conceder la suspensión definitiva del acto reclamado por el quejoso, fijar la situación en que habrán de quedar

las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como imperativamente se señala en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, si de la lectura de la resolución recurrida, se desprende que si se cumplieron dichas prevenciones en tanto que se estableció que se concede la medida suspensional definitiva para el efecto de que el quejoso no sea arrestado con motivo del medio de apremio decretado por el juez civil y su no ejecución por parte de las restantes responsables, lo que indica que sí se fijó la situación definitiva de la medida suspensional, y se cuidó de conservar la materia del amparo, si el acto reclamado se hizo consistir precisamente en la orden de arresto por cierto número de días que como medida de apremio se decretó en contra del quejoso en el juicio civil de donde proviene dicho acto de modo que dada la naturaleza inminente de la ejecución del arresto, de no concederse el beneficio de la suspensión y negarse ésta, para cuando se resolviera en definitiva el juicio constitucional, posiblemente hubieran transcurrido los diez días de arresto y en consecuencia resultaría trascendente el juicio de garantías al haber desaparecido la materia del mismo.

Tercera Sala, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 205-216, Parte Sexta, pág. 79.

MEDIDAS DE APREMIO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE (ARRESTO). Cuando las medidas de apremio afectan la libertad personal, procede la suspensión en los términos de la Ley de Amparo, para que éste no quede sin materia; pero como la suspensión de esa medida de apremio seguramente que se traduce en daños y per-juicios para el colitigante del quejoso, esa suspensión debe concederse previo el otorgamiento de la garantía relativa.

Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, pág. 1098.

ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si el acto reclamado se hace consistir en el arresto que se trata de imponer al quejoso, por desobedecimiento a una orden dada por la autoridad, es evidente que, de negarse la suspensión de ese acto, quedaría sin materia el juicio de amparo, porque en el supuesto de que al quejoso le fuera concedida la protección de la justicia federal, sería imposible físicamente reponerlo en el goce de la garantía violada.

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIII, pág. 1784.

ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE APERCIBIMIENTO DE. Si la autoridad judicial del fuero común, conmina a una de las partes para que haga el depósito de una suma de dinero, con

apercibimiento de arresto, y la misma parte contesta que carece de numerario para hacer el depósito y que aun cuando lo tuviese, no lo depositaría, porque no tiene obligación de hacerlo, la imposición y ejecución del arresto es inminente, y procede conceder la sus-pensión, debiendo el Juez de Distrito dictar las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable, si no se le concediera el amparo.

Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIV, pág. 2938.

Si el arresto aún no se ejecuta, por tratarse de un acto futuro inminente la suspensión debe concederse, con las medidas de aseguramiento necesarias, garantía, arraigo, etcétera; pero nunca para que siga privado de su libertad.

Extradición

La resolución administrativa de extradición sí es suspendible para no dejar sin materia el juicio de amparo. Con mayor razón la orden de detención con fines de extradición, aplicando las medidas conducentes para que el quejoso no se evada a la acción de la justicia y para los efectos determinados por la gravedad del delito, conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo.

Por otra parte, en los casos de extradición, la suspensión sólo procede contra actos realizados en el territorio nacional y no los ocurridos en el país extranjero, puesto que la jurisdicción del Juez de Distrito para ordenar la paralización de los actos está delimitada por el territorio mexicano. Luego, los actos de autoridades del país requerido no son suspendibles.

En materia de extradición, es conveniente transcribir las siguientes tesis relativas a la suspensión:

EXTRADICIÓN. Si bien es cierto que el Estado tiene interés en que se respeten los tratados internacionales y se depure la conducta de los extranjeros residentes en el país; también lo es que, al mismo Estado, importa que se respeten las garantías individuales; y que la suspensión debe concederse cuando su negativa implicaría que se dejara sin materia el juicio de amparo, por lo que debe concederse dicha suspensión, contra la resolución administrativa que acuerde la extradición de los extranjeros, para efecto de que, mientras se falle el amparo en lo principal, el quejoso quede a disposición de los Tribunales Federales.

Semanario Judicial de la Federación, Pleno, Quinta Época, Tomo XIX, pág. 9.

EXTRADICIÓN, SUSPENSIÓN DEFINITIVA PROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS DEL MANDAMIENTO DE. No es verdad de que concederse la suspensión definitiva contra los efectos que procede la orden de extradición se afecte al interés social, porque no motiva la inobservancia del tratado de extradición celebrado por el Gobierno de la República Mexicana con el país solicitante, con detrimento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pues al concederse la medida suspensional, para mantener viva la materia del amparo, lo único que se ocasiona es suspender los efectos de la orden de extradición, lo que no implica la inobservancia del tratado; antes bien, con esa medida se da oportunidad a los Tribunales Federales de que analicen la constitucionalidad de la orden de extradición reclamada, de donde si no se afecta al interés social, es procedente conceder la suspensión definitiva de acuerdo con lo que disponen los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo, para el efecto de que no se ejecute tal mandamiento de extradición, debiendo quedar el quejoso a disposición del juez a quo en el lugar en que se encuentra detenido, en cuanto se refiere a su libertad personal, hasta en tanto no se falle en sentencia ejecutoria el juicio de amparo respectivo.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, volumen 187-192, parte sexta, pág. 73.

La siguiente tesis es discutible, puesto que deja sin materia el amparo.

EXTRADICIÓN, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE EN CASO DE. Tratándose de un acuerdo en virtud del cual se permite la extradición del quejoso, de conformidad con los tratados señalados con las potencias extranjeras, y dado que éstos se incorporan a la Constitución, como parte integrante de la misma, como en su cumplimiento están interesados el orden público y la nación entera, porque tiende a la represión de los delitos de una forma general y absoluta, sin distinción de fronteras, no estando satisfecho el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, Quinta Época, Tomo LXXXII, pág. 3966.

Ampliación de solicitud de extradición

En el caso de las solicitudes hechas por las autoridades mexicanas al Gobierno de otro país extranjero, para el efecto de que el quejoso sea consignado, detenido, juzgado o sentenciado por hechos diversos y anteriores a los que dieron origen a la petición original de

extradición, la suspensión resulta procedente, siempre y cuando dicha solicitud tenga por sí misma efectos restrictivos de libertad, es decir en el supuesto de que el quejoso siendo mexicano o extranjero se encuentre detenido en nuestro país o en el extranjero, por virtud del procedimiento de extradición, pues en este caso la petición de referencia si incide en su libertad personal, ocasionándole con ello agravios de imposible reparación, de conformidad con los criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de Circuito, citados con antelación.

Sin embargo, en el caso de que el quejoso siendo mexicano ya hubiese sido extraditado a nuestro país, se encuentre en el mismo sin estar privado de su libertad, y además en autos no se desprenda que exista una orden de aprehensión en su contra, la suspensión resulta improcedente, toda vez que en este supuesto, en el que la petición de referencia por sí misma no tiene efectos restrictivos de libertad, habrá que atender a que se cumpla con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales no se colman en la especie, toda vez que la solicitud de ampliación forma parte de un procedimiento de extradición que se encuentra en su etapa de integración, cuya paralización sería contraria al orden público e interés social, pues de concederse la medida cautelar solicitada, se impediría el ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tienen encomendadas las autoridades mexicanas para la investigación y persecución de los delitos; aunado a que la petición de ampliación de referencia se sustenta en los tratados de extradición relativos, los cuales por constituir una ley positiva vigente, de carácter obligatorio y orden público, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de nuestro país, que no son suspendibles.

Arraigo

La Ley de Amparo no establece específicamente los efectos de la suspensión tratándose del arraigo, sin embargo existe el criterio que por afectar la libertad personal, la suspensión es procedente a partir de la solicitud correspondiente, y tiene como efecto paralizar el acto, para continuar con él, en su caso, si se niega el amparo. A continuación algunas tesis que nos ilustran.

> ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecien-

tos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Primera Sala, Tomo X, noviembre de 1999, tesis 1a./J. 78/99, pág. 55.

INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE EL QUE RECLAMA LA NEGATIVA DEL ARRAIGO DOMICILIARIO DEL PRESUNTO RESPONSABLE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Carece de interés jurídico el impetrante de garantías que reclama del Ministerio Público el acuerdo que niega el arraigo domiciliario del presunto responsable en la averiguación previa, pues tal determinación no le ocasiona daños o perjuicios a sus intereses jurídicos, patrimoniales, o en general personales, dado que las diligencias que practica o acuerda el representante social tendientes a la integración de dicha averiguación previa se encuentran excluidos de la esfera jurídica de los particulares.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, tesis XIV.2o.83 P, pág. 871.

ARRAIGO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN SE HAYA LEVANTADO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA. Si a través del juicio de amparo se reclamó la orden de arraigo decretada por un Juez de Distrito, pero ésta fue levantada con motivo de la emisión de la orden de aprehensión que se obsequió en contra del quejoso, ello trae como consecuencia que tal acto reclamado deje de surtir sus efectos, pues los mismos sólo rigen hasta el momento en que se integra la averiguación previa por la cual se ejerce la acción penal, feneciendo su vigencia cuando el órgano encargado de la persecución de los delitos concluye su actividad investigadora y es la autoridad jurisdiccional la que decide la situación jurídica del indiciado, esto es, cuando en uso de sus facultades determina si procede o no el libramiento de la orden de aprehensión respectiva, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XIV, agosto de 2001, tesis 1ª, LXXXIII, pág. 168.

Formatos:

Me permito mostrar algunos autos que se dictan en el cuaderno principal del juicio de amparo y en el incidente de suspensión, que elaboré cuidadosamente con opiniones de distinguidos funcionarios judiciales amigos, en razón de mi labor como Juez de Distrito.[77]

8.1. Auto de radicación normal (principal):

En _____ de _____ de _____, la secretaria da cuenta al juez con un escrito de demanda promovida por _____ . CONSTE.

México Distrito Federal, a _____ de _____ de _____.

Vista la demanda de garantías promovida por _____ en contra de actos de _____, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 36, 114, 116, 117, 147 y 156 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado; intégrese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita; pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), el cual deberán rendir dentro de los tres días siguientes al en que queden legalmente notificados de este acuerdo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las _____ del día _____ de _____ de _____ .

Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde.

Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda y como autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la(s) persona(s) precisada(s) en la misma.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma…

[77] Román Palacios, Humberto, Gómez Argüello, Roberto y Hernández Viazcán, Samuel.

8.2. Suspensión provisional de la orden de detención de autoridades administrativas (acuerdo, incidente):

México Distrito Federal a _____ de _____ de _____.

Como está ordenado en el expediente principal, con las dos copias simples de la demanda, promovida por , contra los actos de , consistente en la orden de detención, fórmese por duplicado y cuerda separada este incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número . Con fundamento en los artículos 122, 124, 130, 131, 132 y 142 de la Ley de Amparo pídase informe previo a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), en el que deberá(n) rendir en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este proveído. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las del día de mil novecientos noventa y cuatro. Se concede al (los) quejoso(s) la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se le prive de su libertad personal, hasta en tanto se notifique la interlocutoria que se dicte acerca de la suspensión definitiva; quedando obligado(s) el(los) quejoso(s) a comparecer ante el Representante Social cuantas veces fuere requerido para ello con el objeto de la investigación de algún delito. Esta medida cautelar no surte efectos si el acto reclamado es consecuencia de la ejecución de orden de autoridad judicial o el quejoso sea sorprendido en flagrante delito o la detención la haya decretado el Ministerio Público, en base a la facultad contenida en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Expídase copia certificada de este acuerdo, previa identificación.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma…

8.3. Incomunicación. Suspensión de plano cuando se reclama además la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial (expediente principal auxiliar)

En _____ de _____ de mil _____, la secretaria da cuenta con la demanda de garantías promovida por _____ Doy fe.

México Distrito Federal a de de .

Vista la demanda de garantías promovida por _____ en favor de _____ contra actos de _____, con fundamento en los artículos 17, 36, 117, 122, 123, 156 y 206 de la Ley de Amparo, téngase por presentada la demanda; fórmese expediente; regístrese en el libro correspondiente. Se decreta DE PLANO la suspensión de los actos reclamados, previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que cese la ejecución de los mismos. Debiendo la(s) autoridad(s) responsable(s) informar de inmediato, dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la Ley Penal por el delito de Abuso de Autoridad, en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo.

En relación a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, que también se combate, con dos copias de la demanda, fórmese el incidente de suspensión por separado y duplicado.

Por conducto del actuario de este juzgado, requiérase al(los) directamente agraviado(s), en el lugar donde está(n) detenido(s) para que en el acto de la notificación del presente acuerdo o por escrito dentro de los tres días siguientes manifieste(n) si ratifica(n) o no la demanda de garantías promovida a su favor, apercibido(s) que de no hacerlo se tendrá por no presentada.

Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en la demanda y como autorizados a la(s) persona(s) precisada(s) en la misma. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde. Expídase copia certificada de este acuerdo a los promoventes.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma…

8.4. Acuerdo de suspensión provisional en el incidente de suspensión, cuando además de la incomunicación se reclama la privación de la libertad no judicial

México, Distrito Federal, a_____de_____de_____.

Como está ordenado en el expediente auxiliar integrado con motivo de la demanda de amparo promovida por _____ en favor de_____, fórmese por separado y duplicado incidente de suspensión. Con apoyo en los artículos 17, 18, 122, 124, 130, 131,

132, 136 y 142 de la Ley de Amparo. Pídase informe previo a la(s) autoridad(es) responsable(s) el que deberá(n) rendir en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo se le(s) impondrá una corrección disciplinaria; se señalan las _____ del _____ de ____, para la celebración de la audiencia incidental.

Se concede la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, en los siguientes términos.

Si la detención del quejoso es efectuada por la(s) autoridad(es) administrativa(s) señalada(s) como responsable(s), distinta(s) del Ministerio Público, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el quejoso quede(n) a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. Si la detención obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga de inmediato a disposición del juez correspondiente; la autoridad responsable deberá indicar en su informe previo la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público o autoridad judicial.

Si la detención es por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal o en caso de flagrancia, la suspensión provisional se concede para que el (los) quejoso(s) quede(n) a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentra(n), y a disposición del Agente del Ministerio Público, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que al(los) quejoso(s) se le(s) consigne(n) dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según el caso, contados a partir de su detención, o bien ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la averiguación previa. Requiérase al Agente

del Ministerio Público de la Federación responsable, para que en su informe previo, acompañe las constancias de la averiguación correspondiente, en la inteligencia de que, si de dicho informe y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia o bien no se rinde el informe dentro del término concedido, se ordenará la inmediata libertad del (los) quejoso(s).

Como se solicita expídase a la parte quejosa copia certificada de esta resolución.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma…

8.5. Auto de radicación. Orden de detención consumada por parte de autoridades no judiciales, sin que se reclamen los otros actos del artículo 17 de la Ley de Amparo (expediente principal):

En _____ de _____ de _____, la secretaria da cuenta con la demanda de garantías promovida por_____ Doy fe.

México, Distrito Federal, a _____de _____de _____.

Vista la demanda de garantías promovida por en favor de _____ contra actos de _____, con fundamento en los artículos 17, 36, 117, 122, 123, 148, 156 y 206 de la Ley de Amparo, téngase por presentada la demanda y tramítese incidente de suspensión por separado y duplicado.

Por conducto del actuario de este Juzgado requiérase al (los) directamente agraviado(s) en el lugar donde se encuentra(n) detenido(s) para que en el acto de notificación del presente acuerdo o por escrito dentro de los tres días siguientes, manifieste(n) si ratifica(n) o no la demanda de garantías promovida en su favor, apercibido(s) que de no hacerlo se tendrá por no presentada.

Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que se indica y se tiene como autorizados para el efecto a las personas que se señalan en la demanda. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde.

Notifíquese y cúmplase.

Así lo proveyó y firma…

8.6. Suspensión provisional de orden de aprehensión de juez no consumada (incidente):

México, Distrito Federal, a_____de _____de _____.

Como está ordenado en el expediente principal, con dos copias de la demanda, con fundamento en los artículos 122, 124, 125, 130, 131, 132, 136, 138, 139, 142 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ____, promovido por _____.

Pídase informe previo a las autoridades señalada (s) como responsable(s), el que deberá(n) presentar ante este Juzgado en un plazo de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación de este proveído. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las _____ del día _____de _____.

Se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: para el caso de que la penalidad del delito que se le imputa al (los) quejoso(s), alcance el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, en vigor, la suspensión provisional de los actos reclamados es para el efecto de que no sea(n) privado(s) de su libertad personal, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a la misma, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado. La suspensión provisional que se decreta, surte efecto desde luego, pero dejará de surtirlo si no se cumple con los siguientes requisitos a) Que el (los) quejoso(s) otorgue(n) ante este Juzgado una garantía, en el término de tres días, por la suma de $ (_____00/100 moneda nacional) en billete de depósito expedido por Nacional Financiera, la cual se hará efectiva en favor del erario federal en caso de no cumplirse con los demás requisitos aquí señalados; b) Que el quejoso se presente ante el juez responsable dentro del término de tres días, a partir de que quede(n) debidamente notificado(s) de este acuerdo para que rinda(n) la declaración preparatoria correspondiente, con la obligación de comparecer ante el propio juez cuantas veces lo(s) cite para desahogar diligencias relacionadas con dicho procedimiento; c) Que el quejoso no se ausente del lugar de su residencia, sin permiso de este Tribunal Federal, d) Que informe de inmediato a este Juzgado de Distrito cualquier situación jurídica en relación con su proceso.

Por otra parte, para el caso de que los hechos delictuosos que se atribuyen al (los) quejoso(s) no alcance el beneficio de la libertad bajo caución, conforme a la fracción I, del precepto 20 constitucional citado, en vigor, la suspensión provisional solo se entenderá otorgada

para el único efecto de que una vez detenido(s) el (los) quejoso(s) quede(n) a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea(n) internado(s) y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, debiendo la(s) autoridad(es) responsable(s) informar a este Juzgado de Distrito cualquier situación jurídica relacionada con este asunto.

Esta medida provisional dejará de surtir efectos hasta en tanto se les notifique a los responsables la resolución sobre suspensión definitiva que se emita al respecto en la audiencia incidental. Dígase al (los) juez (jueces) responsable(s) que al rendir su informe previo deberá(n) manifestar cuales son los hechos delictuosos que se imputa al (los) quejoso(s), la penalidad aplicable y la cuantía de los daños causados o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma…

Este formato es el que normalmente se utiliza en los juzgados de Distrito; sin embargo considero que las medidas que se toman en el tercer párrafo, como lo es la garantía, la presentación ante el juez de la causa, etcétera, no deben señalarse, sino hasta que se sepa la certeza del acto reclamado y la naturaleza del delito que se le imputa al quejoso, es decir, al dictarse la resolución respecto a la suspensión definitiva que deberá resolverse dentro del término de las 72 horas, después de transcurrido el de 24 horas a la autoridad para rendir su informe previo, de ahí que la audiencia se debe fijar observando esos términos y el que se lleve para la notificación; hablemos de un término de cinco días hábiles como mínimo y si las autoridades son foráneas hasta diez días. Con el cuarto párrafo se está tomando la medida a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Amparo.

A mi juicio el formato debería quedar como sigue:

México, Distrito Federal, a de de .

Como está ordenado en el expediente principal, con dos copias de la demanda, con fundamento en los artículos 122, 124, 125, 130, 131, 132, 136, 138, 139, 142 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspen-

sión relativo al juicio de amparo número , promovido por _____ .

Pídase informe previo a las autoridades señalada(s) como responsable(s), el que deberá(n) presentar ante este Juzgado en un plazo de veinticuatro horas, contados a partir de la notificación de este proveído. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las del día _____de .

Se concede la suspensión provisional en los siguientes términos: para el caso de que la penalidad del delito que se le imputa al (los) quejoso (s), alcance el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, en vigor, la suspensión provisional de los actos reclamados es para el efecto de que no sea(n) privado(s) de su libertad personal, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a la misma, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado.

Por otra parte, para el caso de que los hechos delictuosos que se atribuyen al (los) quejoso(s) no alcance el beneficio de la libertad bajo caución, conforme a la fracción I, del precepto 20 constitucional citado, en vigor, la suspensión provisional solo se entenderá otorgada para el único efecto de que una vez detenido(s) el (los) quejoso(s) quede(n) a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecto a su libertad personal, en el lugar donde sea(n) internado(s) y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento, debiendo la(s) autoridad(es) responsable(s) informar a este Juzgado de Distrito cualquier situación jurídica relacionada con este asunto.

Esta medida provisional dejará de surtir efectos hasta en tanto se les notifique a los responsables la resolución sobre suspensión definitiva que se emita al respecto en la audiencia incidental. Dígase al (los) juez (jueces) responsable(s) que al rendir su informe previo deberá (n) manifestar cuales son los hechos delictuosos que se imputa al (los) quejoso(s), la penalidad aplicable y la cuantía de los daños causados o el beneficio económico obtenido, en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial, o el monto estimado de la reparación del daño.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma…

9. Consideraciones personales, en torno a la suspensión en materia penal

La suspensión en materia penal en el amparo indirecto, se prevé en los artículos 123, 124, 130 y 136 de la Ley de Amparo.

En razón de su naturaleza, hay actos que pueden suspenderse y otros que no son suspendibles; dentro de los que se pueden suspender encontramos, por ejemplo, los actos futuros inminentes, los positivos, los de tracto sucesivo, los permanentes o continuos. Dentro de los que no pueden suspenderse tenemos a los actos negativos y los ejecutados o consumados, porque no tienen materia para la suspensión.

Si el acto reclamado se hace consistir en una inminente detención o bien en una inminente desocupación de un inmueble, esos actos son suspendibles por tratarse de actos futuros inminentes, los cuales también tienen el carácter de positivos, porque conllevan un actuar, es decir, un hacer; también aquéllos que se prolongan en el tiempo y que su ejecución es o se realiza día a día o momento a momento, pueden ser objeto de suspensión, por ejemplo, el embargo con intervención a la caja en materia civil, o bien los permanentes como la privación de la libertad, que a mi juicio, es un acto continuo, pues se prolonga en el tiempo, sin intervalos.

Los actos en materia penal que son objeto de suspensión conforme a la ley, son los siguientes: La privación de la vida, la deportación o el destierro, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, a saber; la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, las penas inusitadas o trascendentales; así también, tenemos los actos privativos de libertad judiciales y no judiciales, y por último, podemos mencionar los actos no privativos de libertad provenientes de autoridades penales judiciales y no judiciales. Los actos privativos de la libertad personal no judiciales pueden ser justificados o injustificados, todos ellos pueden ser pasados, presentes o futuros.

Como ya se dijo en apartados anteriores, existen dos tipos de suspensión: La de oficio y la suspensión a petición de parte; sabemos también que la suspensión de oficio se decreta de plano y en la misma pieza de autos, en razón de la naturaleza del acto reclamado que requiere de una pronta intervención de la justicia federal para impedir la ejecución; que en la suspensión a petición de parte se requiere como primer requisito que la solicite el agraviado, como segundo requisito que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan

disposiciones de orden público y, como tercer requisito, que de llegarse a ejecutar el acto, los daños y perjuicios que se causen sean de difícil (no imposible) reparación; que en este segundo tipo de suspensión se deberá formar un incidente por separado y duplicado, siendo su trámite sumarísimo que se resume al auto inicial donde se decreta la suspensión provisional, se piden los informes previos y se señala fecha para la audiencia incidental, la cual se llevará a cabo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción del informe o vencimiento del plazo para rendirlo, en esa audiencia se resuelve respecto a la suspensión definitiva.

En relación a la suspensión de oficio, el artículo 123 señala dos fracciones, la primera de ellas se refiere a los actos que importan peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; de lo que podemos advertir que señala los actos a que se refiere el artículo 17, al establecer los casos en que un tercero puede pedir el amparo a nombre del quejoso; sin embargo, no se incluye el acto de privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial.

La fracción **II** señala los actos que de consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En este caso podríamos pensar que encuadra la privación ilegal de la libertad; pero, de la lectura de los artículos 18 y 130 se advierte que refieren a la suspensión provisional y definitiva, conceptos de la suspensión a petición de parte, por lo que es válido concluir que en este supuesto conforme a la Ley de Amparo vigente, se debe tramitar incidente de suspensión y no debe concederse de plano y de oficio.

Los referidos artículos, textualmente establecen:

> ARTÍCULO 18.—"En el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca de juicio de amparo, después de que se haya resuelto sobre la suspensión defi-nitiva, mandará suspender el procedimiento en lo principal y consignará los hechos al Ministerio Público. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del agraviado, se tendrá por no interpuesta la demanda."
>
> ARTÍCULO 130.—"En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las

> medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estimen pertinentes. El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."

El artículo 123, además de no incluir en la suspensión de oficio a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, señala que los efectos de la suspensión de oficio, consisten en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso, o la ejecución de algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y que, en tratándose de los previstos en la fracción II (actos de imposible reparación), el efecto es ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, tomando el juez las medidas pertinentes para que no se realice la consumación de los actos reclamados, situación esta última inútil respecto a la privación de la libertad, dada la irreparabilidad del acto que se debe de suspender.

La privación de la libertad está permitida por la Constitución Federal en su artículo 16, únicamente en tres casos y por la comisión de hechos delictivos: la flagrancia; la urgencia (caso en que el ministerio público puede librar la orden de detención, observando los requisitos que el párrafo quinto del artículo 16 constitucional, señala); y la orden judicial. Fuera de estos casos, sólo la autoridad administrativa podrá imponer arrestos por treinta y seis horas, por infracciones a los reglamentos de gobierno, tal como lo contempla el artículo 21 constitucional; de ahí que si no estamos en cualquiera de estos supuestos, la detención no se justifica y resulta ilegal, sin dejar de considerar que la privación de la libertad es un acto de imposible reparación, que debe tratarse, cuando es ilegal, como aquellos actos irreparables en los que la suspensión debe ser de plano y de oficio.

De lo anterior, podemos concluir que la suspensión de oficio debe decretarse de plano y sin dilación alguna en la misma pieza de autos, atendiendo a que los actos mencionados en la fracción I, de ejecutarse, serían de imposible reparación las garantías violadas,

de ahí que sin mayor requisito y sin que lo solicite el agraviado, debe concederse la suspensión, para que cesen los efectos del acto reclamado.

También debemos hacer una reflexión respecto a algunos actos que señala el artículo 22 constitucional, concretamente a la multa excesiva y a la confiscación de bienes, actos que de ejecutarse no harían imposible la reparación de la garantía violada, sino difícil por tratarse de sanciones que implican un daño y perjuicio económico; no obstante lo anterior, la suspensión se decreta de oficio y de plano, sin darle oportunidad a la autoridad responsable de manifestar lo conveniente a los intereses que representa, asimismo, en estos dos casos, para conceder la suspensión de oficio resulta innecesario exigir una garantía. Los tribunales colegiados de Circuito han sustentado en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII-octubre, página 281, que en estos casos no es necesaria la exigibilidad de una garantía. Dice lo siguiente:

> SUSPENSIÓN CONTRA LAS ÓRDENES DE SECUESTRO, CONFISCACIÓN O DECOMISO DE MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NO ES NECESARIO OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS. Tratándose de la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo se pide contra las órdenes de secuestro, confiscación o decomiso de mercancía de procedencia extranjera, y no contra el cobro de contribuciones debidamente determinadas, no es el caso de otorgamiento de garantía para que la medida cautelar surta efectos, dado que no se está en el supuesto previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo.

Por lo anterior, considero que en estos dos casos (multa excesiva y confiscación de bienes), la suspensión debe ser reglamentada dentro de aquéllos que contempla el artículo 124, pues la misma Constitución nos señala que existen casos en que no se debe tomar el acto como confiscación de bienes, como es el pago de la responsabilidad civil por la comisión de un delito, el pago de impuestos o multas, o el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito; al existir esas excepciones señaladas en la Constitución, es prudente que el Juez de Distrito en primer lugar, se informe de la situación real del hecho para que de ahí, con la facultad que tiene, le dé los efectos específicos a la suspensión definitiva.

En otro sentido, respecto a la suspensión a petición de parte a que se refiere el artículo 124, es necesario hacer una clasificación de los actos en materia penal a efecto de comprender la reforma de 1994 al artículo 136, relativo a los actos privativos de libertad personal y no privativos de libertad personal.

Los actos privativos de libertad personal se dividen en judiciales y no judiciales; a su vez, los no judiciales, en actos privativos de libertad legales o ilegales (justificados o injustificados).

Desde luego, estos actos pueden ser presentes (se están ejecutando) o bien futuros inminentes. Respecto los últimos no existe mayor problema, pues se deben suspender tomando las medidas pertinentes para que el gobernado no se sustraiga a la acción de la justicia, pero cuando se está ejecutando la privación de la libertad, resulta el gran problema, puesto que puede ser que la detención sea ilegal (injustificada) por estar fuera de los casos permitidos por la Constitución.

Así se resolvió una queja interpuesta contra un auto que concedió en forma incorrecta la suspensión provisional, de donde emanó esta tesis:

> SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA DE LA. ACTOS PRIVATIVOS DE LIBERTAD. La libertad puede ser afectada por un acto de autoridad judicial o bien por autoridad distinta a ella y, en ambos casos, el acto se puede presentar como un acto pasado o consumado; presente, el que está ejecutando; y futuro, el que se va a ejecutar. Respecto al consumado no procede la suspensión; respecto al presente, es decir la privación de la libertad que se está ejecutando, sí procede y los efectos están especificados en el artículo 136 de la Ley de Amparo, mismos que varían dependiendo de la circunstancia de que se cometa o no un delito; y, respecto al acto futuro sí procede la suspensión, para el efecto de que no se le prive de la libertad, con la salvedad de que si se trata de una orden de detención, retención u orden judicial por la comisión de un delito, el efecto varía si éste permite o no la libertad provisional bajo caución; en los dos últimos casos (presente y futuro), debe tomarse las medidas de aseguramiento respectivas.
>
> SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Queja penal 57/2002-XI. Carlos Ceballos de la Huerta. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.

Los actos privativos de libertad personal judiciales son aquéllos emanados de un juez; los actos privativos de libertad personal no judiciales son aquéllos que provienen de autoridades distintas a las judiciales (Ministerio Público, Policía Judicial, etc.). Estos últimos se subdividen en legales e ilegales (justificados o injustificados), en atención a que la Constitución General permite la detención en los casos de flagrancia y en los casos de urgencia, en tratándose de delitos graves, una vez reunidos los requisitos a que se refiere el párrafo

quinto del artículo 16 de la Constitución Federal reformada, en vigor a partir del 4 de septiembre de 1993, así como los arrestos por treinta y seis horas; en clasificación personal les denominó legales, los que incluyen la detención proveniente de una orden de juez, pues precisamente el artículo 136 al reformarse, precisó los efectos de la suspensión en los casos de una orden de juez, de detención emitida por el Ministerio Público en casos de urgencia, de autoridades distintas al Ministerio Público en los casos de flagrancia y por la comisión de un delito, ajustándose a las reformas de la Constitución Federal en su artículo 16.

Lo que debemos destacar, es la forma en que debe concederse la suspensión provisional, conforme a la Ley de Amparo vigente y de ello se ocupa el artículo 130, segundo párrafo, el cual señala que tratándose de la privación de la libertad personal, la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesta en libertad caucional si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará en todo caso, las medidas de seguridad que estime pertinentes, y en su último párrafo se refiere a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, ejecutado desde luego por autoridades administrativas, al señalar lo siguiente:

> El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trata de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.

De la lectura de este precepto y de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, se advierte que el Juez de Distrito tiene amplias facultades para conceder la suspensión de los actos reclamados, tomando en cuenta no solamente los perjuicios que se puedan causar al quejoso y el interés social, sino además la naturaleza de la violación alegada; de ahí que el efecto de la suspensión provisional debe ser el que corresponda a cada una de las hipótesis que puedan presentarse, pues el quejoso acude al Juez de Distrito porque estima que la detención es ilegal, de lo contrario no acudiría a él; de esta manera como premisa inicial en el auto de suspensión provisional, debemos tomar como acto reclamado el que nos señala el quejoso, generalmente la privación ilegal de la libertad, debiendo surtir el efecto de que el quejoso quede en inmediata libertad, a disposición del Juez de Distrito, tomando las medidas necesarias para evitar que no se sustraiga a la acción de la justicia, en caso de la comisión de

un delito, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual nos señala qué tipo de detención está permitida, siendo los que emanan de un juez, los casos de flagrancia o urgencia, conforme a su párrafo quinto; y desde luego como medidas a que está obligado a tomar el juez de amparo, considero que es precisamente prevenir a la autoridad responsable que si se trata de esas tres hipótesis el efecto de la suspensión será otro y asentar de manera clara los efectos de cada una de ellas. De ahí que de la primera hipótesis se dirá: "Para el caso de que la suspensión obedezca a la comisión de un delito y se esté ejecutando por parte de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad responsable por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste, determine su libertad, o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución lo permite, o su consignación; asimismo, prevenir que si la detención es efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para el efecto de que lo deje en libertad si procede, o bien lo consigne al juez responsable dentro de los términos de 48 o 96 horas, según el caso, sin dejar de observar lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 136, en el sentido de que de no existir flagrancia o urgencia o no cumplir con la remisión del informe dentro de las veinticuatro horas, se ordenará su libertad; y finalmente también contemplar la posibilidad de que la detención es ejecutada en cumplimiento a una orden de aprehensión, y en ese caso establecer que la suspensión es para el efecto de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del juez de la causa, lo anterior porque así está establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo y desde luego en el 16 de la Constitución Federal."

Existen opiniones en el sentido de que el artículo 136 mencionado se refiere a la suspensión definitiva; sin embargo, es claro que se refiere a la suspensión en general, pues los efectos que deben señalarse en la suspensión provisional, interpretando las normas que acabo de comentar (artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, 16 y 107, fracción X, de la Constitución Federal), llegamos a la conclusión de que el efecto de la suspensión provisional, que no está determinado en forma precisa en el artículo 130, debe ser para que se deje en libertad al detenido, con las medidas pertinentes para que no se sustraiga a la acción de la justicia, en caso de que se trate de la comisión de un delito. Así, partiendo de la base que estamos contem-

plando, la hipótesis de detención ilegal que bajo protesta de decir verdad nos está señalando el amparista en su demanda, la suspensión debe ser para el efecto de que el quejoso quede en inmediata libertad y posteriormente contemplar las demás hipótesis como medidas para que en caso de la comisión de un delito el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia. No olvidemos también que otras de las detenciones permitidas por la Constitución, es el arresto administrativo a que se refiere el artículo 21, del cual nada nos señala específicamente la Ley de Amparo en sus artículos relativos a la suspensión 130 y 136.

Por otra parte, también existen opiniones en el sentido de que de darle esos efectos a la suspensión provisional (de que quede en libertad a disposición del Juez de Distrito), es dejar sin materia el juicio de amparo, y argumentan en primer lugar, que los fines de la suspensión son preservar la materia del amparo, pues el artículo 80, señala los efectos de las sentencias en los casos de actos positivos y actos negativos, que nos dice:

> La sentencia que concede el amparo, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

De ahí que si al quejoso se le deja en libertad por los efectos de la suspensión, la sentencia de amparo no tiene objeto, pues se trata de un acto positivo y ya no se va a restituir nada; sin embargo, considero que el artículo 80 de la Ley de Amparo está corto, pues únicamente reglamenta los actos positivos y los negativos, olvidándose de los de tracto sucesivo y los permanentes, como son los actos privativos de libertad personal (actos presentes), y no es válido admitir que para efectos de preservar la materia del amparo tengamos que sacrificar al quejoso hasta que concluya el juicio, esto sería aberrante e inconstitucional; por ello, considero que en el artículo 80, deben reglamentarse, incluso, los actos de tracto sucesivo y permanentes y consecuentemente las sentencias declarativas, pues por tal deficiencia los juicios de amparo terminan sobreseyéndose cuando con motivo de la suspensión se deja en libertad a una persona, no obstante la existencia de una flagrante violación de garantías por parte de la autoridad responsable.

En efecto, si el quejoso es detenido por autoridades administrativas y además de la detención se reclama incomunicación y tortura,

quien interpone el amparo es un tercero, por la imposibilidad física que tiene el quejoso de hacerlo personalmente (conforme lo establece el artículo 17), se admite la demanda, se ordena su ratificación, se suspenden de oficio y de plano los actos consistentes en la incomunicación y tortura, y se ordena abrir el incidente de suspensión por lo que hace a la detención ilegal; se forma cuaderno auxiliar y hasta que ratifica la demanda es cuando se ordena tramitar el juicio, con independencia de que el incidente ya se está tramitando, lo anterior de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sin embargo, por regla general se da el caso de que al ratificar la demanda, antes de dictarse la sentencia correspondiente, dejan en libertad al detenido, lo que origina que cesen los efectos del acto reclamado, concluyendo el juicio de garantías con una sentencia de sobreseimiento, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia (cesación de efectos), no obstante la violación de garantías, no se puede conceder la protección constitucional, porque no existe en el artículo 80 la autorización para pronunciar una sentencia declarativa.

Cabe concluir que la reforma de 1994 al artículo 136, se limitó a ajustar las hipótesis del artículo 16 y 21 de la Constitución Federal reformado; pero, crea confusión en cuanto a la suspensión provisional que contempla el artículo 130 que no se reformó y que debió reformarse para precisar los efectos de una privación ilegal de la libertad personal, en armonía con los preceptos 16 y 21 constitucionales.

También es necesario que el artículo 80 sea reformado y que reglamente las sentencias declarativas, en tratándose de actos de tracto sucesivo y permanentes; hacer un ajuste al artículo 123 de la misma ley, que reglamente la suspensión de oficio, para que esta última no contemple todos los actos del artículo 22 Constitucional y excluir de ese tipo de suspensión a la multa excesiva y a la confiscación de bienes y precisar los efectos de la suspensión de la privación ilegal de la libertad personal, que es un acto que de consumarse hace imposible la restitución de la garantía violada.

Por último, en relación a la privación de la libertad personal futura inminente, en tratándose de orden judicial (orden de aprehensión) en la realidad, los jueces de Distrito, en interpretación de los artículos 130 y 136, conceden la suspensión provisional o definitiva para el efecto de que no se ejecute esa orden, pero en forma condicionada, de que no se trate de delito grave, es decir de que alcance el beneficio de libertad provisional bajo caución la conducta cierta cometida por el quejoso, pero en forma discrecional señalan

también medidas muy drásticas, como lo es la exhibición de garantías muy altas y que se presente al quejoso ante el juez de la causa obligatoriamente para la continuación del procedimiento penal. Considero que para estos casos se debe precisar el monto de la garantía, la cual deberá fijarse hasta la definitiva, porque es hasta ese momento que con certeza se sabe la conducta cometida; además la presentación al juez de la causa no debe ser obligatoria, sino voluntaria, pues obligándolo nunca se entrará al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de aprehensión, ya que en virtud del dictado de una resolución dentro del término constitucional de setenta y dos horas, por cambio de situación jurídica o cesación de efectos, resulta una improcedencia en el juicio y se sobresee en él (artículos 73, fracciones X y XVI, y 74, fracción III).

Anteriormente, la medida de presentarse ante el juez de la causa no era obligatorio imponerla, ya que el juez, asomándose un poco al fondo del asunto determinaba si era o no conveniente fijar la medida; no es lo mismo advertir en autos, que el delito no grave cometido acarrea consecuencias sociales graves, como puede ser un delito de fraude o peculado que despierta interés social, a otro que no interesa más que a las partes en el procedimiento penal, como podría ser el delito de amenazas, lesiones leves, daño en propiedad ajena culposo, etcétera. En los primeros casos, como juzgador tomaría la medida, en los segundos no, puesto que la sociedad no estaría tan interesada en que se continuaran los procedimientos. En suma debe derogarse el segundo párrafo del artículo 138 en vigor, y dejar como optativa la medida; así el juzgador, aplicaría la teoría de la apariencia del buen derecho, consignada a la materia administrativa, respecto a la procedencia de la suspensión, que de hecho se aplicaba en la materia penal en cuanto a los requisitos de eficacia, cuando la medida aún no era obligatoria.

Respecto a la orden de comparecencia, la medida no debe ser aplicada, pues no se trata de un acto privativo de la libertad personal, ya que el quejoso podrá libremente realizar sus actividades cotidianas en la comunidad, sin estar constreñido a un espacio territorial limitado, tal como lo expliqué en el capítulo II de este libro.

En este orden de ideas, debe reformarse la Ley de Amparo en varios de sus preceptos, para que establezcan de manera precisa los alcances de la suspensión, respecto a la privación ilegal de la libertad presente; por tanto, deben reformarse primordialmente los artículos 17, 18, 123, 130, 136 y 138 de la Ley en comento. Asimismo, el precepto 80 del mismo ordenamiento legal, deberá contemplar las sentencias declarativas para efectos de la responsabilidad penal y civil que le resulte a la autoridad responsable.

CAPÍTULO VI

DESACATO A LA SUSPENSIÓN

SUMARIO: 1. Incidente de incumplimiento a las resoluciones suspensionales en materia penal. 2. Desacato a la suspensión (provisional, definitiva o de oficio), en materia penal. 3. Desacato a la suspensión definitiva. 4. Trámite del incidente de incumplimiento a las resoluciones suspensionales en materia penal.

1. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES SUSPENSIONALES EN MATERIA PENAL

Tomando en consideración que el debido y puntual cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el incidente de suspensión igualmente importan interés para la sociedad, pues de lo contrario, en muchos casos resultarían irreparablemente consumados los actos reclamados, que pudieran ser violatorios de garantías constitucionales.

El doctor Ignacio Burgoa Orihuela opina que el respeto al juicio de amparo debe ser total, es decir, asumirse todas las resoluciones judiciales que en él se dicten, independientemente del procedimiento en que se pronuncien, pues la Suprema Corte ha establecido que es de orden público el cumplimiento del acto con que culmina el juicio de amparo, es decir, la ejecutoria constitucional y, por tanto, la suspensión provisional y definitiva deben participar de tal carácter.

Por su parte, el numeral 143 señala que tratándose de la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión deben observarse las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111, del mismo ordenamiento, mismos a los que me referiré enseguida brevemente:

El artículo 143, regula dos situaciones, la ejecución del mandamiento de suspender el acto y el cumplimiento a esa orden de suspensión. En el primer caso los efectos de la suspensión no han iniciado

06_Capítulo_06 Ojeda.p65 531 23/04/2013, 12:20

y, por ende, se procura se inicien esos efectos; en el segundo, el cumplimiento, los efectos ya se iniciaron y son violentados por la autoridad desobediente al mandato suspensional.

En el primer caso, la ejecución, basta tomar las medidas señaladas en los artículos 104, 105, primer párrafo, 107 y 111 de la Ley de Amparo; en el segundo, el incumplimiento, primero hay que determinar si efectivamente se ejecutó la resolución de suspensión y luego sí se incumplió con el mandato, mediante un incidente de violación a la suspensión y luego de ser el caso, procederá fincar el procedimiento de responsabilidad penal conforme al artículo 206 de la Ley de Amparo.

La suspensión puede surtir efectos desde el momento es que es notificada o hecha saber a la autoridad responsable si se trata de realizar actos negativos; es decir, con el sólo dictado de la resolución puede surtir esos efectos siempre y cuando se trate de que autoridad sólo deberá de abstenerse de ejecutar el acto, es decir una conducta de no hacer.

Sin embargo, si la autoridad responsable tuviera que ejecutar actos positivos para que surta efectos la suspensión, el juez de Distrito tendrá que ordenar (al Actuario o al Secretario o él mismo) se verifique si ya se ejecutó la orden de suspender el acto; por ejemplo, cuando se trata de paralizar obras materiales, parar acciones, maquinaria, etcétera. En este caso, el juez deberá hacer uso de las facultades que le otorga los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo para poder paralizar el acto. Una vez paralizado el acto ya no se puede violentar esa suspensión, pues se incurre en el delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo.

En otras palabras no puede existir violación a la suspensión, si el acto no ha sido paralizado, si se trata de que para suspender la autoridad tiene que realizar acciones, conductas de hacer.

Si la suspensión surte efectos con la sola abstención (conducta de no hacer) de la autoridad responsable, ésta se da por autorizada desde el momento en que ésta tenga conocimiento formalmente (por medio de la notificación) o materialmente (el quejoso demuestra su copia certificada del auto de suspensión). En este caso no habrá necesidad de incidente de ejecución de la suspensión, para poder denunciar la violación a la suspensión.

Sin embargo, violada la suspensión, en ambos casos, el juez deberá tomar todas las medidas para que se cumpla con la suspensión, en términos de los artículos 104, 105 párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo.

En suma, si la autoridad responsable tiene que realizar acciones (conducta de hacer) para que se suspenda el acto y no lo hace aun cuando ya se le notificó, lo que procede es el incidente de ejecución de la suspensión; una vez que esté suspendido el acto no puede ser violentada la suspensión.

INTERPRETACIÓN

SUSPENSIÓN, LA DENUNCIA RELATIVA A SU VIOLACIÓN DEBE TRAMITARSE EN VÍA INCIDENTAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 358 Y 360 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111 y 143 de la Ley de Amparo, que regulan la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se desprende que no señalan el trámite que debe seguir la autoridad que conozca del juicio de amparo indirecto en relación con la denuncia de violación a la suspensión. Sin embargo, dada la naturaleza penal de la sanción prevista en el artículo 206 de la ley citada, que puede llegar a aplicarse a la autoridad que no obedezca un auto de suspensión, resulta indispensable que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y, por ende, cuando se trate de aquella denuncia, debe ordenarse la apertura del incidente innominado a que se refieren los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el cual las partes podrán ofrecer los medios de prueba contenidos en los artículos 93, 94 y 361, del mencionado código, a fin de acreditar sus afirmaciones, sin que en el caso sea aplicable la limitación probatoria que establece el artículo 131 de la ley indicada, pues éste sólo regula el trámite del incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, 2a./J. 33/2003, Página 201.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA. La fracción VI del artículo 95, de la Ley de Amparo, señala tres presupuestos para la procedencia de la queja que prevé, siendo el primero, que la violación recurrida se dicte durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión; el segundo, que no admita el recurso de revisión conforme lo establece el precepto 83 del propio ordenamiento legal; y el último, que por su

naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparables en la sentencia definitiva; ahora bien, tales presupuestos se colman cuando se resuelve sobre la denuncia de violación a la suspensión definitiva, en razón de que ésta se pronuncia dentro del incidente de suspensión y del análisis del invocado artículo 83, se advierte que entre las resoluciones que en él se enumeran, contra las cuales procede el recurso de revisión, no se encuentra comprendida la dictada por los Jueces de Distrito u órganos competentes al fallar el incidente de la denuncia de mérito, misma que, causa daños y perjuicios irreparables, porque al no ser materia de la controversia constitucional, la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo correspondiente no se ocupará de ella, todo lo cual significa que resulta procedente el recurso de queja. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que, por una interpretación literal de la norma se considere que por haberse dictado la suspensión definitiva, el trámite del incidente ya concluyó y por tal razón ya no se está en la hipótesis de la fracción en comento; pues no hay que olvidar que el Juez de Distrito puede seguir actuando en el mismo; ya sea para fijar contrafianza, o bien, para, de existir un hecho superviniente, modificar o revocar el auto en que se haya concedido o negado la suspensión. Lo anterior es así, ya que en el proceso constitucional de amparo, la suspensión del acto reclamado juega un papel importantísimo; debido a que con ella se conserva la materia del juicio, pues se evita que se sigan irrogando perjuicios al quejoso y se facilita prácticamente la restitución en el goce de la garantía violada, todo lo cual constituye el objeto de la suspensión. Luego entonces, no se puede concluir que con el dictado de la suspensión definitiva culminó el trámite del incidente, pues el mismo no tiene como fin obtener un resultado favorable en dicha resolución; sino, que la finalidad de la suspensión consiste en mantener la materia del amparo, por lo que el juez, para mantener ésta, está facultado para actuar en el incidente desde la suspensión provisional hasta el dictado de la sentencia definitiva en juicio de amparo; por ende, todo lo actuado en ese lapso es parte del trámite del incidente de suspensión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, Tesis XII.1º.5K, pág. 918.

El artículo 104 establece que tratándose de los casos previstos en el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX de la Constitución Federal (que se refieren a juicios de amparo interpuestos ante un Juez de Distrito; recursos de revisión del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y las resoluciones que en amparo directo pronuncien los

Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las cuales únicamente admiten recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, cuando deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, respectivamente); cuando cause ejecutoria la sentencia y en ésta se haya concedido el amparo, la autoridad que conoció del juicio de amparo debe comunicar por oficio y sin demora a las autoridades responsables, para que procedan a darle cumplimiento, previniéndolas para que informen el mismo; haciendo hincapié de que en casos urgentes puede ordenar a la autoridad que por la vía telegráfica informe el cumplimiento de la ejecutoria y con posterioridad comunique íntegramente dicho cumplimiento.

Por su parte, el párrafo primero del numeral 105 prevé que si las autoridades responsables no cumplen dentro del término de veinticuatro horas siguientes en que se les notifica la ejecutoria, y si la naturaleza del acto lo permite o bien no está en vías de ejecución, la autoridad que conoció del amparo debe requerir al superior inmediato de la autoridad responsable, para que dé cumplimiento a la sentencia; si el superior inmediato de la autoridad responsable no atiende tal requerimiento y a su vez tiene superior, igualmente debe requerirse a este último; y si la autoridad responsable no tiene superior, el requerimiento debe hacerse directamente a ella.

Por otra parte, en relación al tema que nos ocupa, el numeral 107 señala una responsabilidad solidaria entre las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos, respecto al incumplimiento de las ejecutorias en los juicios de amparo.

El artículo 111, prevé que las disposiciones del artículo 108 (el cual se refiere a los casos de repetición del acto reclamado y aquéllos en los que la Suprema Corte de Justicia determina que la autoridad responsable quede separada de su cargo por este motivo o bien por inejecución de la sentencia de amparo, consignándola al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente); debe observarse independientemente de que la autoridad que haya conocido del juicio dicte las órdenes necesarias para hacer cumplir la ejecutoria y si no son obedecidas, debe comisionar al secretario o actuario o bien el mismo Juez de Distrito o magistrado (si la naturaleza del acto lo permite), para ejecutar por sí mismos el cumplimiento de la ejecutoria. Si después de agotar estos medios no se logra tal cumplimiento, la autoridad que haya conocido del juicio de amparo debe solicitar el auxilio de la fuerza pública, con excepción de los casos en que esto no es posible, como sucede en aquéllos en que sólo las autoridades responsables pueden dar cumplimiento a la ejecu-

toria, o bien en los que la ejecución consiste en dictar una nueva resolución. Por último, el precepto en cuestión señala que tratándose de la libertad personal, en que debe restituirse al quejoso en el goce de sus garantías y la autoridad responsable se niega a hacerlo, u omite dictar la resolución correspondiente dentro de un término prudente, que no exceda de tres días, la autoridad que haya conocido del amparo debe mandar ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda; y por lo que hace a los encargados de las prisiones, el mismo numeral indica que deben dar cumplimiento a las órdenes giradas por la autoridad que haya conocido del juicio de garantías.

2. Desacato a la suspensión (provisional, definitiva o de oficio), en material penal

De conformidad con el artículo 130, el auto que otorga la suspensión provisional tiene la finalidad de mantener las cosas en el estado en que se encuentren mientras no sea dictada la suspensión definitiva y se notifique ésta a las autoridades responsables, las que se encuentran impedidas para realizar los actos reclamados o sus consecuencias.

Existe incumplimiento a la suspensión provisional cuando las autoridades señaladas como responsables propician que cambie la situación en que se encontraban los actos reclamados al decretar la medida cautelar suspensional, aun cuando el acto que realicen con posterioridad al dictado del auto de suspensión provisional tenga motivos o causas diversas del acto reclamado.

Por ejemplo, si un juez penal del Distrito Federal dicta dos órdenes de aprehensión en contra de Pedro Pérez López por el mismo delito, pero en dos causas penales diferentes; el inculpado interpone juicio de garantías y señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez mencionado, sin precisar en el escrito de demanda la causa penal de la que deriva la orden de captura, las autoridades responsables no deben aprehender al procesado en cumplimiento al auto de suspensión provisional, pues de cumplimentarse cualquiera de estas dos órdenes, las autoridades responsables estarían modificando la situación en la que se encontraba el peticionario del amparo al momento en que se le concedió la medida cautelar provisional, al privarlo de su libertad personal.

Sin embargo, las mencionadas autoridades no incumplen el auto de suspensión cuando desempeñan frente al quejoso actos con distinto sentido de afectación que el acto impugnado en la demanda de amparo, de sus consecuencias y efectos. Por ejemplo, si el acto que

se reclama consiste en la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por el juez Vigésimo Séptimo Penal del Distrito Federal, y las autoridades responsables detienen al peticionario del amparo, en cumplimiento a una diversa orden de aprehensión decretada en su contra por el juez Segundo Penal de la misma Ciudad; en este supuesto el acto reclamado consiste en la privación de la libertad con motivo de la orden de aprehensión señalada en primer término, por lo que al ser detenido con motivo de diversa orden de aprehensión, no estarían incumpliendo la suspensión provisional decretada.

En otro orden de ideas, cabe mencionar que las autoridades que son inferiores jerárquicas de las señaladas como responsables en el juicio de garantías deben acatar el auto de suspensión provisional o definitiva, aun cuando no sean señaladas como autoridades responsables, ya que de no hacerlo, estas últimas burlarían la suspensión por medio de sus dependencias, alterando o modificando la situación que guardaban las cosas al momento de concederse la suspensión provisional.

Por otra parte, si las autoridades contra las que no se tramitó la demanda de amparo realizan actos con igual sentido de afectación que el acto reclamado, sin que actúen como ejecutoras las responsables, ni siendo éstas inferiores jerárquicas, sino actuando como ordenadoras, la citada medida suspensional es ineficaz frente a ellas.

Por ejemplo, si se reclama de algunos procuradores generales de justicia de los Estados el cumplimiento de la orden de aprehensión de un sujeto, siendo éste el sentido de afectación del acto, la suspensión provisional que se concede obliga no sólo a estas autoridades, sino también a sus inferiores jerárquicos y a cualquier otra que vaya a ejecutar la orden correspondiente, para que no alteren la situación que prevalece al dictar la suspensión provisional; pero si la orden de aprehensión fue dictada por un juez penal, la medida cautelar no es procedente para impedir que el acto se ejecute, aun cuando tiene el mismo sentido de afectación que el reclamado, ya que el juez no es inferior jerárquico del procurador señalado como responsable ni ejecutor de las determinaciones de éstos, sino que obra por sí mismo como autoridad ordenadora. Así, si se reclama orden de detención por parte de la autoridad administrativa, Ministerio Público y Policía Judicial y lo que se está ejecutando es una orden judicial, cualquiera que sea, la aprehensión no viola la suspensión concedida y es válida, pues como sostenía Vallarta, el juicio de amparo no está para proteger a la delincuencia, como suele suceder al abusar de esta institución jurídica.

Es muy común la pretensión de violar la suspensión provisional; en esos casos el Juez de Distrito tendrá que tomar en cuenta todas esas amplias facultades que le otorga la Ley de Amparo en su artículo 111, precepto que le da verdadera naturaleza al juicio de amparo y a la suspensión.

De ahí la importancia del efecto de la suspensión cuando se reclama la afectación de la libertad personal, establecido en el primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, que dice: "…de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera,…"; ya que con esa facultad el juez de Amparo podrá mandar a sus actuarios, a sus secretarios, o él personalmente podrá ejecutar la resolución de suspensión cuando ésta tenga el efecto de dejar en libertad al quejoso.

Recuerdo dos casos en que como Juez de Distrito hice cumplir mi auto de suspensión provisional contra la orden de aprehensión y detención por parte de autoridades administrativas.

En 1993 en Chetumal Quintana Roo, un ciudadano norteamericano, radicado en México, de nombre "Jesse Joseph Rodríguez", el 10 de marzo de 1993, solicitó el amparo y la suspensión del acto reclamado que hizo consistir en: "las órdenes de aprehensión y detención que las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, han dictado en mi contra y que la pretende ejecutar por medio de las autoridades responsables ejecutoras, en este caso en especial el Secretario de Gobierno… y el Procurador de Justicia en el Estado, ya que se me han fabricado expedientes para poder encarcelarme". En mi carácter de Juez de Distrito único en el Estado, le concedí la suspensión provisional al quejoso el día de la presentación de la demanda (amparo indirecto número 188/93); ese mismo día me explicó su problema en forma verbal, manifestó su angustia por el problema personal que tenía con el secretario de Gobierno y la desconfianza en las autoridades locales, dijo que la única esperanza que tenía era el Poder Judicial Federal; veinte días después llegó detenido al reclusorio Estatal adjunto al juzgado Federal, por policías de Seguridad Pública del Estado. Pidió hablar con el Juez de Distrito y enterado de los acontecimientos, ordené lo presentaran en mi oficina; me expresó que los policías aprehensores, elementos de seguridad pública de esa entidad, le habían roto la copia certificada del auto de suspensión y que ahora lo pretendían internar al reclusorio, pero que acudía al Juzgado de Distrito por lo injusto de su detención; ante eso, los policías lo pretendieron sacar de mi privado por la fuerza, les indiqué que no lo hicieran, ya que con motivo de la suspensión provisional estaba a mi disposición por lo que a su libertad se refería,

les ordené le quitaran las esposas, pues en ese momento le pediría al comandante de la Policía Judicial Federal lo tuviera en sus oficinas, sin privarlo de su libertad, hasta que resolviera respecto a la suspensión definitiva; hice uso de mi facultad contenida en el artículo 111 de la Ley de Amparo.

Después resultó que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el 26 de marzo de ese año, le habían librado una orden de aprehensión por el delito de tentativa de secuestro en perjuicio del referido secretario de Gobierno, basada en dos testimonios de policías judiciales locales y una grabación; el juez responsable días antes había negado la existencia del acto reclamado, porque efectivamente no había tal orden en ese momento, así, con el pretexto del cumplimiento de esa orden, le habían "sembrado" en su domicilio dos armas y una bolsa de marihuana; el 6 de abril de ese año, se resolvió negar la suspensión definitiva por cesación de efectos, en virtud de que el juez responsable había ordenado su libertad en el expediente respectivo (el de secuestro en grado de tentativa, era creíble la versión del quejoso en el sentido de que le habían fabricado la resolución). Paralelamente se resolvía el incidente de violación a la suspensión provisional; sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal, consignó al referido quejoso por los delitos de Posesión de arma de fuego reservada y Posesión de marihuana; en el término constitucional el propio juzgado a mi cargo practicó las diligencias pertinentes, los secretarios del juzgado en mi presencia recibieron las declaraciones de los policías aprehensores, demostrándose que habían "sembrado" en su domicilio las armas y la droga cuando fue detenido con motivo de la ejecución de aquella orden por tentativa de secuestro, por ello se decretó la libertad por falta de elementos para procesar al extranjero (en la causa penal 48/93), misma que fue confirmada por el Magistrado Tomás Garrido, titular del Tribunal Unitario de Circuito en esa entidad. Meses después, ya como Juez de Distrito en la ciudad de México, me enteré que un diario local en Quintana Roo publicó que Jesse Joseph había sido deportado a su país por influencia de aquel funcionario. Así es esto, la eterna lucha entre la justicia y la arbitrariedad.

En otra ocasión, en la ciudad de México, un ciudadano del Distrito Federal solicitó amparo contra la posible orden de detención, sin que hubiera cometido algún delito, el quejoso acudió al Juzgado Séptimo de Distrito, en el Reclusorio Oriente, del cual era titular, a recoger la copia del auto de suspensión, al salir, la policía judicial local pretendió detenerlo, no obstante estar bajo los efectos de la medida provisional; me informaron los familiares esa situación y dando

instrucciones al respecto, mandé a mis secretarios a rescatarlo, los policías no llevaban orden de aprehensión y ante las razones y consecuencias legales que les expresaron aquéllos, me lo entregaron. Así se evitó una detención arbitraria.

Anécdotas de aplicación de las medidas establecidas en el artículo 111 de la Ley de Amparo, las cuales atendiendo las circunstancias se deben de tomar de manera inmediata, valientemente y con la ley en la mano, aun cuando paralelamente o con posterioridad se deje constancias en autos.

3. Desacato a la suspensión definitiva

El auto de suspensión definitiva difiere de la suspensión provisional porque esta última tiene como fin conservar la situación en que se mantiene el acto reclamado al momento en que se concede esta medida cautelar, en tanto que la definitiva tiene efectos de paralizar el acto reclamado y sus efectos o consecuencias, hasta en tanto se resuelve el fondo del juicio en lo principal; de esta manera, impone a las autoridades responsables la obligación de abstenerse a realizarlo.

Existe desobediencia a la interlocutoria suspensional definitiva, si ejecutan alguno o algunos de dichos actos, sus consecuencias o efectos.

Sin embargo, una vez concedida la suspensión definitiva, si las responsables realizan en perjuicio del quejoso un acto distinto del que reclamó, provocándole el mismo sentido de afectación que el acto reclamado, pero el acto distinto tiene diferente motivo o causa eficiente, que se produjo en algún hecho o circunstancia posterior al dictado de la interlocutoria, entonces se trata de actos nuevos que no constituyen incumplimiento a la suspensión definitiva.

Un ejemplo de lo anterior, se advierte cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión decretada por un juez penal del fuero común, y con posterioridad a la concesión de la suspensión definitiva, es decretada una nueva orden de aprehensión por un Juez de Distrito, caso en el que esta nueva orden, no obstante tener el mismo sentido de afectación (privación de la libertad del quejoso), constituye un acto distinto al reclamado, ya que fue emitida por otra autoridad judicial y en otro proceso penal.

Otro ejemplo de incumplimiento a la suspensión definitiva se da cuando el acto reclamado es el auto de término constitucional, concediéndose la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, quedando el peticionario

del amparo a disposición del juez de amparo en cuanto a su libertad personal, y a disposición del juez responsable para la continuación del proceso que se le instruye. En este caso, las autoridades responsables no deben identificar administrativamente al quejoso, toda vez que este acto es una consecuencia del acto reclamado y, de hacerlo, estarían incumpliendo la medida suspensional. De igual manera, no deben trasladarlo a otro centro de reclusión, toda vez que el quejoso se encuentra a disposición del Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentra.

Cabe hacer mención que en materia de amparo indirecto procede el recurso de queja, el cual tiene su fundamento en los artículos 95, fracciones II y III, 96, 97, fracción I, 98 y 99 de la Ley de Amparo. De acuerdo con las fracciones II y III del artículo 95 de la Ley que nos ocupa, el recurso de queja es procedente contra el exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado y por falta de cumplimiento al auto en que se concedió la libertad bajo caución al quejoso en los supuestos establecidos en el artículo 136 de la Ley de Amparo, respectivamente.

En efecto, este recurso es procedente cuando existe un principio de ejecución, aunque defectuoso, por parte de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en el caso que nos ocupa, a la resolución suspensional y dicho recurso tiene el objeto de obligar a la autoridad responsable a cumplir correctamente la resolución de que se trate.

Ahora bien, cabe hacer mención que la diferencia que existe entre el recurso de queja y el incidente de incumplimiento, es que este último procede por una total y absoluta negativa de la autoridad responsable, para cumplir con la sentencia de amparo; y el recurso, cuando existe por lo menos un principio de ejecución a la misma.

En relación a lo anterior, aplicada por analogía, existe la siguiente tesis de Jurisprudencia:

> QUEJA IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA TOTAL INEJECUCIÓN O ABSOLUTA DESOBEDIENCIA DEL FALLO CONSTITUCIONAL, O CUANDO SE ALEGA REPETICIÓN DEL ACTO COMBATIDO. Si el promovente de un juicio de garantías aduce la absoluta desobediencia o el total incumplimiento del fallo constitucional, o bien alega la reiteración del acto que reclamó, su instancia no debe admitirse ni tramitarse en la vía ni mediante el procedimiento que señalan los artículos 95, fracción IV y 98 de la Ley de Amparo. Cuando hay inejecución, o se produce la repetición del acto que se reclama, el promovente del juicio de amparo

está plenamente facultado para exigir que se dicten todas las medidas del caso, en los términos de los artículos 104 a 113, 205 y 208 a 210 de la Ley de Amparo; sin embargo, de ello no puede inferirse que sea procedente el recurso de queja. Mientras que la instancia del interesado con motivo de la total inejecución del fallo federal puede presentarse en cualquier tiempo (art. 113 de la Ley de Amparo), la queja por defecto de ejecución ha de promoverse precisamente dentro del plazo de un año (art. 97, fracción III, de la misma ley).

Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Sexta Época, Tomo CXX, tercera parte, pág. 162.

4. Trámite del incidente de incumplimiento a las resoluciones suspensionales en materia penal

El fundamento de este incidente se encuentra en los artículos 107, fracción XVII, constitucional, 143 de la Ley de Amparo, mismo que a su vez nos remite a los diversos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la misma ley, los cuales ya fueron comentados con anterioridad en el presente capítulo.

Este incidente, no sólo tiene como finalidad mantener la operatividad y eficacia de la medida cautelar (la suspensión del acto reclamado), sino además fincar la responsabilidad de las autoridades responsables.

En síntesis, se debe puntualizar que el trámite de este incidente se concreta en requerir a la autoridad responsable acusada de violar la suspensión, para que rinda al juez del amparo, dentro del término de veinticuatro horas, un informe sobre el cumplimiento del auto suspensional y sobre los hechos denunciados por el quejoso (artículo 104 de la Ley de Amparo).

Para este efecto, el actuario debe notificar y correr traslado con la copia del escrito de denuncia a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo.

Si el caso se trata de una incomunicación, el término de veinticuatro horas comienza a contar a partir del momento en que el quejoso ratifica la demanda de amparo, bien ante el actuario o secretario comisionado.

Existe un criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,[78] en el sentido de que por la ambigüedad

[78] "INFORME DE LAS AUTORIDADES RELATIVO A LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EL TÉRMINO PARA RENDIRLO ES DE TRES DÍAS", Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X-diciembre, p. 320.

y falta de disposición expresa del término para rendir el informe, éste deberá de ser tres días, término genérico establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, el término lo regula específicamente el artículo 360 del citado código procesal. Hay quienes consideran que el término debe ser de veinticuatro horas, apoyados en el artículo 143 y 105 de la Ley de Amparo, pero el término referido es para dar cumplimiento a la suspensión y no para el informe, de ahí que la tesis que a continuación se transcribe es correcta:

> INFORME DE LAS AUTORIDADES RELATIVO A LA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EL TÉRMINO PARA RENDIRLO ES DE TRES DÍAS. El artículo 104 de la Ley de Amparo, el cual se aplica para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, por disposición expresa del numeral 143 de la misma ley, establece en su tercer párrafo "en el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia", en la práctica, tratándose de autos o resoluciones en los que se concede la suspensión a la quejosa, no se acostumbra prevenir a las autoridades para que informen de su cumplimiento, pues por regla general dichos acuerdos no tienen propiamente dicha ejecución, esto es, una obligación de hacer para las autoridades, sino por el contrario contienen una obligación de no hacer, de abstenerse, de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretar la medida suspensiva. Es sólo en los casos, en que la autoridad realiza un acto suspensivo, cuando la parte afectada denuncia tal hecho ante el Juez de Distrito y éste requiere a la autoridad para que informe del cumplimiento que está dando a la suspensión, sin embargo, el precepto legal citado, no establece un plazo para la rendición de dicho informe. Por tal motivo los Jueces de Distrito han optado por señalar un plazo de veinticuatro horas, para la rendición de dicho informe en el propio acuerdo en el que lo requieren, seguramente inspirados en la importancia que reviste en conservar la materia del juicio de garantías, en el sumario del procedimiento en el incidente de suspensión, en los previstos por el artículo 105, primer párrafo, de la Ley de Amparo (también aplicable por disposición expresa para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión), relativo a que la ejecutoria debe estar cumplida o encontrarse en vías de ejecución, dentro de la veinticuatro horas siguientes a las en que se notifique a las autoridades responsables, pero este precepto se refiere que en este término debe estar cumplida cuando la naturaleza del acto lo permita o encontrarse en vías de ejecución la sentencia ejecutoria pero no a que en dicho plazo la autoridad deba rendir su informe sobre el cumplimiento

que le den a la misma. No obstante esto, es claro que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado, en su caso, tiene facultades para exigir ese informe en el término de veinticuatro horas, cuando lo considere necesario. Sin embargo, en la especie nos encontramos que, por un lado no existe disposición expresa de la ley de la materia, que señala un plazo para que la autoridad informe sobre el cumplimiento que le esté dando al auto de suspensión, y por otro, que la Juez de Distrito fue omisa en señalarle a las responsables un determinado tiempo para informar, por lo cual, no siendo posible considerar que las autoridades cuentan con un plazo indefinido para informar el cumplimiento, y en atención a la rendición de ese informe es una obligación de la autoridad, pero también lleva implícito un derecho de la responsable, toda vez que, pudiendo ser graves las consecuencias que se deriven de la violación que se le imputa, tiene derecho a defenderse antes de que se le sancione, por consiguiente, ante tal omisión legal, debemos observar lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el artículo segundo de la Ley de Amparo, que dice: "Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. Diez días para pruebas y II. Tres días para cualquier otro caso." De esta manera, considerando que la rendición del informe sobre el cumplimiento de la suspensión es un derecho de la autoridad de ser escuchada antes de condenársele, y en atención a que el hecho de que no rinda informe no significa que la denuncia de violación quede sin resolverse o se resuelva hasta que la autoridad tenga a bien cumplir con su obligación de informar, es de concluirse que el término para el ejercicio de ese derecho es de tres días, salvo cuando el juzgador por estimarlo necesario señala un plazo más breve para rendir dicho informe, en cuyo caso se estará a lo dispuesto por éste.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo X-diciembre, pág. 320.

Ahora bien, rendido el informe al que se acompañaron las pruebas documentales o se ofrecieron en su caso otras que se desahogaron en un plazo de diez días, señalándose fecha para la audiencia de alegatos y se resolverá en un plazo de cinco días, conforme al artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. El incidente será tramitado y resuelto en la misma pieza

de autos incidentales, por no ser de previo y especial pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Amparo, que en su tercer párrafo dice: "Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fuera de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de substanciación…".

Cuando no haya pruebas que desahogar, rendido el informe, se realiza la audiencia de alegatos dentro de los tres días siguientes y se resuelve si hubo o no violación a la suspensión (provisional, definitiva o de oficio).

La resolución que se dicte en el incidente de violación a la suspensión, en cualquier sentido, no admite recurso de revisión y, por tanto, admite el recurso de queja, conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, al que pueden acudir cualquiera de las partes que se sienta agraviada en el término de cinco días (artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo); de no interponerse el recurso dentro de dicho término la resolución quedará firme y, para el caso de que se haya declarado la violación a la suspensión, lo único que queda por hacer es promover el cumplimiento a la medida cautelar, lo cual se opera también de oficio en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo, y el procedimiento de responsabilidad penal y administrativa en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, 105 y 206 de la Ley de Amparo. Este procedimiento de eje-cución y responsabilidad debe iniciarse pasados los cinco días.

Algunos opinan que contra las resoluciones dictadas en el incidente de violación a la suspensión procede el recurso de queja, como lo ordena la fracción VI del artículo 95 citado; sin embargo, el artículo 35 ordena que el trámite deberá realizarse en la misma pieza de autos, amén de lo injusto que resultaría dejar al quejoso sin recurso cuando se declare que no hubo violación y en realidad sí la hubo.

Los procedimientos a que se refiere el artículo 143, no son para resolver el incidente de violación a la suspensión, sino de ejecución al mandamiento cautelar y de responsabilidad para la autoridad que lo desacate.

Ahora la queja se interpondrá directamente ante el Tribunal Colegiado en un término de cinco días y suspende el procedimiento del juicio de amparo, mas no el de incidente de suspensión, conforme a los artículos 99 y 101, en relación con el 53 de la Ley de Amparo.

La queja conforme a la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, será procedente siempre y cuando la resolución cause un daño o perjuicio a la parte afectada, no reparable en la sentencia

definitiva. De ahí que la resolución que declare violada la suspensión, podría no causar ese perjuicio o daño a la autoridad y por tanto, resulta improcedente la queja; sin embargo, la que declara que no hay violación a la suspensión, pudiera causar ese daño o perjuicio al quejoso y, por ende, es procedente.

Por tanto, en materia penal cuando se trate de la libertad personal, y se resuelve que existió violación a la suspensión, deberá efectuarse de inmediato el auto de suspensión y remitirse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite del procedimiento de responsabilidad de la autoridad responsable, y el recurso de queja por parte de la autoridad no debe ser procedente, pues ya fue oído en el incidente y se le dio la oportunidad de rendir su informe, aportar pruebas y alegar; sin embargo, por parte del quejoso indiscutiblemente que procede el recurso. Incluso el término para rendir el informe, dada la naturaleza del acto, deberá estipularse en 24 horas, pero no existe disposición en ese sentido; de ahí que lo correcto es pedir el informe a la brevedad sin que exceda del término de tres días a que se refiere el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, si se demuestra la violación a la suspensión, el Juez de Distrito debe dictar las órdenes necesarias para el debido cumplimiento de la resolución suspensional, y ordenar a la autoridad responsable que cumpla la medida dispuesta en la suspensión, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto reclamado, sin que ello signifique que se están aplicando medidas propias de la resolución emitida en el juicio principal.

Si dentro del término de veinticuatro horas, la autoridad responsable es omisa en dar cumplimiento a lo anterior, el juez de amparo debe requerir al superior inmediato de la autoridad responsable que no dio cumplimiento al auto de suspensión para que la obligue a cumplir sin demora, y si esta última no atiende el requerimiento y tuviera a su vez superior jerárquico, también debe requerir al nombrado en el último caso (artículo 105, párrafo primero, del ordenamiento legal en cuestión).

Si las anteriores medidas no resultan suficientes para que las autoridades responsables o bien sus superiores jerárquicos, cumplan con el auto suspensional, el actuario o secretario comisionado, o bien el propio Juez de Distrito, se constituirán en el lugar en que se deba dar cumplimiento para ejecutar la resolución suspensional, (siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita), auxiliándose de la fuerza pública. Por ejemplo, para ponerlo en libertad (artículo 111, primer párrafo, de la ley de la materia).

En el supuesto de que se encuentre incomunicado, se le restituirá en el goce de sus garantías ordenando se le ponga a su disposición en el lugar en que éste señale, sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda.[79]

En otro caso, cuando el acto reclamado se traduce en la privación de la libertad personal del quejoso y la autoridad responsable se niega a ponerlo en libertad u omite dictar la resolución correspondiente dentro de un término que no exceda de tres días, el juez del amparo mandará ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda; en la inteligencia de que los encargados de las prisiones deben cumplir la disposición del Juez de Distrito (artículo 111, párrafo segundo, de la Ley de Amparo). Todos estos acuerdos deben hacerse en la misma pieza de autos incidentales (en el incidente de suspensión); no existe disposición expresa que disponga la apertura de un incidente en este caso (dentro de otro incidente). El artículo 35, párrafos primero y tercero, dispone que en los juicios de amparo no se substanciaran más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por la ley y que los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fuesen de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin formar substanciación. Este incidente, que sí lo es por exigir un pronunciamiento especial dentro de otro procedimiento, no es de pronunciamiento previo, es decir, no suspende el procedimiento principal; por tal motivo, si lo que se reclama es la violación de la suspensión provisional, la falta de resolución del incidente respectivo no impide al Juez de Distrito que se pronuncie en relación a la suspensión definitiva, desde luego observando los acontecimientos en relación a la primera, para así tomar las medidas adecuadas para el cumplimiento cabal de la segunda. Así se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

> SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO A LA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Cuando la parte quejosa en un juicio de garantías denuncie la violación a la suspensión provisional de los actos reclamados, antes de que se resuelva la suspensión definitiva, el Juez de Distrito deberá tramitar en lo sucesivo dos procedimientos distintos dentro del propio incidente: uno para resolver si concede la suspensión definitiva y otro para determinar si las autoridades incurrieron en desacato de la medida

[79] Polo Bernal, Efraín, Los incidentes en el juicio de amparo, Limusa Noriega Editores, 1994, p. 96.

cautelar. Aunque cada procedimiento requiera de una tramitación propia (por ejemplo la solicitud de informe, vista con su contenido, etcétera), dicha tramitación puede desarrollarse simultáneamente ya que no existe precepto legal o principio jurídico que obliguen al juzgador a interrumpir el procedimiento en lo relativo a la suspensión definitiva hasta que se resuelva sobre la denuncia a la violación; por el contrario, parecería injustificado retrasar oficiosamente la resolución definitiva en el incidente so pretexto de decidir sobre el incumplimiento de la medida provisional, pues bien podría suceder que la quejosa tuviera tanto o mayor interés en obtener una suspensión definitiva, que en comprobar los fundamentos de su denuncia. Piénsese, verbigracia en el caso de que se concediera la suspensión provisional únicamente respecto de algunos actos reclamados: en este supuesto, de retrasarse la resolución de la suspensión definitiva la peticionaria podría sufrir perjuicios, pues entonces las autoridades contarían con mayor tiempo y oportunidad para ejecutar los actos en relación con los cuales no se otorgó la medida provisional. Por otra parte, la circunstancia de que ambos procedimientos se desarrollen simultáneamente no significa que deban resolverse en un mismo fallo o que entre ellos exista necesariamente una relación cronológica determinada. En realidad, cada resolución deberá pronunciarse tan pronto como concluya la tramitación de su respectivo procedimiento, de ahí que pueda ocurrir primero la decisión referida al incumplimiento de la suspensión y después la relativa a la suspensión definitiva, o viceversa, o ambas en un mismo fallo. Al respecto, conviene tener presente que la eficacia directa de ambas resoluciones es diferente: la declaración de que se ha violado la suspensión provisional tiene por efecto de que se deje insubsistente el acto violatorio de la medida cautelar y que se determine la responsabilidad administrativa o penal de la autoridad por su desacato, en tanto que la suspensión definitiva provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que se resuelva por sentencia ejecutoriada el juicio en lo principal, en razón de lo cual no existe entre ambos una necesaria relación cronológica. Además, en todo caso, la influencia o trascendencia que ejercerá una sobre otra dependerá, en cada asunto, de que existan constancias procesales surgidas en la tramitación que no puedan servir de apoyo, objetivamente, a la resolución del otro procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación, 205-216 sexta parte, pág. 518.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar como se dijo con anterioridad, que no sólo la autoridad responsable debe conservar la situa-

ción jurídica contemplada en la suspensión, sino que debe impedir actos de sus subordinados o de particulares que la contraríen, y los superiores jerárquicos también quedan obligados a su cumplimiento, haciendo la aclaración que únicamente se encuentran obligados cuando se denuncia el incumplimiento de la suspensión y se requiere a los superiores jerárquicos dicho cumplimiento. De no obedecer las órdenes del Juez de Distrito para el cumplimiento de la suspensión, se remitirán los autos a la Suprema Corte, para que ésta proceda conforme a la fracción XVI del artículo 107 constitucional, es decir, la separación del cargo de la responsable; así lo determina el artículo 105 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que el Juez de Distrito continúe procurando el cumplimiento de la suspensión.

En relación a lo anterior, resulta útil hacer mención a la siguiente tesis jurisprudencial; la cual contiene la misma razón jurídica:

> EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad, que por sus funciones, tengan que intervenir en la ejecución de este fallo.[80]

En otro orden de ideas, en relación al tema de incumplimiento a la suspensión, se encuentran los siguientes criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, y que a continuación se mencionan:

> SUSPENSIÓN PROVISIONAL VIOLACIÓN A LA. DEBE QUEDAR PROBADO EL MOMENTO EN QUE COMENZÓ A VIOLARSE. A efecto de que pueda determinarse la violación a la suspensión provisional, se considera necesario que estén acreditadas tres cuestiones que resultan indispensables, y que son, primeramente, que la medida cautelar de que se trata haya sido concedida por el juez federal, en segundo lugar que la citada suspensión haya sido notificada a las autoridades responsables, y finalmente en tercer término, debe estar probado que en fecha posterior a la notifica-

[80] Arellano García, Carlos, op. cit., p. 828.

ción de la medida suspensiva, las autoridades ejecutaron los actos reclamados.

Informe 1986, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tercera parte, pág. 19.

SUSPENSIÓN. LOS ACTOS EJECUTADOS CON VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO PUEDEN TENERSE POR CONSUMADOS, NI TOMARSE EN CUENTA LOS HECHOS QUE HAGAN CONSTAR, PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN. Por disposición del artículo 143 de la Ley de Amparo, las medidas suspensionales deben cumplirse puntualmente al igual que los fallos constitucionales. Así que, todo acto posterior que se realice en contravención de la suspensión provisional, no podrá tenerse como consumado al resolverse sobre la suspensión provisional.

Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. Informe de 1975. tercera parte, pág. 116.

VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NECESIDAD DE RESOLVER SOBRE LA, AUN CUANDO SE HUBIERE RESUELTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y EL FONDO DEL JUICIO DE AMPARO. No es obstáculo para decretar la violación a la suspensión provisional, el hecho de que ya se haya resuelto en el incidente en relación a la suspensión definitiva y en el cuaderno principal, respecto al fondo del amparo, toda vez que la transgresión a la medida suspensiva versa sobre una materia distinta, que es la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables por su desacato a una resolución judicial que es de orden público.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Admva. del Primer Circuito. Informe de 1988. tercera parte, pág. 183.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. VIOLACIÓN DE LA, CUANDO SE NIEGA LA DEFINITIVA. Si el juez a quo concede la suspensión provisional y las autoridades responsables, así como las demás que tienen que ver con el acatamiento a la suspensión concedida, por su propio arbitrio estiman que no deben acatarla y de hecho no la acatan; y posteriormente se llega a negar la suspensión definitiva, el juez a quo ya no debe actuar para el efecto de que se acate la suspensión provisional, sino para dejar a salvo los derechos que la quejosa pueda tener para exigir responsabilidades y daños y perjuicios de la suspensión provisional mientras estuvo vigente, en términos de los artículos 130, 143 y demás relativos de la Ley de Amparo. Pues si se dejase al arbitrio de las autoridades responsables el determinar cuándo deben acatar la suspensión provisional o definitiva, mientras está vigente, y cuándo debe formularla por

considerar que tienen facultades para decidir sobre el interés público al respecto, ello sería tanto como otorgar a los funcionarios administrativos la facultad de derogar la fracción X del artículo 107 constitucional.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-150, Sexta parte, pág. 269.

En suma, la tramitación y decisión del incidente de violación a la suspensión (provisional, definitiva o de oficio) corresponde al Juez de Distrito o a la autoridad que conoce del juicio de garantías (Tribunal Unitario, Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en tratándose de jurisdicción concurrente), cuando se dé la jurisdicción auxiliar, el Juez de Distrito quien conocerá del incidente de referencia; a la Suprema Corte le corresponde conocer de la responsabilidad a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 constitucional, una vez que se le remita el expediente, es decir determinar, en su caso, la separación del cargo y la consignación al Juez de Distrito por el o los delitos que resulten siguiendo el procedimiento ahí establecido; debiéndose interpretar armónicamente esta disposición, con lo que establece la fracción XVII del mismo artículo constitucional y los preceptos 143, 104 y 105 de la Ley de Amparo.

Tratándose de la responsabilidad de las autoridades responsables al no dar cumplimiento al auto de suspensión, la fracción XVII del artículo 107 constitucional establece un derecho para el quejoso y para el tercero perjudicado (en su caso), de solicitar la consignación de la autoridad responsable cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, o cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, respectivamente.

Aunado a lo anterior, el artículo 107, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicas incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento a la suspensión, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido la suspensión, y puede configurar el delito de abuso de autoridad contemplado en el Código Penal, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

ARTÍCULO 206.—"La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de Abuso de Autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra."

Los elementos del tipo penal son: a) Que el sujeto activo del delito tenga el carácter de autoridad responsable en un juicio de amparo; b) Que el activo del delito desobedezca un auto de suspensión del acto reclamado, y c) Que la autoridad responsable se encuentre debidamente notificada del auto de suspensión.

Respecto al primer elemento, considero que no sólo las señaladas como responsables en la demanda tienen ese carácter, sino aun las no señaladas, pero que tengan facultades para ejecutar el acto, puesto que los inferiores jerárquicos pueden ejecutarlo sin estar señalados como responsables y por lo mismo, sin estar notificados debidamente por el juzgado; lo anterior debe ser así, para que la orden de suspensión sea efectiva y no se evada; el acto de notificación no se puede dar, pero si el quejoso muestra la copia certificada del auto de suspensión a la autoridad ejecutora no señalada, ésta debe respetar el mandato judicial.

El segundo de los elementos, se refiere a la desobediencia al auto de suspensión que puede ser de oficio, la provisional o la definitiva.

El tercer elemento implica necesariamente que deba ser notificado formalmente, pero una interpretación al hecho de que la autoridad ejecutora puede no estar señalada como tal en la demanda y, por ende, no se le tenga como parte, pero que aún así tiene la obligación de respetar la suspensión, considero que basta con que el quejoso muestre su copia del auto relativo para que aquélla se abstenga de ejecutar el acto.

Al efecto menciono el siguiente criterio laboral (aplicable a la materia penal), publicado en la página 680 tomo XIII, junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación:

> SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a) que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b) que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c) que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida.
>
> TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Además de la sanción penal, la separación del cargo es inevitable. A este respecto, existe la siguiente tesis jurisprudencial:

> SENTENCIAS DE AMPARO, DESOBEDIENCIA A LAS. Cuando en el juicio de amparo se comprueba que la autoridad responsable se niega a cumplir con la sentencia dictada, por medio de razones ineficaces o de evasivas, es procedente aplicarle la sanción a que se refiere la fracción XI del artículo 107 constitucional, separando a dicha autoridad de su cargo, y consignando los hechos para los efectos correspondientes.[81]

[81] Arellano García, Carlos, ibidem, p. 831.

CAPÍTULO VII

RECURSOS

SUMARIO: 1. Revisión. 2. Trámite. 3. Legitimación para interponer la revisión principal y la adhesiva. 4. Reglas relativas a la revisión adhesiva. 5. Reglas para el estudio de los agravios en el recurso de revisión (artículo 91). 6. Queja. 7. Reclamación.

Contra las resoluciones que emita la autoridad que conoce del amparo indirecto, la ley otorga recursos para impugnar aquéllas con las que no esté conforme, con el propósito de lograr la revocación o modificación de las mismas.

En el juicio de amparo existen tres recursos: el de revisión, queja y reclamación, tal y como lo establece el artículo 82 de la Ley de Amparo.

1. REVISIÓN

Concepto. Es el medio de impugnación, por el cual se combaten las resoluciones más trascendentales dictadas en los juicios de amparo, señaladas empíricamente en la ley de la materia, por medio del cual el tribunal de segunda instancia competente verifica la legalidad de las mismas, conforme a ciertas reglas, atendiendo a los agravios expresados o de oficio cuando así proceda, para determinar con plenitud de jurisdicción confirmarla, revocarla o modificarla.

Enseguida se exponen de manera gráfica los actos contra los que procede el recurso de revisión, quién lo puede interponer, el término para hacerlo, ante quién se interpone y quién conoce de él, en cada uno de los supuestos que prevé el artículo 83.

07_Capítulo_07 Ojeda.p65 555 23/04/2013, 12:20

Actos contra los que procede la revisión (art. 83)	Quién la interpone (art. 83, último párrafo, a contrario sensu).	Término para interponerla (art. 86)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
I. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del Superior del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo, y	El quejoso, que es a quien le perjudica estas resoluciones.	10 días	1. El Juez de Distrito. 2. Autoridad que conozca del juicio.	El Tribunal Colegiado (art. 85, fracción I).
II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del Superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales:		10 días	Juez de Distrito o autoridad que conoce del juicio.	Los Tribunales Colegiados (art. 85 fracción I).
a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;	Cuando se concede, el tercero perjudicado o autoridad responsable y cuando se nieguen, el quejoso. Cuando se modifique o revoque la concesión, el quejoso; cuando se modifique o revoque la negativa, el tercero perjudicado o la autoridad responsable.			
b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva, y	Cuando se niegue la modificación o revocación de la concesión de la suspensión, la puede impugnar el quejoso si pretendía que la suspensión tuviera un alcance mayor y el tercero perjudicado o autoridad responsable, si pre-			

Actos contra los que procede la revisión (art. 83)	Quién la interpone (art. 83, último párrafo, a contrario sensu).	Término para interponerla (art. 86)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
	tendían que la suspensión tuviera un alcance menor o que se negara. Cuando se niegue la revocación o modificación del auto que negó la suspensión, el quejoso.	10 días.		
c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el artículo anterior.	Cuando se niegue la modificación o revocación de la concesión de la suspensión, la puede impugnar el quejoso si pretendía que la suspensión tuviera un alcance mayor y el tercero perjudicado o autoridad responsable, si pretendía que la suspensión tuviera un alcance menor o que se negara. Cuando se niegue la revocación o modificación del auto que negó la suspensión, el quejoso.	10 días.	Juez de Distrito o autoridad que conoce del juicio.	Los Tribunales Colegiados (art. 85 fracción I).
III. Contra los actos de sobresimiento y la interlocutorias que dicten en los incidentes de reposición de autos;	Contra actos del sobreseimiento, el quejoso, pues sólo a él le afecta esta determinación. Cuando se dicten interlocutorias de reposición de autos, cualquiera de las partes a quien afecte los términos en que se tuvieron por repuestos los autos.	10 días.	Juez de Distrito o autoridad que conoció del juicio.	Los Tribunales Colegiado (art. 85 fracción I).

Actos contra los que procede la revisión (art. 83)	Quién la interpone (art. 83, último párrafo, a contrario sensu).	Término para interponerla (art. 86)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el Superior del Tribunal responsable, en los casos en lo que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia, y	Cualquiera de las partes, dependiendo del fallo.	10 días.	Juez de Distrito.	Los Tribunales Colegiados, si la resolución versa sólo sobre legalidad (art. 85-II). Suprema Corte de Justicia, cuando en el recurso subsista el problema de constitucionalidad o cuando la sentencia establezca la interpretación directa de un precepto constitucional.
V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobiernos de los Estados, o cuando establezca la interpretación directa de	Cualquiera de las partes.	10 días.	Tribunales Colegiados de Circuito.	La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Actos contra los que procede la revisión (art. 83)	Quién la interpone (art. 83, último párrafo, a contrario sensu).	Término para interponerla (art. 86)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
un precepto Constitucional. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender las otras. En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo la resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes a este caso, la adhesión al recuso sigue la suerte procesal de éste.				

2. TRÁMITE

El recurso se interpondrá por conducto del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio dentro de los diez días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución rendida (art. 186).

Quien obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de que se admite el recurso. La adhesión sigue la suerte procesal del recurso (art. 83).

El recurso se interpondrá por escrito, con una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes (art. 88).

Cuando falten total o parcialmente las copias se requerirá al quejoso para que las presente dentro de tres días, si no las exhibe se tendrá por no interpuesto el recurso.

El artículo 89 señala:

> ARTÍCULO 89.—"Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88. El Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal.
>
> En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.
>
> Tratándose del auto en el que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora de recibo.
>
> Cuando la revisión se interponga contra la sentencia pronunciada en materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el original del escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público dentro del término de veinticuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre constitucionalidad de una ley ni interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el auto relativo y en el oficio de remisión del expediente."

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas de ésta o del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso, admitiéndolo o desechándolo (art. 90).

Admitida la revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se mandará turnar el expediente dentro del término de diez días al ministro relator para que formule el proyecto de resolución, dentro de los treinta días siguientes; se pasará copia de él a los demás ministros y los autos quedarán a su disposición en la Secretaría.

Cuando por la importancia o voluminosidad del negocio el ministro relator estime que no es bastante el plazo de treinta días, puede pedir la ampliación del término por el tiempo que sea necesario.

Formulado el proyecto de sentencia, se señalará día y hora para la discusión y resolución, en sesión pública, y se podrá aplazar la resolución por una sola vez (art. 182).

Cuando en asuntos del orden penal el quejoso alegue entre las violaciones de fondo la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo debe estudiarla preferentemente, aun en los casos en los que se supla la deficiencia de la queja; si la estima fundada se abstendrá de estudiar las otras violaciones. Si es infundada examinará los restantes conceptos de violación (art. 183).

El presidente de la sala citará para la audiencia en que habrá de discutirse y resolverse, dentro de los diez días siguientes en que se distribuyó el proyecto.

En cada sala se formará una lista de los asuntos que deban verse en la audiencia, se fijará en lugar visible el día anterior y surtirá efectos de notificación (art. 185).

Toda ejecutoria que pronuncien las salas deberá ser firmada por el ministro presidente y por el ponente, con el secretario que dará fe.

Si no fuere aprobado el proyecto, pero el ponente acepta las adiciones o reformas propuestas, procederá a redactar la sentencia, en términos de la discusión. La ejecutoria deberá ser firmada por todos los ministros que hayan estado presentes en la votación, dentro de los quince días (art. 187).

Concluida la audiencia el secretario de acuerdos fijará en lugar visible una lista, firmada por él, de los asuntos que se hubiesen tratado y con el sentido de la resolución dictada en cada uno (art. 191).

El trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito se rige por los artículos 90 y 184 de la Ley de Amparo. El artículo 90 mencionado dispone que:

> ARTÍCULO 90.—"El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.
>
> …
>
> Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.
>
> …"

Por su parte el artículo 184 señala:

> ARTÍCULO 184.—"Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito observarán las siguientes reglas:
>
> I. El presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia, y
>
> II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos."

De tales normas resulta que una vez que el tribunal admite el recurso, notificará al Ministerio Público Federal para la formulación de su pedimento, sin que la ley señale un término para tal efecto; integrado el toca (expediente del recurso de revisión), en el término de cinco días se turnará por sorteo a uno de los magistrados, quien deberá formular el proyecto de resolución correspondiente dentro de un plazo que no rebase los quince días que marca la ley para la sesión, a fin de que sea listado cuando menos con tres días de anticipación a dicha sesión (artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). En la práctica y debido a las cargas de trabajo de los tribunales, con frecuencia los citados plazos no se respetan.

Si el proyecto del magistrado relator fue aprobado sin adiciones ni reformas, en la sesión correspondiente, se tendrá como sentencia definitiva y se firmará por los tres magistrados dentro de los cinco días siguientes.

Si es por mayoría, así se asentará en el expediente y en las actas correspondientes; el disidente podrá formular voto particular.

Si no se aprueba el proyecto del ponente, podrá ser retirado por una sola vez para presentar un nuevo proyecto si acepta las impugnaciones de sus compañeros magistrados para ser discutido en diversa sesión dentro de los quince días siguientes; si no las acepta y sostiene su proyecto, conforme al artículo 188 de la Ley de Amparo, se designará uno de los de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración al dictarla, debiendo quedar firmada en quince días (engrose).

El artículo 191 establece reglas comunes para el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales

Colegiados de Circuito, al conocer de asuntos en revisión, y es del tenor siguiente:

> ARTÍCULO 191.—"Concluida la audiencia del día en cada una de las Salas, el secretario de acuerdos respectivo fijará en lugar visible una lista, firmada por él, de los asuntos que se hubiesen tratado, expresando el sentido de la resolución dictada en cada auto."

Asimismo el artículo 190 dispone que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo se ocuparán de las cuestiones legales propuestas en la demanda de amparo.

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede llegar a conocer del amparo en revisión, al considerarlo de importancia "por sus características especiales", en estos casos ejercitará la facultad de atracción, atento al artículo 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La autoridad responsable sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se le reclama (artículo 87 de la Ley de Amparo); de lo contrario el recurso resulta improcedente.

En cuanto a que si los jueces penales están legitimados para interponer el recurso existía un criterio a favor y uno en contra; la contradicción de tesis fue resuelta el treinta de octubre de dos mil dos, declarando inexistente la contradicción, toda vez que durante la tramitación el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito se apartó del criterio de que las autoridades responsables judiciales carecen de legitimación para recurrir en revisión las sentencias de amparo dictadas por un juez de Distrito, ya que éstas tienen como característica esencial en el desempeño de su función la imparcialidad y adoptó el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del mismo Circuito que dice:

> RECURSO DE REVISIÓN. LOS JUECES PENALES ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO. ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten el acto que de ellas se reclame; por lo cual, en esos casos, a fin de determinar la procedencia de ese medio de impugnación, ha de dilucidarse si con el fallo impugnado se afectan las atribuciones con que fue investida la autoridad o exclusivamente importa intereses de particulares; en el caso de los Jueces Penales, quienes por disposición constitucional,

son autoridades encargadas de determinar las consecuencias jurídicas del delito y han sido ungidos con algunas facultades que se identifican con las del órgano acusador, como son la posibilidad de reclasificar el delito atendiendo solamente a los sucesos, la de recabar pruebas para mejor proveer, y otras análogas, evidencian que esos órganos jurisdiccionales no sólo dirimen controversias entre particulares, sino que tienen a su cargo la protección del orden público; además, no debe perderse de vista que las autoridades jurisdiccionales en materia penal se encuentran inmersas en un régimen de responsabilidad distinto de las civiles, pues de la subsistencia del acto que de aquéllas se reclama depende la responsabilidad en que eventualmente puedan incurrir. Estas consideraciones obligan a concluir que los Jueces Penales, en la medida en que se afectan las atribuciones con que fueron investidos, están legitimados para interponer el recurso de revisión y, por ende, resultan inaplicables al caso concreto los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada publicada en el tomo VIII, julio de 1998, página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y la Segunda Sala de aquel mismo órgano, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en el tomo X, julio de 1999, página 338, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las que son de los rubros siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA" y "TRIBUNALES AGRARIOS. AL ACTUAR COMO ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO."

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, tesis XVI.4o. J/1, pág. 525.

En mi opinión, los jueces penales no están legitimados para interponer el recurso, ya que dichas autoridades responsables son órganos que tienen como característica esencial la imparcialidad, intrínseca a la función jurisdiccional e inclusive de recurrir en revisión, toda vez que con ello favorecerían a una de las partes y su proceder advertirían parcialidad en perjuicio de la otra, además de que se convertirían en coadyuvantes del Ministerio Público; en consecuencia, sólo podrán estar legitimadas las autoridades responsables para interponer el recurso cuando el amparo se concedió por vicios propios del acto de ejecución.

3. Legitimación para interponer la revisión principal y la adhesiva

Podrán interponer la revisión principal, la parte quejosa, la autoridad responsable o la parte tercera perjudicada, dependiendo del sentido del fallo, según sea el caso de quien no obtuvo resolución favorable a sus intereses y pretende que el superior la revoque o la modifique; esto es, está legitimada para interponer el recurso la parte a quien perjudica la resolución recurrida.

En caso de que la sentencia favorezca a la autoridad responsable o al tercero perjudicado, no pueden interponer el recurso de revisión, pero sí pueden adherirse al recurso interpuesto por el quejoso (artículo 83, último párrafo), igualmente el quejoso lo puede hacer si la resolución le es favorable y los recurrentes son aquéllos.

El término para la interposición de la revisión adhesiva, es de cinco días contados a partir de la fecha en que se notifique la admisión del recurso (último párrafo del art. 83).

4. Reglas relativas a la revisión adhesiva

Por regla general, deben ser analizados previamente los agravios de la revisión principal, con las siguientes excepciones:

a) Cuando se plantean cuestiones relativas a la improcedencia del juicio (ya planteadas ante el Juez de Distrito u otras causales que no han sido analizadas), y

b) Cuando se pretenden mejorar aspectos que fueron adversos a quien obtuvo fallo favorable (por ejemplo cuando el recurrente adhesivo es el quejoso y el principal el tercero perjudicado o el M.P.).

Ahora bien, en la revisión adhesiva se pueden platear los siguientes agravios:

a) Los que fortalezcan las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable a sus intereses, y

b) Los que impugnen un punto decisorio que le fue adverso, pues la circunstancia de que no haya hecho valer el recurso de revisión principal contra los aspectos que le desfavorecieron, no implica que consintió los mismos, porque la ley le otorga el derecho a adherirse a la revisión y expresar los agravios relativos, sin limitarlo a sólo fortalecer las consideraciones de la sentencia que derivan de la parte favorable.

Si se produce la caducidad de la instancia en relación a la revisión principal, la revisión adhesiva sigue la misma suerte, conforme

al último párrafo del art. 83, pues el examen de los agravios de la revisión adhesiva sólo procede cuando prosperan los agravios de la revisión principal, por lo que si se produce la caducidad de la instancia en principal, declarándose firme la sentencia, desaparece la condición a que se encontraba sujeto el estudio de los agravios adhesivos y, por lo tanto, también queda sin materia.

INTERPRETACIÓN

REVISIÓN ADHESIVA. SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a lo que establece el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, en todos los supuestos de procedencia del recurso de revisión la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por su contrario, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes, los que únicamente carecen de autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, pues la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Tal dependencia al destino procesal, o situación de subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, lleva a determinar que la naturaleza jurídica de ésta, no es la de un medio de impugnación —directo— de un determinado punto resolutivo de la sentencia, pero el tribunal revisor está obligado, por regla general, a estudiar en primer lugar los agravios de quien interpuso la revisión y, posteriormente, debe pronunciarse sobre los agravios expuestos por quien se adhirió al recurso. En ese orden de ideas, la adhesión no es, por sí sola, idónea para lograr la revocación de una sentencia, lo que permite arribar a la convicción de que no es propiamente un recurso, pero sí un medio de defensa en sentido amplio que garantiza, a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de expresar agravios tendientes a mejorar y reforzar la parte considerativa de la sentencia que condujo a la resolutiva favorable a sus intereses, y también a impugnar las consideraciones del fallo que concluya en un punto decisorio que le perjudica.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ins-tancia Pleno, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P. CXLV/96, pág. 144.

5. REGLAS PARA EL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN (ARTÍCULO 91)

1. Si los agravios resultan fundados, se procederá a analizar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

2. Sólo se tomarán en cuenta las pruebas rendidas ante el Juez de Distrito. Salvo que éstas sean supervenientes y tiendan a acreditar la improcedencia del juicio.

3. Si se estima infundada la causa de improcedencia en que se apoyó el juez para sobreseer: se puede decretar el sobreseimiento por un motivo diverso o bien deberá entrarse al estudio del fondo del asunto.

4. Si se advierten violaciones al procedimiento que hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido del fallo, deberá ordenarse su reposición.

INTERPRETACIÓN

REVISIÓN EN CONTRA DEL ACTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA. Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión según lo previsto en la fracción I del artículo 84 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo.

Contradicción de tesis 23/96.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.—4 de noviembre de 1997.—Unanimidad de diez votos (ausente Genaro David Góngora Pimentel).—Juan Díaz Romero.—Secretario: Edgar Humberto Muñoz Gragales.

REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA INTERPONERLO. El artículo 19 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, con excepción del presidente

de la República, y si bien habla de suplencia por otros funcionarios, ello sólo es en relación con los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal a las que se refiere el propio precepto legal. Normas genéricas que tienen aplicación cuando el recurso de revisión en el juicio de amparo es interpuesto por una autoridad que no tiene el carácter de responsable, ni se encuentra dentro de los señalados casos de excepción, así como también es aplicable la diversa norma jurídica contenida en el artículo 87 de la ley invocada, en el sentido de que sólo pueden interponer el recurso de revisión las autoridades responsables cuyos actos se afecten en forma directa en la sentencia. Hipótesis de carencia de legitimación que se actualiza, por ejemplo, cuando la autoridad responsable afectada con la sentencia es una Sala colegiada y el recurso es interpuesto únicamente por su presidente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, pág. 513.

PRUEBAS EN LA REVISIÓN CONTRA UN AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR EXTEMPORANEIDAD. DEBEN TOMARSE EN CUENTA, SI CON ELLAS SE PERSIGUE DEMOSTRAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBELO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata del recurso interpuesto en un juicio de amparo directo, la copia certificada a que se refiere el numeral 169 de la propia ley. Pero esta disposición debe entenderse como una regla general aplicable única y exclusivamente cuando la materia de la revisión se circunscribe a infracciones legales cometidas por el a quo, con relación a cuestiones que por su propia condición deben ser apreciadas tal y como lo fueron por el resolutor primario, lo cual encuentra su razón de ser en que el procedimiento que se sigue para resolver la impugnación no constituye propiamente una instancia, dentro de la significación técnica del vocablo, sino tan solo un medio para estar en aptitud de constatar las supuestas transgresiones que aduce el recurrente, respecto de las cuales ya hubo una previa instrucción. De modo que si en la segunda instancia el recurrente se duele de que el Juez de Distrito desechó indebidamente la demanda de garantías, al considerar que su presentación resultaba extemporánea, y como razón de su impugnación alega que el juzgador pasó por alto que en el cómputo del plazo respectivo se

tomó en cuenta el periodo vacacional de la autoridad responsable, durante el cual no corren términos, válidamente se pueden recibir, por el ad quem, las pruebas documentales que acrediten el periodo vacacional, porque con ello se pretende evidenciar la indebida apreciación de un hecho que no se controvirtió ante el juzgador primario y que a pesar de ello, le sirvió de base para emitir la resolución recurrida, lo cual, por una parte, constituye una excepción a la regla general prevista en la norma y, por otra, es un acto de elemental justicia tendiente a no dejar en estado de indefensión al recurrente.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, agosto de 1995, tesis por contradicción 11/95, pág. 27.

REVISIÓN EN AMPARO. LA AMPLIACIÓN DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS ES PROCEDENTE SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO LEGAL PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Si bien es cierto que los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo no prevén de manera expresa la ampliación de agravios en el recurso de revisión, también lo es que la presentación del escrito mediante el cual se interpone el recurso no conlleva la pérdida del derecho procesal que asiste al gobernado para disponer en su totalidad del plazo que la ley le confiere para impugnar la sentencia recurrida, por lo que válidamente puede complementar o perfeccionar los motivos de inconformidad expresados en su contra, siempre y cuando esto se haga dentro del plazo de diez días que para la interposición del recurso establece el citado artículo 86.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, abril de 2001, tesis J. 45/2001, pág. 203.

REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 82, 83, 95, 131 y 133 de la Ley de Amparo, se colige al regirse la audiencia incidental por los principios de indivisibilidad, al no contemplarse la posibilidad de escindirla en sus etapas; el de continuidad de la audiencia, al establecer una serie de fases que sucesivamente deben desarrollarse hasta la conclusión del incidente, y el de celeridad procesal, ya que dada la naturaleza del objeto del incidente, se impone el deber de resolver sobre la solicitud de la medida cautelar dentro del plazo de setenta y dos horas seguidas a la fecha en que se promovió la suspensión, es incuestionable que la sustanciación del recurso que proceda contra los acuerdos dictados en la audiencia, no debe violar tales principios; antes bien,

deben seguir rigiendo. En esta tesitura, se puede afirmar que el recurso de revisión que se llegue a interponer en contra de la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva, resulta ser el medio idóneo para combatir los acuerdos relacionados con las pruebas y alegatos que se dicten durante la audiencia incidental, atento que la interlocutoria descansa en lo fundamental en esas pruebas y alegatos, al formar parte de una unidad, lo que no sucedería si debiera impugnarse a través del recurso de queja en el que no se podría combatir la interlocutoria aludida; además de que la procedencia del recurso de revisión no pugnaría con los principios de continuidad procesal y celeridad, en virtud de que aquél se interpondría en contra de la resolución en que se concede o niegue la suspensión definitiva, sin alterar la secuencia procesal, propiciando con mayor premura el dictado de una sola resolución en las que se examinen las violaciones al procedimiento y las de fondo. Lo anterior es acorde con los principios de concentración y economía procesal que rigen la sustanciación de los recursos, al poder combatir en un solo medio de impugnación las violaciones al procedimiento y las de fondo, facilitando las labores de los Tribunales Colegiados de Circuito. Adicionalmente, debe decirse que de estimarse fundados los agravios relacionados con violaciones al procedimiento, válidamente se podrá dejar insubsistente la interlocutoria de suspensión, ordenándose la reposición del procedimiento y disponiéndose la vigencia de la suspensión provisional otorgada, hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, aunado a que, de acuerdo con el principio de mutabilidad de las interlocutorias de suspensión, esta resolución sólo sería modificada por hecho superveniente, o bien, por la interposición del citado recurso y no por virtud de una simple insubsistencia como consecuencia de la resolución de un diverso recurso, como es el de queja. Así, puede concluirse que si bien contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental no procede el recurso de revisión expresamente, aquéllos son combatibles a través de éste cuando se interponga contra las resoluciones en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, pues una interpretación literal y restrictiva de este precepto implicaría la procedencia de dos recursos distintos contra resoluciones dictadas dentro de una misma audiencia incidental, es decir, queja contra acuerdos de trámite y revisión contra interlocutorias de suspensión, lo que generaría una serie de conflictos de técnica jurídica. Asimismo, si la audiencia incidental goza de características similares a la constitucional, por mayoría de razón se deben armonizar las fracciones II y IV del artículo 83 de la ley de la materia, para hacer procedente el recurso de revisión contra los acuerdos dictados durante la celebración de la audiencia incidental, máxime que, como ya se precisó, este recurso procede no sólo contra la interlocutoria, sino también contra todas aquellas actuaciones pos-

teriores al decretamiento de la suspensión definitiva, tratándose de la medida cautelar.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, junio de 2001, tesis de jurisprudencia 78/2001, pág. 7.

COMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS POR JUECES DE DISTRITO EN LAS QUE SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE SURTE CUANDO LA INTERPRETACIÓN SE REFIERA A MATERIA COMÚN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de amparo cuando en ellas se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional que no se refiera a alguna de las materias propias de especialización de las Salas, sino a materia común, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer del recurso y en tal hipótesis no se surte la competencia establecida para las Salas conforme a lo estatuido en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por versar la interpretación del precepto sobre una materia que no es de su especialidad, además de que una consideración diversa abriría la posibilidad de que se produjera contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las Salas, creándose inseguridad jurídica.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P. XVII/2000, pág. 87.

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUE LA CONTENGA, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias en las que se haya efectuado la interpretación directa de un precepto constitucional. A su vez, los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indican que esa competencia corresponde a las Salas, tanto en amparo directo, como en amparo indirecto, pero tratándose del Tribunal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, sólo es competente para pronun-

ciarse sobre dicha materia en la resolución de revisiones en amparo directo, como señala la fracción III del citado artículo 10, pero no en la revisión de amparos indirectos, toda vez que ni la fracción II del mismo precepto, ni ninguna otra disposición, le otorgan competencia expresa. Esta interpretación letrista, que cercenaría al Pleno una de las atribuciones exegéticas más importantes, de las que le son propias, no es admisible, en virtud de que rompería el sistema de control de la constitucionalidad que, en la vía judicial, se encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, la decisión de las cuestiones más trascendentes que pueden plantearse en amparo, tocándole conocer, así, del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados internacionales por estimarlos directamente violatorios de algún precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las Entidades Federativas a la esfera de competencia que la Constitución reserva a la Federación, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reconoce al Pleno de este Alto Tribunal el carácter de máximo intérprete de la Constitución Política, que es acorde con la intención perseguida con el actual texto del comentado artículo 107 constitucional, de que a este órgano corresponda, principalmente, el control de la constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, intención que aparece revelada en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese artículo 107, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia también tiene competencia para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que determinarse la interpretación directa de un precepto constitucional, resultando así que en esta materia pueden válidamente conocer de las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las Salas, conclusión que amplía la interpretación gramatical de los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 18/2000, pág. 36.

PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el

juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de Amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar el sobreseimiento en el juicio.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo VIII, septiembre de 1998, tesis 2a./J. 64/98, pág. 400.

REVISIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO NIEGA EL AMPARO EN CONTRA DE UNA LEY, PERO LO CONCEDE RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN, Y EN LA REVISIÓN SÓLO SE PIDE EL SOBRESEIMIENTO POR ESTE ÚLTIMO, EL COMPETENTE ES UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y NO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE. Cuando un Juez de Distrito niega la protección constitucional respecto de la norma impugnada y la concede respecto de su acto de aplicación, por vicios propios, debe estimarse que no es de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino de un Tribunal Colegiado de Circuito, el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en el cual combate las consideraciones que llevaron al juzgador de garantías a desestimar una causa de sobreseimiento relativa al acto de aplicación de la ley reclamada y a conceder el amparo por cuestiones de legalidad, pues aun cuando en la segunda instancia se decretara el sobreseimiento respecto de tal acto de aplicación, provocando la misma consecuencia en cuanto a la norma impugnada, la materia de tal estudio no sería propiamente de constitucionalidad, ya que el sobreseimiento es una determinación judicial que pone fin al juicio de amparo sin resolver sobre la cuestión de fondo, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del ordenamiento jurídico reclamado, única hipótesis en la que a este Alto Tribunal le corresponde conocer, originariamente, del citado medio de defensa, conforme a lo dispuesto en los artícu-

los 107, fracción VIII, inciso a), de la propia Constitución; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; y, 10, fracción II, inciso a) y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo IX, marzo de 1999, tesis 2a. XXXIII/99, pág. 321.

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS DE LA AUTORIDAD, CUANDO DEBA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR HABERSE FUNDADO EL ACTO RECLAMADO EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA. En el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en contra de la sentencia que otorgó la protección constitucional, son inoperantes los agravios relativos a tópicos respecto de los que en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio suplir la queja deficiente porque el acto reclamado en el juicio de garantías se fundó en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues a pesar de que no sea el quejoso el que interpone el recurso, por lo que podría pensarse que es improcedente tal suplencia, debe entenderse que ésta es aquélla que el juzgador de la primera instancia constitucional debió realizar en cuanto a los conceptos de violación y que se efectúa por el órgano revisor al avocarse al conocimiento de dicho medio de defensa. Por tanto, ante la inobjetable aplicación del mencionado beneficio para el quejoso, a nada práctico conduciría el examen de tales agravios, de lo que deriva su anunciada inoperancia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo IV, agosto de 1996, tesis 2a. LXIV/96, pág. 261.

QUEJA DEFICIENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN. IMPOSIBILIDAD PARA SUPLIRLA AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY RECLAMADA, SI EL RECURRENTE ES UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, prevé las diversas hipótesis en que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que la propia ley establece; sin embargo, de la interpretación sistemática de dicho precepto legal se concluye que esa obligación en ningún caso opera tratándose del recurso de revisión interpuesto por una autoridad responsable, en virtud de que de lo dispuesto en su fracción VI, del citado precepto se desprende que

la intención del legislador fue la de limitar la aplicación de esta figura al caso en que sea un particular el que interpone el recurso, lo que se corrobora por lo previsto en las primeras cinco fracciones del propio numeral, de cuyo análisis se advierte que la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia. Por tanto, el órgano revisor al conocer del recurso interpuesto por una autoridad responsable, contra una sentencia de amparo que determina la inconstitucionalidad de una ley, debe resolver conforme al estricto análisis de los agravios planteados por aquélla, aun cuando exista jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establezca su constitucionalidad.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XII, agosto de 2000, tesis 2a. CIII/2000, pág. 371.

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el

tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo III, marzo de 1996, tesis 2a./J. 12/96, pág. 507.

SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA O CONCEDE. Si bien el artículo 83 de la Ley de Amparo no señala expresamente que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano de los actos reclamados, el artículo 89 de esta ley, que regula el trámite de este recurso, en su tercer párrafo implícitamente establece su procedencia al disponer que: "tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo". La omisión en el artículo 83 deriva, indudablemente, de una deficiente redacción legislativa. No sobra abundar que la suspensión de plano, por sus características, es equiparable a la suspensión definitiva que se decreta en el incidente de suspensión, en tanto que surte sus efectos hasta que se decide en definitiva el juicio en lo principal, sin estar sujeta a una resolución interlocutoria.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, instancia Pleno, Tomo III, marzo de 1996 (9A), tesis P./J. 1/96 (8ª), pág. 73.

AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE LA MATERIA. La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme lo

dispone la tesis de jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 5, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR", no equivale a suplir la deficiencia en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es la lesión o el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traducen en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquéllas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar él o los motivos que sustentan su afirmación.

Tesis XXII/2002, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de quince de febrero de dos mil dos.

AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2ª/J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR", esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que

será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cual es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Pleno, Tomo XII, agosto de 2000, tesis P./J. 69/2000, pág. 5.

DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. CONSECUENCIAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que sí es factible el desistimiento de los recursos cuando la segunda instancia se abre a solicitud de la parte quejosa y ésta desiste del recurso intentado (tesis jurisprudencial 129, Apéndice 1985, octava parte, página ciento noventa y tres). Estimarlo en sentido contrario, implicaría una injusticia, pues sin provecho para ninguna de las partes, se obligaría al recurrente a litigar en una instancia en la que ya no tiene ningún interés y que pudiera serle perjudicial en un momento dado. Sin embargo, la consecuencia del multicitado desistimiento, en forma alguna puede ser el sobreseimiento en el juicio de garantías como lo solicita el revisionista, en atención a las siguientes consideraciones: según la doctrina, el desistimiento es la abdicación o el abandono de algún derecho; la renuncia de una convención empezada a ejecutar; la deserción de la apelación de una sentencia; el apartamiento de la acción y demanda, acusación o querella. Ese acto abdicatorio implica, por lógica, el reconocimiento de un derecho a demandar, apelar o querellarse. Por ende, mediante el desistimiento, el actor manifiesta su voluntad de abandonar el ejercicio de ese derecho a demandar, apelar o a querellarse lo que se traduce, por supuesto, en no querer ya continuar con la acción la apelación o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, y en congruencia con lo anterior, el desistimiento de una demanda como significa el de la acción que dio origen a un juicio, traerá como consecuencia el sobreseimiento en dicho juicio y el multicitado desistimiento sólo puede proceder cuando aún no se ha dictado sentencia en el mismo; o cuando, habiéndose dictado, esa sentencia le haya sido favorable al actor; pues sólo así se entiende que se puede renunciar, a través de ese acto procesal (el desistimiento), a algo que se tiene en el patrimonio o esfera jurídica: en el primer caso, el derecho a que se dicte una sentencia que puede ser favo-

rable para las pretensiones del actor; en el segundo, al derecho que se tiene de solicitar la ejecución de esa resolución que fue benigna. Pero, si el desistimiento lo es de un recurso, que se interpuso para impugnar un fallo que se dictó en contra del recurrente, el desistimiento de ese recurso no puede traer aparejado el sobreseimiento en el juicio cuya resolución es objeto precisamente de dicho recurso, porque en esa primera instancia no tiene más derecho que el de recurrir una sentencia que le fue adversa. Sólo se puede abandonar lo que se tiene; en el caso, una pretensión litigiosa en segunda instancia de un posible triunfo de su recurso de revisión, en el que pide al superior jerárquico del a quo, la revocación de la sentencia y la concesión del amparo. No es posible, entonces, aceptar que como consecuencia del desistimiento del recurso, se sobresea el juicio en el que se declaró constitucional el acto reclamado; es decir, en el que resultó perdidoso el quejoso. Luego entonces, como lo único que puede pretender abandonar es la continuación del procedimiento de la segunda instancia, ese desistimiento sólo debe producir la renuncia del acto procesal realizado: la interposición del recurso de revisión y la tramitación que haya habido en el mismo. Pero el fallo emitido por el juez del conocimiento debe quedar firme para declararse, en su caso, ejecutoriado. Así lo ha sostenido el más alto tribunal de la República, en la tesis jurisprudencial antes invocada, cuyo rubro es: "Desistimiento del recurso de revisión."

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, segunda parte-1, enero a junio de 1989, pág. 272.

IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SALVO QUE EN LA PRIMERA INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO. Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, y acorde con el criterio firme sustentado por este Alto Tribunal, el acto reclamado debe apreciarse tal y como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, en los juicios de garantías en la vía directa o en revisión no pueden ser admitidas ni valoradas pruebas que no se hayan aportado ante esa autoridad, puesto que las situaciones concretas que le fueron planteadas como acto reclamado podrían ser modificadas o cambiadas, también lo es que esta restricción únicamente debe tener aplicación cuando se trata de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues no puede ni debe hacerse extensiva a aquellos medios de convicción tendientes a acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia

del juicio, toda vez que su estudio, además de ser de oficio, según lo prevé el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, impide que al actualizarse se examine el fondo del asunto, lo que ocasiona que no se vierta pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En este sentido, se concluye que en esas vías judiciales (amparo directo o en revisión), es factible que se admitan y valoren pruebas que evi-dencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello signi-fique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, ya que, al no sufrir variación alguna la materia del acto reclamado, existe impedimento técnico jurídico para poder emitir pronun-ciamiento alguno sobre el fondo del asunto, salvo en los casos en que la causal de que se trate haya sido motivo de pronunciamiento en la resolución de primera instancia del juicio de garantías y no se hubiere combatido ese aspecto en la revisión.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, 1a./J. 40/2002, Página 126.

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS CUALES EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ABORDAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO, RESPECTIVAMENTE, EN EL PUNTO TERCERO, FRACCIÓN I Y PUNTO PRIMERO DE LOS ACUERDOS GENERALES PLENARIOS 6/1999 Y 1/2000, PUBLICADOS EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. De lo dispuesto en el punto tercero, fracción I, del Acuerdo 6/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina el envío de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado en cuanto a su procedimiento por el Acuerdo General Plenario 1/2000, punto primero, se desprende que son dos los supuestos en los que el Tribunal Colegiado de Circuito debe abordar el estudio de los agravios de legalidad que se planteen conjuntamente con los de constitucionalidad, a saber: a) Cuando al recibir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, directamente de los Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito, un recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional, revoque el sobreseimiento decretado en el juicio y no advierta otra causa de improcedencia o motivo que impida el examen de constitucionalidad, siempre que éste ya se encuentre resuelto por jurisprudencia de este Alto Tribunal; o b) Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se haya pronunciado en relación con los agravios referentes al problema de constitucionalidad, le remita los autos del recurso de revisión correspondiente. En este tenor, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito

reciba un recurso de revisión en los términos de los acuerdos referidos y no esté en los supuestos señalados en los incisos a) y b) anteriores, deberá reservarle jurisdicción a este Alto Tribunal, y sólo has-ta que éste se pronuncie respecto al problema de constitucionalidad y le devuelva los autos, podrá abordar el estudio de legalidad.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, 1a./J. 35/2002, Página 160.

REVISIÓN. SI SE INTERPONE ESE RECURSO POR PERSONA QUE SE OSTENTE COMO APODERADO DIVERSO DEL QUE ACTUÓ EN LA PRIMERA INSTANCIA OMITIENDO ACREDITAR SU PERSONALIDAD, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ PREVENIRLA PARA QUE EXHIBA EL DOCUMENTO JUSTIFICATIVO CORRESPONDIENTE. De la interpretación de los artículos 86 y 88 de la Ley de Amparo que establecen los requisitos que debe contener el recurso de revisión, se arriba a la conclusión de que el presidente del Tribunal Colegiado que corresponda, con apoyo en los preceptos mencionados, deberá examinar la personalidad del promovente al recibir el recurso si lo hace persona diferente a la reconocida en la primera instancia porque ello constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso que, de estar satisfecho, así deberá hacerlo constar en el auto admisorio de dicho recurso y, en caso contrario, deberá requerir su exhibición dentro del término de tres días con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto, por ser a quien corresponde realizar el examen preliminar sobre la procedencia del recurso de revisión para admitirlo o desecharlo de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a los imperativos del artículo 17 constitucional y responde a los principios de certidumbre, buena fe y economía procesal pues se evita la posibilidad de admitir un recurso que tal vez no interese agotar a quien originalmente corresponde su ejercicio así como los daños graves que se pudieran ocasionar tanto para el sistema de impartición de justicia como a las partes.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 72/2002, Página 355.

PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS DOCUMENTALES APORTADAS PARA DESVIRTUAR LA OMISIÓN DE RENDIR INFORME JUSTIFICADO QUE SE IMPUTA EN LA SENTENCIA RECURRIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE. La regla general consignada en el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que en el recurso de revisión sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, no se debe aplicar en el caso de que

la autoridad en la revisión aporte pruebas documentales para desvirtuar la omisión de rendir informe justificado en el juicio de amparo, que se le imputa en la sentencia recurrida, pues con ellas pretende demostrar la indebida apreciación de un evento que no pudo contradecir en la primera instancia; en efecto, dichas pruebas deben ser tomadas en consideración, ya que se refieren a un hecho que sirvió de base para emitir la sentencia recurrida y aplicar en ella las consecuencias que para tal omisión prevé el artículo 149, párrafos tercero y cuarto, de la ley de la materia, a saber, la presunción de certeza del acto reclamado y la imposición de una multa a la autoridad responsable omisa. De estimarse lo contrario la autori-dad recurrente quedaría en estado de indefensión.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, 2a./J. 60/2002, Página 352.

REVISIÓN ADHESIVA. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24 y 34 del propio ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco días para que la parte que obtuvo sentencia favorable se adhiera al recurso de revisión, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se hizo del auto admisorio de dicho recurso. Lo anterior es así porque, por su naturaleza, una notificación sólo puede afectar al notificado cuando surte sus efectos y no antes, de manera que el plazo relativo al medio de defensa de la adhesión al recurso de revisión necesariamente tendrá que correr hasta que la notificación haya surtido sus efectos, aun cuando no se diga expresamente en el artículo en el que concretamente se prevea el plazo específico, porque al respecto opera la regla general establecida en el artículo 24, fracción I, de la ley en mención, en el sentido de que el cómputo de los plazos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. En este tenor, debe destacarse que el conflicto de redacción que existe entre el artículo 24, fracción I, por un lado, y el artículo 83, fracción V, por otro, de la citada Ley de Amparo, en el aspecto a que se hace referencia, debe resolverse mediante la interpretación de ambos numerales, de manera que se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, 1a./J. 38/2002, Página 137.

6. QUEJA

El recurso de queja, previsto en el artículo 95 de la Ley de Amparo, contempla la impugnación de los acuerdos que emitan tanto las autoridades que conozcan del amparo como aquéllas que fueron señaladas como responsables, con el propósito de lograr su revocación o modificación.

El cuadro que sigue precisa, en cada una de las hipótesis contra las que procede la queja, quién la puede interponer, el término para su interposición, ante quién debe interponerse y quién conoce de ella.

Actos contra los que procede la queja (art. 95)	Quién la interpone (art. 96)	Término para interponerla (art. 97)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
I. Contra autos de Juez de Distrito o Superior del Tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;	Tercer perjudicado y/o autoridad responsable	5 días.	Tribunal Colegiado (Art. 99).	El Tribunal Colegiado (Art. 99).
II. Contra las autoridades responsables en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;	Cualquiera a quien afecte la resolución, aunque no sea parte en el juicio.	En cualquier tiempo.	Juez de Distrito o Tribunal Colegiado según sea el caso, amparo directo o indirecto.	El Juez de Distrito o Tribunal Colegiado (Art. 98).
III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de la ley;	El quejoso.	Cualquier tiempo.	Juez de Distrito o Tribunal Colegia-do (Art. 98).	Juez de Distrito o Tribunal Colegiado (Art. 98).

Actos contra los que procede la queja (art. 95)	Quién la interpone (art. 96)	Término para interponerla (art. 97)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;	Cualquiera a quien afecte la resolución puede interponer la queja.	Un año.	Juez de Distrito que conoció del juicio y dictó la sentencia (Art. 98)	El Juez de Distrito o Tribunal Colegiado que conocieron del juicio (Art. 98).
V. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 73, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Federal respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;	Cualquiera de las partes en la queja.	5 días.	Tribunal que debió conocer de la revisión.	El que debió conocer de la revisión (Art. 99).
VI. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito o el Superior del Tribunal a quien se imputa la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar	Las partes en el juicio. La interposición del recurso suspende el procedimiento, siempre que la resolución deba influir en la sentencia (Art. 101)	5 días.	Tribunal que debió conocer de la revisión.	El Tribunal Colegiado.

Actos contra los que procede la queja (art. 95)	Quién la interpone (art. 96)	Término para interponerla (art. 97)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;				
VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;	Sólo las partes interesadas.	5 días.	Tribunal que debió conocer de la revisión.	El Tribunal que debió conocer de la revisión.
VIII. Contra las autoridades responsables, con relación al los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a	Cualquiera de las partes en el juicio.	5 días.	Tribunal que debió conocer de la revisión.	El Tribunal que conoció o debió conocer de la revisión.

Actos contra los que procede la queja (art. 95)	Quién la interpone (art. 96)	Término para interponerla (art. 97)	Ante quién se interpone	Quién conoce de ella
que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados.				
IX. Contra los actos de autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;	Cualquiera de las partes en el juicio.	Un año.	Tribunal que debió conocer de la revisión (Art. 99).	El Tribunal que debió conocer de la revisión (Art. 99).
X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de incumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, así como la determinación sobre la caducidad en el procedimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113;[82]	Cualquiera de las partes.	5 días.	Tribunales Colegiados (Art. 99) o la Sala de la SCJN.	El Tribunal Colegiado (Art. 99) o la Sala de la SCJN.
XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del Superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.	Cualquiera de las partes.	24 horas.		El Tribunal Colegiado resolverá en 48 horas.

[82] Reforma publicada el 17 de mayo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.

En todos los supuestos previstos en el artículo 95, la queja se interpone por escrito, y se acompaña una copia para cada una de las autoridades contra quien se promoverá y para cada una de las partes en el juicio.

En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, una vez recibido el escrito de queja con copia para cada una de las partes en el juicio y dará entrada al recurso, se requiere a la autoridad en contra de la cual se haya interpuesto para que rinda informe con justificación, el que deberá rendir dentro de tres días, posteriormente se dará vista al Ministerio Público por igual término y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

En cuanto a las demás fracciones del precepto legal aludido, el trámite es el mismo, sólo cambia el término que tiene el Tribunal Colegiado para resolver sobre el recurso, así en las fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX y X, cuenta con un plazo de diez días y cuarenta y ocho horas para el caso de la fracción XI.

En el supuesto previsto en la fracción VI, se suspende el procedimiento del juicio de amparo, siempre y cuando la resolución que se dicte en la queja pueda influir en la sentencia o cuando de resolverse el juicio en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja (artículo 101).

Es pertinente hacer un comentario respecto de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en atención a que resulta ser uno de los supuestos de procedencia del recurso de queja más comunes en la práctica judicial.

Dicho precepto a la letra dice:

> ARTÍCULO 95.—"El recurso de queja es procedente:
>
> …
>
> VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del Tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admiten expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar también perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallar el juicio en primera instancia, cuando sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia, con arreglo a la ley."

De la anterior transcripción se colige, que la fracción VI del artículo 95, de la Ley de Amparo señala como presupuestos para la procedencia de la queja, en primer término, que la resolución recurrida se dicte durante la tramitación del juicio o del incidente de

suspensión; en segundo, que no admita el recurso de revisión conforme lo establece el precepto 83 del propio ordenamiento legal y, por último, la doble condición, por un lado, de que la resolución impugnada sea de naturaleza trascendental y grave y, por el otro que por ello pueda causarse a la parte recurrente un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva.

Ahora bien, en relación a la fracción que se analiza el artículo 101 de la ley de la materia establece lo siguiente:

> ARTÍCULO 101.—"En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuvieren resolución favorable en la queja."

En relación a la suspensión del procedimiento del juicio de amparo, con motivo de la interposición del recurso de queja en el supuesto que se analiza, es oportuno señalar un ejemplo de un asunto de carácter trascendente, que con relativa frecuencia se plantea en el Primer Circuito Judicial de nuestro país.

Es común que en los juicios de garantías promovidos por quejosos que fueron extraditados a México, el Juez de Distrito (en funciones de Juez de Amparo) requiera tanto del Ministerio Público Federal como de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su carácter de autoridades responsables, la remisión de copias certificadas de los expedientes relacionados con los trámites de extradición internacional solicitadas por el Gobierno de México, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les impondrá una multa, a fin de que la parte quejosa pueda ofrecerlos como pruebas en el juicio de amparo. Sin embargo, en muchas ocasiones las autoridades responsables se muestran reacias a cumplir con dicho requerimiento y por lo mismo interponen el recurso de queja en contra de ese auto de requerimiento.

En esos casos la interposición del recurso de queja con apoyo en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, suspende el procedimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de dicho ordenamiento, toda vez que el auto impugnado se hace consistir en un acuerdo de requerimiento de documentos que no admite expresamente el recurso de revisión y, que por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio a

alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que al concernir a la prueba podría influir en la decisión del fondo del asunto.

Sin embargo, en términos generales el recurso de queja no sería procedente, toda vez que el proveído impugnado, no tiene trascendencia, ni consecuencia de gran entidad o importancia, en razón a que dicho acto al tratarse de un requerimiento de copias certifica-das, no tiene efectos durante la secuela procesal, en virtud de que por sí mismo, no le causa al recurrente un daño o perjuicio económico de gran entidad. Además, no limita la oportunidad y derecho de las partes para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, tampoco implica variación de la litis constitucional o el que se les afecte o prive, de los derechos que pueden ejercer en su oportunidad, o de las prerrogativas procesales que señala la ley de la materia, como puedan ser el ofrecimiento de pruebas, la formulación de alegatos en las audiencias, o la interposición de recursos, lo que implicaría que se hubiera dejado al recurrente sin defensa.

Por otra parte, el supuesto de existencia de daños o perjuicios ocasionados por el proveído impugnado, o bien su posible realización, tampoco se actualiza, pues en el caso no se ha impuesto multa alguna y por ello el solo requerimiento no puede estimarse sinónimo de daño o perjuicio.

No obstante lo anterior, la queja resulta procedente en contra del auto a través del cual se requiere a la responsable para que expida al promovente las copias certificadas que solicitó, apercibiéndola con multa si no lo hace, si es que ya manifestó que en los archivos de la dependencia a su cargo no se encuentran las constancias solicitadas, pues en este caso la imposición de la queja es inminente.

Resulta oportuno citar el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que a la letra dice:

> QUEJA IMPROCEDENTE. AQUELLA QUE SE PROMUEVA CONTRA EL AUTO POR EL CUAL EL JUEZ FEDERAL REQUIERA A LA RESPONSABLE PARA QUE EXPIDA AL PROMOVENTE DEL AMPARO LAS COPIAS CERTIFICADAS QUE SOLICITÓ, APERCIBIÉNDOLA CON MULTA SI NO LO HACE. Porque no tiene el carácter de grave, y además no causa daño alguno a la autoridad requerida, ya que si esta no se encuentra de condición de expedir las copias certificadas, por no hallarse en el expediente las constancias relativas, está en posibilidad de hacer saber al Juez de Distrito, pero si ya manifestó que los archivos de su dependencia a su cargo no se encuentran las constancias solicitadas por lo que

tiene un impedimento para cumplir con lo requerido, es inminente la imposición de la multa a las autoridades con la que ya las apercibió la Juez Federal, mientras que las autoridades mencionadas no podrán hacer otra cosa que repetir ya lo antes señalado al juez de primera instancia. Por tanto, en este caso específico, el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VI de la Ley de Amparo sí es procedente.

QA.116/83. Director General Jurídico y de Gobierno del Departamento del Distrito Federal. Magistrado Relator: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Resuelto por unanimidad de votos el 25 de octubre de 1983.

A pesar de lo anterior, si al impugnar el proveído a través del cual se hace el requerimiento de las documentales de referencia, únicamente se reclama el requerimiento y no así el apercibimiento correspondiente, el recurso resulta improcedente, toda vez que no es posible suplir la deficiencia de la queja al recurrente por tratarse de una de las autoridades responsables, en virtud de que es inconcuso que la condición de que la resolución impugnada sea de naturaleza trascendental y grave, y que con ella pueda causarse a la parte recurrente un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, no se actualiza, ya que de dicho apercibimiento es del cual deriva la inminente imposición de la multa a la autoridad recurrente y, en su caso, el carácter grave y trascendente del auto impugnado en queja.

Por último, debe comentarse que el artículo 102 establece una multa de diez a ciento veinte días de salario en contra del recurrente, del apoderado, abogado o ambos, cuando la Suprema Corte de Justicia o el tribunal colegiado desechen el recurso por notoriamente improcedente o declaren infundado el recurso por haberse interpuesto sin motivo alguno, excepto cuando sea promovido contra algunos de los actos expresados en el artículo 17 (peligro de privación de la vida, destierro, deportación, etcétera).

Existen criterios por contradicción de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que han determinado que el recurso de queja procede en los siguientes casos: Desechamiento de pruebas antes de la audiencia constitucional; el auto por el que ordena la preparación y deshogo de pruebas siempre y cuando causen un daño o perjuicio grave no reparable en la sentencia definitiva; la fijación de la garantía en la suspensión provisional; contra los acuerdos de trámite dictados en el incidente de suspensión; la resolución de incompetencia que omita proveer respecto de la suspensión de oficio; las que desechan parcialmente la demanda de amparo; la que declara sin materia el incidente de suspensión y la que deseche la ampliación de la demanda.

INTERPRETACIÓN

AMPLIACIÓN DE UNA DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA Y NO EL DE REVISIÓN, CONTRA RESOLUCIONES QUE LA DESECHAN. El recurso de revi-sión no es el medio de defensa idóneo para impugnar el acuerdo que niega la admisión de la ampliación de una demanda de amparo indirecto, ya que la interpretación del numeral 83, fracción I, de la ley de la materia, conduce a concluir que dicho recurso procede únicamente contra aquellas resoluciones que desechan la demanda de garantías en su totalidad y todos los casos en que procede tal recurso se refieren a resoluciones que dan por terminado el juicio de amparo o el incidente de suspensión. En efecto, el recurso de revisión sólo procede contra resoluciones señaladas, expresa y limitativamente, en el invocado artículo 83, por lo que no admite interpretación por analogía, similitud o mayoría de razón; de modo tal que la fracción I no es aplicable al caso porque, entre la demanda inicial y su aplicación no existe una relación lógica de identidad, pues con la presentación de la primera se ejerce la acción de amparo, iniciándose así el proceso jurisdiccional, en tanto que con la ampliación se pretende introducir nuevos elementos al juicio para modificar a adicionar una litis en vías de integración; ante estas diferencias, tampoco pueden estimarse idénticos los autos que desechan una y otra, ya que el de la demanda primordial tiene como efecto la inapertura del juicio, mientras que la no admisión de la ampliación permite que continúe el procedimiento; de ahí que el recurso procedente contra tales determinaciones es el de la queja, de conformidad con el artículo 95, fracción VI, de la citada ley, ya que se está en presencia de una resolución del Juez de Distrito, durante la tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión y, por su naturaleza, puede causar daño o prejuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio; además, atendiendo al sistema de tramitación de ambos recursos, resulta más adecuado a la práctica el de la queja, por ser breve y sencillo, dejando abierta la opción de suspender el procedimiento en determinados casos, como lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, lo que no sucede con el recurso de revisión, cuya sustanciación es más completa y, por lo mismo, implica mayor dilación, y no prevé la suspensión del procedimiento.

Contradicción de tesis 18/95.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—20 de enero de 1997.—Unanimidad de once votos.—Ponente: Humberto Román Palacios.— Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.

PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Amparo, en contra de actuaciones judiciales emanadas de Jueces de Distrito, se reducen a resoluciones definitivas o a resoluciones dictadas en los incidentes de suspensión, mas no contemplan proveídos o decretos de mero trámite; en cambio, la fracción VI del artículo 95 del propio ordenamiento, expresamente dispone que el recurso de queja es procedente contra resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En consecuencia, es el recurso de queja el que procede en contra de un auto dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por las partes, ya que se trata de un proveído que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que al quedar firme dicho auto, la parte a quien no se le admitieron las pruebas, no podrá ofrecerlas en otra oportunidad procesal, ni el Juez de Distrito se ocupará de dicha cuestión al dictar sentencia definitiva, ni el tribunal de alzada, en su caso, al dictar la resolución en segunda instancia.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Pleno, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 37/97, pág. 87.

PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE RE-PARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. Por regla general, los autos o resoluciones dictados por los Jueces de Distrito, dentro de los cuales se ubica la orden de preparación o desahogo de una prueba legal y conducente, no son recurribles sino sólo impugnables vía agravio en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia establece

un supuesto de excepción consistente en la impugnación, a través del recurso de queja, de aquellos autos que no admiten expresamente el recurso de revisión conforme a lo previsto en el señalado artículo 83 y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar algún daño o perjuicio a alguna de las partes de imposible reparación en la sentencia definitiva, como acontece tratándose de los autos que mandan preparar y desahogar pruebas que, no obstante ser legales y conducentes, contengan una posibilidad de afectación cierta sobre cualquiera de los sujetos de la relación procesal, con independencia de la valoración apropiada o inapropiada que realice el juzgador, así como de la sentencia definitiva le resulte favorable o no. Empero, es claro que dicha factibilidad de daño y perjui-cio no puede considerarse ordinaria, toda vez que exige gravedad y trascendencia, como puede ser el caso de que se ordene prepa-rar y desahogar pruebas posiblemente atentatorias, verbigracia, de la privacidad personal, el secreto profesional, etcétera, hipótesis que el legislador está imposibilitado en señalar casuísticamente; de ahí que para evitar la materialización objetiva de aquel daño o perjuicio, otorgó a los agraviados la posibilidad de lograr la suspensión del procedimiento y de probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del recurso la referida amenaza, efectuando una valoración tendiente a ponderar la veracidad o no de la misma. En conclusión, debe decirse que el auto que ordena preparar y desahogar pruebas podrá ser impugnado a través del recurso de queja, siempre y cuando puedan causar un daño grave y trascendente no reparable en sentencia definitiva y serán los órganos jurisdiccionales colegiados que conozcan del asunto los que, atendiendo a sus características particulares en la resolución fundada y motivada sobre la queja hecha valer, determinen o no su procedencia.

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, Tomo XIII, junio de 2001, tesis de jurisprudencia 74/2001, pág. 6.

QUEJA PROCEDENTE. FIANZA PARA LA SUSPENSIÓN. PROVISIONAL. El recurso de queja procede, conforme a la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar a una de las partes un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, el auto que concede la suspensión provisional y fija la fianza correspondiente, no admite expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la ley, ya que su fracción II habla expresamente de resoluciones que conceden, nieguen, modifiquen, revoquen o se nieguen a revocar la suspensión

definitiva. Por otra parte, la fijación de la fianza para la suspensión provisional sí puede causar daños y perjuicios no reparables en la sentencia definitiva (ni en la interlocutoria de suspensión), pues si por incapacidad de otorgar la fianza al quejoso, se ejecutan los actos reclamados, así sea temporalmente, ello puede causar una lesión que la posterior concesión de la suspensión definitiva, y del amparo no repararía, pues las autoridades responsables no suelen pensar (sin que proceda aquí examinar esto) que la restitución de las cosas al estado anterior, conforme el artículo 80 de la Ley de Amparo, incluya la indemnización de los daños y perjuicios causados por la ejecución de los actos reclamados. Luego se debe concluir que el recurso de queja sí es procedente contra el auto que fija el monto de la fianza para conceder la suspensión provisional.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 97-102, sexta parte, pág. 210.

QUEJA, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE, CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No es admisible que mediante el recurso de revisión puedan examinarse las violaciones cometidas en la audiencia incidental, porque tales actos procesales son impugnables mediante el recurso de queja, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, cuenta habida de que contra ellos, no se admite expresamente el recurso de revisión en ninguna de las fracciones del artículo 83 de la citada ley, y por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daños o perjuicios a alguna de las partes, no reparables en la sentencia definitiva.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, tesis I.6o.C. J/3, pág. 151.

QUEJA, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA QUE OMITA PROVEER RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO. Cuando en una resolución el Juez de Distrito se declara incompetente, sin proveer respecto de la suspensión de oficio, los efectos de ese acto irre-gular equivalen a una negativa y esa resolución es recurrible mediante el recurso de queja, en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de una resolución irregular que tiene un claro efecto positivo e influencia dentro del proceso.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia Segunda Sala, Tomo VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, tesis 2a./J. 5/90, pág. 127.

QUEJA, PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES QUE DESECHAN PARCIALMENTE UNA DEMANDA DE

GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, en los casos en que el Juez de Distrito admite sólo en parte una demanda de amparo y la desecha en cuanto a ciertos quejosos o autoridades responsables, el recurso que la parte quejosa debe interponer en contra del desechamiento parcial de esa demanda es el de queja, dado que se trata de una resolución emitida durante la tramitación del juicio de amparo que no admite el recurso de revisión, puesto que una correcta interpretación de la fracción I del artículo 83 de la ley citada, permite concluir que dicho recurso procede únicamente contra las resoluciones que desechan la demanda de amparo en su totalidad y las que dan por concluido el juicio de garantías. A esa conclusión se llega, tomando en cuenta, además, que todos los casos en que procede el recurso de revisión, se refieren a resoluciones que dan por terminado el juicio de amparo o el incidente de suspensión, de lo que se deriva, si se atiende al sistema de tramitación de los recursos de queja y de revisión, dados los términos en que se encuentran redactados los artículos 83, 89, 95, 98 y 99 de la Ley de Amparo, que el recurso que se interponga contra las resoluciones emitidas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión fuera rápido y sencillo, dejando abierta la opción de suspender el procedimiento en determinados casos, como dispone el artículo 101. Esto no sucede con el recurso de revisión cuya substanciación es más compleja y, por lo mismo, implica mayor dilación. Como en el supuesto de que se trata, se debe seguir actuando dentro del expediente, por cuanto se refiere a la parte de la demanda que fue admitida, y toda vez que el recurso de revisión no prevé la suspensión del procedimiento de este caso, el recurso procedente debe ser el de queja.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, instancia Pleno, Tomo VIII, julio de 1991, tesis P./J. 40/91, pág. 56.

QUEJA. ES OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESE RECURSO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 17/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 108, de rubro: “PRUEBAS Y

ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO", determinó que la finalidad perseguida por el legislador en el artículo 78 de la Ley de Amparo, consiste en que el juzgador tenga a la vista todos aquellos elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, se estimen imprescindibles para resolver los planteamientos en torno a los cuales gira la controversia sometida a su potestad, para lo cual debe allegarse de ellos oficiosamente. Ahora bien, si de lo dispuesto en los artículos 95 a 101 de la Ley de Amparo, que regulan la procedencia, tramitación y resolución del recurso de queja, interpuesto para controvertir las determinaciones o actuaciones que en ellos se establecen, no es posible inferir si corresponde al recurrente o al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente aportar o recabar las pruebas, respectivamente, que no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución de ese medio de impugnación (excepción hecha de la hipótesis prevista en la fracción XI del referido artículo 95), es indudable que ante la falta de regulación al respecto y considerando la obligación de los Tribunales Colegiados de resolver las cuestiones jurídicas que les son planteadas, es aplicable, de acuerdo con una interpretación analógica, la regla prevista en el indicado numeral 78 de la ley de la materia, así como lo que al respecto señala la tesis de jurisprudencia citada. Lo anterior es así, ya que en principio, se trata de un procedimiento que deriva del juicio de amparo y sería ilógico que respecto de la cuestión principal sí exista obligación de la autoridad que conoce del juicio de amparo de recabar oficiosamente las pruebas y constancias necesarias para la resolución del asunto, y para los recursos que derivan de este juicio principal, que también resultan necesarios para lograr el respeto de las garantías constitucionales, no sea aplicable dicha regla procesal; aunado a la circunstancia de que el artículo 17 cons-titucional consagra el derecho de los gobernados a que se les admi-nistre justicia de manera pronta, completa e imparcial, lo que sólo se puede lograr si el órgano jurisdiccional cuenta con todas las pruebas o constancias que le permitan conocer la verdad histórica del asunto, y sólo así se evitará el injusto proceder que implica en-juiciar la legalidad de una determinación que guarda relación con los juicios de garantías, a la luz de elementos que no se aportaron al tribunal de amparo, no obstante haber tenido la posibilidad de tenerlos a la vista.

Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, 1a./J. 60/2002, Página 105.

QUEJA CONTRA EL AUTO QUE ADMITE UNA DEMANDA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN

EL EXPEDIENTE PRINCIPAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 95, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el recurso de queja a que se refiere la fracción I del numeral citado en segundo término, no tiene como efecto revocar o dejar insubsistente una sentencia dictada en el juicio de amparo y ordenar reponer el procedimiento en dicho juicio, ya que ello significaría alterar el sistema de recursos previsto en dicha ley, trasmutando a la queja lo que es propio del recurso de revisión, en contravención a lo dispuesto por el artículo 2o. de la precitada ley. Por tanto, si se dicta sentencia en la audiencia constitucional, deja de existir la materia (notoria improcedencia de la demanda de amparo) del citado recurso de queja, pues considerar lo contrario, además de lo expuesto, implicaría desconocer lo establecido en los artículos 101 y 157 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el procedimiento no debe quedar paralizado al interponerse el citado recurso de queja; además, se haría nugatorio el principio contenido en el último párrafo del artículo 73 del propio ordenamiento legal, conforme al cual, la admisión de la demanda no prejuzga sobre la procedencia del juicio de amparo, toda vez que, por regla general, hasta el dictado de la sentencia, el órgano jurisdiccional puede ocuparse, en su caso, de la procedencia del juicio de amparo, de modo tal que si bien cualquier causa de improcedencia que pu-diera existir, ya no podría originar el desechamiento de la demanda, sí en cambio, daría lugar a sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la ley referida.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, 2a./J. 87/2002, Página 373.

QUEJA. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CUMPLIR CON EL TRÁMITE PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 95 de la Ley de Amparo no establece como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el trámite previsto en la propia ley, respecto de las demandas de amparo directo presentadas ante ella, ni tal supuesto puede considerarse de naturaleza similar a los contemplados en la fracción VIII de dicho precepto, por lo que tampoco, en aplicación analó-gica de esa disposición, puede establecerse la procedencia del mencionado recurso. Lo anterior sin perjuicio de la sanción que establece el artículo 169 de la Ley de Amparo.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judi-cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, P./J. 28/98, Página 63.

7. Reclamación

Este recurso es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

En cuanto al trámite de este recurso, el artículo 103 dice:

> Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo. Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.

Si el Pleno del órgano colegiado competente, al resolver el recurso advierte que el auto de presidencia es correcto, declara infundado el recurso, de lo contrario, lo declara fundado y se continuará el trámite. La Corte ha sostenido que es necesaria la expresión de agravios para el examen del acuerdo impugnado.

INTERPRETACIÓN

> RECLAMACIÓN. LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS ES NECESARIA PARA EL EXAMEN DEL ACUERDO IMPUGNADO. El recurso de reclamación constituye un medio de defensa en el juicio de garantías que la ley concede a las partes para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por consiguiente, como la materia del citado recurso está constituida, precisamente, por el acuerdo de trámite impugnado, que sólo puede y debe ser examinado a través de los agravios expresados por el recurrente, cuando éste no los exprese, el recurso de reclamación debe declararse infundado, porque no satisface el requisito que exige el artículo 103, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
>
> Tesis de jurisprudencia 17/2002, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de marzo de dos mil dos.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel y Genaro David GÓNGORA PIMENTEL, Ley de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1985.

ARELLANO GARCÍA, Carlos, El juicio de amparo, Ed. Porrúa, México, 1983.

_____, Práctica forense del juicio de amparo, Ed. Porrúa, 6ª ed., México, 1991.

BAZDRECH, Luis, El juicio de amparo. Curso general, Ed. Trillas, 4ª ed., México, 1983.

BRISEÑO SIERRA, Humberto, El amparo mexicano. Teoría técnica y jurisprudencia, Ed. Cárdenas, 2ª ed., México, 1971.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El juicio de amparo, Ed. Porrúa, México, 1988.

CASTRO Y CASTRO, Juventino V., El sistema del derecho de amparo, Ed. Porrúa, México, 1979.

COLOME RAMÍREZ, Delio, Apuntes de amparo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 1993.

COUTO, Ricardo, Tratado teórico-práctico de la suspensión de amparo, Ed. Porrúa, México, 1983.

DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio, Código Federal de Procedimientos Penales Comentado, Ed. Porrúa, 1998.

Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-Porrúa, 13ª ed., 1999.

FIX-ZAMUDIO, Héctor, El juicio de amparo, Ed. Porrúa, México, 1964.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro y SAUCEDO ZAVALA, María Guadalupe, La suspensión del acto reclamado, Ed. Porrúa, 2ª ed., México, 1985.

GONZÁLEZ COSÍO, Arturo, El juicio de amparo, Ed. Porrúa, 2ª ed., México, 1985.

LARA PONTE, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el constitucionalismo mexicano, Ed. Porrúa, México, 1997.

MARROQUÍN ZALETA, Jaime Manuel, Técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo, Ed. Porrúa, México, 1998.

MELGAR ADALID, Mario, El Consejo de la Judicatura Federal, Ed. Porrúa, México, 1997.

MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, Política criminal y reforma penal, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A. C. CEPOLCRIM, 1ª ed., 1999.

NORIEGA CANTÚ, Alfonso, Lecciones de amparo, Ed. Porrúa, México, 1975.

OJEDA BOHÓRQUEZ, Ricardo, Amparo contra normas con efectos generales, Ed. Porrúa, México, 2001.

08_Bibliografía_08 Ojeda.p65 599 23/04/2013, 12:20

POLO BERNAL, Efraín, Los incidentes en el amparo, Limusa Noriega Editores, México, 1994.
_____, El juicio de amparo en contra de leyes, Ed. Porrúa, México, 1991.
PÉREZ DAYÁN, Alberto, Ley de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1994.
SERRANO ROBLES, Arturo, El manual de juicio de amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ed. Themis, 12ª Reimpresión, 1994.
SOSA ORTIZ, Alejandro, Los elementos del tipo penal, la problemática de su acreditación. Ed. Porrúa, México, 1999.
TRON PETIT, Jean Claude, Manual de los incidentes del juicio de amparo, Ed. Themis, México, 1997.
ZAMORA PIERCE, Jesús, Garantías y proceso penal, Ed. Porrúa, México, 1991.

POLIGRAFÍA

Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., Talleres Gráficos de la Nación, México, 1997.
S.C.J.N., La Suprema Corte de Justicia en el Siglo XIX, 1ª ed., México, 1997.

LEGISLACIÓN

Código Penal Federal.
Código Penal para el Distrito Federal.
Código Penal Procesal para el Distrito Federal.
Código Penal del Estado de Oaxaca.
Código Penal Procesal para el Estado de Oaxaca.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Amparo.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SCJN, México, 2001.

JURISPRUDENCIA

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000.
Disco óptico IUS 2001 de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informe correspondiente al año de 1948, Primera Sala.
Jurisprudencia por Contradicción de tesis, Ed. Themis, 1995.
La Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación. Volumen V. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fondo de Cultura Económica, México, 1ª ed., 1993.

ÍNDICE TEMÁTICO

A

Aborto, 134
Acción Penal, 135, 138, 139, 140, 156, 157
Aclaración de la demanda, 207
Acto reclamado, 174, 175, 300, 420, 423
Actos consumados, 426
Actos de particulares, 424
Actos de tracto sucesivo, 428
Actos declarativos, 435
Actos derivados de actos consentidos, 345
Actos futuros, 427
Actos prohibitivos, 434
Actos instantáneos, 428
Actos irreparables, 429
Actos judiciales privativos de libertad, 160, 436
Actos legislativos, 150, 436
Actos negativos, 429
Actos no judiciales privativos de libertad personal, 160, 162
Actos no privativos de libertad personal, 161, 162, 440
Actos penales, 150, 441
Actos permanentes, 428
Actos presentes, 427
Actos privativos de la libertad personal, 160, 438
Actos reparables, 429
Agravantes, 272
Agraviado, 69
Agravio personal y directo, 18
Agravios, 566 a 582
Alegatos, 260 a 263
Análisis de la demanda, 194
Apoderado, 4, 15
Arraigo, 161, 510 a 512
Arresto, 45, 136, 505 a 508
Artículo 130 L.A., 445, 449, 468, 469, 471, 490, 493 a 496, 560
Artículo 136 L.A., 460, 471, 490, 493 a 530
Artículo 138 L.A., 459, 470, 476, 477, 480
Artículo 139 L.A., 448, 460, 461
Aseguramiento, 124, 142
Audiencia Constitucional, 230 a 233
Auto de formal prisión, 32
Auto de sujeción a proceso, 34, 187
Autoridad responsable, 81 a 107, 171
Autorizado, 166 a 169
Azotes, 9

B

Beneficios penales, 349

C

Caducidad, 300, 301
Calificativas, 272, 273 a 284
Cambio de situación jurídica, 336 a 342
Carga de la prueba, 257
Cesación de efectos, 375
Competencia, 126 a 130, 200
Competencia por territorio, 111
Concepto amparo penal, 1
Concepto de suspensión, 417
Condena condicional, 347
Confiscación, 13, 15, 435
Conmutación de la pena, 347, 349
Consentimiento tácito, 347
Consideraciones personales sobre suspensión, 520 a 529
Correo, 190
Cuerpo del delito, 271, 273

09_Índice Temático_09 Ojeda.p65 601 23/04/2013, 12:21

D

Defensor, 4, 17
Deficiente fundamentación, 269
Delincuencia Organizada, 135
Delitos contra la Salud, 133
Demanda, 19 a 21, 162 a 165
Demanda ampliación, 214, 215
Demanda auto admisorio, 211, 212
Denuncia violación suspensión, 548
Deportación, 6
Derechos políticos, 332, 334
Desacato a la suspensión, 531 a 553
Desechamiento de la demanda, 202
Desistimiento, 292, 293
Desistimiento del recurso, 296, 356, 361, 364
Destierro, 7
Días inhábiles, 188, 190
Difícil reparación, 457
Documental, 234 a 241

E

Efectos suspensión, 459 a 465
Ejecución de sentencia, 23
Estricto derecho, 51
Excepciones al principio de definitividad, 31 a 51
Excusas, 194
Expulsión, 6, 7
Extradición, 7, 12, 132, 133, 498 a 500
Extradición suspensión, 498 a 500
Extranjeros, 6, 7

F

Firma, 19 a 21
Firma de la demanda, 9, 19 a 21
Forma y fondo, 264
Formatos, 512, 519
Fundamentación y motivación, 269

G

Garantía monto de la, 500 a 502
Grado, 120
Gráfica de hechos y actos jurídicos, 423, 424
Guardia del secretario, 191

H

Hechos y actos jurídicos, 421, 422
Historia de la suspensión, 407 a 417

I

Identificación administrativa, 135
Impedimentos, 194 a 200
Improcedencia, 302
Improcedencia artículo 73, fracción I, 302 a 305
Improcedencia artículo 73, fracción II, 305 a 310
Improcedencia artículo 73, fracción III, 310 a 313
Improcedencia artículo 73, fracción IV, 313 a 316
Improcedencia artículo 73, fracción V, 316 a 325
Improcedencia artículo 73, fracción VI, 325 a 329
Improcedencia artículo 73, fracción VII, 329 a 332
Improcedencia artículo 73, fracción VIII, 332 a 333
Improcedencia artículo 73, fracción IX, 333 a 336
Improcedencia artículo 73, fracción X, 336 a 342
Improcedencia artículo 73, fracción XI, 342 a 350
Improcedencia artículo 73, fracción XII, 350 a 353
Improcedencia artículo 73, fracción XIII, 353 a 354
Improcedencia artículo 73, fracción XIV, 355 a 364
Improcedencia artículo 73, fracción XV, 364 a 374
Improcedencia artículo 73, fracción XVI, 374 a 382
Improcedencia artículo 73, fracción XVII, 382 a 384
Improcedencia artículo 73, fracción XVIII, 384 a 405
Inactividad procesal, 300, 301
Incidente de incumplimiento de suspensión, 531 a 536
Incompetencia, 200

Inexistencia del acto, 299
Infamia, 9
Informe justificado, 218 a 230
Inspección ocular, 252 a 254
Instancia de parte, 4
Interés jurídico, 21

J

Juicio penal, 146
Jurisdicción auxiliar, 108, 109, 110
Jurisdicción concurrente, 108

L

Leyes heteroaplicativas, 132
Libertad caucional, 335, 336, 353, 433, 501, 502, 504
Libertad personal, 5, 160
Libertad provisional bajo caución, 150, 335, 354, 433, 500, 501, 502, 504
Litispendencia, 305 a 310

M

Marca, 9
Materia (competencia), 115
Menores infractores, 116, 374
Migración, 446
Ministerio Público, 104, 138, 140, 400
Ministerio Público Federal, 102 a 106
Ministerio Público parte en el proceso, 107
Muerte del quejoso, 297
Multa excesiva, 14, 31, 449
Mutilación, 9

N

Naturaleza del acto penal, 420

O

Ofendido, 54 a 56, 74 a 81, 98
Orden de aprehensión, 38
Orden de comparecencia, 39, 161, 162, 477, 478
Orden público, 452 a 455
Organismos electorales, 329 a 333

P

Palos, 9
Partes, 68
Pena inusitada, 7 a 10
Pericial, 241 a 252
Prescripción, 265 a 267
Presentación de la demanda, 176, 177, 184, 203, 209
Presuncional, 254 a 257
Primeros antecedentes históricos, 24 a 26, 407 a 417
Principio de definitividad, 30, 352 a 374
Principios, 3
Privación de la libertad fuera de proceso judicial, 160, 492 a 495
Privación de la libertad judicial, 160, 438, 495
Privación de la vida, 5
Procedencia, 131
Procedimiento sumario de amparo, 192, 193
Protesta de decir verdad, 175
Proyecto de Ignacio L. Vallarta, 413, 414
Proyectos de Ley de Amparo, 411
Pruebas, 234 a 257

Q

Queja, 583 a 598
Quejoso, 166

R

Ratificación, 15
Ratificación de la detención, 151
Reclamación, 598
Recursos, 555 a 598
Recursos ordinarios, 31
Reformas a la Ley de Amparo, 415
Relatividad, 22 a 30
Responsabilidad probable, 271
Revisión, 555
Revisión adhesiva, 565, 566

S

Secretario de juzgado, 395, 397
Sentencia, 263, 284

Sentencia-aclaración, 284
Sentencia ejecutoriada, 285
Sobreseimiento, 291 a 302
Suplencia de la queja, 52 a 56
Suspensión, 417
Suspensión a petición de parte, 449
Suspensión de oficio, 444
Suspensión definitiva, 483 a 490
Suspensión provisional, 466 a 483

T

Técnica suspensión definitiva, 484
Telegrado, 165
Tercero perjudicado, 97 a 102, 169
Término presentación de la demanda, 180, 182
Términos, 148, 180 a 192
Testimonial, 231 a 252
Tormento, 9
Trámite, 162
Trámite de incidente de incumplimiento a la suspensión, 531 a 533
Tribunales unitarios, 124
Turno, 119

V

Violación suspensión provisional, 536, 552, 553

ÍNDICE DE TESIS

Rubro	*Página*
Aborto. El artículo 334, fracción iii, del Código Penal para el Distrito Federal, no transgrede la garantía de igualdad, pues no autoriza que se prive de la vida al producto de la concepción.	134
Acción penal, contra el ejercicio de la, y contra los demás actos subsecuentes del procedimiento penal realizados por el Ministerio Público, es improcedente el amparo.	139
Acción penal, desistimiento de la (sobreseimiento).	381
Acción penal, inejercicio. Es improcedente el juicio de amparo contra la resolución de.	74
Acción penal, la resolución por la que un Agente del Ministerio Público propone al procurador el no ejercicio de aquélla, no es definitiva y, por tanto, no afecta el interés jurídico del ofendido, denunciante o querellante (Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León).	80
Acción penal, resolución de no ejercicio de la. Emanada de una autoridad dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es un acto materialmente jurisdiccional o judicial y del juicio de amparo que se promueva en su contra debe conocer un juez de distrito en materia penal.	75
Acción penal. El artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, se erige en garantía del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de aquélla.	72 146
Acción penal. Es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de aquélla.	140
Acción penal. Es procedente el juicio de amparo, mientras no se establezca en ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria, para reclamar las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquélla (artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Federal).	71, 79, 147

Rubro	*Página*
Acción penal. La garantía que tutela el derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de aquélla, no se encuentra sujeta a que se establezca en ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria, por lo que, mientras ésta no se expida, el juicio de amparo es procedente en forma inmediata para reclamar tales resoluciones.	81
Acción penal. La reforma al artículo 21 constitucional relativa a la posibilidad de impugnar por vía jurisdiccional las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, entró en vigor el 1º de enero de 1995.	81
Acción penal. Las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquélla, son susceptibles de violar garantías individuales y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo.	80
Acción penal. No ejercicio o desistimiento de la, por el Ministerio Público, amparo improcedente.	74
Acción penal. Reformas al artículo 21 constitucional. No ejercicio o desistimiento de la, por el Ministerio Público. Está sujeto al control de legalidad y el amparo que al respecto se promueva, al principio de definitividad.	74
Aclaración de sentencia de amparo. Sólo procede oficiosamente y respecto de ejecutorias.	284
Acto de autoridad deficientemente fundado y motivado. Amparo contra el. Debe observarse el principio de definitividad.	370
Acto reclamado de carácter positivo. Su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha de presentación de la demanda, aun en el caso de órdenes de aprehensión.	215
Acto reclamado, cesan los efectos del, cuando se trata de una orden de aprehensión y se decreta libertad por falta de elementos para procesar en favor del inculpado.	376
Acto reclamado, conocimiento del.	182
Acto reclamado, negación del, para los efectos de la competencia en amparo.	112
Acto reclamado, negación del.	300
Acto reclamado, sobreseimiento por cesación de los efectos del, cuando se deroga la ley combatida, aun si existen comprobados actos de aplicación, por no haber rendido informe autoridades responsables, y si se combatió la ley por ser autoaplicativa.	380

Rubro	*Página*
Acto reclamado. En la revisión sólo puede considerarse como tal el que fue materia de la litis constitucional.	174
Acto reclamado. Es improcedente el juicio de garantías si en la demanda se señala a una autoridad diferente de la que emitió el.	392
Acto reclamado. Si es oscuro e impreciso, debe requerirse al quejoso para que cumpla con esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda de garantías.	210
Actos consentidos. Amparo improcedente.	345
Actos consentidos. Hipótesis en que se da el caso de. Aplicación de la fracción xi del artículo 73 de la Ley de Amparo.	346
Actos consentidos. No se entienden así para los efectos del juicio de amparo, los actos que se combatieron oportunamente mediante la acción constitucional sin promoverse la suspensión.	348
Actos consumados de modo irreparable.	333
Actos consumados de un modo irreparable y falta de interés jurídico. Resoluciones dictadas dentro de un procedimiento penal.	322
Actos consumados.	334
Actos consumados. Careos.	334
Actos consumados. Suspensión improcedente.	426
Actos consumados. Suspensión improcedente.	426
Actos declarativos.	436
Actos declarativos.	436
Actos derivados de actos consentidos, razón de su improcedencia.	345
Actos derivados de otro juicio de garantías. Es improcedente el juicio de amparo contra los.	306
Actos negativos con efectos positivos.	431
Actos negativos con efectos positivos. Suspensión.	431
Actos negativos. Casos en que procede conceder la suspensión contra los.	431
Actos prohibitivos, suspensión improcedente contra los.	434
Actuario, hipótesis en que debe ser señalado como autoridad responsable.	87

Rubro	*Página*
Actuario. Es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento.	88
Acumulación en Amparo. Cuando se trata de juicios tramitados ante distintos juzgados de distrito se considera "juez que previno" al que conozca de la demanda presentada en primer lugar, aunque la reciba posteriormente.	129
Agravios en la revisión. Son inoperantes los de la autoridad, cuando deba suplirse la deficiencia de la queja por haberse fundado el acto reclamado en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia.	574
Agravios en recursos interpuestos dentro del juicio de amparo. Para que se estudien basta con expresar en el escrito relativo, respecto de las consideraciones que se controvierten de la resolución impugnada, la causa de pedir.	576 577
Agravios inoperantes. Lo son los consistentes en que los juzgadores de amparo violan garantías individuales, solamente en ese aspecto.	575
Alegatos. No forman parte de la litis.	261
Amparo ante juez incompetente.	182
Amparo contra el auto de formal prisión. Es improcedente cuando se declara fundado el incidente de libertad por desvanecimiento de datos.	377
Amparo contra leyes con motivo de su aplicación. Su procedencia requiere que el acto sea anterior a la presentación de la demanda.	216
Amparo contra leyes. El motivo manifiesto e indudable de su improcedencia, puede sustentarse en la confesión del quejoso de que no reclama el primer acto de aplicación sino uno posterior.	206
Amparo contra leyes. El motivo manifiesto e indudable de su improcedencia, puede sustentarse en la confesión del quejoso de que no reclama el primer acto de aplicación sino uno posterior.	206
Amparo contra leyes. Las circulares constituyen actos de aplicación aptos para promoverlo, si éstas no sólo reúnen características de generalidad y abstracción, sino elementos que permitan individualizar la afectación de la disposición legal.	326
Amparo contra leyes. Su improcedencia, cuando han cesado los efectos de su aplicación.	375

Rubro	*Página*
Amparo contra leyes. Sus efectos son los de proteger al quejoso contra su aplicación presente y futura.	27
Amparo directo planteado como indirecto. Para determinar la oportunidad en su promoción, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante el juzgado de distrito.	126 183
Amparo en materia penal. Debe promoverse dentro del término de quince días cuando se reclama la resolución recaída a un incidente sobre sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad.	351
Amparo improcedente contra actos que fueron materia de otro juicio de garantías. Intrascendencia de la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro.	314
Amparo improcedente contra el fallo que declina la competencia.	396
Amparo improcedente contra la resolución que se emite sin libertad jurisdiccional, en cumplimiento de anterior ejecutoria.	308
Amparo improcedente, sobreseimiento en el, por desistimiento de la segunda instancia no acreditado.	361
Amparo indirecto improcedente contra las resoluciones dictadas dentro del juicio de garantías o en ejecución de las mismas.	305
Amparo indirecto que se formula como directo. Su presentación ante la autoridad responsable sí produce efectos jurídicos.	182
Amparo indirecto. Promovido contra una ley aplicada en un procedimiento seguido en forma de juicio, procede el sobreseimiento si el quejoso reclama únicamente la afectación de derechos procesales y no sustantivos.	143
Amparo indirecto. Puede promoverse en cualquier tiempo cuando se reclama la negativa a tramitar o a otorgar los beneficios para suspender la ejecución de la pena impuesta por autoridad judicial.	148
Amparo indirecto. Significado de la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción iii del artículo 114 de la ley de la materia.	148
Amparo penal extemporáneo.	352
Amparo penal, puede promoverlo el apoderado general para pleitos y cobranzas.	17
Amparo procedente aun cuando la condena esté cumplida.	333

Rubro	*Página*
Amparo promovido estando pendiente un recurso contra acto diferente del reclamado.	359
Amparo, improcedencia del. Por haber sido el acto materia de otro amparo (artículo 73, fracción iv, de la Ley de Amparo).	314
Amparo, procedencia del, y no del recurso de queja.	306
Amparo, recursos o medios de defensa que hacen improcedente el. Deben estar previstos en la ley.	373
Amparo, relatividad de los efectos del.	27
Amparo, sentencias de, no tienen el alcance jurídico de tener por no interpuesta la demanda relativa.	389
Amparo, término para la interposición del (vacaciones).	184
Amparo, término para la interposición del. Días inhábiles por suspensión de labores de la autoridad responsable.	184
Amparo. Es improcedente el que se promueve contra la orden judicial que restituye al ofendido en la posesión del predio ejidal materia del delito de despojo (Legislación del Estado de Jalisco).	321
Amparo. Procede contra actos realizados en cumplimiento de una resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia constitucional, respecto de cuestiones ajenas a ella.	304
Ampliación de demanda. Cómputo del plazo para impugnar una ley en el escrito de.	185
Ampliación de la demanda de amparo. Resulta improcedente cuando verse sobre hechos conocidos desde su presentación inicial, aun cuando se encuentre dentro del término legal.	217
Ampliación de la demanda. *Litis contestatio* en el amparo.	185
Ampliación de una demanda de garantías. Procede el recurso de queja y no el de revisión, contra resoluciones que la desechan.	216, 591
Apelación del auto de formal prisión. El interponerla es suficiente para estimar actualizada la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción xiv de la Ley de Amparo.	358
Apelación del auto de formal prisión. Su desistimiento ante el juez natural, impide que se configure la causal de improcedencia prevista por la fracción xiv del artículo 73 de la Ley de Amparo.	358
Apelación en materia penal, causal de improcedencia. Prevista en la fracción xiv, del artículo 73 de la Ley de Amparo.	34, 356

Rubro	*Página*
Apelación extraordinaria, procedencia del amparo contra el rechazamiento de la.	364
Apelación improcedente. Lo es aquella que interpone el indiciado en contra del acuerdo que negó la prescripción de la acción, si contra éste se libró orden de aprehensión y no se cumplimentó.	51
Apelación, recurso de. Es necesario acreditar la admisión o trámite, para que se pueda surtir la causal de improcedencia prevista en la fracción xiv del artículo 73 de la Ley de Amparo.	357
Aprehensión legal.	381
Arraigo domiciliario, orden de. Afecta la libertad personal.	161, 510
Arraigo. Cesan sus efectos cuando con motivo de la emisión de la orden de aprehensión se haya levantado dicha medida precautoria.	511
Arresto administrativo. Multa.	343
Arresto como medida de apremio. Las leyes o códigos que lo establecen por un término mayor al de treinta y seis horas, son violatorios del artículo 21 constitucional.	136
Arresto como medida de apremio. Procede el amparo en contra del auto que apercibe con su imposición, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa.	45
Arresto como medida de apremio. Procede la suplencia de la queja deficiente cuando se reclama en amparo.	62
Arresto como medida de apremio. Procedencia del amparo aunque no se agoten los recursos ordinarios.	45
Arresto como medio de apremio. A la suspensión en su contra no le son aplicables analógicamente las medidas de aseguramiento del quejoso previstas por los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo.	505
Arresto, orden de. Amparo improcedente cuando se encuentra pendiente de resolución algún medio de defensa ordinario.	347
Arresto, suspensión tratándose de apercibimiento de.	507
Arresto, suspensión tratándose de.	507
Arresto. Medida de apremio. Procede suspensión definitiva para que no se lleve a efecto, en tanto se resuelve el juicio de amparo en que se señala como acto reclamado.	506
Artículo 73, fracción xviii, es improcedente como causal de improcedencia, respecto de la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional.	391

Rubro	*Página*
Aseguramiento de bienes producto del delito, medidas para el. No es decomiso.	142
Aseguramiento de bienes. El decretado formalmente por el Ministerio Público sobre los que previamente hubiese sido desposeído el quejoso, no actualiza la causal de improcedencia de cambio de situación jurídica.	144
Audiencia constitucional, diferimiento de la. Oportunidad para solicitar copias o documentos para el amparo.	232
Audiencia constitucional. Caso en que la negativa al diferimiento de ella no contraviene el artículo 152 de la Ley de Amparo.	235
Audiencia constitucional. Debe, en principio, diferirse de oficio cuando los informes justificados no se rinden con ocho días de anticipación a la primera fecha señalada para su celebración, si el quejoso o el tercero perjudicado no tienen conocimiento de su contenido.	219
Audiencia constitucional. Hipótesis en que puede diferirse, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho.	231
Audiencia constitucional. La falta de informe no produce por sí solo el diferimiento de la.	231
Audiencia constitucional. Para que el Juez de Distrito acuerde su aplazamiento, en términos y para los efectos que precisa el artículo 152 de la Ley de Amparo, es necesario que la parte interesada exhiba junto con su solicitud de diferimiento, la copia debidamente sellada del escrito en el que solicitó la expedición de las copias o documentos respectivos, o bien, constancia fehaciente de que la autoridad respectiva se negó a recibirlo.	233
Audiencia constitucional. Potestad del juez para diferirla o suspenderla.	230
Audiencia constitucional. Si las pruebas y alegatos los recibe un Juez de Distrito y la sentencia la emite en diversa fecha el que lo sustituye, ello no da lugar a la reposición del procedimiento, porque no son actos procesales distintos, sino uno solo.	262
Audiencia constitucional. Su invalidez por falta de firma del juez o del secretario.	232

Rubro	*Página*
Auto de formal prisión infundado e inmotivado. La protección constitucional que se otorgue debe ser lisa y llana.	270
Auto de formal prisión, amparo contra el, cuando el quejoso se desiste del recurso de apelación.	32
Auto de formal prisión, amparo contra el.	33
Auto de formal prisión, contra el, cuando el quejoso se desiste del recurso de apelación que interpuso.	33
Auto de formal prisión, cuando es improcedente el amparo contra el.	32
Auto de formal prisión, desistimiento de los recursos pendientes y procedencia de amparo en tal caso.	363
Auto de formal prisión, no deben incluirse las modificativas o calificativas del delito en el.	273
Auto de formal prisión, procedencia del amparo contra el, si no se interpuso recurso ordinario.	32
Auto de formal prisión. Acorde con el principio de supremacía constitucional, su dictado debe hacerse conforme al artículo 19 de la Constitución Federal y no atender a la legislación ordinaria, cuando ésta no ha sido adecuada a lo dispuesto en dicho precepto.	151
Auto de formal prisión. Amparo improcedente por estar pendiente de resolverse el desistimiento del recurso ordinario.	361
Auto de formal prisión. Amparo procedente contra el, aun cuando esté tramitándose apelación contra la resolución dictada en el incidente de desvanecimiento de datos promovido por el quejoso.	362
Auto de formal prisión. Improcedencia del amparo contra el.	357
Auto de formal prisión. Se deben incluir las modificativas o calificativas del delito en él, a la luz de la reforma del tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, al artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.	282
Auto de sujeción a proceso, no es necesario agotar el recurso de apelación para la procedencia del amparo que se interponga en su contra.	35 478
Auto de sujeción a proceso. Demanda de amparo en su contra, puede interponerse en cualquier tiempo.	187
Autoridad ejecutora. Para los efectos del amparo directo, no lo es el director de la Policía Judicial del Distrito Federal.	402

Rubro	*Página*
Autoridad para efectos del juicio de amparo. No lo son los funcionarios de una universidad cuando el acto que se les atribuye deriva de una relación laboral.	90
Autoridad para los efectos del amparo. Notas distintivas.	83, 171
Autoridad responsable, sustitución de la.	86
Autoridad responsable. Para los efectos del juicio de amparo, el secretario de acuerdos del juzgado del ramo penal no tiene el carácter de. (Legislación del Estado de Chiapas).	86
Autoridad responsable. Tiene ese carácter la que emite el acto reclamado y no su superior jerárquico.	83
Autoridades ejecutoras diversas. Su señalamiento no impide la improcedencia de un segundo amparo.	313
Autoridades ejecutoras, actos de, no reclamados por vicios propios.	86
Autoridades ejecutoras, actos inconstitucionales de las.	86
Autoridades ejecutoras, amparo contra los actos de las.	85
Autoridades para efectos del juicio de amparo.	85
Autoridades responsables no designadas, sobreseimiento del juicio de amparo.	394
Autoridades responsables no designadas.	85
Autoridades responsables, confusión en el señalamiento de las.	85
Autoridades responsables, señalamiento de las, sin especificación de los actos que se les atribuyen.	85
Autoridades responsables, señalamiento de las.	173
Autoridades responsables, señalamiento de las. Formalidades.	88
Autoridades responsables, señalamiento de las. Si del contexto de la demanda se advierte que se imputan actos de alguna autoridad, debe llamársele al juicio de amparo.	87
Autoridades responsables. Error al señalar al órgano colegiado en lugar del presidente que emitió el acto.	90
Autoridades.	86
Autorizado en el amparo para oír notificaciones, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.	168
Autorizado en términos amplios conforme al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Está facultado para desistir de las pruebas ofrecidas en el juicio, por él o por su autorizante.	168

Rubro	*Página*
Autorizado para recibir notificaciones en materia penal. No está obligado a demostrar su calidad de abogado.	168
Beneficios penales. Acogerse a ellos implica el consentimiento expreso de la sentencia condenatoria.	349
Caducidad de la instancia. En amparo penal en revisión opera cuando beneficie al inculpado.	301
Caducidad de la instancia. Es factible la operancia de la, tratándose de algunos actos de naturaleza penal.	300
Caución, monto de la. Medios para otorgar el (delitos fiscales).	482
Caución, variación de la; después de otorgada, implica que el Juez de Distrito revoque su propia decisión.	502
Coacusado, sentencia de segundo grado por apelación del, que no afecta al acusado. Improcedencia del amparo.	324
Comparecencia. Orden de, para su impugnación constitucional deben agotarse previamente los recursos ordinarios.	39
Competencia de los jueces de distrito en el amparo.	112
Competencia del Juez de Distrito. Si la autoridad responsable cuya residencia la originó niega el acto reclamado y esta negativa no se desvirtúa, dicho juez debe declararse incompetente y remitir lo actuado al juez competente.	129
Competencia del Juez de Distrito. Si no la declina pese a que la autoridad responsable ejecutora de su residencia negó el acto reclamado y dicha negativa no fue desvirtuada, el tribunal colegiado de circuito, al advertir esa incompetencia, en la revisión, ya por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, debe revocar la sentencia y remitir los autos al juez que considere competente.	128
Competencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la revisión de sentencias dictadas por jueces de distrito en las que se realice la interpretación directa de un precepto constitucional. Se surte cuando la interpretación se refiera a materia común.	571
Competencia en amparo entre tribunales unitarios o jueces de distrito. Cómo dirimir el conflicto por los tribunales colegiados de circuito.	118
Competencia en amparo, tratándose de órdenes de aprehensión.	113
Competencia en amparo.	113

Rubro	*Página*
Competencia entre Jueces de Distrito. Éstos no pueden objetar la determinación del tribunal colegiado de circuito en cuanto a la vía, pero sí pueden declinar su competencia a favor de otro de la misma jerarquía que estimen legalmente competente por razón de territorio.	115
Competencia para conocer de amparo indirecto contra actos de un tribunal unitario cuando en su circuito existen varios. Recae en otro del mismo circuito.	124
Competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto. Cuando se señala como autoridad responsable ordenadora al Juez de Distrito a favor de quien se declina la.	118
Competencia por inhibitoria. El auto que desecha esa cuestión constituye un acto dentro de juicio, que no es de imposible reparación, y que puede ser combatido en amparo directo, cuando sea dictada la sentencia definitiva.	121
Competencia, corresponde al juez del lugar de ejecución del acto reclamado, aun cuando el domicilio de la autoridad responsable se encuentre en la jurisdicción de otro juez.	112
Competencia, debe decidirse en favor del juez en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclaman omisiones.	123
Competencia. Juzgados de distrito en materia penal en el Distrito Federal. Corresponde al que siga en su orden al que recibió la demanda de amparo y resultó impedido.	119
Competencia. Orden de aprehensión, amparo contra la.	114
Competencia. Para determinarla, cuando son señalados como responsables todos los jueces de distrito de la misma materia de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía, a la especialización.	116
Conceptos de violación por vicios de forma del acto reclamado, su procedencia excluye el examen de los que se expresan por faltas de fondo (audiencia, fundamentación y motivación del acto en cita).	269
Conceptos de violación. Para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir.	177, 577
Condena condicional. Improcedencia del juicio de garantías cuando el sentenciado se acoge a la (Legislación del Distrito Federal).	347
Confiscación y Decomiso. Sus diferencias básicas.	15

Rubro	*Página*
Confiscación.	15
Consejo de la judicatura federal. Las resoluciones que emitan sus comisiones en los asuntos cuyo conocimiento originalmente corresponde a dicho órgano, son definitivas e inatacables, aun en amparo.	385
Consentimiento de la sentencia reclamada en amparo directo.	347
Constitución, ataques directos a la. Cuando no existen.	371
Copias fotostáticas simples. Carecen, por sí solas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como tercero extraño al juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión.	487
Copias o documentos, susceptibles de expedirse, de conformidad con el artículo 152, de la Ley de Amparo.	237
Copias para la tramitación del amparo. El juez debe precisar el número de las que se requieran.	210
Copias y documentos en el amparo, obligación de los funcionarios y autoridades para expedirlas (interpretación del artículo 152 de la Ley de Amparo).	236
Cosa juzgada. En cualquier estado del juicio de garantías, la confesión expresa es suficiente para acreditar plenamente la causal de improcedencia de la.	315
Cuerpo del delito. Concepto de.	273
Cumplimiento de ejecutorias de amparo. Principios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los trámites, determinaciones y medios procedentes de defensa.	286
Defensor. Reconocimiento del carácter de. Para ello debe constar fehacientemente su aceptación. Ya sea expresa o tácita.	17
Definitividad en el juicio de amparo. Significado de la expresión "leyes que rigen los actos" a que se refiere el artículo 73, fracción xv, de la ley de la materia.	46, 365
Definitividad. Excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto.	48, 51

Rubro	*Página*
Delincuencia organizada. Es inoperante el argumento consistente en que el artículo 4º, fracción I, inciso *a)*, de la Ley Federal de la materia establece una pena inusitada y trascendental y, por ende, es violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal, cuando se reclama con motivo del auto de formal prisión.	11
Delincuencia organizada. Los artículos 2º y 4º de la Ley Federal contra la misma no violan el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	135
Demanda de amparo firmada por un tercero, admitida, objetada posteriormente la autenticidad de la firma y ratificada por la interesada.	21
Demanda de amparo indirecto, desechamiento fundado indebidamente de la, en el artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.	303
Demanda de amparo indirecto. El escrito inicial y su aclaración no pueden desvincularse ni analizarse por separado, ya que ambos integran aquélla.	177
Demanda de amparo indirecto. Finalidad de los requisitos que debe contener el escrito relativo y de las copias que deben exhibirse.	176, 209, 211
Demanda de amparo indirecto. La aclaración del escrito relativo debe exhibirse con el número de copias a que se refiere el artículo 120 de la Ley de Amparo.	177
Demanda de amparo interpuesta por correo. Cuando en el lugar de residencia del quejoso no existe oficina de correos (actualmente Servicio Postal Mexicano), la presentación de la demanda puede hacerse en la de la población más cercana.	178
Demanda de amparo interpuesta por correo. Cuando en el lugar de residencia del quejoso no existe oficina de correos (actualmente Servicio Postal Mexicano), la presentación de la demanda puede hacerse en la de la población más cercana.	190
Demanda de amparo oscura, irregular o imprecisa.	205
Demanda de amparo penal. Debe desecharse cuando se promueve en nombre de otro sin que esté detenido.	401
Demanda de amparo, ampliación de la, cuando es extemporánea respecto a la inconstitucionalidad de una ley.	185
Demanda de amparo, ampliación de la. En ella deben precisarse todos los requisitos que señala el artículo 116 de la ley de la materia.	401

Rubro	*Página*
Demanda de amparo, desechamiento de la. Requisitos.	205
Demanda de amparo, falta de firma en la. Constituye causa notoria e indudable de improcedencia y no irregularidad en el escrito de demanda.	20
Demanda de amparo, intentada en vía directa procediendo la indirecta. El Juez de Distrito al avocarse a su conocimiento debe prevenir al quejoso en los términos de los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo.	126
Demanda de amparo, la posibilidad de la existencia de un recurso contra el acto reclamado, no es suficiente para desecharla.	205
Demanda de amparo, si se reclaman actos emanados de diversos juicios, no debe desecharse por notoriamente improcedente.	388
Demanda de amparo, su falta de firma determina la improcedencia del juicio.	398
Demanda de amparo. Admisión.	205
Demanda de Amparo. Cuando se omite presentar las copias necesarias para la formación del incidente de suspensión, el incumplimiento a la prevención de exhibirlas no da lugar a tener por no interpuesta aquélla, sino exclusivamente a postergar la apertura de dicho incidente.	450
Demanda de amparo. Debe ser interpretada en su integridad.	177
Demanda de Amparo. El escrito relativo reviste el carácter de documento privado, por lo que es susceptible, jurídicamente, de ser objetado de falso en términos de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo.	179
Demanda de Amparo. La omisión del quejoso de señalar su domicilio particular, no es motivo para tenerla por no interpuesta.	179
Demanda de amparo. La posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitirla.	204
Demanda de amparo. No firmada por el directamente interesado.	392
Demanda de amparo. No procede desecharla por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en el principio de definitividad del acto reclamado, si el quejoso en su demanda de garantías se equipara a un tercero extraño.	203
Demanda de amparo. Procedencia de su ampliación.	215

Rubro	*Página*
Demanda de amparo. Si de su análisis integral se ve la participación de una autoridad no señalada como responsable y el juez previno al quejoso para darle la oportunidad de regularizarla y éste no lo hizo, debe sobreseerse.	390
Demanda de amparo. Término para interponerla (artículo 22, fracción iii, de la Ley de Amparo). La confesión expresa del quejoso contenida en la demanda, acerca de que tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento que motivó el acto reclamado, constituye prueba plena de ese hecho y hace inaplicable dicho precepto.	350
Demanda de garantías en materia penal, extemporánea, cuando el acto reclamado no afecta la libertad personal del quejoso ni encuadra en ninguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.	352
Demanda, firma de la, como requisito.	19
Demandas o promociones presentadas en horas inhábiles. Requisitos que debe contener la razón que respecto a su recepción asiente el secretario del juzgado de distrito autorizado por el titular del órgano jurisdiccional respectivo.	191
Denegada apelación, recurso de.	362
Derechos políticos, improcedencia del juicio de amparo respecto de actos que afectan los.	332
Derechos políticos. Contra la promulgación y circulación del decreto relativo a la sustitución de diputados y sus consecuencias, es improcedente el juicio de garantías (Legislación del Estado de Chiapas).	330
Desechamiento de la demanda de amparo por el Juez de Distrito. Si el quejoso presenta una demanda de garantías y desiste de ella, posteriormente presenta otra por el mismo acto reclamado, es ilegal el.	312
Desistimiento de la acción de amparo. Caso en que surte plenos efectos, aun cuando el escrito respectivo no sea ratificado.	293
Desistimiento de la demanda de amparo. Procede aun cuando se encuentre en revisión la sentencia que concedió el amparo.	296
Desistimiento de la demanda en el juicio de amparo. Implica el consentimiento expreso de los actos reclamados, resultando improcedente un nuevo juicio contra ellos.	294, 342

Rubro	*Página*
Desistimiento del recurso de revisión. Consecuencias.	578
Desistimiento del recurso ordinario, antes de la audiencia constitucional. Hace desaparecer la causa de improcedencia.	356
Desistimiento en el juicio ordinario del que deriva el acto reclamado. Sus efectos en el juicio de garantías.	377
Desistimiento, procedencia del, en revisión.	296
Desvanecimiento de datos, la resolución que declara infundado el incidente de, no cambia la situación jurídica respecto al auto de formal prisión.	339
Detención ilegal. Consumación irreparable de la.	338
Detención, ratificación de la. El auto que la decreta debe ser combatido a través del amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción x, último párrafo y 114, fracción iv, de la Ley de Amparo.	151
Determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal. Resulta improcedente la demanda de garantías en contra de una.	74
Días inhábiles para la interposición de recursos en juicio de amparo. Dada la confusión que producen los artículos 160, 163 y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben tomarse como días inhábiles los señalados en dicho artículo 163 y también los establecidos en el artículo 23 de la Ley de Amparo.	188
Documentos privados. Copias certificadas de los documentos presentados ante el juzgador (interpretación del artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles).	241
Documentos públicos. No prueban actos incidentales.	238
Documentos, prueba de. En el juicio constitucional.	240
Documentos. Su objeción no puede plantearse como agravio en la revisión.	241
Documentos. Su objeción puede formularse antes o en el momento de la celebración de la audiencia constitucional.	239
Duda del Juez de Distrito sobre la autenticidad de la firma en la demanda de amparo, no es motivo suficiente para desecharla.	204
Ejecución de sentencias de amparo, a ella están obligadas todas las autoridades aun cuando no hayan intervenido en el amparo.	23, 549

Rubro	*Página*
Ejecución de sentencias de amparo. Reglas para cuantificar el pago en el incidente de daños y perjuicios para su cumplimiento sustituto.	288
Ejecutora, juicio de amparo improcedente, por no tener en ese momento intervención legal en la ejecución de la sentencia definitiva, la autoridad señalada como.	402
Emplazamiento de autoridades responsables. Es ilegal si se practica sólo con la que tiene la representación legal de la dependencia a la que pertenecen las citadas autoridades.	173
Emplazamiento por edictos al tercero perjudicado. El incumplimiento del quejoso de recogerlos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio de amparo.	294
Extradición suspensión definitiva procedente contra los efectos del mandamiento de.	509
Extradición suspensión improcedente en caso de.	509
Extradición, amparo contra ley o tratado de, promovido con motivo de su aplicación.	381
Extradición, procedimiento de. Fases procesales.	381
Extradición.	508
Extradición. La pena de prisión vitalicia constituye una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que para que se tramite aquélla, el Estado solicitante debe comprometerse a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación.	143
Extradición. La posibilidad de que un mexicano sea juzgado en la República conforme al artículo 4º del Código Penal Federal, no impide al Poder Ejecutivo obsequiarla, ejerciendo la facultad discrecional que le concede el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.	142
Extradición. Orden provisional de detención. Cesación de efecto del acto.	375
Extranjeros. Suspensión. La jurisprudencia que se identifica con el rubro de migración suspensión improcedente, no es aplicable tratándose de quienes han estado residiendo ilegalmente en el país, si no se demuestra que su actividad lesiona los intereses de los nacionales o de la sociedad.	447
Fianzas. Cambio de situación jurídica.	341

Rubro	*Página*
Firma de la demanda de amparo, la falta de, da lugar al sobreseimiento del juicio de garantías.	19, 400
Firma, demanda de amparo sin. No queda comprendida en las prevenciones del artículo 146 de la Ley de Amparo.	20
Formal prisión. Caso en que el amparo es improcedente por haberse dictado sentencia en la causa penal.	338
Identificación administrativa del procesado. No es inconstitucional el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.	135
Impedimento en juicio de amparo, no es causa de, haber intervenido en el trámite de un asunto.	197
Impedimento para no conocer de impedimentos contra jueces de distrito para que, a su vez, no conozcan de juicios de amparo. La existencia de una resolución en determinado sentido en un impedimento diverso no es causal del mismo.	198
Impedimento por causa da amistad estrecha. Para calificarlo de legal es suficiente la manifestación que en ese sentido hace el funcionario judicial respectivo.	195
Impedimento sin materia si fue cambiado de adscripción el titular contra el que se plantea.	200
Impedimento. Debe declararse fundado si los secretarios de estudio y cuenta del magistrado fueron abogados de una de las partes por presumirse amistad estrecha entre ellos.	196
Impedimento. Debe declararse legal el que formula el magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito para intervenir en un juicio de amparo en el que parientes consanguíneos suyos pueden resultar terceros perjudicados.	200
Impedimento. La causal de amistad estrecha no se prueba con la certificación emitida por notario público respecto a que ante él dos particulares manifestaron haber escuchado al abogado de la contraparte del alegante, jactarse de llevar buena amistad con el magistrado.	197
Impedimento. Las causas previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo, no son enunciativas sino limitativas.	199
Impedimento. No es causa del mismo que los magistrados pretendan sostener un mismo criterio que en asuntos anteriores.	198
Impedimento. No es causal del mismo el que la contraparte del alegante haya dicho que se negara el amparo.	198

Rubro	*Página*
Improcedencia del amparo contra actos pronunciados en un juicio de garantías y los de ejecución de la sentencia que le ponga fin.	307
Improcedencia del amparo contra sentencia de primera instancia, cuando se reclama con la dictada en apelación.	378
Improcedencia del amparo contra sentencia definitiva, cuando se promueve incidente de sustitución de sanciones.	349
Improcedencia del amparo en contra del auto de formal prisión, cuando también se interpone incidente de libertad por desvanecimiento de datos.	360
Improcedencia del amparo en los casos que resulta de alguna disposición de la ley.	397
Improcedencia del amparo en materia penal por falta de legitimación procesal activa para promoverlo.	319, 397
Improcedencia del amparo, causales de. Las previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no son limitativas sino enunciativas.	386
Improcedencia del amparo. Debe considerarse acreditada, aun con presunciones, si debidamente adminiculadas entre sí la evidencian plenamente.	257
Improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman del Ministerio Público actos relativos a la integración de una averiguación previa.	139
Improcedencia en amparo. Interpretación de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.	298
Improcedencia en el amparo por cambio de situación jurídica. Artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.	340
Improcedencia por reclamarse el acto en dos amparos.	312
Improcedencia prevista en el artículo 73, fracción vii, de la Ley de Amparo. Cuando se actualiza la hipótesis de.	331
Improcedencia, causal de, por absolución del procesado en segunda instancia.	321
Improcedencia, causal de, prevista en la fracción xviii del artículo 73 de la Ley de Amparo.	399
Improcedencia, no se actualiza la causal de, prevista en la fracción ii del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando se reclama una resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria, que amparó únicamente por violaciones formales y se ataca de nueva cuenta por otros vicios.	308

Rubro	*Página*
Improcedencia, se surte la causal prevista en la fracción x del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión y posteriormente se dicta auto de formal prisión. Aplicación de las reformas a la Ley de Amparo (*Diario Oficial* de la Federación del 8 de febrero de 1999).	337
Improcedencia. Intelección del artículo 73, fracción ii, de la Ley de Amparo.	307
Improcedencia. La autoridad responsable tiene derecho a ofrecer pruebas para demostrarla, aunque haya negado los actos reclamados, si dichas pruebas están desvinculadas de la negativa.	260
Improcedencia. La causal prevista en la fracción xiv del artículo 73 de la Ley de Amparo requiere que el recurso o defensa legal propuesto se hubiera admitido, se esté tramitando al resolverse el amparo y sea el idóneo para obtener la revocación o modificación del acto reclamado.	47, 357
Improcedencia. La causal prevista en la fracción xviii del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede relacionarse con una tesis que no constituye jurisprudencia.	399
Improcedencia. Las pruebas que acreditan la actualización de alguna causal, pueden admitirse en el juicio de amparo directo o en revisión, salvo que en la primera instancia se haya emitido pronunciamiento al respecto y no se hubiese combatido.	405, 579
Improcedencia. No es causa manifiesta que lleve a desechar una demanda de amparo la existencia de la jurisprudencia P./J. 59/97, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, se estima conduce a ese pronunciamiento.	207
Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos y Auto de Formal Prisión. Improcedencia del juicio de amparo contra este último cuando se encuentre en trámite dicho incidente (Legislaciones de los estados de Oaxaca, Nuevo León y Puebla).	49
Inconformidad prevista en los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo. Legitimación para promoverla.	289
Indiciado, tiene el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado en el juicio de garantías sea la resolución de aprobación de no ejercicio de la acción penal.	98

Rubro	*Página*
Inexistencia y cesación de efectos cuando lo reclamado es la falta de contestación a un escrito.	378
Informe de la autoridad responsable.	223
Informe de la autoridad.	222
Informe de la responsable. Hechos aseverados. Prueba. Corresponde a la autoridad.	222
Informe de las autoridades relativo a la denuncia de violación a la suspensión. El término para rendirlo es de tres días.	543
Informe justificado afirmativo.	223
Informe justificado de autoridad responsable cuyo domicilio esté fuera del lugar de residencia del Juzgado de Distrito. Para acreditar su rendición basta la demostración de su recepción en la oficina de correos o telégrafos del lugar en el que resida.	222
Informe justificado extemporáneo. Cuándo debe ser considerado en la sentencia.	226
Informe justificado rendido extemporáneamente. Caso en que debe admitirse.	229
Informe justificado rendido extemporáneamente. Debe admitirse en el juicio.	228
Informe justificado rendido por vía telegráfica. Su validez.	227
Informe justificado, deben aportarse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclame, aunque falte el.	224
Informe justificado, falta de. No lo suple el previo.	225
Informe justificado, forma que debe tener.	226
Informe justificado.	223, 224
Informe justificado. Cuando de él se advierta la participación de una autoridad no señalada como responsable por el quejoso, el juez de distrito debe notificarle personalmente su contenido, así como prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda.	84
Informe justificado. Cuando incorpora elementos nuevos a la litis procesal planteada, su integración en autos debe ser notificada personalmente al quejoso y no por lista.	224
Informe justificado. Cuando niega actos distintos a los reclamados, opera para éstos la presunción de certeza.	225
Informe justificado. El Juez de Distrito no está facultado, y menos aún obligado, a exigir a la autoridad responsable que lo rinda.	225

Rubro	*Página*
Informe justificado. En él no pueden darse los fundamentos del acto, si no se dieron al dictarlo.	225
Informe justificado. Falta de rendición. Multa en aplicación del artículo 149 de la Ley de Amparo.	229
Informe justificado. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades.	226
Informe justificado. Puede ser objetado de falso sólo en cuanto a su autenticidad.	221
Informe previo.	459
Informes justificados. No es necesario que el juez los analice en su sentencia.	227
Informes justificados. No es obligatorio para el juez dar vista con ellos al quejoso.	227
Inspección ocular en caso de actos demostrables mediante documentos. No debe admitirse.	254
Inspección ocular en el juicio de amparo. Cuando resulte idónea para el objeto que se propuso, el juez de distrito no está facultado para desecharla bajo el argumento de que el hecho es susceptible de demostrarse con la documental.	252
Inspección ocular, prueba de. No debe proponerse en forma incongruente o que se efectúe en forma indebida.	253
Instrumentos públicos, valor probatorio de los.	238
Interés jurídico en el amparo contra leyes. No puede estimarse acreditado con la simple admisión de la demanda.	316
Interés jurídico en el amparo. Obligación de probarlo aunque opere presunción de certeza de la existencia del acto reclamado por falta de informe.	316
Interés jurídico para los efectos del juicio de amparo.	323
Interés jurídico. Examinar la constitucionalidad de una ley sin haberlo acreditado, vulnera los principios de "instancia de parte agraviada" y de "relatividad de los efectos de la sentencia".	21
Interés jurídico. Indebido desechamiento de la demanda de amparo por falta de.	206
Interés jurídico. No lo tiene el que reclama la negativa del arraigo domiciliario del presunto responsable en la averiguación previa.	511
Interés jurídico. Qué lo constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo.	21

Rubro	*Página*
Interés jurídico. Su existencia no implica que el acto de autoridad vulnere garantías individuales.	318
Interpretación directa de un precepto constitucional. Para conocer del recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito que la contenga, son competentes tanto el pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia.	571
Invasión de esferas. No existe obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al amparo.	371
Jueces comunes en auxilio de la Suprema Corte, amparo improcedente contra los.	303
Jueces de Distrito, competencia de los.	114
Jueces de Distrito. Están facultados para apreciar si ha transcurrido un plazo razonable para que el Ministerio Público emita algún pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal y para, en su caso, imponerle uno para que dicte la resolución que corresponda como resultado de la averiguación previa.	73
Jueces del orden común en auxilio de la justicia federal.	111
Juez competente en amparo.	114
Juez de Distrito. No se encuentra impedido para conocer de un juicio de amparo por haber desempeñado con anterioridad el cargo de secretario del juzgado cuyo titular es señalado como responsable.	199
Juicio de amparo. Es improcedente contra actos emitidos en otro juicio de garantías, aunque sea interpuesto por una persona que no es parte en este último.	306
Legitimación para promover el juicio de amparo. Carece de ella el ofendido o víctima del delito cuando se reclama la resolución que dirime el recurso de apelación interpuesto contra el auto de término constitucional en que se concede la libertad por falta de elementos para procesar, en tanto que no afecta el derecho a la reparación del daño.	77
Ley autoaplicativa.	186
Ley autoaplicativa. Quienes puedan impugnarla dentro del término de los 30 días siguientes al de su entrada en vigor.	186
Ley reclamada con motivo del primer acto de aplicación. Si éste no se acredita debe sobreseerse en el juicio de amparo.	317

Rubro	*Página*
Leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. Interpretación del artículo 73, fracción vi, de la Ley de Amparo.	327
Leyes heteroaplicativas tratándose de actos privativos de libertad personal. No puede considerarse consentida su aplicación aunque su inconstitucionalidad se impugne con motivo del dictado de la sentencia definitiva, y no con motivo de su aplicación en la orden de aprehensión o auto de término constitucional.	132
Leyes heteroaplicativas, amparo contra, por actos provenientes de un particular que actúa por mandato expreso de la ley.	328
Leyes heteroaplicativas, amparo contra. Procede con motivo de su primer acto de aplicación.	327
Leyes heteroaplicativas. Para que sea procedente su impugnación, el acto de aplicación de la ley debe afectar al gobernado en su interés jurídico.	326
Leyes, amparo contra la expedición, promulgación y publicación de las.	334
Leyes, amparo contra las. Término para presentar la demanda cuando los actos de aplicación atacan la libertad personal del quejoso.	186
Leyes, amparo contra. Cambio de situación jurídica.	183
Leyes, amparo contra. Cuando se reforma una ley declarada inconstitucional o se sustituye por una de contenido similar o igual, procede un nuevo juicio por tratarse de un acto legislativo distinto.	29
Leyes, amparo contra. Improcedencia.	384
Leyes, amparo contra. La falta de informe justificado no implica su inconstitucionalidad.	228
Leyes, amparo contra. Sobreseimiento en el juicio cuando la concesión del amparo en relación a los actos de aplicación ha quedado firme.	317
Leyes, amparo contra. Término para interponer la demanda. Comienza a correr a partir de la fecha en que el quejoso conoce, por cualquier medio, del primer acto de aplicación de la ley.	186
Leyes, consentimiento de las. No existe cuando dos ordenamientos legales contemplan situaciones jurídicas iguales, aun cuando se haya consentido la creada por el primero de aquéllos.	344

Rubro	*Página*
Leyes, revocación del acto de aplicación en amparo contra.	379
Leyes. El acto de aplicación que determina la procedencia del amparo debe causar perjuicio al quejoso.	325
Libertad bajo caución, sólo opera en favor de personas que se encuentren privadas de su libertad.	501
Libertad caucional en el incidente de suspensión. Queja sin materia contra la resolución que la niega.	502
Libertad caucional en el juicio de amparo indirecto, no procede otorgarla al Juez de Distrito, si fue negada por la autoridad responsable. (Legislación del Estado de Querétaro).	433
Libertad caucional, revocación de la (actos consumados irreparablemente).	336
Libertad caucional, revocación de. Acto consumado.	335
Libertad caucional.	504
Libertad caucional. Procedencia del juicio de amparo contra el auto que la niega, sin necesidad de agotar previamente recursos ordinarios.	353
Libertad personal, actos que afectan la. Competencia de los jueces de distrito en materia penal para conocer del amparo, independientemente de la naturaleza de las autoridades distintas de las judiciales que los emitan.	117
Libertad personal, defensa de la. Multa no imponible por amparo improcedente.	302
Libertad personal, suspensión de su restricción (libertad caucional).	432, 503
Libertad provisional bajo caución, para el otorgamiento de la. Cuando la concede un Juez de Distrito en el cuaderno de suspensión debe hacerlo preferentemente en términos de la fracción i del artículo 20 constitucional y no conforme a la ley local.	501
Libertad provisional bajo caución. Es un derecho sustantivo respecto del cual rige la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, consistente en la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo.	153
Libertad provisional bajo caución. Improcedencia de la suspensión cuando su negativa constituye el acto reclamado.	500
Libertad provisional bajo caución. Si el quejoso no la ha solicitado ante el juez natural. El Juez de Distrito tiene facultad para conceder la.	433

Rubro	*Página*
Libertad provisional, no procede concederla en el amparo si la negativa de la misma constituye el acto reclamado.	432
Libertad provisional. Beneficio posible sólo dentro del proceso.	335
Libertad provisional. Contra el auto que señala la forma y monto de la caución que debe otorgar el inculpado, procede el amparo indirecto.	150
Libertad provisional. El auto que fija el monto y forma de la garantía para disfrutarla constituye una excepción al principio de definitividad y procede el juicio de amparo.	354
Libertad provisional. Revocación de la. En los casos de grave incumplimiento o desacato a una orden del juez, no es indispensable oír previamente al procesado para decretar la revocación de la.	504
Licencias, negativas de.	430
Litispendencia en materia de amparo.	311
Litispendencia y cosa juzgada, improcedencias del juicio de amparo por. En su configuración no influyen las violaciones constitucionales alegadas en las dos demandas de garantías.	312
Litispendencia, interpretación de la fracción iii del artículo 73 de la Ley de Amparo.	311
Medida de apremio, cesación de efectos. Caso en que no se configura.	376
Medidas de apremio, suspensión tratándose de (arresto).	507
Medidas provisionales. Restitución de inmuebles en el procedimiento penal. Improcedencia del amparo en contra de las.	395
Menores de Dieciocho Años de Edad o Incapaces. Suplencia de la queja en amparo.	63
Menores de edad o incapaces. La suplencia de la queja deficiente procede en todo caso, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente.	63
Menores de edad o incapaces. Procede la suplencia de la queja, en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente.	63
Menores e incapaces, suplencia de la queja tratándose de. Sus alcances a toda clase de juicios de amparo y no solamente con respecto a derechos de familia.	58
Menores infractores del Distrito Federal, Consejo Tutelar para. Debe agotarse el recurso de inconformidad antes de recurrir al juicio de amparo contra la resolución definitiva dictada por una de las salas.	374

Rubro	*Página*
Menores infractores, Consejo Tutelar para, del Distrito Federal. Compete a un Juez de Distrito en materia penal conocer de sus actos cuando afecten la libertad personal del quejoso.	116
Migración, suspensión tratándose de aplicación de la ley de.	446
Migración. Improcedencia de la suspensión en caso de aplicación de las leyes de.	446
Migración. Suspensión improcedente.	446
Ministerio Público Federal, si en el juicio de garantías se omite correrle traslado con las copias de la demanda al, se impone la reposición del procedimiento para subsanar la omisión.	104
Ministerio Público Federal. Alcance de las atribuciones del, para interponer recurso de revisión.	104
Ministerio Público Federal. Como parte está legitimado para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos en los amparos en materia penal.	106
Ministerio Público Federal. Es parte en el juicio de amparo y puede interponer el recurso de revisión, pero sólo cuando la sentencia recurrida afecta sus atribuciones.	104
Ministerio Público Federal. Es parte en el juicio de garantías y puede interponer la revisión aun en amparo contra leyes, sólo cuando la materia de la ley impugnada afecte sus atribuciones.	104
Ministerio Público Federal. Es parte en el juicio de garantías y puede interponer la revisión en amparo penal, sólo cuando la materia del acto reclamado proviene de delitos del Fuero Federal, por afectar sus atribuciones.	104
Ministerio Público, legitimación procesal inexistente del agente del, para promover demanda de amparo, como parte en un proceso penal.	400
Ministerio Público, pedimento del. Debe examinarse preferentemente si plantea cuestiones de orden público.	105
Ministerio Público. Amparo improcedente contra las consignaciones que realice.	138
Ministerio Público. La resolución en la que declara encontrarse imposibilitado jurídicamente para conocer de los hechos denunciados en virtud de que operó la prescripción de la acción penal y, acordó no iniciar ni integrar la averiguación previa respectiva, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica.	140

Rubro	*Página*
Ministerio Público. Su pedimento no obliga al juzgador constitucional.	104
Multa Excesiva prevista por el Artículo 22 Constitucional. No es exclusivamente penal.	14
Multa excesiva y confiscación de bienes.	449
Multa excesiva, concepto de.	14
Multa excesiva.	14
Multa por no rendir informe justificado. Es improcedente respecto de la autoridad que lo emite y no se recibe en tiempo.	229
Multas fiscales y administrativas. No rigen para ellas las prerrogativas procesales que establece la Ley de Amparo en relación con los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.	164
Notificaciones al tercero perjudicado, cuando se desconoce su domicilio.	170
Obligación de las autoridades de expedir copias y documentos que soliciten las partes para el juicio de garantías. El quejoso debe solicitar al Juez de Distrito que requiera a las omisas para que cumplan con la.	236
Ofendido en materia penal. Es improcedente la suplencia de la queja a su favor con fundamento en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, cuando comparezca como quejoso en el juicio de garantías.	100
Ofendido en materia penal. No procede la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción ii, de la ley de amparo a favor de aquél cuando comparezca como quejoso en el juicio de garantías.	56
Ofendido en materia penal. No procede la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo a favor de aquél cuando comparezca como quejoso en el juicio de garantías.	56
Ofendido en material penal. No se actualiza en su favor la suplencia de la queja deficiente.	55
Ofendido. No es tercero perjudicado en el amparo penal contra el auto de formal prisión.	54
Orden de aprehensión contra persona de nombre similar al del quejoso. Para acreditar su interés jurídico en el amparo, debe demostrar que puede ejecutarse en su contra.	320

Rubro	*Página*
Orden de aprehensión librada por un juez del fuero común. Hipótesis en que en el juicio de garantías cesa sus efectos la.	82
Orden de aprehensión y auto de formal prisión. Efectos del amparo que se concede por falta o deficiencia de fundamentación y motivación de esas resoluciones.	270
Orden de aprehensión, el Juez de Distrito no debe imponerle al quejoso la obligación de acudir ante el juez responsable a que se le tome su declaración preparatoria, como requisito de efectividad para que surta sus efectos la suspensión provisional, en los casos de la hipótesis prevista en el párrafo cuarto del artículo 136 de la ley de amparo.	482
Orden de aprehensión, improcedencia del juicio contra la, que fue materia de otro amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado.	313
Orden de aprehensión, interés jurídico para promover la demanda de amparo.	322
Orden de aprehensión, suspensión improcedente contra la.	485
Orden de aprehensión.	114
Orden de aprehensión. Ante la imprecisa identificación del indiciado en la misma, y estando demostrado en autos la existencia de homología, a efecto de acreditar el quejoso su interés jurídico debe probar plenamente que es la persona en contra de quien se libro la orden de captura o que sin serlo con motivo de la misma se le pretende aprehender.	320
Orden de aprehensión. Deben precisarse las circunstancias agravantes o atenuantes del delito, de acuerdo con la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres.	376
Orden de aprehensión. El amparo en su contra es improcedente cuando se promueve después de que la formal prisión ya ha sido impugnada en otro juicio constitucional.	343
Orden de aprehensión. El amparo en su contra es improcedente cuando ya se dictó formal prisión y luego se reclama aquélla en forma aislada.	387
Orden de aprehensión. Es improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución jurisdiccional que niega el libramiento.	404

Rubro	*Página*
Orden de aprehensión. Falta de legitimación para promover el amparo de directivos sociales a nombre de socios.	324
Orden de Aprehensión. Interpretación de la fracción x del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente a partir del primero de febrero de 1994.	342
Orden de aprehensión. No cesan sus efectos cuando se dicta el auto de formal prisión (interrupción de la jurisprudencia 1113 de la primera sala y análisis de la fracción xvi del artículo 73 de la Ley de Amparo.	375
Orden de aprehensión. Tratándose del amparo concedido por falta de fundamentación y motivación. Principio de *non reformatio in peius* en el recurso de revisión.	367
Orden de comparecencia. Al afectar temporalmente la libertad personal del quejoso, procede la suspensión de su ejecución dentro del juicio de garantías, para los efectos establecidos en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la ley de amparo.	43
Orden de comparecencia. Debe estudiarse su constitucionalidad aun cuando el quejoso la designe erróneamente como orden de aprehensión.	42
Orden de detención. Causal de improcedencia en el amparo directo.	379
Orden de reaprehensión dictada contra el reo evadido. Afecta sus intereses jurídicos.	322
Orden de Reaprehensión. No debe sobreseerse en el juicio, por inexistencia del acto reclamado, cuando el quejoso al interponer su demanda de amparo la designe erróneamente como orden de aprehensión.	152
Orden Público e Interés Social para efectos de la Suspensión en el Amparo. Cuando es evidente y manifiesta su afectación, no se requiere prueba sobre su existencia o inexistencia.	456
Pena compurgada. Cesan los efectos del acto reclamado.	379
Pena inusitada. Su acepción constitucional.	10
Pena, conmutación de la. Debe entenderse consentida la sentencia si el quejoso se acoge a dicho beneficio.	349
Pena, conmutación de la. El hecho de acogerse a la misma implica consentimiento de la sentencia condenatoria.	347
Penas inusitadas y trascendentales, qué se entiende por.	10
Penas Trascendentales. Concepto de ellas.	12
Pericial. Término para ofrecerla en el juicio de amparo. Oportunidad.	248

Rubro	*Página*
Peritos designados por el juez o por las partes. Valoración de sus dictámenes.	248
Peritos, apreciación de sus dictámenes.	249
Peritos, naturaleza de los dictámenes de.	247
Persona de derecho público y persona de derecho privado. Cuando actúan como esta última, no procede la suspensión en contra de los actos.	425
Persona extraña a juicio. Carece de tal carácter quien compareció al procedimiento natural, por lo que debe sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114, fracción v, aplicada en sentido contrario, del propio ordenamiento, aun cuando haya sido promovido dentro del término establecido en el artículo 21 de la propia ley.	154
Petición. Derecho de. Su protección directa por la Constitución excluye la necesidad de agotar recurso ordinario alguno, antes de acudir al amparo.	368
Prescripción de la acción penal. Puede analizarse en amparo indirecto aun cuando la autoridad responsable no se haya pronunciado al respecto.	266
Prescripción, el juez de amparo debe analizarla cuando se reclama la orden de aprehensión. Por ser figura procesal de orden público, su estudio es preferente y oficioso.	266
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo improcedente en su contra.	303
Presunciones humanas, valor probatorio de las.	255
Presunciones legales, su estimación de oficio.	256
Principio de definitividad. Corresponde a los órganos jurisdiccionales y no a los particulares determinar si debe agotarse o no.	369
Prisión Vitalicia. Constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 constitucional.	12
Prisión vitalicia. No constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.	15
Procedencia del amparo contra la ejecución de una sentencia que concede la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación.	45, 309

Rubro	*Página*
Procedencia del amparo, por desistimiento del recurso de apelación aun cuando se haya acordado ante juez de primera instancia.	359
Procedimientos en Forma de Juicio Seguidos por Autoridades Distintas de Tribunales a que se refiere el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Su concepto comprende tanto aquéllos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular.	144
Protesta de decir verdad. Es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa en el escrito de demanda de amparo, que no puede ser sustituido por la expresión final "protesto lo necesario" y cuya omisión puede llevar al juzgador de amparo a tener por no interpuesta la demanda.	175
Prueba Pericial en el Juicio de Amparo. Procede la aplicación supletoria del código federal de procedimientos civiles para otorgar a la contraparte del oferente el derecho a adicionar el cuestionario que éste exhibió.	249
Prueba pericial, el Código Federal de Procedimientos Civiles no es supletorio de la Ley de Amparo.	247
Prueba pericial, testimonial y de inspección judicial en el amparo. Término entre la notificación de la demanda y la audiencia.	243
Prueba pericial. Casos en que no puede estimarse que el dictamen emitido por el perito del juzgado sea una opinión imparcial.	248
Prueba pericial. Ratificación en que no aparecen las firmas del juez y secretario. No invalida la prueba, sino motiva la reposición del procedimiento.	249
Prueba presuncional humana.	256
Prueba presuncional, integración de la.	256
Prueba Testimonial en el Juicio de Amparo. Es ilegal el apercibimiento hecho al oferente en el sentido de que de resultar falsos o incorrectos los domicilios señalados para citar a los testigos, aquélla se declarará desierta.	250
Prueba. Término supletorio para su desahogo. Improcedencia del amparo indirecto en su contra.	318
Pruebas documentales para el amparo. Obligación del Juez de Distrito de requerir a las autoridades que omiten expedir las.	237

Rubro	*Página*
Pruebas en el juicio de amparo indirecto y en el incidente de suspensión. Su ofrecimiento y desahogo.	259
Pruebas en la revisión contra un auto que desecha la demanda de amparo por extemporaneidad. Deben tomarse en cuenta, si con ellas se persigue demostrar la oportunidad de la presentación del libelo.	568
Pruebas en la revisión. Deben tomarse en consideración las supervenientes, si se relacionan con la improcedencia del juicio de garantías.	572
Pruebas en la revisión. Deben tomarse en cuenta las documentales aportadas para desvirtuar la omisión de rendir informe justificado que se imputa en la sentencia recurrida a la autoridad responsable recurrente.	581
Pruebas ofrecidas o anunciadas en el juicio de amparo indirecto. El auto de los Jueces de Distrito por el que ordenan su preparación y desahogo, excepcionalmente es impugnable a través del recurso de queja, siempre y cuando puedan causar un daño o perjuicio trascendente, grave y de imposible reparación en la sentencia definitiva, lo que en cada caso deberá determinar el Tribunal Colegiado competente.	592
Pruebas pericial y testimonial en el amparo. La falta de exhibición de las copias del cuestionario o interrogatorio no da lugar a su desechamiento, cuando exista tiempo para subsanar tal omisión sin que se afecte al principio de igualdad procesal de las partes.	246
Pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial en el amparo. Su ofrecimiento después del diferimiento de la audiencia.	244
Pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular en el juicio de amparo. Cuando su falta de idoneidad para el objeto que se propusieron resulte patente, el Juez de Distrito está facultado para desecharlas desde su anuncio y no reservarse hasta la celebración de la audiencia constitucional.	244
Pruebas y actuaciones procesales. El juzgador debe allegárselas cuando las estime necesarias para resolver el asunto.	258
Pruebas. Su desechamiento en un juicio de amparo, mediante auto dictado por un Juez de Distrito antes de la audiencia constitucional, es impugnable en queja y no en revisión.	562

Rubro	*Página*
Queja Contra el Auto que Admite una Demanda de Amparo. Queda sin materia si se dicta sentencia en el expediente principal.	596
Queja deficiente en el recurso de revisión. Imposibilidad para suplirla aun cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la constitucionalidad de la ley reclamada, si el recurrente es una autoridad responsable.	574
Queja improcedente cuando se reclama total inejecución o absoluta desobediencia del fallo constitucional, o cuando se alega repetición del acto combatido.	542
Queja improcedente. Aquella que se promueva contra el auto por el cual el Juez Federal requiera a la responsable para que expida al promoverte del amparo las copias certificadas que solicitó, apercibiéndola con multa si no lo hace.	589
Queja procedente. Fianza para la suspensión. Provisional.	593
Queja, es procedente el recurso de, contra los acuerdos de trámite dictados en el incidente de suspensión.	594
Queja, procede este recurso contra resoluciones que desechan parcialmente una demanda de garantías.	594
Queja, recurso de. Es procedente en contra de una resolución de incompetencia que omita proveer respecto de la suspensión de oficio.	594
Queja, suplencia de la, en materia penal. No puede abarcar la alteración del acto reclamado imputándoselo a una autoridad diversa a la señalada.	56
Queja. Es obligación del tribunal recabar de oficio las pruebas necesarias para la resolución de ese recurso.	595
Queja. Este recurso es improcedente contra la omisión de la autoridad responsable de cumplir con el trámite previsto en la ley de la materia, respecto de la demanda de amparo directo.	597
Reclamación. La expresión de agravios es necesaria para el examen del acuerdo impugnado.	598
Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, Director General de. No es autoridad ejecutora para los efectos del amparo directo.	405
Recurso de revisión. Los jueces penales están legitimados para interponerlo. Artículo 87 de la Ley de Amparo.	564

Rubro	*Página*
Recurso ordinario. Amparo improcedente contra el auto que lo admite.	394
Recurso ordinario. Debe agotarse, aun cuando el acto reclamado esté deficientemente fundado y motivado.	370
Recursos o medios de defensa ordinarios. Pueden establecerse en ordenamiento legal diverso del que sirve de fundamento a la emisión del acto reclamado (interpretación de los artículos 107, fracción iv, de la Constitución y 73, fracción xv, de la Ley de Amparo).	367
Recursos ordinarios en materia penal (sentencias de primera instancia).	31
Recursos ordinarios pendientes.	364
Recursos ordinarios que proceden en contra de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El tercero extraño al procedimiento del cual emana el acto reclamado, no está obligado a agotarlos previamente a la interposición del juicio de garantías.	366
Recursos ordinarios, caso en que el amparo que lo solicite, estando aquéllos en tramitación, es improcedente aunque no sean promovidos por los quejosos.	363
Recursos ordinarios, no existe obligación de agotarlos si el acto carece de fundamentación.	370
Recursos ordinarios.	363
Recursos ordinarios. Deben agotarse previamente a la interposición del amparo, cuando en la demanda de garantías se reclaman violaciones directas a la Constitución y cuestiones de legalidad.	368
Recursos ordinarios. Violaciones directas y violaciones indirectas de la Constitución.	372
Recursos que deben agotarse previamente al amparo en materia penal. Reparación del daño.	353
Recusación. La resolución que la declara improcedente constituye una violación procesal, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito, hasta que se resuelva en definitiva el juicio en donde se interpone la.	394
Reenvío. El contemplado en el artículo 194 del código de procedimientos penales para el estado de Tabasco, hace improcedente el juicio de amparo directo en contra de sentencias penales de segunda instancia que revocan las de primer grado.	49

Rubro	*Página*
Reglamentos heteroaplicativos, requisitos de procedencia en amparo contra los.	329
Reparación del daño. El ofendido o la víctima de algún delito están legitimados para promover el juicio de amparo en contra de las resoluciones jurisdiccionales que afecten ese derecho, únicamente por lo que a este aspecto se refiere y siempre que contra éstas no proceda medio ordinario alguno de defensa.	73
Repetición del acto reclamado, denuncia de.	401
Repetición del acto reclamado. No se incurre en él si se dicta una nueva orden de aprehensión, no obstante que se había concedido el amparo en contra de otra anterior, si ese amparo lo fue sólo en cuanto a la falta de motivación y fundamentación.	270
Representante común en el juicio de amparo. Su designación por los quejosos, surte efectos sin que se requiera previo acuerdo del Juez de Distrito.	167
Revisión Adhesiva. El plazo para promoverla debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto admisorio del recurso de revisión.	582
Revisión adhesiva. Su naturaleza jurídica.	567
Revisión del Ministerio Público Federal. Cuando está legitimado para interponerla como parte en el juicio de amparo.	103, 106
Revisión en amparo indirecto. Supuestos en los cuales el tribunal colegiado de circuito debe abordar el estudio de las cuestiones de legalidad, en términos de lo dispuesto, respectivamente, en el punto tercero, fracción I y punto primero de los acuerdos generales plenarios 6/1999 y 1/2000, publicados el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve y el veinticinco de enero de dos mil en el *Diario Oficial* de la Federación.	580
Revisión en amparo. La ampliación de los agravios vertidos es procedente siempre y cuando se realice dentro del plazo legal para la interposición del recurso.	570
Revisión en contra de las sentencias de amparo directo e indirecto. Los órganos judiciales y jurisdiccionales, inclusive los del orden penal, carecen de legitimación para interponerla.	92
Revisión en contra del acto que tiene por no presentada la demanda de amparo. Es materia de ella la legalidad del acuerdo que manda aclararla o completarla.	568

Rubro	*Página*
Revisión, recurso de. Debe interponerlo el directamente quejoso cuando se deseche su demanda de amparo y el juez de distrito no hace pronunciamiento sobre la designación del autorizado.	568
Revisión, recurso de. Legitimación de las autoridades para interponerlo.	169
Revisión, recurso de. Tratándose de reglamentos y otras disposiciones generales municipales reclamados por invadir la esfera de competencia de autoridades de la Federación o de los Estados, es competente para conocer del mismo un Tribunal Colegiado de Circuito y no la Suprema Corte de Justicia.	120
Revisión. El agente del Ministerio Público Federal está legitimado para interponerla, aunque la autoridad responsable no se inconforme con el fallo protector.	105
Revisión. Es procedente dicho recurso contra los acuerdos dictados en la audiencia incidental en la que se decide sobre la suspensión definitiva.	570
Revisión. Si el Juez de Distrito niega el amparo en contra de una ley, pero lo concede respecto del acto de aplicación, y en la revisión sólo se pide el sobreseimiento por este último, el competente es un Tribunal Colegiado de Circuito y no las salas de la Suprema Corte.	574
Revisión. Si se interpone ese recurso por persona que se ostente como apoderado diverso del que actuó en la primera instancia omitiendo acreditar su personalidad, el presidente del tribunal colegiado de circuito deberá prevenirla para que exhiba el documento justificativo correspondiente.	581
Revocación, amparo improcedente contra el auto admisorio de la.	393
Revocación, amparo improcedente contra el auto que la admite.	393
Robo. Artículo 371, párrafo tercero del Código Penal para el Distrito Federal. La no integración de alguno de sus elementos sólo origina la traslación de tipo al básico y no la atipicidad.	284
Salud, delitos contra la. Son constitucionales los artículos 193 y 195 del Código Penal Federal en cuanto el primero remite a la ley general de salud para determinar cuáles son los narcóticos y el segundo tipifica y sanciona como delito la posesión de los mismos con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas por el numeral 194 del propio código.	133

Rubro	*Página*
Secretario autorizado como juez para resolver en juicios de amparo. Puede válidamente pronunciar sentencias si presidió con ese carácter la audiencia constitucional y aún no concluye el periodo de la autorización.	262
Secretario de juzgado. Improcedencia del amparo cuando se le señala como fedatario.	397
Secretarios de Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios. No son autoridades para efectos del amparo.	395
Sentencia de primera instancia señalada como acto reclamado y como responsable el juez. Sobreseimiento.	380
Sentencia definitiva dictada en una ejecutoria de amparo. Los conceptos de violación planteados en el nuevo juicio promovido en su contra, relacionados con el exceso o defecto en la ejecución del fallo protector, son inoperantes, sin que ello implique el sobreseimiento de aquél.	271
Sentencia penal de segunda instancia. Improcedencia del juicio del amparo si sólo interpuso apelación el Ministerio Público y el Tribunal de Alzada confirmó el fallo.	344
Sentencia penal de segunda instancia. Improcedencia del juicio de amparo en contra de la, si sólo apeló el Ministerio Público, impugnando la pena y el Tribunal de Alzada confirmó el fallo.	348
Sentencia. El auto que la declara ejecutoriada es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, por tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio.	149
Sentenciado prófugo de la acción de la justicia. Sobreseimiento del amparo.	384
Sentencias de amparo, desobediencia a las.	553
Sentencias de amparo, relatividad de las.	27
Sentencias de amparo. Procedencia del juicio constitucional contra actos emitidos en parte para cumplimentarlas.	259
Sobreseimiento en amparo directo penal. Procede el, cuando la sentencia de primer grado no es apelada, y la emitida por el Tribunal de Alzada se dictó en ejercicio de la facultad que le otorgaran los artículos 338 y 339 del Código Procesal Penal del Estado de México.	403
Sobreseimiento en el amparo. Es improcedente decretarlo cuando no se requirió al quejoso subsanara en su demanda la falta de cita de los preceptos constitucionales violados, y se puedan inferir del estudio integral de aquélla.	388

Rubro	*Página*
Sobreseimiento en el amparo. No procede decretarlo antes de la audiencia constitucional.	298
Sobreseimiento en el juicio de amparo. Debe decretarse cuando el actor desista, existiendo, además, ratificación de la firma del escrito de desistimiento.	296
Sobreseimiento fuera de audiencia. Cuando deriva de una causal de improcedencia notoria e indudable del juicio de garantías, no causa agravio al quejoso ni lo priva de defensa.	299
Sobreseimiento incorrecto con apoyo en la fracción iv, del artículo 73, de la Ley de Amparo. Si se promueve un diverso juicio de garantías en contra del mismo acto que se reclama y es sobreseido, y posteriormente el mismo quejoso promueve nuevo juicio de garantías por el mismo acto reclamado, resulta contrario a derecho si decreta el.	315
Sobreseimiento por cambio de situación jurídica. Sus requisitos. Interpretación de la fracción x, del artículo 73, de la Ley de Amparo.	340
Sobreseimiento por fallecimiento del agraviado en materia penal.	297
Sobreseimiento. Debe decretarse en un juicio de amparo directo, si el fallo definitivo que se reclama, fue declarado ejecutoriado mediante un auto posterior consentido por el quejoso.	241
Sobreseimiento. Procede decretarlo cuando se declara extinguida la acción persecutoria que dio origen al auto de formal prisión reclamado en amparo.	376
Sobreseimiento. Procede decretarlo fuera de la audiencia constitucional, cuando se actualice una causal de improcedencia, manifiesta e indudable.	295
Sobreseimiento. Procede decretarlo fuera de la audiencia constitucional, cuando se actualice una causal de improcedencia, manifiesta e indudable.	295
Sobreseimiento. Procede el, si la ejecución de la sentencia reclamada se encuentra subjúdice en un diverso juicio de garantías.	311
Suplencia de la queja deficiente en la apelación en materia penal.	61

Rubro	*Página*
Suplencia de la queja deficiente en materia penal. Opera en el juicio de amparo promovido por el reo en contra de la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética).	65
Suplencia de la queja deficiente en materia penal. Opera en el juicio de amparo promovido por el reo en contra de la condena a la reparación del daño.	67
Suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la ley de amparo. Opera, aunque no se haya planteado en la demanda la inconstitucionalidad de la ley.	66
Suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción i, de la ley de amparo. Es aplicable en amparos directo e indirecto, en primera instancia o en revisión.	66
Suplencia de la queja deficiente, no implica el cambio de la vía intentada.	61
Suplencia de la queja deficiente. Consiste en examinar cuestiones no propuestas, independientemente de que resulten favorables a quien se suple.	64
Suplencia de la queja en el amparo penal.	61
Suplencia de la queja en materia penal, alcances de la, de acuerdo con las últimas reformas a la Ley de Amparo publicadas en el *Diario Oficial* de la Federación de 20 de mayo de 1986, que entraron en vigor 15 días después.	60
Suplencia de la queja y suplencia ante el error en juicios de amparo. Diferencias.	264
Suplencia de la queja, ausencia de conceptos de violación.	59
Suplencia de la queja, procede ejercerla aun cuando sólo hubiera interpuesto el recurso de revisión la autoridad responsable.	60
Suspensión a prueba del procedimiento. Implica consentimiento del auto de formal prisión. El acogerse al beneficio de. (Legislación del Estado de Coahuila).	346
Suspensión contra las órdenes de secuestro, confiscación o decomiso de mercancía de procedencia extrajera, no es necesario otorgar garantía para que surta efectos.	525
Suspensión contra una ley.	463
Suspensión de oficio.	448
Suspensión de oficio. Procede decretarla de plano contra la expulsión de extranjeros ordenada por una autoridad administrativa con fundamento en la ley general de población.	7

Rubro	*Página*
Suspensión de plano del acto reclamado. Procedencia del recurso de revisión contra el auto que la niega o concede.	577
Suspensión definitiva decretada por el Tribunal Colegiado. Sus efectos deben retrotraerse aun cuando el *a quo* haya ordenado dejar sin efectos la decretada en primer instancia.	461
Suspensión definitiva, contra la resolución de la denuncia de violación a la, procede el recurso de queja.	532
Suspensión definitiva, técnica que debe seguirse en el estudio de la.	484
Suspensión Definitiva. Al resolver sobre ella, el juzgador de amparo debe exponer, en su caso, los motivos por los que considere se ocasiona o no perjuicio al interés social y si se contravienen o no disposiciones de orden público.	488
Suspensión definitiva. Las medidas de aseguramiento previstas en el párrafo cuarto del artículo 136 de la Ley de Amparo, pueden incrementarse al otorgarse aquélla, si el quejoso incumple con alguna de las decretadas en la provisional, como la de presentarse ante el juez natural a rendir declaración preparatoria.	496
Suspensión definitiva. Su otorgamiento, tratándose de actos restrictivos de la libertad personal, no depende del incumplimiento de las medidas de aseguramiento decretadas por el Juez de Distrito en la provisional.	496
Suspensión definitiva. Su otorgamiento, tratándose de actos restrictivos de la libertad personal, no depende del incumplimiento de las medidas de aseguramiento decretadas por el Juez de Distrito en la provisional.	470
Suspensión del acto reclamado improcedente.	463
Suspensión del acto reclamado, concepto de orden público para los efectos de la.	453
Suspensión del amparo. Es improcedente contra actos de particulares.	485
Suspensión en Amparo Indirecto. Es procedente el recurso de queja y no el de revisión en contra de la resolución que declara sin materia el incidente relativo.	464
Suspensión improcedencia contra la admisión de recursos ordinarios.	464
Suspensión improcedente contra sentencias ejecutorias.	464

Rubro	*Página*
Suspensión pedida por extraños a un procedimiento.	464
Suspensión por causa superveniente se funda en hechos posteriores a la resolución.	467
Suspensión por causa superveniente. Incidente previo.	467
Suspensión por hecho superveniente. La revocación o modificación establecida en el artículo 140 de la Ley de Amparo procede tanto en la provisional como en la definitiva.	466
Suspensión provisional improcedente, contra la ejecución de la suspensión temporal del cargo de juez.	454
Suspensión provisional violación a la. Debe quedar probado el momento en que comenzó a violarse.	449
Suspensión provisional, acuerdo que resuelve acerca de la. Es distinto del auto que niega la libertad bajo caución.	503
Suspensión provisional, cuando se reclaman órdenes de detención giradas por autoridades administrativas y el quejoso aún no ha sido privado de su libertad, el juzgador de amparo debe exigir garantía para que surta efectos aquélla.	493
Suspensión provisional, denuncia de incumplimiento a la. Su tramitación no impide que se resuelva sobre la suspensión definitiva.	548
Suspensión provisional, violación a la, presupuestos que deben reunirse.	553
Suspensión Provisional. Debe notificarse personalmente al tercero perjudicado el proveído que la concede.	474
Suspensión provisional. La omisión de fundar y motivar el auto en que se resuelve, debe repararse por el Tribunal Colegiado de Circuito que está facultado para ello, al resolver el recurso de queja.	473
Suspensión provisional. Medidas de aseguramiento que puede imponer el juez de amparo tratándose de actos restrictivos de la libertad personal.	472
Suspensión provisional. No cabe contra ella el recurso de revisión.	483
Suspensión provisional. Surte sus efectos desde luego, sin que para ello se requiera de la exhibición de la garantía respectiva.	471
Suspensión provisional. Violación de la, cuando se niega la definitiva.	550
Suspensión, acto reclamado y ejecución caen en la.	464

Rubro	*Página*
Suspensión, auto de, debe determinar el acto.	463
Suspensión, auto de. Ejecución.	463
Suspensión, efectos de la.	463
Suspensión, efectos. Orden de aprehensión, si está arraigado el quejoso.	497
Suspensión, falta de motivación de la fianza en la.	463
Suspensión, incidente de, ante Juez de Distrito.	494
Suspensión, materia de la. Difiere de la del juicio.	494
Suspensión, procedencia de la, contra las consecuencias de actos declarativos.	435
Suspensión, procedencia de la. Actos privativos de libertad.	526
Suspensión, pruebas en el incidente de.	458
Suspensión, recurso contra la.	463
Suspensión. Actos prohibitivos.	428
Suspensión. Actos que no se pretenden ejecutar.	430
Suspensión. Actos restrictivos de la libertad dentro del procedimiento judicial. Medidas de aseguramiento.	481
Suspensión. Alcance.	464
Suspensión. Caso en que procede contra efectos de los actos consumados.	426
Suspensión. En los casos de aseguramiento de bienes inmuebles en materia penal procede concederla siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público, conforme al artículo 124, fracción ii, de la Ley de Amparo y alguna otra ley.	455
Suspensión. Es improcedente cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que recae a la excepción de incompetencia, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, sin que sea factible aplicar otro ordenamiento legal.	456
Suspensión. Inversión extranjera. Actos de particulares.	425
Suspensión. La denuncia relativa a su violación debe tramitarse en vía incidental, conforme a lo previsto en los artículos 358 y 360 del código federal de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.	534
Suspensión. Los actos ejecutados con violación de la suspensión provisional. No pueden tenerse por consumados, ni tomarse en cuenta los hechos que hagan constar, para negar la suspensión.	550

Rubro	*Página*
Suspensión. Monto de la garantía respecto a las órdenes de aprehensión.	481
Suspensión. Para resolver sobre ella es factible, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado.	476
Tercero perjudicado en el amparo penal. El ofendido por el delito no tiene ese carácter en el amparo promovido por el presunto responsable contra el auto de formal prisión.	100
Tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado en un juicio de amparo indirecto. Puede interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que el juez de distrito declara ejecutoriada y que afecta claramente sus derechos, dentro del plazo legal contado a partir de que tiene conocimiento de la sentencia.	102
Tercero perjudicado. Cuando el quejoso señala de manera incorrecta el domicilio de aquél, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento establecido en el artículo 30, fracción ii, de la ley de la materia y no sobreseer en el juicio.	388
Tercero perjudicado. Existencia del, tratándose de la reparación del daño o la exigencia de responsabilidad civil en la comisión de un delito.	98
Terceros extraños, caso en que carecen de legitimación activa para promover un juicio de amparo directo o indirecto.	391
Testimonial en el juicio de amparo. Es requisito de forma que al ofrecerse, se proporcione el nombre de los testigos.	242
Tribunales unitarios de circuito. Su competencia para conocer del juicio de amparo indirecto no se limita a la materia penal.	125
Tribunales unitarios de circuito. Su competencia para conocer del juicio de amparo indirecto no se limita a la materia penal.	125
Violación a la suspensión provisional. Necesidad de resolver sobre la, aun cuando se hubiere resuelto sobre la suspensión definitiva y el fondo del juicio de amparo.	550
Violación directa a la Constitución. No hay obligación de agotar recurso o medio defensivo legal. Cuando se reclama.	369
Violaciones procesales. El juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman antes de que se dicte la sentencia definitiva, y no se afectan derechos sustantivos.	390

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN A LA SEXTA EDICIÓN IX
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN XI
INTRODUCCIÓN XV

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL JUICIO DE AMPARO

1. Concepto de juicio de amparo en materia penal. 1
2. Principios fundamentales del juicio de amparo en materia penal. 3
2.1. Principio de instancia de parte agraviada. 4
2.2. Principio de agravio personal y directo. 18
2.3. Principio de relatividad de las sentencias de amparo. . . . 22
2.4. Principio de definitividad. 30
2.5. Excepciones al principio de definitividad en materia penal 31
2.6. Principio de estricto derecho. 51
2.7. Principio de suplencia de la queja deficiente. 52
3. Las Partes en el juicio de amparo. 68
3.1. El agraviado. 69
3.2. La autoridad responsable. 81
3.3. Tercero perjudicado. 97
3.4. El Ministerio Público de la Federación. 102
3.4.1. Intervención del Ministerio Público como parte en el proceso penal en el juicio de amparo. 107
4. Competencia en el amparo penal indirecto. 107
Jurisdicción concurrente y auxiliar 108
4.1. Competencia por territorio, materia, grado y turno 111
4.1.1. Por territorio. 111
4.1.2. Por materia. 115
4.1.3. También se da la competencia por turno. 119
4.1.4. La competencia por grado. 120
4.2. Competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito. . . . 124

5. Principios que rigen en el juicio de amparo, relativos a la competencia 126

Capítulo II

PROCEDENCIA, TRÁMITE Y SENTENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL

1. Actos contra los que procede el amparo indirecto 131
2. Actos de naturaleza penal. 160
3. Trámite del amparo penal indirecto. 162
3.1. Demanda. 162
3.1.1. Contenido de la demanda. 165
3.1.1.1. El quejoso, el que promueve en su nombre y el autorizado para oír notificaciones 166
3.1.1.2. Nombre y domicilio del tercero perjudicado. 169
3.1.1.3. Designación y emplazamiento de la autoridad responsable. 171
3.1.2. Términos para interponer la demanda. 180
3.1.2.1. Excepción a la regla de los plazos procesales en el amparo. 192
3.1.3. Presentación de la demanda. 194
3.1.4. Análisis de la demanda. 194
3.1.5. Ampliación de la demanda 214
4. Informe justificado. 218
5. Audiencia constitucional 230
5.1. De las pruebas. (Periodo probatorio). 234
5.1.1. La documental. 234
5.1.2. La testimonial y la pericial. 241
5.1.3. La inspección ocular. 252
5.1.4. La presuncional. 254
5.1.5. Carga de la prueba. 257
5.2. Alegatos 260
6. Sentencia 263
6.1. Análisis de forma y fondo. 264
6.2. Fundamentación y motivación 269
6.3. Análisis del cuerpo del delito y probable responsabilidad 271
6.4. Problemática de las agravantes y calificativas en la orden de aprehensión y auto de término constitucional 272
6.5. Aclaración de sentencia. 284
6.6. Sentencia ejecutoriada. 285

CAPÍTULO III

SOBRESEIMIENTO E IMPROCEDENCIA

1. Sobreseimiento 291
2. Improcedencia (artículo 73 de la Ley de Amparo.) 302
2.1. Fracción I. 302
2.2. Fracción II. 305
2.3. Fracción III. 310
2.4. Fracción IV. 313
2.5. Fracción V. 316
2.6. Fracción VI. 325
2.7. Fracción VII. 329
2.8. Fracción VIII. 332
2.9. Fracción IX. 333
2.10. Fracción X. 336
2.11. Fracción XI. 342
2.12. Fracción XII. 350
2.13. Fracción XIII. 353
2.14. Fracción XIV. 355
2.15. Fracción XV 364
2.16. Fracción XVI. 374
2.17. Fracción XVII. 382
2.18. Fracción XVIII. 384

CAPÍTULO IV

LA SUSPENSIÓN (HISTORIA Y NATURALEZA DE LOS ACTOS)

1. Aspecto histórico 407
2. Concepto de suspensión 417
3. La naturaleza del acto reclamado en materia penal 420
3.1. Actos de particulares. 424
3.2. Actos pasados o consumados 426
3.3. Actos presentes 427
3.4. Actos futuros inminentes y futuros probables 427
3.5. Actos instantáneos, permanentes y de tracto sucesivo . . . 428
3.6. Actos reparables e irreparables 429
3.7. Actos positivos, negativos y negativos con efectos positivos 429

3.8. Actos prohibitivos. 434
3.9. Actos declarativos 435
3.10. Actos legislativos 436
3.11. Actos privativos de libertad personal 438
3.12. Actos no privativos de libertad personal 440

Capítulo V

PROCEDENCIA, TRÁMITE Y EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN MATERIAL PENAL

1. La suspensión conforme a la Ley de Amparo. 443
2. La suspensión de oficio. 444
3. La suspensión a petición de parte. 449
3.1. Trámite y requisitos. 450
3.2. Efectos de la suspensión 459
3.3. Suspensión por hecho superveniente 465
4. Suspensión provisional. 467
5. La suspensión definitiva. 483
6. La suspensión del acto reclamado privativo de libertad. 489
7. Suspensión de la privación de la libertad fuera del procedimiento judicial 492
8. La suspensión tratándose de privación de la libertad dentro de un procedimiento judicial (acto futuro). 495
8.1. Auto de radicación normal (principal). 512
8.2. Suspensión provisional de la orden de detención de autoridades administrativas (acuerdo, incidente). 513
8.3. Incomunicación. Suspensión de plano cuando se reclama además la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial (expediente principal auxiliar). 513
8.4. Acuerdo de suspensión provisional en el incidente de suspensión, cuando además de la incomunicación se reclama la privación de la libertad no judicial. 514
8.5. Auto de radicación. Orden de detención consumada por parte de autoridades no judiciales, sin que se reclamen los otros actos del artículo 17 de la Ley Amparo (expediente principal) 516
8.6. Suspensión provisional de orden de aprehensión de juez no consumada (incidente). 517
9. Consideraciones personales, en torno a la suspensión en materia penal 520

CAPÍTULO VI

DESACATO A LA SUSPENSIÓN

1. Incidente de incumplimiento a las resoluciones suspensionales en materia penal 531
2. Desacato a la suspensión (provisional, definitiva o de oficio), en materia penal 526
3. Desacato a la suspensión definitiva. 540
4. Trámite del incidente de incumplimiento a las resoluciones suspensionales en materia penal. 542

CAPÍTULO VII

RECURSOS

1. Revisión 555
2. Trámite 559
3. Legitimación para interponer la revisión principal y la adhesiva 565
4. Reglas relativas a la revisión adhesiva 565
5. Reglas para el estudio de los agravios en el recurso de revisión (artículo 91) 566
6. Queja 583
7. Reclamación 598

BIBLIOGRAFÍA. 599
Poligrafía 600
Legislación 600
Jurisprudencia 600

ÍNDICE TEMÁTICO 601

ÍNDICE DE TESIS 605